ENRIQUE
PALAZUELOS

CUANDO EL FUTURO PARECÍA MEJOR

Auge, hitos y ocaso de los partidos obreros en Europa



ENRIQUE PALAZUELOS

CUANDO EL FUTURO PARECÍA MEJOR

Auge, hitos y ocaso de los partidos obreros en Europa



Akal / Anverso

Enrique Palazuelos

Cuando el futuro parecía mejor

Auge, hitos y ocaso de los partidos obreros en Europa


akal
ARGENTINA
ESPAÑA
MÉXICO

Diseño de portada

RAG

Motivo de cubierta

Piquete de mineros y policía, frente a frente. Mina de carbón de Bilston Glen (Escocia), julio de 1984 (fotografía de John Sturrock).

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4628-8

Lo peor es creer

que se tiene razón por haberla tenido

o esperar que la historia devane los relojes

y nos devuelva intactos

al tiempo en que quisiéramos que todo comenzase.

[…]

Lo peor es no ver que la nostalgia

es señal de engaño o que este otoño

la misma sangre que tuvimos canta

más cierta en otros labios.

José Angel Valente, «Melancolía del destierro».

Introducción

Echando la vista atrás, cuando se compara la situación actual de los trabajadores europeos con la que tenían hace siglo y medio no cabe resquicio para la duda acerca de la abismal diferencia que existe en sus condiciones de trabajo y de vida. Sin embargo, en aquel entonces el horizonte de la emancipación de los trabajadores, libres de explotación económica y de opresión social, parecía estar más próximo que el futuro borroso que se aprecia desde la situación actual. Ese contraste es uno de los puntos de partida de este libro, destacado en el título: Cuando el futuro parecía mejor. El otro punto de partida surge al constatar la lamentable posición política en que, desde hace décadas, se encuentran los partidos socialistas y comunistas que habían desempeñado un papel fundamental en la conquista de los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores. Partidos socialistas que fueron tan poderosos como los de Alemania, Gran Bretaña, Austria, Suecia y otros, igual que los partidos comunistas de Francia e Italia, vagan tristemente por la escena política sin un gramo de capacidad transformadora.

Esa constatación se sitúa en las antípodas de las viejas esperanzas de unos (subalternos) y los temores de otros (dominantes). Podría ser que aquella expectativa de emancipación social fuera una aspiración ideal carente de fundamento en la realidad histórica. Podría ser que las intensas modificaciones promovidas por el desarrollo capitalista, tanto económicas y sociales como políticas y culturales, hayan contribuido a desvanecer aquellas esperanzas a la vez que hacían factible las mejoras alcanzadas. Podría ser, por tanto, que esas modificaciones y esas mejoras hubieran sellado aquel horizonte optimista de un proyecto colectivo de emancipación. Las cábalas en torno a esas cuestiones están en el origen de este trabajo, cuyos protagonistas son las organizaciones políticas obreras creadas en los países europeos con el afán de desarrollar el movimiento hacia esa sociedad emancipada.

Con formatos diversos según los países, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se fueron creando sindicatos y partidos políticos que defendían a los trabajadores del dominio de los empresarios y de las elites políticas que ostentaban el poder. De un lado, esas organizaciones obreras se proponían distintos logros de carácter laboral, social y democrático, que atendiesen a los

apremios reivindicativos (demandas compensadoras) de los trabajadores contra los bajos ingresos, la indigencia social y los flagrantes abusos políticos. De otro lado, se proponían alcanzar objetivos de largo alcance (demandas emancipadoras) que eliminaran las raíces que originaban la explotación económica, la opresión social y el despotismo político, enarbolando soluciones calificadas con el rótulo de socialistas o comunistas para erradicar la dominación clasista que caracterizaba a las sociedades capitalistas.

En este sentido, las organizaciones obreras recogían los anhelos de justicia e igualdad que latían en las sociedades europeas en torno a tres ideas centrales: transformar el capitalismo, convertir los bienes económicos en propiedad colectiva y colocar el poder político en manos de los trabajadores. Defendidas con formulaciones diferentes, esas tres ideas fueron proclamadas por los partidos socialistas que nacieron entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, así como por los partidos comunistas que se crearon décadas después. Cuestión bien distinta es en qué medida esas ideas guiaron la actividad práctica de esos partidos. En todo caso, se trata de ideas que no han tenido materialización y que carecen de vigencia en los partidos que actualmente mantienen influencia social. ¿Qué ha ocurrido por el camino a lo largo de más de un siglo? ¿Qué trayectoria explica el rumbo que han seguido los partidos obreros?

Una mirada panorámica al proceso histórico que han recorrido estos partidos contribuye a afinar las preguntas oportunas cuyas respuestas pueden arrojar luz sobre lo sucedido. La flecha del tiempo parece mostrar que el proceso seguido se corresponde con las fases propias de cualquier ciclo vital. La gestación fue fruto del emparejamiento entre el desarrollo del capitalismo industrial y el rechazo social que provocaban sus peores efectos. El nacimiento se produjo cuando pequeños grupos de obreros e intelectuales formaron partidos socialistas con la pretensión de convertir ese rechazo en un movimiento masivo que combinara los logros compensatorios con la búsqueda de soluciones emancipadoras. La niñez llegó con el aumento del número de militantes y la incipiente influencia de los partidos en las movilizaciones de los obreros fabriles y otros asalariados. El paso a la juventud tuvo lugar cuando los partidos incrementaron su influencia social y dispusieron de fuerza política para conseguir reformas sociales y derechos democráticos. El acceso a la madurez comenzó en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando las estructuras políticas vigentes quedaron desarboladas y surgieron grandes movimientos de protesta contra las penurias sociales y el autoritarismo de las clases dominantes. Los partidos socialistas

cobraron entonces mayor fuerza política y electoral.

La conexión entre el transcurso de la madurez y los albores del declive cabe localizarla en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando los partidos socialistas y comunistas protagonizaron o participaron, según los casos, en la consecución de importantes reformas sociales y mayores espacios democráticos. Pero fue también cuando se desprendieron definitivamente de las viejas aspiraciones a transformar el sistema capitalista, sin reemplazarlas por otras que apuntaran hacia un horizonte alternativo de sociedad. Perdieron las señas que, de forma más o menos retórica, habían mantenido su identidad como organizaciones portadoras de cambios profundos y se quedaron sin coordenadas de referencia, centrando toda su actividad en la más mundana pretensión de gestionar el funcionamiento del capitalismo y lograr mejoras compensatorias para los trabajadores. Cuando la gestión capitalista y la implementación de esas mejoras entraron en contradicción, los partidos socialistas optaron por lo primero. Comenzó así la decadencia de la mayoría de los partidos obreros, adentrándose en una fase de inanidad política que se sumó a la indigencia estratégica que venían arrastrando. Se asistió entonces al letal emparejamiento entre la renuncia a cualquier horizonte alternativo y las crecientes restricciones para satisfacer las demandas compensatorias de los trabajadores, en un contexto internacional y nacional definido por las nuevas características que adoptaba el desarrollo capitalista desde las décadas finales del siglo XX.

En esa panorámica general dos fenómenos pueden arrojar mayor claridad acerca del contraste entre proyecto y realidad en la trayectoria de los partidos obreros. El primero se refiere a la situación abierta a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando se creó un clímax que bien podría representar Jano, la deidad romana con dos caras. De una parte, la conjunción de los movimientos sociales y la fuerza política de los partidos socialistas conquistó reformas significativas. De otra parte, la creación de partidos comunistas hizo que se acentuaran las disputas cainitas y se asentara una dinámica fratricida en el movimiento obrero. Varios acontecimientos precipitaron aquel clímax, en particular las posiciones nacionalistas a las que se vieron arrastrados los partidos socialistas y la negativa de ciertos núcleos de militantes a secundar la participación de sus países en la guerra. Fue también en esos años cuando la revolución bolchevique en Rusia alumbró una experiencia que encerraba una nueva contradicción: un partido obrero, entre los varios existentes, llevó a cabo una revolución política en nombre de los trabajadores en un país sin apenas desarrollo capitalista y bajo

circunstancias históricas excepcionales. Sin embargo, las condiciones materiales existentes hacían inviable que se pudiera desarrollar cualquiera de las premisas emancipadoras, y el régimen político bolchevique desembocó en una dictadura que, años después, alumbró un tipo de sociedad radicalmente contraria a los ideales de la emancipación social.

El segundo fenómeno se produjo en el tránsito de la madurez hacia el declive. Siguiendo con las analogías mitológicas, cabría asemejarlo con la representación del vuelo de Ícaro para escapar del laberinto de Creta. Su padre, Dédalo, le aconsejó que volara sin acercarse al sol, pues, de hacerlo así, la cera de las alas podría derretirse y entonces caería al abismo. Ocurrió durante la «Edad de Oro» del capitalismo, cuando los países europeos desarrollados registraron un fuerte y prolongado crecimiento económico y los trabajadores lograron las máximas cotas históricas de democracia política y de reformas sociales. Los partidos socialistas lideraron o participaron en los gobiernos que impulsaron las leyes e instituciones que garantizaban esas conquistas, mientras que varios partidos comunistas lideraron las movilizaciones sociales que aportaron la fuerza política con la que negociar la ampliación de los derechos y el bienestar social. En esa realidad histórica, tan distinta a la que existía al comenzar el siglo XX, los partidos socialistas mutaron, dejando de lado los objetivos fundacionales (el proyecto) y la estrategia propuesta para su consecución (el discurso), sin sustituirlos por otros acordes con aquella realidad presente. Guiados por un afán reformista y asentados en los círculos de poder político, como Ícaro, se acercaron demasiado al sol, sus capacidades se derritieron y se precipitaron hacia la decadencia.

Así, escuetamente planteado, el ciclo vital recorrido por los partidos obreros proporciona una cadena de preguntas con cinco eslabones principales. Primero, cuáles eran las características de los partidos que fueron adquiriendo fuerza política y electoral, superando la debilidad y la marginación iniciales. Segundo, qué elementos intervinieron en la ruptura entre socialistas y comunistas, y qué importancia tuvieron las disputas fratricidas a raíz de esa ruptura. Tercero, cuál fue la relación entre los hitos democráticos y sociales de la Edad de Oro y el declive de las organizaciones obreras. Cuarto, qué influencia ejercieron las dos guerras mundiales en la actuación de los partidos obreros. Quinto, qué factores pueden explicar el paulatino vacío estratégico y la inanidad política de los partidos socialistas y comunistas europeos.

Esas preguntas compusieron el boceto con el que arrancó la elaboración de este libro, buscando cómo aportar argumentos que contribuyeran a explicar el ciclo vital descrito. La metodología del trabajo se ha fundamentado en una premisa de partida y tres criterios principales. La premisa ha sido considerar que los partidos obreros fueron organizaciones creadas para impulsar la defensa de los intereses de los trabajadores tanto en el corto como en el largo plazo. Los tres criterios que han guiado el análisis surgen al considerar que para llevar a cabo ese cometido los partidos tenían, en primera lugar, que dotarse de un conjunto de requisitos para ejercer su labor; en segundo lugar, llevar a cabo unas funciones; y, por último, tener en cuenta los condicionamientos del contexto de cada periodo.

Los requisitos planteados eran cuatro piezas articuladas. Primera, disponer de un proyecto de soluciones que sustanciasen los objetivos de transformación de la sociedad capitalista para construir una sociedad socialista. Segunda, dotarse de un discurso estratégico que trazase el vínculo que unía las demandas del presente con las transformaciones del futuro. Tercera, desplegar la acción política encaminada al desarrollo de un movimiento de trabajadores que pudiese secundar ese discurso hacia el objetivo perseguido. Cuarto, generar una vida orgánica en el interior de los partidos que favoreciese el diseño del proyecto, la formulación del discurso y la implementación de la acción política.

Las funciones concernían a cuatro aspectos en los que se concretaba el modo de llevar a cabo la acción política. Primero, impulsar la movilización y la organización de los trabajadores. Segundo, acrecentar la fuerza política de un movimiento que pudiese consolidar las demandas logradas y alentar la necesidad de alcanzar reformas más profundas. Tercero, ejercer la representación de esa fuerza política en aquellas instituciones del Estado en las que se tomaban las decisiones. Cuarto, establecer alianzas con los representantes de otros grupos sociales que mantuvieran fricciones con los poderes dominantes.

Los condicionamientos de los sucesivos contextos en los que iban operando los partidos estaban formados por dos tipos de factores. El primero lo integraban los factores que determinaban las características de la estructura social, haciendo que los colectivos de trabajadores tuvieran mayor o menor homogeneidad; lo cual favorecía u obstaculizaba la posibilidad de articular movimientos cooperativos e identificar soluciones comunes para sus problemas. En ese sentido, el principal factor condicionante se derivaba de los efectos que el desarrollo capitalista ocasionaba en el número y el grado de concentración de los obreros, la extensión de otras modalidades de asalariados y la desaparición de

trabajos que correspondían a formas económicas precapitalistas. A la vez, otros factores de índole institucional y/o cultural también podían influir en la conformación de la estructura social, en la medida en que afectaran a la pervivencia y diversidad de grupos sociales con diferentes grados de heterogeneidad.

El segundo conjunto de factores lo componían los mecanismos inhibitorios que se oponían a la acción colectiva de los trabajadores por intereses comunes, reflejando la capacidad de dominio ejercida por los grupos que ostentaban el poder, es decir, los grandes propietarios capitalistas, las elites políticas y las jerarquías religiosas. El control ejercido desde las empresas, los órganos estatales, el sistema educativo, los medios de comunicación, las iglesias y otros resortes ponía en manos de esos grupos la posibilidad de combinar, según los casos, la aplicación de medidas represivas con el fomento de ideas y comportamientos sociales que favorecían el dominio imperante. Sus efectos se expresaban a través de las muestras de temor, reverencia al orden y a la autoridad, actitudes individualistas, disputas internas y otros elementos psicosociales tendentes a generar subalternidad, es decir, sumisión aceptada, que desactivaba los comportamientos colectivos de los trabajadores, dificultando la acción política de los partidos obreros.

Por consiguiente, el resultado de la actividad desplegada por los partidos obreros ha dependido tanto de los aciertos y errores propios como de los condicionantes derivados de la estructura social y los mecanismos inhibitorios. La hipótesis de partida suponía que, indagando en ambas direcciones, se podrían encontrar buenas explicaciones a por qué el resultado último de la trayectoria de los partidos obreros presenta un balance dual. El pulso compensatorio registra logros democráticos, sociales y laborales que un siglo atrás se hubieran considerado imposibles, mientras que el pulso emancipador se ha saldado con una rotunda derrota.

De ese modo, tomando prestadas varias tesis propuestas por distintos autores y agregando conjeturas de cosecha propia, el análisis del libro pretende formular un panel de posibles causas que explicarían lo sucedido a lo largo del ciclo vital descrito. Tres grupos de causas serían endógenas, pues la responsabilidad recaería en los partidos obreros, mientras que otros tres grupos serían exógenas y habrían condicionado su actividad.

1. Proyecto y discurso. Si se pretende saber por qué no se ha llegado a la meta deseada, la emancipación social, resulta imprescindible interrogarse por la naturaleza misma del proyecto y el discurso; o mejor en plural, proyectos y discursos planteados toda vez que entre los partidos pioneros cabía distinguir, al menos, dos formulaciones. La «metáfora comunista» propuesta por Marx y Engels pasó a ser el fundamento del proyecto socialista y el discurso revolucionario que enarbolaron los partidos de Alemania, Francia, Italia, España y otros, después asumidos por los partidos comunistas. Todos ellos crédulos en que la historia de la sociedad humana caminaba hacia la emancipación y, por tanto, actuaban con la ventaja de alinearse en el lado del progreso histórico para construir una sociedad sin clases, liberada de cualquier signo de dominación e injusticia. Otra versión más terrenal del proyecto socialista fue defendida por partidos como el británico y los escandinavos, cuyo ideario estaba desprovisto de ropaje filosófico y la emancipación formaba parte de un trayecto en el que los trabajadores irían disponiendo de cotas crecientes de control colectivo sobre las condiciones que determinaban la igualdad social, la seguridad económica y la democracia en los centros de trabajo, por decirlo al modo en que se expresaba el líder británico Ramsay MacDonald.

Ambas propuestas compartían la necesidad de llevar a cabo la transformación del sistema capitalista y coincidían en que para ello era necesario disponer del poder político, socializar los principales bienes económicos y modificar las bases que sustentaban la economía y la organización social. Las principales discrepancias residían en el carácter y la secuencia del discurso estratégico con el que pensaban hacer realidad esos propósitos. La propuesta marxista implicaba la necesidad de una revolución política como premisa para llevar a cabo la colectivización de la propiedad y demás medidas que permitirían construir el socialismo. La propuesta de los británicos, suecos y otros no contemplaba una ruptura revolucionaria, de modo que el acceso al poder estatal y la socialización podrían ir lográndose de manera gradual hasta alcanzar un punto crítico de reformas a partir del cual quedarían transformadas las bases del capitalismo y se podría construir una sociedad que se correspondiera con los principios socialistas.

2. Desarrollo de las funciones políticas. Las cuatro funciones mencionadas constituían el fundamento de la acción política de los partidos obreros. Su ejecución requería de conocimientos para determinar las prioridades y establecer

los procedimientos de actuación más adecuados según las posibilidades de cada momento. Cada una de las cuatro funciones precisaba combinar la voluntad (querer) con el conocimiento (saber) y con las capacidades disponibles (poder). La movilización de los trabajadores nacía de la reacción espontánea ante el empeoramiento de las condiciones materiales, la privación de derechos y las represalias aplicadas por empresarios y autoridades políticas. Los partidos, de forma directa y a través de sindicatos y otras organizaciones sociales, debían calibrar las formas reivindicativas, la intensidad, la duración y la organización con las que impulsar esos movimientos. El discurso estratégico debía servir como referencia para conectar los movimientos por demandas inmediatas con la asunción de mayores exigencias acrecentando la fuerza política y logrando aliados.

En clave positiva, los aciertos de los partidos obreros en el despliegue de la acción política reflejarían su buena disposición al diálogo con la realidad cambiante, la capacidad para acumular y dosificar las fuerzas, la vocación por construir mayorías sociales y la consecución de victorias parciales. En clave negativa, los errores y deficiencias reflejarían el predominio del subjetivismo idealista, el planteamiento de cada lucha como batalla final, la tendencia a la radicalización minoritaria, el arrebato en momentos de exasperación y la buena convivencia con la acumulación de derrotas y frustraciones. De manera complementaria, la vida orgánica de los partidos operaría como causa y/o efecto de los aciertos y deficiencias. El funcionamiento interno que mostraran los vínculos entre los dirigentes y los militantes, y entre los líderes que ostentaban cargos públicos y los órganos internos, guardaría relación con el desenvolvimiento de la acción política y las características del discurso estratégico.

3. Patológica tendencia a la desunión y al enfrentamiento entre fracciones. Ya antes de que se formaran los partidos obreros, las primeras organizaciones vinculadas a los trabajadores dieron pruebas de su incapacidad para hacer compatible las posiciones discrepantes con la unidad de acción. De manera sistemática, afloraban diferencias entre fracciones moderadas y radicales que raramente establecían fórmulas de convivencia, siendo recurrente su tendencia al enfrentamiento hostil. Unas posiciones congeniaban con el gradualismo de las demandas reivindicativas y el pragmatismo de las acciones a favor de las reformas. Otras posiciones apostaban por el maximalismo de las demandas y la

contundencia de las acciones. Los primeros partidos reprodujeron idéntica senda: discrepancia, división y lucha cainita, ya fuera en su interior o mediante sucesivas escisiones. La ruptura entre socialistas y comunistas elevó la hostilidad hasta convertir al discrepante en enemigo. Tiempo después volvió a suceder lo mismo entre los partidos comunistas y las organizaciones más radicales que surgieron en los años sesenta. El disenso y rivalidad entre unos y otros pasaba a ser el motor de la actividad enconada, repitiéndose el proceso en los corpúsculos más diminutos, siempre tentados a considerar a los discrepantes como principales adversarios.

El triunfo de la incultura que rechazaba el compromiso soterradamente albergaba una ambición de poder (siquiera minúsculo) y siempre acarreaba funestas consecuencias para el propósito que inicialmente decían compartir: la defensa de los trabajadores. Una patología que entronizaba el reproche, la desautorización, el énfasis en las diferencias, la acumulación de resentimientos y la autojustificación de posturas faccionalistas. Un juego de suma negativa que debilitaba a los movimientos sociales, mermaba la fuerza política y, en ciertos momentos, ocasionaba virajes dramáticos: las fracciones moderadas hacia la derecha y las fracciones radicales hacia acciones suicidas. Bajo el paraguas del pragmatismo, las primeras traspasaban la línea de la moderación y abrazaban causas nocivas para los trabajadores. Bajo el paraguas del ímpetu revolucionario, las segundas se dejaban arrastrar por la exasperación, llevando a cabo insurrecciones sin posibilidad de triunfar, o bien convirtiendo su causa en una retórica de minorías sin influencia social.

4. Modificaciones de la estructura social. El desarrollo industrial hizo que cada sociedad europea se vertebrase a partir de una división social cuyo eje central estaba definido, de un lado, por los propietarios de las fábricas, los bancos y las redes comerciales, y, de otro, por los obreros fabriles y demás trabajadores asalariados. El crecimiento económico y demográfico polarizó la desigualdad económica entre ambos grupos. La mayor parte del capital se concentró en los grandes propietarios, mientras que las filas obreras se masificaban, concentrando el trabajo en grandes empresas y las viviendas en las periferias de las ciudades, lo cual favorecía el desarrollo de movimientos por demandas laborales y sociales. Sin embargo, ya en los tiempos de la primera industrialización, la homogeneidad obrera coexistía con múltiples formas de trabajo asalariado y no asalariado en condiciones muy diferentes a las de los obreros fabriles, lo cual

dificultaba el desarrollo de los movimientos laborales. No pocas veces resultaba más asequible la convergencia por reclamaciones ciudadanas sobre las condiciones de vida en las ciudades y por demandas democráticas, con independencia de los lugares y características de trabajo.

Con posterioridad, los sucesivos cambios experimentados por las economías capitalistas siguieron modificando las formas de organización y estratificación social. Surgieron estructuras más complejas sometidas a la tensión entre los factores tendentes a la diversidad y los que favorecían la uniformidad de los colectivos de trabajadores. Así ocurría con las condiciones de trabajo, el tamaño de los centros, el tipo de actividad, las categorías laborales y la formación de la mano de obra. También con las condiciones de vida, dependiendo del acceso a los bienes y servicios, las aspiraciones profesionales y culturales, y las preferencias en la utilización de las libertades personales.

5. Actuación inhibitoria de los poderes dominantes. Como no podía ser de otro modo, los propósitos de los partidos obreros chocaban con el poder económico detentado por los propietarios de la mayor parte de la riqueza acumulada y de buena parte de la renta que se iba generando. Igualmente, chocaban con el poder político de una elite conservadora que controlaba los principales resortes del Estado y que, en algunos países junto con la jerarquía eclesiástica, establecía el relato ideológico con el que se legitimaban las relaciones de poder entre los grupos dominantes y los grupos subalternos. Un relato tendente a difuminar la respuesta de Humpty Dumpty ante la duda planteada por Alicia ante el espejo: «La cuestión es saber quién manda, eso es todo». El ejercicio de poder operaba de forma continua para generar una multiplicidad de mecanismos inhibitorios en detrimento de los movimientos y las organizaciones de los trabajadores y de cuantas iniciativas pusieran en cuestión la legitimidad del dominio económico, político, social e ideológico. Un dominio que, por otra parte, no puede ser concebido desde criterios maniqueos, ya que esos grupos de poder no mantienen una uniformidad absoluta, ni siempre aciertan a la hora de determinar sus intereses ante la realidad de cada momento y, por supuesto, desconocen muchas de las consecuencias que pueden acarrear sus propias decisiones.

6. Influencia de episodios contingentes. Tales episodios constituyen

acontecimientos que no necesariamente se derivan de las trayectorias previas, no son inmanentes, y que una vez aparecen convulsionan el escenario vigente. Un caso extremo, acaecido por partida doble durante la primera mitad del siglo XX, fue el estallido de las guerras mundiales. Cabía presuponer que sus profundas consecuencias modificaron radicalmente los discursos estratégicos y las acciones políticas de los partidos obreros. La misma presunción cabía hacer sobre la resonancia de otros episodios como pudieron ser ciertos escándalos políticos de dimensiones mayúsculas, atentados terroristas, oleadas migratorias, influencia en el espacio nacional de decisiones tomadas en otros países, así como otros acontecimientos con entidad para perturbar el statu quo previo.

A la postre, los resultados del ciclo vital recorrido por los partidos obreros parecen un remedo de aquella letrilla, después adaptada por la copla, que decía «ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas, sin ti porque me muero». Las opciones que ganaron mayorías sociales perdieron impulso transformador hasta precipitarse en la vacuidad, mientras que las opciones que preservaron la radicalidad de los anhelos seminales no fueron capaces de generar la fuerza política requerida y quedaron sumidas en la nulidad. Distintos partidos desempeñaron un gran papel en el desarrollo de los movimientos sociales; a veces, épico por las dificultades que afrontaron y las represalias que sufrieron. En su haber está la conquista de gran parte de las reformas sociales y de los derechos democráticos, así como los esfuerzos para impedir que se dieran pasos atrás en las demandas previamente logradas. En su debe figuran las muestras de sectarismo, la propensión a la creencia antes que al conocimiento de la realidad, el exceso de moderación o incluso de temor de unos, y el exceso de radicalidad voluntarista y las fugas aventureras de otros.

Probablemente, las posiciones en torno a la democracia política reflejan mejor que cualquier otra cuestión los dilemas y enfrentamientos que afrontaron esas dos almas del movimiento obrero, poniendo al descubierto las virtudes y los defectos, los entusiasmos y las alergias de cada cual. Máxime si se tiene en cuenta que, desde el último cuarto de siglo XIX, el parlamentarismo constitucional ha sido el régimen político de la mayoría de los países europeos desarrollados, sustentado en la garantía de las libertades cívicas, el derecho universal de voto y la soberanía legislativa del parlamento. Qué postura adoptar ante la convocatoria de elecciones, cómo aprovechar la existencia de las libertades, qué posibilidades ofrecía la participación en parlamentos y

ayuntamientos, cómo ganar mayorías y para qué servía la presencia en los gobiernos, fueron asuntos permanentemente sometidos a debates divisorios entre moderados y radicales.

Una vez perfiladas las intenciones que han animado la elaboración del libro, paso a comentar varias características sobre la estructura que finalmente ha tomado. Un primer comentario se refiere a la abundante literatura que existe sobre la historia de quienes son protagonistas del libro: los partidos socialistas y comunistas. Una literatura no sólo voluminosa sino, en muchos casos, de excelente calidad, por lo que carecía de sentido pretender escribir «otra historia más». Ni de lejos podría acercarse a las virtudes que atesoran los trabajos de Cole, Dolléans, Droz, Eley, Landauer, Lindemann, Sassoon o Tilly, por citar algunos de los más destacados entre los que son referencias de obligada lectura. En ellos, igual que en los principales trabajos sobre la historia de los países europeos, a cargo de Aldcroft, Beaud, Bergeron, Grenville, Hobsbawm, Judt, Mommsen o Palmade, están las mejores fuentes de información y estupendos análisis. Unos abordados desde criterios temáticos y otros siguiendo un orden cronológico. El conocimiento y la reflexión que estimulan esos trabajos fueron la puerta de entrada, ya que con ellos establecí las bases de las que surgieron los interrogantes iniciales de este libro cuyo contenido pretende interrelacionar la historia de las organizaciones obreras, la historia de los movimientos obreros y la historia política de los países europeos con la dinámica de cambio de la economía capitalista. Mi atrevimiento consiste en que, a partir de la inestimable contribución intelectual de esos materiales bibliográficos, me propuse buscar explicaciones consistentes para el ciclo vital recorrido por los partidos obreros. Para lo cual compuse el núcleo de premisas metodológicas (requisitos, funciones y condicionantes) desde las que establecer los seis grupos de posibles factores causales. El contenido del análisis se expone a lo largo de los capítulos, dejando para el último la síntesis de los resultados agregados, con la que se pone a prueba la posible calidad y la consistencia de los planteamientos metodológicos utilizados.

Un apunte formal que se deriva de lo dicho sobre la bibliografía utilizada es que, siendo tan abundante y a menudo trasversal en cuanto a los periodos y a los países, hubiera sido redundante, incluso molesto, ir recogiendo con detalle esas referencias en cada apartado de cada capítulo. Para evitar esa reiteración e incomodidad he optado por incorporar una recopilación detallada y ordenada al

final del libro, mencionando en el texto solamente algunas referencias muy específicas o bien las requeridas por las citas textuales.

La estructura del libro combina un orden cronológico y por países que se explica en los siguientes párrafos, con la excepción del primer capítulo, que se dedica a exponer los orígenes y el contenido de la propuesta elaborada por Marx y Engels, lo cual viene motivado por dos razones. En primer lugar, fue el único proyecto de sociedad socialista que se formuló a partir de una concepción filosófica y que estuvo complementado con un discurso de carácter revolucionario acerca de cómo alcanzar ese ideario. Esta concepción pretendía incorporar una teoría de la historia y, dentro de ella, una teoría de la revolución que hiciese realidad el proyecto. En segundo lugar, aquel tándem proyecto-discurso inspiró el nacimiento y la actividad de una parte de los partidos socialistas que se crearon en el último cuarto del siglo XIX y de la totalidad de los partidos comunistas surgidos con posterioridad. Analizar las características de lo que he calificado como metáfora comunista permite perfilar cuáles fueron los fundamentos de la propuesta que se convirtió en el arsenal ideológico de esos partidos, a la vez que facilita el modo de establecer los principales contrastes con el otro tipo de propuesta seminal que animó la formación de partidos obreros. Ambas perfilaron trayectorias significativamente distintas hasta la segunda mitad del siglo XX.

Los capítulos II a V abordan la génesis y el primer despliegue de cuatro partidos socialistas cuyas características, junto con las dinámicas políticas de sus respectivos países, pueden ser consideradas como referentes de los procesos que tuvieron lugar entre las últimos décadas del siglo XIX y mediados del siglo XX. Es decir, el tiempo transcurrido desde su nacimiento hasta que alcanzaron la primera madurez, incluyendo el trauma de la escisión entre socialistas y comunistas. El laborismo británico nació en la cuna del desarrollo industrial capitalista y de la democracia política europea que dieron lugar a la formación del primer movimiento obrero y al parlamentarismo democrático. El socialismo francés surgió en el país que previamente había vivido una cadena de insurrecciones populares a lo largo del siglo XIX, al calor de las cuales se formaron varias tendencias socialistas. La socialdemocracia alemana fue el primer partido obrero que tuvo fuerza política, bajo una monarquía autoritaria, y que décadas después llegó a tener en sus manos el gobierno del país y fue el protagonista que instituyó la república democrática. El bolchevismo ruso llevó a cabo la única experiencia de revolución triunfante realizada por un partido obrero, en un gigantesco país cuyas estructuras económicas y sociales eran

ajenas al capitalismo y acumulaban un superlativo atraso histórico. Bajo esas condiciones, una vez que conquistó el poder, el partido bolchevique tuvo que afrontar tareas que eran ajenas a las que ellos mismos habían supuesto para iniciar la construcción del socialismo.

Los dos capítulos siguientes analizan el entrelazamiento de las fases de madurez y declive de los partidos obreros en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. El capítulo VI describe el vínculo de dos procesos simultáneos: uno promovió las mayores conquistas que han llegado a alcanzar los trabajadores en el ámbito de la democracia y el bienestar social; el otro supuso la pérdida de las coordenadas transformadoras por parte de los partidos obreros. Los socialistas fueron los mayores impulsores de la ampliación de los derechos políticos y la construcción de los estados de bienestar en varios países, mientras que en otros su participación también fue relevante, y en otros países esa relevancia correspondió a los partidos comunistas que actuaban en sistemas políticos diseñados para vetar su acceso al poder estatal. El reverso de la moneda fue que, desde el gobierno o con una sólida representación parlamentaria en la oposición, los partidos socialistas fueron renunciando a mantener los viejos afanes transformadores y su actividad quedó ceñida a la preparación de elecciones y la labor parlamentaria, limitando su discurso y su acción política a cómo gestionar la realidad capitalista.

Esta lectura ambivalente del periodo de la Edad de Oro se aleja de la que propone una buena parte de la literatura, que sitúa el declive de los partidos obreros en la crisis de los años setenta, debido a la incapacidad para seguir aplicando políticas económicas keynesianas y para mantener las exigencias de gasto público que comportaba el estado de bienestar. El empeño por destacar esas restricciones, que son evidentes, deja sin considerar otros elementos que venían operando en las décadas anteriores, tanto en la actividad externa como en la vida interna de esos partidos –también en los comunistas–, y que contribuyen a explicar el declive y conectan con la trayectoria previa de esos partidos en la primera mitad del siglo.

El capítulo VII presenta el tránsito de la decadencia al ocaso, cuando los síntomas de agotamiento precipitaron la caída al vacío político de los partidos obreros. La incapacidad para nutrir el depósito de aspiraciones transformadoras les condujo a la indigencia estratégica. En su defecto, asumieron los relatos conservadores acerca del funcionamiento de la economía, las funciones del sistema político y el orden social. En el mejor de los casos, establecieron ciertas

líneas defensivas para limitar la intensidad de los pasos hacia atrás que exigían los programas económicos, las leyes de orden público y los recortes de las políticas sociales. En el peor de los casos, se mostraron contrarios a las demandas de los trabajadores y llegaron a actuar contra los movimientos sindicales y las organizaciones que no aceptaban tales restricciones. En todos los casos, fueron incapaces de presentar políticas con las que hacer frente a la involución conservadora y clasista que arreció desde las décadas finales del siglo XX. Sin duda, la profundización de esa decadencia no se explica sólo por causas achacables a los propios partidos obreros, sino que es preciso considerar tanto los cambios de la estructura social, estrechamente asociados a las modificaciones de la economía, como los mecanismos inhibitorios ejercidos por los núcleos de poder a escala nacional e internacional.

Los capítulos VIII y IX tratan de manera específica sobre los partidos españoles. El hecho de contar con el análisis previo de las trayectorias seguidas por los principales partidos de referencia permite establecer comparaciones de las que extraer las analogías y diferencias que presentan los socialistas y comunistas españoles con respecto a aquellos otros. No escaparon al ciclo vital de los partidos europeos, con ciertas características comunes pero con un calendario distinto y varios rasgos importantes también diferentes. En el pasado lejano, destacaron las condiciones marcadas por el atraso económico y el tipo de régimen monárquico decimonónico; después lo fueron las condiciones creadas durante la República, la fallida insurrección de octubre de 1934 y la victoria del Frente Popular; finalmente, la guerra y la dictadura franquista. En el pasado cercano, tras esa larguísima dictadura, los partidos obreros se vieron confrontados con la transición a la democracia política y con la crisis económica. Esos partidos, con un protagonismo absoluto del partido socialista, iniciaron su viaje de ida en la segunda mitad de los años setenta, justo cuando los partidos europeos estaban comenzando el viaje de vuelta. En el corto pero intenso intervalo de una década desempeñaron un papel decisivo en la consolidación del sistema político democrático, el desarrollo del estado de bienestar, la inserción en el escenario europeo y otras grandes novedades; a la vez, cuando sólo habían recorrido una parte del trayecto ascendente, sufrieron los signos de erosión y declive ideológico y político que les colocaba en la senda del viaje hacia la decadencia. Ese cruce de caminos explica muchos de los aspectos que han caracterizado al escenario político español y, dentro de él, a los partidos obreros.

El epílogo final aporta una visión integral de los resultados del análisis, proponiendo respuestas a las preguntas planteadas en esta introducción. Con esa

visión se pone a prueba en qué medida los resultados hallados permiten explicar que el ciclo recorrido por los partidos obreros compone una secuencia articulada entre las distintas fases, y que esa articulación se explica a través de los factores que se han establecido como posibles determinantes. El capítulo concluye con varias reflexiones acerca de las enseñanzas que pueden obtenerse de esa trayectoria.

Dos detalles adicionales precisan de sendos comentarios para aclarar mejor el contenido del libro. El primero tiene que ver con las cuestiones o temáticas que quedan fuera de este trabajo, sin que ello suponga ignorar su interés o su importancia en algunos momentos y en algunos países. Siendo los partidos obreros el centro del análisis, han quedado fuera de foco otras organizaciones y movimientos, como por ejemplo el anarquismo, el consejismo y otras propuestas de cariz autogestionario, sólo aludidas de pasada con referencia a episodios concretos; así como otros movimientos que eludieron asumir un contenido directamente político y se ciñeron a actividades específicas de índole intelectual, docente o artística. Tampoco se analiza con detalle el campo de las fuerzas conservadoras que han dominado la escena política durante la mayor parte del tiempo en casi todos los países; aparecen como referencias laterales con respecto a hechos importantes que influyeron en la actividad de los partidos obreros. Lo mismo cabe decir de los movimientos que han emergido en las últimas décadas, algunos de ellos provistos de anhelos transformadores desde sus perspectivas específicas, como son el ecologismo, el feminismo y el pacifismo. Se alude a ellos con relación a los cambios de las últimas décadas, pero no son objeto de un tratamiento preciso. Por último, quedan al margen las experiencias políticas que han supuesto cambios drásticos de las relaciones de poder en países situados fuera del continente europeo. Como anuncia el subtítulo del libro, su contenido se refiere en exclusiva al ciclo vital de los partidos obreros en Europa.

El segundo detalle se refiere a las reservas con las que sólo en algunas ocasiones se utiliza el término «izquierda», a sabiendas de que su uso más frecuente lo identifica con la posición política que han representado históricamente los partidos socialistas y comunistas. Sin embargo, atendiendo a su propio origen durante la Revolución francesa, izquierda y derecha son términos que necesitan referencias espaciales, ya que se trata de ubicaciones relativas a las demás fuerzas políticas, lo que les convierte en rótulos cambiantes según los tiempos y los países. Así, en ciertos periodos se consideraron fuerzas de izquierda a los partidos liberales y otras formaciones políticas que combatieron a monarquías absolutistas y regímenes dictatoriales, pugnando por ampliar los derechos

democráticos y las reformas sociales. Es un término que también se utiliza para incluir a organizaciones y movimientos que no son partidos políticos.

Los últimos comentarios tienen que ver con la motivación íntima que me ha animado a indagar en la trayectoria de esas organizaciones obreras nacidas hace siglo y medio, ahora que la realidad actual es superlativamente distinta. Cualquier duda al respecto de esa diferencia radical debería ser diagnosticada como síntoma de parálisis intelectual. Pero, al mismo tiempo, la realidad presente pertenece al mismo sistema capitalista que sigue lesionando los intereses de la mayoría social, lo cual sigue siendo fuente de anhelos y esperanzas transformadoras. La lucidez para comprender cuál es la situación existente y la necesidad del compromiso con un futuro distinto que sea verosímil, exigen alejar los mitos y atavismos que se han ido arrastrando, los doctrinarismos y las justificaciones vacías en los que la derrota ha buscado refugio. A la mitología pertenece la ilusión de que la historia sigue un curso que conducirá a una sociedad ideal. Como señaló Eric Hobsbawm, el problema no radica en ambicionar un mundo mejor, sino en creerse la posibilidad de un mundo perfecto. Una creencia que ha provocado no pocas consecuencias dramáticas, ya que enarbolando una causa tan magnífica se han justificado acciones aberrantes y propuestas disparatadas. Con frecuencia, el reino de las palabras y de las ilusiones fabuladas desplazó al principio de realidad en el que priman los hechos y sus consecuencias reales.

El doctrinarismo, además de fosilizar el pensamiento, plantea el dilema de quién establece el dogma y, por tanto, quién determina su cumplimiento o su desviación. Como reconocía el valenciano Rodrigo Borgia, investido como papa Alejandro VI, «ser infalible es una verdadera bendición; cualquier evidencia que contradiga mis palabras será considerada herejía». Infalible llegó a ser considerada la metáfora comunista, debidamente codificada como dogma, mientras que las cúpulas dirigentes socialistas y comunistas convertían las discrepancias con sus decisiones en herejías. Rechazar el dogma supone también alejarse del falso sentido de superioridad ética e intelectual que asumen quienes creen que están en posesión de un arcano que les otorga la razón histórica.

Recogiendo la propuesta de Walter Benjamin de diseccionar la historia «a contrapelo», el reto consiste en indagar desde una postura laica cuál ha sido la trayectoria efectiva de los partidos nacidos con afanes emancipadores. Sin

mostrar empatía con el discurso dominante que hace apología del capitalismo. Sin pretender que las oportunidades perdidas, los fracasos acumulados, los sacrificios hechos y los logros conseguidos otorguen algún derecho a esperar la existencia de una justicia poética que acabará por conceder lo merecido.

Una vez concluido el libro, he tenido la sensación de que con él compenso varias deudas personales. Una primera la tenía con un joven de diecisiete años que recién entrado en la universidad, en aquellas asambleas no legales en las que participaban cientos de estudiantes, intentaba convencerles de que la lucha contra el franquismo permitiría construir una sociedad socialista. El mismo que entonces comenzó a militar en uno de los partidos comunistas radicales de la época y a quien, pretendiendo halagarle, un compañero de fatigas le mostró su extrañeza porque hubiera leído El capital; en realidad sólo el primer volumen, que era el que estaba disponible en la Biblioteca Nacional. También estaba en deuda con un ya menos joven que diez años después, en 1980, siendo uno de los dirigentes de aquel partido comunista, participó en su disolución porque consideraba que era una fórmula caduca de organización política. Y, por la misma razón, la deuda estaba contraída con quien desde entonces, fuera ya de la actividad política, siguió convencido de la necesidad de compaginar las aspiraciones con la lucidez para conocer las posibilidades reales de transformación que ofrece la sociedad actual. Un propósito que, como diría Karl Kraus, supone «desecar el ancho pantano de los tópicos». Por último, más allá de deudas personales, el texto pretende rendir tributo a todos aquellos que, en el pasado y en el presente, han antepuesto la nobleza de la causa colectiva de los trabajadores por avanzar hacia una sociedad decente, más justa e igualitaria, por encima de intereses particulares. Pudieran estar de acuerdo o no con los argumentos que aquí se presentan.

Finalmente, expreso mi profundo agradecimiento a varios amigos que se han prestado a leer y comentar algunos de los borradores del libro. El mayor castigo se lo llevó María Jesús Vara, pues tuvo que lidiar con los materiales que contenían las redacciones iniciales de varios capítulos. Llevando a cabo una auténtica labor minera para extraer de ellos algunas buenas ideas, María Jesús me proporcionó atinados criterios que después han sido fundamentales para orientar el contenido del libro. En una fase más avanzada, Nacho Álvarez y Ángel Vilariño leyeron un borrador general de todo el libro, mientras que José Antonio Alonso, Joaquín Aramburu, Eugenio del Río y Ángel Tablas lo hicieron

de algunos capítulos. Todos ellos me han ayudado con su talento y la amplitud de sus conocimientos sobre muchos de los temas abordados en el libro. Espero haber aprovechado bien sus críticas, matices y sugerencias. En todo caso, únicamente yo soy el responsable de las deficiencias y las pifias que pueda contener este trabajo.

1. La metáfora comunista codificada como doctrina: con la historia a favor

Hacia la mitad de los años cuarenta del siglo XIX, dos jóvenes alemanes nacidos en el reino de Prusia y con edades en torno a los veinticinco años sentaron las bases filosóficas de una propuesta de emancipación social que más tarde se convertiría en el código de principios doctrinarios que guio la acción política de numerosos partidos obreros. El propósito de Karl Marx y Friedrich Engels era elaborar una posición filosófico-política diferente a las que aportaban otros jóvenes de la «izquierda hegeliana» con quienes habían compartido ideales democráticos y acciones contra el absolutismo monárquico durante sus años universitarios y en sus primeras incursiones periodísticas. El cierre de la Gaceta Renana en 1843 por orden del gobierno prusiano y la coincidencia de su primer viaje a París les brindaron la oportunidad de iniciar una colaboración que perduró el resto de sus vidas.

Engels se asentó en Mánchester para dirigir una fábrica textil de la que era socio su padre. Allí comenzó a estudiar cuestiones relacionadas con la economía y pudo comprobar de primera mano los estragos sociales que provocaba la industrialización. Marx se mantuvo un tiempo en París, donde prosiguió sus trabajos sobre filosofía y colaboró con intelectuales opuestos al régimen prusiano en la publicación del primer y único número de los Anales Franco-Alemanes. Cuando fue expulsado de Francia por la presión de las autoridades prusianas, se instaló en Bruselas, donde mantuvo contacto con otros emigrantes alemanes que habían formado una organización revolucionaria, la Liga de los Justos.

Marx publicó su Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel en aquel número de los Anales que se publicó en mayo de 1844. Menos de doce meses después, Engels dio a la imprenta La situación de la clase obrera en Inglaterra. Ambos trabajos contenían esbozos que, en los dos años siguientes, desarrollaron de forma conjunta en La sagrada familia y La ideología alemana. La relevancia de esos trabajos es fundamental porque contienen la elaboración filosófica de lo que después se denominaría «materialismo histórico» desde la que formulaban un proyecto de emancipación, un discurso sobre la revolución

conducente a ese objetivo y la necesidad de una acción política capaz de materializarlo. Tres elementos que quedaron definitivamente organizados durante la elaboración del Manifiesto Comunista y que, con algún matiz y varios complementos, sustentaron el cuerpo doctrinal del pensamiento revolucionario de Marx y Engels. Por esa razón es importante reflexionar acerca de cómo desde unas determinadas categorías filosóficas y desde un determinado método filosófico se cimentaron las bases de una teoría de la historia de la que derivó el núcleo duro de las categorías políticas con las que se compuso un cuerpo doctrinal que depararía unas colosales consecuencias históricas.

EL COMUNISMO COMO PROYECTO DE EMANCIPACIÓN SOCIAL

Tesis iniciales

Moses Hess, uno de los mentores de los jóvenes filósofos que formaban la izquierda hegeliana, definió en 1839 el comunismo como «la pasión razonada de los socialmente explotados». Como después señaló Engels, él y Marx mantuvieron esa denominación para su proyecto porque consideraban que el término «socialista» era utilizado indebidamente por filósofos y políticos que proclamaban ese objetivo sin considerar la acción revolucionaria que debía conducir a su consecución. Marx compartía con esos filósofos de la izquierda hegeliana una misma posición materialista y el convencimiento del método dialéctico como instrumento analítico. Las líneas de distanciamiento que estableció en la Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel se referían a cuatro ideas fundamentales. Primera, la necesidad de una filosofía con la que elaborar la teoría de la historia y de la emancipación social. Segunda, la relación entre la emancipación y la eliminación de la propiedad privada. Tercera, la revolución política como requisito para llevar a cabo la transformación radical de la sociedad. Cuarta, el proletariado como sujeto emancipador.

Siguiendo a Hegel, Marx consideraba que la filosofía podía explicar el comportamiento de la historia y que la aplicación del método dialéctico permitía

exponer cómo el despliegue progresivo de la historia, a través de sucesivas etapas, se encaminaba hacia un destino final. Lo que para Hegel era el desarrollo espiritual de la «idea», el progreso de la historia hacia la razón absoluta, que se plasmaba en la existencia del aristocrático y autoritario Estado prusiano, para Marx consistía en el desarrollo material de la sociedad hacia la emancipación absoluta de la humanidad. El argumento con el que entonces Marx justificó que el proletariado era el sujeto protagónico de la revolución comunista será modificado en trabajos posteriores. En aquel momento razonaba que, al contrario de lo que sucedía en Francia, la debilidad del desarrollo industrial de los territorios alemanes determinaba que los propietarios de la industria y el comercio no fueran capaces de impulsar una revolución burguesa; de lo cual deducía que la única revolución posible en Alemania era la que impulsaría el sujeto emancipador cuyo único atributo era la desposesión radical: el proletariado, que, como no propietario, era el sujeto negador de la realidad[1].

Por su parte, desde Mánchester, Engels acentuó su posición crítica respecto al capitalismo a raíz de conocer el funcionamiento industrial en Inglaterra. Con 19 años había publicado en Telegraph varios artículos, con el título Cartas desde Wuppertal, en los que criticaba los costes humanos que generaba la industria capitalista. Cinco años después, en La situación de la clase obrera en Inglaterra, estudió con minuciosidad los efectos que la industria provocaba en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores fabriles en toda Inglaterra. Su análisis abarca la introducción de máquinas y otras nuevas tecnologías, la organización del trabajo en las fábricas, la procedencia geográfica y laboral de los obreros, la concentración de capital en manos de grandes propietarios a la vez que caían los salarios unitarios que pagaban, la disciplina fabril, el hacinamiento en viviendas paupérrimas situadas en los barrios periféricos de las ciudades, el tipo de alimentación y de vestimenta de los trabajadores.

Su diagnóstico era rotundo: «Esos obreros no poseen nada y viven del salario que casi siempre sólo permite vivir al día; la sociedad individualizada al extremo no se preocupa por ellos y les deja […] constantemente expuestos a la miseria»[2]. Ante lo cual su pronóstico también era concluyente: «Las crisis económicas, la palanca más poderosa de toda revolución autónoma del proletariado, abreviarán ese proceso»[3]. Y lo culminaba con un vaticinio optimista que concordaba con lo apuntado por Marx para Alemania: «En ninguna parte es más fácil hacer profecías que en Inglaterra, porque en este país el desarrollo de la sociedad es muy claro y bien definido. La revolución debe obligatoriamente venir […;] la guerra de los pobres contra los ricos que se

desenvuelve actualmente de una manera esporádica e indirecta, se desarrollará de modo general, total y directo en toda Inglaterra. […] La exasperación deviene más intensa; […] pronto bastará un ligero choque para desencadenar la avalancha»[4].

De modo que Marx desde la filosofía y Engels desde la economía esbozaban el mismo dictamen: el capitalismo engendraba las contradicciones que conducirían a su desaparición; la lucha del proletariado contra la burguesía era inevitable y su resultado final llevaría a la desaparición del capitalismo. Según los términos empleados por Marx en otro escrito de aquellos años, «el comunismo es la expresión positiva de la propiedad privada superada […] quedando resuelto el enigma de la Historia» [5]. La estancia en París les proporcionó un mayor conocimiento de lo que habían sido los acontecimientos políticos que condujeron a las revoluciones de 1789 y 1830, así como de las distintas teorías del socialismo que habían propuesto Saint-Simon, Fourier y Cabet, y de las tesis que mantenían los líderes que contaban con mayor prestigio entre los círculos socialistas, como eran Proudhon, Blanc, Bakunin o Weitling.

Teoría general de la historia en formato dialéctico

Los dos primeros trabajos conjuntos de Marx y Engels fueron La sagrada familia, publicado en Fráncfort en 1845, y La ideología alemana, concluido al año siguiente, pero para el que no encontraron una editorial en la que publicarlo, por lo que quedó inédito hasta 1932. La cosmovisión de la trayectoria histórica de las sociedades humanas que sistematizaron en este segundo trabajo era deudora de la crítica acerada que contenía el primero, subtitulado Crítica de la crítica crítica. Era un escrito dirigido contra los planteamientos de los hermanos Bauer y de Max Stirner, figuras destacadas de la izquierda hegeliana, con quienes Engels había coincidido en la sociedad política de Los Libres (Die Freien) cuando estudiaba en la Universidad de Berlín. El sarcasmo utilizado y la perseverancia en destacar las discrepancias ponían de manifiesto la pretensión de Marx y Engels por trazar una línea de separación con sus propias ideas anteriores, con las de sus maestros y condiscípulos, y también con las posiciones que mantenían otros intelectuales alemanes como Wilhelm Weitling, Moses Hess, Arnold Ruge[6].

Seguían siendo trabajos escritos en clave filosófica, sin apenas anclaje en estudios históricos, propios o ajenos, guiados por el propósito de proponer tesis que tuvieran un alcance universal. Aunque al inicio de La ideología alemana señalaban que «Las premisas de que partimos no tienen nada de arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas reales»[7], de hecho en el texto apenas aparecían algunos detalles relativos a hechos históricos. La cosmovisión que proponían quedaba formulada como una teoría de la historia, que más tarde fue conocida como «materialismo histórico», cuyo contenido se sintetizaba en siete tesis principales. Primera, existe un vínculo dialéctico entre el desarrollo de las capacidades o fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Segunda, las formas de propiedad determinan la estructura de la sociedad dividida en clases sociales. Tercera, las relaciones de producción son la base desde la que se erige la superestructura compuesta por las formas políticas, judiciales e ideológicas vigentes en la sociedad y derivadas del dominio de unas clases sociales sobre otras. Cuarta, tras un periodo de sinergias positivas, las capacidades de producción se ven frenadas por las relaciones de producción. Quinta, esa contradicción se plasma en el agudizamiento de la lucha entre clases explotadas y explotadoras. Sexta, alcanzado un momento crítico en el que las relaciones de producción impiden que las capacidades productivas sigan creciendo, se crean las condiciones revolucionarias para que las clases explotadas desplacen a las dominantes. Séptima, el resultado de ese desplazamiento es la instauración de unas nuevas relaciones de producción que impulsan otra vez el crecimiento de las capacidades productivas y permiten la construcción de otra superestructura.

Esas tesis, con vocación universalizadora, se concretaban en el caso del capitalismo del siguiente modo:

En el desarrollo de las fuerzas productivas se llega a una fase en la que surgen fuerzas productivas y medios de intercambio que, bajo las relaciones existentes, sólo pueden ser fuente de males […] son fuerzas de destrucción (maquinaria y dinero); y, lo que se halla íntimamente relacionado con ello, surge una clase condenada a soportar todos los inconvenientes de la sociedad sin gozar de sus ventajas […] una clase que forma la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que nace la conciencia de que es necesaria una revolución radical, la conciencia comunista […] la revolución comunista está dirigida contra el modo anterior de actividad, elimina el trabajo [asalariado] y suprime la

dominación de las clases al acabar con las clases mismas […] la revolución no sólo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba salir del cieno en que está hundida y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases[8].

Previamente planteaban el carácter político de esa revolución como premisa para poner en marcha la transformación de la sociedad: «Toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque esta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político, para poder presentar su interés como el interés general, cosa a que en el primer momento se ve obligada»[9]. Por último, concluían con una explicación del objetivo comunista que sintonizaba con la referida frase sobre la solución al enigma de la historia: «El comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente»[10].

Por tanto, Marx y Engels no muestran interés en perfilar las características específicas del proyecto comunista, definido como la negación de la propiedad privada, sino en argumentar que el proyecto es realizable (porque pertenece a la lógica dialéctica con la que se desenvuelve la historia), requiere de una revolución política y cuenta con el sujeto que la llevará a cabo. Más adelante, avanzarán algunas ideas sobre el proyecto, y desarrollarán algo más la relación entre el discurso revolucionario y la acción política, pero es en La ideología alemana donde queda plasmado el núcleo central de lo que será su propuesta. Más allá de influencias parciales, se trata de una formulación filosófica convertida en apuesta política que era plenamente original, tenía un entronque histórico y estaba dotada de un discurso revolucionario hasta entonces inédito. Las líneas gruesas de la propuesta respondían a una singular combinación de los postulados materialistas de la Ilustración con el modo de argumentar de la dialéctica hegeliana; incluso, conectado con el espíritu romántico que teñía el pensamiento de Hegel y de otros filósofos y poetas alemanes como Friedrich Schlegel y Heinrich Heine, este último buen amigo de Marx, que se declaraban abiertamente opuestos a los ilustrados.

Por un lado, los ilustrados materialistas (Helvetius, Voltaire, Condorcet, Holbach) aspiraban a comprender y explicar el mundo conforme a sus características materiales, rechazando la participación de factores transcendentes o divinos. Consideraban que la sociedad era cambiante, pero a la vez existían leyes de alcance universal cuyos principios eran inmutables. El conocimiento racional permitía descubrir esas leyes y al mismo tiempo era el medio desde el que orientar el funcionamiento de la sociedad, siendo posible llegar a saber cuál era la opción correcta para avanzar hacia un futuro mejor. Por otro lado, Hegel y sus seguidores concebían la dialéctica como el modo de desarrollar un pensamiento totalizador dentro del cual la evolución de la historia era un proceso continuado y autocontenido que tenía lugar a través del desarrollo de elementos binarios opuestos; en un primer momento, esos elementos concordaban entre sí, pero después se oponían dando lugar a que surgieran nuevos elementos que volvían a reproducir idéntica secuencia de correspondencia-oposición. Toda realidad histórica estaba basada en una unidad de contrarios, en un despliegue de conflictos antagónicos; así sucedía hasta que se alcanzaba un estadio final, un destino, donde tal antagonismo desaparecía. Desde esa concepción, Hegel formaba parte del pensamiento romántico e idealista de la época, mientras que Feuerbach y las sagas disidentes de hegelianos de izquierda se adherían a la corriente materialista de pensamiento.

Como diría Marx, él y Engels pusieron boca abajo la visión idealista de Hegel, de modo que, según su nueva propuesta, la filosofía tenía como misión iluminar el destino de la historia, la emancipación social, colocándose al servicio de la causa política revolucionaria. Sin perder de vista que era desde las categorías absolutas de un determinado enfoque filosófico como habían alumbrado una teoría política. Consideraban, por tanto, que esas categorías podían aplicarse a la realidad social y que se comportaban según establecía la dialéctica hegeliana. Y sin perder de vista tampoco que esa teoría política admitía la posibilidad de hacer realidad un ideal filosófico (emancipación comunista) que, una vez alcanzado, interrumpía la aplicación del método dialéctico (sociedad sin clases, sin oposición de contrarios, sin despliegue futuro). En este sentido, cabe considerar que la formulación comunista de Marx y Engels constituía una «metáfora», esto es, una prefiguración retórica con la que expresaban su vocación política.

Conformaron así un programa de pensamiento y acción que les ocupó el resto de sus vidas. Nutrido por esa «fábrica de ideas» que era la capacidad intelectual de Marx –por emplear la expresión de Fernández Buey (1998)–, complementada

desde la siguiente década con un «voraz apetito analítico» por conocer el funcionamiento de la economía capitalista y de las sociedades de su tiempo. Atributos que también podrían aplicarse a Engels y que ambos compañeros plasmaron en estudios y reflexiones múltiples sobre economía, sociología, historia y otras disciplinas, siempre guiados por la pretensión de alcanzar un conocimiento omnicomprensivo. Un esfuerzo original, brillante y de gran potencia intelectual, que puso al descubierto numerosos rasgos fundamentales de las sociedades capitalistas. A la vez que un esfuerzo que, inevitablemente, tenía que pagar la factura que suponía entremezclar la búsqueda de conocimiento científico y la convicción materialista con la permanencia de un ideal filosófico finalista y la rigidez de la dialéctica hegeliana para acercarse a la realidad económica, social, cultural o política. Entre unos y otros trabajos, a veces dentro de un mismo trabajo, esa abigarrada coexistencia se convertía en fuente de ambivalencias, confusiones y contradicciones, en las que la pretensión de rigor analítico sucumbía al exceso de subjetivismo y al celo simplificador. En ese caso, el proyecto y el discurso estratégico, previamente diseñados, se anteponían y domesticaban a la actividad intelectual, a la lucidez por comprender en qué medida la realidad se correspondía con tales diseños estilizados a partir de las categorías filosóficas y del método filosófico con el que habían elaborado su propuesta[11].

MATICES Y QUEBRADEROS EN TORNO A LA METÁFORA

El siguiente trabajo relacionado con su teoría de la historia fue el Manifiesto Comunista, que terminaron de escribir en enero de 1848 con el propósito de influir en la orientación de los movimientos insurreccionales que brotaban en diferentes países europeos[12]. El Manifiesto aporta una narrativa más amplia sobre ciertos hechos históricos que, a su juicio, avalaban las tesis con las que habían definido el proyecto comunista y el discurso revolucionario. Provistos de una argumentación más rotunda, explican cómo la economía determina las dinámicas políticas y cómo el curso de la historia está determinado por el desarrollo de la lucha de clases a través de sucesivas etapas. Igualmente, refuerzan el planteamiento acerca del carácter binario o dicotómico de la estructura social y explican cómo el capitalismo hace que la variedad de grupos sociales precedentes se subsuma en dos clases antagonistas: burguesía y

proletariado. Como novedad, es el primer trabajo en el que plantean líneas concretas de cómo debe ser la acción política de los comunistas, aclarando que puede ir variando según cambian las condiciones en cada país.

Desarrollos y matices

Como más tarde reconoció Engels, el Manifiesto expone una interpretación netamente jacobina (inspirada en los acontecimientos franceses de 1789 y 1830) acerca del desenvolvimiento de la revolución política que consideraban inminente. El celo por aportar gasolina a la combustión que agitaba el escenario europeo hizo que Marx y Engels valorasen como tendencias definitivas la crisis económica iniciada dos años antes y la incipiente emergencia de las luchas obreras. A su juicio, ambos hechos permitían vaticinar la proximidad de revoluciones comunistas en distintos países. De ese modo, avanzan algunas ideas, siempre generales, sobre el proyecto comunista, acerca de cómo el Estado en manos de los obreros llevaría a cabo la colectivización de los medios de producción e intercambio y la eliminación del trabajo asalariado. También incorporan alusiones sobre los fundamentos del discurso estratégico tendente al derrocamiento del poder de la burguesía.

Ante la proximidad revolucionaria que anuncia, el Manifiesto formula una primera versión de las funciones que debían ejercer las organizaciones comunistas para favorecer el desarrollo del movimiento político. Las luchas por mejorar las condiciones laborales y sociales servirían para inculcar los objetivos comunistas a los trabajadores, movilizándoles y organizándoles con el fin de generar la fuerza política que les permitiera conquistar el poder estatal. Las alianzas con otros grupos sociales debían servir para sumar fuerzas con las que debilitar el poder de la burguesía y favorecer el movimiento revolucionario. Las organizaciones comunistas «auténticas» serían las que fueran capaces de desarrollar ese movimiento revolucionario.

Seguidamente, el exceso de optimismo se trocó en una visión pesimista tras la derrota de los movimientos insurreccionales[13] y coincidiendo con lo que Marx consideraba, lúcidamente, el inicio de una nueva fase expansiva de las economías europeas. Este cambio de postura le indujo a modificar el modo de

relacionar el discurso revolucionario con el análisis de los nuevos hechos acaecidos. En el Manifiesto, el fervor por la causa condujo a un forzamiento en la interpretación de los hechos, dando como resultado un obnubilado optimismo en el final del capitalismo y la inminencia del proyecto comunista. Después, ante la realidad mostrada por los hechos, Marx enfatizó la importancia de la fase en la que se encontraba la economía para calibrar las posibilidades de desarrollar un movimiento revolucionario. Era ante una situación de crisis cuando se creaban las condiciones para que se acentuaran los conflictos de clases, acercando el momento en el que el derrumbe del capitalismo diera lugar a que los trabajadores asumieran el discurso revolucionario. Esta versión diseñaba un curso histórico más mecánico y dependiente de las condiciones económicas y, por tanto, supeditado a que apareciesen los límites materiales del desarrollo capitalista. Era ciertamente un modo distinto de argumentar el despliegue de la tensión dicotómica entre la burguesía propietaria del capital y el proletariado fabril[14].

Cuando en 1859 Marx redactó el célebre «Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política», introdujo una breve síntesis en la que reiteraba las tesis anteriores pero incorporó ciertos matices que atestiguaban ese nuevo planteamiento: «Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y superiores relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua»[15]. Lo relevante son las palabras «todas» y «jamás». De un lado, implican que no existen posibilidades revolucionarias mientras prosiga la expansión económica. De otro lado, emplea términos abstractos que sintonizan bien con el procedimiento dialéctico pero carecen de significado económico y político real, pues ¿qué es el desarrollo de todas las fuerzas productivas?, ¿cómo conocer, menos aún a priori, cuándo se ha producido ese desarrollo total?[16]. Sin embargo, tal cosa era fundamental pues, según señalaba, sólo entonces sería posible que se creasen nuevas (superiores) relaciones de producción; es decir, que se materializase el discurso revolucionario para iniciar la construcción de la meta comunista.

A modo de broche final, señalaba: «Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción […]; las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo […]. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad

humana»[17]. Ciertamente, resulta difícil explicar esas frases en una clave que no sea teleológica: la humanidad se encamina a un final con el que cierra su prehistoria. La historia está del lado de los trabajadores. Su victoria será inevitable. La emancipación social pondrá fin a las sociedades de clases. Se trata de la versión marxiana con las máximas cotas de adherencia hegeliana, en la que el método dialéctico se funde con el contenido[18]. Como planteaba Karl Korsch, «El materialismo de Marx […] tal como ha nacido de la filosofía idealista está, pues, en todos los aspectos, en el contenido, en el método y en el léxico, afectado aún por los rasgos maternos de la filosofía hegeliana de cuyo seno salió»[19].

La obra magna, El capital, ahondó en la misma versión, aunque lo hizo desde un planteamiento que podría parecer paradójico: guardando un clamoroso silencio sobre los temas relativos a la causa del comunismo. Como señalaba en el prólogo a la primera edición del primer volumen, aparecido en 1867, lo que se proponía era «investigar el régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación que a él corresponden». Por ello, «no se estudian las contradicciones sociales que brotan de leyes naturales de la producción capitalista, sino esas leyes en sí»[20]. Lo mismo sucede en las posteriores ediciones de la obra (también en alemán), con la pretensión de presentar una obra de análisis objetivo, estrictamente teórico, acerca de cómo funciona el régimen capitalista, tomando como ejemplo «el hogar clásico de este régimen que es, por ahora, Inglaterra». No será hasta después de su muerte cuando en el prólogo a la primera edición en inglés, en 1886, Engels señale: «En Inglaterra, las teorías de Marx ejercen también, precisamente en estos momentos, una influencia muy poderosa sobre el movimiento socialista, movimiento que se extiende entre las filas de la “gente culta” no menos que en el seno de la clase obrera»[21].

Sin embargo, como queda patente en los siguientes capítulos cuando se examinan los procesos de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia, tanto Marx como sobre todo Engels fueron incorporando matices y rectificaciones relativas a su interpretación de la historia y de la lucha por la emancipación. Unas veces lo hicieron en estudios sobre hechos históricos que tuvieron lugar durante la segunda mitad del siglo[22]. Otras veces fue a través de las propuestas de acción de la Asociación Internacional del Trabajo, en la que ambos fueron dirigentes entre 1864 y 1872, así como de sus opiniones sobre la creación de un partido obrero alemán. Otras veces quedaron recogidas en las cartas que se intercambiaron y en otras dirigidas a terceras personas. Tras la muerte de su

compañero, fue en los numerosos prólogos que Engels redactó para las sucesivas ediciones de los trabajos de ambos en distintos idiomas.

Uno de los principales quebraderos de cabeza de los que se ocupó Engels en la última década de su vida concernía a la interpretación de la historia que habían sostenido desde sus primeros trabajos: ¿en qué medida eran los factores económicos (la base económica) los que determinaban a los demás componentes (la superestructura) de la sociedad? En la conocida carta a Joseph Bloch de septiembre de 1890, Engels trató de escapar de la férrea adherencia determinista de lo económico:

El factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta –las formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, las constituciones que, después de ganada una batalla, redacta la clase triunfante, etc., las formas jurídicas […]– ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, predominantemente en muchos casos, su forma. Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores en el que […] acaba siempre imponiéndose como necesidad el movimiento económico[23].

Una aclaración razonable que se aleja de la lectura economicista más ingenua, aunque sigue prestándose a lecturas distintas según cómo se interprete la «última instancia» y por qué «al final» el movimiento económico siempre se impone «como necesidad». Las dudas permanecieron en otros intentos posteriores, como la carta a Borgius, fechada en 1894, donde Engels emplea casi las mismas palabras para reafirmar que existe una interrelación entre la base económica y la superestructura, pero «en última instancia aquella siempre se impone»[24].

De nuevo, esta cuestión parecía apuntar a un debate de orden teórico, pero, de hecho, como se muestra en próximos capítulos, tuvo importantes derivaciones de orden político para los partidos socialistas cuya base doctrinal era la propuesta

marxista. Si el curso de la historia era el resultado de tendencias objetivas inexorables y a la vez era el resultado de la lucha de clases, la acción política (según las condiciones de la pugna de clases en cada momento) podía adquirir autonomía con respecto al discurso estratégico (habría revolución cuando las condiciones materiales la hicieran posible).

Cuestiones en vilo

Los quebraderos que suscitaba la cuestión mencionada formaban parte de un bagaje notablemente amplio de dudas, contradicciones y aporías que producía el viaje emprendido por la metáfora comunista desde las categorías filosóficas con las que formulaba una teoría de la historia hasta las categorías políticas con las que formulaba la posibilidad de un discurso revolucionario. Cuestiones todas ellas relevantes para el devenir de esos partidos socialistas, y después de los comunistas, que asumieron la metáfora como matriz doctrinal.

Un primer grupo de cuestiones concernían a la formulación del proyecto, cuya premisa era que la historia generaba las condiciones necesarias para el surgimiento de una sociedad basada en la negación del capitalismo, cuyos rasgos sustantivos eran la propiedad privada de los medios de producción (capital) y la apropiación privada del plusvalor (explotación) aportado por el trabajo asalariado. El corolario era la posibilidad de hacer realidad el ideal de una sociedad plenamente emancipada, sin clases sociales ni explotación del trabajo, y en la que la propiedad de los medios de producción fuese colectiva.

Marx y Engels nunca pusieron gran interés en llegar más allá de esos principios básicos, puesto que esa formulación dejaba al descubierto la necesidad de contar con el poder del Estado para llevar a cabo tales transformaciones sistémicas, lo que justificaba su discurso sobre la revolución que diera acceso a tal poder. Por ese motivo, sólo en contadas ocasiones hicieron alusiones fragmentarias a cómo organizar esa sociedad una vez conquistado el aparato de Estado. Tal vez las dos acotaciones más sonoras corrieron a cargo de Marx, ya en los años setenta y que son abordadas en los capítulos referidos a los partidos socialistas de Francia y Alemania. Una fue con motivo del aplastamiento de la Comuna de París, cuando Marx elaboró un documento en el que entresacaba unas posibles enseñanzas

acerca de cómo organizar el futuro Estado socialista. La otra tuvo lugar cuando Marx se pronunció contra determinados acuerdos que figuraban en el programa común de las dos organizaciones fundacionales del partido socialista alemán, aludiendo a la posible existencia de dos fases en la construcción del comunismo y a la necesidad de que en la primera se instituyese una dictadura revolucionaria; una mera referencia que posteriormente levantaría grandes polvaredas acerca del significado de la «dictadura del proletariado» como intersticio articulador del discurso con el proyecto. También Engels, en diversos trabajos, dejó alusiones sueltas sobre aspectos referidos a cómo organizar la producción de forma planificada y a la futura organización social, recogiendo con frecuencia ideas ya señaladas por Fourier, Cabet, Owen u otros soñadores de la sociedad ideal.

La levedad a la hora de dibujar el proyecto continuó en el caso de los líderes obreros, incluso en los programas de los partidos, limitándose a dar pinceladas aisladas, nunca sistemáticas, acerca de las características del proyecto emancipador que proponían. Se trataba de abstracciones simples que no podían escapar a la contradicción que se ponía de manifiesto según el esmero que pusieran en ser más o menos explícitos. Cuanta mayor parquedad en la formulación del proyecto, más ilusorio e intemporal parecía, más remoto y alejado del desarrollo real de las sociedades capitalistas contra las que se presentaba como alternativa. Cuanta mayor precisión de algunos aspectos, más dudas acerca de su verosimilitud, incurriendo en enunciados sincretistas, tomados de diversos enfoques, a veces incompatibles.

Dos casos bastante notorios de aporía son los relativos a la estructura política del Estado y a la organización social. En el primer caso, las ideas en torno a la estructura política del Estado le atribuyen responsabilidades decisivas como son las de garantizar el reparto colectivo de la propiedad y organizar la producción; por tanto, también las de decidir sobre la división del trabajo y sobre la composición del consumo de bienes útiles. Esos atributos convierten al Estado en un gran asignador omnisciente y, al menos por delegación, omnipotente. Lo cual difícilmente encaja con una concepción del comunismo como autoemancipación de los explotados y oprimidos, que otorgaría la primacía a la democracia y la participación de la base social en detrimento de una vertebración jerárquica de las estructuras políticas. Esta tensión se ha decantado habitualmente haciendo equivalentes las funciones del Estado y las necesidades colectivas, cuyo correlato frecuente ha sido la exagerada adherencia estatista que ha caracterizado a los partidos de impronta marxista. En el segundo caso, las iniciativas a propósito de la organización social proponen una perspectiva basada

en un comportamiento social uniforme, como sinónimo de igualitario, y carente de conflictos de intereses. Lo cual tampoco encaja con una concepción de la emancipación como liberadora, capaz de dar rienda suelta a la creatividad, al desarrollo del individuo y, por tanto, a la diferencia de aspiraciones, capacidades e intereses, lo que generaría diversas gamas de estratificación social. Esta tensión se ha decantado casi siempre hacia la omisión, cuando no la negación, de los factores individuales que originan diversidad, que sin embargo resultan consustanciales a la interacción social que llevan a cabo los seres humanos.

Un segundo grupo de cuestiones surgía de la formulación del discurso. Entre sus muy amplias ramificaciones, cabe concentrar la atención en tres principalmente. Primero, el proceso político conducente a la revolución socialista propuesto por Marx y Engels es plenamente deudor de cómo interpretaron la «revolución burguesa» en Francia, sobre todo los acontecimientos insurreccionales de 1789, 1830 y 1848. Ese mimetismo sería reconocido y cuestionado más adelante por el viejo Engels, pero esa autocrítica no le condujo a reflexiones alternativas que tomaran en cuenta los hechos que se analizan en el capítulo IV. Los factores que intervinieron en aquellos episodios insurreccionales obedecían a contextos desencadenantes sumamente específicos de la situación francesa. Los grupos que protagonizaron las insurrecciones conformaban un magma social heterogéneo, en el que los obreros fabriles eran una exigua minoría y la mayor parte de los participantes respondían a categorías laborales precapitalistas. El capitalismo industrial sólo aceleró su desarrollo durante la segunda mitad del siglo, y cuando lo hizo, alumbrando un fuerte incremento de los obreros fabriles en las décadas finales del siglo, nunca más se produjeron episodios insurreccionales.

Aunque sea de pasada, a propósito del discurso también merece una breve atención el hecho de que la propuesta originaria de Marx y Engels sobre la revolución socialista estaba concebida a escala internacional. No otro es el trasfondo que late en el Manifiesto Comunista y de manera más explícita en sus análisis posteriores sobre el fracaso de la insurrección francesa de 1848, señalando la imposibilidad de que la revolución hubiera podido triunfar solamente en Francia. Sin embargo, tras la fallida experiencia de la Asociación Internacional de Trabajadores, abandonada a su suerte por Marx y Engels al cabo de varios años, la formación de los partidos socialistas dará lugar a perspectivas nacionales que no quedarán superadas con la creación de la II Internacional, como se revela en los siguientes capítulos.

Un tratamiento algo más detallado es el que requiere el tercer aspecto relativo al

discurso, ya que consiste en las dificultades que plantea una estrategia revolucionaria argumentada a partir de una concepción de las clases sociales y de su dinámica de conflicto sustentada en la dialéctica hegeliana. Una clase, negada por el capitalismo, explotada económicamente y oprimida socialmente, desarrolla un movimiento político que culmina con la conquista del Estado y el derrocamiento del poder capitalista. Según el curso dialéctico de la historia, un episodio inevitable al que meramente faltaba poner fecha y modo de realización, dependiendo de las condiciones económicas y políticas forjadas por ese capitalismo. Las indudables ventajas que una visión dialéctica puede proporcionar al considerar la sociedad como una totalidad, destacando su carácter dinámico, y la importancia de los factores que generan conflicto interno, sufren auténtico maltrato cuando esa visión queda convertida en un instrumental analítico que solamente contempla la sociedad desde esquemas binarios que se desenvuelven mediante dicotomías antagónicas.

Ese procedimiento indujo la identificación de dos binomios: capitalistas-asalariados y burguesía-proletariado. El primero empleaba dos términos que tenían entidad sociológica real, pues se referían a colectivos separados por la posesión/desposesión del capital invertido en la economía. El segundo utilizaba categorías difíciles de precisar en términos sociológicos salvo que se asimilasen a las del binomio anterior, lo cual no siempre sucedía en los textos de Marx y Engels. En su caso, a veces el término de proletariado se refería a los obreros fabriles, genuino producto de la Revolución industrial, en tanto que colectivo de trabajadores asalariados que estaba sometido a unas condiciones de trabajo y de vida relativamente homogéneas; como consecuencia, se trataba de un colectivo susceptible de asumir unas mismas demandas compensatorias y unos mismos objetivos políticos. Pero, en otras ocasiones, utilizaban los términos de proletariado y clase obrera de forma más elástica, más difusa, en la que tenía cabida el conjunto de los asalariados, aunque trabajasen en centros y en actividades muy distintas a las de los obreros fabriles, o en trabajos basados en relaciones precapitalistas. Otras alusiones resultaban todavía más genéricas cuando mencionaban a las masas de oprimidos, excluidos o desposeídos por el capitalismo. La misma imprecisión se producía con respecto a la burguesía, unas veces tomada en una acepción genérica que comprendía al conjunto de los poseedores de capital, sin distinguir tamaños y tipos de negocios, mientras que otras veces era asociada con los grandes propietarios del capital de las industrias, bancos y comercios. El recurso de echar mano a la distinción entre pequeños, medianos y grandes aliviaba sólo en parte el dilema mencionado, sobre todo si se tiene en cuenta que la necesidad de utilizar binomios con elementos antagónicos

obligaba a forzar cualquier tipo de clasificación establecida según criterios clasistas.

El propio Marx, en los cuadernos con los que finalmente Engels confeccionó el tercer volumen de El capital, en un brevísimo e interrumpido capítulo final, señalaba que había tres clases principales (obreros asalariados, capitalistas y terratenientes), pero que ni siquiera en Inglaterra, la sociedad desarrollada más moderna, esa división era diáfana, sino que existían líneas divisorias oscurecidas. Si se identificaran las clases por sus fuentes de renta, entonces «los médicos y los funcionarios formarían dos clases, pues pertenecen a dos grupos sociales distintos […]. Y lo mismo podría decirse del infinito desperdigamiento de intereses y posiciones en que la división del trabajo social separa tanto a los obreros como a los capitalistas y a los terratenientes»[25]. Justo ahí, dos líneas después, la redacción se interrumpe y finaliza ese tercer volumen.

Siendo así, parecen fundadas las dudas que acarrea la aplicación de procedimientos dialécticos para comprender la vertebración de unas estructuras sociales europeas cada vez más complejas y dinámicas. Abundan entonces las sospechas acerca de unas clasificaciones dicotómicas que no sólo simplificarían la realidad, sino que la distorsionarían hasta el punto de impedir la comprensión adecuada del comportamiento social. Unas clasificaciones que proporcionan una lectura de la dinámica social en clave exclusivamente de confrontación antagónica, inevitable y permanente, sin considerar relevante la complejidad de la estructura social y el establecimiento de relaciones de cooperación, de complementariedad, de consenso y de conflicto no necesariamente antagónico. Todo lo cual generaría serias dudas acerca de la propuesta de una clase-sujeto destinada de manera unívoca a un antagonismo capaz de generar la fuerza con la que materializar una revolución que acabase con el capitalismo. Esa visión distorsionada es la que puede explicar la reiterada incomprensión de Marx y Engels hacia las características de un potente movimiento obrero inglés siempre ajeno a cualquier episodio revolucionario, como se expone en el capítulo II; o bien su interpretación del significado real de los episodios insurreccionales franceses previos al desarrollo industrial, que se aborda en el capítulo III.

Tal visión puede explicar también sucesivos debates habidos en los partidos que heredaron aquel discurso revolucionario. Unos, interrogándose por las condiciones históricas que propiciarían la penetración del discurso revolucionario entre la clase obrera. Otros, por la relación entre ese discurso y los movimientos reivindicativos que reclamaban demandas laborales y sociales.

Otros, por las ventajas y perjuicios de participar en las elecciones y parlamentos de los sistemas basados en la democracia política. Otros, en fin, por las funciones prioritarias que, como partidos, debían llevar a cabo para alinear su acción política de corto plazo con el contenido revolucionario de su estrategia.

CODIFICACIÓN DE LA METÁFORA COMO DOCTRINA

Debates que discurrieron por derroteros distintos en unos u otros partidos herederos, cuyo origen indefectiblemente residía en la coraza establecida mediante una codificación estricta de la metáfora comunista convertida en férrea doctrina. Las primeras bases dogmáticas las sentaron Marx y Engels, sobre todo en los escritos en los que pretendían compendiar sus principales tesis. Un crepuscular Engels señaló que «toda la concepción de Marx no es una doctrina, sino un método. No ofrece dogmas hechos, sino puntos de partida para la ulterior investigación y el método para dicha investigación»[26]. Pero la literalidad de ciertos escritos suyos y de su amigo iba en la dirección contraria. A ello se sumaron las interpretaciones cada vez más rígidas por parte de los líderes de los partidos creados con la misma matriz doctrinaria, que fueron también los que encabezaron la II Internacional y contribuyeron a su difusión por otros países. La petrificación definitiva llegaría con los líderes soviéticos que fundaron la III Internacional desde la que patrocinaron la creación de múltiples partidos comunistas.

Una coraza sucesivamente asumida y divulgada por varias generaciones de líderes convencidos de que el capitalismo era un sistema condenado por la historia a ser derrocado por el proletariado mediante una revolución que permitiría construir una sociedad comunista. Aunque después algunos líderes modificaron sus posiciones, así lo creyeron quienes fueron contemporáneos, aunque más jóvenes, de los dos pioneros, como Wilhelm Liebknecht, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, August Bebel, Clara Zetkin, Franz Mehring, Jules Guesde, Paul Lafargue, Victor Adler, Antonio Labriola, Gueorgui Plejánov y Vera Zasúlich. Les siguieron los nacidos alrededor de 1870 que destacaron desde la primera década del siglo XX, como Vladímir Lenin, Yuli Mártov, Friedrich Ebert, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Anton Pannekoek, Rudolf Hilferding, Max Adler y Karl Renner. Y después despuntaron los nacidos en los

años ochenta, como León Trotski, Lev Kámenev, Grigori Zinóviev, Nikolái Bujarin, Iósif Stalin, Karl Korsch, Georg Lukács, Béla Kun, Karl Radek y Otto Bauer, siendo algo más joven Antonio Gramsci como última figura descollante en el panorama marxista europeo.

Unos y otros partidos, socialistas y comunistas, captaron las ventajas que suponía una codificación de ideas simples y unívocas con las que formular de manera encadenada una visión de la historia, un proyecto y un discurso. Una doctrina canónica que se difundía mediante libros y documentos programáticos, escritos de propaganda, escuelas de formación de cuadros y prácticas iniciáticas de los militantes. Su sustancia podría ser presentada a modo de un tríptico desplegable con:

– Tres ideas fabuladas:

• La existencia de una historia de las sociedades humanas que, dotada de una lógica universal desvelada por la filosofía, discurre por una trayectoria que se desplaza hacia un estadio final, el comunismo.

• Un curso histórico que se presta a un conocimiento similar al que se ocupa de conocer la naturaleza física, provisto de regularidades inflexibles que convierten la flecha del tiempo en un recorrido lineal, mecánico y definido.

• Una lógica universal que explica cómo el despliegue dialéctico de la historia reproduce sucesivas correspondencias y oposiciones binarias: fuerzas productivas y relaciones de producción, base económica y superestructura, clase dominante y dominada.

– Tres premisas del proyecto emancipador:

• La conquista del poder del Estado eliminaría las relaciones de producción capitalista mediante la colectivización de los medios de producción y de cambio.

• Las relaciones sociales basadas en la propiedad colectiva volverían a impulsar el desarrollo de las capacidades productivas.

• Las nuevas relaciones de producción y las mayores capacidades productivas darían lugar a una radical transformación de la superestructura social, creando las condiciones para lograr la emancipación comunista.

– Cinco fundamentos del discurso estratégico:

• El desarrollo industrial impulsado por las relaciones de producción capitalistas consolidaba una estructura social, homogénea y fuertemente polarizada en torno a dos clases: burgueses y proletarios.

• Los propietarios del capital detentaban el poder económico y dominaban todos los ámbitos de la superestructura. Los obreros crecían con rapidez y estaban sometidos al empeoramiento continuo de sus condiciones de trabajo y de vida.

• La explotación cotidiana, y en particular las crisis económicas, fomentaban la lucha de clases. La movilización de los obreros por mejorar sus condiciones materiales propiciaba que tomaran conciencia de sus objetivos emancipadores, uniendo también a otros grupos sociales oprimidos.

• Las organizaciones obreras tenían como misión impulsar las reivindicaciones y elevar la conciencia política de los trabajadores hacia los objetivos comunistas.

• El proceso revolucionario se aceleraría una vez alcanzado un nivel crítico de movilización, organización y conciencia, que se correspondería con la incapacidad de las relaciones de producción capitalistas para seguir impulsando el desarrollo de las capacidades productivas.

Ese repertorio doctrinal justificaba la idea de que la acción política se podía evaluar con objetividad, sentenciando si era adecuada o incorrecta según su contribución al avance de la estrategia. Si bien, la evaluación corría a cargo de los dirigentes políticos como depositarios de la verdad contenida en la doctrina. En ese sentido, deberían haber saltado todas las alarmas cuando Lenin afirmaba que «la doctrina de Marx es omnipotente porque es verdadera. Es completa y armónica, y brinda a los hombres una concepción integral del mundo»[27]. Una frase increíble, que sin embargo iba precedida de otras en las que decía rechazar el sectarismo y la rigidez doctrinal, pero que en realidad no eran más que un

grosero eslabón de una cadena propiciada por el propio Engels, incluyendo el ditirambo que en 1892 hizo de su amigo: «En 1844 no existía aún el moderno socialismo internacional, convertido desde entonces en una ciencia gracias sobre todo y casi exclusivamente a los esfuerzos de Marx»[28]. En un sentido suave puede pensarse que la mención a la ciencia pretendía destacar que Marx afrontó la crítica del capitalismo y las características del proceso revolucionario mediante una fundamentación materialista y razonada que no necesitaba de apelativos subjetivos a la moralidad[29]; lo cual era harto dudoso si nos atenemos a los elementos en los que el análisis marxiano quedaba cegado por la pasión moral que criticaba. Más allá de esa cuestión, la apelación a la ciencia servía para proteger de la discusión a unas tesis consideradas inapelables si se suponía que obedecían a un estudio riguroso que demostraba el carácter objetivo e inevitable del progreso histórico. De ahí que la posición de Engels fuera la antesala en la que Kautsky, Plejánov y otros líderes fueron elevando el envite que preparó el órdago de Lenin. Una vez que se han confeccionado los dogmas de la doctrina, fortificados tras una sólida coraza, cualquier persona o partido puede creer que existe la posibilidad de articular una concepción del mundo integral, completa y armónica. Suceda lo que suceda en el mundo real, el adoctrinado siempre puede persistir en su creencia.

La importancia cardinal de esa cuestión radica en que aquella doctrina no fue una más, ya que la dogmatización de la metáfora comunista se convirtió en una poderosa fuerza ideológica que, a través de los partidos obreros que inspiró, ejerció una colosal influencia en la historia de distintos países, a nivel continental y a escala mundial. No la ejercieron, precisamente, los partidos de aquel entonces que limitaron su acción política a proclamar el objetivo socialista como proyecto y la revolución como discurso; ni los partidos comunistas que después procedieron del mismo modo, incapacitándose para ganar ascendencia social y fuerza política. Quienes en primer término contribuyeron a que la metáfora comunista lograra esa influencia histórica fueron los partidos socialistas, con el alemán muy por encima de los demás, que desde finales del siglo XIX se convirtieron en protagonistas de luchas sindicales, sociales y políticas que lograron ir ampliando los derechos de los trabajadores. Con el mérito añadido de que la mayoría de las veces emprendieron esas acciones en condiciones adversas, por el tamaño de las fuerzas a las que se enfrentaban y por las represalias que soportaron[30].

Como contrapartida, el partido socialista alemán, lo mismo que el francés y otros, se vieron forzados a autonomizar su acción política a favor de las reformas

con respecto al proyecto del socialismo y al discurso revolucionario. Proyecto y discurso pasaron a formar parte de la retórica con la que se adoctrinaba a los militantes y se atraía a los simpatizantes, para mantener la cohesión ideológica interna y para insuflar ánimo al esforzado trabajo de luchar por las reformas en aras de las esperanzas depositadas en un futuro socialista. La propia doctrina facilitaba ese vínculo mediante aquella lectura mecanicista basada en que las propias contradicciones del capitalismo le conducirían al derrumbe, siendo entonces cuando se presentaría la oportunidad de llevar a cabo la revolución; por tanto, en espera de ese momento de ruptura, la acción política se concentraba en impulsar las reformas[31].

La doctrina potenciaba la creencia ideológica y estimulaba la acción política a la vez que empobrecía la fertilidad teórica y alejaba la posibilidad de formular un proyecto y un discurso estratégico en pos de transformaciones verosímiles. Una ambivalencia que se reprodujo de mil maneras. Así, de una parte, la doctrina que atrajo a los líderes que formaron los partidos obreros contribuyó a crear una identidad de clase en amplios sectores obreros y dotó de conciencia ciudadana a otros grupos sociales. De otra parte, esa doctrina hizo que dirigentes y militantes adquiriesen un sentido de superioridad moral que les hizo proclives al sectarismo y a la descalificación de quienes disentían de sus propuestas, ignorando o justificando lo que no eran sino errores o aberraciones. Esa presunción de superioridad se reprodujo en el interior de los partidos, de manera que los dirigentes se colocaban en una posición elevada desde la que juzgaban el cumplimiento de la doctrina y desde la que justificaban sus decisiones, incluyendo inexplicables cambios de rumbo, alianzas o rupturas, y cualquier otro tipo de decisiones.

Igualmente, de un lado, la colección de hallazgos obtenidos por Marx y Engels mediante un enfoque holístico de la dinámica social proporcionaba notables ventajas intelectuales a la hora de establecer vínculos entre distintos factores y de confeccionar explicaciones articuladas e integradoras. Pero, de otro lado, el trazo grueso del método dialéctico subyacente en la metáfora acumulaba adherencias redentoristas y argumentos deterministas que lastraban ese enorme potencial analítico para comprender la realidad social. El empleo abusivo de ese método, mezclado con el carácter dogmático de la doctrina, fomentó un exceso de argumentos simplistas y de exageraciones que se hacían imposibles de contrastar. La preeminencia de la ideología alentaba falsos espejismos tendentes a sustituir la realidad por el deseo, a sobrevalorar unos aspectos omitiendo otros, también relevantes pero inconvenientes para la doctrina. Con el paso del tiempo,

los riesgos de esos espejismos crecieron de manera exponencial y asentaron la preferencia por recurrir a la monótona repetición de los textos inspiradores de la doctrina en lugar de prestar atención al análisis de los hechos reales. La complejidad de los procesos sociales, las mutaciones habidas en las dinámicas políticas, los contextos de incertidumbre y el influjo de factores contingentes escapaban a la capacidad de comprensión de unos partidos pertrechados tras sus dogmas.

Se produjo así una de las mayores paradojas en la historia de los dos últimos siglos. El éxito político de los partidos que se reclamaban herederos de la propuesta de Marx y Engels, medido tanto por el número de militantes como por la fuerza política adquirida, contrastaba con el escaso impacto que en su tiempo tuvieron los escritos de aquellos dos intelectuales, dotados de gran solvencia, amplísimos conocimientos, no fácil escritura, sobre todo Marx, pero con escaso reconocimiento público. Su primer trabajo de referencia, La ideología alemana, no fue publicado por ninguna editorial. Su texto de divulgación, Manifiesto Comunista, no encontró ningún eco en los movimientos insurreccionales de la época. Sus trabajos analíticos, incluido El capital, no tuvieron repercusiones en los medios académicos, intelectuales y políticos. La labor de ambos en la Asociación Internacional del Trabajo no cosechó apoyos de importancia, y sus seguidores tuvieron una modesta presencia en el mayor hito de su tiempo, la Comuna de París. La expresión última de la paradoja se plasma en el absoluto contraste entre el exiguo número de personas –no llegaban a veinte– que en 1883 asistieron al entierro de Marx en el cementerio londinense de Highgate, y los centenares de miles de militantes afiliados a los partidos obreros marxistas que al comenzar el siglo XX declaraban su devoción por esa doctrina y que siguieron creciendo a ritmo acelerado a lo largo de las siguientes décadas.

Ciertamente, la herencia intelectual de ambos autores supera con creces el perímetro marcado por aquel código doctrinario, las rigideces del método dialéctico y la metáfora comunista. Su pensamiento presenta un gran elenco de aportaciones sobre el funcionamiento de la sociedad capitalista y el modo de construir un pensamiento sistémico, algunos de ellos deslumbrantes por su novedad y otros por su profundidad, alimentados por una perseverante vocación de aprendizaje en diferentes disciplinas. Situar la relación entre la propiedad privada y el trabajo asalariado en la matriz del sistema capitalista, describir el mecanismo que caracteriza la dinámica de acumulación capitalista, formalizar el comportamiento de la estructura social mediante la articulación de clases, argumentar los procesos políticos en términos de relaciones de poder y convertir

el proyecto de emancipación en un pulso histórico contra el capital, pueden ser considerados como los cinco vértices poligonales de un pensamiento sin par; por encima del dogal impuesto por la rigidez de los otros planteamientos que los acompañaban. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, su legado más decisivo fue la impronta ideológico-política de la metáfora comunista, convertida en guía y fuerza motriz de muchos partidos socialistas y, después, de la totalidad de los partidos comunistas creados en Europa.

[1] «Las revoluciones tienen necesidad […] de una base material […] ¿Dónde reside, entonces, la posibilidad positiva de emancipación alemana? Respuesta: en la formación de una clase con cadenas radicales […] que no puede emanciparse sin emanciparse en el resto de las esferas de la sociedad y, simultáneamente, emanciparlas a todas ellas […] el proletariado […] que comienza a existir en Alemania a través del movimiento industrial […]. Cuando el proletariado reclama la negación de la propiedad privada no hace más que elevar a principio de la sociedad, lo que la sociedad ha elevado a principio suyo […]. La cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón es el proletariado. La filosofía no puede llegar a realizarse sin la abolición del proletariado, y el proletariado no puede abolirse sin la realización de la filosofía». Karl Marx (1970), Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en K. Marx y A. Ruge, Los Anales Franco-Alemanes, Barcelona, Martínez Roca, pp. 111-117.

Este argumento filosófico, ciertamente alambicado, será central en la polémica política que, a comienzos del siglo XX, mantendrán distintos partidos de ascendencia marxista acerca del tipo de revolución posible en países con un débil desarrollo capitalista, como eran Rusia, Italia o España.

[2] F. Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra [1845], p. 129. Las citas se refieren a la versión en castellano que se encuentra en http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/index.htm.

[3] Ibid., p. 396.

[4] Ibid., pp. 397 y 399.

[5] K. Marx (1968), Manuscritos económico-filosóficos, Madrid, Alianza, pp. 140-143. Esa obra, escrita en 1844, permanecería inédita hasta 1932.

[6] El subtítulo que acompañaba a La ideología alemana resultaba revelador: Crítica de la novísima filosofía alemana en las personas de sus representantes Feuerbach, Bruno Bauer y Max Stirner y del socialismo alemán en las de sus diferentes profetas.

[7] K. Marx y F. Engels (1974), La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo, p. 19 [reed.: Madrid, Akal, 2015, p. 16].

[8] Ibid., pp. 81-82 [pp. 60-61].

[9] Ibid., p. 35 [p. 28].

[10] Ibid., p. 37 [p. 29].

[11] La complejidad y el alcance poliédrico del pensamiento de Marx y Engels se reflejan bien en sus trayectorias personales, políticas y bibliográficas, que han quedado registradas en la monumental literatura que existe acerca de sus vidas, sus trabajos y sus actividades políticas. Al final del libro, en las referencias bibliográficas, se recoge una breve selección de trabajos que dan cuenta de ello.

[12] Redactado como proclama de la Liga de los Comunistas, el nuevo nombre que adoptó la Liga de los Justos, el pequeño núcleo vocacionalmente revolucionario formado por exiliados alemanes. Un núcleo aún más pequeño después del abandono de Wilhelm Weitling, hasta entonces su principal líder, y la negativa de Proudhon y su círculo de influencia a integrarse. Turbados ambos por las diatribas furibundas que les dirigieron Marx y Engels, con quienes hasta entonces habían mantenido relaciones de afinidad política.

[13] En los siguientes capítulos se apuntan algunas de las características de aquellos movimientos, que en sus objetivos y su composición social estaban lejos de parecerse a los rasgos atribuidos en el Manifiesto.

[14] Aunque parezca que se trata de un matiz sólo interesante para conocer la evolución del pensamiento de Marx, sin embargo, es necesario tomarlo en cuenta porque en capítulos posteriores esta cuestión en torno a la relación derrumbe-revolución tendrá una notable importancia en la línea doctrinal y en la acción política de los partidos socialistas inspirados en la propuesta de Marx y Engels, sobre todo en el alemán.

[15] K. Marx y F. Engels (1976), Obras escogidas de Marx y Engels (OEME),

tomo I, Moscú, Progreso, p. 518.

[16] Un aspecto adicional e importante es que, siendo hijo de su tiempo histórico, Marx observa la actividad económica como un sistema cerrado. Bastaría considerarla como un subsistema abierto que forma parte de la biosfera para que hubiera que reconsiderar el significado que Marx otorga a las fuerzas productivas, su potencial cuasi ilimitado de desarrollo y su capacidad, igualmente cuasi ilimitada, para satisfacer las necesidades materiales. Tanto con relación al capitalismo como respecto a su visión del comunismo.

[17] Ibid., pp. 517-518.

[18] Este sigue siendo el pensamiento de Marx mucho tiempo después de sus primeros escritos, manteniendo el mismo sustrato filosófico-hegeliano mientras trabaja en lo que serán sus principales obras económicas (Los Grundrisse y El capital).

[19] K. Korsch (1975), Karl Marx, Barcelona, Ariel, pp. 254-255.

[20] K. Marx (1973), El capital. Crítica de la economía política, vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, p. xiv; tomo I, Madrid, Akal, [2]2000, p. 17.

[21] Ibid., p. xxxii; p. 42 (Akal).

[22] Marx escribió cuatro trabajos principales, tres de ellos de carácter histórico y un cuarto de índole más filosófica: Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, en 1850; El dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte, en 1852; La guerra civil en Francia, en 1871; y Crítica del Programa de Gotha, escrito en 1875 pero publicado en 1891. Engels escribió un trabajo sobre el pasado histórico de Alemania y tres trabajos principales de carácter más filosófico: Revolución y contrarrevolución en Alemania, en 1852; Anti-Dühring, en 1878; Del socialismo utópico al socialismo científico, en 1880; y El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en 1884.

[23] OEME, tomo III, p. 514.

[24] «El desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., descansa en el desarrollo económico […]. No es que la situación económica sea la causa, lo único activo, y todo lo demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de acciones y reacciones, sobre la base de la necesidad económica, que se

impone siempre, en última instancia». OEME, tomo III, pp. 530-531.

[25] K. Marx (1973), El capital, vol. 3, cit., pp. 817-818 (FCE); Libro 3, t. III, p. 358 (Akal).

[26] OEME, tomo III, p. 534.

[27] V. I. Lenin (1979), Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo [1913], en Obras Escogidas de Lenin, Moscú, Progreso, tomo I, p. 31.

[28] Prefacio a la 2.a edición alemana de La situación de la clase obrera en Inglaterra.

[29] De hecho, esa era la línea de demarcación que los dos amigos habían trazado para distinguirse de los autores como Owen, Fourier y otros a quienes calificaban de «socialistas utópicos» porque, en su opinión, carecían de esa capacidad de diagnóstico objetivo (científico) y la correspondiente actuación política para alcanzar ese objetivo.

[30] En segunda instancia, la importancia de la propuesta marxista adquirió realce internacional con el triunfo de la revolución bolchevique, analizada en el capítulo V, y el posterior fortalecimiento militar de la Unión Soviética a partir de los años cuarenta.

[31] A su vez, esas reformas también eran impulsadas por otros partidos socialistas, creados y desarrollados al margen de la metáfora comunista. Es el caso del Partido Laborista británico, que se analiza en el capítulo II, y también del Partido Socialdemócrata sueco, que se aborda en el capítulo VI.

2. El laborismo británico en la cuna europea del desarrollo industrial y de la democracia política

Gran Bretaña conoció bastante antes que los demás países europeos las dos grandes experiencias que después marcaron la historia económica y política del continente: el desarrollo de la industria manufacturera impulsado por el capitalismo y el establecimiento de la democracia política como base del sistema parlamentario. La industrialización fue la fragua en la que se forjó el movimiento obrero y el parlamentarismo democrático fue el escenario político en el que surgió el partido obrero. Por esa razón, el análisis de lo acontecido a raíz de la creación de ese partido (laborista) está vinculado con la historia del proceso político británico y, dentro de ella, con la institucionalización de las bases de la democracia y con el desarrollo del movimiento obrero. Un movimiento que nunca llegó a constituir una amenaza para los poderes dominantes y un partido dotado de una propuesta de emancipación socialista que era ajena a la que habían formulado Marx y Engels. A pesar de que fue precisamente el desarrollo industrial inglés el que sirvió a Marx y a Engels para caracterizar al capitalismo y para ratificar su convicción en la viabilidad del proyecto comunista. En Inglaterra residieron durante toda la vida adulta hasta su muerte. Allí publicaron la mayor parte de sus trabajos y allí establecieron la sede de la Asociación Internacional de Trabajadores[1].

LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA POLÍTICA: UN PROCESO LARGO Y CONFLICTIVO

El punto de llegada que alcanzó el sistema político británico entre las dos décadas finales del siglo XIX y las dos primeras del XX fue el intervalo de tiempo en el que, definitivamente, convergieron los tres atributos sustantivos de la democracia política: 1) la garantía de los derechos que permitían el ejercicio de las libertades de reunión, expresión, prensa, asociación y manifestación; 2) la celebración de elecciones mediante votación libre, secreta y universal en las que

los ciudadanos elegían periódicamente a sus representantes en el parlamento; y 3) la existencia de un parlamento soberano como órgano del Estado con plena capacidad legislativa y del que dependía la formación del gobierno.

Tres elementos que componían un paquete integral. Si faltaba el primero (libertades), el segundo (sufragio libre) sería una mascarada por falta de opciones políticas. Si faltaba este segundo, el tercero (parlamento) no representaría la soberanía política de la sociedad. Si este tercero careciese de poder efectivo para legislar y para interactuar con los otros poderes del Estado, entonces las leyes serían fijadas por instituciones ajenas a la soberanía de los ciudadanos. Ese carácter integral es el que da lugar a que, de forma habitual, se utilicen como sinónimos los términos de parlamentarismo, representatividad, libertades, sufragio y democracia. Evidentemente, el ejercicio real de la democracia política comporta la existencia de otras instituciones, normativas legales y comportamientos sociales que doten de contenido efectivo a cada uno de los elementos que, de manera conjunta, definen un sistema político democrático.

En ese sentido, la experiencia británica resulta esclarecedora por dos motivos. De un lado, permite distinguir el proceso histórico seguido por cada uno de esos tres rasgos hasta que quedaron articulados en un mismo sistema político. De otro lado, porque tales procesos conducentes a la construcción del sistema político presentaron características que conviene poner de relieve, para mostrar que no se trató de una experiencia fácil, ni rápida, ni respondió a causas «naturales», sino que recorrió un largo camino, paralelo a los cambios sociales y económicos que se iban produciendo y en el que entraron en conflicto grupos sociales que tenían intereses divergentes.

Soberanía del parlamento: una cruenta conquista política y militar ajena a la democracia

Unos breves datos ayudan a situar el conflicto existente en torno a la soberanía parlamentaria. Su antecedente podría retrotraerse a los «grandes consejos» que, desde el siglo XI, reunían a la nobleza y al clero para negociar con el rey dos temas centrales que generalmente iban vinculados: la recaudación de impuestos

y la participación en las guerras. Un hito provisional fue que, en 1332, el rey Eduardo III aceptara no promulgar ninguna ley ni impuesto sin contar con el consenso de las dos cámaras ya existentes[2]. Pero una vez que consiguió su propósito, se olvidó del acuerdo y volvió a tomar las decisiones sin contar con las cámaras. La supremacía de los monarcas permaneció varios siglos más, pero aquel hito dejó abierto el escenario de futuras disputas en torno a las atribuciones del monarca y de cada una de las cámaras parlamentarias, cuyas funciones quedaron equiparadas a mediados del siglo XVII.

Lo mismo sucedió con la cuestión censitaria que fijaba quiénes podían elegir y ser elegidos como representantes en la cámara baja, denominada de los Comunes. La exigencia de que los electores y los elegibles debían ser propietarios hacía que sólo pudiera participar en las elecciones un porcentaje mínimo de la población masculina adulta. El argumento con el que se justificaba la cortapisa censitaria era que solamente quienes tenían propiedades estaban interesados en participar en el parlamento. Una explicación que perduró con el tiempo, identificando el parlamento con la defensa de los intereses propios, y que más tarde fue revestida con otros argumentos que otorgaban a la elite económica la capacidad moral e intelectual para decidir por el bien de toda la sociedad.

La consecución de un parlamento soberano, dotado de plenos poderes legislativos, llegó en la segunda mitad del siglo XVII y tuvo que recorrer un camino accidentado entre 1648 y 1688, sucediéndose tres acontecimientos decisivos: el derrocamiento y ajusticiamiento del último rey autócrata, la instauración de una república dictatorial y, finalmente, el reconocimiento de la soberanía del parlamento.

Las tensiones y litigios que los Comunes mantenían con el rey se habían acentuado desde que, en 1628, se opusieran a que las libertades políticas de que gozaban los parlamentarios fueran abolidas y a que se fortaleciera el absolutismo de Carlos I, segundo rey de la dinastía escocesa de los Estuardo. Los enfrentamientos condujeron a una guerra civil (1642-1646) que se saldó con la victoria del ejército parlamentario[3]. El rey perdió sus poderes absolutistas y el parlamento se consideró la fuerza suprema de poder, expulsando a los partidarios del monarca. Cuando este huyó para reagrupar a sus tropas, en 1649, el ejército parlamentario volvió a repetir su victoria. El rey fue juzgado, condenado y decapitado. La monarquía fue eliminada, la cámara alta quedó abolida y se proclamó una república.

Sin embargo, lo que estaba por llegar no era precisamente el funcionamiento de un parlamento soberano y menos aún el ejercicio de las libertades cívicas. Al contrario, una vez nombrado lord protector del reino, el líder del ejército parlamentario, Oliver Cromwell, instauró una dictadura militar-religiosa[4]. Hasta su muerte en 1658 funcionó un sucedáneo de parlamento compuesto por radicales religiosos y otros adictos a la dictadura. Su hijo pretendió sucederle como lord protector y convocó un nuevo parlamento que, sin embargo, reprodujo una situación similar a la de los tiempos finales de la monarquía[5]. Una nueva guerra civil volvió a decantarse a favor de las tropas del parlamento, esta vez con el apoyo de las fuerzas escocesas.

Las elecciones convocadas en 1660 alumbraron una mayoría parlamentaria favorable al regreso de la monarquía y al restablecimiento de la Cámara de los Lores. La recuperación del trono por la dinastía Estuardo, con Carlos II como rey, significó la vuelta al pasado absolutista durante dos décadas; con un parlamento actuando por delegación real bajo la primacía de la cámara alta y con una fuerte influencia de los eclesiásticos anglicanos. Las discrepancias permitidas se limitaban a temas relacionados con intereses religiosos, la recaudación de impuestos y las relaciones con los Estados europeos y con los otros territorios británicos. Reaparecieron las viejas tensiones, atravesadas por litigios sucesorios que iban asociados a pugnas religiosas, gestándose un conflicto que desembocó en una nueva guerra[6]. El parlamento se alió con el líder protestante holandés, Guillermo de Orange (yerno de Jacobo) y forzó la huida de este en 1688. Su intento de regresar, invadiendo Irlanda con el apoyo del ejército francés, se saldó con una derrota definitiva. La «revolución gloriosa» culminó cuando el parlamento ofreció la corona inglesa a la hija protestante de Jacobo –en lugar de a su hijo– que pasó a gobernar como María II con su marido Guillermo de Orange como rey.

María y Guillermo proclamaron los Bill of Rights que recogían los derechos y los deberes del monarca y del parlamento. Los reyes no podían aprobar o derogar leyes, ni utilizar dinero o reclutar soldados (o mantener ejércitos en tiempo de paz) sin contar con la aprobación del parlamento. Los acuerdos legislativos del parlamento se difundirían ampliamente para garantizar que fuesen conocidos y cumplidos por la población. Las elecciones mantendrían el carácter censitario, por lo que el derecho de voto y de elección seguía correspondiendo a un pequeño porcentaje de propietarios. Como contrapartida, el parlamento se comprometió a garantizar los derechos sucesorios de los hijos y futuros descendientes de los reyes. En adelante, los monarcas justificaron su

posición de poder como una consecuencia de la legalidad que emanaba de un poder superior, la soberanía del parlamento.

Así nació el soberanismo parlamentario como núcleo central del Estado, ejercido en nombre del pueblo, aunque en realidad sólo representaba al reducido número de propietarios que podían elegir y ser elegidos. Un grupo social que tenía reconocidos los derechos para asociarse, reunirse, crear periódicos y expresar sus posiciones e intereses, así como para realizar actividades comerciales y profesionales. La unión de Inglaterra con Escocia en 1707 supuso la creación del Reino Unido de Gran Bretaña, instituyéndose una estructura política similar: una monarquía constitucional y un sistema parlamentario bicameral. La cámara alta estaba compuesta por lores (unos hereditarios y otros por elección de sus pares) y por los obispos anglicanos. La cámara baja, los Comunes, estaba integrada por representantes elegidos a través de voto censitario.

El carácter soberano del parlamento le otorgaba potestad para adoptar cuantas normas legales estimase oportunas, pudiendo modificar la composición y las relaciones entre las dos cámaras, variar la duración de las legislaturas, modificar los poderes ejecutivos del monarca y destituir a los ministros. Mientras tanto, la mayoría de la población carecía de los derechos para ejercer la mayor parte de las libertades civiles y no podía participar en las elecciones. La soberanía parlamentaria respondía al juego de intereses de grupos sociales minoritarios. Faltaban todavía dos siglos para que se establecieran las otras dos piezas de la democracia política: el voto por sufragio universal y la extensión de las libertades a toda la población.

Lo cual no fue impedimento para que, ya en el siglo XVIII, los políticos e intelectuales británicos acuñaran una lectura democrática de aquel sistema político. Una lectura que enfatizaba la vigencia del imperio de la ley bajo la soberanía parlamentaria, omitiendo el carácter elitista de sus miembros y la postergación de la inmensa mayoría de la población. Una lectura olvidadiza a la hora de recordar que el poder soberano del parlamento no había sido un hecho casual, ni obedecía al designio de ningún tipo de «derecho natural», sino que había sido una conquista aristocrática después de que rodase la cabeza de un monarca, hubiera una cruenta guerra civil seguida de una dictadura, volviese la monarquía absolutista, se produjeran nuevos enfrentamientos armados y, finalmente, un rey extranjero se coinstalara en el trono.

Larga travesía hacia el sufragio universal y las libertades cívicas

Transcurrió más de un siglo y medio desde la revolución gloriosa hasta que se produjeron las primeras novedades relevantes en el sistema político británico, ya en la segunda mitad del XIX. El triunfo del parlamento mermó el poder efectivo de los monarcas[7] en favor de sus ministros y de la Cámara de los Comunes, mientras que las elecciones servían para garantizar la alternancia de dos fracciones, tories y whigs, la primera vinculada a los intereses aristocráticos tradicionales y la segunda más cercana a los propietarios comerciales y financieros. El despegue de la Revolución industrial a mediados del siglo XVIII supuso el rápido aumento del número de propietarios con negocios mercantiles y el acrecentamiento de la riqueza del núcleo capitalista más próspero, formado por los banqueros y los dueños de industrias y comercios. Esa nueva realidad originó tensiones crecientes entre la mayoría tradicional del parlamento y los núcleos burgueses cuya fuerza económica e influencia social no se correspondía con su minoritaria representación en los Comunes.

Un parlamento nacido para garantizar la supremacía de la aristocracia sobre el monarca se resistía a facilitar el acceso de los propietarios capitalistas y se lo negaba a otras capas urbanas que iban proliferando. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, merced a la expansión de la industria y el comercio, una quinta parte de la población vivía en las ciudades y se constataba un rápido aumento de los trabajadores asalariados. Se produjo así una patente contradicción entre una composición parlamentaria que garantizaba la pervivencia del poder aristocrático, el acelerado incremento de la riqueza capitalista en manos de los propietarios burgueses y una estructura urbana cada vez más diversa. Un nudo de tensiones que incubó incipientes cambios políticos.

La primera novedad se produjo en 1832 con la aprobación de una Reform Act que redujo las exigencias censitarias e introdujo varias modificaciones en la división de las circunscripciones electorales con el fin de paliar la discriminación que existía a favor de los medios rurales y en contra de las ciudades[8]. La reforma duplicó el número de electores, ampliando el derecho de voto a un mayor número de industriales, comerciantes y profesionales que vivían en las ciudades. Como consecuencia, la Cámara de los Comunes redujo el dominio de los estamentos aristocrático-anglicanos (predominantes en el medio rural y los antiguos burgos[9]) y elevó la participación de los propietarios burgueses, dando

también acceso a periodistas y otros líderes de opinión con mayor sensibilidad hacia la realidad social. No obstante, la reforma fue muy protestada por las voces urbanas que reclamaban la eliminación de los requisitos censitarios y la extensión del derecho de voto a los varones mayores de 21 años, ya que aquellos cambios sólo reconocían el derecho de voto al 5% de la población adulta.

Pese a ello, los cambios comenzaron a reflejarse en ciertos resultados, cobrando presencia en los debates parlamentarios y en las decisiones del gobierno los temas que interesaban a los propietarios burgueses y a los aristócratas cuyos negocios agrarios y financieros les vinculaban con los primeros. Un reflejo fue la aprobación de las leyes que eliminaban las restricciones a la apertura de nuevos negocios y al desarrollo del comercio exterior. También hubo decisiones parlamentarias que se hicieron eco de las pésimas condiciones que padecían los grupos sociales más favorecidos. En 1833 se aprobó limitar a ocho horas la jornada de trabajo para los niños y, al año siguiente, se modificaron las leyes de pobres o Poor Laws medievales para proporcionar una (débil) asistencia social a los indigentes, cuyo número crecía de forma acelerada. En 1842 se aprobó la ley que prohibía a mujeres y niños trabajar en las minas.

No obstante, pasaron varias décadas hasta que el sistema político experimentó reformas acordes con las estructuras económicas y sociales conformadas por el desarrollo industrial. Los cambios respondían a las exigencias de mayor democracia reclamadas desde fuera del parlamento y destinadas a presionar al Partido Conservador que, como continuador del dominio de los tories, mantenía la hegemonía política. Un nuevo líder conservador, Benjamin Disraeli, se mostró dispuesto a recoger algunas de esas demandas para readecuar su estrategia política y garantizar sucesivos triunfos electorales que garantizasen la continuidad del dominio parlamentario. Con tal finalidad, impulsó la aprobación de varias leyes que recogían propuestas hasta entonces defendidas por el Partido Liberal (Reform Act), por los continuadores del movimiento cartista (Ballot Act) y por los núcleos de activistas entre los trabajadores (derechos sindicales). Todo ello después de que la mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes, con el apoyo de gran parte de los liberales, hubiera rechazado las propuestas que reclamaban el sufragio universal y secreto. Lo cual seguía poniendo en evidencia la nula disposición de los dos partidos que representaban a los grupos dominantes (aristocráticos, clericales y burgueses) a perder el control de un proceso electoral que les garantizaba el dominio exclusivo del parlamento y la alternancia en el gobierno.

La Reform Act de 1867 promovida por Disraeli rebajó las exigencias censitarias, ampliando el derecho de voto a un gran número de pequeños propietarios de negocios urbanos, arrendatarios agrarios y parte de los trabajadores. Como consecuencia, se modificó la representatividad del parlamento con una mayor presencia del tejido social urbano. El derecho de voto se amplió hasta aproximadamente un tercio de los hombres mayores de 21 años en el conjunto del territorio británico, si bien en las ciudades ese porcentaje se acercaba al 60%. En 1871 se reconoció el derecho de asociación de los trabajadores y, con ello, la creación de organizaciones sindicales en cualquier rama de actividad económica y a escala de todo el país. Seguidamente, se reconoció el derecho de huelga y el derecho a negociar contratos laborales con los empresarios. La Ballot Act de 1872 instauró el carácter secreto del voto, eliminando la obligación de que cada elector anunciase en público a quién votaba, lo cual quedaba registrado; un procedimiento que había favorecido el control caciquil y el uso clientelar de las votaciones. No obstante, seguía habiendo sectores de obreros industriales y otros trabajadores que carecían del derecho a votar, mientras que el reparto de las circunscripciones seguía favoreciendo a los aristócratas y otros grupos tradicionales con mayor base electoral en el campo y en los antiguos burgos cada vez más despoblados.

La siguiente vuelta de tuerca se produjo en 1884, de la mano del líder liberal William Gladstone. Equiparó los derechos de los habitantes del campo y de la ciudad mediante el reconocimiento del sufragio a los cabezas de familia, no sólo para quienes tuvieran propiedades sino también para quienes fuesen inquilinos, arrendatarios o minifundistas con un año de residencia en la localidad y que pagaran impuestos. De ese modo, el derecho a votar se amplió a gran parte de los trabajadores industriales y mineros, y a los campesinos, alcanzando al 75% de los hombres adultos. Se reformaron las circunscripciones electorales, convirtiendo la mayoría en distritos uninominales, de manera que se elegía un escaño por cada circunscripción y se establecía una mayor correspondencia entre la distribución de la población, los votos y los parlamentarios elegidos.

El trecho que faltaba para culminar el sufragio universal se recorrió al finalizar la Primera Guerra Mundial. Muchos soldados que habían combatido en el frente no tenían la edad que otorgaba el derecho a votar, lo mismo que pasaba con todas las mujeres, muchas de las cuales habían sustituido en el trabajo a los hombres que marchaban a la guerra. La reforma electoral de 1918 aprobó el derecho de voto para todos los hombres adultos[10], rebajó a 19 años la edad mínima de voto para quienes habían prestado el servicio militar durante la guerra y

reconoció ese derecho a las mujeres mayores de 30 años, siempre que ellas o sus maridos tuviesen alguna propiedad. Cuando esta restricción se eliminó en 1928, quedó reconocido plenamente el sufragio, ahora sí universal, para todas las personas mayores de 21 años.

Culminó entonces la consolidación de los tres atributos principales de la democracia política. El parlamento era el órgano del Estado que ostentaba la soberanía legislativa. Sus componentes eran elegidos mediante voto libre, secreto y universal. El ejercicio de las libertades cívicas garantizaba que los electores y sus representantes podían hacer uso de todos los derechos democráticos. Una cuestión distinta, que se aborda en el último apartado, es dilucidar cómo era el funcionamiento efectivo de la democracia política, considerando la persistencia de relaciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad británica.

DESARROLLO INDUSTRIAL Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

La economía inglesa transformó sus características estructurales a partir del último cuarto del siglo XVIII. El predominio de las relaciones salariales entre el capital y el trabajo, junto con el desarrollo tecnológico-productivo, promovieron una intensa incorporación de maquinaria, generando un rápido crecimiento de las capacidades productivas de la industria a la vez que grandes innovaciones en los transportes, las comunicaciones y el comercio. Desde el punto de vista de los trabajadores, se produjo un rápido aumento de la población obrera empleada en las fábricas[11], así como la destrucción de multitud de empleos campesinos y artesanales que dieron paso a una generalizada expansión de los trabajos asalariados. Los trabajadores se concentraban en las periferias de las ciudades, donde se localizaban las fábricas y las viviendas, sufriendo durante un largo periodo de varias décadas un continuo empeoramiento de los salarios, de las condiciones de trabajo en las fábricas y de las condiciones de vida en los barrios.

Esas condiciones eran las que, según la impactante prosa del Manifiesto Comunista, hacían que los obreros formaran una clase social sin nada que perder «excepto las cadenas» y lo que les instaba a luchar por transformar su situación. Eran las condiciones que, según el pronóstico de Marx y Engels, debían cimentar

las bases políticas de un movimiento obrero llamado a erradicar la propiedad privada y a eliminar el capitalismo. Las condiciones minuciosamente descritas por Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra eran las mismas que, en aquellos años, plasmaba en sus novelas Charles Dickens[12]. Décadas penosas de miserabilismo social y de carencia de libertades cívicas que originaron la creación de asociaciones sindicales, los brotes espontáneos de luchas reivindicativas y las movilizaciones obreras organizadas que fueron ocupando un lugar destacado en la escena social, pero que carecían de incidencia en el ámbito de las relaciones políticas. Frente al pronóstico de Marx y Engels, nunca se alcanzó un clima de conflictividad que amenazase con desbordar las estructuras de poder que garantizaban el dominio de los grandes propietarios y de las elites políticas conservadoras.

Movimiento sindical: trade unions

A lo largo del siglo XVIII se fueron creando clubes, asociaciones, cofradías y otras formas organizativas que nacían en las ciudades donde se iban instalando las fábricas manufactureras. Eran formas asociativas con las que los antiguos artesanos y los jóvenes obreros fabriles reaccionaban contra su situación laboral y social. Conviene recordar que en aquella época las jornadas de trabajo podían ser de 14 a 16 horas durante seis días a la semana. Los ritmos de trabajo no dejaban tiempo para el descanso, se imponían con disciplina militar y su incumplimiento se penalizaba con castigos corporales y con la supresión del día de descanso semanal. Los establecimientos fabriles estaban expuestos a humedades, altas temperaturas, escasa luminosidad, intenso polvo y presencia de residuos que fomentaban el desarrollo de enfermedades. Las mujeres y los niños trabajaban en actividades que no podían desempeñar los hombres a cambio de salarios muy inferiores. Las viviendas eran inmundas y estaban situadas en barrios hacinados que formaban suburbios sin alumbrado, alcantarillado o servicios de basura. No existían ayudas para casos de desempleo, enfermedad o accidente. Los trabajadores carecían de acceso a la enseñanza y a una asistencia sanitaria de carácter público.

Las sucesivas crisis económicas de 1815, 1825, 1836 y 1847 ahondaron la miseria padecida por millones de personas, desatando actos de protesta y

conflictos de distinta intensidad. En ocasiones, las manifestaciones y huelgas dieron paso a explosiones masivas y motines populares, como los de Mánchester, Leeds y Halifax. Una «ley de bronce» destacada por los economistas de la época daba por sentado el funcionamiento de salarios de subsistencia que garantizaban únicamente la recuperación del esfuerzo físico (alimentación basada en harina y patatas) y la mínima intendencia (alojamiento y vestimenta) de los obreros que trabajaban en las fábricas.

El primer movimiento que cobró notoriedad fue el ludismo, que surgió como reacción impulsiva contra los efectos de la industrialización y se materializó en la destrucción de la maquinaria instalada en las fábricas. Alcanzó auge hacia 1812, sobre todo en la industria textil de los condados de Nottingham, York, Lancashire y Derbyshire, provocando incendios de fábricas y otros desórdenes. Al amparo de las Combination Acts que se aprobaron en 1799-1800 contra el asociacionismo y las protestas obreras, el gobierno aniquiló aquel movimiento tal y como haría después con otros movimientos reivindicativos: ajusticiamiento de líderes, detenciones y despidos masivos.

A pesar de la represión, el rápido aumento del número de obreros y el miserabilismo de su situación promovieron nuevas acciones de protesta y otras formas organizativas con las que defenderse. Más aún cuando en 1824 el parlamento derogó las Combination Acts, aunque mantuvo la prohibición de crear asociaciones obreras. En un número creciente de industrias y de territorios surgieron sindicatos por oficios (trade unions) y sociedades de ayuda mutua para hacer frente a despidos, enfermedades y otras situaciones perentorias. En 1829 se organizó en la industria del algodón el primer sindicato ramal a escala nacional, que fue pionero en el mundo. En 1833, inspirado en las ideas cooperativistas de Robert Owen, se creó la Grand National Consolidated Trade Union, unión de sindicatos de distintos oficios (textiles, minería, metalurgia) cuyo fin era defender las reivindicaciones laborales y fomentar el cooperativismo entre los trabajadores, y que de inmediato fue declarada ilegal por el gobierno. Las prohibiciones persistieron durante casi cuatro décadas, pero la semilla del movimiento sindical había arraigado y en los años sucesivos continuaron formándose asociaciones obreras; unas, de carácter ramal, y otras, de alcance territorial; unas, integradas por artesanos y otras categorías de trabajos precapitalistas, y otras, por obreros empleados en las nuevas actividades surgidas de la división del trabajo en las fábricas mecanizadas.

De aquel tiempo difícil datan cinco características que después acompañaron al

sindicalismo británico. Primera, su carácter masivo, que daba lugar a amplios movimientos de resistencia a los que se incorporaba la mayoría de los trabajadores de cada fábrica y de cada rama. Segunda, el celo pragmático, tratándose de movimientos por reclamaciones salariales y laborales concretas. Tercera, el predominio de las organizaciones de carácter ramal, que con el paso de los años estaban integradas principalmente por los trabajadores cualificados de cada actividad productiva, sobre todo en las grandes industrias (textiles, metalurgia, minería) y servicios (ferrocarriles). Cuarta, el contraste entre esa fuerza en el ámbito ramal y la reducida capacidad de acción a escala nacional, siendo pocas las ocasiones en las que confluían todas las trade unions en un mismo objetivo. Quinta, la ausencia de posicionamientos políticos por parte de la mayoría de los líderes, lo que con frecuencia colocó a los sindicatos al margen de las demandas y los conflictos políticos.

Sólo algunos líderes sindicales y ciertas asociaciones participaron en las negociaciones y las acciones que condujeron a que el parlamento adoptase medidas legislativas que concernían al conjunto de los trabajadores. La defensa de las reformas quedó a expensas de las pugnas entre conservadores y liberales, sólo a veces condicionadas por la presión de ciertos movimientos sociales forjados en las principales ciudades. Así fue ocurriendo, sucesivamente, con la derogación de las Combination Acts en 1824, con la nueva ley de pobres de 1834 (mejor para los más desfavorecidos, peor para los que contaban con un salario) y con la Factory Act (1833) que limitaba el trabajo de niños y jóvenes, primero sólo en la industria textil[13] y después extendida a otras ramas de la industria. Fue la primera normativa de carácter laboral que, no obstante, seguía legalizando la contratación laboral de menores de edad. Posteriormente, con el apoyo del movimiento cartista, se aprobaron leyes que rebajaron más las horas de trabajo de mujeres, niños y jóvenes[14] y regularon el trabajo en las minas, así como otras medidas que limaban las aristas más lacerantes de la explotación obrera.

El fuerte crecimiento económico registrado entre 1850 y 1870 hizo más factibles las mejoras laborales y el aumento de los salarios, principalmente para los obreros cualificados. Debido al rápido incremento del número de ocupados, el aumento apenas era perceptible en términos de salario unitario por trabajador, pero sí lo era cuando el cálculo se hacía según el salario unitario por hora trabajada, sobre todo para los obreros especializados y con cierta antigüedad que constituían la columna vertebral de los sindicatos. Aun así, al final de ese periodo la jornada media en las fábricas seguía siendo de 12 horas diarias, la

industria algodonera mantenía un alto porcentaje de mano de obra infantil y abundaban las categorías de trabajadores con escasa cualificación, cuyas condiciones salariales y laborales eran ostensiblemente peores.

La celebración del Trade Union Congress en 1868 marcó un hito ya que, todavía sin tener reconocida la libertad de asociación y soportando bastantes presiones, acudieron representantes de sindicatos que agrupaban a 1,2 millones de trabajadores, el doble de los que había en 1850. Una realidad que el gobierno y el parlamento se vieron obligados a reconocer con la legalización de los sindicatos, en 1871, y el reconocimiento del derecho a realizar huelgas, a formar piquetes con los que difundirlas y a la firma de contratos colectivos negociados por los sindicatos con los empresarios, en 1875. A partir de entonces, los trabajadores pudieron ejercer las libertades cívicas que desde tiempo atrás habían venido disfrutando los propietarios, los profesionales y otras capas sociales. Un paso fundamental que, junto con las reformas electorales de 1884 y 1918, comportó la institucionalización de la democracia política.

Los efectos que se derivaron de esas nuevas condiciones no tardaron en ponerse de manifiesto. El número de afiliados a las trade unions aumentó con celeridad a 4,1 millones en 1906 y a 8,3 millones en 1920. En un contexto de fortaleza interna del capitalismo y de expansión imperialista por el mundo, las luchas obreras y su capacidad organizativa lograron crecientes mejoras materiales, sobre todo en los periodos con fuertes movimientos huelguísticos y duros enfrentamientos con los empresarios, como fueron los años 1888-1893 y 1910-1914.

A lo largo de las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, se generalizó la jornada laboral en torno a las diez horas, aumentaron los salarios reales y los trabajadores tuvieron acceso a una mayor cantidad y diversidad de bienes y servicios. Las tasas de mortalidad se redujeron, mejoraron las condiciones de salubridad en las fábricas y los barrios, y se elevó la esperanza de vida. La escolarización de los niños menores de diez años se hizo obligatoria en 1880 y gratuita en 1891, ampliándose hasta los doce años al final de la década. Los ayuntamientos adquirieron competencias y presupuestos para construir infraestructuras urbanas como el asfaltado de calles, los sistemas de drenaje y alcantarillado, y el suministro de gas y de agua. A finales de siglo, se promulgó la primera ley sobre seguro de accidente, seguida en la década posterior de otras relativas al seguro de desempleo, seguro de pensiones y seguro médico. Todas ellas modestas en cuando a la protección monetaria que proporcionaban y al

modo de financiarse; pero su propia existencia rompía el tabú ideológico de que el Estado no debía ocuparse de tales asuntos, gestándose la idea seminal de que los derechos sociales también debían ser garantizados por el sistema político democrático.

Movimiento político: cartismo

La frustración creada por el reducido alcance de la reforma electoral de 1832 promovió la formación de un movimiento reivindicativo cuyo nombre, cartismo, respondía al método utilizado por sus líderes para aunar el descontento social: la recogida de firmas a favor de una «Carta del Pueblo» presentada al parlamento. El movimiento se fraguó en 1837 haciendo acopio de las demandas democráticas que habían ido expresándose desde décadas antes y que habían sido ignoradas por la reforma electoral. La carta recogía seis peticiones que reclamaban el sufragio universal (masculino)[15], el voto secreto, la reforma de los distritos electorales para que fueran proporcionales a la población que vivía en cada territorio, la celebración de sesiones anuales del parlamento, la supresión de la obligación de ser propietario para ser miembro del parlamento y el pago de dietas a los parlamentarios con el fin de que pudieran ser representantes las personas no adineradas.

La gran adhesión que suscitó la carta culminó con la celebración de manifestaciones en las principales ciudades, registrando cifras masivas de asistencia hasta entonces desconocidas. Una convención nacional que coordinaba el movimiento a escala nacional fue la encargada de entregar la carta en la Cámara de los Comunes en 1838. Sin embargo, el debate parlamentario se saldó con una estrepitosa derrota para la carta, que sólo contó con 46 votos favorables frente a 235 en contra. El hecho de que sólo uno de cada seis diputados apoyase las peticiones ponía de manifiesto que la inmensa mayoría del parlamento quería que el juego democrático siguiera restringido a un núcleo de sectores aristocráticos y burgueses con la inclusión de algunos representantes ocupados en actividades profesionales. La convención cartista no fue capaz de articular una respuesta nacional contra la negativa parlamentaria, lo cual facilitó la represión del gobierno contra las protestas locales que se desataron. La convención fue disuelta y los activistas del movimiento se vieron forzados a

actuar en la clandestinidad.

Las protestas casi habían desaparecido en 1841 cuando grupos de activistas que habían sobrevivido comenzaron a reorganizar el movimiento y lo dotaron de una dirección central. Para ampliar su radio de acción incorporaron reivindicaciones laborales (mejora de los salarios y reducción de la jornada de trabajo) y sociales (protección ante enfermedad y accidente, asistencia sanitaria pública), logrando establecer lazos con las organizaciones sindicales y con otros grupos reformistas. Fruto de ello fue la creación de la National Chart Association que, a modo de partido político, combinaba las actividades clandestinas con otras realizadas en los espacios legales. Su principal propósito consistió en organizar una segunda petición nacional. Primero recogió dos millones de firmas pidiendo la libertad de los presos cartistas y después más de tres millones a favor de las mismas peticiones de la carta que se había enviado en 1838. Sin embargo, los derroteros del proceso fueron similares a los de la primera experiencia: el parlamento volvió a rechazar la solicitud de manera contundente, las protestas fueron reprimidas por el gobierno y el movimiento cartista casi desapareció.

Hubo un tercer intento de movilización a partir de 1847, en un contexto presidido por el fuerte deterioro social que provocaba la crisis económica. La nueva recogida de dos millones de firmas fue impulsada principalmente por núcleos de intelectuales y obreros de orientación socialista. El movimiento tuvo un carácter más radical, pero no consiguió obtener un fuerte apoyo social, salvo la gran manifestación celebrada en Londres en enero de 1848. El parlamento rechazó otra vez las peticiones de la carta y la debilidad del movimiento le impidió seguir impulsando la demanda de aquellas reivindicaciones. La fragilidad se hizo más patente a medida que cundió la división, latente desde años atrás, entre una fracción moderada que proponía defender las peticiones en los espacios legales para que las acciones fueran más numerosas y una fracción radical de orientación revolucionaria que daba prioridad a demandas de carácter socialista, limitándose a llevar a cabo actuaciones minoritarias al margen de los espacios legales.

La separación de ambas fracciones rompió la unidad del cartismo y sumió al movimiento en una agonía que condujo a su desaparición. Esto ocurría en 1848, cuando en muchos países europeos se desencadenaban fuertes movimientos, algunos insurreccionales, con diferentes características; reclamaban soberanía nacional para sus territorios, otros exigían derechos democráticos contra los regímenes autocráticos y otros perseguían reformas sociales.

El universo marxista del revés: ilusiones, decepciones e irritaciones

En primera instancia, la dinámica económica y social de Gran Bretaña confirmaba la premisa de partida que habían pronosticado Marx y Engels. El desarrollo industrial impulsado por las relaciones de producción capitalistas promovía un fuerte crecimiento de las capacidades productivas, con un rápido aumento de los obreros industriales y la extensión de los contratos salariales a muchos otros grupos sociales. El dominio de los propietarios del capital en la economía y en los ámbitos de la superestructura se veía perturbado durante las sucesivas crisis económicas por la movilización y la organización de los trabajadores para hacer frente a sus condiciones laborales y sociales.

Sin embargo, a partir de esa premisa, los derroteros que tomó el movimiento obrero y más tarde la formación del Partido Laborista fueron diametralmente distintos a los que habían pronosticado los autores de la metáfora comunista. La trayectoria del sindicalismo y el laborismo se ajustaba bastante a la descripción que hizo en 1883 un periodista conservador del Times[16]: «Tienen poco o nada que ver con las fantasías salvajes, los esquemas subversivos y la frívola retórica que suelen caracterizar a sus compañeros franceses y alemanes. En la actualidad, no hay signo alguno de un antagonismo profundamente arraigado contra la clase capitalista, ni una creencia en el milenio (milenarismo) que surgirá del derrumbamiento general de las instituciones del país». El propio Phillips (1992), que recoge esa cita, señala que «la clase obrera británica se formó y maduró en un medio que inhibía la lucha de clases»[17].

El primer pronóstico optimista lo había avanzado el joven Engels en 1844 cuando analizó las condiciones que padecían los obreros. Recordamos su conclusión: «En ninguna parte es más fácil hacer profecías que en Inglaterra, porque en este país […] la revolución debe obligatoriamente venir […;] pronto bastará un ligero choque para desencadenar la avalancha»[18]. El optimismo seguía patente en el Manifiesto Comunista confiando en que el crecimiento de la clase obrera y la proliferación de sindicatos ilegales contribuyeran a formar la conciencia política que impulsase la lucha por eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, 1848 transcurrió sin que el panorama político inglés conociera ningún tipo de perturbación revolucionaria, cuando el

movimiento cartista exhalaba su último aliento.

Con la salvedad de aquel estudio inicial, ni Marx ni Engels elaboraron estudios específicos para explicar la evolución del movimiento obrero británico. Sus opiniones hay que encontrarlas de forma fragmentaria en cartas, prólogos a las reediciones de sus obras y documentos de la Asociación Internacional del Trabajo, cuya sede central se mantuvo en Londres durante un tiempo. Esos materiales revelan que la posición de ambos amigos sobre el movimiento obrero británico fue cambiante a lo largo de los años. Alternaron reafirmaciones de su optimismo inicial con visiones críticas que tomaban un cariz marcadamente pesimista y de decepción, cuando no de irritación, frente a los hechos que se sucedían.

Brotes de un renacido optimismo se encuentran en algunos documentos relacionados con la AIT, en cuya fundación habían participaron líderes tradeunionistas que formaban parte de la dirección del London Trade Council, el máximo órgano sindical. En marzo de 1865 Marx escribe con entusiasmo a Engels: «La Reform League es obra nuestra […]. En el comité dirigente de doce personas, compuesto por seis obreros y otros seis representantes de las capas medias, los seis obreros son todos miembros de nuestro consejo»[19]. En aquel momento, la League impulsaba la lucha por ampliar el derecho de voto, y el consejo mencionado era el órgano dirigente de la AIT. Marx retomaba así la visión del Manifiesto acerca de la importancia política de las trade unions: «Si los sindicatos son indispensables para los combates diarios entre el capital y el trabajo, aún lo son mucho más como aparatos organizados […] contra el modo de producción actual […;] como centros de organización de la clase obrera que impulsen su emancipación completa»[20].

La cota de optimismo alcanzó su máxima expresión en marzo de 1870, con motivo de la circular interna que Marx dirigió al Consejo General de la AIT proponiendo que la dirección de la sección británica fuera ejercida directamente por el Consejo: «sólo Inglaterra podrá servir de palanca para una revolución económica seria […;] el único en el que la gran mayoría de la población son trabajadores asalariados […], el único en el que la lucha de clases y la organización de la clase obrera en las trade unions han alcanzado madurez y universalidad […:] en Inglaterra han madurado más que en otros países las condiciones materiales para la supresión del sistema»[21]. La circular concluía considerando que, así como Inglaterra era la metrópoli del capital a escala mundial, el movimiento revolucionario inglés era «vital para la revolución

mundial».

La vertiente pesimista la inició Marx hacia 1850, ya que a su juicio el reflujo reivindicativo provocado por la fase de expansión económica que se vivía entonces, unido a la falta de fervor revolucionario de los líderes cartistas y sindicales, explicaban la ausencia de un gran movimiento político que se propusiese conquistar el poder. En 1858 le dice a Engels que «el proletariado inglés se aburguesa cada vez más, de manera que la más burguesa de todas las naciones parece poseer una aristocracia y un proletariado burgués»[22]. Engels le escribe a Marx en 1863: «Todas las energías revolucionarias de los proletarios ingleses están casi completamente evaporadas y el proletariado inglés se declara de acuerdo con el dominio de la burguesía»[23]. En 1868, cuando supo que en una ciudad como Mánchester parte de los obreros con derecho a voto habían contribuido a la victoria electoral de los conservadores, Engels le dice a Marx: «Una vez más el proletariado ha hecho el ridículo […;] en todas partes el proletariado es gentuza de los partidos oficiales»[24].

Tras el mencionado rebrote de euforia que siguió a la creación de la AIT, la versión crítica se intensificó en 1872 cuando se debilitó la influencia del Consejo General de la asociación y esta se adentró en una crisis terminal. Los líderes tradeunionistas habían mostrado un creciente desapego hacia las actividades de la AIT y centraban su interés en las reivindicaciones laborales y las luchas por reformas, dejando de lado los planteamientos revolucionarios defendidos tanto por Marx como por Bakunin. Esa posición irritaba en extremo a Marx y a Engels, que llegaron a tacharles de líderes al servicio de la política del Partido Liberal. La irritación se hizo más aguda cuando esos líderes no apoyaron el levantamiento de la Comuna parisina en marzo de 1871[25]; más aún cuando exigieron que se borraran sus nombres como firmantes de un documento de la AIT (redactado por Marx) y renunciaron a participar en el Consejo General. En el congreso de la AIT celebrado en 1872, Marx llegó a decir que los dirigentes sindicales británicos estaban a sueldo de Disraeli y Gladstone; invectivas que en los años siguientes trasladaron al movimiento sindical y al conjunto de los obreros británicos.

En 1878, Marx escribe a Wilhelm Liebknecht: «La clase obrera inglesa […] se convirtió en la cola del gran partido liberal, es decir, en su siervo»[26]. Al año siguiente, un defraudado Engels escribe a Eduard Bernstein: «El movimiento obrero inglés gira desde hace años en un estrecho círculo sin salida con huelgas por salarios y acortamiento de jornada de trabajo […] como fin último. Las trade

unions excluyen hasta ahora por principio y estatutariamente toda acción política y con ello la participación en toda actividad de la clase obrera como clase […], en este momento no existe un verdadero movimiento obrero en sentido continental»[27]. En 1882, Engels le escribe a Kautsky: «Aquí no hay un partido obrero, no hay más que radicales conservadores y liberales, y los obreros se aprovechan, junto con ellos, con la mayor tranquilidad, del monopolio colonial de Inglaterra y de su monopolio en el mercado mundial».

La idea de los «obreros sobornados» por las ventajas que proporcionaba la posición imperialista británica prevalecerá como explicación principal durante años. En el prefacio publicado en 1892 a la segunda edición alemana de La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels sostiene que, desde los años cincuenta, los obreros fabriles, sobre todo los más cualificados que están afiliados a las principales ramas de los sindicatos, son sectores «protegidos»[28]. Tampoco se libraron de sus críticas organizaciones políticas como la Social Democratic Federation (SDF)[29], la Fabian Society, la Socialist League y el primer Independent Labour Party, que se abordan más adelante.

Finalmente, Engels encontró un rayo de esperanza en los sindicatos surgidos al margen de las grandes trade unions industriales. Ese new unionism estaba formado por trabajadores con escasa cualificación que alternaban periódicamente varios empleos, como eran los obreros portuarios, los distribuidores de gas, los dependientes de comercio y los oficinistas. El rebrote optimista se concentró en 1889 en Will Thome, líder analfabeto que fundó la Gas Workers and General Labourers Union, en la que se afiliaban trabajadores que en invierno se empleaban en el gas y en verano en los puertos. El estallido de una gran huelga portuaria atrajo a muchos obreros no cualificados de otras actividades, haciendo que Engels ensalzara el potencial revolucionario de esos nuevos sindicatos: «Tras vivir más de cuarenta años entregado a ser la cola y la manada de electores del Partido Liberal […;] en 1890 la clase obrera inglesa ha pasado a formar parte del gran ejército internacional. Un acontecimiento que hará época […]. Los nietos de los viejos cartistas entran en la línea de batalla»[30]. Pero su optimismo flaqueó al poco tiempo cuando los dirigentes portuarios de la huelga optaron por limitar la afiliación a su propio sindicato negándose a unificarlo con los organismos creados por los trabajadores del gas. Con amargura, en agosto de 1891 señalaba: «Los portuarios van por el camino de la ruina, cometiendo error tras error»[31].

El desarrollo de la economía, el dominio imperialista y las características de los

líderes obreros eran factores, sin duda, a tener en cuenta. Pero, como se muestra más adelante, operaban también otros factores que daban lugar a una dinámica política bastante más compleja que la derivada de las explicaciones dadas por Marx y Engels para explicar por qué la estructura social y la escena política eran ajenas a las que ellos habían pronosticado. Lo cual también se ponía de manifiesto en el proceso que condujo a la creación de un partido obrero, el Partido Laborista, y las características que asumieron su proyecto socialista y su discurso estratégico.

FORMACIÓN DEL PARTIDO LABORISTA

Los primeros ensayos para poner en marcha un proyecto socialista surgieron en los años ochenta. Las referencias remotas que inspiraban esas iniciativas eran los afanes de reforma social incorporados por el movimiento cartista y las ideas de Robert Owen a favor de la cooperación solidaria entre los trabajadores; no tanto el fomento del cooperativismo como alternativa al capitalismo que, con el paso de los años, se consideró una propuesta desfasada ante el desarrollo de las grandes empresas industriales. El pensamiento de Marx y Engels no fue ajeno a esas iniciativas, si bien, salvo Henry Hyndman, luego mencionado, ninguno de sus promotores tomó como referencia principal las ideas marxistas. Las tres propuestas más destacadas eran típicamente británicas, como también lo fue el partido obrero al que dieron origen a comienzos del siglo XX, fruto de la convergencia de esas tres corrientes: la proyección parlamentaria de las trade unions, la Federación Democrático-Social y la Sociedad Fabiana.

Después de su legalización en 1871, los sindicatos formaron la National Reform League para emprender iniciativas con las que ganar apoyos políticos a favor de leyes laborales y otras normas que favorecieran a los trabajadores. Con vistas a las elecciones de 1875, negociaron con los dirigentes liberales más proclives a las reformas la presentación de varios líderes obreros en algunas candidaturas, logrando que dos sindicalistas fueran elegidos como diputados. La iniciativa se repitió en las siguientes elecciones hasta que en el congreso de las trade unions celebrado en 1892, el líder minero Keir Hardie propuso crear un Independent Labour Party (ILP), con el fin de preparar y negociar en mayor escala la presentación de las candidaturas obreras.

En la década de los ochenta, un personaje singular, Henry Hyndman, fundó la Democratic Federation que luego pasó a denominarse Social Democratic Federation, a la que incorporó un pequeño grupo de intelectuales marxistas entre los que se encontraba Eleanor, una de las hijas de Marx. Engels y otros seguidores se mantuvieron al margen debido a la desconfianza que les provocaba el pasado reaccionario y proimperialista de Hyndman[32] cuando ejercía como periodista y formaba parte del Partido Liberal, sin que llegara a conseguir un escaño parlamentario. Hyndman, que conoció tarde el Manifiesto Comunista, El capital y otras obras de Marx y Engels, se convirtió después en su difusor. Cuando fundó la SDF, la definió como asociación política de carácter socialista cuyos objetivos eran la socialización de los medios de producción, la eliminación de la dominación capitalista, la igualdad económica y social, y la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. A raíz de la constitución del ILP, una parte de los miembros de la SDF se integró en aquella organización aunque sin abandonar su participación en la Federación.

Fue también en los años ochenta cuando se fundó la Fabian Society. Estaba compuesta por intelectuales (Sidney y Beatrice Webb, George Bernard Shaw, Annie Besant) con un modo de vida acomodado y una conciencia política clarividente para denunciar las consecuencias que acarreaba el desarrollo capitalista, proponiendo el socialismo como alternativa. El nombre de la sociedad era ilustrativo de la idea central en la que se basaba su discurso. Hacía referencia al general romano Quinto Fabio Máximo, quien venció al cartaginés Aníbal Barca sin presentar ningún enfrentamiento directo (del que hubiera salido derrotado), hostigándole por los flancos, esperando las mejores oportunidades y jugando con el factor tiempo. La crítica fabiana al capitalismo era frontal, pero la estrategia político-cultural de acción era gradual, pragmática y multifacética.

En 1889, cinco años después de su creación, la sociedad publicó los Ensayos Fabianos donde exponía su programa. Apostaba por un socialismo ajeno a cualquier movimiento revolucionario, basado en la evolución de las instituciones en un sentido socialista, la superación del dominio de la propiedad privada, la eliminación de los grupos sociales ociosos, el sufragio universal y la transferencia de rentas hacia el Estado para que las redistribuyese de forma adecuada. A su juicio, democracia y socialismo formaban un vínculo imprescindible, debiendo coexistir formas de propiedad pública y privada, apostando por garantizar la gratuidad de la sanidad y la educación para todos los ciudadanos y reclamando una regulación detallada de las condiciones de trabajo con el fin de acabar con las lacras laborales y sociales que provocaba el

capitalismo. En lugar de crear una nueva organización política, la Sociedad Fabiana proponía que sus miembros, sus ideas y sus iniciativas fueran influyendo en los partidos políticos, los sindicatos y los medios intelectuales para, finalmente, lograr una mayoría social que hiciera posible el tránsito al socialismo. Los dos destinatarios principales de esa influencia socialista eran los sindicatos obreros y los círculos políticos liberales con inclinaciones sociales.

Tras las andaduras iniciales de cada una de esas tres iniciativas, la dirección central de las trade unions animó en 1900 la creación del Labour Representation Committee en el que participaron sindicalistas del ILP, miembros de la federación de Hyndman y asociados fabianos. El objetivo seguía siendo seleccionar y organizar las candidaturas obreras con posibilidades de resultar elegidas para la Cámara de los Comunes. Años después, en 1906, esas mismas organizaciones acordaron fundar el Labour Party (LP) como partido político que concurriría a las elecciones con la pretensión de representar los intereses de los trabajadores; si bien las organizaciones impulsoras siguieron manteniendo su existencia.

El Partido Laborista nació con un proyecto cuyo enunciado apuntaba a la misma aspiración que los partidos socialistas nacidos bajo la impronta marxista: construir un nuevo orden social basado en la transformación radical del capitalismo y la consecución del poder político de los trabajadores, con el fin de eliminar la propiedad privada, socializar los principales medios de producción y acabar con la explotación económica. Sin embargo, el proyecto laborista presentaba dos rasgos significativos que le distanciaban de los partidos marxistas. El primero era la ausencia de categorías filosóficas absolutas conducentes a una formulación ideal de la sociedad socialista, resultando por ello menos contundente y más amigable con la realidad a transformar. El segundo rasgo era la incorporación del concepto de «democracia económica», o democracia industrial, para significar que la nacionalización de los principales sectores de la economía formaba parte de los propósitos de igualdad social y de participación efectiva de los trabajadores en el control de los medios de producción, destacando así una mayor cercanía de la sociedad con la propiedad colectiva que la que se desprendía de la mera estatalización de esos bienes económicos. No se trataba de contraponer ambos tipos de control y tampoco se precisaba cómo se llevaría a cabo, pero en todo caso se trataba de un enfoque distinto al propuesto desde el proyecto inspirado en la metáfora comunista. En palabras de su líder Ramsay MacDonald, el socialismo consistía en una comunidad organizada que poseía la potencia económica y material de la

sociedad, con lo que sus miembros quedaban libres de la opresión y gozaban de libertad individual para adoptar sus propias decisiones.

Las diferencias entre ambas propuestas eran más elocuentes en la formulación del discurso estratégico para alcanzar aquel objetivo, sobre todo en cuatro aspectos relacionados. Primero, el discurso laborista renunciaba de manera explícita a llevar a cabo una revolución que rompiera con el orden político vigente. Segundo, la estrategia no estaba drásticamente separada del proyecto, de modo que si bien la construcción del socialismo requería que los trabajadores ostentasen el poder del Estado, admitía que en el curso del proceso podían ir ganando cuotas de poder mediante el acceso a las instituciones estatales a través de las elecciones. Tercero, la estrategia gradual no tenía un carácter exclusivamente político, sino que también cabía ir ganando cuotas de democracia económica y de influencia cultural e ideológica. Cuarto, el Partido Laborista debía llevar a cabo una actuación pragmática para lograr el acceso a los órganos del Estado (parlamento, gobierno) con el fin de implantar reformas que permitieran ir mejorando las condiciones laborales, la educación, la salud, las viviendas y otras demandas de los trabajadores, a la vez que establecer normas legales que permitiesen regular e introducir cambios paulatinos en el funcionamiento del capitalismo.

La propuesta con la que inició su andadura el Partido Laborista cruzaba la influencia recíproca de las corrientes que habían convergido en su fundación. La influencia del radicalismo de la SDF, así como de los fabianos, había «politizado» a los sindicatos con un proyecto y un discurso que iba más allá de la presentación de candidatos obreros al parlamento, mientras los sindicatos habían dotado a las ideas de las otras corrientes del marcado sentido de clase (obrera) que habían construido las grandes trade unions. La conjunción de esas influencias permitía defender un discurso basado en el ejercicio de la democracia política que no negaba la necesidad de la movilización social, de la misma manera que su talante reformista tampoco negaba la firmeza radical con la que se desarrollaran esos movimientos reivindicativos[33].

No obstante, los mimbres políticos del Partido Laborista siguieron siendo endebles hasta la Primera Guerra Mundial, y así lo reflejaron también los magros resultados electorales, muy inferiores a la influencia y capacidad de movilización laboral que tenían los sindicatos. De hecho, el partido centró sus esfuerzos electorales en ampliar de forma paulatina el número de circunscripciones en las que presentaban candidatos al parlamento. En 1906,

obtuvo 254.000 votos –que le otorgaban 29 diputados–, elevando los votos hasta el medio millón en las dos elecciones celebradas en 1910, lo que equivalía al 6,5% del total y logrando, sucesivamente, 40 y 74 diputados. Una parte considerablemente mayor de los votos de los trabajadores no conservadores se dirigía a un Partido Liberal que aún era la fuerza que impulsaba la mayor parte de las reformas laborales y sociales.

La situación cambió durante la Gran Guerra, ante la cual los laboristas, como la mayoría de los partidos socialistas europeos, hicieron profesión de fe nacionalista y apoyaron la participación militar. Terminada la contienda, desde 1918, el Partido Laborista se vio enfrentado a una realidad política distinta: el malestar social iba en aumento, a la vez que se aprobaba el sufragio masculino y el Partido Liberal daba muestras de desgaste como alternativa reformista. Los laboristas podían aspirar a colocarse en la primera línea de la escena política. Así lo ratificaron las elecciones celebradas aquel mismo año, en las que cosecharon 2,2 millones de votos, más del 20% del total, triplicando el porcentaje conseguido en 1910. Sin embargo, como se expone más adelante, la desproporción introducida por el sistema electoral entre votos y escaños les perjudicó notablemente, ya que redujo a 57 el número de diputados laboristas presentes en la cámara baja.

Aquel estreno político como partido con creciente influencia electoral suscitó dos cuestiones novedosas. Desde el punto de vista interno, atrajo a un gran número de nuevos militantes, hasta el punto de convertirse en un partido de masas con tres millones de militantes en 1918. Los sindicatos aportaban una parte considerable de esa militancia, pero también fue importante el crecimiento de la rama organizativa que agrupaba a la militancia a través de los distritos electorales. Desde el punto de vista parlamentario, con aquellos 2,2 millones de votos, los diputados laboristas dejaron de ejercer como correa de transmisión de las demandas sindicales para ostentar la representación de las demandas de grupos sociales más amplios.

Ambas cuestiones orientaron ciertos cambios en el funcionamiento del partido, sin perder su vínculo fundamental con las trade unions. En su funcionamiento interior, los órganos directivos adquirieron una función jerárquica cada vez más importante a la hora de adoptar las decisiones políticas y de disciplinar un comportamiento uniforme de los militantes. Hacia el exterior, la aspiración a competir por la mayoría parlamentaria y a convertirse en una fuerza política con vocación de gobierno acentuó el pragmatismo favorable a la defensa de reformas

que pudieran proporcionarles una mayor influencia electoral.

DOMINIO POLÍTICO CONSERVADOR Y DEBILIDAD LABORISTA

Tras la reforma electoral de 1832, la división del parlamento entre las fracciones tory y whig tomó la forma de un bipartidismo compuesto por los partidos conservador y liberal, donde el primero mantuvo el control del gobierno durante la mayor parte del tiempo. El segundo no escapaba a la raigambre aristocrática que caracterizaba a la mayoría de la Cámara de los Comunes y a la totalidad de la Cámara de los Lores, pero mantuvo una fracción reformista que era permeable a las demandas democráticas y sociales que reclamaban los trabajadores y otros grupos urbanos.

El periodo más destacado del Partido Liberal tuvo lugar durante la primera mitad de los años ochenta, bajo el liderazgo de William Gladstone. Su gobierno fue el impulsor de la tercera reforma electoral que amplió considerablemente el derecho voto y modificó las circunscripciones electorales, promoviendo además reformas sociales importantes como la que instituyó la educación básica gratuita. Su contundente victoria en 1880, con el 55% de los votos, la renovó en 1885, ya con un censo bastante mayor gracias a la reforma electoral, de modo que el número de votantes aumentó de 3,3 a 5,7 millones. Sin embargo, durante ese segundo mandato se produjo un hecho que sería clave para el futuro del Partido Liberal y de toda la escena política británica. Los liberales volvieron a ganar con el 54% de los votos y 319 diputados, de los cuales 89 eran liberales irlandeses que exigían la autonomía de su territorio. Cuando Gladstone se dispuso a conceder esa autonomía, otra parte de sus diputados (unionistas) abandonó el partido, de modo que el gobierno liberal quedó en minoría y tuvo que convocar nuevas elecciones.

Aquel hecho provocó dos consecuencias decisivas. La primera fue que en adelante los liberales autonomistas se presentaron con una alternativa electoral propia, el Partido Nacionalista Irlandés, aunque esta formación mantuvo una alianza con el Partido Liberal. La segunda fue que el grupo secesionista formó otro partido, el Partido Liberal Unionista, que se convirtió en aliado permanente

de los conservadores. Esa doble ruptura en el Partido Liberal determinó que, a partir de aquel momento, el Partido Conservador ejerciera un dominio abrumador sobre el parlamento que se prolongó durante casi seis décadas, controlando el gobierno entre 1886-1892[34], 1895-1906 y 1918-1923, con el sufragio masculino, y en 1924-1929 y 1931-1944, ya con sufragio universal.

De hecho, el ascenso electoral laborista desde su creación y más aún desde 1918 se produjo en detrimento del Partido Liberal, ya que competía con él por los electores de clase obrera y otras capas urbanas. Inicialmente, el trasvase de votos hacia el Partido Laborista dificultaba la consecución de mayorías liberales y contribuía a afianzar el dominio de los conservadores y sus aliados, los unionistas-liberales. Después de la guerra, el mayor avance de los laboristas desplazó a los liberales como polo de referencia del esquema bipartidista. De ese modo, en más de medio siglo los conservadores sólo fueron desplazados del gobierno en cinco intervalos, cuatro de ellos muy breves, cuando liberales y laboristas lograron mayorías parlamentarias. Los dos últimos interregnos, con gobiernos laboristas, fueron tan efímeros que ni siquiera sumaron tres años de duración. Toda la proyección política del Partido Laborista a lo largo de las cuatro primeras décadas del siglo XX estuvo drásticamente coartada por la hegemonía conservadora en todos los órdenes de la vida británica.

Determinantes de la hegemonía conservadora

Organizando el conjunto de razones que parecen explicar aquel sempiterno dominio del Partido Conservador y sus aliados unionistas, cabe establecer una clasificación basada en cuatro grupos de factores que se enumeran a continuación. Primero, la capacidad de los conservadores para cohesionar en torno a una misma posición política los intereses de clase de los grandes propietarios y aunarlos con los del conjunto de los propietarios. Segundo, la instrumentalización en su provecho del sistema electoral y de ciertos recursos basados en el oportunismo político, sobre todo la escisión liberal provocada por la cuestión irlandesa. Tercero, las modificaciones experimentadas por la estructura social, vinculadas principalmente al desarrollo económico capitalista. Cuarto, los mecanismos inhibitorios utilizados para condicionar el comportamiento político de los grupos sociales subalternos.

En primer lugar, la realidad británica configurada desde la segunda mitad del siglo XIX plasmó el primer precedente de una cruda constatación: eran los propietarios y no los desposeídos quienes adquirían conciencia de clase para detectar la posición política que convenía a sus intereses y que consolidaba su dominio económico y social. Siendo el partido que históricamente representaba los intereses de la alta aristocracia y la jerarquía anglicana, la elite dirigente conservadora supo convertirlo en el partido de la gran burguesía sin dejar de defender los intereses aristocráticos y religiosos. No fue sólo un ejercicio de habilidad política, sino que paralelamente respondió a los cambios que se sucedían en la economía, ya que los grandes propietarios capitalistas (industriales, comerciales y financieros), a la vez que afianzaban su posición política, estuvieron dispuestos a garantizar la permanencia de espacios de poder que protegían los intereses tradicionales de la aristocracia y el alto clero. Una parte de esa elite pudo seguir acrecentando su riqueza de origen agrario-rentista y mantuvo el control de ciertas instituciones relevantes –sobre todo la Cámara de los Lores, que conservó el carácter hereditario de un amplio porcentaje de sus miembros–. Otra parte de la aristocracia extendió sus intereses hacia la industria, el comercio y las finanzas, llevando a cabo un proceso de aburguesamiento que le permitió ocupar puestos destacados en los consejos de administración de las grandes empresas y los bancos.

Simultáneamente, el Partido Conservador fue capaz de extender esa cohesión hacia la mayoría de los propietarios medianos y pequeños, fomentando un sentimiento de clase, es decir, de pertenencia a un grupo social con intereses comunes. Un elemento fundamental fue la defensa de medidas económicas que favorecían al conjunto de los propietarios. Otro fue infundirles cierto miedo a perder sus negocios o a reducir sus beneficios si triunfaban las reformas de los liberales, o si adquirían fuerza política las demandas de los trabajadores. La política imperialista también desempeñó una función importante como factor de cohesión debido a las ventajas que reportaba al colectivo de propietarios, aunque en el reparto de beneficios hubiera grandes diferencias derivadas del tamaño de las empresas y del tipo de actividad económica que realizasen.

En segundo lugar, varios motivos estaban relacionados con la manipulación del sistema electoral y con ciertas maniobras políticas de índole oportunista. Como se ha mencionado en el primer apartado, la ampliación gradual del derecho de voto hasta la aprobación del sufragio masculino estuvo acompañada de sucesivos cambios de estrategias con las que los conservadores se prepararon para hacer frente a la incorporación de nuevos grupos de electores. La tardía concesión del

carácter secreto del voto, en 1872, les permitió utilizar a fondo las facilidades para controlar a los electores rurales y de ciertos distritos urbanos. La división interesada de circunscripciones con diferencias de población abismales, el reparto sesgado del número de diputados por cada circunscripción, la alternancia de distritos uninominales y plurinominales, la designación de candidaturas a veces por mayoría y a veces mediante reparto proporcional, el derecho a presentarse donde se tuvieran posesiones y muchos otros elementos del sistema electoral otorgaron a los conservadores grandes ventajas partidistas[35].

Las muestras de oportunismo político fueron múltiples, destacando aquellas en las que utilizaron las banderas nacionalistas y religiosas para influir en las posiciones ideológicas del electorado rural y de otros grupos sociales. También cabe subrayar la disposición de los líderes conservadores y sus aliados unionistas para ponerse al frente de iniciativas que previamente habían rechazado con contundencia. Casos destacados fueron la reforma electoral de Disraeli en 1867, la introducción del seguro de accidentes (financiado por los propios trabajadores) a cargo del unionista Joseph Chamberlin en 1897 y las reformas aprobadas por Arthur Balfour en 1905[36]. Buscando apoyos electorales, con esas medidas mostraban su cara popular y colocaban a los liberales ante la tesitura de plegarse a ellas (en detrimento de su identidad política) o virar hacia la izquierda, alejándose de una parte de su electorado. De hecho, al finalizar la Primera Guerra Mundial, las tensiones creadas en las filas liberales condujeron a la ruptura de las fracciones encabezadas por Herbert Asquith y Lloyd George.

La «cuestión irlandesa» se convirtió en otro elemento de oportunidad política a favor del dominio conservador. En 1916 se produjo la sublevación nacional que instauró la República de Irlanda, con lo que el Partido Nacionalista Irlandés abandonó el parlamento británico. De ese modo, el Partido Liberal perdió a su aliado mientras que los diputados unionistas del PLN mantuvieron su alianza con el Partido Conservador, aportando los votos provenientes del electorado liberal-anexionista que rechazaba la secesión irlandesa por haber roto la unidad con Gran Bretaña.

Los otros dos grupos de factores conciernen a la capacidad de atracción política de los conservadores sobre el electorado de un tejido social bastante más amplio que el que formaban los grupos de propietarios. Al fin y al cabo, desde finales del siglo XIX, estos grupos suponían alrededor de un tercio de los hombres con derecho a votar, en tanto que desde la reforma de 1884 y más aún tras el reconocimiento del sufragio masculino, la mayor parte de los electores se

componía de trabajadores asalariados, cuyo número seguía creciendo con gran rapidez, concentrándose en ciudades en acelerada expansión. En Inglaterra y Gales, el porcentaje de población urbana aumentó desde el 20% a comienzos del siglo, al 41% a mediados y el 66% a finales, mientras que la media en la Europa continental seguía siendo inferior al 30% al finalizar el siglo.

Sin embargo, ese incremento de los trabajadores asalariados y de otras capas urbanas no propietarias, lejos de crear un tejido uniforme, mostraba una creciente diversidad. Ciertamente, el factor común de trabajar por cuenta ajena a cambio de un salario proporcionaba ciertas señas de identidad socioeconómica al colectivo de los asalariados, pero al mismo tiempo ese colectivo mostraba notables diferencias según cuáles fueran los sectores de actividad, los centros de trabajo, las cualificaciones, las categorías profesionales y las labores específicas. Cabe reparar así en la proliferación de empleados que trabajaban en establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos y en una infinidad de servicios diversos. Aumentaban también los empleados públicos contratados por las administraciones del Estado. Crecía el número de abogados, médicos, maestros, periodistas y otros profesionales que trabajaban como empleados. Todo ello conformaba una vasta red de colectivos laborales que, tanto por su procedencia y formación como por sus condiciones laborales y sus aspiraciones sociales, sólo en parte presentaba elementos favorables al desarrollo de una conciencia común en torno a sus intereses colectivos. Era más fácil y más frecuente que predominasen las tendencias centrífugas, favorables al desarrollo de visiones fragmentarias en las que la identidad se circunscribía a la cercanía de los compañeros de trabajo, la categoría, la profesión, la vecindad, la localidad y otras subdivisiones.

La diversidad anidaba también en el colectivo que formaban los trabajadores industriales y de grandes infraestructuras, los cuales constituían la columna vertebral de las principales trade unions. El rápido desarrollo económico y la expansión imperialista durante la segunda mitad del siglo XIX favorecieron la mejora de los salarios y de las condiciones laborales de los trabajadores, pero su impacto fue bastante dispar según las cualificaciones, las categorías profesionales y las ramas de actividad. El fuerte aumento de la productividad del trabajo[37] y el abaratamiento de los alimentos y materias primas procedentes de las colonias hicieron que la ley de bronce dejase de regir para una proporción creciente de los obreros, de modo que sus salarios les permitían adquirir una mayor cantidad y gama de bienes y servicios. A la vez, las empresas fueron incorporando sucesivas mejoras de higiene y seguridad, los ayuntamientos

aportaron unos primeros suministros públicos y el parlamento legisló medidas laborales que reducían la jornada de trabajo, introducían inspecciones en las fábricas, aportaban una (mínima) protección social, y garantizaban la universalización de la enseñanza primaria y otras mejoras.

Esas ventajas recayeron principalmente en los segmentos obreros que reunían tres condiciones: especialistas con cierta cualificación, que trabajaban en empresas de mayor tamaño y cuyos sindicatos tenían capacidad para negociar con los empresarios. Las ventajas se reducían o desaparecían para los trabajadores sin cualificación, los que estaban ocupados en pequeños talleres y donde los sindicatos eran débiles o no existían. Lo mismo sucedía con el amplio contingente de mano de obra ajena a las relaciones capitalistas de producción, sobre todo entre los trabajadores de artesanía, las pequeñas empresas de servicios y las actividades manuales preindustriales, que abundaban en el medio rural y en las ciudades con menor implantación fabril.

Como consecuencia, el desarrollo capitalista y el proceso de urbanización conformaron una estructura social en la que el universo de los asalariados presentaba una clara diversidad. Acertaron Marx y Engels al pronosticar que la relación salarial se iría generalizando, de manera que la inmensa mayoría del empleo se compondría de trabajadores empleados por empresas a cambio de un salario[38]. Sin embargo, esa relación salarial no operaba como un factor definitivo de consistencia sociológica que favoreciera su identificación como clase social y, menos aún, activaba automatismos que impulsaran una conciencia política común. Más bien era la heterogeneidad la pauta prevaleciente, debido a la notoria relevancia que cobraban los segmentos de trabajadores no fabriles cuyas condiciones laborales eran muy diferentes a las de quienes trabajaban en las fábricas; mientras que en el colectivo de obreros industriales se relajaban las señas comunes que anteriormente creaban el miserabilismo salarial y la situación de empeoramiento laboral y social que habían prevalecido hasta mediados del siglo XIX.

Por último, era en ese tejido diverso en el que operaba el cuarto grupo de factores que explica el dominio político conservador: los mecanismos inhibitorios en manos de los grupos dominantes, entre los que cabe distinguir dos tipos. El primero lo formaban las actuaciones de carácter represivo, aplicadas siempre que se desataban movimientos reivindicativos y acciones de solidaridad de cierta envergadura. Eran respondidas con represalias directas por parte de los empresarios (despidos, castigos, amenazas, descuentos salariales) y

de las autoridades políticas (intervenciones policiales, coacciones, detenciones, penas de cárcel).

El segundo tipo de mecanismos inhibitorios estaba compuesto por una amplia colección de medidas tendentes a reforzar la hegemonía ideológica dominante, diluyendo la identificación de los colectivos asalariados y la confrontación social contra los grupos dominantes, fuera la oligarquía económica, las elites políticas o las jerarquías eclesiásticas. Unas veces operaban los elementos proclives a la división según la confesión religiosa, la profesión, el país o región de procedencia, la edad, el género u otros factores de disgregación. Otras veces lo hacían los elementos que Albert Hirschman destacaba en Retóricas de la intransigencia, esto es, apelando a la perversidad de la acción colectiva (anunciando que los resultados serían contrarios a los objetivos perseguidos), a su futilidad (desalentando la acción por ineficaz para lograr los objetivos pretendidos), o al riesgo (amenazando con que los costes sería mayores que los beneficios conseguidos).

La diversidad de la estructura social y la puesta en acción de los mecanismos inhibitorios explicarían en buena medida por qué, a pesar de la fuerte desigualdad social y las múltiples formas de explotación económica y de opresión política, entre las clases subalternas predominaron los factores centrífugos. Lo cual tuvo su reflejo en los resultados electorales. Así, la mayoría de los trabajadores se sumó al consenso dominante que no cuestionaba el carácter monárquico del régimen político, ni el imperialismo ejercido sobre las colonias, ni la participación en la guerra mundial, ni los privilegios de la jerarquía anglicana. En el terreno laboral y social, nunca hubo una mayoría inclinada hacia la confrontación radical con los poderes dominantes, quedando estos al abrigo de cualquier amenaza de desbordamiento sindical o político por parte de los trabajadores. En términos electorales, las preferencias de los asalariados se decantaron alternativamente por uno u otro polo del binomio conservador-liberal hasta la Primera Guerra Mundial, y después lo hicieron por el binomio conservadores-laboristas.

A la postre, aunque reparar únicamente en ello supondría una flagrante distorsión del conjunto de factores que se han expuesto para argumentar el persistente dominio conservador, el comportamiento electoral de los trabajadores no le quitaba la razón al líder tory, Disraeli, cuando en 1867 apostó por ampliar el derecho de voto a una parte de la población obrera. Los sectores más reaccionarios de su partido se oponían a esa decisión porque pensaban que la

apertura electoral permitiría la entrada de representantes obreros que ocasionarían el «agobio de las clases superiores y de los intereses representados en el parlamento». Disraeli vaticinó que los trabajadores bien alimentados, vestidos y alojados serían prudentes en sus demandas políticas, y que una mayoría de ellos votaría a los conservadores. Ciertamente, la casuística expuesta proporciona una explicación más poliédrica del dominio conservador, pero tras la observación de los hechos no parece que el pronóstico de Disraeli estuviera desorientado.

El laborismo como polo del bipartidismo

Como se ha mencionado, la pausada progresión que tuvo el Partido Laborista desde su creación en 1906 se aceleró tras la conclusión de la guerra, coincidiendo la instauración del sufragio masculino y la decadencia de los liberales. El sufragio aprobado en 1918 para los varones adultos, los jóvenes soldados combatientes y algunos grupos de mujeres incrementó considerablemente el censo electoral, aunque se notó bastante menos en el ejercicio del voto debido a la alta abstención que hubo en las elecciones de aquel año, en torno al 43%. Posteriormente, la cifra de votantes aumentó con rapidez según lo hizo la participación, y mucho más todavía desde que en 1928 se reconoció el derecho de voto a las mujeres adultas[39]. El ocaso liberal estuvo marcado por sucesivas escisiones[40] provocadas por varios factores. De un lado estaban el talante personalista de unos líderes poco dispuestos al consenso interno y el atractivo que suponían las ventajas de la hegemonía conservadora para quienes se pasaban a sus filas. De otro lado estaba el creciente atractivo del Partido Laborista entre los trabajadores a medida que se convirtió en el defensor de las reformas que antes encabezaba el ala izquierda de los liberales.

El ascenso laborista a partir de 1918 se sustentó principalmente en tres virtudes: la mayor capacidad de movilización de los sindicatos para hacer frente a la mala situación económica, la creciente influencia política en las ciudades y la capacidad para presentar candidatos en un mayor número de circunscripciones. Los resultados electorales le otorgaron más de la quinta parte de los votos, pero menos de la décima parte de los diputados. A continuación, en 1923, una alianza de laboristas y liberales obtuvo la mayoría parlamentaria y desplazó del gobierno

a los conservadores, dando lugar a la formación del primer gobierno liderado por un laborista, Ramsay MacDonald. Sin embargo, la debilidad política del gobierno de coalición hizo que, diez meses después, MacDonald dimitiera y convocase nuevas elecciones. En estas, los laboristas lograron un mejor resultado, con cinco millones de votos, pero menos diputados, mientras que los liberales sufrían un batacazo debido a la fuga de una parte de su electorado hacia los conservadores, lo que hizo que estos retornasen al gobierno[41].

La situación se repitió en 1929 casi en los mismos términos. El Partido Laborista obtuvo por primera vez el mayor número de diputados, pasando a ser la principal fuerza política del parlamento y formó gobierno con el apoyo de los liberales. Sin embargo, pronto se puso de relieve su incapacidad para afrontar los efectos derivados de la crisis económica mundial. El laborismo carecía de la iniciativa, la fuerza política y el programa con los que aplicar conjuntamente medidas macroeconómicas anticrisis y reformas estructurales en defensa de los intereses de los trabajadores. Sin esos requisitos, la producción siguió retrocediendo, el desempleo aumentó, las tensiones monetarias se acrecentaron y la miseria se extendió entre los asalariados y otros grupos desfavorecidos. Al cabo de año y medio, Ramsay MacDonald presentó la dimisión y unas nuevas elecciones sentenciaron la victoria conservadora más apabullante de su dilatado dominio político. Junto con sus aliados, el Partido Conservador logró dos tercios de los votos y el 90% de los diputados, 506 frente a los famélicos 52 escaños ocupados por los laboristas y los 33 de los liberales[42]. El dominio conservador se mantuvo en la siguiente contienda electoral, en 1935, que fue la última hasta que concluyó la Segunda Guerra Mundial.

La fragilidad electoral de los laboristas se correspondía con su posición en la vida económica, social y política. Los sindicatos encabezaron importantes luchas obreras y fueron protagonistas de la mayoría de las conquistas laborales y de los derechos sociales que lograron los trabajadores. Sin embargo, su actividad seguía basándose en la organización de los obreros de las grandes industrias, la minería y grandes servicios como los ferrocarriles, pero se topaba con dificultades para incorporar a los trabajadores de pequeñas empresas, sobre todo de servicios. Las dificultades laboristas eran mayores cuando se trataba de relacionar las demandas laborales con otras de carácter político, resultando infructíferas las contadas ocasiones en las que los núcleos más radicales del partido pretendieron dotar a las protestas laborales y sociales de objetivos políticos de mayor alcance estratégico. A lo largo del tiempo no se produjo ninguna coyuntura en la que la conflictividad social y los brotes de inestabilidad

política ofrecieran resquicios para que ganaran posiciones esos propósitos radicales. De hecho, tanto los sindicatos, ocupados en impulsar las demandas laborales, como el Partido Laborista, ocupado en la acción política, nunca asumieron tales propósitos. Sus propuestas, vertidas fundamentalmente en los programas de gobierno que presentaban a las elecciones y en la actividad municipal desarrollada a través de los gobiernos locales, se concentraban en reformas sociales para mejorar los derechos laborales en las empresas, la protección social, la educación, la atención sanitaria y las condiciones de vida en cada localidad. Pugnar por llevar a cabo ese reformismo gradual era el cometido de los parlamentarios, de quienes participaban en los gobiernos municipales y de las organizaciones de distrito dedicadas a impulsar las actividades laboristas.

El debate político de mayor hondura se suscitó a raíz de la derrota electoral de 1931 que supuso la pérdida del gobierno. Afloraron entonces las críticas, algunas inspiradas por núcleos de militantes marxistas, que responsabilizaban de la derrota a la falta de voluntad del gobierno de Ramsay MacDonald para impulsar transformaciones más profundas. A su juicio, deberían haberse introducido cambios importantes en el funcionamiento de la economía, ya que era la manera de ofrecer soluciones eficaces a la crisis que fueran viables y que no perjudicasen unilateralmente a los trabajadores. Proponían un giro hacia fórmulas políticas más beligerantes contra el capitalismo y contra el sistema político. Sin embargo, esas propuestas eran minoritarias y no prosperaron, por lo que el Partido Laborista siguió apartado de cualquier estrategia de confrontación social y política, presuponiendo de ese modo que su proyecto socialista quedaba emplazado a un largo plazo inconcreto. La apuesta política seguía ciñéndose al guion que exigía presentarse como partido alternativo de gobierno con aspiraciones reformistas.

El vacío político fue el destino inequívoco de otras propuestas radicales. Gran Bretaña fue uno de los países europeos donde menos eco tuvo la revolución bolchevique en Rusia y donde menos influencia ostentó el Partido Comunista, creado (en 1921), como los demás partidos comunistas, a instancias de la III Internacional bajo control de los líderes soviéticos. La escisión provocada en las filas laboristas había sido exigua y, cuando el Partido Comunista de Gran Bretaña concurrió de forma testimonial a las elecciones de 1922, lo hizo en un pequeño número de circunscripciones, sumando apenas 30.000 votos que le proporcionaron un único escaño en la Cámara de los Comunes. El escaño lo perdió en las siguientes elecciones y lo recuperó en las posteriores, pero sin ampliar sus votos y sin alcanzar ningún relieve social en el trascurso de los años.

En 1929, obtuvo menos de 50.000 votos y volvió a quedarse sin representación parlamentaria hasta que volvió a recuperar ese simbólico diputado en 1935, sin llegar a elevar el número de sus votantes. Ante semejante nimiedad, aquel partido se abstuvo de intentar cualquier veleidad revolucionaria. Una insignificancia política que contrastaba con la audiencia que tanto el pensamiento marxista como la realidad de la Unión Soviética tuvo entre sectores de la intelectualidad británica.

¿UN CALIFICATIVO PARA LA DEMOCRACIA POLÍTICA?

Las libertades cívicas, el sufragio universal y el funcionamiento de un parlamento representativo de la soberanía popular fueron los pilares que sustentaron la construcción del sistema político británico bajo un régimen monárquico. Obviamente, la consolidación del sistema requirió de otros mimbres importantes como fueron las leyes que desarrollaban los respectivos derechos, las instituciones que garantizaban el reparto de poderes entre los órganos estatales, el funcionamiento de los partidos políticos, y la consolidación de un enjambre de hábitos y comportamientos cívicos acordes con los principios democráticos.

Lecturas antagónicas

Ese proceso político convirtió a Gran Bretaña en el principal referente europeo de lo que significaba un sistema político democrático. Motivo por el cual también se colocó en el punto de mira de los debates que se suscitaron en muchos partidos obreros acerca de las posibilidades y obstáculos que ofrecía ese sistema para llevar a cabo la defensa de los derechos de los trabajadores y para avanzar en la transformación de la sociedad.

En un extremo del debate se situó la posición de quienes consideraron el sistema británico como paradigma de la democracia liberal. Desde su punto de vista, el

contenido fundamental de la democracia se sustanciaba en el ejercicio de la libertad como reconocimiento de los derechos que poseen los individuos en sus relaciones sociales y ante el Estado. Esa democracia garantizaba las libertades de índole colectiva (reunión, prensa, expresión, manifestación, huelga) y de exclusiva incumbencia personal (propiedad, mercado, pensamiento, familia, religión, residencia, circulación, profesión), además del derecho de voto en elecciones libres y secretas, y del funcionamiento de instituciones que respaldaban esos derechos. La exaltación de esa lectura liberal recuperaba la propuesta que hizo John Locke en la segunda mitad del siglo XVII (cuando la mayoría de la población seguía excluida del juego político) identificando la democracia con un contrato implícito en el que se cimentaba el desenvolvimiento de la sociedad, completada con los requisitos planteados por Montesquieu sobre la necesidad de que el parlamento controlase la actividad ejecutiva del gobierno y que fuera efectiva la división entre los poderes del Estado.

En el otro extremo del debate se situó la posición de quienes anatematizaron aquel sistema político, considerando que era el paradigma de la democracia formal o burguesa. Desde este punto de vista, el contenido fundamental de la democracia política respondía a los intereses de las clases dominantes, de manera que las libertades, las elecciones y el parlamento formaban parte de los mecanismos de dominación destinados a mantener el poder político de esos grupos sociales, preservando la propiedad privada y el funcionamiento del mercado. La exaltación de esa lectura destacaba que la democracia política rendía servidumbre al dominio capitalista y a la función clasista ejercida por el Estado. Una democracia real sólo podría existir a partir de la igualdad social y económica, lo que exigía la desaparición de la propiedad privada y el mercado, a la vez que el cambio radical del poder político.

Ciertamente, una y otra posición podía reivindicar a su favor diferentes rasgos de la experiencia británica. De un lado, la consolidación de la democracia política hacía que el sistema parlamentario dependiera de la voluntad de los ciudadanos expresada mediante elecciones libres, garantizada por el ejercicio de las libertades cívicas, y plasmada en la representatividad de la Cámara de los Comunes. El sistema político establecía un escenario que hacía realidad la alternancia de los partidos en el gobierno y el pleno derecho a presentar distintas propuestas políticas a los electores. De otro lado, los hechos históricos revelaban que la vigencia de los tres atributos de la democracia fue debidamente administrada por los grupos dominantes según fueron aumentando las exigencias

sociales a lo largo del siglo XIX. La soberanía del parlamento fue lograda (violentamente) contra el poder absoluto de la monarquía, y por sí misma no plasmaba ningún tipo de democracia ni de soberanía popular. El reconocimiento de las libertades, la extensión del derecho de voto y el sistema electoral fueron modificándose de manera gradual desde los órganos parlamentarios controlados por quienes representaban a las oligarquías dominantes; sin escatimar represalias, a veces sangrientas, contra ciertos movimientos sindicales y sociales.

El curso de los hechos históricos producidos en Inglaterra y luego en Gran Bretaña no parece que arroje dudas con respecto a las afirmaciones siguientes. Una: el sistema político sustentado en la democracia fue un hito civilizatorio en la trayectoria de la sociedad. Otra: el sistema político se creó y se reprodujo mediante relaciones de poder que desnivelaban las ventajas potenciales de la democracia a favor de quienes disponían de ese poder.

La primera afirmación enfatiza que la democracia política estableció las bases de un escenario que potenciaba las posibilidades de desarrollo colectivo e individual de los miembros de la sociedad. Nunca antes las mayorías sociales, explotadas económicamente y oprimidas políticamente, habían dispuesto de mecanismos institucionales con los que defenderse y con los que definir sus intereses. La formación de sindicatos, la creación de partidos obreros y otras múltiples formas organizativas desplegadas por la organización social eran componentes fundamentales de esos mecanismos. En ese sentido, no caben retorcimientos retóricos: la ausencia de los rasgos que caracterizan a la democracia política implica la existencia de sistemas políticos en los que el poder se ejerce mediante la tiranía, sea a la antigua usanza del absolutismo monárquico, sea mediante una u otra gama de sistemas dictatoriales.

La segunda afirmación no pierde de vista el hecho cierto de que el proceso político seguido hasta que se consolidó el sistema democrático no respondió a una restauración de derechos naturales ni se realizó de forma neutral. Al contrario, fue una construcción histórica edificada a través de un proceso largo y conflictivo, que duró siglos y que finalmente quedó instituido mediante relaciones de poder. En ese sentido, tampoco caben retorcimientos retóricos: cuando se señalan las ventajas que el sistema democrático ofrece para el desenvolvimiento de la propiedad privada y las relaciones mercantiles, o para la estabilidad social al abrigo de conflictos agudos, lo que se hace es tomar como intereses comunes de toda la sociedad lo que en realidad son afanes correspondientes a los grupos dominantes en una sociedad capitalista.

Espejo de la realidad social que tiende a reproducir relaciones de poder

La hegemonía del Partido Conservador, asentado en el centro de la vida política británica, ponía de manifiesto el poder de una oligarquía dominante que contaba con el respaldo de una parte de los grupos sociales subalternos. El reverso de la moneda era la debilidad de la fuerza política del Partido Laborista, de los sindicatos y de las demás organizaciones sociales para articular un movimiento alternativo que transformara las estructuras vigentes. Los reiterados triunfos electorales del Partido Conservador, y la brevedad de los intervalos en los que liberales o laboristas lograron sumar una mayoría parlamentaria, ponían de manifiesto el contundente desequilibrio en las relaciones de poder imperantes. Los resultados electorales hacían la labor del mensajero que periódicamente reflejaban cuál era el statu quo político en el que se encontraba la sociedad. La democracia política no era por sí misma «portadora de adversidad» para los intereses de los trabajadores, sino que su ejercicio era el espejo que reflejaba la realidad social.

La adversidad consistía en el dominio estructural que detentaban los grupos dominantes y que se presentaba bajo múltiples manifestaciones de la dinámica política y de la vida social. La hegemonía del Partido Conservador mostraba la interacción de los cuatro grupos de causas que se han expuesto. La capacidad para articular la cohesión de los grupos de propietarios y para instrumentalizar ciertos resortes de oportunidad política se daban la mano con la diversidad reinante en la estructura social y con la utilización de los mecanismos que inhibían la acción colectiva de los trabajadores. Siendo así, el laborismo disponía de una limitada capacidad para generar un eje de confrontación social que le dotara de la suficiente fuerza política con la que modificar la correlación de fuerzas existente para corregir las descompensaciones que mostraba el sistema político y la dinámica de la economía.

Los atributos de la democracia política no eran los que explicaban esas causas que, ciertamente, configuraban un tejido social y una dinámica política muy diferente de la prevista por el esquema binario que había pronosticado la metáfora marxista en la que dos clases antagonistas entrarían en abierta

confrontación. Tampoco eran los atributos de la democracia política los que desmentían el pronóstico de que las crisis económicas desatarían movimientos de protesta de mayor magnitud y radicalidad. A su vez, el derecho a votar desvelaba que la elección política decidida por los trabajadores no guardaba una correspondencia unívoca con el grado de descontento hacia las condiciones de trabajo y de vida, sino que también operaban factores psicosociales que escapaban al agrupamiento colectivo derivado de la posición socioeconómica. Tratándose de una decisión tomada de forma individual y secreta, intervenían elementos asociados a la ideología, el conocimiento y la afectividad. El ejercicio del voto respondía, por tanto, a las formas de pensar, las sensibilidades y las capacidades para valorar la información disponible, estando condicionado por distintas gamas de afinidades o de aversiones que decantaban la orientación política.

Por consiguiente, el sistema parlamentario basado en la democracia política no precisaba de calificativos adicionales. Lo cual no significaba que se pasaran por alto sus indudables deficiencias, como eran la falta del derecho de voto de las mujeres hasta 1928, los cambalaches del sistema electoral que distorsionaban el reparto entre votos y escaños, la existencia de una Cámara de los Lores que carecía de representatividad social y la persistencia de normas legales viciadas por influencias religiosas que restringían el ejercicio de libertades personales vinculadas a la moralidad.

Había otra cuestión peliaguda, que asomó en aquel periodo y que cobraría una vigencia primordial después de la Segunda Guerra Mundial, relacionada con el proceso histórico que dio lugar a la formación del sistema político: ¿debía incluirse como propio de la democracia el reconocimiento de derechos sociales y económicos? En el ámbito de lo social, los primeros debates se suscitaron en los años previos e inmediatamente posteriores a la Gran Guerra, cuando el gobierno liberal de Lloyd George propuso que el parlamento reconociera de forma expresa ciertos derechos relativos a la protección de los trabajadores en caso de enfermedad, accidente, desempleo y otras eventualidades. Fue también entonces cuando los liberales propusieron la introducción de un impuesto progresivo sobre la renta, pues consideraban que la protección social hacía necesario dotar al gobierno de recursos financieros, debido a lo cual era una obligación social que cada cual pagara ese impuesto según los ingresos que percibía.

Asomó entonces una de las aristas cruciales acerca de cuál es el perímetro en el que se desenvuelve la democracia. La exigencia de contribuir con dinero propio

a una obligación social no casaba bien con el ensalzamiento de la libertad individual para que cada persona hiciera uso de sus bienes. Ese era el argumento de los conservadores para rechazar tal obligación tributaria; más aún, que tuviera un carácter progresivo según la magnitud de los ingresos. Pero la profundidad del debate iba mucho más allá del tema impositivo, pues apuntaba a la escueta relación que la lectura liberal establecía entre democracia y economía. Según su formulación, los derechos recaían de forma unilateral y exclusiva en la protección de la propiedad privada y las relaciones mercantiles, por lo que cada individuo tenía garantizada la libertad para usar su dinero, instalar negocios y realizar comercio según conviniese a sus intereses. Era la construcción ideológica erigida siglos atrás cuando predominaba la propiedad agraria e inmobiliaria de la aristocracia, mantenida después una vez que el desarrollo industrial conllevó la creación de grandes fábricas, comercios y bancos por parte de un núcleo reducido de propietarios capitalistas.

La hegemonía de esa construcción ideológica hacía que las empresas fueran consideradas únicamente como espacios privados en los que las relaciones se establecían a través de libertades, unos para contratar y otros para ser contratados. Por ello, la «democracia económica» era un concepto que carecía de significado. Los empresarios definían su libertad en términos de propiedad y mercado, los trabajadores gozaban de libertad para aceptar o rechazar un empleo a cambio de un salario. Conforme a esa idea, era lógico que la misión del Estado fuese garantizar la libertad de los mercados. El perímetro de la democracia política quedaba acotado por esa concepción ideológica. Los márgenes del juego político, en particular el funcionamiento de las mayorías parlamentarias para llevar a cabo reformas económicas y sociales, tenían como frontera no atentar contra los derechos de propiedad y la actuación del mercado, bajo la celosa custodia del Estado.

Esa concepción ideológica era cuestionada por el proyecto del Partido Laborista, cuyo discurso estratégico planteaba la necesidad de avanzar hacia una «democracia industrial», concretada en primera instancia a través de la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Hasta los años cuarenta del siglo XX, esa formulación se mantuvo desactivada en la acción política del laborismo, pero cobraría vigencia al concluir la Segunda Guerra Mundial, según se expone en el capítulo VI.

Un breve balance en la antesala de esa segunda contienda militar mostraba tres fortalezas principales que componían el activo político del Partido Laborista.

Primera, la intensidad con la que los sindicatos defendían las demandas laborales. Segunda, la conformación de una conciencia de clase entre los trabajadores fabriles a través de las luchas desplegadas por consolidar sus derechos laborales y sociales. Tercera, la cohesión política de una importante franja del electorado obrero en torno a los objetivos reformistas del laborismo. En el otro lado de la balanza, las mayores flaquezas que lastraban su pasivo político también podrían resumirse en tres. Primera, el déficit de atrevimiento al que le conducía el exceso de moderación, a veces convertido en miopía a la hora de valorar los márgenes viables para su acción política. Segunda, la incapacidad de ofrecer una propuesta viable y atractiva ante la crisis económica de 1929, cuando el gobierno tenía a su favor el profundo malestar de la gran mayoría social contra los grupos dominantes. Tercera, la reducida influencia que tenía en amplios sectores de trabajadores y de otras capas urbanas frente al dominio político e ideológico que ostentaban los conservadores.

[1] Como se advierte en la introducción, con el fin de evitar la reiteración de referencias bibliográficas que llegarían a entorpecer la lectura del texto, los trabajos utilizados figuran al final del libro. Se trata de una recopilación en la que primero se detallan los textos generales sobre historia política e historia de los partidos obreros que se refieren al conjunto de experiencias europeas analizadas y después se detallan los textos que se refieren específicamente a cada país.

[2] Con el tiempo, en esos consejos también participaron los comerciantes ricos y los caballeros ascendidos por méritos militares. Desde mediados del siglo XIV las reuniones estamentales se dividieron en dos cámaras; la «alta», con la nobleza y la iglesia, dotada de mayores atribuciones, y la «baja», con representantes de los sectores sociales que iban adquiriendo el derecho a ser escuchados. Eduardo III hizo ese reconocimiento acuciado por la necesidad de obtener mayores recursos financieros para sostener la Guerra de los Cien Años.

[3] El monarca disolvió el parlamento y gobernó más de una década sin oposición hasta que, una vez más, la necesidad de aumentar los impuestos para sostener una guerra le instó a convocar un nuevo parlamento. La nueva cámara rechazó por amplia mayoría los deseos del rey y este ordenó la detención de sus líderes. La cámara lo impidió y organizó un ejército que confrontado con el ejército del rey dio paso a la guerra civil.

[4] Disolvió la Cámara de los Comunes, eliminó las libertades, convocó elecciones a la carta para disponer de un parlamento sumiso y convirtió el puritanismo extremo en una religión de Estado como fundamento de una república teocrática.

[5] La Cámara de los Comunes reclamó las atribuciones y los derechos negados por el dictador, el lord protector ordenó a su ejército actuar contra la cámara, pero la mayoría parlamentaria se rebeló, formó un ejército y estalló la guerra.

[6] Cuando Jacobo, hermano y heredero de Carlos II, se declaró católico, la mayoría del parlamento aprobó la inhabilitación de los católicos para ejercer cargos públicos, lo que suponía excluirle como sucesor al trono. Carlos II disolvió el parlamento en 1679, acto que volvería a repetir otras dos veces, ya que en cada una de las elecciones a los Comunes seguía siendo mayoritaria la fracción opuesta a que su hermano accediera al trono. El conflicto estaba servido a la muerte del rey en 1685, pues aunque Jacobo se comprometió a respetar la libertad religiosa, los nombramientos para los cargos más importantes recayeron en seguidores católicos.

[7] La mayor parte de ese intervalo de tiempo correspondió al reinado de «tres Jorges» (I, II y III) entre 1714 y 1820, pertenecientes a la dinastía alemana de los Hannover que accedió al trono tras la unión de Inglaterra y Escocia. Los dos primeros reyes no hablaban el idioma inglés, residieron en su principado alemán y mostraron una escasa preocupación por los asuntos británicos.

[8] Un caso extremo que se suele recordar es el de la ciudad de Mánchester. Con una población en rápido ascenso, sólo tenía un diputado en la Cámara de los Comunes, mientras que el viejo burgo de Old Sarum, al norte de Salisbury, cuyas tierras pertenecían a varios aristócratas, con sólo 11 votantes tenía derecho a elegir dos diputados.

[9] Previamente, para tratar de evitarlo, la Cámara de los Lores, dominada completamente por esos estamentos, se opuso a la ley aprobada por los Comunes. Después tuvo que aceptarla tras negociar varios recortes que limitaron el alcance electoral de la ley.

[10] Hasta ese momento, entre los países europeos el sufragio masculino había sido instaurado en Francia, Alemania, Grecia, Suiza, España, Finlandia y Noruega. Pero sólo en estos dos últimos las mujeres tenían reconocido el

derecho de voto.

[11] El número de ocupados, que era de 5,5 millones al comenzar el siglo, aumentó a 9,4 millones a mediados del siglo y a 15 millones al concluir el siglo. Entre esos intervalos de tiempo, el empleo industrial, incluido el trabajo en las minas y la construcción, fue elevándose desde menos del 30%, al 40% y, finalmente, a más del 46%. En 1914 el número de trabajadores ocupados en la minería y la metalurgia, dos de las ramas más conflictivas, superaba los tres millones.

[12] Aquel panorama social queda bien descrito en Oliver Twist (1839), Canción de Navidad (1843), Tiempos difíciles (1854) e Historia de dos ciudades (1859).

[13] Lo prohibía para los menores de 9 años, lo limitaba a ocho horas/día para los menores de 14 años y a 12 horas/día para los menores de 18 años. También prohibía el trabajo nocturno en la industria textil.

[14] En 1844 se limitó a seis horas y media la jornada para los menores de 14 años; en 1847 se limitó a 10 horas para las mujeres y los jóvenes menores de 18 años; en 1854 se eliminó el trabajo desde el mediodía del sábado; en 1874 se aprobó la duración de la semana laboral de 54 horas, equivalente a 9 horas diarias.

[15] La carta reivindicaba de manera explícita el derecho de voto para los varones mayores de 21 años. A pesar de las voces que reclamaban el mismo derecho para las mujeres, la petición no lo recogió para evitar que se desligaran quienes rechazaban esa equiparación.

[16] La cita está recogida por Phillips (1992), «El movimiento obrero británico hasta 1914», en D. Geary (comp.), Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, p. 23.

[17] Ibid., p. 25.

[18] F. Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, cit., p. 399, según la versión en castellano disponible en http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/index.htm.

[19] La correspondencia está compilada en K. Marx y F. Engels, Letters, Collected correspondence, Marxist Internet Archive

[https://www.marxists.org/archive/marx/letters/]. Marx se encuentra en Londres y Engels en Mánchester, carta desde Londres del 1 de marzo de 1865.

[20] Ibid.

[21] Reproducida por primera vez en 1902 en el periódico alemán Die Neue Zeit, 2, p. 15. OEME, tomo II, pp. 184-185. Añade también: «Los ingleses poseen todas las premisas materiales necesarias para la revolución social, lo que les falta es espíritu de generalización y fervor revolucionario. Sólo el Consejo General está en condiciones de remediarlo y acelerar de este modo el movimiento auténticamente revolucionario en este país y, por consiguiente, en todas partes».

[22] Carta desde Londres del 7 de octubre de 1858.

[23] Carta desde Mánchester del 8 de abril de 1863.

[24] Citado por T. Hunt (2011), El gentleman comunista, Barcelona, Anagrama, p. 235.

[25] Inicialmente Marx, Engels y el Consejo General de la AIT tampoco apoyaron la insurrección e incluso la desaconsejaron pero, como se expone en el siguiente capítulo, una vez declarada cerraron filas a su favor.

[26] Carta desde Londres del 11 de febrero de 1878.

[27] Carta desde Londres del 17 de junio de 1879.

[28] «Constituyen la aristocracia de la clase obrera y han logrado una posición relativamente desahogada que consideran definitiva […;] la clase obrera inglesa perderá su situación privilegiada. Y llegará un día en que toda ella, sin exceptuar la minoría privilegiada y dirigente, se encuentre en el mismo nivel que los obreros de los demás países. Por eso, volverá a haber socialismo en Inglaterra». OEME, tomo III, p. 471-474.

[29] Su valoración cambió de tono durante un breve intervalo de tiempo, cuando Eleanor Marx, bajo la influencia de su pareja, Edward Aveling, un descarado vividor oportunista, se vinculó a la SDF. Terminado ese acercamiento, Engels volvió a su crítica frontal. Salvo por el afecto personal que profesaba a la hija menor de su amigo, el apoyo que Engels mantuvo hacia Aveling provocaba

sorpresa, desagrado y distanciamiento entre los partidarios marxistas, pues eran conscientes de la bajeza moral y política de aquel individuo.

[30] Artículo en Arbeiter-Zeitung, el periódico del Partido Socialdemócrata de Austria, Viena, 23 de mayo de 1890.

[31] Engels a F. Sorge, carta desde Londres del 11 de febrero de 1891.

[32] También ejerció como corredor de bolsa. Durante un tiempo mantuvo buenas relaciones con Marx y Engels, pero después estos rompieron su vinculación y le declararon su enemistad. El motivo parece que estuvo relacionado con un texto de difusión de las ideas marxistas en el que Hyndman hizo un abundante uso de citas literales diciendo que pertenecían al texto de un buen amigo, sin mencionar expresamente el nombre de Marx. Otros autores aluden también a los recelos que tenían los dos amigos ante la escasa capacidad intelectual y política de Hyndman, que contrastaba con su gran popularidad.

[33] Ciertos grupos minoritarios provenientes de la SDF y el ILP mantenían tesis políticas más radicales, mientras que otros, vinculados a los círculos fabianos, mostraban una mayor inclinación por los temas de índole sociocultural. En 1912, núcleos de la SDF y el ILP se separaron del Partido Laborista y crearon un Partido Socialista Británico que nunca tuvo relevancia. Una parte de ese pequeño partido contribuyó después, en 1920, a formar el Partido Comunista.

[34] En 1892 la alianza del Partido Liberal y el Partido Nacionalista Irlandés sumó más votos (51%) y más escaños (344) que la alianza del Partido Conservador y el Partido Liberal Unionista (47% y 313 diputados), pero cuando la mayoría parlamentaria se propuso garantizar la autonomía de Irlanda se encontró con el veto de la Cámara de los Lores. El proceso quedó bloqueado y tuvieron que celebrarse nuevas elecciones.

[35] Un ejemplo del reparto desigual entre votos y escaños sirve como botón de muestra. En las elecciones de 1886, los porcentajes de votos del Partido Conservador (con su aliado el PLU) y el Partido Liberal fueron del 51,4% y el 45,1%, respectivamente, mientras que el reparto de diputados fue de 393 y 192. En las siguientes, celebradas en 1895, se redujo la diferencia en votos (49,2% y 45,5%), pero se amplió en escaños (411 y 177). El sistema electoral beneficiaba también al Partido Nacionalista Irlandés, de modo que contabilizando alrededor del 5% de votos, concentrados en los distritos irlandeses, lograba siempre más de

70 diputados.

[36] Por contraposición, los conservadores se opusieron tenazmente a las principales reformas liberales impulsadas por Lloyd George; y cuando esas reformas lograron la aprobación en la Cámara de los Comunes (como la introducción de un impuesto progresivo sobre las rentas), lograron bloquearlas en la Cámara de los Lores. Debido a ello, los liberales no cesaron en su empeño por limitar el derecho de veto y otros privilegios en manos de la cámara alta.

[37] En la industria algodonera, entre 1830 y 1880, el número de horas trabajadas se redujo casi un 20% mientras que la productividad por obrero se multiplicó por nueve.

[38] Otro tanto sucedía del lado de los propietarios. Acertaron al pronosticar que el desarrollo económico generaría un proceso de concentración capitalista en torno a las grandes empresas, y que esa dinámica haría desaparecer multitud de pequeños establecimientos artesanales, negocios comerciales y explotaciones agrarias. Pero, al mismo tiempo, surgió otra multitud de negocios de tamaño mediano y pequeño que proporcionaron un nuevo mosaico de propietarios bastante diverso.

[39] El número de votantes pasó de 7,7 millones en 1910 a 10,4 en 1918, 15,9 en 1924 y 28,9 millones en 1929.

[40] En 1918 los dos grupos principales (Partido Liberal y Partido Demócrata Liberal) sumaron el 14% de los votos. Después de esa debacle, en 1922-1923 mejoraron los resultados y concentraron el 28-29% de los votos, pero lejos de los alcanzados en 1910. Tras brindar su apoyo al primer y brevísimo gobierno laborista, una nueva cadena de escisiones redujo su porcentaje de votos hasta situarlo por debajo del 7% en los años treinta. Su pequeño número de diputados no ejercería ya ninguna influencia relevante.

[41] En 1918 el Partido Laborista obtuvo 2,2 millones de votos (21%) y 57 escaños. En 1922 se presentó en la mitad de las circunscripciones y obtuvo casi el 30% de votos, con 142 diputados. En 1923 se presentó en dos tercios de las circunscripciones y obtuvo 4,1 millones de votos, el 31%, con 191 diputados. En 1924, registró 5 millones de votos, el 33%, y 151 diputados. Por su parte, el Partido Conservador y sus aliados se mantuvieron como la alternativa política más votada, disponiendo, sucesivamente, de 332, 344, 258 y 412 diputados.

[42] Las diferencias en votos fueron menos exageradas, pues el porcentaje de votos de los laboristas se redujo desde el 37% de 1929 al 31% en 1931, pero el sistema electoral hizo que en el reparto de escaños sí tuviera un descenso brutal, pasando de 287 a 52 diputados; el hundimiento liberal hizo que en muchas circunscripciones sus escaños pasaran a manos de los conservadores. Posteriormente, en 1935, los laboristas volvieron a situarse en el 37% de votos y 154 diputados.

3. El socialismo francés en la cuna de la rebeldía social y los movimientos insurreccionales

La trayectoria histórica de las organizaciones obreras en Francia presenta diferencias importantes con la británica, tanto en lo que se refiere al desarrollo del sindicalismo como a la formación y la actividad del partido socialista, y posteriormente del partido comunista. De hecho, esas diferencias remiten a otras de carácter más general sobre la construcción de un sistema republicano basado en los atributos básicos de la democracia política, cuya institucionalización se produjo en un orden distinto, en tiempos también diferentes y a través de dinámicas sociales que poco tuvieron que ver con la experiencia británica. Desde la revolución de 1789, Francia asistió a continuas muestras de rebeldía social y sucesivos episodios insurreccionales antes de que hubiera madurado el capitalismo industrial y de que se formara la república parlamentaria. Esa trayectoria pasada marcó una parte de las características del sistema republicano y de la génesis del socialismo francés, si bien, finalmente, a semejanza de Gran Bretaña, se configuró un escenario político dominado por los partidos conservadores hasta la antesala de la Segunda Guerra Mundial.

LA DERIVA JACOBINA DEL PRIMER PROCESO REVOLUCIONARIO

Con la diferencia del siglo que las separa, la revolución inglesa de 1688 y la francesa de 1789 presentaron tres semejanzas fundamentales. En el orden político, acabaron con el poder absoluto de la monarquía. En el orden social, decantaron el conflicto de poder creado entre la aristocracia feudal y los propietarios burgueses. En el orden económico, favorecieron el desarrollo del capitalismo, primero comercial y financiero, y después industrial. Al mismo tiempo, ambas revoluciones exhibieron diferencias también importantes. La «Gloriosa» necesitó un proceso previo de cuatro décadas, con una guerra civil, una dictadura, la vuelta al absolutismo y una segunda victoria militar del ejército

parlamentario, mientras que la francesa se produjo sin antecedentes de conflictos políticos frontales entre la monarquía y la aristocracia. La inglesa se llevó a cabo mediante una lucha militar, mientras que la francesa se realizó a través de una insurrección popular tanto urbana como rural. La inglesa concluyó de manera casi inmediata tras el cambio de poder, abriendo un periodo de estabilidad política, mientras que la francesa marcó el comienzo de casi un siglo de inestabilidad con nuevas convulsiones sociales, varias insurrecciones y grandes cambios políticos. La inglesa instauró la soberanía del parlamento y tardó bastante tiempo en generalizar las libertades cívicas y el derecho de voto, mientras que la francesa vinculó desde su origen la representación parlamentaria con las libertades cívicas y con el sufragio (masculino), aunque después los tres rasgos de la democracia política quedaron sometidos a los vaivenes del azaroso siglo XIX.

Primer embate: ruptura con el pasado

El conflicto de intereses entre el monarca, Luis XVI, y la aristocracia condujo a una convocatoria de los Estados Generales que resultaría suicida para ambas partes, ya que se convirtió en el motivo y el momento para que los representantes del «tercer estado»[1] emprendieran la rebelión política contra el Ancien Régime, acabando con el absolutismo monárquico, el dominio de la aristocracia y las estructuras feudales. Monarca y aristócratas pensaban que la celebración de los Estados Generales se desarrollaría como en siglos pasados, con reuniones y votaciones separadas por cada estamento, ignorando la emergencia de tres novedades importantes. Primera, que los grupos de propietarios burgueses habían adquirido una creciente ascendencia económica y social. Segunda, que las ideas de la Ilustración, defensoras del poder de la razón, habían penetrado en sectores educados de la aristocracia y en ciertas capas urbanas. Tercera, que el descontento popular, acentuado por el estallido de una crisis agrícola, hacía más difícil que los campesinos aceptaran un aumento de impuestos y que la gente de las ciudades aceptara un mayor encarecimiento de los alimentos básicos. Todo ello se dejó sentir cuando, en enero de 1789, comenzaron las elecciones por estamentos y la recopilación de las demandas de cada estamento[2]. La acumulación de agravios y protestas se acentuó con la apertura de los Estados Generales en el mes de mayo.

Los representantes del tercer estado propusieron varias condiciones para democratizar las decisiones a adoptar[3]. Cuando esas condiciones fueron rechazadas por los otros dos estamentos, decidieron constituirse en Asamblea Nacional arrastrando a una parte de los representantes del clero y a ciertos nobles. La asamblea acordó elaborar una constitución para acabar con el absolutismo real y con los privilegios de la aristocracia y la iglesia. El rey se vio obligado a aceptar formalmente esos hechos consumados, pero después formó un gobierno que se oponía radicalmente a esos objetivos constituyentes. Comenzó entonces el primer embate insurreccional. El descontento popular vinculó sus protestas contra la carestía del pan y otros alimentos básicos con el rechazo al gobierno. Desde mediados de julio, se desencadenaron varios hechos decisivos: la manifestación que asaltó la cárcel de la Bastilla en busca de armas, la creación de una milicia popular (Guardia Nacional), la imposición de un gobierno municipal en París[4] y la extensión de las movilizaciones por todo el país; sobre todo, la grande peur (gran miedo) que desataron los movimientos campesinos contra las propiedades de los nobles locales, y a veces contra su vida.

La revolución discurrió por tres caminos simultáneos: las decisiones de la Asamblea Nacional, la elaboración de la Constitución y la extensión de los movimientos sociales. Un nuevo vocabulario, inspirado por la Ilustración, se adueñó del lenguaje empleado en la Asamblea y en la sociedad. Términos como ciudadanía, razón, nación, voluntad general, condensaban las aspiraciones que después quedaron sintetizadas en el lema de «Liberté, égalité et fraternité».

La Asamblea Nacional abolió los privilegios feudales, suprimiendo las servidumbres personales, los diezmos y demás prebendas tributarias y jurídicas. Sucesivos decretos instituyeron la igualdad ante los impuestos, el modo de acceder a cargos públicos y otras cuestiones asociadas a la erradicación del dominio jurídico-político de los estamentos aristocráticos y eclesiásticos, incluyendo la expropiación de las propiedades inmobiliarias de la Iglesia católica. La otra decisión fundamental fue la «Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano», inspirada en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, estableciendo los principios que recogería la Constitución que se estaba elaborando[5].

El debate constitucional dividió a la Asamblea en tres grandes fracciones. Una mantenía la fidelidad al rey y a los estamentos dominantes en el pasado, teniendo como objetivo limitar el alcance de las reformas. La segunda apostaba por

reformas que asentaran una monarquía parlamentaria similar a la británica. La tercera propugnaba mayores derechos políticos (sufragio universal, instituciones democráticas) y reformas sociales que favoreciesen a la mayoría de la población.

Una vez aprobada la Constitución, tras la celebración de las elecciones a la nueva Asamblea Legislativa, surgió un nuevo mapa parlamentario. La fracción más reaccionaria quedó casi extinguida[6] y se produjo un realineamiento en torno a tres posiciones que serían las protagonistas de los conflictos políticos hasta el verano de 1792[7]. La «derecha» disponía del 35% de los escaños y estaba formada por los partidarios de dar por concluido el periodo revolucionario una vez que se había instituido la monarquía constitucional. La «izquierda» contaba con el 20% de escaños y, compuesta por jacobinos y cordeleros[8], proponía profundizar las transformaciones políticas y económicas. En el medio estaba la «llanura», con una mayoría del 55%, y en la que convergían posiciones más plurales y difusas, pero en general inclinadas a la aprobación de ciertas reformas sociales.

Los jacobinos, cordeleros y otros grupos de izquierda fueron los que desplegaron una actividad más intensa, tanto entre la elite que se reunía en salones de debates y clubes políticos, como entre los sectores populares en los que cundía la insatisfacción por los escasos resultados que la revolución aportaba a sus condiciones de vida. Las acciones de protesta pasaron a convertirse en un movimiento, los sans culottes, formado por una heterogénea gama de asalariados, jornaleros, artesanos y pequeños propietarios (tenderos, zapateros, cerrajeros, sastres), profesionales empobrecidos (médicos, abogados, periodistas, escritores), empleadas en el servicio doméstico y vendedores ambulantes. Los reclamos de mayor democracia y profundas reformas sociales apuntaban contra la «aristocracia del dinero» compuesta por los grupos de poder, fuesen viejos o nuevos, a los que responsabilizaban de cercenar las aspiraciones suscitadas en 1789.

El último factor que vino a sumarse al laberinto político fue la decisión tomada por las monarquías europeas más reaccionarias de unir sus ejércitos para invadir Francia con el fin de acabar con el nuevo régimen. Lo que comenzó siendo una coalición de Prusia y Austria pasó a ser una alianza monárquico-absolutista a la que se incorporaron los reyes de Inglaterra, España y otros. Todos ellos deseosos de contener los efectos expansivos de las ideas enarboladas en Francia desde 1789.

Segundo embate: fuga radical y desastre de la lucha fraccional

La acumulación de tensiones sociales y el fortalecimiento de la izquierda radical propiciaron un segundo episodio insurreccional en el verano de 1792. Un comité formado por jacobinos y cordeleros promovió los motines populares que condujeron a la invasión del Palacio de las Tullerías y a la gran manifestación celebrada en el Campo de Marte, acelerando la revuelta de los sans culottes. Rechazaban el dominio que los moderados de la Llanura y los monárquicos constitucionalistas ejercían en la Asamblea. Reclamaban elecciones con sufragio universal y una Constitución que ampliara los derechos democráticos y que instituyese órganos de poder basados en la representación directa de los ciudadanos, como el que se había impuesto en el Ayuntamiento de París. Exigían reformas que acabaran con la carestía y la escasez de alimentos, y que aumentaran los ingresos de los trabajadores, artesanos y pequeños propietarios.

La celebración de las primeras elecciones con sufragio universal (masculino) alteró en parte la composición de la Asamblea. Aproximadamente, la quinta parte se alineaba con la posición más moderada («girondina»), que representaba las aspiraciones de los propietarios de la industria y el comercio, y de una parte de los intelectuales ilustrados. La posición intermedia («marais») integraba al 45% de los diputados y sus posiciones oscilaban según los temas abordados. La izquierda («montaña») contaba con el 35% de los diputados, si bien su influencia en los medios intelectuales y en las movilizaciones sociales facilitaba el decantamiento a su favor de una parte de diputados del marais.

El afán de ruptura con la dinámica anterior hizo que la Asamblea pasara a denominarse Convención Nacional. Una modificación simbólica que precedió a los cambios radicales que impulsaron las principales figuras jacobinas (Robespierre, Marat, Danton): elaborar otra Constitución que sustituyese a la aprobada un año antes, concentrar en la Convención el poder ejecutivo y el legislativo, abolir la monarquía e instituir una república. Su fuerza política se acrecentó merced a la capacidad que mostraron para sintonizar con el sentimiento de los grupos sociales más desfavorecidos[9] y a su decidida posición ante la guerra desatada desde el exterior. Fueron los únicos que estuvieron dispuestos a afrontar la lucha militar, para lo cual reclamaron el

aumento del número de soldados y mayores recursos económicos destinados a la guerra. Su discurso político combinaba la necesidad patriótica de defenderse con la aspiración de difundir la revolución a otros países, a la vez que proclamaba la intensificación de la «guerra interna» con el fin de profundizar la democracia y las reformas sociales.

Este discurso cundió en el movimiento de sans culottes y proporcionó a sus dirigentes la fuerza con la que lograron que el parlamento les otorgara el poder político. La Convención acordó suspender la aplicación de la nueva constitución[10] y formar un gobierno revolucionario «hasta conquistar la paz». Después, ese gobierno transfirió el poder ejecutivo a un Comité de Salvación Pública, compuesto principalmente por jacobinos, mientras que otro Comité de Seguridad General se encargaba de garantizar el orden interno. Ambos comités dependían formalmente de la Convención, pero las atribuciones que recibieron les colocaban como máximos órganos de poder en el ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas, a la vez que podían mediatizar la actuación de los tribunales judiciales. De inmediato, los dos comités emprendieron una dura represión contra los parlamentarios disidentes, diezmando numéricamente a la Convención y eliminando su carácter representativo.

Una vez abierta la caja de los truenos, se desató un torbellino de acontecimientos. El poder político quedó concentrado en un núcleo dirigente minoritario y se generó una dinámica fagocitadora que, en primera instancia, parecía acrecentar la fuerza política de los jacobinos, pero en realidad tendía a debilitarla por dos vías. De un lado, el núcleo dirigente se fue aislando a medida que ejercía la represión contra organizaciones y personas cada vez más próximas. De otro lado, las disensiones arreciaron en el seno del núcleo dirigente y entre ellos reprodujeron las mismas prácticas de represión y exterminio que habían aplicado contra la oposición. Así discurrió el sombrío recorrido del «Terror» a lo largo de 1793 y 1794. Primero, negaron los derechos y aplicaron castigos penales, incluyendo condenas a muerte, a los diputados de las otras fracciones que criticaban la violación de derechos y el abuso de poder por parte de los comités de Salvación y Seguridad. Después, los jacobinos disciplinaron las filas más radicales con similares procedimientos (desposesión parlamentaria, encarcelamiento y guillotina) y con la misma acusación: servir a los intereses de potencias extranjeras y traicionar a la revolución. De ese modo eliminaron a los cordeleros y seguidamente a una parte de la fracción jacobina compuesta por líderes, como Danton y Desmoulins, que habían sido amigos y colaboradores de Robespierre. Finalmente, las disensiones llegaron al núcleo de jacobinos que

dominaba los dos comités. Las discrepancias parciales sobre las competencias de cada comité o sobre decisiones militares se tornaban en disputas dramáticas que conducían a choques frontales[11].

Durante el primer semestre de 1794, los enfrentamientos se convirtieron en luchas cainitas que perseguían la aniquilación del contrario para ostentar el control absoluto del poder. Ante la avalancha de acusaciones que se sucedían, el Comité de Seguridad decidió prescindir de las garantías jurídicas que la revolución había instaurado para los acusados (defensa por abogados, tipo de pruebas admitidas, composición de los jurados), decisión que rechazó el Comité de Salvación, en manos de los seguidores de Robespierre y Saint-Just. Unos y otros expulsaron de cada comité a los miembros discordantes y prepararon a sus fieles para un conflicto armado, precisamente cuando ya había sido derrotada la invasión desde el exterior. El fallido levantamiento de los seguidores de Robespierre les condujo ante un tribunal revolucionario que, sin juicio alguno, decretó la muerte de los principales líderes; el resto de sus partidarios fueron encarcelados o huyeron fuera del país. Aquel 10 de julio de 1794 terminaron los días de Termidor.

El trabajo intensivo de la guillotina y la renuncia del núcleo superviviente a proseguir los derroteros radicales[12] colocaron el poder en manos de quienes apostaban por el retorno a la república parlamentaria instituida por la Constitución de 1791. Pero, al amparo de aquel dramático viraje, resurgieron las fuerzas reaccionarias que aspiraban a volver al punto de partida previo a 1789. Primero de forma furtiva y después de manera explícita, esas fuerzas reclamaron un sistema político basado en el poder del monarca y la vuelta a los viejos privilegios[13]. Así comenzó el tiempo del «Terror blanco», cerrando un quinquenio trepidante.

Se había acabado con el dominio de la estructura económica feudal y la hegemonía de la aristocracia terrateniente, abriendo las puertas a un nuevo tiempo histórico, pero todavía quedaban décadas por delante y episodios fundamentales hasta que se asentase el poder de la burguesía en la economía, la sociedad y la política. La flecha del tiempo entre la quiebra del Ancien Régime y la hegemonía capitalista no discurriría por un trazado continuo, y menos aún rápido, hasta la segunda mitad del siglo XIX. Al cabo de aquel quinquenio vertiginoso se habían eliminado las restricciones al comercio, a la producción de manufacturas y a la concesión de préstamos con intereses, mientras que la Ley Chapelier de 1791 había prohibido las huelgas y la asociación de trabajadores

(también de empresarios) por considerar que atentaban contra la libertad económica. Sin embargo, la burguesía francesa era mayoritariamente preindustrial y en parte estaba compuesta por miembros de la nobleza que se habían vinculado a negocios comerciales y financieros. Los propietarios industriales eran una minoría casi insignificante. De hecho, en aquellos años ni siquiera se aceleró el desarrollo industrial, que tardaría más de medio siglo en despegar con fuerza para consolidarse como la principal fuerza de la economía francesa.

Siendo así, resulta exagerado establecer una correspondencia directa entre el poder político instaurado en 1789 y el dominio de la burguesía, y aún lo es más suponer que la evolución de la economía respondía al dominio del capitalismo industrial como sí que ocurría en Gran Bretaña. Difícilmente muchas decisiones adoptadas en los primeros años encajaban con los intereses de aquella burguesía, y menos a partir de 1792, cuando el proceso político se radicalizó. La dinámica política de esos años escapaba a cualquier esquema bipolar, ya que se trató de un tiempo en el que tanto la economía como la organización social carecían de unas estructuras definidas. Sólo de esa manera pudo desatarse una dinámica radical que no estuvo vinculada a un grupo social determinado, poniendo el poder político en manos jacobinas y a continuación derivando en luchas frontales por monopolizar ese poder. La división fratricida condujo al desastre de Termidor, siendo el primer antecedente de unas reacciones «exasperadas» que más tarde repetirían otros grupos revolucionarios.

Finalmente, es interesante reseñar un último episodio que asomó en 1796, a modo de rescoldo postrero de la llama prendida por los jacobinos: la Conspiración de los Iguales. Su impacto fue sólo simbólico pero delineó algunas pautas de futuro. Se trataba de una organización minoritaria y clandestina, liderada por Bracchus Babeuf, que elaboró un programa de emancipación social radicalmente igualitarista. Su objetivo era instaurar la sociedad de la «igualdad perfecta», basada en la supresión de la propiedad privada y la colectivización de la producción y el consumo. La conspiración que preparaban quedó abortada antes de su inicio, pues, cuando el Directorio supo de esa nueva preparación insurreccional, detuvo a sus dirigentes. La condena a muerte de Babeuf y otros dirigentes fue ejecutada en febrero de 1797[14], aniquilando de raíz al grupo de los Iguales. Sin embargo, aquel intento cobró cierto relieve histórico por las novedades que suponían su proyecto y su método de acción. Para transformar la economía y llevar a cabo la colectivización, consideraban imprescindible conquistar el poder del Estado; una formulación que anticipaba la que medio

siglo después propusieron Marx y Engels. El procedimiento para conquistar el Estado era la preparación de una acción organizada por una minoría que estaba dispuesta a suplir la ausencia de un movimiento de masas. El mismo método que décadas después utilizaría de forma reiterada Auguste Blanqui en Francia y después repetirían otros grupos revolucionarios.

LATIDOS SOCIALISTAS EN TRES NUEVOS EPISODIOS INSURRECCIONALES

Tres décadas y media después de Termidor, la convergencia de varios elementos creó un contexto político y social notablemente similar al que existía en el verano de 1789. De un lado estaban el agudizamiento del carácter reaccionario del gobierno, la concentración de poder en manos del monarca, la supresión de las libertades cívicas y la función decorativa de un parlamento amañado[15]. De otro lado, el estallido de una fuerte crisis agraria, las protestas de los propietarios burgueses sin apenas representación política y las movilizaciones populares contra las pésimas condiciones de vida. Para acallar las protestas de los grupos burgueses y del pueblo llano, en 1830 el rey Carlos X convocó unas elecciones para las que suavizó las exigencias censitarias, ampliando la base de electores entre los propietarios, funcionarios, profesionales y artesanos prósperos.

Rebelión social y restauración de una monarquía constitucional

Las elecciones a la cámara baja se hicieron eco del descontento existente. Ganaron por amplia mayoría los parlamentarios que proponían liberalizar el sistema autoritario frente a la minoría que se alineaba con el rey. Cuando surgieron los primeros desacuerdos con el nuevo parlamento, el monarca ordenó su disolución y anuló las semilibertades de expresión y prensa que había tolerado antes de las elecciones. Después, preparó una convocatoria electoral más favorable, elevando los requisitos censitarios y reformando las circunscripciones, para garantizar la mayoría parlamentaria de sus partidarios. La maniobra regia

espoleó el descontento social. En pocos días, las primeras movilizaciones llegaron a conformar un movimiento de rebelión política contra el monarca y su régimen.

La rebelión vinculó las protestas políticas de los grupos pudientes e ilustrados con las demandas sociales de los grupos populares[16], entrando en escena un nuevo protagonista que desde entonces mantuvo gran relevancia hasta 1871: la Guardia Nacional. Creada en 1789 como fuerza de orden público, estaba formada por personas de extracción popular cuya fidelidad, en los momentos decisivos de los conflictos, se decantó hacia los movimientos sociales. Ante la rebelión de 1830, su importancia fue crucial porque impidió que el ejército real interviniese contra esas movilizaciones. Sin esa capacidad militar y desactivados sus apoyos políticos, el rey fue destronado y sustituido por Luis Felipe de Orleans, elegido por los diputados constitucionalistas del parlamento[17], poniéndose en marcha una dinámica similar a la de 1790-1791. Se instauró una monarquía constitucional que reconocía la soberanía del parlamento, respetaba las libertades cívicas y ampliaba el derecho de voto. La nueva Constitución estableció que el rey lo era por voluntad de los franceses, pero le nombró jefe del ejecutivo y le otorgó atribuciones para compartir la capacidad legislativa con el parlamento, al tiempo que eliminaba el carácter hereditario de la cámara alta y transfería parte de sus funciones a la cámara baja.

Las elecciones de 1831 dieron una amplia mayoría a los liberales orleanistas, partidarios del sistema político constitucional, frente a los legitimistas monárquicos que defendían la vuelta atrás y frente a los republicanos que proponían el cambio hacia un régimen con mayores derechos democráticos y sociales[18]. Sin movimientos fuertes que reclamaran esas demandas, el sistema parlamentario derivó hacia una nueva involución. La mayoría de los diputados defendía abiertamente propuestas favorables a la burguesía y a la aristocracia financiera y agraria, mientras que una ley de 1834 prohibía los sindicatos obreros y endurecía las represalias contra los movimientos de oposición. Con frecuencia, las resoluciones favorables a las posiciones conservadoras contaban con más de 300 diputados frente a los menos de 100 que sumaban los opositores. Eran los tiempos descritos por Balzac en su ciclo de novelas de la Comedia humana, cuando el dominio de un capitalismo financiero-agrario daba lugar a una febril especulación basada en bienes inmuebles, sin que despegase el desarrollo industrial.

El proceso degradativo y antirreformista prosiguió hasta que una maniobra del

monarca abrió la puerta por la que, años después, se configuró otro escenario político. En 1839 el rey disolvió la cámara con el fin de obtener una mayoría más favorable a sus posiciones, pero se encontró con que los partidarios de instaurar una (segunda) república ganaban con creces a la suma de los monárquicos orleanistas y legitimistas[19]. Recurriendo a sus prácticas habituales, el rey cerró el parlamento y se afanó en manipular unas elecciones que en 1842 dieron la victoria a los conservadores. Sin embargo, el escenario político había experimentado un doble viraje fundamental: las fuerzas sociales favorables a la democracia y a las reformas sociales volvían a iniciar un proceso de fortalecimiento y disponían del germen organizativo con el que presentar una propuesta política que apuntaba contra el orden vigente.

Utilizando la expresión que Marx tomó prestada del Hamlet de Shakespeare, el viejo topo horadaba el agujero de la historia. La nueva propuesta fue tomando forma durante los años cuarenta merced a la convergencia de dos tendencias que hasta entonces habían caminado por separado entre reducidos núcleos de intelectuales, profesionales y asalariados. Una semilla procedía de las ideas socialistas que habían ido avanzado Saint-Simon, Fourier, Cabet, Proudhon y otros pensadores que fabulaban acerca de cómo podría crearse una sociedad más justa, igualitaria y satisfactoria para quienes sufrían la explotación económica y la opresión social. Ideas nacidas sin preocuparse por los requisitos políticos que permitirían construir esa sociedad. La otra semilla provenía de la herencia jacobina que portaban quienes combatían contra la monarquía orleanista y proponían un régimen republicano y democrático que atendiera a los problemas de los grupos sociales desfavorecidos.

La confluencia de ambas tendencias supuso la combinación de los anhelos socialistas con las aspiraciones a una república basada en el sufragio universal y las libertades cívicas. El periódico La Reforme era el portavoz de aquel proyecto incipiente y Alexander Ledru-Rollin y Louis Blanc, sus principales líderes. Conseguir financiación estatal para generalizar el cooperativismo de los trabajadores era su principal reivindicación inmediata, según los argumentos que Blanc había expuesto en su libro La organización del trabajo, publicado en 1839 con gran difusión pública.

Nuevo ciclo de rebelión social: democratización y represión

La propuesta republicano-socialista emergió en una escena política que, a mediados de los años cuarenta, presentaba otros protagonistas ya conocidos: una monarquía desgastada, la alianza conservadora de grupos burgueses y aristocráticos vinculados por negocios y por relaciones de parentesco, una burguesía moderna cuya influencia económica y social no era reconocida por esa alianza, y una mayoría social descontenta y desilusionada por las promesas incumplidas.

La crisis económica vino a exacerbar los problemas latentes. La agricultura recibió el impacto que sufrían las cosechas de los dos bienes básicos con los que se alimentaba la mayoría de la población: una plaga devastaba los cultivos de patata y una sequía castigaba los cultivos de cereales. Muchos campesinos abandonaban el campo y se sumaban al descontento que anidaba en las ciudades debido a la hambruna que provocaban la escasez y el encarecimiento de los alimentos. La industria y el comercio padecían una fase recesiva del ciclo de negocio que daba lugar a cierres de empresas, extensión del desempleo, caída de los salarios y colapso de los intercambios comerciales. Un incipiente movimiento obrero, surgido de las reivindicaciones laborales contra esa situación, se sumó a las heterogéneas protestas del «pueblo llano», junto con los campesinos empobrecidos, los empleados de servicios, los estudiantes, gran parte de los artesanos y profesionales, y muchos pequeños propietarios.

Como en ocasiones anteriores, la transformación de distintos movimientos de protesta en rebeldía social y en un levantamiento insurreccional contra el poder vigente se produjo a raíz de ciertas represalias tomadas por el Estado. Esta vez sucedió en febrero de 1848, cuando una decisión represiva, una más, del gobierno orleanista que presidía François Guizot dio paso a manifestaciones cada vez más masivas que colocaron en bandos distintos a la Guardia Nacional y al ejército[20]. Finalmente, Luis Felipe abdicó, pero su pretensión de que la monarquía continuase en la cabeza coronada de su nieto provocó el rechazo de la mayoría de los diputados, que optaron por exigir la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones por sufragio universal para formar una asamblea constituyente e instituir un régimen republicano.

El gobierno provisional que asumió esos objetivos estaba integrado por distintas fracciones partidarias de la república. Representando a las filas radicales, Ledru-Rollin asumió el Ministerio del Interior con el propósito de extender los

objetivos democráticos al conjunto del país, mientras que Louis Blanc tomó la responsabilidad de los temas laborales. Sus primeras medidas fueron la reducción de la jornada laboral (con un máximo de diez horas diarias para los menores de 14 años), el reconocimiento del derecho al trabajo para todos los ciudadanos y la creación de cooperativas financiadas por el Estado (ateliers nationaux). Una decisión clave de su proyecto, cuya puesta en práctica tendría crueles consecuencias, ya que para financiar los talleres no se optó por elevar la tributación de los grandes propietarios burgueses y aristocráticos, y de otros sectores urbanos, sino que se aplicó un impuesto a los campesinos, quienes constituían la mayor parte de la población.

En poco tiempo quedó patente la división política del gobierno provisional. La parte moderada era mayoritaria en las provincias y consideraba que la meta era establecer una república parlamentaria, pasando de puntillas por las cuestiones sociales y dando prioridad al mantenimiento del orden social. La parte radical, con fuerte influencia socialista, era fuerte en París y en otras capitales pero no en el resto del país, insistía en la necesidad de cambios profundos que cuestionaban parcialmente la propiedad privada y exigía mayores derechos laborales y mayor financiación para desarrollar los talleres nacionales. Los moderados y solo una parte de los radicales proponían la rápida celebración de elecciones, mientras que otros sectores radicales temían que esa celeridad no permitiera a una gran parte del electorado formarse una idea clara sobre las distintas opciones políticas; temían también las repercusiones negativas que hubiera acarreado entre los campesinos, el electorado mayoritario, el gravamen aplicado para financiar los talleres industriales.

Las elecciones celebradas en abril, apenas dos meses después del derrocamiento del monarca, confirmaron ambos temores. El sufragio universal masculino elevó el censo, súbitamente, de 250.000 a cerca de diez millones de electores, el 84% de los cuales ejerció su derecho. Los resultados otorgaron un aplastante triunfo a los republicanos moderados, mostrando la reducida influencia que tenían las posiciones radicales, salvo en París, y constatando el decantamiento de una gran parte de los campesinos hacia posiciones antirrepublicanas[21], ya que muchos otorgaron su voto a los candidatos monárquicos. Cuando en mayo se inauguró la Asamblea Nacional, los propios líderes republicanos moderados se quedaron sorprendidos, casi horrorizados, de la cantidad de diputados de su fracción que en realidad eran oportunistas reaccionarios que se habían disfrazado de republicanos para ganar las elecciones en sus circunscripciones.

Se repitió entonces, como en 1792, una reacción cuyo desenlace tendría secuelas dramáticas. Los republicanos radicales intentaron fortalecer su posición política a través de la movilización de sus partidarios en París. La convocatoria de una manifestación (en origen, para apoyar una revuelta popular en Polonia) se convirtió en un movimiento de rebelión: ocuparon la Asamblea Nacional, se hicieron con el ayuntamiento y nombraron un nuevo gobierno comunal. A continuación, sus demandas se hicieron más contundentes, exigiendo mayores recursos para financiar los talleres nacionales, la aplicación de importantes reformas sociales y la formación de un Comité de Salvación Pública con evidentes reminiscencias jacobinas. Como respuesta, el parlamento republicano declaró ilegal al grupo radical-socialista y suprimió los talleres nacionales. El gobierno ordenó al ejército que implantara el orden en la capital, lo que conllevaba la represión contra las movilizaciones que habían impulsado los radicales. Un nuevo intento de insurrección lanzado desde los barrios obreros tuvo represalias más feroces. El parlamento controlado por aquella combinación de moderados y reaccionarios destituyó al gobierno republicano y cedió el poder al general Cavaignac, encargado de acabar con el levantamiento. Cavaignac se aplicó con saña a su misión y llevó a cabo una salvaje represión contra unas barricadas que resistían numantinamente. La derrota de la insurrección se saldó con miles de muertos y muchos más deportados y detenidos.

Reflexionando a corta distancia de los acontecimientos, Marx destacó que los meses transcurridos de febrero a junio de 1848 habían sido la carta de presentación de la clase obrera como fuerza política autónoma, poniendo de relieve su falta de madurez[22]. A su juicio, primero había ejercido un papel subordinado en el derrocamiento de la monarquía y después las elecciones no habían servido para reforzar su posición política, por lo que el intento insurreccional de junio estaba condenado al fracaso. Casi medio siglo después, con la perspectiva que proporcionaba el desarrollo capitalista de la segunda mitad del siglo, en 1895, Engels insistía en la tesis de que «en junio, se libró en París, entre el proletariado y la burguesía, la primera gran batalla por el poder»[23], a la vez que reflexionaba de forma autocrítica acerca del modo jacobino con el que ambos amigos habían concebido el curso de un proceso revolucionario[24].

No obstante, una lectura de los acontecimientos de 1848 en términos binarios de «clase contra clase» contrasta con varios hechos fehacientes: sólo el 15% de la población vivía en ciudades con más de diez mil habitantes, la producción manufacturera era muy reducida y los obreros fabriles constituían un grupo

social de mínimas dimensiones –que sólo en parte era identificable en función de su localización en fábricas y viviendas concentradas en la periferia de París y otras ciudades, y de sus incipientes movilizaciones laborales–. No hay constancia de que los movimientos desatados durante aquellos tres meses revolucionarios tuvieran un perfil específicamente obrero. Las insurrecciones de febrero y junio respondían a un magma complejo y no separable de grupos en el que eran bastante más numerosos los trabajadores preindustriales, los artesanos y los pequeños propietarios y profesionales empobrecidos. Un magma acorde con una estructura social que reflejaba el débil desarrollo del capitalismo industrial.

Sí parecía lúcida la reflexión de Marx, refrendada después con énfasis por Engels, acerca de la debilidad del movimiento que acometió el intento insurreccional de junio. Fue la muestra del clímax de exasperación que, ante una realidad política adversa para sus aspiraciones, indujo al núcleo radical a emprender una aventura condenada al fracaso. Ciertamente, la celebración de las elecciones en abril había favorecido a los republicanos moderados, a los reaccionarios emboscados en sus filas y a las fuerzas monárquicas, pero los resultados no dejaban de ser una fotografía de la realidad política. Sin embargo, rechazando esa realidad, por injusta, el levantamiento enfrentó a una minoría parapetada en las barricadas contra demasiados enemigos: el poder del Estado, la mayoría moderada de los republicanos, que contaban con el mayor apoyo social, y las fuerzas monárquicas más reaccionarias. Las consecuencias que se derivaron de tal decisión exasperada hicieron que la derrota militar del levantamiento fuera acompañada de la derechización de muchos segmentos republicanos moderados y la aniquilación de las fuerzas radicales por espacio de varias décadas.

Para terminar de contextualizar los acontecimientos franceses de 1848, cabe recordar en un breve apunte su coincidencia con otros movimientos surgidos por casi toda la geografía europea, desde Dinamarca a distintas zonas de la futura Italia, desde los territorios de Prusia a gran parte del Imperio austríaco. Movimientos que cuando todavía estaban larvándose indujeron a Marx y Engels a escribir el célebre inicio del Manifiesto Comunista: «Un fantasma que recorre Europa […] el comunismo». Su exceso de celo ideológico no consideró relevante valorar que ninguno de aquellos movimientos tenía esa finalidad comunista, sino que se levantaban contra la opresión de las monarquías absolutistas, en demanda de libertades, sufragio universal y parlamentos soberanos frente a los poderes imperiales. Aquel incendio político que se extendió por el continente tenía un contenido democrático y nacional,

acompañado de diversos reclamos sociales. Pero ninguno de los combates se libró por la desaparición de la propiedad privada, ni se convirtió en una pugna entre la burguesía y el proletariado, sino que sus propósitos consistían en doblegar a las tiranías monárquicas, eliminar los privilegios aristocráticos y, en algunos casos, formar nuevos Estados nacionales.

Último episodio: el cúmulo de excepcionalidades de la Comuna

El cuarto de siglo que medió entre 1848 y 1871 tuvo un protagonista central, Luis Napoleón Bonaparte, y un hecho trascendental, el desarrollo acelerado de la industria capitalista. Ambos merecen un breve recordatorio para contextualizar adecuadamente el que sería el último episodio insurreccional: la Comuna parisina. Luis Napoleón alcanzó la presidencia de la república merced a una Constitución que garantizaba el sufragio universal masculino y dotaba a ese cargo de importantes atribuciones que se sustraían al parlamento. Tras un apabullante triunfo, contra Cavaignac y otros candidatos, fue investido presidente y se dispuso a seguir los pasos de su tío, el general-emperador. Primero utilizó sus atribuciones para organizar un régimen autoritario y después dio un golpe de Estado, se coronó emperador e instauró una monarquía dictatorial. Las elecciones se convirtieron en mascaradas donde su partido, que proclamaba la prioridad del orden social y la eficacia administrativa, conseguía casi todos los escaños[25]. El emperador prefería hacer uso de plebiscitos en los que apelaba directamente a los ciudadanos para preguntarles sobre temas en los que siempre ganaban sus propuestas. Remedando a su tío, obtuvo el apoyo tanto de los propietarios industriales, comerciales y banqueros, como de la aristocracia agraria atraída por un laissez-faire defendido por la espada del dictador. Fueron buenos tiempos para los negocios amparados en la corrupción estatal, las operaciones especulativas basadas en bienes raíces y las suculentas ganancias que aportaba la financiación de las campañas militares emprendidas por el dictador.

Las transformaciones económicas y sociales se aceleraron bajo aquel régimen bonapartista. La débil industria precedente conoció un rápido desarrollo de las manufacturas, lo mismo que los transportes y las comunicaciones, modificando profundamente la estructura económica. El fortalecimiento de la burguesía

industrial y el rápido aumento del número de obreros fabriles y otros asalariados y profesionales urbanos modificó en profundidad la estructura social. Como ejemplo modélico, París duplicó su población durante los años cincuenta al calor de las nuevas industrias metalúrgicas, químicas y otras manufacturas, a la vez que la llegada de un gran número de emigrantes acrecentó la cantidad de indigentes sin trabajo. Las obras públicas y el esplendor de riqueza de los grandes propietarios cambiaron la fisonomía de la ciudad, exagerando las diferencias entre los barrios donde se concentraba la opulencia y los barrios donde reinaba la miseria.

Dos décadas después, la vida francesa presentaba dos facetas claramente diferentes: el agotamiento político de la dictadura[26] y la vitalidad social sustentada en el fuerte crecimiento económico. Sin embargo, el factor que determinó la caída de Bonaparte y de su régimen fue la huida militar hacia adelante que emprendió en julio de 1870, cuando se enfrentó a Prusia y sus aliados germanos. En sólo dos meses la concluyente derrota francesa en Sedán se saldó con Bonaparte como prisionero, la mitad de su ejército cautivo y el ejército prusiano camino de París. Desarbolado el ejército y desorganizada la administración del Estado, a principios de septiembre la minoría de diputados republicanos declaró el fin del (segundo) imperio, proclamó la (tercera) república y convocó elecciones a una asamblea constituyente. Un gobierno provisional, presidido por Adolphe Thiers, tuvo que negociar un armisticio con el ejército invasor, mientras que la minoría radical que participaba en el gobierno, dirigida por Léon Gambetta, pensaba que la prioridad consistía en movilizar a la población y reorganizar a la parte disponible del ejército para hacer frente a la invasión.

Cuando el gobierno de Thiers se instaló en Burdeos y se dispuso a negociar la rendición, la población de París rechazó ese propósito, quedando desde mediados de septiembre a merced del asedio prusiano[27]. La Guardia Nacional, que contaba con unos 200.000 hombres, la mayoría trabajadores y desempleados, quedó como única instancia de poder, mientras el asedio provocaba la escasez de alimentos y demás abastecimientos básicos. En esa disyuntiva, a finales de 1870, las propuestas de jacobinos y blanquistas fueron ganando influencia en la Guardia Nacional y entre la población parisina. Comenzó un festival de iniciativas y consignas surgidas de colectivos influidos por los viejos radicales de insurrecciones pasadas y por jóvenes que aportaban nuevos sueños e ilusiones, enardecidos por la claudicación del gobierno de Thiers ante las exigencias prusianas[28]. La Guardia Nacional negó la autoridad

del gobierno y sus batallones eligieron un comité central para dirigir la defensa de la ciudad[29].

Paradójicamente, en aquel contexto de desorden político y de ocupación militar, las distintas alternativas políticas prepararon las elecciones convocadas para febrero de 1871, consentidas por el ejército prusiano y conforme a las restricciones impuestas por el gobierno. Los resultados generales configuraron un parlamento muy conservador, dominado por una amplia mayoría monárquica[30]. Por contraposición, en París las elecciones fueron celebradas con sufragio masculino y ganaron de forma aplastante los republicanos radicales, obteniendo 36 de los 43 escaños. Esa disparidad de resultados hizo que el conflicto político de los meses anteriores se convirtiera en un conflicto militar abierto entre París y Versalles, donde ahora residían el gobierno y el parlamento[31]. El abandono masivo de la capital por parte de funcionarios, empresarios, jueces y otros grupos conservadores acentuó el carácter popular de la población que permanecía en París.

El comité central de la Guardia Nacional renunció a su autoridad y convocó elecciones para formar, con representantes de todos los distritos, el Consejo de la Comuna, encargado de gobernar la ciudad y garantizar su defensa militar. El consejo reflejaba la estructura social existente; lo componían trabajadores de muy distintas profesiones, desde obreros fabriles a zapateros y otros artesanos, comerciantes y profesionales. En términos políticos, mostraban un claro predominio de las posiciones radicales, principalmente jacobinos y blanquistas, siendo minoría los afines a la AIT, tanto los seguidores de Marx y Engels como los de Bakunin o Proudhon, y otros que se definían como demócratas republicanos. El Consejo se centró en tres actividades principales. Primera, ocuparse de los preparativos militares contra el más que seguro intento de invasión desde Versalles. Segunda, el abastecimiento de alimentos y otros servicios públicos esenciales. Tercera, aliviar las penurias sociales más urgentes.

En el ámbito social, dispuso que los caseros redujeran los exagerados alquileres que cobraban por las viviendas, abolió ciertos trabajos nocturnos, concedió pensiones para las viudas e hijos de los miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio, devolvió las herramientas a los trabajadores y artesanos que las tenían en las casas de empeño estatales, pospuso el pago de las deudas y eliminó el pago de intereses, creó guarderías para hijos de las trabajadoras y otorgó a los asalariados el derecho de tomar bajo su control las empresas que habían sido abandonadas por los dueños para unirse al gobierno de Versalles. En

el ámbito político, abolió la guillotina, fomentó las organizaciones por barrios, garantizó la revocabilidad de los cargos elegidos, fijó un salario máximo para los funcionarios, eliminó las partidas presupuestarias dirigidas a fines religiosos, y exigió que las iglesias y sus centros educativos permaneciesen abiertos para celebrar reuniones ciudadanas, atender primeros auxilios y otras tareas sociales. Todas ellas medidas urgentes con las que afrontar una situación de excepcionalidad, que difícilmente podían ser tomarlas como ejemplos de referencia universal, sin que tuvieran una relación directa con la transformación de la propiedad de los bienes económicos, ni con lo que sería la organización del Estado en una situación normalizada[32].

Resulta significativo considerar tres debates que sí se iniciaron en aquella encrucijada, aunque luego no pudieran plasmarse en hecho relevantes, tanto como qué otros temas estuvieron ausentes pese a que concernían a cuestiones fundamentales. Un primer tema que se afrontó fue la separación Iglesia-Estado a favor de la laicidad social, reclamándose la expropiación de las inmensas propiedades inmobiliarias y financieras en manos de órdenes católicas, así como la necesidad de excluirlas de un sistema educativo que debería ser público y obligatorio. Un segundo tema fue la reforma para acabar con el ejército convencional, inexistente en aquel momento en París, para sustituirlo por una milicia como la Guardia Nacional, de modo que el servicio militar sería obligatorio para todos los ciudadanos adultos. El tercer tema abordado fue el desarrollo de iniciativas de trabajo colectivo, sirviéndose de las fábricas abandonadas por sus propietarios para organizar cooperativas de trabajadores que deberían quedar coordinadas a escala nacional.

Tres cuestiones que fueron dejadas de lado permiten constatar las serias restricciones políticas y organizativas a las que estaba sometida la Comuna. Primera, los dirigentes comuneros no prepararon ninguna estrategia ofensiva para atacar al ejército gubernamental que permanecía en Versalles, antes de que se reforzara con las tropas cautivas en Sedán. Esa ofensiva hubiera podido mermar al ejército oficial, dividirlo en frentes y favorecer la insurrección de otras ciudades (Lyon, Burdeos, Marsella) que carecían de una fuerza militar como la Guardia Nacional parisina. Segunda, las mujeres quedaron excluidas como votantes y como candidatas al Consejo de la Comuna, a pesar de que grupos importantes de ellas participaron en la Guardia Nacional y en los movimientos callejeros, contando con líderes destacadas. Tercera, las reservas de millones de francos depositadas en el Banco Nacional no fueron controladas por el Consejo, llegando a pedir préstamos a los banqueros privados para pagar

ciertos gastos y los sueldos de los guardias nacionales; el gobierno de Thiers siguió utilizando los recursos del Banco Nacional para financiar a su ejército.

El comienzo del asedio ordenado en abril desde Versalles sentenció la desgracia final de la insurrección parisina. La Comuna contaba con fuerza militar pero no con un ejército organizado, especializado y disciplinado. Contaba también con el entusiasmo y la movilización social, que con el paso de las semanas se fue erosionando dejando patentes muestras de cansancio. Contaba con una dirección política, pero las discrepancias dieron paso a choques virulentos entre las fracciones dominantes (jacobinos y blanquistas) que reproducían la tragedia vivida en 1793-1794, tanto en el Consejo Comunal, como en la dirección de la Guardia Nacional y en los órganos de coordinación de los distritos[33]. Las acusaciones recíprocas de tentaciones dictatoriales condujeron a la destitución de los miembros de la fracción rival en cada organismo, a las detenciones y los juicios arbitrarios sin atenerse a la legalidad instituida por la propia Comuna[34].

Reunido todo el ejército al mando del general Mac-Mahon, comenzó el cañoneo intensivo de la ciudad, negando cualquier salida negociada y acabando con los movimientos de Narbona, Limoges y Marsella, para impedir cualquier ayuda externa. A mediados de mayo sólo las barricadas levantadas en algunos barrios de más difícil acceso conseguían impedir la entrada del ejército[35]. Cada barrio conquistado por el ejército sufría ejecuciones sumarias y otras formas de reprimir con salvajismo a quienes les habían humillado tres meses antes al evitar que las tropas controlaran la ciudad. Con frenético ensañamiento, militares, políticos y eclesiásticos justificaron aquella orgía de sangre en nombre de tres grandes miedos que la Comuna les había activado: la propiedad, el orden y la religión. La Comuna quedó aplastada el 27 de mayo y París sufrió «la mayor masacre sucedida en la Europa del siglo XIX»[36]. Desde ese momento, relatos fantásticos e infundios sin cuento serían propagados por políticos llamados a desempeñar un papel importante en las décadas posteriores (Mac-Mahon, Ferry), por jueces encargados de justificar condenas sin más prueba que la de que los acusados habían seguido viviendo en París, y por escritores y periodistas de libelos, que se publicaron por cientos.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA Y SUBALTERNIDAD SOCIAL

La proclamación de la (tercera) república configuró un sistema político que mantuvo tres rasgos semejantes al vigente en Gran Bretaña bajo una monarquía: la consolidación de la democracia política, el compromiso del Estado con el desarrollo capitalista y la posición subalterna de los movimientos sociales. Al mismo tiempo, otras características mostraban claras diferencias entre ambos sistemas, en buena medida debidas al diferente pasado de los dos países, así como en el tipo de partido obrero cuyas características también se alejaban de las que habían dado lugar al laborismo británico. Por esa razón, nos ocupamos primero de mostrar los rasgos del proceso político de la tercera república para examinar después el surgimiento y desarrollo del partido socialista y, décadas más tarde, del partido comunista.

Trayectoria diferente hacia un mismo sistema político

La primera distinción con el proceso británico se aprecia en los tiempos seguidos por cada uno de los atributos de la democracia política, que en Francia emergieron conjuntamente a raíz de la Constitución que se elaboró tras 1789 y más aún desde 1791. Las libertades cívicas fueron reconocidas por la Declaración Universal de los Derechos, antes incluso de que se elaborara la Constitución, salvo el derecho de asociación sindical de los obreros, que (como en Gran Bretaña) no se aprobó hasta el último tercio del siglo XIX. La restricción censitaria del derecho de voto desapareció en 1791 con el reconocimiento del sufragio universal (masculino)[37]. En aquel contexto el parlamento se convirtió en el poder legislativo, relegando y después eliminando la capacidad del monarca para dictar leyes. Se trataba de un parlamento con una vocación de representación social muy superior a la que tenía en aquella época la Cámara de los Comunes británica.

La segunda diferencia estuvo marcada por los movimientos zigzagueantes entre monarquía y república que siguieron a continuación, sometiendo a una zozobra continua la vigencia de los tres atributos y al sistema político en su conjunto. Primero fue el dominio jacobino el que puso en cuestión esa vigencia, le siguieron casi dos décadas de directorios autoritarios y dictadura napoleónica, a continuación quince años de restauración monárquico-absolutista y, tras dos décadas de república parlamentaria, llegaron otras dos de dictadura monárquico-

bonapartista. Un vaivén que supuso la sucesiva restauración/anulación de las libertades cívicas, ampliación/recorte de las funciones del parlamento y, hasta 1848, la permanencia/negación del sufragio masculino. Un zigzagueo al compás de la fortaleza/debilidad de los movimientos populares, las muestras de rebeldía y los episodios insurreccionales. Un ritmo alternante que, desde 1830, estuvo también asociado al ascenso/descenso de la influencia de las ideas socialistas.

La tercera disparidad se cimentó en las consecuencias que tuvo el hecho de que el desarrollo industrial francés fuese más tardío y menos vigoroso, albergando un cúmulo de reminiscencias del pasado bastante mayor que en el caso británico. Evidencias de ello fueron el débil número y el escaso grado de organización de los trabajadores, el fuerte peso de los campesinos y del medio rural en la sociedad y en política, y la fuerza que mantuvieron los segmentos aristocráticos y eclesiásticos para oponerse al sistema democrático. Factores que desempeñaron un papel activo en las dificultades que encontró la tercera república para consolidarse y que después pervivieron en muchas zonas agrarias y en las ciudades con menor desarrollo económico.

El pulso reaccionario se avivó en los años setenta tras el aplastamiento de la Comuna. A su favor jugaba el prestigio del general Mac-Mahon –el matarife que dirigió el machacamiento y después se convirtió en presidente de la república– entre la población más conservadora; también la gran mayoría monárquica que dominaba la Asamblea Nacional elegida bajo la ocupación prusiana mediante un sistema electoral que favorecía a los distritos rurales. En su contra estaban la mermada oposición de las mermadas fuerzas republicanas y, sobre todo, el temor de los grandes propietarios capitalistas a que un exceso de involución (recorte de libertades, vuelta al vínculo del Estado con el catolicismo) despertara a los movimientos sociales y que el resurgimiento de los conflictos políticos obstaculizara el desarrollo de los negocios.

La relación de fuerzas entre las posiciones reaccionarias y sus contrapesos se plasmó en una Constitución que mantenía las espadas en alto, instituyendo un sistema político fuertemente presidencialista, más parecido al que tenía el káiser alemán que a la monarquía británica[38]. Las elecciones pusieron a prueba aquel híbrido político y tensaron las fuerzas en juego hasta que el órdago lanzado por Mac-Mahon y los partidarios de la vuelta atrás (aristocracia, monárquicos, iglesia) se topó con la oposición de la elite industrial-financiera y de la mayoría de la población[39]. La situación se decantó a favor de la mayoría republicana desde 1877: el presidente tuvo que dimitir y en su lugar fue elegido Jules Grévy,

cuyo primer acto simbólico fue renunciar al derecho de disolver la Cámara de Diputados. Los partidos republicanos asumieron el control del parlamento y del gobierno, a la vez que el triunfo en las elecciones municipales les otorgó el dominio de la mayoría de las ciudades y de muchas zonas rurales. Una de las primeras decisiones fue aprobar la amnistía para los comuneros parisinos que seguían encarcelados.

Viraje republicano hacia el conservadurismo

La Cámara de Diputados obtuvo un poder superior al que ostentaban el presidente y el Senado, las formaciones políticas cobraron más protagonismo y el sistema político se comprometió estrechamente con el desarrollo capitalista y con el colonialismo imperialista en África y el Pacífico. Rasgos todos ellos similares a los que presentaba el sistema británico de la época, refrendados por las sucesivas elecciones. Las libertades cívicas quedaron reconocidas por la Constitución, incluyendo desde 1884 el derecho de asociación de los trabajadores, tras la derogación de la Ley Chapelier al cabo de casi noventa años.

La dinámica política se decantó hacia un paulatino dominio conservador, pero lo hizo a través de un proceso con notables diferencias respecto a cómo tuvo lugar en Gran Bretaña, no sólo porque se produjo bajo un régimen republicano sino por otras singularidades relevantes: la ausencia de un partido propiamente conservador hasta comienzos del siglo XX y de un esquema parlamentario bipartidista; la escasa consistencia de unos partidos políticos poco preocupados por las referencias ideológicas y dotados de un acendrado sentido oportunista; la fragilidad e inestabilidad de los gobiernos; el escaso arraigo de las normas que sostenían el juego parlamentario; y la proliferación de litigios políticos provocados por la beligerancia de la jerarquía católica contra el laicismo social e institucional.

La escena política quedó sometida a permanentes realineamientos, cambios de posición y fraccionamientos de unos partidos republicanos que, desde posiciones favorables al reformismo social, viraron hasta plegarse a los intereses del liberalismo mercantil. Ese viaje corrió a cargo de partidos cuyos nombres incluían términos, como radical y socialista, que nada tenían que ver con su

orientación ideológico-política. En poco más de tres décadas, de 1879 a 1914, hubo 38 cambios en la jefatura del gobierno. El dominio inicial del parlamento correspondió a la alianza de Unión Republicana (UR) y Republicanos de Izquierda (RI), que sumaron al Partido Radical (PR) para aplicar distintas medidas reformistas, sobre todo las destinadas a limitar el poder de la Iglesia católica[40] y a impulsar la enseñanza primaria obligatoria, laica y gratuita. Después fueron los así llamados Republicanos Oportunistas (RO)y Moderados (RM) los que construyeron una mayoría parlamentaria con el apoyo de los partidos Radical-Socialista (PRS) y Radical[41]. La anemia reformista hizo que en 1887 aflorase un movimiento encabezado por otro militar reaccionario, Georges Boulanger, que, con el apoyo de las fuerzas monárquicas y bonapartistas, pretendió capitalizar el descontento social con el señuelo de un «gobierno fuerte a favor del orden y la eficacia».

Una vez desactivado su intento de golpe de Estado contra la república, aquella amenaza sirvió de acicate para que los siguientes gobiernos activaran algunas de las reformas, largo tiempo demoradas, que exigían los sindicatos y las organizaciones socialistas y otras formaciones republicanas. En el terreno laboral, se estableció la jornada laboral máxima de diez horas, el descanso dominical, se aumentó a 13 años la edad mínima de trabajo y se fijaron medidas sobre higiene y prevención de accidentes. En el terreno social, se crearon los primeros seguros ante accidentes, enfermedades y pensiones, si bien los requisitos para acceder a las ayudas, sus cuantías y el modo de financiación eran bastante restrictivos. Los resultados sociales que se alcanzaron fueron modestos, ya que los partidos republicanos gobernantes decantaban cada vez más sus preferencias por los pactos con las fuerzas de la derecha. Se sucedieron las alianzas con diferentes formatos pero similar contenido político, en las que participaban los denominados republicanos independientes, radicales, radicales-socialistas y progresistas[42].

El escenario se vio sometido a una primera alteración en 1899, a raíz del affaire Dreyfus[43]. Entre rumores de preparativos golpistas por parte del ejército, tras varios atentados anarquistas y ciertas protestas sociales, aquel escándalo saltó cuando se descubrieron las irregularidades cometidas por el ejército y los órganos de justicia. Inmediatamente desató la furia de las fuerzas nacionalistas, militaristas y antisemitas, que contaron con el apoyo de los republicanos más conservadores y otros partidos de derecha. Para contrarrestar ese movimiento, los líderes de los partidos Radical y Radical-Socialista propusieron a las organizaciones socialistas la formación de un gobierno de concentración basado

en los valores republicanos, democráticos y laicos. La respuesta favorable de algunas de esas organizaciones permitió formar un gobierno de centro-izquierda, dirigido por Pierre Waldeck-Rousseau, cuya prioridad era defender la república contra las fuerzas involucionistas y sus apoyos entre las filas republicanas.

La convocatoria de elecciones en 1902 forzó un acuerdo más explícito, firmándose un pacto con el confuso nombre de Bloc des Gauches, entre los partidos Radical, Republicanos de Izquierda, Republicanos Radical-Socialistas y Republicanos Socialistas, sin que participase el partido más acorde con esa denominación gauchista, el recién fundado Partido Socialista Francés. Lograda la victoria[44], el gobierno encabezado por los radicales centró sus prioridades en la democratización del Estado, la secularización de la sociedad y la aprobación de varias reformas de contenido social. La alianza se mantuvo hasta 1914 sin que se formalizasen nuevos pactos y teniendo como columna vertebral al Partido Republicano Radical y Radical-Socialista (PRRRS) que surgió de la fusión de los dos que formaban parte de su nuevo nombre, pero inclinado a pactar con fuerzas de centro-derecha, lo que contribuyó al decaimiento del pulso reformista[45]. De hecho, desde 1910 la escena política estuvo presidida por el ascenso de los aires nacionalistas y militaristas, convertidos en el eje central de la confrontación política: situación que alejaba las posibilidades de aplicar mejoras sociales y fomentaba un tipo de debates antipáticos para la acción política de los republicanos de izquierda y de los socialistas.

Los debates giraban alrededor del enfrentamiento tradicional de Francia con Alemania, haciendo que las principales controversias tuvieran que ver con la política exterior y el fortalecimiento del ejército, con propuestas como la ampliación a tres años del servicio militar. El PRRRS ganó las elecciones de 1914 oponiéndose a esa ampliación y propugnando un relajamiento de las tensiones militaristas; sin embargo, el líder de los Republicanos Oportunistas, Raymond Poincaré, que ocupaba la presidencia de la república desde el año anterior, alimentó la demagogia, insuflando afanes belicistas con el propósito añadido de disputarle al gobierno el control de los poderes ejecutivos. La tensión alcanzó su punto de no retorno cuando fuerzas similares que prevalecían en Alemania accionaron los mecanismos que definitivamente desencadenaron la guerra, provocando un cambio radical de las coordenadas políticas del continente.

Estallada la guerra, se formó un gobierno de unidad nacional con todas las fuerzas políticas, la Union Sacrée, cuyas consecuencias serían traumáticas para

el Partido Socialista, como muestra el siguiente apartado. La primacía absoluta de los valores patriótico-militares supuso la introducción de restricciones al ejercicio de los derechos democráticos, incluyendo la prohibición de huelgas, y el rechazo a todas las propuestas de reforma social. Cualquier asomo de distanciamiento con respecto a los valores dominantes era tachado de derrotista y podía ser acusado de traición a la patria, cuyo suelo estuvo invadido por el ejército alemán hasta 1918. Los gobiernos que se sucedieron entre 1914 y 1920 estuvieron dirigidos por distintos partidos republicano-radicales y respondieron a ese patrón de comportamiento.

El viraje político hacia el conservadurismo puro y duro que flotaba en la escena política se produjo al concluir la guerra y se mantuvo con breves interrupciones hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Las elecciones de 1919 se saldaron con la victoria del Bloc National, una alianza de partidos de derecha favorecida por los cambios del sistema electoral, con circunscripciones plurinominales y listas abiertas que forzaban la creación de alianzas para alcanzar mayorías parlamentarias. El Bloque estaba liderado por una nueva organización de derechas, Federación Republicana, a su vez formada con la fusión de varias organizaciones anteriores, aliándose con varios partidos republicano-radicales. El gobierno, dirigido por el radical Georges Clemenceau, se mostró incapaz de hacer frente a la profunda depresión económica que había legado la guerra, por lo que volcó la atención de la opinión pública en las negociaciones que se celebraban en Versalles para exigir que Alemania reparase con dinero y cesiones territoriales la responsabilidad de haber provocado la guerra. Los temas relacionados con el nacionalismo y el militarismo seguían proporcionando réditos políticos a las posiciones conservadoras. Su dominio siguió renovándose hasta mediados de los años treinta con distintos formatos de alianzas y cambios de nombres de los partidos que las integraban.

En esas dos décadas hubo tres interrupciones, que se analizan en el siguiente apartado, cuyo común denominador fue la brevedad con la que ejercieron el gobierno las fuerzas que se oponían a la hegemonía conservadora: el Cartel des Gauches en 1924-1926, su reedición en 1932-1934 y el Front Populaire en 1936-1938. Las tres veces esas alternativas se truncaron antes de que finalizasen las legislaturas. De ese modo, cuando las posiciones conservadoras caían derrotadas ante los afanes de cambio de la mayoría de los votantes, automáticamente se ponían en marcha dos resortes que impedían llevar a cabo transformaciones de envergadura: la reacción de los grandes poderes económicos para que no se perjudicaran sus intereses y la debilidad y la falta de atrevimiento de las

organizaciones opositoras que accedían al gobierno. El resultado posterior era la desilusión de aquella mayoría social, la derrota de las fuerzas de centro-izquierda y la restauración de la mayoría conservadora.

Aquellos breves vaivenes de la escena política se asemejaban a los cortos intervalos de primacía electoral de liberales y laboristas en Gran Bretaña en 1924 y 1929-1931, cuyo trasfondo común era el dominio de los resortes políticos del poder en manos de una oligarquía económica y una elite conservadora. Cuando la cuerda de la confrontación comenzaba a tensarse, la hegemonía conservadora mostraba su capacidad para cohesionar los intereses de los propietarios y atraer a otros grupos sociales, diluyendo la fuerza de las alternativas contrarias y dando al traste con las expectativas suscitadas. Los mecanismos de inhibición de la acción colectiva empleados por los grupos dominantes, unidos a la instrumentalización del sistema electoral, se retroalimentaban con la heterogeneidad de la estructura social y las limitaciones de la acción política por parte de las organizaciones obreras.

La estructura social que configuró el desarrollo capitalista en Francia desde mediados del siglo XIX presentaba un grado de diversidad superior al de Gran Bretaña, como consecuencia de la menor densidad industrial, el menor ritmo de urbanización y la mayor influencia del medio rural. En 1914, el peso de la producción industrial en el PIB era del 30% en Francia, mientras que superaba el 40% en Alemania y alcanzaba el 45% en Gran Bretaña. La concentración de grandes empresas manufactureras tenía lugar en un número reducido de ciudades, a la vez que en los entornos urbanos proliferaba un sinfín de pequeños y medianos propietarios de comercios y otros establecimientos de servicios. El peso rural se reflejaba en la amplitud del número de pequeños y medianos propietarios agrarios. La apuesta por una administración fuerte dio lugar a un rápido aumento de los organismos estatales, con un gran número de funcionarios públicos que guardaban fidelidad a unos mandos superiores acusadamente conservadores.

PARTIDOS OBREROS: GESTACIÓN, TRAUMAS Y ALIANZAS

El reconocimiento legal de los sindicatos en 1884 impulsó el asociacionismo obrero, tanto por ramas como en los territorios locales y a escala nacional, pero con importantes diferencias con respecto a las trade unions británicas. El número de afiliados era considerablemente menor, aunque pasó de 200.000 en 1890 a 1,5 millones en 1910, poniendo de manifiesto que el tamaño de la industria y, en particular, la existencia de grandes empresas manufactureras y mineras era significativamente menor que en Gran Bretaña. Surgieron varios sindicatos distintos a escala nacional, pero con el tiempo prevaleció la Confédération Générale du Travail (CGT), creada en 1895, cuyas prácticas distaban muchos de las que llevaba a cabo el sindicalismo británico en los comienzos del siglo XX.

La CGT nació con una fuerte influencia de varias corrientes relacionadas con el sindicalismo revolucionario, presentando dos características principales: su orientación estratégica a favor de una revolución social y su autonomía política y organizativa con respecto a cualquier partido. La Carta de Amiens aprobada en el congreso de 1906 insistía en esa doble labor reivindicativa y revolucionaria y en la plena independencia. Una declaración similar a la marcada por las ideas anarcosindicalistas por lo que la acción política de la CGT rivalizaba con la que llevaban a cabo las distintas organizaciones socialistas, sin mantener con estas ningún lazo de dependencia orgánica. De hecho, fue en el sindicato donde anidaron con más frecuencia las posiciones políticas más radicales y las propuestas de acción más contundentes. Fueron las ramas del sindicato las que encabezaron directamente muchas movilizaciones para exigir que el gobierno y el parlamento adoptasen reformas laborales y sociales, y para denunciar que muchas organizaciones empresariales se negaban a negociar con ellas. Como contrapartida, la CGT limitaba su capacidad para atraer a los trabajadores que sólo estaban dispuestos a defender demandas de carácter laboral mediante procedimientos sindicales como los que practicaban las trade unions. Fue a partir de los años veinte cuando amainó la influencia de las posiciones más radicales dentro del sindicato, a la vez que ganaban influencia los militantes socialistas y, posteriormente, los comunistas.

Confluencias socialistas y trances traumáticos

Las diferencias con la experiencia británica se constataban también en el proceso

de formación del partido obrero, creado, como el Partido Laborista, a principios del siglo XX. Las posiciones socialistas hicieron su aparición en la vida política francesa en los años treinta del siglo XIX, dejando una huella política e ideológica que no borraron los aciagos desenlaces de los episodios insurreccionales de 1848 y 1871. En parte, porque la presencia socialista se mantuvo a través del liderazgo ejercido en muchas movilizaciones obreras, la defensa de represaliados políticos, su participación en algunos partidos republicanos y su gestión en los gobiernos municipales. Durante la última década del siglo destacaban tres corrientes que, después, confluyeron en la creación de un único partido socialista, que tomó el nombre de Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO).

Una primer corriente había heredado las ideas reformistas de Louis Blanc basadas en promover un proyecto socialista cuyo discurso se basaba en la transformación paulatina del capitalismo mediante avances graduales y participando en el escenario creado por la democracia política. Las elecciones permitirían acceder al control del Estado para dotar de mayor profundidad a las reformas que abrirían paso al socialismo. Esta tendencia apoyó la participación en el gobierno de concentración formado en 1899, presidido por Pierre Waldeck-Rousseau, con el objetivo de defender la república frente a las acometidas involucionistas[46]; después participó en el Bloc des Gauches. Jean Jaurès era el líder de esos socialistas reformistas y contaba con gran prestigio entre amplios segmentos obreros, si bien el grupo más numeroso era el que se agrupaba en torno a la Federación de Trabajadores Socialistas de Francia (FTSF), cuyos planteamientos iniciales, más radicales, evolucionaron hacia el reformismo.

Una segunda corriente había asumido el proyecto comunista de Marx y Engels, con ciertos elementos basados en el viejo espíritu jacobino. Su discurso proponía la lucha frontal contra el Estado y contra la propiedad capitalista. Su acción política no pasaba por la participación en las instituciones de la república parlamentaria, considerando que la democracia política sólo servía a intereses burgueses. Negaban por ello cualquier alianza con los partidos republicanos, pagando el precio de quedar marginados en el desarrollo de la escena política. La fusión de varios pequeños grupos dio lugar en 1882 a la creación del Partido Obrero de Francia (POF), liderado por Jules Guesde y Paul Lafargue (yerno de Marx), con escasa influencia en los medios obreros.

La tercera corriente estaba representada por dos organizaciones. El Partido Obrero Social Revolucionario (POSR) se mantenía próximo al

anarcosindicalismo, no en vano su líder, Jean Allemane, participó en la creación de la CGT. Se oponía a participar en las elecciones y a colaborar con los partidos republicanos, pero tras la crisis de 1898 una parte de sus miembros apoyó al gobierno de concentración. El Comité Central de la Revolución, que después formó el Partido Socialista Revolucionario (PSR), se inspiraba en las ideas de Blanqui, bajo el liderazgo de Édouard Vaillant. Eran partidarios del sindicalismo revolucionario a la vez que apoyaban los movimientos por reformas democráticas y sociales, pero el centro de su acción política consistía en la preparación de episodios revolucionarios, confiando en que mediante actos minoritarios, conspirativos, podrían arrastrar movimientos masivos de apoyo[47].

Un paso intermedio hacia la convergencia lo dieron por separado, de un lado, los reformistas de la FTSF y los alemanistas del POSR acordando crear el Partido Socialista Francés, y, de otro lado, los marxistas del POF y los blanquistas del PSR formando el Partido Socialista de Francia. La unificación de todas las corrientes se produjo en 1905, bajo los auspicios de la II Internacional, fundando la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO). La confluencia de tendencias que seguían mostrando discrepancias considerables se sustentó en un compromiso que podría ser calificado como salomónico. De un lado, la definición del proyecto socialista y del discurso se ceñía a los postulados marxistas, con algunos perfiles añadidos por los blanquistas, de modo que el centro de gravedad estratégico era la revolución socialista. Así, tras el primer éxito electoral registrado en 1906, al año siguiente, en el congreso celebrado en Nancy, Guesde insistía en que los millones de votos logrados servían para «dar el impulso final, haciendo valer el derecho a la insurrección, llevando a cabo la revolución ineluctable»[48]. De otro lado, la acción política se ceñía a los postulados reformistas, proponiéndose defender las reivindicaciones democráticas y sociales de los trabajadores y participar en las instituciones representativas de la república. Recogiendo ese compromiso con el largo plazo y esa vocación reformista, Jaurès señalaba que «el partido socialista debe proponer constantemente al proletariado el orden colectivista como final del camino de todos los esfuerzos [a la vez que] debe trabajar con todas sus fuerzas por lograr sucesivas reformas»[49].

El estreno electoral de la SFIO en 1906, apenas unos meses después de su fundación, reflejó su incipiente influencia social, logrando el 10% de votos en 1906, elevado posteriormente al 13% en 1910 y a casi el 17% en 1914. Sin embargo, la creciente fuerza política de los socialistas se quebró bruscamente

como consecuencia de dos trances traumáticos consecutivos: su posición ante el estallido de la Primera Guerra Mundial y la escisión del partido promovida por la III Internacional.

Tanto los sindicalistas de la CGT como los socialistas de la SFIO se habían opuesto con firmeza a las ideas militaristas y nacionalistas que arreciaban en la vida francesa desde 1910. Ambas organizaciones apoyaban los acuerdos adoptados por la II Internacional, oponiéndose con firmeza a un eventual conflicto bélico que dividiría a los obreros por nacionalidades. Ante la eventualidad de la guerra, el propio Jaurès propuso que la respuesta de los socialistas europeos fuera la convocatoria de una huelga general en todas las naciones implicadas. Sin embargo, llegado el momento de la verdad, en el verano de 1914, cuando los socialistas alemanes (SPD) apoyaron la guerra promovida por el káiser, la mayoría de los partidos socialistas europeos cerraron filas con sus respectivos gobiernos nacionales. Así lo hizo la SFIO. El asesinato de Jaurès a manos de un fanático ultranacionalista privó a los socialistas de su líder más prestigioso y el mayor exponente de la oposición a la guerra.

La SFIO se vinculó a la Union Sacrée y también la CGT cerró filas con las posiciones nacionalistas. El resentimiento francés por las pasadas derrotas infligidas por el ejército alemán, y el miedo al reaccionarismo de la monarquía imperial del káiser, pesaron tanto como el temor a las consecuencias de quedar marginados ante la oleada de fervor patriótico. Los líderes socialistas Vaillant y Guesde se convirtieron en ministros de un gobierno de unidad nacional que, en aras de las necesidades militares, introdujo restricciones al ejercicio de las libertades, prohibió las huelgas, reprimió las que a pesar de todo surgieron y financió los créditos de guerra. La SFIO quedó atrapada en un contexto netamente adverso que, tanto desde el punto de vista de las ideas dominantes como de las medidas implementadas, sólo favorecía a los partidos de derechas. A finales de 1915 surgió, entre las filas socialistas, un primer intento de distanciamiento con respecto al magma nacionalista. La fracción encabezada por Jean Longuet, nieto de Marx, propuso buscar una paz negociada, lo que implicaba la retiraba del apoyo incondicional a la guerra. Sin embargo, tal propósito suscitó la oposición frontal de todos cuantos se alineaban en torno a un nacionalismo belicista cuyo único objetivo era derrotar militarmente a los alemanes.

Otra vía de cierto distanciamiento emprendida por los socialistas fue la presentación de propuestas de contenido social, como sucedió en 1916 con la

iniciativa para aplicar un impuesto sobre la renta. El parlamento, dominado por los conservadores, rechazó la propuesta. Más tarde, a comienzos de 1917, los ministros socialistas se retiraron del gobierno, pero la SFIO continuó formando parte de la Union Sacrée. La derechización política y social se alimentaba del hecho de que parte del territorio francés seguía ocupado por el ejército alemán, y se hizo más intensa a raíz del miedo infundido entre amplios sectores sociales por los ecos de la revolución bolchevique en Rusia. Cualquier postura disidente de la Unión Sagrada era motivo de anatema, siendo tachada de antipatriótica y bolchevique. Concluida la guerra, las elecciones celebradas en 1919 sancionaron el triunfo de la coalición conservadora, convirtiendo a la SFIO en el principal partido de una oposición que compartía con el PRRRS[50].

Seguidamente, sobrevino el segundo trance traumático: la ruptura de la SFIO en el congreso de Tours en diciembre de 1920. La misma escisión que sufrieron casi todos los partidos socialistas europeos, si bien fue en la SFIO donde la ruptura adquirió mayor contundencia. Tras el triunfo bolchevique en Rusia y la creación de una III Internacional (Komintern) controlada por los dirigentes soviéticos, en el verano de 1920 su segundo congreso acordó las célebres 21 condiciones que debían cumplir los partidos que quisieran formar parte de esa organización internacional, que cabría resumir en cuatro requerimientos: defender el proyecto y el discurso revolucionario basado en la metáfora comunista, organizar un partido centralizado según los cánones leninistas, defender a la Unión Soviética y romper los lazos orgánicos y políticos con las posturas reformistas. Esas fueron las condiciones que debatió y sobre las que resolvió la SFIO en el congreso de Tours.

En primera instancia, la gran mayoría de los asistentes (75%) se decantó a favor de los planteamientos revolucionarios y acordó suscribir el programa de la Komintern, si bien una parte de quienes compartían esa posición no deseaba la ruptura de la SFIO, por lo que propuso que todo el partido se integrase en la Internacional. La propuesta fue rechazada y, a continuación, aproximadamente dos tercios de los congresistas decidieron crear un nuevo partido, que inicialmente se denominó Sección Francesa de la Internacional Comunista y más tarde Partido Comunista de Francia. Sólo una quinta parte de los asistentes, liderados por Léon Blum, se mantuvo en la SFIO, negándose a integrarse en lo que Blum calificó como «leninismo o blanquismo en salsa tártara». Otra minoría siguió a Jean Longuet, abandonando la SFIO sin integrarse en el PCF. El debate se reprodujo en la CGT y derivó también en ruptura. Los sectores afines a la alternativa comunista crearon la CGT-Unitaria[51].

La escisión hizo inviable la posibilidad de formular una alternativa obrera que aprovechara la ostensible debilidad de los partidos conservadores en plena depresión económica y ante el creciente descontento social por las promesas incumplidas. Como tantas otras veces, la ruptura hizo que socialistas y comunistas pasaran a considerarse, recíprocamente, como el principal adversario político. Para provecho de los partidos de derecha, que siguieron manteniendo su dominio, instalando una agenda de prioridades políticas que favorecía sus posiciones, basada en la preocupación por el orden público, el cobro de reparaciones y el castigo a Alemania por la guerra, el fortalecimiento del ejército y la recuperación de los valores católicos.

Coaliciones electorales

La SFIO, mermada por la escisión, moderó más sus posiciones políticas, acercándose a los partidos con los que formó el Cartel des Gauches, aunque su proyecto programático retuvo formalmente el discurso revolucionario propio de la formulación marxista con la que se había fundado el partido. Acentúo así la distancia entre el discurso programático y la acción política reformista, ausente esta de los propósitos transformadores que parecían necesarios para establecer un programa económico con el que hacer frente a la profunda recesión existente desde una perspectiva favorable a los trabajadores. Por su parte, el PCF se dotó de un discurso igualmente revolucionario al que pretendió supeditar su acción política, de modo que sostuvo un tipo de propuestas maximalistas que lo aislaban del juego político y disminuían severamente las posibilidades de que ganara influencia social.

El Cartel des Gauches triunfó en 1924 haciéndose eco del descontento social provocado por esas enormes dificultades económicas que soportaba la mayoría de la población. Aprovechó también las oportunidades de un sistema electoral que favorecía la obtención de mayorías mediante coaliciones. El gobierno conservador era incapaz de aplicar medidas de reforma, persistiendo en una política económica que empobrecía más a los trabajadores y a parte de las capas medias. A la vez, el ejército francés invadía la cuenca alemana del Ruhr y muchos sectores sociales observaban con temor cómo las ambiciones de Poincaré y otros líderes conservadores, que seguían deslizándose hacia el

militarismo, pretendían restarle funciones al parlamento y promovían un acercamiento a la jerarquía católica que amenazaba con una vuelta atrás de los logros laicos impulsados desde 1880.

El sistema electoral hizo que los partidos de derechas y centro-derecha, presentándose por separado, obtuvieran un porcentaje ligeramente inferior de votos pero bastantes menos diputados que la alianza electoral formada por el PRRRS y otros republicanos, SFIO y el Partido Radical, quedando fuera de la coalición el PCF[52]. A la hora de formar gobierno, los socialistas prefirieron mantener un apoyo externo sin integrarse, en tanto que los comunistas optaron por situarse en la oposición y participaron en el fuego cruzado que, desde el otro extremo, lanzaban los partidos de derecha. La carencia de un programa económico adecuado y la lentitud de la recuperación económica acentuaron las debilidades del Cartel, que se vio sometido a divisiones internas cada vez más intensas. Dos años después, cuando el Banco Central estaba a punto de declarar la suspensión de pagos, ante el acelerado aumento de la deuda externa, el gobierno presidido por el radical Édouard Herriot presentó la dimisión. El presidente de la república decidió nombrar como sustituto a un dirigente de Unión Nacional, lo que supuso la disolución del Cartel.

Con la lección bien aprendida, la derecha concurrió unida a las elecciones de 1928, cosechando la mitad de los diputados y volviendo a formar gobierno. La SFIO y el PRRRS sólo descendieron ligeramente, mientras que el PCF elevó su modesto porcentaje de votos pero redujo el número de diputados[53]. Este hecho provocó una agria disputa con la coalición republicano-socialista. Los candidatos comunistas que habían sido minoritarios en la primera vuelta de las elecciones se negaron a retirarse en la segunda, lo cual, debido al sistema de circunscripciones uninominales, restó posibilidades a los candidatos de SFIO-PRRRS mejor situados y favoreció al candidato de la coalición de derechas. No obstante, el futuro de la mayoría conservadora tampoco resultó halagüeño, ya que al poco tiempo la crisis económica internacional estalló y cortó de raíz la recuperación de la economía, sumiéndola en una depresión bastante profunda.

Se fraguó entonces una nueva contienda electoral en la que se presentaron dos bloques de coaliciones. La novedad en el centro-izquierda (un remedo del Cartel des Gauches) era el cese de la beligerancia del PCF. Sin formar parte de la coalición, aceptó que en la segunda vuelta se retiraran sus candidatos sin opciones para favorecer a los candidatos de la coalición que estuvieran mejor colocados. Las dos coaliciones tuvieron votos similares, pero el reparto de

escaños se decantó holgadamente hacia la alianza de centro-izquierda[54]. La senda seguida por el gobierno, otra vez con el radical Herriot al frente, fue similar a la de 1924-1926. Los socialistas quedaron fuera del gobierno porque disentían de la orientación de la política económica, marcadamente conservadora. Desde el principio consideraron que, en plena crisis económica, las medidas propuestas por los republicanos estaban condenadas al fracaso y aumentarían las penalidades de los trabajadores, los desempleados y otros grupos sociales más débiles.

Reapareció entonces un fenómeno que parecía superado, pero que sucesivos escándalos en el gobierno y en el sector empresarial, junto con el reciente ascenso de los nazis en Alemania, volvieron a poner a la orden del día: las presiones militaristas, ultranacionalistas y xenófobas; ahora encabezadas por organizaciones de extrema derecha como Solidarité Française, Creux de Feu y varias asociaciones de excombatientes. Después de múltiples cambios de gobierno, la coalición se rompió en febrero de 1934 a raíz de una manifestación convocada por las organizaciones fascistas que derivó en fuertes disturbios. Como había ocurrido en los años veinte, tampoco los gobiernos de la derecha lograron la estabilidad política, lo que hizo necesaria la convocatoria de elecciones para 1936. Entre tanto, una huelga convocada por los sindicatos para frenar la amenaza de un golpe fascista proporcionó la ocasión para que la SFIO y el PCF forjasen un primer precedente de colaboración. Dejaron en suspenso las descalificaciones que se habían cruzado durante década y media con el fin de impulsar la movilización social en contra de aquellas presiones reaccionarias. Los dirigentes de la SFIO amainaron su anticomunismo y los del PCF dejaron de considerarles traidores social-fascistas.

Una plataforma acordada por la SFIO y el PCF sirvió de base para elaborar un programa común que después fue negociado con el PRRRS y otras fuerzas republicanas de centro-izquierda, con el objetivo de formar una coalición, el Front Populaire. El objetivo prioritario era defender la república parlamentaria, cerrando el paso a las fuerzas de extrema derecha, y aplicar un paquete de reformas democráticas y sociales tendentes a mejorar la situación de los trabajadores y los demás grupos sociales castigados por la crisis. El alcance de las reformas que recogía la propuesta SFIO-PCF sufrió recortes por parte de los aliados republicanos, desapareciendo algunas medidas de política económica y otras que apuntaban a cambios estructurales relativos a la nacionalización de grandes industrias y bancos. SFIO y PCF aceptaron esos recortes porque valoraban que era imprescindible contar con las fuerzas de centro-izquierda para

aspirar al triunfo electoral. En el ámbito político, el programa garantizaba las libertades cívicas, prohibía las bandas fascistas, exigía la clarificación de las formas de financiación de los periódicos, defendía el laicismo de la educación y proponía la nacionalización de las fábricas de armas y la eliminación del comercio privado de armas para evitar que la política exterior estuviera condicionada por negocios privados. En el ámbito económico, defendía que la política monetaria del Banco Central sirviera para impulsar la demanda interna y estimular así el crecimiento de la producción. Otras medidas reducían la jornada laboral sin descenso del salario, fijaban un plan de obras públicas, incorporaban la protección a los desempleados, garantizaban las pensiones de los jubilados y la regulación de los precios agrarios para eliminar a los especuladores. Era un programa económico inspirado en el New Deal que la Administración Roosevelt venía aplicando desde 1933 en Estados Unidos.

Los partidos del Frente Popular concurrieron por separado a la primera vuelta de las elecciones, presentando sus propios candidatos y programas, con el compromiso de apoyar al partido mejor situado en la segunda vuelta, y posteriormente formar una mayoría parlamentaria para gobernar con el programa común. De ese modo, la mayoría de votos lograda por el Frente Popular en la primera vuelta se hizo más contundente en la segunda. La SFIO se convirtió en la mayor fuerza parlamentaria y el PCF logró un fuerte aumento de su representación, aunque la suma de diputados de ambos partidos seguía siendo inferior a la de los partidos de derecha, lo que confirmaba la necesidad de contar con los republicanos de centro izquierda[55]. Sin hegemonía, los partidos obreros debían pagar el peaje de aliarse con alternativas políticas que sólo aceptaban ciertas reformas sociales, ya que los partidos republicanos y radicales representaban principalmente a pequeños agricultores, funcionarios, profesionales y trabajadores de servicios, además de algunos segmentos obreros.

El gobierno frentepopulista estuvo presidido por el líder socialista, Léon Blum, y contó con la participación de socialistas, republicanos y radicales, mientras que los comunistas optaron por prestar su apoyo externo. Desde su inicio, el gobierno se encargó de atemperar las grandes expectativas que el triunfo electoral había generado entre los trabajadores. De hecho, tras la segunda vuelta, a lo largo del mes de mayo se desató un clima de euforia plasmado en movimientos huelguísticos y ocupaciones de fábricas, bancos, comercios y otros servicios. La mayoría de las veces se trataba de reacciones espontáneas en las que participaban militantes de las organizaciones locales de los sindicatos y del PCF. Las primeras medidas del gobierno se atuvieron a la aplicación de las

propuestas que figuraban en el programa común. El gobierno promovió un pacto entre sindicatos y patronal para aumentar los salarios, fijó la semana laboral de 40 horas, garantizó dos semanas de vacaciones pagadas, consolidó la negociación colectiva en las empresas, nacionalizó las fábricas de armamento, mejoró los precios agrarios, reguló la jubilación de los mineros, estableció el seguro de desempleo y aumentó el presupuesto para realizar obras públicas.

Los dilemas y las fricciones llegaron a continuación en la medida en que las disposiciones adoptadas eran claramente insuficientes para lanzar el crecimiento de la economía, mientras que los grandes empresarios no estaban dispuestos a que se aplicasen medidas estructurales que fueran contrarias a sus intereses. Ante esa postura, la mayoría del gobierno, compuesta por los republicanos, radicales y parte de los socialistas, se negaba a colisionar con el poder económico. De esa manera, en presencia de múltiples restricciones, externas e internas, políticas y económicas, la dinámica reformista del gobierno quedó paralizada e incluso dio varios pasos atrás, como fue la decisión de congelar los salarios. La ausencia de mayores cambios económicos y sociales hizo que el descrédito del gobierno cundiera entre los núcleos más activos de los trabajadores y que muchos otros sectores se desanimaran, mientras que las fuerzas conservadores atacaban al gobierno y los mandos militares reclamaban más financiación para el ejército. La debilidad del gobierno fue también la que le indujo a aceptar la meliflua posición, defendida por el gobierno británico y por los partidos radicales franceses, de declarar la «neutralidad» ante la guerra que en España libraba la República contra un levantamiento fascista que contaba con el apoyo de los gobiernos de Alemania e Italia.

La acumulación de adversidades condujo a la dimisión de Blum en junio de 1937, sólo un año después de que hubiera formado gobierno. El Frente Popular se encontró abofeteado por la encrucijada que formaban el descontento popular ante la indigencia reformista, el ascenso de la derecha en sus versiones más extremas y los condicionamientos externos de la política internacional. Primero fue un dirigente radical quien se puso al frente del gobierno y después volvió Blum, solicitando que se le concedieran poderes especiales en el ámbito financiero para afrontar la crisis. La negativa del Senado dio paso a la dimisión de Blum y la desintegración del Frente Popular en abril de 1938. El nuevo gobierno del radical Daladier se dedicó a revertir las medidas iniciales que había puesto en marcha el Frente Popular. El deterioro de la escena política se acentuó con el paso de los meses, conforme los presagios de una nueva guerra inminente se iban haciendo realidad. Tras el pacto Ribbentrop-Molotov firmado por la

Unión Soviética y Alemania, en septiembre de 1939 el PCF fue declarado ilegal. En junio de 1940, la invasión alemana del territorio francés fue seguida de la firma de un armisticio colaboracionista por parte del gobierno presidido por el ultraconservador mariscal Philippe Pétain.

La disolución del Frente Popular marcó el final de la trayectoria recorrida por los dos partidos obreros en las últimas décadas, mostrando sus fortalezas y debilidades. En el lado positivo figuraba su capacidad para movilizar y organizar sindicalmente a los trabajadores, logrando ciertas mejoras de los salarios y las condiciones laborales en unas décadas difíciles, marcadas por las secuelas depresivas de la Gran Guerra y la crisis económica internacional, que castigaron duramente a los trabajadores. También hay que contabilizar la fuerza política que hizo posible que desde el parlamento, el gobierno y los ayuntamientos se aprobasen normas que reconocieron ciertos derechos laborales y una incipiente protección social, a la vez que mejoras en las viviendas y los barrios obreros, así como el laicismo de la vida social. En sucesivas ocasiones los movimientos sociales tuvieron que defenderse para evitar involuciones en los derechos conseguidos. Las breves oportunidades en las que la SFIO formó parte de alianzas ganadoras (1924, 1932, 1936) redundaron en modestas oportunidades de elevar los logros conseguidos por los trabajadores.

En el lado negativo, esa brevedad de los gobiernos alternativos era la palpable evidencia de las flaquezas mostradas por los partidos obreros: el debilitamiento recíproco que supuso la ruptura de SFIO, la reiterada imposibilidad de encontrar puntos de encuentro desde los que superar la actitud temerosa y el exceso de pragmatismo adaptativo de los socialistas, a la vez que la propensión al aislacionismo y el maximalismo de los comunistas. Cuando encontraron ese nexo, en 1936, no tuvieron capacidad para construir una hegemonía política que dotara al Frente Popular de una firme orientación reformista para vencer la resistencia por parte de los poderes económicos a que se introdujesen cambios estructurales. El cúmulo de flaquezas explica que los episodios electorales en los que triunfó la coalición con partidos republicanos y radicales fueran breves paréntesis en el transcurso de los sesenta años de la tercera república. La vida económica siempre estuvo en manos de la oligarquía dominante mientras que la dinámica política, a merced de los partidos centristas y de derecha, estuvo con frecuencia sometida a tensiones nacionalistas y militaristas que siempre perjudicaron a los partidos obreros.

Más aún que en Gran Bretaña, la heterogeneidad de la estructura social, la

solidez de los mecanismos inhibitorios dominantes y las flaquezas de los partidos obreros explican conjuntamente la continuidad de las relaciones de poder. Pero, en el caso francés, con el añadido de la gran importancia que tuvieron dos factores contingentes: la guerra mundial y la escisión sufrida en el congreso de Tours, que condicionaron el devenir de los dos partidos obreros y del conjunto de la escena política francesa.

[1] Los dos primeros eran la nobleza y la iglesia; el tercero incluía a los representantes del resto de la población con derecho a voto censitario, compuesto por quienes pagasen impuestos como muestra de que tenían propiedades.

[2] El tercer estado logró que se duplicara su representación, alegando que representaba a casi el 99% de la población. Mediante sufragio censitario fueron elegidos representantes de los propietarios burgueses, abogados, médicos y otros profesionales vinculados a la Ilustración. La difusión de la Encyclopédie a partir de 1751 había contribuido a desvelar las raíces del dominio de la aristocracia y la religión, incentivando las críticas contra el monarca absolutista y los privilegios de la nobleza y la iglesia. Aumentaron así las voces que reclamaban derechos civiles y reformas contrapuestas a los derechos divinos, la tradición y la tiranía.

[3] El tercer estado disponía de 654 representantes, la nobleza y el clero tenían 331 cada uno, además de 19 representantes de las colonias.

[4] Esa decisión rompía con la legalidad vigente, pero fue aceptada por el rey cuando entró en el ayuntamiento y reconoció al líder de la revuelta, Jean-Sylvain Bailly, como mandatario parisino. También aceptó reponer a los ministros que había destituido y otras demandas surgidas durante las movilizaciones.

[5] Según la Declaración, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; estos son naturales e imprescriptibles; incluyen la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; la fuente de toda soberanía reside en la nación; la ley sólo puede prohibir las acciones que sean perjudiciales a la sociedad; el derecho de propiedad es inviolable y sagrado, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de manera evidente, y con la condición de que haya una indemnización previa y justa.

[6] La Asamblea Nacional confiscó los bienes de los aristócratas y burgueses

que habían salido del país para unirse a las fuerzas militares que se proponían derrocar al nuevo régimen. A continuación, Luis XVI huyó con su familia de las Tullerías para sumarse a la contrarrevolución, siendo detenido y acusado de pretender unirse a ejércitos extranjeros para acabar con la revolución.

[7] La Asamblea Legislativa supuso una renovación total de los representantes ya que, a propuesta de Robespierre, los miembros de la Asamblea Nacional no podrían ser candidatos a la nueva asamblea. Las elecciones mantuvieron el carácter censitario, pudiendo participar los contribuyentes que pagasen impuestos equivalentes a tres días de trabajo para ser elegidos, y a diez días para ser electores.

[8] Esas denominaciones, igual que la de feuillants que recibían los constitucionalistas, respondían a los lugares (antiguos conventos) en los que se reunían los respectivos clubes políticos.

[9] Un ejemplo fue el debate sobre el castigo que merecía el rey Luis XVI. Los jacobinos plantearon el valor simbólico que tenía acabar con la figura física del monarca al cabo de siglos de opresión y tiranía absolutista. Robespierre cerró su discurso diciendo: «Aborrezco la pena de muerte, pero Luis debe morir porque la patria debe vivir». La Convención aprobó por una estrecha mayoría la condena a muerte y la sentencia se llevó a cabo en marzo de 1793.

[10] Fue, por tanto, una Constitución non nata, pese a ser muy avanzada. Además del sufragio masculino y el rotundo reconocimiento de las libertades cívicas, introducía el derecho a la educación y el trabajo, y la protección social de los humildes a cargo del presupuesto de los poderes públicos.

[11] Un ejemplo fue la utilización de los asuntos religiosos. Tras celebrar una fiesta en honor al «Ser Supremo», Robespierre forzó que la Convención (ya diezmada) debatiese sobre las ideas religiosas y la asignación de días festivos, con el fin de atacar a los miembros del Comité de Salvación Pública (Billaud-Varenne y Collot d’Herbois) que se declaraban ateos. Contraatacando, esos miembros acusaron a Robespierre de pretender convertir su cargo de presidente del Comité de Salvación en una dictadura personal.

[12] Con el paso del tiempo, muchos de esos rivales se recolocaron en nuevos puestos políticos y contribuyeron a propagar infundios con los que respaldaban un relato que responsabilizaba en exclusiva a Robespierre y su fracción de lo

sucedido entre 1792 y 1794.

[13] Primero se cerró la Convención, después sobrevino una represión generalizada que alcanzó a la mayoría de los representantes de los parlamentos anteriores y se acompañó con la eliminación de las reformas introducidas en esos años. Una nueva Constitución volvió al voto censitario para elegir un «Consejo de los Quinientos» que designaba a los miembros de un «Consejo de Ancianos», y este nombraba a los cinco miembros del Directorio, que ostentaba el poder ejecutivo. A la postre, el Directorio se hizo con todo el poder efectivo y su deriva autoritaria condujo al poder del general Napoleón Bonaparte. Su golpe del «18 de Brumario» instauró una dictadura personal y después se autocoronó como monarca.

[14] Entre ellos no estaba Filippo Buonarotti, que fue quien publicó en 1828 Conspiration pour l'Égalité, dite de Babeuf, donde explicó las características de aquel grupo revolucionario.

[15] Tras la derrota del ejército bonapartista, en 1815, el Congreso de Viena impuso la restauración borbónica con Luis XVIII como rey de Francia. Las pequeñas formalidades que concedió al parlamento fueron recortadas en 1824 por su sucesor, Carlos X, elevando las exigencias censitarias y privando a la cámara baja de casi todas las funciones legislativas.

[16] Se produjeron entonces las primeras protestas obreras entre los tipógrafos de Nantes y los trabajadores textiles de Lyon. Sus reivindicaciones se centraban en mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas. Para afrontar los días de huelga sin recibir un salario se formaron las primeras cajas de resistencia. Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía.

[17] También hubo movilizaciones importantes en varios territorios alemanes, Polonia y otras zonas dominadas por el Imperio austríaco, así como en Bélgica y otros lugares del continente, pero sólo en Francia, por segunda vez, lograron derribar a un monarca con vocación absolutista.

[18] El sufragio censitario sólo reconocía el derecho de voto a unos 200.000 varones, de los que casi una cuarta parte ni siquiera lo ejercía. Los liberales obtuvieron 282 diputados por 104 de los legitimistas y 73 de los republicanos.

[19] Los partidarios de la república lograron 240 diputados, por 199 de los orleanistas y 20 de los legitimistas.

[20] La chispa saltó por la prohibición de uno de los banquetes (organizado por oficiales de la Guardia Nacional) que se venían convocando para protestar contra las restricciones al ejercicio de las libertades de reunión, expresión y asociación. Una manifestación de protesta fue secundada por miles de estudiantes y trabajadores que exigían la dimisión de Guizot y de su gobierno, y la convocatoria de elecciones por sufragio universal. El rey declaró el estado de sitio y envió al ejército, pero la interposición de la Guardia Nacional evitó que se produjeran enfrentamientos directos. Nuevas manifestaciones populares contaron con el apoyo de la Guardia Nacional. Aunque el rey destituyó a Guizot y ordenó la retirada del ejército, las manifestaciones derivaron en el levantamiento de barricadas, robo de armas, quema de edificios públicos y en una concentración ante el Palacio de las Tullerías que reclamó la destitución del monarca.

[21] Los republicanos moderados lograron 600 diputados, por 80 de los radicales socialistas; los monárquicos orleanistas y legitimistas obtuvieron conjuntamente 200 diputados.

[22] «Creían también poder llevar a cabo una revolución proletaria dentro de las fronteras nacionales de Francia […]. La revolución de febrero fue una hermosa revolución (… mientras que) en junio el proletariado de París fue obligado por la burguesía a hacer la insurrección (… lo que) iba implícita su condena al fracaso». Las luchas de clases en Francia, 1848-1850, OEME, tomo I, pp. 217-277.

[23] OEME, tomo I, p. 194.

[24] «Nuestra manera de representarnos el carácter y la marcha de la revolución «social» […] del proletariado, estaba fuertemente teñida por el recuerdo de los modelos de 1789 y de 1830». OEME, tomo I, pp. 193-194. Declara también que: «La historia nos ha dado un mentís […;] demuestra de modo concluyente cuán imposible era, en 1848, conquistar la transformación social simplemente por sorpresa». OEME, tomo I, pp. 196-197.

[25] Si en 1852 los bonapartistas lograron 253 diputados, frente a 10 de monárquicos y republicanos, una década después, en 1863, mantenían 251 diputados, frente a 32 de los opositores.

[26] El desgaste bonapartista se puso de manifiesto en las elecciones de 1869

mediante la división de sus filas entre los que apostaban por una liberalización política (120 diputados) y los que querían que siguiera la dictadura (98), además de 41 legitimistas y 30 republicanos.

[27] Tanto Louis Blanc como Marx y Engels habían desaconsejado cualquier tentativa insurreccional. Marx escribía a Engels: «Toda la sección francesa [de la AIT] se dirige hoy hacia París para cometer tonterías en nombre de la Internacional. Quieren derrocar al gobierno provisional y establecer la comuna de París» (Londres, 6 de agosto de 1870). Sin embargo, una vez que se formó el Consejo Comunal Marx y Engels decidieron cerrar filas en su apoyo. Semanas después de que fuese aplastada la Comuna, Marx redactó en nombre de la AIT La guerra civil en Francia, uno de los mayores alegatos a favor de los comuneros.

[28] Bismarck exigió la rendición incondicional de París, el pago de 200 millones de francos como indemnización y la cesión de las regiones de Alsacia y Lorena, además del desarme de la Guardia Nacional para facilitar la entrada del ejército prusiano en la capital.

[29] Para eludir un enfrentamiento directo, el 1 de marzo el ejército prusiano se limitó a desfilar por varios distritos periféricos y se marchó a las afueras sin que hubiera incidentes.

[30] En un lado, los legitimistas y orleanistas sumaron 400 diputados, además de 72 republicanos conservadores y 20 bonapartistas. En el otro lado, los demás republicanos obtuvieron 150 escaños. Desde sus primeras decisiones, la asamblea dejó patente su carácter extremadamente conservador: se instaló en Versalles (símbolo borbónico), dejó en suspenso la instauración de la república, prohibió los periódicos republicanos, suprimió el salario de los guardias nacionales y eliminó la moratoria sobre el pago de alquileres y deudas. Los nombramientos militares y de altos funcionarios recayeron en destacados monárquicos u otros mandos muy conservadores.

[31] El detonante militar fue la orden dada por Thiers al ejército para que retirase los cañones que defendían París y que habían sido comprados con aportaciones de los ciudadanos. La movilización de civiles parisinos y de la Guardia Nacional contra la orden hizo que una parte de las tropas enviadas se colocaran de su lado y que el resto del ejército tuviera que retirarse. Entonces se precipitaron los acontecimientos.

[32] Llevado por la exageración propia de su apoyo incondicional, Marx calificó la Comuna como «la primera revolución en que la clase obrera fue abiertamente reconocida como la única clase capaz de iniciativa social», cuya misión era «servir de palanca para extirpar los cimientos económicos sobre los que descansa la existencia de las clases y, por consiguiente, la dominación de clase». La guerra civil en Francia, OEME, tomo II, p. 236-238. Un planteamiento que poco tenía que ver con las características de excepcionalidad de aquella encrucijada. Pese a lo cual, la tesis de su ejemplaridad quedó instalada crédulamente en la escolástica de las organizaciones marxistas. La adhesión de Marx a medidas como la disolución del ejército (que no existía) y la desvertebración de los órganos de poder (que tampoco existían en su mayoría), impulsadas por los blanquistas, hizo que irónicamente Bakunin dijera que Marx se había pasado a sus filas.

[33] Para que el paralelismo fuese mayor, a finales de abril la fracción jacobina propuso al Consejo Comunal la creación de un «Comité de Salud Pública», que se aprobó por 34 votos contra 28.

[34] Mientras uno de aquellos líderes declaró: «Yo no administro justicia sino que hago la revolución», otros prestaban más atención a las acciones simbólicas (derrumbe de la columna de Vendôme, destrucción de la casa de Thiers, visceralismo anticlerical) que a las exigencias prácticas del momento. El principal dirigente blanquista, Raoul Rigault, mantuvo entre sus prioridades el canje de Blanqui, prisionero en Versalles, por el arzobispo Darloy, preso en París.

[35] Las reformas urbanísticas de la época bonapartista favorecían el rápido desplazamiento de las tropas a través de amplias y rectas avenidas, mientras que los atrincherados en las barricadas encontraban pocos lugares en los que emplazar sus defensas para que fuesen efectivas.

[36] Expresión utilizada por Merriman (2017), Masacre, Madrid, Siglo XXI, p. 16. Escritores como Victor Hugo y periodistas como el corresponsal de The Times se encargaron de dejar testimonios directos de la crueldad aplicada: miles de fusilados, decenas de miles de condenados a cadena perpetua y un sinfín de deportados. Ciertamente, cuando la frustración se adueñó de los comuneros afloraron ánimos de venganza por parte de grupos dedicados a quemar edificios públicos y realizar ejecuciones sumarias, como la del arzobispo Darloy. Parece que fue la líder Louise Michel quien pronunció la infausta frase de «París será

nuestra o no será». Pero resultaría insultante comparar aquellas (injustificables) acciones desesperadas con el salvajismo masivo y vengativo de que hizo gala el ejército durante la ocupación, primero, y los órganos del Estado, después.

[37] El derecho de voto de las mujeres fue tardío, ya que no se reconoció hasta 1945.

[38] Garantizaba el sufragio masculino para la elección de la Cámara de Diputados, pero creaba un Senado que en parte era vitalicio y en parte se votaba desde los municipios mediante un enrevesado procedimiento que favorecía el caciquismo conservador. Las funciones ejecutivas recaían principalmente en el presidente de la república (elegido por las dos cámaras), apostando «a lo Bonaparte» por una administración fuerte más que por la solidez del gobierno, sometidos ambos a las decisiones del presidente.

[39] La vuelta a los distritos electorales uninominales y otros cambios hicieron prevalecer el peso urbano, contribuyendo a que los dos principales partidos republicanos (Izquierda Republicana y Unión Republicana) tuvieran una holgada mayoría, sumando el 54% los votos y 291 diputados; que, con el apoyo de otros 86 diputados, concentraban casi dos tercios de diputados favorables a la república parlamentaria. Sin embargo, el presidente Mac-Mahon nombró jefe del gobierno a un candidato muy conservador. Al rechazarlo la Cámara de Diputados, el presidente presentó otro candidato conservador y monárquico que suscitó idéntico rechazo. Disuelta la cámara, las elecciones de 1877 arrojaron resultados similares: mayoría republicana del 60% frente al 30% de bonapartistas, legitimistas y orleanistas, y otro 10% diseminado. Cuando el presidente pretendió disolver de nuevo la cámara, contó con la oposición del Senado de mayoría conservadora y se vio obligado a dimitir.

[40] Resulta llamativo el reguero de medidas adoptadas en las dos décadas finales del siglo XIX para establecer el carácter laico de la sociedad: secularización de los cementerios, fin de las restricciones a los funerales civiles y a la cremación de cadáveres; prohibición de que los hospitales públicos mantuvieran capellanes, monjas y salas con nombres católicos; prohibición de celebrar honores militares en edificios religiosos; legalización del matrimonio civil y el divorcio; obligación de que los miembros del clero cumplieran con el servicio militar; prohibición de que las órdenes religiosas impartieran enseñanza escolar; expulsión de las órdenes religiosas beligerantes contra el gobierno; abolición del concordato con el Vaticano y declaración de que la república no

reconocía como propio ningún tipo de culto.

[41] La primera alianza UR-RI sumó el 69% de los votos, además del 8,5% del PR, mientras que la segunda RO-RM sumó el 50%, además del 17% de PRS y PR.

[42] Su dominio fue abrumador. En 1893 obtuvieron el 76% de los votos y, en 1898, más del 65%, logrando también la elección de sus candidatos en la presidencia de la república. A la derecha del espectro político quedaba la minoría formada por los monárquicos legitimistas, orleanistas y bonapartistas, junto con los conservadores republicanos y los boulangistas.

[43] Se descubrió que años antes el ejército había falsificado pruebas para acusar de alta traición (como espía alemán) a Dreyfus, un capitán alsaciano de origen judío.

[44] El bloque logró el 48% de los votos y 314 diputados, correspondiendo la mayor parte al PR, seguido del PRI y el PRRS, con menor presencia del PRS. Fuera quedó el Partido Socialista, con el 2,5% de los votos y 9 diputados. Las fuerzas de derecha lograron la otra mitad de los votos pero sólo 251 diputados, destacando el Partido Republicano Progresista, el Constitucional-Liberal y el Nacionalista.

[45] En 1906 formó mayoría con los Radicales Independientes y los Socialistas Independientes; en 1910 con estos últimos y con los liberales; y en 1914 con los Republicano-Socialistas.

[46] Uno de los obstáculos que presentaba ese gobierno era la presencia del general Gaston Gallifer, uno de los militares que habían dirigido la represión de la Comuna. Muchos críticos pensaban que esa indeseada presencia anunciaba la posición restrictiva que adoptaría el gobierno ante los movimientos sociales.

[47] El consenso entre las distintas corrientes era mayor en cuanto a la participación en las elecciones municipales, por considerar que eran espacios para defender las mejoras de las condiciones de vida y estimular las luchas vecinales.

[48] Citado por K. Papaïoannou (1965), Les marxistes, París, J’ai lu, p. 270.

[49] J. Jaurès, artículo en Le combat, 4 de octubre de 1908.

[50] La SFIO obtuvo el 21% de los votos y el PRRRS el 18%.

[51] A finales de los años veinte se produjo el reingreso en la SFIO de una gran parte de militantes del PCF que rechazaban el estalinismo. En el campo sindical, la reunificación de las dos fracciones de la CGT se produjo en 1936.

[52] Los partidos de derecha lograron el 47% de los votos y 199 diputados, mientras que el Cartel des Gauches, incluyendo al Partido Radical, obtuvo el 48% y 327 diputados. A pesar de su escisión, la SFIO obtuvo más votos que el PRRRS unido a otros republicanos (20% y 18%), pero el reparto de diputados fue de 104 y 183, respectivamente. El PCF cosechó el 10% de votos y 26 diputados.

[53] La coalición de derechas se articuló en torno a la Alianza Democrática y Radicales Independientes y la Federación Republicana. La SFIO y el PRRRS tuvieron porcentajes similares de votos, en torno al 18%, con 100 y 125 diputados, respectivamente. El PCF tuvo el 11% y 11 diputados.

[54] Cada coalición obtuvo cerca de 4,4 millones de votos, pero en escaños la derecha logró 259 y la izquierda 325. En esta, la SFIO volvió a superar en votos al PRRRS (20,5% y 19,2%), pero no en diputados (131 y 157), a los que se sumaban 37 del Partido Republicano Socialista. El PCF redujo su porcentaje de votos al 8% y subió ligeramente en diputados, 19; además, ganó un creciente prestigio entre los escritores, artistas y otros núcleos de la intelectualidad.

[55] En la primera vuelta, el Frente Popular obtuvo cerca de cinco millones y medio de votos frente a 4,2 millones de la coalición de derecha, una relación 57-43%. El PRRRS y otros republicanos lograron 2,2 millones, la SFIO casi 2 millones y el PCF 1,5 millones. Tras la segunda vuelta, el FP sumó 386 diputados por 224 de la derecha, una relación 63-37%. Finalmente, la SFIO tuvo 149 diputados, el PCF 72, y los otros 165 se repartieron entre el PRRRS y otras organizaciones menores.

4. La socialdemocracia alemana como primer partido obrero con fuerza política

El curso histórico de Alemania presentó unas características bastante alejadas de las que habían seguido Francia y Gran Bretaña a lo largo del siglo XIX, tanto su dinámica política general como el desarrollo del movimiento obrero y la implantación del partido socialista. El carácter tardío de la unidad nacional, del desarrollo industrial y, más aún, de la instauración de un sistema político democrático contrasta con la precocidad de la pujanza que cobraron el movimiento obrero y el partido socialista. Alemania fue el primer país que contó con un movimiento obrero masivo, organizado y poderoso, y con un partido obrero con numerosa militancia, gran fuerza política y acelerado avance electoral. Al concluir la Primera Guerra Mundial el partido, escindido en dos, tuvo el control del gobierno y desempeñó un papel decisivo en la construcción de la república parlamentaria. En adelante, la debilidad tanto de los socialistas –también de los comunistas– como del sistema político abocó a un proceso degenerativo del que emergió la fuerza política del partido nazi, que finalmente destruyó las bases de la democracia política y aniquiló a los partidos obreros.

CONDICIONES HISTÓRICAS QUE FORJARON LA FORTALEZA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Al comenzar el siglo XIX, los territorios que más tarde formarían el Estado imperial alemán eran espacios políticos con características y tamaños muy dispares. Unos estaban dominados por noblezas dinásticas, otros por elites eclesiásticas, otros por caballeros militares y otros eran ciudades libres. En términos generales, compartían la existencia de sistemas políticos absolutistas, el predominio abrumador de la agricultura en sus economías y la opresión que soportaban los campesinos sometidos a relaciones feudales. La Revolución francesa de 1789 y la guerra europea impulsada por Napoleón fomentaron la difusión de las ideas de la Ilustración, estimulando las demandas democráticas y

las aspiraciones republicanas frente a las monarquías absolutistas. El reclamo de libertad política espoleó sentimientos diferentes entre los territorios, que en unos se orientaron al logro de autonomía soberana y en otros a favor de la unidad panalemana[1]. Tras la derrota napoleónica, en 1814 la Conferencia de Viena celebrada por las monarquías vencedoras decidió crear una Confederación Germánica, integrada por 38 territorios-estados y basada en la entente de Prusia y Austria; siendo esta segunda la dueña de un imperio que incluía a la mayor parte de los demás territorios del centro y este del continente.

Las dos potencias de la entente tenían monarquías absolutistas, economías agrarias dominadas por terratenientes feudales y contaban con formidables aparatos militar-represivo-funcionariales. La Confederación Germánica les convirtió en rivales que se disputaban el liderazgo, siendo Prusia, como potencia menor, la que tomó más iniciativas con el fin de fortalecer su posición. Una de las más decisivas fue la formación de una unión aduanera (Zollverein) en 1834, con la participación de 18 estados alemanes y excluyendo a Austria. El escaso desarrollo previo hizo que, desde los años treinta, la economía experimentase un rápido crecimiento, gracias a la instalación de las primeras fábricas de manufacturas, el inicio de la construcción del ferrocarril, la inversión en obras públicas y el comercio a través de la unión aduanera. No obstante, la estructura económica seguía teniendo una raquítica base industrial y la mayor parte de la agricultura seguía dominada por relaciones feudales. Hacia 1850, sólo el 12% de la población de los territorios alemanes vivía en ciudades.

Las esperanzas abiertas por los movimientos políticos desatados en la primavera de 1848 quedaron marchitadas cuando las luchas fueron aplastadas definitivamente al año siguiente, sin que después se promovieran modificaciones sustanciales en aquella realidad feudal y absolutista. Como en Francia y otros lugares europeos, el telón de fondo de aquellos movimientos fue el profundo malestar social derivado de las pésimas condiciones de vida de los campesinos y de gran parte de los habitantes de las ciudades, acrecentado por los efectos de la crisis agraria iniciada en 1845. Algunas zonas rurales vivieron levantamientos campesinos contra el anuncio de nuevos impuestos y en algunas ciudades hubo protestas salariales de obreros y reivindicaciones de los artesanos. En su transcurso, esos movimientos fueron incorporando demandas democráticas entre sus aspiraciones. Sin embargo, los movimientos que alcanzaron tonos insurreccionales fueron los que reclamaban la autonomía política y/o la unificación alemana, para lo cual exigían la desaparición de las monarquías despóticas y la creación de repúblicas o monarquías constitucionales.

Haciéndose eco de esas demandas, el parlamento de la Confederación Germánica, el Bundestag, formó una comisión encargada de elaborar una constitución democrática, a la vez que se convocaban elecciones en cada territorio con el fin de formar sus respectivas asambleas constituyentes. En Fráncfort, se reunieron los representantes de los estados que proponían la creación de un parlamento constituyente en una Alemania unida que se agruparía en torno a Prusia y no contaría con Austria. El rey prusiano, Federico Guillermo IV, rechazó la oferta de la corona imperial ya que se oponía frontalmente a que existiera una constitución que instituyese un sistema parlamentario democrático. Lo mismo hicieron los regentes de Hannover, Baviera y otros territorios.

Los propósitos soberanos y unificadores quedaron abortados por la represión militar que aplicaron los regímenes absolutistas. El parlamento de Fráncfort fue disuelto y los insurrectos fueron reprimidos a sangre y fuego. El absolutismo político y el dominio social de los aristócratas no dejaron resquicios para las reformas[2]. Como en la Francia previa a 1789, sólo un reducido núcleo de liberales urbanos y algunos nobles y eclesiásticos ganados por las ideas de la Ilustración mostraban afanes reformistas. Superada la mitad del siglo, el sistema político y la economía sólo habían conocido pequeñas variaciones que no alteraban las características descritas. Todavía en 1870 sólo uno de cada cinco habitantes vivía en las ciudades y sólo uno de cada diez asalariados trabajaba en fábricas.

Imperio unificado y aceleradas transformaciones

Los cambios se precipitaron desde los años setenta y mantuvieron un ritmo acelerado hasta la Primera Guerra Mundial, dando lugar a grandes transformaciones que alteraron de manera radical la situación de Alemania. Se produjo la acelerada consolidación de una poderosa economía industrial, bajo la hegemonía prusiana y con la dirección política del canciller Bismarck. A finales de siglo, esa economía competía con la inglesa y la estadounidense por el liderazgo tecnológico y productivo a escala mundial. Como las otras potencias europeas, Alemania disponía de un imperio colonial en África.

El Estado desempeñó un papel protagonista en esa transformación radical de la

economía sustentada por el desarrollo de la gran industria. Promovió el consenso entre los terratenientes (junkers), que habían dominado la economía agraria durante siglos, y los nuevos propietarios capitalistas. Impulsó la construcción de infraestructuras públicas (carreteras, ferrocarriles, redes eléctricas). Demandó gran cantidad de moderno armamento pesado. Gestionó la participación de los poseedores de la mayor parte de la riqueza acumulada (terratenientes y banqueros) en la financiación de los grandes proyectos industriales. Fue entonces cuando se crearon las empresas que en pocos años producían cantidades colosales de maquinaria, química, metalurgia, electricidad y otras ramas principales. Junto con los grandes bancos (Deutsche Bank, Dresdner Bank y Commerzbank), industrias como Siemens, Basf, AEG, Bayer, Hoechst y otras conformaron un tejido industrial-financiero extremadamente concentrado y muy capacitado para impulsar la tecnología, la organización moderna del trabajo y la formación cualificada de los trabajadores y directivos. También fue destacada la función del Estado en el desarrollo de la alta calidad del sistema educativo y la aplicación de una política proteccionista que evitaba la competencia de productos extranjeros, a la vez que favorecía la expansión de los productos alemanes en los mercados exteriores. Un último factor favorable para la economía fue la abundancia de materias primas (carbón, hierro, otros metales, agricultura) con los que abastecer de recursos a la industria y suministrar alimentos a la población sin depender del exterior. Sin ese cúmulo de elementos, Alemania no hubiera aprovechado las ventajas de «llegar segundo» a la industrialización, como de hecho no lo hicieron muchos otros países.

En el terreno político, el sufragio universal para los hombres mayores de 25 años se introdujo en 1867 cuando Prusia formó la Confederación de Alemania Septentrional y se mantuvo en 1871 cuando la unión se amplió al resto de los estados para formar el imperio (Reich) alemán, con Guillermo I como monarca (káiser). Sin embargo, el reconocimiento del derecho de voto (masculino) no supuso la conversión del régimen monárquico-imperial en un sistema basado en la democracia política. En primer lugar, el parlamento (Reichstag) se formaba mediante sufragio, pero utilizando el método prusiano de las tres clases y con una división de los distritos electorales que favorecía a las circunscripciones rurales; todo lo cual provocaba la sobrerrepresentación de los grupos dominantes tradicionales. A la vez, la mayoría de los estados seguía teniendo parlamentos formados a través del voto censitario, lo cual sesgaba la composición de la segunda cámara (Bundesrat), ya que esta se formaba con delegaciones enviadas por los parlamentos de los estados. Por añadidura, Prusia disponía de derecho de veto para bloquear las decisiones de la cámara que no fueran de su gusto.

En segundo lugar, el ejercicio de las libertades cívicas no estaba garantizado sino que seguía controlado de manera discrecional por el monarca y su gobierno, así como por las autoridades de los estados; unos y otros abrían o cerraban la mano según les conviniera. En tercer lugar, la mayoría de las atribuciones legislativas recaían en el káiser, que era también quien nombraba al gobierno y mantenía el control directo sobre el ejército y la política exterior. Se trataba, por tanto, de un parlamento con limitadas funciones, cuyos miembros carecían de sueldo y cuya representación estaba distorsionada a favor de los grupos sociales dominantes. La presencia de los partidos políticos se ajustaba a los estrechos márgenes que el monarca establecía para que funcionara la vida política. El sistema político se organizaba mediante una cadena jerárquica cuyo vértice era el káiser, por debajo estaban el gobierno y el ejército, y sólo después tenían alguna incidencia el parlamento y los partidos políticos. Esa estructura autoritaria se mantuvo a la vez que la economía y la estructura social experimentaban profundas transformaciones. Con el tiempo, el sufragio universal hizo que aumentase la presencia en los parlamentos de diputados que representaban los intereses de la burguesía industrial, las capas medias urbanas y los trabajadores asalariados, mientras que la existencia de partidos y de grupos parlamentarios posibilitaba una ampliación de las libertades de expresión, reunión, prensa y asociación.

Fue en aquel sistema político en el que el partido socialista llegó a situarse en el centro de la vida política, pero sin posibilidad de acceder al gobierno ni de instaurar una democracia parlamentaria. Fue en aquel sistema, acusadamente reaccionario, donde el Estado se convirtió en pionero a la hora de introducir reformas sociales que los demás países tardaron décadas en aplicar. Y fue en aquel sistema donde el sindicalismo obrero logró importantes mejoras salariales, laborales y sociales, sin que tuviera lugar ningún episodio insurreccional.

Pujanza sindical y reformas sociales

La transformación de la estructura económica y el rápido aumento demográfico alumbraron una concatenación de elementos que explican el fuerte desarrollo del sindicalismo. Entre 1871 y 1914, la población alemana se elevó de 41 a 68 millones y, al final del periodo, más de la mitad de esos habitantes vivía en ciudades de mediano y gran tamaño. La industria, incluyendo la minería y la

construcción, demandaba una cantidad ingente de mano de obra, sobre todo de trabajadores asalariados, que llegaron a representar casi el 45% del empleo total. Una elevada proporción de esos asalariados eran obreros fabriles, que se concentraban en las empresas industriales que impulsaron el acelerado crecimiento de la economía[3].

Se produjo así un rápido incremento de obreros jóvenes que trabajaban y vivían en las periferias de las ciudades. Un terreno abonado para que floreciesen las aspiraciones colectivas de millones de asalariados por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, en unos espacios fabriles y urbanos que favorecían el agrupamiento en organizaciones sindicales y vecinales. La demanda de un número creciente de trabajadores cualificados en la industria favorecía la disposición de las empresas a negociar las condiciones laborales y la formación profesional de los trabajadores. El fortísimo crecimiento de la productividad hacía que esas empresas dispusieran de un amplio margen para ofrecer mejoras salariales y para atender otras demandas relativas a las condiciones de trabajo, la construcción de viviendas, escuelas y centros de salud para sus empleados[4]. Todo ello sin olvidar las múltiples ocasiones en las que la rigidez de los empresarios y la dureza de sus posiciones negociadoras dieron lugar a confrontaciones agudas, con huelgas y otras acciones combativas que a veces derivaron en conflictos fuertes y prolongados.

Como en Gran Bretaña y en Francia, el derecho a organizar sindicatos no estuvo reconocido hasta finales de siglo, por lo que el sindicalismo reivindicativo tuvo que adoptarse a las posibilidades que ofrecían los ámbitos locales. La carencia de libertades fomentó que las protestas laborales se vinculasen con otras de carácter democrático contra el régimen autoritario y que se buscasen formas de coordinación no legales para extender las movilizaciones. Cuando en 1890 acabó la prórroga de las leyes «antisocialistas», luego referidas, ya existían los precedentes que permitieron formar la Comisión General de Sindicatos (GGD), si bien una parte de esos sindicatos prefería mantener su tradición autonomista y daba prioridad al funcionamiento de las agrupaciones territoriales y ramales. Eso explica que dos años después, cuando el Congreso de los Sindicatos acordó elegir una dirección centralizada y concentrar los esfuerzos en las reivindicaciones laborales, un conjunto de sindicatos defensores de la autonomía cuestionó esos acuerdos y se quedó al margen[5].

El fortalecimiento de los sindicatos y su posterior legalización hicieron que los apenas 20.000 afiliados que había en 1870 y los 135.000 en 1890 se convirtieran

en 2,6 millones en 1914, a los que se sumaban otros 800.000 organizados en sindicatos relacionados con partidos católicos y liberales y en sindicatos amarillos. Esa elevada afiliación mostraba la capacidad de los sindicatos para integrar a trabajadores con distintos grados de cualificación y de diferentes actividades. En el terreno práctico, reflejaba también su aptitud para combinar el impulso de movilizaciones reivindicativas y la organización de las acciones con la unificación de los objetivos a negociar con los empresarios.

La vitalidad inicial de los sindicatos adquirió relevancia en el complejo juego político planteado por el canciller Bismarck mientras estuvo al frente del gobierno hasta 1890, siendo imitado después por varios de los cancilleres que le siguieron. La apuesta por el desarrollo industrial bajo un sistema político autoritario hacía que el gobierno tuviera que practicar el doble rasero de «palo y zanahoria» con los trabajadores, conforme la rápida industrialización daba lugar al rápido aumento de los asalariados. El palo consistía en el uso de mecanismos represivos, que eran aplicados cuando las movilizaciones amenazaban con rebasar los marcos legales y las demandas de los sindicatos se acercaban a las reclamaciones de los socialistas. La zanahoria consistía en ofrecer concesiones, que a veces dieron lugar a que el gobierno presionara a los empresarios para que aceptaran alzas salariales. En 1880 se estableció la jornada laboral de diez horas; en 1883 se aprobó un seguro de enfermedad financiado con aportaciones de empleados y empresarios (en proporción 2:1); en 1884 se hizo lo mismo con un seguro de accidentes financiado por las empresas; y en 1889 se formó un fondo específico para las pensiones de vejez e invalidez, financiado en partes iguales por empleados y empresarios. Hacia 1910, alrededor del 80% de los trabajadores disponía de seguro de accidentes, el 45% tenía seguro de enfermedad y más de la mitad tenía derecho a una pensión de jubilación.

Sin embargo, el juego interactivo planteado por Bismarck no se canalizó en la dirección por él deseada. El Estado ofrecía mejoras a los trabajadores para apartarles de la atracción política del partido socialista y utilizaba la represión cuando se hacía evidente esa vinculación. Pero, a la vez, si persistía la atracción política socialista, el Estado tenía que recurrir a nuevas reformas o bien a implementar medidas represivas que volvían a reproducir la misma dinámica. Era así porque, a pesar de los obstáculos, el partido socialista siguió acrecentando su fuerza política, poniéndose de manifiesto que los impulsos latentes en el seno de la sociedad y la acción política de los socialistas eran más fuertes que los mecanismos inhibitorios aplicados por Bismarck para impedir su avance.

EL PARTIDO OBRERO EN EL CENTRO DE LA VIDA POLÍTICA, PERO ALEJADO DEL PODER

La estrategia bismarckiana había previsto que la utilización instrumental del parlamento y de las libertades cívicas dentro de un Estado autoritario propiciaría el desarrollo industrial y favorecería la cooperación entre los junkers agrarios y los empresarios capitalistas. El propio Bismark procedía de aquella clase social, lo mismo que gran parte de los altos funcionarios de la administración y la jerarquía del ejército. Aspiraba a que la alianza entre los grandes terratenientes, industriales y banqueros facilitara el desarrollo económico, la estabilidad del orden social y la fortaleza del estado-imperio. El parlamento, los derechos restringidos y las reformas sociales debían estar al servicio de esa estrategia, debiendo combatir dos tipos de estímulos: los que acercaban a los trabajadores hacia el partido socialista y los que acercaban a los campesinos y los pequeños propietarios urbanos hacia los partidos liberales.

En términos prácticos, la estrategia consistía en apoyar a los partidos más conservadores, reprimir al partido obrero y hostigar a los partidos que representaban al campesinado y otros pequeños propietarios católicos, predominantes en los territorios del sur y el oeste. Se trataba de una estrategia contradictoria, ya que los factores que fortalecían al partido socialista y a los liberales tenían su origen en el desarrollo económico y en el carácter reaccionario del Estado. Por un lado, la masiva proletarización, las condiciones de trabajo y de vida, y la intensa urbanización de la población. Por otro lado, las actitudes despóticas y demás arbitrariedades cometidas por el káiser, el gobierno y los altos funcionarios.

Confluencias y arranque electoral

La fundación del partido obrero se produjo a través de dos rutas que convergieron en 1875. La primera fue la creación en 1863 de la Asociación

General de Trabajadores de Alemania (ADAV), liderada por Ferdinand Lassalle e integrada sobre todo por grupos socialistas de origen prusiano y con vocación reformista[6]. La segunda fue la formación en 1869 del Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania, liderado por Wilhelm Liebknecht e identificado con el proyecto y el discurso revolucionario de Marx y Engels, cuya pequeña influencia se concentraba fuera de Prusia, que defendía propuestas más radicales y formas de lucha más contundentes contra la monarquía y el gobierno.

La unificación de ambas tendencias se produjo en paralelo con la activación del movimiento sindical y el desarrollo de ciertas luchas democráticas, todo lo cual proporcionó una primera influencia social y una pequeña base electoral a las candidaturas socialistas, que obtuvieron 100.000 votos en 1871 y 350.000 en 1874. Al año siguiente, se celebró en Gotha el congreso que alumbró el nacimiento del Partido Socialista Obrero de Alemania (SAPD), que desde 1891 pasaría a denominarse Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). El programa negociado entre las dos organizaciones confluyentes suscitó una durísima crítica de Marx desde Londres por considerar que incorporaba varias propuestas lasallianas que adulteraban el carácter revolucionario del programa que tenía previamente el partido de Liebknecht. No obstante, tanto este como otros dirigentes seguidores de Marx y Engels dieron por bueno el programa de Gotha por considerar que era el peaje necesario para lograr la unidad de los socialistas.

Las elecciones de 1877 elevaron el apoyo electoral del SAPD hasta casi el medio millón de votos. Bismarck aprovechó que el káiser había sufrido dos atentados a cargo de grupos anarquistas para que el parlamento aprobara un paquete de medidas denominadas «antisocialistas» porque su propósito era cortar el ascenso social y político de los socialistas y de los sindicatos bajo su influencia. El SAPD fue declarado ilegal y la prohibición siguió renovándose cada tres años, lo que no impidió que los dirigentes socialistas concurrieran a las elecciones presentándose como candidatos independientes. Las medidas represivas produjeron su efecto a corto plazo, ya que en 1881 los socialistas redujeron sus votos a 300.000 y, aunque en 1885 recuperaron el medio millón, lograron truncar su anterior tendencia ascendente. Esa contención sólo aportó un consuelo parcial a Bismark, ya que la composición del Reichstag seguía escapando a sus objetivos. Desde 1881, el hostigado partido Zentrum se convirtió en la fuerza política con mayor representación en el Reichstag, tratándose de un partido centrista que captaba el voto católico en los territorios no prusianos, por lo que recogía el apoyo de los campesinos que se oponían al poder de los junkers y de los pequeños propietarios influidos por las nuevas ideas que latían en las

ciudades. Además, los dos partidos liberales (DFP y LV) también aumentaron su representación, acabando así con el dominio que habían ejercido dos partidos reaccionarios, uno denominado de los liberales nacionalistas (NLP) y el otro partido conservador (KP), mientras que las opciones situadas más a la derecha (ultranacionalistas y antisemitas) seguían careciendo de peso[7].

Ante esos resultados, el káiser Guillermo y Bismarck optaron por evitar que el parlamento tuviera capacidad para decidir sobre los temas más importantes y siguieron nombrando a partidarios suyos para los principales cargos de la administración estatal. No obstante, la nueva composición parlamentaria marcaba un rumbo que se iría consolidando posteriormente y trastocaba la pretensión de establecer un proceso paulatino de democratización en el que el parlamento fuera asumiendo funciones legislativas y el gobierno se hiciera eco de la mayoría parlamentaria, pero sin cuestionar el poder del monarca que seguiría dirigiendo el imperio. El fracaso de ese proyecto culminó en 1890 con la dimisión de Bismarck, que había liderado la causa monárquica de tres emperadores. En adelante, la política de los cancilleres que le sucedieron osciló entre la adaptación a la realidad social, que se iba revelando a través de la composición del parlamento, y la involución que apostaba por cerrar filas en torno al autoritarismo prusiano. Zentrum se mantuvo como principal partido durante la primera década del siglo XX, pero su afán por ganar protagonismo parlamentario y acceder al gobierno le acercó a las posiciones de los conservadores NLP y KP[8], aceptando que el káiser controlara la formación del gobierno y decidiera las principales leyes y medidas ejecutivas.

El cambio fundamental se produjo en la parte del escenario que quería evitar Bismarck a toda costa: el fortalecimiento político del SPD. Siendo todavía ilegal, en 1890 sus candidatos obtuvieron 1,5 millones de votos, casi la quinta parte del total, aunque en el reparto de escaños sólo le correspondieron 35 diputados. La reacción subsiguiente del Estado fue activar los mecanismos preservadores del statu quo monárquico, de manera que, fuese cual fuese su resultado electoral, el SPD siempre quedaría al margen del poder y minimizada su fuerza parlamentaria merced a un reparto exageradamente asimétrico entre los votos y los escaños. Así, después de que dejaran de prorrogarse las leyes represivas, en las elecciones de 1893 el SPD consiguió casi la cuarta parte de los votos, pero sólo 44 diputados, apenas la décima parte de los escaños del Reichstag. La situación se repitió en las tres elecciones siguientes, celebradas en 1898, 1903 y 1907, con la salvedad de que en la última se detuvo el ascenso en el porcentaje de votos, que fue sucesivamente del 27%, 32% y 29%, mientras que los escaños logrados

fueron 53, 81 y 43, respectivamente.

El amaño para mantener embridado al parlamento quedó definitivamente al descubierto en 1912, cuando se celebraron las que serían las últimas elecciones legislativas bajo el régimen monárquico-imperial. Con 4,25 millones de votos, equivalentes a casi el 35% del total, el SPD no sólo era la mayor fuerza política, a gran distancia de los demás, sino que sus 110 escaños le convertían también en el mayor partido parlamentario, a pesar del reparto asimétrico[9]. Culminaba así un proceso iniciado en los años noventa, cuando el SPD comenzó a situarse en el centro de la vida política alemana, pero radicalmente alejado de los centros de poder del Estado. Su influencia se extendía a través del prestigio de sus líderes, su creciente militancia, su potencia sindical, su participación en los gobiernos de ciudades importantes, el apoyo que tenía en los medios intelectuales, la promoción de múltiples asociaciones culturales y recreativas; y la abrumadora difusión de sus órganos de prensa.

El SPD era la referencia inevitable a partir de la cual se posicionaban los demás partidos, el gobierno y el monarca. Así ocurría con un partido obrero cuyo nuevo programa, aprobado en el congreso de Erfurt de 1891, había recuperado un proyecto y un discurso sustentado en las formulaciones canónicas de Marx y Engels acerca de una revolución socialista. El número de militantes pasó de 50.000 a 90.000 en los años ochenta, y luego se disparó hasta 400.000 en 1905 y un millón en 1914. Sus mayores focos de influencia estaban en las zonas de mayoría obrera y protestante, que eran las que tenían mayor desarrollo industrial y mayor grado de urbanización, sobre todo Berlín, Leipzig, Hamburgo y Dresde; en tanto que su fuerza era inferior en zonas de mayoría campesina y católica, como la cuenca del Sarre y el Bajo Rin.

Retórica programática y acción reformista

El proyecto acordado en Erfurt retornaba a las esencias marxistas incorporando un matiz significativo. Fue redactado por Karl Kautsky, Eduard Bernstein y, en menor medida, August Bebel. Siguiendo el canon, el discurso asumía que la función revolucionaria del SPD consistía en defender los intereses de los trabajadores con el objetivo de lograr la transformación socialista. El matiz

consistía en un añadido que vinculaba esa transformación con el compromiso de llevar a cabo la transformación del sistema mediante un gobierno legitimado por las elecciones democráticas[10]. El discurso diseñaba una secuencia basada en la articulación de cinco elementos: primero, actuar consecuentemente en la defensa de las reivindicaciones laborales, sociales y democráticas; segundo, ampliar la influencia social y política del partido; tercero, plasmar esa influencia en mayores posibilidades electorales; cuarto, acceder a los principales órganos del Estado; y quinto, afrontar los requisitos que permitieran la colectivización de la propiedad y demás medidas con las que implementar el proyecto socialista.

No obstante, el discurso arrojaba zonas de sombra que concernían tanto a su viabilidad práctica como a su funcionalidad a la hora de llevar a cabo la acción política con la que defender las demandas de los trabajadores. De un lado, la actividad práctica del SPD se centraba en impulsar las mejoras laborales, las reformas sociales y las luchas democráticas, desde los sindicatos, desde otras plataformas de la sociedad civil, desde el parlamento y desde la gestión de los municipios en los que gobernaba. Eran precisamente esas labores en los movimientos sociales y en las instituciones, sumadas a la propaganda, las que proporcionan el incremento de militantes y el creciente apoyo electoral. De otro lado, a pesar de tener vetado su acceso al gobierno y de que el parlamento tenía amputadas sus funciones legislativas, la creciente fuerza del SPD atemorizaba a los grandes propietarios, a los sectores sociales reaccionarios, al monarca y a los demás partidos políticos. ¿Cómo utilizar la fuerza política y parlamentaria y la influencia social para impulsar las transformaciones pretendidas, y a la vez evitar desbordes violentos y mantenerse dentro de la legalidad?

Esos interrogantes habían formado parte de las preocupaciones de un Engels septuagenario. En la introducción que en 1895 escribió para el libro de Marx Las luchas de clases en Francia, echaba una mirada hacia atrás, al cabo de las cuatro décadas transcurridas desde 1848, y constataba las escasas posibilidades de victoria de aquella insurrección parisina[11]. Mirando a su presente, expresaba satisfacción por el rápido avance electoral del SPD a pesar de las leyes antisocialistas de Bismarck. Mirando al futuro, subrayaba la importancia del sufragio universal y la participación en el parlamento para el desarrollo de la revolución, considerando anticuada la rebelión al viejo estilo de las barricadas[12]. No negaba la posibilidad de que siguieran produciéndose luchas callejeras, pero sí enfatizaba la imposibilidad de que hubiera revoluciones mediante ataques por sorpresa llevados a cabo por minorías conscientes. Ante la necesidad de generar movimientos masivos, ponía el acento en que los

socialistas debían realizar una labor política larga y perseverante que combinase la propaganda con la actuación parlamentaria. Concluía afirmando que la socialdemocracia alemana se encontraba en una posición favorable para llevar a cabo la transformación socialista por una vía pacífica y democrática, ya que el acelerado aumento de su base electoral abría la posibilidad de que «antes de terminar el siglo haya conquistado a la mayor parte de las capas intermedias de la sociedad […;] nos habremos convertido en la potencia decisiva del país, ante la que tendrán que inclinarse, quieran o no, todas las demás»[13]. El uso adecuado del sufragio universal como arma política permitía que «un instrumento de engaño se convirtiera en instrumento de emancipación»[14].

La confianza en el triunfo del socialismo en Alemania por la vía legal ya la había expuesto Engels en 1893, cuando le preguntaron si esperaba ver con sus propios ojos la llegada de un gobierno socialista en su país: «¿Por qué no? Si el crecimiento de nuestro partido continúa a su ritmo habitual, podríamos alcanzar la mayoría entre 1900 y 1910»[15]. Similar optimismo quedó reflejado en sus artículos de 1892 sobre la historia del socialismo alemán, señalando que, además, contaba con la ventaja de que el ejército alemán se estaba «contaminando» con la creciente incorporación de jóvenes socialistas, haciendo que se fuera transformando de «mayoritariamente prusiano en mayoritariamente socialista».

Más lejos llegó Eduard Bernstein, militante socialista desde muy joven que tuvo que exiliarse a Londres, donde trabó amistad con Engels, hasta el punto de que este le nombró testamentario de su obra. Siendo ya dirigente del SPD, señaló la falta de correspondencia entre el discurso revolucionario y la acción práctica del partido, considerando necesario someter a una revisión profunda las tesis marxistas que recogía el programa de Erfurt. Sus propuestas quedaron sintetizadas en Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, libro publicado en 1899[16]. A su juicio, los cambios experimentados por el capitalismo y por la sociedad alemana obligaban a cuestionar cuatro tesis centrales. Primera, era equivocado considerar que los factores económicos fueran los determinantes exclusivos de la historia y de la sociedad de la época, algo que ya debatían Marx y Engels como se ha expuesto en el capítulo I. Segunda, tampoco era aceptable considerar que la lucha de clases fuese exclusivamente entre capitalistas y proletarios, pues en el interior de ambas categorías existía una complejidad que quedaba oculta en ese esquema dicotómico, en el que además no podían ser clasificados otros grupos sociales. Tercera, era errónea la predicción del derrumbe o crisis permanente del

capitalismo, como lo era considerar inevitable el empeoramiento continuado de las condiciones de vida de los obreros, puesto que los hechos reales lo desmentían sin lugar a equívocos. Cuarta, no era cierto que la construcción del socialismo requiriese una revolución violenta, aserto que también preocupaba al viejo Engels y que seguía abierto en el programa de Erfurt.

Las propuestas de Bernstein se proponían reformular el proyecto y el discurso revolucionario para adecuarlo a la acción política efectiva que desarrollaba el partido, volcando el énfasis en la relación que debía existir entre el compromiso de defender las demandas de los trabajadores y el compromiso de garantizar la plena democracia política. Sólo así cabía plantar la posibilidad de materializar el proyecto transformador actuando sobre tres ejes centrales. Primero, avanzar en la aplicación de soluciones socialistas, mediante políticas de nacionalización y municipalización de las grandes empresas. Segundo, utilizar exclusivamente medios pacíficos, a través de cambios graduales emprendidos desde el control democrático de los órganos del Estado. Tercero, establecer alianzas con los partidos que representaban a una parte de la burguesía, pues esta clase no era monolítica sino que cada vez se fragmentaba más. Propuestas que chocaban frontalmente con el discurso canónico de la metáfora comunista; Bernstein defendía que un proyecto de socialismo era ajeno a cualquier planteamiento insurreccional y apostaba por una trayectoria de cambios secuenciales, promovidos a través de sucesivas reformas con las que fortalecer el ejercicio de la democracia, la igualdad de derechos y las condiciones de vida de los trabajadores.

En el fondo, sus propuestas de acción política no eran distintas en lo sustancial de la actividad que realizaba el SPD y del horizonte pragmático con el que se orientaban sus dirigentes. Sin embargo, la mayoría de estos pensaba que seguía siendo fundamental mantener un proyecto y un discurso sustentados en el canon revolucionario. Probablemente, los líderes que seguían siendo crédulos en la doctrina lo defendían por convicción[17], pero también es muy probable que otros lo hicieran porque valoraban la función ideológica que dicho canon ejercía como factor de cohesión de la militancia, como factor de atracción hacia sectores obreros e intelectuales y como factor de identificación en la escena política. De ese modo, mientras la realidad mantenía cerrada la puerta a cualquier posible veleidad revolucionaria y restringía el alcance de muchas reformas, la doctrina mantenía abierta la esperanza en una revolución cuyo triunfo futuro estaba garantizado por la marcha de la historia. El mejor enlace que encontraron esos líderes para justificar esa combinación de un discurso revolucionario y una

acción reformista era la tesis del derrumbe del capitalismo, según la exposición hecha por Kautsky en El camino del poder, publicado en 1909. Dando por cierto que llegaría ese momento, en el que se precipitarían los acontecimientos previstos por el discurso revolucionario, hasta entonces la acción política consistía en desgastarlo y llevar a cabo el máximo posible de reformas. Convivían así «dos almas», según la conveniencia propagandística (discurso) o práctica (acción), según las referencias a un futuro que no se visualizaba o al momento presente, según el talante de los respectivos líderes. De modo que ni los dirigentes ni la mayoría de los militantes socialistas aceptaron las tesis de Bernstein y el programa aprobado en Erfurt se mantuvo como referente estratégico, teniendo como principales albaceas la autoridad teórica de Karl Kautsky y la autoridad política de August Bebel, presidente del partido.

La postura más beligerante contra las tesis de Bernstein estuvo encabezada por Rosa Luxemburgo, cuyas críticas también iban dirigidas contra esa orientación pragmática de los dirigentes socialdemócratas. En los artículos sobre ¿Reforma o revolución? publicados en 1902, sostenía que el capitalismo no había experimentado cambios sustanciales que afectaran a la estrategia por el socialismo. A su juicio, reforma y revolución eran dimensiones diferentes que podían condicionarse de forma complementaria o podían excluirse. Lo primero sucedía si las reformas servían como medio para avanzar en el camino revolucionario, lo segundo ocurría si los movimientos por reformas se alejaban de ese camino. Pensaba que la actividad reformista de los sindicatos siempre se caracterizaría por una sucesión de avances y retrocesos en la medida en que sus logros nunca serían definitivos hasta que los propios trabajadores tomaran el poder. La necesidad de separar reforma y revolución, lo mismo que la distinción entre la participación parlamentaria y la actividad revolucionaria, obedecían a que el capitalismo no se sustentaba en leyes (ninguna obligaba al trabajo asalariado y, por tanto, a ser explotado), sino en la existencia de la propiedad privada de los medios de producción, algo que no se podría cambiar sólo con leyes aprobadas en el parlamento.

En Socialdemocracia y parlamentarismo, artículos publicados en 1904, sostenía que «la democracia es indispensable […] porque hace indispensable y posible la conquista del poder […], en la medida en que señala las propias limitaciones para llevar a cabo la expropiación de los medios de producción mediante el apoderamiento del poder estatal»[18]. Su tesis era que el parlamento se había convertido en una institución decadente cuya vigencia histórica había concluido cuando la burguesía triunfó contra el feudalismo. Desde entonces sólo cabía

contemplar el parlamentarismo desde una perspectiva instrumental, según las posibilidades que ofreciese para avanzar hacia el objetivo de conquistar el poder obrero. Por tanto, la acción política del SPD debía centrarse en orientar a la clase obrera para que se convirtiese en una fuerza organizada y consciente que luchara por el socialismo. «La madurez económica y política de la sociedad burguesa facilita la introducción de instituciones socialistas»[19]. Los sindicatos y las reformas graduales debían servir para fortalecer esa acción revolucionaria. Sostenía así el discurso canónico, salvo en matices referidos a la implementación de la acción política.

Considerando la situación existente al comenzar el siglo XX, tanto la posición reformista de Bernstein como la posición revolucionaria de Luxemburgo apuntaban a cuestiones fundamentales en las que cada cual acertaba en una parte de su análisis y erraba en otra. Bernstein entendía bien que el desarrollo capitalista había puesto de manifiesto una persistente capacidad de crecimiento económico, que las crisis periódicas no conducían a ningún derrumbe del sistema y que la estructura social era cada vez más compleja. En ese sentido, su conclusión era consecuente: el SPD debía adaptar su estrategia y su acción política a tales evidencias. Sin embargo, esa misma realidad ponía en duda su discurso gradualista, mostrando que los logros conseguidos mediante reformas democráticas y sociales y la creciente fuerza electoral del SPD no estaban permitiendo el acceso a los principales resortes del Estado, ni le acercaban a un horizonte en el que cobraran vigencia las transformaciones propias del socialismo.

Luxemburgo acertaba al constatar esto último: el parlamento del káiser seguía ejerciendo funciones secundarias y, a pesar de los avances electorales, el SPD seguía marginado del poder político efectivo. Por tanto, el reformismo sin horizonte no podía construir un discurso estratégico que fuera válido. Sin embargo, erraba al minusvalorar la naturaleza y las consecuencias de los cambios económicos y sociales, manteniéndose fiel a la idea del capitalismo como sistema agonizante (aliviado temporalmente por su comportamiento imperialista) que, con matices, compartían Kautsky, Lenin, Hilferding y otras cabezas teóricas. La tesis sobre la decadencia del parlamento se ceñía a la realidad del momento, donde las reformas y el parlamento quedaban sometidas al dominio de la monarquía autoritaria, sin valorar las posibilidades que, en el futuro, podría brindar el desarrollo de la democracia política. Estaba lejos de comprender que el reformismo de Bernstein no era, como ella creía, un impasse o momento de duda por el que atravesaba el SPD, sino que se alimentaba de las

transformaciones profundas que experimentaba el capitalismo.

Debates con los mismos temas de fondo tuvieron lugar entre los socialistas franceses y de otros países durante aquel tiempo, pero fue en el seno de los socialdemócratas alemanes y, según veremos, entre los rusos donde adquirieron mayor relieve. En ellos se abordaron cuestiones que habían llegado para quedarse de forma permanente: participación o rechazo del parlamento, valoración de la democracia política, relación entre las reformas parciales y las transformaciones estructurales del sistema.

Al mismo tiempo, formando parte de la escena política alemana y sobre todo del desenvolvimiento del SPD, hicieron su aparición otras dos cuestiones que ya eran importantes en aquellas primeras décadas del siglo XX y estaban llamadas a convertirse en fundamentales. La primera ha sido apuntada en el caso de los laboristas británicos y se refiere a la posición adoptada por los parlamentarios socialdemócratas con respecto al partido y a la realidad política. Habían logrado sus escaños como candidatos del partido y pasaban a representar al electorado que les había votado. Su trabajo consistía en batirse contra otras opciones políticas en el parlamento, relacionándose cotidianamente con el gobierno, los aparatos funcionariales y el entorno monárquico. Su actividad les colocaba en una posición singular ante los órganos del partido y ante los militantes. Les confería unos hábitos, unos modos de comportarse e incluso unos privilegios materiales y políticos que se derivaban de la función que realizaban. Les instaba a ser más pragmáticos en sus pretensiones y a actuar con un radio de acción más próximo al poder. Formaban parte del partido, pero a la vez, de alguna manera, formaban parte del Estado.

La segunda cuestión surgía del hecho, repetido con orgullo por los dirigentes, de que el SPD era la mayor organización socialista del mundo. Una organización con un millón de militantes y centenares de organismos directivos en distintos niveles, con más de cuatro millones de votantes, más de cien diputados en el Reichstag y muchos más en los parlamentos territoriales, un buen número de gobiernos territoriales y de ciudades gobernadas por o con socialdemócratas, y con múltiples ramificaciones hacia los sindicatos y hacia otras organizaciones de la vida social. El perímetro de sus actividades se ampliaba continuamente y generaba una profunda capilaridad que se extendía en múltiples ámbitos sociales. Eran también sus líderes quienes ejercían la mayor influencia en la II Internacional, fundada en 1889, cuyos acuerdos influían en la mayoría de los partidos socialistas europeos.

Todo lo cual requería de una creciente burocracia orgánica, con cientos de cuadros superiores y miles de cuadros intermedios que dirigían a las organizaciones de los territorios y sectores en los que desplegaba su actividad. Inevitablemente, aquel formidable aparato organizativo tenía que engendrar una sociología de comportamientos en los órganos directivos y en su relación con los organismos de la base militante. Sintomáticamente, la crítica de Rosa Luxemburgo hacia el núcleo dirigente del SPD la extendía a que su «preocupación exclusiva era el desarrollo organizativo del partido». Esa sociología se plasmaba en múltiples facetas que afloraban y se interiorizaban en la vida orgánica: preeminencia de las relaciones jerárquicas, cohesión basada en la doctrina canónica cuya interpretación y aplicación corrían a cargo de los órganos directivos[20], búsqueda de la adhesión antes que del debate, transmisión de órdenes normativas, control de la información, tendencia a la inercia rutinaria, conformismo y miedo a cambiar los hábitos de trabajo. No cabe precisar con qué intensidad anidaron esos elementos, pero sí es relevante tomarlos en consideración por sus consecuencias posteriores cuando el partido adquiera funciones decisivas en el poder del Estado.

DIVISIÓN Y FRUSTRACION SOCIALISTA: UNA TRAGEDIA EN TRES ACTOS

El clima europeo empeoraba velozmente en toda Europa cuando en 1912 el SPD se convertía en el mayor grupo parlamentario del Reichstag, mientras que el protagonismo de la escena política pasó a las fuerzas nacionalistas, imperialistas y militaristas que voceaban el enfrentamiento entre naciones. Con tono cada vez más agresivo, ganaban presencia las consignas pangermanistas, racistas y antisemitas, frontalmente opuestas a los referentes pacifistas e internacionalistas que defendían el SPD y la II Internacional. A fuego lento, se iba configurando el contexto que provocó la tragedia vivida por el SPD en tres actos sucesivos.

La posición ante la guerra

El hecho de ser la mayor fuerza política colocó al SPD en una tesitura que parecía ventajosa para condicionar los acontecimientos alemanes, pero que sin embargo se convirtió en un hecho sumamente adverso. En un principio, las propuestas nacionalistas e imperialistas anidaban en el entorno del káiser, los partidos conservadores y la cúpula militar; pero, al cabo de pocos años, calaron a fondo en los partidos centristas y liberales, funcionarios de la administración, empresarios y banqueros, y sectores crecientes de la sociedad, incluyendo a una parte de los votantes y militantes del SPD[21]. El monarca y su gobierno fueron los principales responsables de instigar los detonantes que hicieron estallar la guerra, pero sin olvidar a los demás responsables europeos que alentaron la crispación irracional que vivía el continente según avanzaba 1914. El atentado de Sarajevo, donde cayó asesinado el heredero al trono imperial austríaco, sirvió de excusa para que el conflicto larvado se tornase en un estallido bélico, con el káiser como su mayor impulsor. Cuando el gobierno llevó al parlamento la propuesta de conceder los préstamos que necesitaba la financiación de la guerra, el SPD se encontró ante una disyuntiva: plegarse a la presión ejercida por el magma de estructuras políticas y de sectores de la sociedad que cerraban filas con el káiser, o mantener la postura pacifista[22] que apoyaban los núcleos obreros más conscientes y combativos.

En la fatídica sesión del Reichstag celebrada el 4 de agosto, la dirección del SPD decidió apoyar los créditos que garantizaban la participación de Alemania en la guerra. El grupo parlamentario socialista secundó la solicitud del gobierno y se comprometió, junto con los sindicatos, a evitar huelgas y otras acciones de protesta que pudieran debilitar la capacidad militar. La «tregua por la unidad nacional» en torno al káiser se convirtió en el pistoletazo de partida tras el que los demás partidos socialistas apostaron por sus respectivas causas nacionales, tal como ocurrió en Francia con la Union Sacrée. En cuestión de días quedó dinamitado el espíritu internacionalista, la causa común de los socialistas, y cada partido se arropó con sus banderas nacionales.

Una vez aprobados los créditos de guerra, el Reichstag y el gobierno quedaron apartados de las decisiones fundamentales, que recayeron directamente en el káiser y los mandos del ejército. Al día siguiente de la aprobación, un núcleo minoritario de dirigentes socialdemócratas (Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y Franz Mehring) formó el «grupo internacional», varios de cuyos miembros fueron inmediatamente detenidos y acusados de un delito de traición a la patria por expresar su radical desacuerdo respecto de la guerra. Transcurrido año y medio desde el inicio de la guerra, a finales de 1915, un grupo bastante

más numeroso del SPD, entre ellos una parte de los parlamentarios, se opuso a la prórroga de los créditos de guerra. Fueron expulsados del partido y, en abril de 1917, fundaron el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD), liderado por Hugo Haase, quien desde la muerte de Bebel había copresidido el SPD con Friedrich Ebert. A ese partido se incorporaron viejos rivales como Bernstein y Kautsky y, durante un tiempo, en él se integraron los miembros del «grupo internacional» que en enero de 1916 habían formado la Liga Espartaquista.

El primer acto de la tragedia se cerraba con una escena bastante desoladora en la que, a los efectos destructores de cuatro años de guerra, se sumaba el desgarro socialista. El partido se había dividido en dos organizaciones que mantenían propuestas diferentes sobre la guerra y sobre las responsabilidades contraídas por cada cual en 1914 y durante la contienda militar.

El gobierno en manos socialistas: la fuga espartaquista

Después de las sucesivas derrotas sufridas durante el verano, en septiembre de 1918 los mariscales Hindenburg, Ludendorff y otros mandos militares pidieron al gobierno que solicitara a los aliados un armisticio inmediato. El gobierno, formado por todos los partidos y presidido por un monárquico liberal, el príncipe Maximilian von Baden, propuso a los aliados negociar el armisticio a partir de los 14 puntos aprobados aquel mismo año por la Liga de las Naciones. A esas alturas, el brutal empeoramiento de las condiciones de vida de la población civil marchaba paralelo al desorden reinante en el ejército.

Sin embargo, una vez que el gobierno dio ese paso, los mandos militares se desvincularon de cualquier compromiso, pretendiendo eludir la gran responsabilidad que habían tenido en el desencadenamiento de la guerra y en su conducción hacia la derrota. Reafirmaron las proclamas nacionalistas y expansionistas, criticando al gobierno como si fuese el responsable de frenar la lucha patriótica del ejército. En plena negociación del armisticio, los mandos de la marina decidieron movilizar a la flota de Kiel para atacar a la marina británica, lo que provocó el amotinamiento de los marineros y de una parte de la oficialidad. La decisión de someter a juicio militar a los amotinados originó

nuevos actos de rebeldía en cuyo transcurso se formaron consejos de marineros, similares a los sóviets que un año antes habían nacido en Rusia. La dialéctica rebelión-represión desencadenó una movilización general el 4 de noviembre. Parte de la tropa que había sido enviada para reprimir la revuelta abandonó ese cometido, formó un consejo de soldados y desarmó a sus mandos militares. Soldados y marineros ocuparon los barcos, liberaron a los presos y tomaron el control de la base naval. Los trabajadores de las grandes fábricas se unieron a la revuelta y formaron un consejo de obreros. La rebelión se convirtió en insurrección cuando los consejos organizaron el asalto a los cuarteles y se apoderaron de Kiel. Con la bandera roja ondeando en la ciudad, los representantes de 40.000 marineros, soldados y trabajadores, incorporaron a sus reivindicaciones la abdicación del monarca y la convocatoria de elecciones libres.

La misma noche de la insurrección llegó a Kiel el parlamentario socialista Gustav Noske como representante del SPD y del gobierno de unidad. Tras anunciar que asumía las dos exigencias de los amotinados, el consejo de la ciudad decidió aceptar la autoridad del gobierno y dio por finalizado el levantamiento; si bien su eco se expandió a otras ciudades, formándose consejos de soldados en los cuarteles y de obreros en las fábricas, asaltando cárceles y arsenales, y exigiendo la dimisión de las autoridades locales[23]. Días después, el gobierno exigió la abdicación del káiser Guillermo II, que este aceptó tres días después; lo mismo ocurrió con la mayoría de los príncipes gobernantes en los distintos territorios. El Reichstag, fruto de las últimas elecciones de 1912, nombró a dos dirigentes del SPD para los máximos cargos provisionales del país: Friedrich Ebert como presidente y Philipp Scheidemann como canciller. Desde el parlamento, el SPD proclamó la república. Horas más tarde, retando al parlamento y al SPD, desde el Palacio Real, Karl Liebknecht proclamó la República Libre y Socialista Alemana. El anuncio de un choque inminente estaba servido: entraban en liza dos alternativas socialistas, en realidad serían tres, que se reclamaban de un mismo proyecto (construir el socialismo), pero con líneas de acción política radicalmente diferentes.

No había desacuerdo en la necesidad de erradicar las bases feudales, monárquicas, aristocráticas y militaristas. Tampoco lo había en la necesidad de llevar a cabo importantes cambios democráticos y sociales. Las divergencias saltaban a la hora de concretar los cambios y los métodos para llevarlos a cabo. El SPD apostaba por instaurar una república constitucional que consolidara la democracia política e iniciara las reformas pendientes, rechazando cualquier vía

insurreccional. Su primera urgencia era convocar elecciones constituyentes para dotar a la república de instituciones y de leyes con las que desarrollar las reformas. Todo ello sin renunciar a la movilización de los trabajadores, pues de hecho eran militantes del SPD quienes dirigían la mayoría de los consejos de obreros y soldados, pero considerando que quienes tenían que tomar las decisiones políticas eran el gobierno provisional y el parlamento. Situados en las antípodas, los espartaquistas sostenían que era el momento de desplegar una dinámica revolucionaria para instaurar el poder político de los consejos y comenzar a construir el socialismo. Los consejos debían desarmar al ejército y a la policía, suprimir el parlamento, confiscar la propiedad de las grandes fortunas, los bancos y las fábricas, colectivizar los transportes y los medios de comunicación, e implantar la dirección estatal de la producción. Entre ambas posturas, los dirigentes del USPD proponían la nacionalización de los principales sectores de la economía, pero no el comercio interno y externo, ni la agricultura, donde las reformas debían hacer compatible la dirección del Estado con la propiedad en manos privadas. A su juicio, el parlamento constituyente tendría que ser el órgano legislativo del que emanase la formación del gobierno, mientras que los consejos de obreros y soldados deberían ejercer una labor supervisora de los órganos estatales.

Los consejos de obreros y soldados contaban con la participación de militantes de las tres tendencias y de otras más. Puestos en la tesitura de tomar posición ante aquel enfrentamiento, la mayoría de los consejos se decantó de manera rotunda a favor de las propuestas del SPD, a la vez que reclamaba la unidad de todas las tendencias socialistas. El 10 de noviembre, la Asamblea de Consejos de Obreros y Soldados de Berlín tomó dos decisiones fundamentales a escala nacional: eligió un gobierno, llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por seis miembros, tres del SPD y otros tantos del USPD; y convocó elecciones constituyentes en un plazo de dos meses, para el 19 de enero de 1919. Días más tarde, un órgano conjunto formado por el gobierno provisional y los consejos obreros ratificó la convocatoria electoral y anunció que los consejos se disolverían cuando estuviera formada la Asamblea Constituyente.

La prueba definitiva del aislamiento político en el que se encontraban los espartaquistas llegó a mediados de diciembre durante la celebración del Congreso Panalemán de todos los Consejos. Entre los quinientos delegados, sólo diez eran miembros de la Liga Espartaquista y todas sus propuestas fueron rechazadas por una abrumadora mayoría de los asistentes. En las dos votaciones cruciales, el congreso acordó por 400 votos frente a 50 que el gobierno SPD-

USPD era el único órgano de poder provisional, que los propios consejos no interferirían en su labor y que toda la capacidad legislativa de la república quedaría en manos de la Asamblea Constituyente que resultase de las elecciones a celebrar en enero.

Entre tanto, el SPD propició que los sindicatos y la patronal de la industria firmasen un acuerdo para reducir la jornada laboral a ocho horas sin disminución de los salarios. Los empresarios se comprometieron a negociar con los sindicatos obreros en cada rama y empresa (renunciando a fomentar sindicatos amarillos) y a que los convenios acordados se convertirían en normas legales recogidas en la reglamentación del trabajo. Los sindicatos renunciaron a emprender acciones revolucionarias y a proponer la socialización de la propiedad de las empresas.

La otra cuestión fundamental que se produjo en aquellas fechas fue la renuncia del gobierno provisional a depurar los órganos del régimen imperial (ejército, justicia, policía, administración) y a indagar en las responsabilidades que habían conducido a la guerra y a la derrota militar. Fue el coste asumido por el SPD para que los aparatos del Estado se mantuvieran subordinados a las decisiones del gobierno y el parlamento. La contrapartida fue que esos órganos siguieron en manos de monárquicos reaccionarios y funcionarios del viejo orden imperial. El gobierno aceptó que se mantuvieran los símbolos imperiales y las fuerzas paramilitares, como las Freikorps y las Wehrorganisationen, nutridas por oficiales procedentes del ejército y por soldados desmovilizados que, en lugar de volver a sus ocupaciones laborales, se pusieron a las órdenes de terratenientes y grandes empresarios. Resultó desalentador presenciar cómo, el 11 de noviembre, el propio Ebert saludó a las tropas que desfilaron por Berlín diciendo que volvían «invictas de un combate glorioso», contribuyendo a fomentar el mito de que el ejército no había sido derrotado en la guerra[24].

Tras las decisiones de los consejos obreros y del gobierno provisional, los espartaquistas y otros pequeños núcleos revolucionarios se adentraron en un clímax de exasperación política. Rompieron con el USPD por participar en el gobierno con el SPD y haber aprobado la convocatoria de elecciones constituyentes[25]. En un congreso celebrado los días finales de diciembre, acordaron fundar el Partido Comunista de Alemania (KPD)[26] y tomaron dos decisiones que abocarían a un trágico final: rechazaron participar en las elecciones de enero y se dispusieron a preparar una insurrección obrera para derrocar al gobierno. Ambas decisiones fueron desaconsejadas por Rosa Luxemburgo, pero tuvieron una clara mayoría (62 votos contra 23) entre los

asistentes. A pesar de que Luxemburgo era escéptica acerca de las posibilidades que ofrecía la participación en el parlamento, consideraba que en aquellos momentos carecía de sentido apostar por una vía insurreccional contra un gobierno y en nombre de unos consejos obreros que, por una aplastante mayoría, habían mostrado su conformidad con esas elecciones, defendían al gobierno y rechazaban asumir el poder. El levantamiento estaba condenado al fracaso.

El vaticinio comenzó a verificarse pocos días después. El intento de putsch tomó como pretexto las protestas surgidas en Berlín contra la destitución del jefe de policía (perteneciente al USPD) por parte del gobierno provisional. Militantes de ese partido se sumaron a la movilización y se formó un consejo de obreros y soldados integrado exclusivamente por partidarios de convocar una huelga general que iniciase la revolución. El consejo hizo un llamamiento para derrocar al gobierno y dirigió la ocupación de varios edificios oficiales, yendo bastante más lejos de lo que planteaban tanto los dirigentes del USPD, que dejaron de apoyar el levantamiento, como una parte de los dirigentes del KPD. Los sucesos se repitieron en Baviera, Bremen, Hamburgo, Sajonia, Sarre y Magdeburgo, lugar desde donde Karl Liebknecht lanzó la consigna de tomar las armas para conquistar el poder del Estado. Dentro de los órganos del KPD, Rosa Luxemburgo volvió a expresar su negativa frente a la exaltación de sus compañeros, a los que consideró embriagados de leninismo, pues estaba convencida de la incapacidad de desarrollar un movimiento revolucionario masivo que pudiera enfrentarse al poder político del gobierno, al ejército y al rechazo de la mayoría de los consejos y de los sindicatos obreros. Sin embargo, de puertas afuera, desde el periódico Rote Fahne (Bandera Roja) se abstuvo de mostrar las discrepancias y volcó sus críticas hacia el gobierno provisional, la represión del ejército y el abandono de los dirigentes del USPD.

La respuesta del SPD se produjo en dos tiempos. Primero convocó una huelga general y una manifestación masiva contra la insurrección. Después, ante las batallas callejeras que se producían en la capital, el ministro Noske acordó con el ejército el envío de tropas. Para evitar las dudas que podrían surgir entre los soldados que se enviasen, Noske tomó la traumática decisión de mandar a los Freikorps, infectados de elementos ultraderechistas. La actuación de ese cuerpo paramilitar estuvo a la altura de lo que cabía suponer. Durante cuatro días llevó a cabo una represión brutal, abusando de su dotación de armamento pesado, realizando fusilamientos y aniquilando a los líderes de la tentativa insurreccional. Liebknecht y Luxemburgo fueron asesinados el 16 de enero.

Los rescoldos de resistencia en Bremen y otras ciudades tardaron meses en ser eliminados. Algunos se avivaron después, como sucedió en Múnich con una tentativa insurreccional en abril. La República Consejista Bávara decretada por los revolucionarios no contó con el apoyo inicial del KPD, si bien sus militantes se integraron en el movimiento para tratar de evitar lo que finalmente se produjo a principios de mayo: el feroz aplastamiento por parte de los Freikorps. Las ejecuciones se contaron por centenares, los núcleos más combativos del movimiento obrero fueron exterminados y Múnich pasó a ser la capital del conservadurismo reaccionario y antirrepublicano.

El segundo acto de la tragedia duró apenas cuatro meses y en vísperas de las elecciones constituyentes concluyó tristemente peor que el acto anterior, con el enfrentamiento violento entre socialistas y el aplastamiento de quienes apostaron por la vía revolucionaria. Por un lado, la minoría radical acabó diezmada después de que su exasperación política les llevara a un levantamiento insurreccional contra la decisión de los consejos obreros en cuyo nombre pretendían conquistar el poder. Por otro lado, el SPD dispuso de una parte de los resortes del poder estatal (parlamento y gobierno), pero hizo gala de un miedo patológico a enfrentarse con las fuerzas reaccionarias del régimen imperial, aceptando que los demás órganos del Estado (ejército, justicia, policía) siguieran en manos de esas fuerzas y que estas sofocasen con procedimientos brutales los levantamientos minoritarios[27].

Gestación de la república democrática: el SPD, tan cerca y tan lejos del poder

Las elecciones de enero de 1919 presentaron varias novedades con respecto al ejercicio del derecho de voto por sufragio que estaba vigente desde hacía medio siglo: se rebajó la edad para votar, se reconoció ese derecho a las mujeres y a los soldados, y se corrigió el sistema de asignación de escaños para que hubiera proporcionalidad entre votos y diputados. Fueron las primeras elecciones democráticas y universales en la historia de Alemania, en las que participaron 30,5 millones de electores frente a los 12,2 millones que lo habían hecho en 1912.

Los resultados supusieron un notable desencanto para las expectativas del SPD. Fue el partido más votado y, por tanto, el más numeroso en la Asamblea Constituyente, pero quedó lejos de la mayoría absoluta que esperaba lograr. Necesitaba pactar con otros partidos para formar una mayoría de gobierno y optó por aliarse con Zentrum y los liberales del antiguo Partido Popular Progresista, ahora denominado Partido Democrático (DDP). Los tres partidos formaron la «Coalición de Weimar», concentrando más de tres cuartos de los escaños del Reichstag, mientras que el USPD se mantuvo al margen[28]. Alianzas similares se formaron en la mayoría de los parlamentos regionales, con mayorías contundentes del 75% en Prusia, 66% en Sajonia, 80% en Wurtemberg y 91% en Baden.

Cuatro meses después de la caída del káiser daba sus primeros pasos una república que se sustentaba en los atributos de la democracia política. La Asamblea Constituyente asumió el poder legislativo y comenzó a preparar una constitución con la que institucionalizar el sistema democrático. Quedó instalada en Weimar (Turingia) para alejarla de las tensiones berlinesas. La elección de los dos máximos cargos de la república ratificó la continuidad de Ebert como presidente y Scheidemann como canciller de un gobierno surgido de la mayoría parlamentaria y dispuesto a afrontar los problemas más apremiantes de la sociedad. En el verano, la asamblea aprobó la Constitución con la oposición de los diputados del USPD, los nacionalistas y algunos liberales[29]. En adelante, el presidente de la república sería elegido por sufragio directo y dispondría de poderes efectivos que incluían el derecho a disolver el parlamento y a nombrar al canciller. El Reichstag sería una cámara electiva y el Reichsrat se formaría a través de los territorios. Los gobiernos de los estados gozarían de notables atribuciones ejecutivas.

La decisión de que la Constitución entrara rápidamente en vigor pretendía acabar con la situación de provisionalidad que existía desde la desaparición del régimen imperial, pero arrojó dos contraindicaciones cuya importancia se reveló poco tiempo después. Por un lado, el mantenimiento de los símbolos imperiales, la desaparición de los consejos obreros y las atribuciones del presidente hicieron que cundiera la sensación de que el nuevo sistema político era una simple adaptación del Deutsche Reich a una forma republicana, sin que amplios sectores sociales apreciaran el cambio radical que suponía la puesta en marcha de un sistema político basado en la democracia. Por otro lado, el hecho de que los debates habidos durante su elaboración no hubieran trascendido a la población, y que la Constitución no fuera votada por refrendo popular,

contribuyó a diluir el apego social hacia una república parlamentaria que emprendía una andadura democrática por primera vez en la historia alemana.

El extrañamiento social cobró mayor trascendencia cuando emergieron a la superficie tres problemas que llegaron a convertirse en auténticos lastres para que despegase la república y que segaron por la raíz el futuro político del SPD: las condiciones impuestas en Versalles por los vencedores de la guerra, el profundo deterioro de la economía y de las condiciones de vida de la población, y el auge de las fuerzas derechistas.

En noviembre de 1918 el recién formado gobierno provisional SPD-USPD firmó el armisticio que puso fin a los enfrentamientos militares. Ya entonces, de forma torticera, pero favorecida por la condescendencia de Ebert, los mandos militares difundieron la idea de que eran los «civiles» quienes claudicaban. El clima se enrareció más a partir de febrero, ya bajo el gobierno de la coalición de Weimar, cuando en Versalles los países vencedores acordaron que los derrotados no participarían en la conferencia hasta que se hubieran fijado las condiciones que deberían cumplir, considerándoles los únicos responsables de la guerra. Una decisión que contribuyó a que la ausencia de debate en la vida política alemana acerca de su inmediato pasado fuese suplantada por una lectura victimista en clave nacionalista. Victimismo que fue acentuándose con los años, ganando apoyo entre la población hasta convertirse en ferviente indignación cuando se conocieron los términos del acuerdo impuesto en Versalles: Alemania perdería territorios por el sur y por el este (a favor de Francia, Bélgica, Polonia y Checoslovaquia) por un total equivalente a la octava parte de su superficie y a la décima parte de su población; cedería todas sus colonias en África, por lo que se quedaba sin imperio; tendría prohibida la unidad con Austria y su ejército se reduciría considerablemente en efectivos, capacidad naval y artillería; finalmente, pagaría severas reparaciones de guerra en forma de recursos financieros y materiales.

El resultado conjunto de las pérdidas territoriales y las reparaciones de guerra sentenciaba la ruina de la economía y la pobreza generalizada de la población. Perdiendo importantes zonas industriales, agrícolas y materias primas, estaba obligada a dedicar su ínfima capacidad de ahorro y sus precarias infraestructuras a pagar las reparaciones. Sin posibilidad de negociar esas condiciones, el gobierno tripartito de Weimar firmó su aceptación y después lo hizo el Reichstag. Ciertamente, los tres partidos de la coalición habían participado en la aprobación de los presupuestos de guerra en 1914 y habían cerrado filas con los

afanes nacionalistas y expansionistas. Pero en absoluto habían sido los mayores responsables de la guerra y menos aún de la derrota final, si se compara con las responsabilidades contraídas por las fuerzas reaccionarias agrupadas en torno al káiser, el ejército, los partidos derechistas y los oligopolios industriales y financieros. Sin embargo, fueron el gobierno y el parlamento de Weimar los que quedaron señalados como culpables por aceptar aquellos acuerdos draconianos.

La triste paradoja fue que ese estigma favoreció a las fuerzas reaccionarias que se nutrían, precisamente, de quienes habían alentado la guerra, la habían dirigido y se habían opuesto al nacimiento de la república democrática. Ahora se aprovechaban de los vientos favorables que empujaban cinco corrientes de aire. Primera, la condescendencia del gobierno provisional y del Reichstag con las instituciones, las personas y los métodos del viejo Estado imperial. Segunda, la deuda política que el SPD había contraído con los Freikorps cuando recurrió a ellos para que reprimieran los levantamientos de noviembre de 1918 y enero de 1919. Tercera, la transigencia del gobierno de Weimar con la tentativa golpista que en marzo de 1919 encabezaron el general Von Lüttwitz y el dirigente prusiano Wolfgang Kapp contra las primeras exigencias de los aliados en Versalles[30]. La tentativa fue abortada por una huelga general, pero posteriormente los responsables fueron amnistiados, e incluso ascendió en la escala militar uno de los generales que había desobedecido las órdenes del gobierno durante la tentativa. Cuarta, idéntica benevolencia recibieron otros excesos perpetrados por las fuerzas derechistas, que eran juzgados con indulgencia o con pequeñas penas por jueces que en su mayoría compartían la misma inclinación reaccionaria. Quinta, la impunidad con la que el parlamento permitía que el partido ultranacionalista (DNVP) y su líder, un antiguo ministro del káiser, propagase difamaciones contra el gobierno y amenazas contra la república.

Una vez extinguida la capacidad de reacción de los núcleos revolucionarios, aunque sin dejar de perseverar en el encarnizamiento represivo contra ellos siempre que tuvieron oportunidad[31], las fuerzas derechistas se cebaron contra el SPD, considerando que era el mayor representante de las ideas que combatían: socialismo, república, democracia y laicismo. En adelante, el SPD quedó encadenado a las dificultades crecientes que se iban presentando para llevar a cabo pequeñas reformas sociales, para sostener a flote la república democrática y para mantener su apoyo electoral.

Se cerraba así el tercer acto de la tragedia en la que se marchitaron las

esperanzas que portaban las dos almas socialistas antes de la guerra. Una comprobó cómo se difuminaba su discurso reformista ante la imposibilidad de avanzar gradualmente hacia el socialismo; la otra constató la inviabilidad de conquistar el poder mediante acciones insurreccionales, que inexorablemente acabaron con una represión extrema que diezmó sus filas y redujo su apoyo social.

El triste consuelo que encontraron ambas posiciones fue imputarse una a la otra la responsabilidad de lo ocurrido. El SPD acusó a los revolucionarios de boicotear la acción del gobierno, perder la oportunidad de impulsar conjuntamente los cambios democráticos y sociales, y favorecer la reacción derechista. La Liga Espartaquista, y después el KPD, acusó al SPD de traicionar el avance al socialismo, favorecer con su condescendencia a la reacción derechista y dejarse enredar en el laberinto de la democracia parlamentaria. El SPD nunca apostó por tensionar las relaciones con el ejército y la oligarquía industrial-financiera, mientras que los espartaquistas apostaron por la tensión directa y permanente, sin disponer nunca de fuerza real para librar esos combates frontales. Las dos tendencias acumularon razones más que justificadas para sustentar sus reproches, pero al mismo tiempo las dos tenían motivos mayores para lamentar las consecuencias acarreadas por su división y enfrentamiento cainita.

AGOTAMIENTO POLÍTICO DEL SPD Y DEBILIDAD DE LA REPUBLICA

La república arrancó con poderosos lastres y perdió fuste a medida que se agravó la crisis económica y que arreciaron las presiones desde la derecha, con el telón de fondo de las condiciones impuestas en Versalles. La trayectoria del SPD se convirtió en el fiel reflejo de los vaivenes de la vida política y de la sociedad, sometido al reto permanente de nadar contra las adversidades. Sin capacidad para lograr avances sociales, el SPD concentró su esfuerzo en preservar la democracia política, de manera que lo que antes pensaba que era un medio para defender a los trabajadores en mejores condiciones se había convertido en un fin compartido por cuantos estaban a favor del sistema democrático. Los debates sostenidos en las décadas anteriores acerca del camino para avanzar hacia una

sociedad socialista quedaban abandonados ante las urgencias que requerían unos acontecimientos que nada tenían que ver con las suposiciones hechas durante décadas sobre las ventajas que aportaría una república democrática.

Economía: lo que podría ir mal iba peor

El estancamiento de la producción y la carencia de resortes con los que mantener el funcionamiento básico de la actividad económica condujeron a un espectáculo inaudito: la hiperinflación, esto es, el aumento galopante de los precios de los escasos productos que estaban disponibles. Un fenómeno que pasó a figurar en los manuales de economía y quedó grabado en el imaginario colectivo alemán como el colmo de los horrores (también de los errores) causados por la nefasta política económica aplicada y por los asfixiantes pagos impuestos como reparaciones de guerra. Sin embargo, los hechos contemporáneos que sucedieron entre 1921 y 1923 sólo explicaban una parte de las causas de aquel fenómeno. Otras causas se remontaban a las tensiones acumuladas en los años de la guerra, es decir, el tiempo en el que la oferta de alimentos y otros bienes básicos era escasa, los ahorros de la población no podían gastarse, el gobierno financiaba los gastos militares emitiendo moneda y los precios estaban controlados mediante procedimientos administrativos.

Al finalizar la guerra, la demanda largamente insatisfecha de bienes básicos se topó con una economía destruida, sin capacidad para aumentar la producción, ni redes comerciales que distribuyeran los bienes existentes en lugar de acaparadores que se aprovechaban de la situación. La decisión francesa de ocupar militarmente la cuenca del Ruhr en 1922 (para exigir los pagos pendientes) precipitó los acontecimientos larvados desde que, al final de la guerra, el desorden había ido provocando el alza de los precios internos y la desvalorización de la moneda frente a las demás divisas. En 1922 la aceleración del caos monetario empujó la economía hacia el túnel de la hiperinflación[32]. Un espectáculo plasmado en fotografías de la época donde se aprecia cómo las personas iban a comprar pan llevando carretillas repletas de marcos. La moneda había perdido toda función como medio de intercambio y como reserva de valor. En octubre, sólo el 1% de los ingresos del gobierno procedía de sus vías recaudatorias; el 99% restante lo obtenía con emisiones de papel moneda que

alimentaban la espiral de precios.

La inflación exponencial ahondaba el colapso de la economía y tenía efectos desgarradores para la mayoría de la población, porque eliminaba los ahorros existentes y laminaba los ingresos, impidiendo comprar alimentos, vestimenta y otras necesidades básicas, y condenando a la ruina a un gran número de pequeños y medianos propietarios. Sin embargo, las grandes empresas supieron sacar provecho del desorden por distintas vías: colocaron sus ahorros en el exterior antes de que se hundiese la moneda, vieron cómo el valor de sus deudas se esfumaba conforme subían los precios y eludieron el cumplimiento de sus compromisos laborales sobre salarios, horarios y otros aspectos, amparándose en la crudeza de la situación. Al final de la vorágine inflacionista, los trabajadores vivían miserablemente, las capas medias estaban arruinadas y las grandes empresas no tenían deudas.

La inflexión de aquella dinámica devastadora se produjo en 1924. El gobierno emitió una nueva moneda acompañada de un ajuste presupuestario que le privaba de realizar gastos que requiriesen de nuevas emisiones descontroladas. El gobierno de Estados Unidos abandonó la actitud pasiva adoptada desde Versalles, apoyó la flexibilización de los pagos por reparaciones y, mediante el plan Dawes, aportó a Alemania un programa de préstamos que aliviaba la devolución de sus pagos pendientes. La economía detuvo la caída al vacío y comenzó a ofrecer mejores resultados en términos de estabilidad monetaria y paulatina recuperación de la producción industrial y el empleo. No obstante, hasta finales de 1927 los indicadores económicos no alcanzaron los niveles previos a la guerra. Pero ni siquiera eso era aplicable a los indicadores sociales y gran parte de la población mantenía una lucha diaria por subsistir.

El final del túnel desembocó en una economía que recuperaba lentamente su crecimiento y una mayoría social que seguía soportando los rigores de una vida muy precaria y sin perspectivas de que se produjeran reformas sociales[33]. Una encrucijada que trabó un vínculo triangular entre el desencanto social por el vacío reformista, los resultados electorales y la dinámica política. La guerra mundial, el estancamiento y la hiperinflación habían proletarizado a la mayor parte de la población, pero a la vez habían generado un resentimiento que convertía a los arruinados en carne de cañón para las posiciones ultraderechistas. Un desgraciado guiño de la historia hizo que las esperanzas depositadas en la guerra y la crisis económica como parteras de una revolución social, o al menos de importantes transformaciones estructurales, se desvaneciesen por completo

ante una dinámica involucionista que sólo favorecía a las fuerzas más reaccionarias.

El SPD, vapuleado por la realidad

El cambio de rumbo de los acontecimientos empezó con las elecciones de 1920, las primeras celebradas bajo la Constitución de Weimar y apenas un mes después de la firma del Tratado de Versalles. El SPD mantuvo su posición como primera fuerza parlamentaria, pero sufrió un fuerte retroceso: perdió más de cinco millones de votos, bajando 16 puntos porcentuales, lo que le supuso 60 diputados menos. La caída afectó también a sus dos aliados en el gobierno, que conjuntamente perdieron 42 diputados[34]. Como la coalición tripartita de Weimar no alcanzó la mayoría parlamentaria, meses después del inicio de la legislatura tuvo que contar con el apoyo del populista DVP, impidiendo que el SPD siguiera al frente del gobierno e inclinando la coalición hacia el centro-derecha. El gobierno se tornó más heterogéneo, menos cohesionado y sin vocación reformista, mientras que el funcionamiento del Reichstag se hacía más inestable.

Un hecho fundamental en aquel dibujo político fue la posición adoptada por el USPD. Había logrado una fuerte subida electoral y se había convertido en la segunda fuerza política, sólo cuatro puntos porcentuales por debajo del SPD, que era a costa de quien había conseguido esa fuerte subida. La hostilidad fratricida entre ambos partidos hizo que el USPD, con casi el 18% de los votos y 83 diputados, optase por oponerse a un gobierno en el que el SPD perdía influencia hasta llegar a ser desplazado. Por su parte, el KPD, una vez abandonada su posición de rechazo frontal al parlamento, obtuvo cuatro diputados en su estreno electoral. Sin embargo, la posición ascendente del USPD fue efímera, ya que en su seno se produjo el mismo debate escisionista que en otros países afectó a los partidos socialistas a raíz de la ruptura promovida desde la III Internacional por los dirigentes soviéticos. La escisión del USPD sucedió cuando vivía su momento más álgido, con 800.000 militantes y esos 83 parlamentarios. Estuvo liderada por Ernst Thälmann y supuso el abandono de la mitad de los militantes y una cuarta parte de los diputados, que pasaron a integrarse en el KPD. Los demás militantes mantuvieron el partido hasta que, en 1922, la mayoría volvió a

ingresar en el SPD.

Tras las elecciones, un gobierno escasamente cohesionado tuvo que lidiar con el desafecto general creado por el Tratado de Versalles, rematado por la ocupación francesa de las zonas industriales del Ruhr y alimentado por el desorden económico y el proceso hiperinflacionista. Su rápido desgaste se saldó con sucesivas crisis en las que primero se produjo la entrada en la coalición del populista DVP y el nombramiento como canciller de su líder, Gustav Stresemann, y después llevó a salida del SPD, que se situó en la oposición. La nueva alianza de gobierno, llamada «coalición burguesa», se inclinó hacia la derecha y deshizo algunas de las primeras reformas republicanas, derogando entre otras la norma que establecía la jornada laboral de ocho horas. En el haber del gobierno cabía contabilizar su defensa de la democracia republicana contra los embates de las fuerzas de ultraderecha, agudizados tras el intento de putsch llevado a cabo en Múnich por el Partido Obrero Nacionalsocialista (NSDAP) liderado por Adolf Hitler en noviembre de 1923. Dejando patente una vez más el carácter reaccionario de la judicatura, la suave condena de cinco años que se le impuso por intentar un golpe de Estado se convirtió después en una breve y confortable estancia en la cárcel de solo unos meses, desde donde prosiguió llamando al derrocamiento del gobierno[35].

Las siguientes elecciones, en 1924, ahondaron la fragmentación y la inestabilidad parlamentaria, obligando a celebrar una nueva convocatoria electoral a finales de año. El voto socialista experimentó un agudo descenso, aunque la apariencia de los datos podría inducir a suponer que no fue así, pues el SPD mejoró sus resultados anteriores consiguiendo el 26% de los votos y 131 diputados. Sin embargo, ese aumento fue debido a la desaparición del USPD como competidor, a pesar de lo cual el SPD sólo recogió la tercera parte de los votos que su anterior rival socialista había obtenido en 1920. El SPD seguía siendo el partido más votado, pero estaba en la oposición y carecía de fuerza política para impulsar las reformas que propugnaba. Sus principales objetivos eran meramente defensivos, tratando de evitar que se dieran mayores pasos atrás en el funcionamiento democrático de la república y en las modestas reformas sociales de los primeros años.

La polarización se hizo palpable en el realineamiento de los partidos de centro y de derecha. El nacionalista DNVP se colocó como segunda fuerza parlamentaria, con una cuota del 20% y más de un centenar de escaños, solo treinta por detrás del SPD. Además, entraron en el Reichstag los nazis del NSDAP y otras

opciones de extrema derecha, aunque su emergencia en mayo quedó recortada en diciembre (del 6% al 3%). Lo mismo que sucedió en el otro extremo con el comunista KPD, cuya notable subida en la primera convocatoria se redujo en la segunda (del 13% al 9%), quedando con 45 diputados. La búsqueda de estabilidad por parte del electorado entre una y otra contienda favoreció a los tres partidos que formaban la coalición de gobierno, pero aun así sumaban poco más de la tercera parte de los votos y de los escaños[36]. Esa situación perjudicó sensiblemente al SPD, puesto que le obligaba a ejercer como fuerza de oposición pero a la vez tenía que evitar una caída del gobierno que favorecería a las fuerzas derechistas. Esta contradicción hizo que la coalición encabezada por Stresemann se mantuviera cuatro años más, intentando contener el ascenso de los partidos que rechazaban la república y que contaban con el indisimulado apoyo de muchos mandos militares y altos cargos de los órganos del Estado.

La situación creada en 1925 con el fallecimiento de Friedrich Ebert fue la prueba inequívoca de la profundidad que habían alcanzado las grietas provocadas por las fuerzas reaccionarias en el sistema político. La muerte del líder socialista que presidía la república hizo necesaria la convocatoria de elecciones presidenciales, las primeras a ese cargo que se realizaban por sufragio universal. En la primera vuelta, el mejor resultado lo obtuvo el candidato de la alianza DVP-DNVP, nacionalistas ambos, uno más centrado y el otro más a la derecha, uno en el gobierno y el otro en la oposición. Para la segunda vuelta, la alianza nacionalista incorporó al partido bávaro (BVP) y cambió a su candidato por el militar monárquico Hindenburg (antiguo jefe del ejército imperial). El SPD negoció con Zentrum y DDP el apoyo al candidato socialista Otto Braun, que había sido el segundo más votado, pero esos aliados impusieron que fuera el centrista Wilhem Marx, carente de cualquier atractivo para los electores de izquierda salvo por el hecho de que era la alternativa con la que tratar de impedir la victoria de Hindenburg, mientras que los comunistas mantuvieron a Ernst Thälmann como candidato. Aquel enrevesado juego terminó dando como resultado la victoria de Hindenburg[37].

Se produjo entonces un cruce de reproches entre los defensores de la república democrática. Los socialistas culparon a los centristas y liberales del nulo atractivo del candidato que habían impuesto. A su vez, los tres (SPD, Zentrum y DDP) responsabilizaron a los comunistas del KPD de haber facilitado la victoria de Hindenburg, distrayendo votos hacia su candidato cuando no tenía ninguna posibilidad de ganar. Los comunistas devolvían la responsabilidad de la derrota al SPD y sus aliados por haberse escorado tanto a la derecha que hacían inviable

el apoyo comunista a un candidato como Marx, que incluso había provocado el desafecto de una parte del electorado socialista. En definitiva, una nueva ocasión en la que cada partido acusaba a los demás de un desaguisado cuyo desenlace perjudicó a todos.

Los errores y las bazas perdidas por los partidos obreros desde el nacimiento de la república explicaban en parte aquella lamentable dinámica política; otra parte se explicaba por el astuto y desvergonzado aprovechamiento que la derecha hizo de la crisis económica y el Tratado de Versalles. Pero, al mismo tiempo, era necesario considerar los condicionantes derivados de la estructura social que se configuró tras la guerra. La distribución del empleo era un buen reflejo del proceso que arruinó a millones de pequeños y medianos propietarios, condenó al desempleo a millones de asalariados y castigó las condiciones de vida de la población. En 1925, entre los 32 millones de personas activas, aproximadamente la mitad eran trabajadores asalariados y la otra mitad se repartía en proporciones similares entre los autónomos, los empleados diversos, incluidos funcionarios, y quienes trabajaban en empresas familiares. La gran mayoría de estos sectores diversos junto con segmentos crecientes de los asalariados nutrían las filas de los perdedores, en las que germinaron los resentimientos contra los socialistas y demás partidarios de una república que no les había ofrecido soluciones; mostrándose receptivos a quienes les ofrecían soluciones balsámicas.

La situación hacía cada vez más patente una cruel evidencia: ni la crisis económica ni el ejercicio de la democracia política habían favorecido el desarrollo de una conciencia política a favor del socialismo, fuese reformista o revolucionaria. El transcurso de la década derrumbó los discursos de socialistas y comunistas como castillos de naipes. El SPD estaba defendiendo una república huérfana de soluciones para las demandas urgentes de los trabajadores, apostando por la opción menos mala, que al cabo de poco tiempo se desvelaba como la puerta hacia otra peor. Como en las décadas anteriores a la guerra, era el partido más votado pero estaba al margen del poder, con el agravante de que ahora no podía lograr las reivindicaciones exigidas por su base social en una república cada vez más erosionada. El KPD era una fuerza secundaria que carecía de un horizonte inmediato en el que proyectar sus afanes revolucionarios, con el añadido de que en el resto del continente europeo habían desaparecido las esperanzas que muchos habían depositado acerca de la inminencia de procesos insurreccionales que se irían extendiendo de un país a otro. Aquellos tiempos en los que Grigori Zinóviev, al frente de la III Internacional, pronosticaba en 1919 que «dentro de un año toda Europa será comunista» y, algo menos optimista,

León Trotski matizaba que «no era cuestión de meses sino de años»[38]. Replegado al territorio nacional, en el KPD afloró una tendencia que rechazaba la reorientación había el «apaciguamiento» y apostaba por crear consejos obreros revolucionarios, tensar la confrontación política y preparar una insurrección[39].

Los acontecimientos que siguieron a las elecciones de 1928 terminaron por activar todos los problemas acumulados y cerraron un círculo vicioso que parecía imitar a la situación creada en 1920. Los mejores resultados volvieron a corresponder al SPD, mientras que la coalición de gobierno liderada por Stresemann perdió más de 50 diputados, y el KPD registró un pequeño ascenso[40]. El SPD volvió a liderar una alianza (Grosse Koalition) que ampliaba la anterior coalición, con el socialista Hermann Müller como canciller. Sin embargo, la heterogeneidad de los aliados y las tensiones políticas provocadas por las fuerzas derechistas hicieron imposible encontrar otros elementos de convergencia que no fueran la defensa de los principios democráticos de la república. La división se hizo más intensa cuando la crisis internacional en 1929 hizo que surgieran grandes divergencias en torno a la política económica que se debería aplicar. Las posiciones centristas netamente favorables a los empresarios decantaron la implementación de un conjunto de medidas de austeridad contra los trabajadores, provocando la dimisión de Müller y la salida del SPD de la coalición. La inevitable convocatoria de nuevas elecciones marcó el curso final de la república.

Crepúsculo de la democracia de Weimar: todavía podía empeorar más

Las elecciones de 1930 no dieron resultados muy distintos a los anteriores, pero sí contribuyeron a acelerar las tendencias centrífugas, configurando un Reichstag más fragmentado y polarizado que impedía la formación de coaliciones estables. El SPD siguió manteniéndose con holgura como primera fuerza política, pero perdió medio millón de votos, cayendo cinco puntos porcentuales y perdiendo 10 diputados. La principal novedad fue que la segunda fuerza dejó de ser el derechista DNVP a favor del NSDAP de Hitler, que ganó más de 5 millones de votos, con un aumento de 16 puntos porcentuales y casi un centenar más de escaños. La segunda novedad fue que el KPD aumentó en más de un millón sus

votos, ganando tres puntos porcentuales (hasta el 13%) y una veintena de diputados. Los retrocesos se cebaron en los partidos centristas que habían formado parte de las coaliciones de gobierno y en el nacionalista DNVP, con la salvedad del tándem Zentrum-BVP, que tuvo un ligero aumento. La suma de DNVP, DVP y DDP redujo su cuota electoral por debajo del 15% y perdió 55 diputados[41].

El SPD y los demás partidos del arco democrático comenzaron a sufrir las presiones del presidente de la república, los mandos del ejército y los medios ultraderechistas para que el nuevo canciller tuviera un carácter marcadamente conservador. La primera opción era Heinrich Brüning, vinculado al sector conservador de Zentrum, pero su compromiso con la república y el juego parlamentario le supuso la oposición frontal del NSDAP y de los sectores más derechistas de los otros partidos. Como esos partidos carecían de fuerza parlamentaria para provocar la caída inmediata de Brüning, su estrategia se desplegó en tres frentes. Primero, cuartear el margen de actuación del gobierno mediante múltiples maniobras. Segundo, forzar cuantas crisis parlamentarias tuvieran a su alcance, dejando en minoría a la coalición gobernante. Tercero, enrarecer el clima social, utilizando los lastres de la crisis económica (en 1931 había cinco millones de desempleados) y el Tratado de Versalles, que volvió a cobrar actualidad cuando los aliados se negaron a permitir el aumento del ejército y exigieron una vez más la desaparición de las organizaciones paramilitares, ahora tuteladas por los nazis[42].

Las elecciones a la presidencia de la república en 1932 les brindó la oportunidad de centrar su acoso en la figura de Hindenburg. Este había vencido en 1925 con el apoyo de las fuerzas de derecha y ahora iba a la reelección con el apoyo de casi todo el arco parlamentario para impedir la victoria de Hitler, que era el candidato conjunto del NSDAP y el resto de la ultraderecha. Finalmente, Hindenburg se alzó con la mayoría, pero Hitler obtuvo el 37% de los votos y pudo consolidar su imagen como figura unificadora del espectro ultranacionalista, militarista y antisemita. El avance de esas fuerzas se extendió a las elecciones territoriales, logrando un sonado triunfo en el parlamento de Prusia, desde el que condicionó la formación del gobierno prusiano. Abundando en ese fortalecimiento, los avances electorales le granjearon al NSDAP el creciente apoyo financiero de una parte de los grandes industriales y banqueros.

La erosión de las instituciones republicanas era también el objetivo del partido comunista, cuyos líderes estaban convencidos de que la inestabilidad política y

los efectos de la crisis económica favorecían su objetivo de superar al SPD como principal partido entre los obreros. Según su análisis, una vez logrado ese objetivo, el peligro que suponía el ascenso del partido nazi terminaría por favorecer la radicalización social a favor del KPD. Su candidato presidencial, Thälmann, apenas superó el 10% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero siguiendo las directrices de la III Internacional mantuvo una oposición frontal hacia el SPD. En Moscú se pensaba que la polarización de la derecha hacia el NSDAP era el reflejo de que la lucha de clases se estaba exacerbando, sin que pareciera importante valorar que entre los casi 13,5 millones de votantes de Hitler hubiera millones de obreros.

El tramo final que faltaba por recorrer para que las expectativas del NSDAP, no las fantasías del KPD, se hicieran realidad discurrió en el intervalo de los nueve meses en los que se celebraron tres elecciones seguidas, desde julio de 1932 a marzo de 1933. Caído el gobierno de Brüning, otro dirigente del ala conservadora de Zentrum, Franz von Papen, no consiguió los apoyos suficientes para formar gobierno, aunque sí impidió que Hitler pudiera hacerlo. Las elecciones de julio y diciembre pusieron de manifiesto la imposibilidad de crear mayorías. Después, las terceras elecciones desvelaron la patética trama con que el NASDAP sentenció el final de la república de Weimar.

El desbarajuste político del momento hizo que, en julio, el NSDAP ejerciera como centro de gravedad de las alternativas de derecha, pasando a ser la mayor fuerza parlamentaria con 230 diputados. Pero no lo hizo a costa del SPD, cuya leve caída la compensó el ascenso del KPD, ni tampoco de Zentrum-BVP, que mantuvo su anterior representación, de modo que la suma de esos tres partidos, 319 diputados[43], superaba con creces la representación de los nazis y hacía inviable que tuvieran la mayoría en el Reichstag. El panorama no se alteró en diciembre, registrándose pérdidas de votos y escaños por parte de NSDAP y SPD a favor de DNVP en la derecha y KPD en la izquierda[44]. El aumento de tres puntos porcentuales y 11 escaños reforzó la obnubilación de los dirigentes comunistas, creyendo que unas nuevas elecciones terminarían por consolidar su posición a costa del SPD, para después hacer frente al previsible triunfo nazi como antesala de un proceso revolucionario.

El trágico final de ese vano discurso y de la vida de la república se puso en marcha durante el invierno. Los poderes económicos y los dirigentes nazis convinieron que las siguientes elecciones tendrían que ser definitivas, no sólo por los resultados sino porque su primera consecuencia sería extirpar la

influencia socialista y comunista; si bien esos poderes económicos estaban lejos de suponer el alcance que los líderes nazis darían a su triunfo electoral. El trámite desde la agonía hasta el asesinato de la república se ejecutó con medios violentos, nada constitucionales y premonitorios de lo que estaba por llegar. Todo instrumento en manos nazis sirvió para sus propósitos. Intoxicaron a la opinión pública con noticias sobre complots comunistas que no existían. Utilizaron sus posiciones en los gobiernos regionales, sobre todo el cargo de Goering como ministro del Interior de Prusia, para inventarse normas ilegales con las que reprimir al SPD, el KPD y destacados centristas, así como para facilitar coartadas legales que daban impunidad a las acciones paramilitares de las SS, las SA y demás milicias controladas por los nazis. Seis días antes de las elecciones, un extraño incendio del Reichstag sirvió para que, sin prueba alguna, el KPD fuera acusado de ello, comenzando una oleada de detenciones entre sus militantes y una campaña destinada a fomentar el miedo histérico entre los grupos sociales temerosos de los desórdenes públicos y de actos contra la religión, que nunca llegaron a tener lugar.

Con esos antecedentes, el 5 de marzo de 1933 se celebraron las terceras elecciones en apenas nueve meses. Los resultados favorables al NSDAP le dejaron un sabor agridulce, pues los 17,3 millones votos le otorgaban una amplia ventaja parlamentaria con el 44% de los diputados, pero ese triunfo le imponía dos restricciones indeseables. Primera, necesitaba aliarse con el nacionalista DNVP para alcanzar la mayoría del Reichstag y formar gobierno. Segunda, esa alianza seguía quedando lejos de la mayoría de dos tercios que necesitaba para imponer un gobierno con Hitler de canciller y dotado de poderes especiales. El procedimiento que habían tramado era la aprobación de una «ley habilitante» que concentrara el poder legislativo y ejecutivo en manos del canciller como paso imprescindible para ocupar las instituciones constitucionales desde las que acabar con la república.

A pesar de la represión y de las maniobras previas al día de las elecciones, el retroceso del SPD no impidió que mantuviera una cuota del 18%, mientras que el KPD fue el mayor damnificado porque vio destrozadas sus ilusiones al obtener una cuota del 12%. También retrocedieron Zentrum-BVP y DDP, pero tuvieron su cuota conjunta de casi el 14% con la que tampoco podían contar los nazis[45]. Esos resultados hacían imposible que Hitler construyera una mayoría de dos tercios, por lo que decidió que lo que no proporcionaba la aritmética tenía que aportarlo la actuación ilegal a través de la violencia. Antes de convocar la sesión de apertura del Reichstag, los nazis detuvieron a la mayoría de los

diputados comunistas y el día de la apertura prohibieron el acceso a los pocos que habían escapado y a una parte de los diputados socialistas, contentándose con amenazar a los de Zentrum. Una vez dentro del Reichstag, ordenaron cerrar las puertas y obligaron a que los presentes diesen por válida la sesión inaugural, pasando a aprobar la «ley habilitante», con el voto en contra de los 94 diputados del SPD que se hallaban presentes. Aprobada la ley, el último escollo que salvar era el posible veto de Hindenburg como presidente de la república. Las ilusas esperanzas de algunos en esa posibilidad fueron disipadas de inmediato, cuando Hindenburg no sólo se plegó al atropello nazi sino que hizo un elogioso discurso sobre el gobierno formado por el NSDAP.

Con los poderes especiales en manos de Hitler, entraron en acción las hordas nazis. En escasos días se adueñaron de todas las instituciones del Estado (ejército, justicia, administración, educación), procediendo de igual modo en todas las regiones, sustituyendo al personal y cambiando las funciones de los organismos. La lucha por exterminar la influencia socialista y comunista tomó la forma de aniquilación física de miles de militantes, el encarcelamiento de muchos más y la negación de cualquier derecho para todos. Después prohibieron a los demás partidos y sólo quedó el NSDAP, convertido en Partido-Estado. Tras la muerte de Hindenburg y la purga de los disidentes internos en el partido nazi y en las organizaciones paramilitares, Hitler se autoproclamó Führer (jefe) del tercer Reich (imperio), implantando un régimen totalitario. El siguiente objetivo sería la extensión del Reich por el continente europeo.

Terminó así la que puede considerarse como experiencia más esperanzadora, más frustrante y más aciaga en la historia de los partidos obreros. Esperanzadora porque, ubicados en el arranque del siglo XX, el SPD era la mejor muestra del tipo de partido que desarrollaba las funciones que justificaban su existencia histórica: gran capacidad de movilización y de organización de los trabajadores en defensa de sus intereses; creciente fuerza política orientada a la consecución de reformas profundas; y potencia electoral para representar a los trabajadores en las instancias estatales. La represión que ejercía el régimen monárquico sólo suponía un freno temporal y parcial para una acción política que se fortalecía con el paso del tiempo. Frustrante, en parte porque ya entonces asomaron algunas de sus flaquezas, derivadas de los defectos que incorporaban el burocratismo a la vida orgánica del partido y el comportamiento de los cargos públicos en acelerado ascenso. Pero, en mucha mayor medida, frustrante por los efectos devastadores que tuvo la sucesión trágica de tres acontecimientos: la posición a favor de la guerra, la ruptura del SPD con las escisiones del USPD y

de los espartaquistas (después KPD) y la suicida aventura de estos últimos en 1919. Aciaga porque, desde la instauración de la república y los resultados de las primeras elecciones, quedó al descubierto cómo, desde posiciones radicalmente dispares, ni el SPD ni el KPD eran capaces de desarrollar la acción política que reclamaban sus discursos. En su lugar, los socialistas concentraron los esfuerzos en la defensa de la democracia, esperando tiempos mejores para avanzar en unas reformas y transformaciones estructurales que nunca llegaron; mientras que los comunistas se obstinaban en debilitar a la república, creyendo que era el modo de anticipar un presunto movimiento revolucionario que tampoco llegó a desarrollarse.

Para el terreno de las conjeturas, más o menos sólidas, quedan las dudas sobre las oportunidades perdidas en lo que fue un momento histórico culminante, convertido en punto de no retorno tras la salida de la Primera Guerra Mundial. ¿Hubiera sido posible consolidar una república democrática y socialmente avanzada? A favor de ello parecían estar varios hechos. Alemania era el país europeo con la economía capitalista más desarrollada. El sistema político del káiser estaba absolutamente descompuesto. Los socialistas controlaban el gobierno y el parlamento. Los consejos de obreros y soldados estaban movilizados y disponían de notable armamento. El desprestigio social de las fuerzas reaccionarias podía ahondarse merced a su responsabilidad en el desencadenamiento y desenlace de la guerra. En contra de aquella posibilidad histórica, estaban los efectos sociales conservadores que segregaban la tradición autoritaria de la monarquía imperial, la existencia de una sociedad traumatizada por la guerra y la depresión económica, la actitud apocada y temerosa de una parte de los dirigentes socialistas, el apresuramiento impaciente de los núcleos socialistas más radicales y los disparatados acuerdos humillantes impuestos en Versalles.

[1] Esa llama fue avivada por el propio Napoleón cuando, en 1806, forzó la creación de una Confederación de estados germanos del Rin, integrada por los territorios que previamente había derrotado y a los que había convertido en aliados de Francia.

[2] En Prusia siguió funcionando un parlamento constituido mediante voto censitario, dividido en tres clases según los niveles de renta y el pago de impuestos. La minoría de terratenientes y demás potentados (primera clase) sólo

correspondía al 5% de la población, pero su representación era equivalente a la de casi el 15% de los demás propietarios (segunda clase) y a la de más del 80% de la población de la que formaba parte la tercera clase de electores. En las elecciones de Essen, un solo gran propietario, el industrial Alfred Krupp, era el único votante de primera clase, de manera que su voto personal equivalía a la tercera parte del censo de votantes.

[3] En la primera década del siglo XX la industria aportaba más del 40% del PIB y ocupaba a más de 11 millones de trabajadores, el 20% de los cuales se empleaba en grandes empresas con más de 200 empleados, y otro porcentaje similar en empresas que tenían entre 50 y 200 empleados.

[4] Para eludir negociaciones incómodas con los sindicatos, algunas empresas fomentaban la creación de sindicatos «amarillos» de ciertas categorías laborales con los que trataban de romper la unidad de los trabajadores.

[5] Los discrepantes crearon las Uniones Sindicales Libres, antecedente de la Asociación Libre de Sindicatos Alemanes, que después se vincularía a la izquierda del partido socialista.

[6] El reproche dirigido a Lassalle como aliado de Bismarck se debía a que ambos consideraban que su enemigo principal eran los partidos que representaban los intereses de la burguesía, compartiendo una visión «estatista» sobre la importancia del Estado en el funcionamiento de la economía y la sociedad. Bismarck lo hacía desde una estrategia basada en posiciones aristocráticas y Lassalle desde una estrategia obrera; contra la opinión de Marx y Engels, que pensaban que en una sociedad agraria, como la de Prusia, era un error centrar el combate contra la burguesía liberal. Sin embargo, carecía de sentido poner en duda la lealtad de Lassalle, Schweitzer y otros dirigentes de la ADAV hacia los ideales socialistas, por más que Marx y su amigo les profesaran una áspera antipatía personal. La prematura muerte de Lassalle, en 1864, dejó a la recién creada ADAV sin su principal inspirador.

[7] En 1881, Zentrum obtuvo 100 de los 397 escaños y la suma de DFP y LV alcanzaba otros 100, mientras que NLP y KP obtenían 97 conjuntamente. A pesar del retroceso en votos (6%), los candidatos socialistas presentados como independientes lograron 12 escaños.

[8] En las sucesivas elecciones celebradas hasta 1912, Zentrum obtuvo menos

del 20% votos y unos 100 diputados, NLP y KP sumaban algo más de la cuarta parte de los votos y disponían de unos 110 diputados, mientras que FVP y DFP reducían su cuota a la décima parte de los votos y unos 40-50 diputados.

[9] En 1912, Zentrum obtuvo 91 diputados, NLP 45, KP 43 y FVP 42.

[10] El programa de Erfurt se abstuvo de proponer como objetivo la formación de una república democrática porque las leyes vigentes habrían ilegalizado de nuevo al partido. Un Engels puntilloso siguió mostrando su desacuerdo con distintos aspectos del nuevo programa, aunque le parecía sensiblemente mejor que el aprobado en Gotha. Así lo expuso en una carta dirigida a Kautsky que los dirigentes socialdemócratas decidieron no publicar y permaneció inédita durante diez años, hasta que en 1901 apareció en Neue Zeit («Nueva época»), el periódico del SPD.

[11] Señalaba que incluso en 1848 las barricadas y demás formas de lucha en la calle perseguían más un éxito moral que una victoria práctica, intentando que flaqueasen las muy superiores fuerzas militares con las que se enfrentaban, pero sin posibilidad de vencerlas debido a la aplastante superioridad en armas, instrucción, dirección, planificación y disciplina.

[12] Detallaba cómo los grandes cambios habidos hacían inviable cualquier tentativa insurreccional: ejércitos numerosos y con ferrocarriles para desplazarse; armamento de mayor alcance, precisión y rapidez, capaz de hacer añicos la mejor barricada; trazado de las ciudades con calles largas, rectas y anchas, ideal para los cañones y otras armas pesadas… mientras que, por el lado de los potenciales insurrectos, crecían las dificultades para atraer las simpatías y la participación de muchas capas populares hacia ese tipo de lucha.

[13] OEME, tomo I, p. 206.

[14] Ibid., p. 200.

[15] Citado por W. Henderson (1970), The Life of Friedrich Engels, Londres, Frank Cass, p. 668.

[16] En Londres conoció también a otros dirigentes de la AIT, a los miembros de la Sociedad Fabiana y a los sindicalistas ingleses. Sus primeras críticas aparecieron en la revista de la II Internacional a lo largo de los años noventa; en ellas también cuestionaba varias tesis centrales de la teoría económica de Marx.

[17] En los años noventa, un líder cada vez más pragmático como Bebel seguía defendiendo la tesis del «derrumbe» del capitalismo como antesala de la revolución socialista y declaraba que vivía para luchar contra el capitalismo. Era el mismo que en 1879, convencido de los principios marxistas, expresaba en su libro La mujer y el socialismo que «el socialismo es ciencia aplicada con plena comprensión a todos los campos de la actividad humana».

[18] R. Luxemburgo (1974), Obras Escogidas (OERL), México, Era, tomo I, p. 208.

[19] OERL, tomo I, p. 143.

[20] Kautsky, principal referente teórico y uno de los principales líderes del partido, encarnaba de forma ejemplar esa combinación de una visión doctrinaria de la estrategia y el pragmatismo laxo en la acción práctica. En 1909, cuando publicó El camino del poder, Kautsky mantenía la tesis del derrumbe del capitalismo, de manera que la acción socialdemócrata consistía en desgastarlo hasta que el derrumbe del propio sistema aportase las condiciones objetivas en las que se produciría la revolución.

[21] Grupos de militantes socialdemócratas y sindicalistas se sentían atraídos por las ventajas materiales que proporcionaría a los obreros alemanes el mayor crecimiento económico impulsado por la expansión imperialista. En términos políticos, la animadversión al régimen zarista y al nacionalismo ruso hacían más digeribles las proclamas a favor del nacionalismo alemán y de la política exterior del káiser.

[22] El congreso de los socialistas europeos celebrado en París en 1912 había acordado que, en caso de guerra, convocarían una huelga general para evitar el enfrentamiento entre obreros.

[23] En Brunswick, la segunda ciudad de la Baja Sajonia, lograron que abdicara el gran duque y proclamaron una república socialista. En Baviera, tras la huida del rey, el dirigente del USPD Kurt Eisner proclamó la república bávara.

[24] En la misma línea, Ebert y otros dirigentes socialistas se referían con frecuencia al chovinismo de ingleses y franceses, y a la necesidad de mantener una lealtad patriótica, omitiendo cualquier referencia a la historia real de la guerra. Los mandos militares y las fuerzas más reaccionarias utilizaron después ese tipo de discurso para cuestionar al parlamento y al gobierno, tachándoles de

ser los responsables de las condiciones impuestas en Versalles por los aliados.

[25] Los miembros del USPD abandonaron el gobierno provisional en diciembre como protesta por la represión con la que el gobierno (con Noske como ministro de Defensa) y el ejército aplastaron un movimiento de marineros llegados desde Kiel a Berlín para apoyar la revolución.

[26] El KPD y el partido comunista de Austria, constituido en 1918, fueron los únicos que se crearon siguiendo el modelo leninista antes de que se formase la III Internacional (en marzo de 1919) y esta apostase por la ruptura con los partidos socialistas existentes.

[27] En Prusia y otros lugares el SPD formó gobierno con el apoyo de los nacionalistas, permitiendo que, como contrapartida, el ejército, las Reichswehr y los Freikorps asumieran atribuciones sobre el orden interno.

[28] El SPD obtuvo 11,5 millones de votos y 165 escaños, el 38% del total, mientras que Zentrum y su aliado bávaro, el Partido Popular Bávaro (BVP), tuvieron 91 escaños (20%); el DDP cosechó 75 escaños (17%). El USPD logró 22 diputados (8%). En la oposición también quedaron los nacionalistas del DNVP y los populistas-liberales del DVP.

[29] Ebert fue elegido presidente de la república con 277 votos a favor, 51 en contra y otras 51 abstenciones. La Constitución fue aprobada por 262 votos contra 72.

[30] Los aliados exigían la reducción del ejército, la entrega de criminales de guerra y la disolución de cuerpos militares, tales como las dos brigadas Erhardt, estacionadas en Silesia y formadas por ultranacionalistas cuyo emblema era la cruz gamada.

[31] El intento de golpe de Kapp y Von Lüttwitz dio lugar a varios amagos de levantamiento revolucionario en ciudades de la cuenca del Ruhr, Sajonia y Turingia, la mayoría iniciados al margen del diezmado KPD. Todos ellos se saldaron con duras represalias y feroz represión, incluyendo el asesinato de líderes del USPD y el KPD.

[32] Tomando como referencia el nivel de precios en julio de 1914, hasta enero de 1919 aumentó de 1 a 2,6; en enero de 1920 había pasado a 12,4 y en enero de 1921 a 14,4. El desbarajuste posterior hizo que, en enero de 1922, el nivel

estuviese en 36,7 y en enero de 1923 en 2.385. A partir de ahí llegó la locura: 194.000 en julio y 726.000 en noviembre. La tasa de cambio que ya entonces estaba bastante depreciada pasó a lo largo de 1922 de 36,7 marcos por dólar a 7.592 M/$, para alcanzar 350.000 M/$ en julio de 1923 y 4,2 billones a mediados de noviembre.

[33] La otra cara de la moneda correspondía al esplendor cultural con el que cobraron vida la literatura, la arquitectura, los teatros y los clubes nocturnos, mostrando una riqueza intelectual y una creatividad vanguardista sin precedentes.

[34] Los resultados de los partidos de la coalición fueron: SPD, 22% de votos y 103 escaños; Zentrum y su aliado bávaro, 18% y 85; y DDP, 8% y 39 diputados. En la derecha, el nacionalista DNVP aumentó considerablemente su fuerza y, con 71 diputados, se situó como tercera fuerza parlamentaria.

[35] Pretendiendo actuar de manera salomónica, el gobierno prohibió durante varios meses, entre 1923 y 1924, la actividad del partido comunista y del partido nazi.

[36] En diciembre, Zentrum y su socio bávaro obtuvieron el 17% y 98 diputados; DVP, el 10% y 51; y DDP, el 6% y 32 diputados.

[37] En la primera vuelta los resultados de los candidatos fueron: 38% para DVP-DNVP, 20% para SPD, 14% para Zentrum, 7% para KPD y porcentajes menores para los demás. En la segunda vuelta Hindenburg obtuvo el 48,5%, Marx el 45% y Thälmann el 6%.

[38] Marchitadas esas ilusiones, la III Internacional reorientó la posición de los partidos que estaban bajo su control en torno a dos ejes: la defensa del régimen de la URSS como supuesto reducto comunista y el repliegue hacia el interior de cada país, combinando la defensa de programas maximalistas con el sistemático ataque a los partidos socialistas.

[39] Esa minoría contó con figuras intelectuales tan destacadas como Karl Korsch en Alemania, Georg Lukács en Hungría y Anton Pannekoek en Holanda.

[40] El SPD volvió a superar los 9 millones de votos, acercándose al 30% del total, con 153 diputados. Entre la coalición de gobierno, el DNVP obtuvo 73 diputados, Zentrum 61, DVP 45 y DDP 25. El KPD obtuvo 54, un partido «de

las clases medias» 23, y el nazi NSDAP 12 diputados.

[41] El SPD tuvo el 24% de votos y 143 diputados; Zentrum y su socio bávaro 96, DNVP 41; DVP 30, DDP 25, NSDAP 107 y KPD 77 diputados.

[42] Además, esa estrategia impidió la aprobación del plan financiero presentado por Brüning al parlamento y, a continuación, logró que el Reichstag rechazase la solicitud del canciller para que Hindenburg aprobara el plan utilizando sus poderes presidenciales.

[43] El SPD contaba con 133 diputados, Zentrum-BVP con 97 y KPD con 89. En votos, NSDAP obtuvo el 37%, SPD el 22%, Zentrum-BVP el 16% y KPD el 14%.

[44] NSDAP obtuvo 196 diputados, SPD 121, KPD 100, DNVP 52, Zentrum-BVP 90, DVP 11 y DDP 8.

[45] NSDAP obtuvo 17,3 millones de votos (44%) y 288 diputados; SPD 7,2 millones (18%) y 120 diputados; KPD 4,8 millones (12%) y 81 diputados. Los demás diputados se repartían entre los 92 de Zentrum-BVP, 52 de DNVP, 6 de DVP y 5 de DDP.

5. Los bolcheviques rusos: revolución en una sociedad sin premisas civilizatorias

Los episodios que vivió Rusia durante el año 1917 presentaron varias semejanzas con otros acontecimientos históricos que tuvieron lugar en Francia y Alemania. La Revolución de Febrero tuvo similitudes con la secuencia iniciada en Francia a partir de 1789, ya que en ambos casos se produjo el derrocamiento de monarquías tiránicas y el fin de la dominación aristocrática. Así mismo, la Revolución de Octubre mostró paralelismos con los episodios insurreccionales que un año después se desencadenaron en Alemania a raíz del vacío de poder creado por el desorden absoluto que se generó durante la guerra: profunda crisis del sistema monárquico, grandes movimientos sociales, creación de consejos de obreros y soldados, y existencia de un núcleo revolucionario dispuesto a conquistar el poder del Estado.

La mayor diferencia entre febrero de 1917 y julio de 1789 fue la actividad de las organizaciones obreras en el combate contra la monarquía y la aristocracia. La mayor diferencia entre octubre de 1917 y enero de 1919 fue la actuación del núcleo revolucionario compuesto por los bolcheviques en el levantamiento armado que logró hacerse con el poder. A partir de esas diferencias mayores, cabe añadir muchas otras causadas por las disparidades de la estructura económica, la forma de organización social y el sistema político de cada uno de los tres países en el tiempo histórico en que se produjeron los respectivos episodios revolucionarios.

El hecho de que los bolcheviques consumaran su objetivo hace que el análisis del proceso ruso tenga que considerar dos aspectos complementarios: las causas que hicieron posible la revolución y las consecuencias que tuvo esa revolución. De un lado, se trata de examinar la concatenación de excepcionalidades que fueron sumándose en el intervalo de febrero a octubre. Una catarata de factores que con frecuencia ignoran quienes se limitan a interpretar aquel proceso a través de los argumentos propuestos por los protagonistas, olvidando el conocimiento de los hechos que se fueron sucediendo. De otro lado, es fundamental abordar el «día después» de que los bolcheviques tuvieron el poder en sus manos, para lo cual es imprescindible tener en cuenta las características

de la economía, la sociedad y la política zaristas, porque sólo así se comprende por qué casi nada de lo que los revolucionarios pusieron en marcha tenía que ver con lo que habían pensado antes. La desconexión entre sus aspiraciones y la situación real de 1917 originó una continua incomodidad de los bolcheviques con las decisiones que adoptaron desde el gobierno. Qué revolución y para qué propósito fueron interrogantes que acompañaron a todas las tendencias del socialismo ruso desde finales del siglo XIX hasta 1917, y prosiguieron después en el seno del partido bolchevique hasta los años treinta.

En ese transcurso, la Revolución rusa cobró trascendencia universal por partida doble. Primero, a través de la creación de la III Internacional, en la medida en que los líderes bolcheviques provocaron la ruptura de los partidos socialistas y pasaron a ejercer un estricto control sobre los partidos comunistas que surgieron de la escisión. Segundo, a través de la sobrevivencia y el fortalecimiento de la Unión Soviética, dotada de un aura beatífica por quienes la tomaron crédulamente como modelo de socialismo y tachada de peligro diabólico por los detractores que la suponían una traslación de los presagios infernales hechos realidad.

DESPOTISMO ZARISTA Y ORGANIZACIONES SOCIALISTAS

Las diferencias de la evolución histórica de la Rusia zarista con la seguida por los países capitalistas europeos fueron atisbadas por Marx cuando varios intelectuales rusos le preguntaron acerca de la posibilidad de conseguir que el comunismo se llevara a cabo en una sociedad no capitalista. Esta idea latía entre los naródniki (populistas) que pretendían levantar a los campesinos contra el zar para instaurar un socialismo basado en la comuna agraria (obschina). La comuna era una forma de organización patriarcal en la que la propiedad de la tierra era colectiva y tanto el trabajo como la producción se distribuían de forma equitativa entre sus miembros. Según los naródniki, la senda histórica que conectaba el desarrollo del capitalismo con el socialismo carecía de sentido en una economía agraria con una amplia base comunal. Consideraban que los rasgos capitalistas que presentaba la economía eran injertos minoritarios que amenazaban con destruir la obschina como soporte económico y social del campesinado[1].

Desde una posición política distinta, una de las primeras dirigentes socialistas, Vera Zasúlich, interpelaba a Marx con el mismo interrogante: qué importancia tenía la comuna agraria para el futuro de un proyecto de emancipación social. Dándole vueltas a su respuesta, Marx redactó varios borradores hasta que en el último, fechado en febrero-marzo de 1881, escribió: «La comunidad rural, que existe aún a escala nacional, puede deshacerse gradualmente de sus caracteres primitivos y desarrollarse directamente como elemento de la producción colectiva a escala nacional […]. Si en el momento de la emancipación las comunidades rurales se viesen en unas condiciones de prosperidad normal […] a nadie se le ocurriría la idea de la "fatalidad histórica" de la aniquilación de la comunidad»[2]. Al año siguiente, en el Prefacio a la segunda edición del Manifiesto Comunista, Marx y Engels vincularon esa posibilidad a otra: «Si la revolución rusa da la señal para una revolución proletaria en Occidente, de modo que ambas se completen, la actual propiedad común de la tierra en Rusia podrá servir de punto de partida para el desarrollo comunista»[3]. Antes y después de esas fechas la posición de Engels parecía más escéptica, colocando el énfasis en la versión canónica que destacaba las condiciones materiales y políticas generadas por el desarrollo del capitalismo[4].

El sistema zarista: mucho más que una monarquía absolutista

Al comenzar el siglo XX, la economía zarista se sustentaba en una agricultura cuyo atraso estructural eran bastante más profundo de lo que sopesaban las organizaciones socialistas que se exponen más adelante. El carácter arcaico de las formas de organización y de las técnicas de cultivo era pavoroso. El decreto de abolición de la servidumbre de 1861 supuso, de hecho, la multiplicación de nuevos vínculos feudales y patriarcales. La comercialización de una (pequeña) parte de la producción agraria no obedecía a la penetración de las relaciones capitalistas en el campo, sino a que la asfixia tributaria del Estado obligaba a los campesinos a vender rápidamente una parte creciente de sus cosechas para pagar los impuestos; pero lo hacían a costa de reducir su precario nivel de autoconsumo[5].

Por el lado de la industria, el raquítico nivel productivo que existía en los años ochenta del siglo XIX hizo que la instalación de fábricas textiles, metalúrgicas y

alimentarias promoviera un rápido aumento de las cifras de producción. Sin embargo, al comenzar el nuevo siglo las formas de organizar el trabajo, la precaria tecnología disponible y la escasa diversificación productiva distaban un abismo de parecerse a las estructuras industriales que poseían las economías capitalistas desarrolladas. El protagonismo empresarial correspondía al Estado zarista, que era el principal propietario, así como el gestor y el avalista de los inversores extranjeros. La actuación del Estado hacía posible que hubiera un número mínimo de fábricas y de minas, pero que estas fueran de gran tamaño[6]. Se trataba de pequeñas islas, en torno a San Petersburgo, Moscú, la Polonia zarista y las cuencas del Donéts y Dniéper, rodeadas de un inmenso océano de agricultura atrasada y de artesanía rural.

La organización social se correspondía con el escaso desarrollo económico. Los campesinos estaban sometidos al dominio de los terratenientes mediante relaciones arcaicas, mientras que en las ciudades los propietarios industriales, comerciantes y banqueros (aristócratas, nuevos burgueses y capitalistas extranjeros) ocupaban una posición minoritaria y dependían de las decisiones del Estado. La propiedad privada capitalista era muy minoritaria. Alrededor del 90% de la población vivía en el campo y un porcentaje similar de la mano de obra eran campesinos y artesanos rurales, mientras que menos del 10% eran asalariados y, entre ellos, sólo la quinta parte trabajaba en las minas y las fábricas manufactureras[7].

La estructura política mostraba semejanzas con el régimen monárquico prusiano: despótico, burocrático y militar. Sin embargo, ese parecido resultaba impreciso para caracterizar al Estado zarista, ya que también dominaba la economía y vertebraba la organización social. Su carácter despótico entroncaba con las raíces asiáticas legadas por siglos de dominación mongola en un territorio euroasiático de gran variedad étnica y dimensiones colosales, con espacios abiertos (en lugar de fronteras) a territorios e imperios dispares. El imperio se hallaba en constantes guerras, unas para defenderse y otras para seguir expandiendo sus dominios. El Estado había convertido la religión ortodoxa en una ideología de Estado, que servía para legitimar el poder del zar y las decisiones de los órganos estatales a su servicio.

Un sistema con esas características, sometido al dominio pétreo del Estado, dejaba escasos resquicios para que las aspiraciones democráticas anidasen en pequeños grupos de la aristocracia capitalista y de la burguesía industrial y financiera, y menos aún para que aflorasen los conflictos sociales. El Estado era

el destinatario de la mayoría de las reclamaciones, incluso sindicales, por lo que, antes de que derivasen en conflicto, las reivindicaciones eran cortadas de raíz por medios represivos. Por esa razón, los acontecimientos de 1905, además de una sorpresa, fueron la expresión de que algo sucedía en el sistema zarista y en sus mecanismos de dominación.

La incipiente industrialización había concentrado a una gran parte de los obreros en grandes fábricas localizadas en los barrios periféricos de varias ciudades, donde soportaban unas infames condiciones de explotación. La inmensa mayoría campesina seguía padeciendo una humillante opresión, sin que fuera satisfecha ninguna de sus viejas reivindicaciones. La guerra desatada por el zar contra Japón aumentó las privaciones de la población y ocasionó la muerte de miles de soldados y marineros; encima, la derrota final acrecentó el descontento social. Con este telón de fondo, se fueron desencadenando distintos conflictos que la represión iba apagando, hasta que en enero de 1905 en la capital, San Petersburgo, se organizó una manifestación pacífica de obreros que pretendían presentarle al zar una lista de reivindicaciones laborales. Iba presidida por sacerdotes ortodoxos que portaban iconos religiosos, y en ella participaban numerosas mujeres y niños. La manifestación fue salvajemente reprimida por el ejército y las centurias negras, provocando centenares de muertes. La indignación desatada dio paso a sucesivos movimientos: ocupación de tierras por los campesinos; movilizaciones de estudiantes y profesores; manifestaciones por los derechos nacionales en Polonia, Finlandia y el Báltico; sublevaciones de marineros en Vladivostok, Sebastopol y Kronstadt; y huelgas de los mineros en el Cáucaso. Entre tanta explosión de descontento, surgió un movimiento huelguístico entre los obreros de las fábricas de San Petersburgo que después se extendió a Moscú, Donéts-Dniéper, Polonia y otras zonas industriales.

Ese movimiento confirmó el pronóstico de quienes confiaban en el potencial combativo de los obreros hacinados en los grandes centros fabriles. En ellos se crearon consejos de obreros (sóviets) que organizaron las movilizaciones. En la capital, al cabo de pocos días se creó el Sóviet de San Petersburgo, formado por 250 miembros, cuyo vicepresidente y principal figura política era Trotski, joven pero avezado agitador. El Sóviet representaba a 40.000 obreros y organizó un enorme movimiento que duró varios meses, convirtiéndose en escuela de aprendizaje de cómo luchar contra el sistema zarista sin recurrir al terrorismo, que hasta entonces había sido la forma tradicional con la que ciertos grupos conspirativos había combatido al zarismo. Aquel movimiento obrero fue derrotado y sufrió las represalias empresariales y estatales, pero al mismo tiempo

abrió una brecha en la estructura política, que el zar pretendió cerrar convocando en 1906 la formación de la Duma, un simulacro de parlamentarismo. Surgió entonces una nueva escena política en la que se curtieron varias organizaciones socialistas.

Tendencias socialistas precoces

Los matices de las respuestas ofrecidas por Marx y Engels sobre la cuestión rusa tenían relación con la aparición de distintos núcleos revolucionarios durante las últimas décadas del siglo XIX. Un grupo de intelectuales marxistas formó Emancipación del Trabajo (Osvobozhdenie Trudá) en 1883, manteniendo dudas acerca de la necesidad de vincularse con grupos terroristas como Voluntad del Pueblo (Naródnaia Volia) que, entre otros, fue responsable del asesinato del zar Alejandro III en 1881, y con los grupos naródniki para organizar la lucha política contra el zarismo. De hecho, aquellos intelectuales (Pável Axelrod, Gueorgui Plejánov, Vera Zasúlich) albergaban más recelos hacia el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), identificado con el canon marxista, que hacia aquellos grupos revolucionarios de raigambre rusa[8] cuya ideología se alejaba de dicho canon. Finalmente, la vinculación no se produjo y Emancipación del Trabajo se mantuvo como un corpúsculo cerrado, muy minoritario y sólo dispuesto a permitir el ingreso de jóvenes como Vladímir Lenin y Yuli Mártov, amigos entonces, plenamente identificados con la metáfora comunista de Marx y Engels. Era un grupo mínimo, con algunos de sus miembros cumpliendo penas carcelarias (Mártov), desterrados en Siberia (Lenin) o en el exilio (Plejánov, Zasúlich), cuya conversión en el Partido Obrero Social-Demócrata Ruso (POSDR) tuvo lugar en un congreso clandestino celebrado en Rusia, en 1898, al que sólo asistieron nueve delegados y cuyas resoluciones consistían en una retahíla de principios genéricos basados en dicha metáfora.

Exiliado en Ginebra, Plejánov era el ideólogo principal y mantenía contactos con Engels. En 1883 escribió la primera obra marxista rusa, Socialismo y lucha política, en la que introdujo dos formulaciones centrales que calarían plenamente en Lenin. Primera, la consideración de que el pensamiento marxista era un omnisistema capaz de explicar tanto la evolución de la historia como la de las ciencias naturales, tanto la teoría económica como la acción política. Segunda, la

interpretación de la evolución histórica de Rusia como si apenas existieran diferencias significativas con la historia de los países de Europa occidental, de modo que las tesis canónicas de la metáfora comunista tenían plena vigencia para Rusia.

El POSDR siguió siendo muy minoritario y sin apenas presencia en la vida política rusa durante los años siguientes, pero sus reuniones y sucesivos congresos (celebrados en el exilio) se convirtieron en un efervescente vivero de debates. A la larga, tuvieron una importancia decisiva en la historia de Rusia y, a la corta, sentenciaron la división en dos tendencias cada vez más dispares, que acabaron formando partidos diferentes, tajantemente separados por dos cuestiones complementarias: qué tipo de partido debía ser el POSDR y qué objetivos políticos debía proponerse.

El debate organizativo pivotaba alrededor de un dilema: los militantes del partido debían integrarse obligatoriamente en los órganos que llevaban la lucha activa, dura y clandestina, o bien podrían ser simples afiliados. Los partidarios de Lenin estaban por la primera opción. Consideraban que se trataba de forjar un partido de revolucionarios profesionales, férreamente cohesionados alrededor de la doctrina marxista, con un discurso revolucionario y una estructura orgánica clandestina basada en la disciplina jerárquica. Los partidarios de Mártov apostaban por la segunda opción. Pensaban crear un partido similar al que tenían las organizaciones socialistas europeas, aunque adaptado a las restricciones que imponía la represión zarista, intentando la máxima afiliación de militantes sin exigirles un trabajo clandestino, ni establecer un esquema rígido de funcionamiento orgánico.

El debate político giraba alrededor de las características económico-sociales de Rusia y, como consecuencia, el tipo de estrategia que implementar. Los partidarios de Lenin sostenían que las restricciones que encontraba el desarrollo del capitalismo determinaban la debilidad de la burguesía para combatir al zarismo en la lucha por establecer una república parlamentaria. Por tanto, debían ser los trabajadores, dirigidos por el POSDR, quienes enarbolasen ese combate democrático y lo fundiesen con el suyo propio hacia una revolución socialista. Los partidarios de Mártov defendían que, como había ido sucediendo en los países europeos occidentales, la lucha contra la autocracia desembocaría en una revolución democrática protagonizada por la burguesía y sólo después, cuando el desarrollo económico y social hubiera creado las condiciones materiales, se podría promover una revolución socialista. Por tanto, el POSDR debía centrarse

en impulsar la lucha contra el zarismo para conseguir una república democrática que incorporase reformas sociales favorables para los trabajadores.

Los choques entre ambas posiciones dieron lugar a sucesivos cambios en las resoluciones programáticas del partido, el control de los órganos de prensa y la composición de los órganos directivos. El segundo congreso, celebrado en Londres en 1903, con una escasa asistencia de militantes procedentes del interior, se decantó a favor de los partidarios de Lenin, motivo por el que su fracción pasó a denominarse «bolchevique», término que alude a su condición de mayoritarios, mientras que los partidarios de Mártov pasaron a ser «mencheviques», minoritarios[9]. Sin embargo, la visión impuesta por Lenin, sumamente jerárquica en lo organizativo y radicalmente intransigente en lo político, le hizo perder seguidores entre quienes temían una deriva «a lo Robespierre». Entre ellos estaban los dos líderes pioneros, Axelrod, cada vez más vinculado a los mencheviques, y Plejánov, defensor de la unidad frente a la tentación escisionista y a favor de un funcionamiento democrático frente al centralismo jerárquico. Plejánov fue una de las voces premonitorias que alertó de los peligros que podrían acarrear aquellas posiciones jerárquicas, pronosticando que si se trasladaban al ámbito de las decisiones políticas alumbrarían una versión del despotismo zarista revestida de ideas comunistas. Predijo que los bolcheviques podrían confundir la dictadura del proletariado con la dictadura sobre el proletariado[10].

Las tensiones entre bolcheviques y mencheviques se recrudecieron a partir de 1905, ya que extrajeron conclusiones diametralmente distintas de las movilizaciones obreras, de sus nuevas formas organizativas y del comportamiento de los diferentes grupos sociales. Cada cual confirmó sus principales tesis sobre el carácter de la revolución pendiente y las funciones del POSDR. Cuando se convocó la segunda Duma en 1907, las dos fracciones concurrieron por separado a las elecciones, pero hasta 1912 no consumaron su ruptura definitiva, de la que surgieron dos partidos socialistas que se reconocían en la doctrina marxista. El menchevique se vinculó a la II Internacional y, bajo el liderazgo de Axelrod y Mártov, no mostró un celo especial por pulir su discurso ni por la forma de organizarse. El bolchevique pasó a denominarse POSDR(b) y permaneció rígidamente anclado en los principios políticos y organizativos que había planteado Lenin.

Fue también al calor de los episodios de 1905 cuando adquirió cierta presencia pública una tercera organización socialista creada cuatro años antes: los

socialrevolucionarios, conocidos como «eseristas» por sus siglas en ruso (SRs). Era otro corpúsculo de intelectuales, liderados por Víctor Chernov, que procedían de organizaciones aún más minúsculas y coincidían en la defensa de un proyecto socialista basado en las ideas de los naródniki, impregnado por tanto de referencias a los campesinos y a la agricultura, que pretendían hacer compatibles con los planteamientos obreros e industriales de los partidos socialistas europeos. Su formulación programática eran bastante ecléctica e imprecisa, resaltando que su objetivo era derrocar al zar para instaurar un régimen republicano que diera satisfacción a la mayor aspiración de los campesinos: expropiar las tierras de los terratenientes, procediendo a su nacionalización jurídica para repartirlas entre los campesinos[11]. Tras los acontecimientos de 1905, los eseristas siguieron siendo un grupo minoritario, bastante radical, con una modesta incidencia social en las regiones agrarias y en pequeñas ciudades, mientras que la presencia minoritaria de los mencheviques y bolcheviques arraigaba en las grandes ciudades[12]. Unos y otros tomaron posiciones cuando el zar convocó elecciones de diputados para formar la Duma.

La convocatoria de 1906 alimentó las ilusiones de los partidarios de construir una monarquía constitucional y contó con el rechazo de eseristas y bolcheviques. La elección se realizó mediante sufragio masculino (a partir de los 25 años) en cuatro colegios diferentes[13] diseñados para favorecer la sobrerrepresentación de los terratenientes. A pesar de ello, el afán de cambio que latía en la sociedad hizo que la mayoría de los escaños cayera del lado de dos partidos no adictos al régimen autocrático: el democrático constitucionalista (kadet), vinculado a los núcleos burgueses y profesionales urbanos, y el laborista (trudovique), surgido de una escisión moderada entre los eseristas[14]. Cuando ambos partidos presentaron sus propuestas, el zar tomó tres decisiones: destituyó al jefe de gobierno, Witte, que apostaba por elaborar una constitución, cerró la Duma y convocó nuevas elecciones para el año siguiente. Un intento vano, pues la composición de la segunda Duma, en 1907, se alejó todavía más de las apetencias del monarca: el partido trudovique fue el más votado, con buenos resultados para mencheviques, eseristas y enesistas[15] que también habían concurrido. A la vista de los resultados, el jefe de gobierno, Stolypin, decidió que los votos del campo valían más que los demás y que, por tanto, la mayoría correspondía a los representantes de la aristocracia. Tal decisión hizo que la Duma naciera muerta y el gobierno se apresuró a preparar nuevas elecciones en aquel mismo año.

Los apaños de Stolypin hicieron que la tercera Duma estuviera dominada por los

octobristas, un partido de derecha, y por varias organizaciones de extrema derecha que cerraban filas con los terratenientes y la monarquía. Trudoviques, kadetes y nacionalistas estaban en minoría, mientras que eseristas y mencheviques rechazaron acudir a esa convocatoria, a la que sí se presentaron los bolcheviques, que de ese modo se estrenaron en la escena política[16]. La Duma compuesta al gusto del monarca se mantuvo en vigor hasta 1912, pero sin reportarle utilidad política en la medida en que no era capaz de integrar los afanes reformistas de los grupos burgueses capitalistas y menos aún las reclamaciones de los sectores populares. La cuarta y última Duma tampoco ejerció esa función representativa de la sociedad, puesto que el sistema electoral favorecía descaradamente a los partidos de extrema derecha, con un cierto retroceso de los octobristas a favor de los kadetes y otras opciones centristas[17]. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el zar no tuvo ningún problema en conseguir que la Duma apoyase su alineamiento militar con los aliados para combatir al imperio del káiser. La participación en la guerra contó también con el apoyo de los trudoviques, una parte de los eseristas y figuras como el líder anarquista Piotr Kropotkin y Gueorgui Plejánov, ambos empujados por un agudo espíritu antialemán.

CADENA DE HECHOS SINGULARES QUE HIZO POSIBLE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE

El recorrido que une los meses de febrero a octubre de 1917[18], desde la insurrección que derrocó al zar hasta el levantamiento bolchevique-soviético, puede considerarse como la primera parte del examen que puso a prueba la consistencia de la estrategia que Lenin defendió en el seno del POSDR desde principios de siglo. La segunda parte del examen llegaría después, una vez efectuada la revolución, cuando los bolcheviques tuvieron el poder en sus manos y se aprestaron a cumplir su proyecto socialista, dándose de bruces con una cruda realidad económica y social, muy diferente a la que habían previsto que existiera para desarrollar ese proyecto.

La formulación estratégica de Lenin se puede sintetizar en ocho tesis principales, de las cuales las cuatro primeras se referían a la realidad histórica de Rusia y quedaron plasmadas en El desarrollo del capitalismo en Rusia, publicado en

1899. Primera, la economía rusa estaba experimentando un intenso desarrollo capitalista. Segunda, la aristocracia capitalista y la burguesía industrial ejercían el dominio social basado en la posesión privada de los principales medios de producción. Tercera, la expansión industrial había creado un proletariado amplio y concentrado. Cuarta, la agricultura y el medio rural conocían transformaciones similares, merced a la abolición del régimen feudal de servidumbre en 1861 y a la extensión de los intercambios mercantiles.

Las otras cuatro tesis concernían al discurso que debía ser la base de la acción política. Quinta, el desarrollo industrial y la penetración capitalista en el campo habían creado las condiciones materiales para que pudiera realizarse una revolución socialista. Sexta, la debilidad e inconsistencia de la burguesía la impedían llevar a cabo una revolución democrática para acabar con el zarismo, por lo que tenía que ser la clase obrera quien asumiese los objetivos democráticos para derrocar al zarismo y después derrotar a la burguesía capitalista. Séptima, la conquista del poder estatal permitiría transformar la propiedad privada en propiedad colectiva para comenzar a construir el socialismo. Octava, el partido bolchevique era el instrumento organizativo, político e ideológico imprescindible para que la clase obrera llevase a cabo esa doble revolución, democrática y socialista.

Primer embate: febrero de 1917

La participación del zar en la guerra mundial ahondó hasta límites extremos el deterioro de las condiciones de vida de los obreros, los campesinos y muchos otros grupos sociales. Ocasionó también la rápida descomposición del ejército, la administración estatal y demás estructuras zaristas y alentó las intrigas palaciegas. La guerra hizo posible que convergieran tres factores que acabaron con la monarquía de Nicolás II: los movimientos sociales, las luchas políticas y las presiones internacionales.

En el interior del país, nada podía ir peor; desastres militares, absurdos nombramientos de altos mandos hechos por el zar, parálisis del gobierno y caos económico reinante. Todo ello alentó las confabulaciones de la aristocracia y de una parte de la familia real contra la influencia de la zarina Alejandra sobre el

monarca, avivando las ambiciones de personas y grupos hasta entonces fieles al monarca. A la vez, estallaron las protestas en el frente militar, en el campo y en la ciudad provocadas conjuntamente por la falta de alimentos y de vestimentas para los soldados, las penurias de los campesinos y la carestía de los alimentos, así como por la falta de leña en los medios urbanos. Desde el exterior, el temor a que el zar pactase con Alemania una retirada unilateral de la guerra hizo que las potencias aliadas conspirasen contra el monarca.

Inmune a las reclamaciones de unos y otros, el zar elevó el tono represivo de las actuaciones del ejército, la policía y los funcionarios[19], colaborando así a que, al comenzar 1917, las diferentes protestas encontraran un cauce común: la exigencia de que el monarca abdicase. En enero, se encadenaron sucesivas huelgas en las fábricas de Petrogrado y Moscú, con decenas de miles de obreros manifestándose por las calles[20]; a ellas se sumaron los representantes oficialistas del Estado (los comités de las industrias de guerra), por lo que también sufrieron detenciones y otras represalias. Las manifestaciones subieron su tono político en febrero y se hicieron más masivas con la participación de estudiantes y otros sectores urbanos. La falta de materias primas y el intento de frenar el movimiento hizo que muchos propietarios cerraran sus fábricas y amenazasen con despidos masivos. En el frente militar, la carencia de medios de transporte y de alimentos, unida a la ineptitud de muchos altos jefes militares –cuyo único mérito era su cuna aristocrática–, provocaban el descontento de los oficiales y la deserción de los soldados. Las tropas desviadas del frente para reprimir las movilizaciones de las ciudades terminaban simpatizando con los manifestantes.

La pasividad política del zar, de su gobierno y de su Duma dio lugar a un escenario cada vez más polarizado. La policía y el ejército reprimían infructuosamente a unos manifestantes que aumentaban en número, ocupaban las fábricas, asaltaban arsenales y levantaban barricadas, siendo imitados en otras ciudades. Se trataba de una insurrección «a la francesa», pero con un nítido perfil obrero debido a su compacta presencia en las movilizaciones, su capacidad de organización forjada en las grandes fábricas y la experiencia de sus líderes tras los acontecimientos de 1905 y otros movimientos huelguísticos habidos entre 1912 y 1914.

Los partidos presentes en la Duma presentaron una salida política a la situación, formando un comité provisional con representantes liberales, trudoviques y mencheviques. A la vez, en las bases navales y en los frentes bélicos se creaban

sóviets de marineros y soldados, mientras que en las grandes fábricas volvían a surgir sóviets obreros en los que participaban todas las tendencias socialistas y también representantes de los sindicatos oficiales. Ambas alternativas, el comité provisional de la Duma y la coordinación de los sóviets se reunían en el Palacio de Táuride de Petrogrado. Cuando los miembros de la Duma tuvieron noticias de que la rebeldía desatada en la capital adquiría el carácter de insurrección, apoyada por marineros y soldados con armas, y que los sóviets se extendían por otras ciudades, se apresuraron a tomar en sus manos el poder y utilizaron su propia fuerza militar para ocupar las instituciones más importantes. El zar abdicó el 1 de marzo y al día siguiente los opositores rechazaron su intento de dar continuidad a la monarquía a través de su hijo o de su hermano. Terminaron así trescientos años de dinastía Romanov. El poder quedó en manos de un gobierno provisional, que se encargaría de convocar elecciones para formar una Asamblea Constituyente.

La espoleta hacia un nuevo estallido

Los ocho meses que mediaron entre los episodios insurreccionales de febrero y octubre enlazaron tres fenómenos que se fueron superponiendo con el paso de los meses. Primero, de principio a fin, la impotencia de los partidos que formaban el gobierno provisional para afrontar la gestión de los acontecimientos más urgentes. Segundo, desde mayo, la pugna por el control de los sóviets entre la minoría bolchevique y la mayoría de mencheviques y eseristas. Tercero, desde septiembre, las tensiones internas en la dirección del partido bolchevique acerca de cómo y cuándo organizar la insurrección para tomar el poder. Todo ello en un contexto en el que la caída de la monarquía supuso, de hecho, el reconocimiento generalizado de las libertades cívicas, en espera de completar los otros dos atributos básicos de la democracia política: la celebración de elecciones libres por sufragio universal y la institucionalización de un parlamento con soberanía legislativa.

Los sucesivos gobiernos provisionales que se formaron desde febrero fueron incapaces de resolver las reclamaciones más apremiantes que habían provocado la caída del zar[21]: acabar la guerra (paz), alimentar a la población y a los soldados (pan), garantizar la subsistencia de los campesinos (tierra) y establecer

un sistema democrático (elecciones). La premisa fundamental era acabar con la guerra, pues concentraba los mayores deseos de los soldados y sus familias, en su mayoría campesinos, siendo también el único modo de comenzar a organizar la vida económica y los suministros para la población y para las empresas, así como de garantizar la convocatoria de elecciones[22]. Sin embargo, la única manera de salir de la guerra era firmar la paz unilateral con Alemania, lo cual planteaba dos problemas: el enfrentamiento con los gobiernos de los países aliados y la concesión de territorios a los alemanes. El gobierno provisional rechazó esa alternativa y optó por mantenerse en la guerra, con la esperanza de que se produjese una rápida derrota alemana. Mientras tanto, como contrapartida, seguirían empeorando las condiciones económicas, las elecciones se aplazarían, lo mismo que la reforma agraria, avivando el descontento de la población con los nuevos gobernantes.

Las propuestas reformistas de mencheviques y trudoviques para aliviar la situación social se toparon con la intransigencia de sus aliados de derecha, reacios a cualquier concesión que afectase a los intereses aristocráticos y de las grandes empresas. Consideraban que la prioridad era restablecer el orden público en las ciudades, tras los ecos de febrero, y preparar el tránsito a un régimen parlamentario a la vez que se solucionaba el problema de la guerra. Las divergencias internas, sumadas al descontento que generaban sus decisiones, ocasionaron un acelerado desgaste de los partidos coaligados, dando muestras de impotencia y división. Tras la participación en el segundo gobierno Lvov, eseristas y mencheviques se vieron arrastrados por sucesivas contradicciones, que se intensificarían a partir de julio, cuando Kérenski se hizo cargo del gobierno provisional y semanas después se produjo el intento de golpe de Estado del general Kornílov.

Fue entonces, a lo largo del verano, cuando tomó consistencia un segundo fenómeno que se había ido gestado en la primavera: la pugna por el control de los sóviets entre los partidos obreros. Desde principios de abril, cuando llegó a Petrogrado procedente del exilio, Lenin criticó con severidad a quienes estaban dirigiendo el POSDR(b) en el interior, convencido de la tesis que expuso desde Zúrich cuando estalló la guerra: dándole la bienvenida porque supondría la derrota del zar y favorecería la revolución socialista[23]. Fiel a su tesis, consideraba que estos dirigentes bolcheviques estaban manteniendo una posición condescendiente con el gobierno provisional y una posición pasiva ante los sóviets. Pensaba que la Revolución de Febrero había creado una «dualidad de poderes» en la que el gobierno provisional representaba los intereses de la

burguesía y de la aristocracia capitalista, mientras que los sóviets de obreros, soldados y campesinos representaban los intereses de la mayoría obrera, lo cual conformaba un escenario en el que se podría hacer realidad el proyecto socialista. A su juicio, el POSDR(b) debía atacar al gobierno provisional por su incapacidad para resolver los problemas planteados en febrero y debía proponer que su poder fuera transferido a los sóviets. La pugna por conquistar el Estado debía ser el centro de la estrategia bolchevique.

Su propuesta se basaba en dos principios que, más tarde, la realidad se encargaría de desmentir, pero no por ello dejaron de alentar a los partidarios de la causa revolucionaria. Por un lado, en su opinión, el estallido de la guerra mundial había convertido el capitalismo monopolista en un «capitalismo monopolista de Estado que ponía a la humanidad extraordinariamente cerca del socialismo […] ya que era la preparación material más completa, la antesala, el peldaño de la escalera histórica hacia el socialismo (sin otro peldaño intermedio)»[24]. La guerra había hecho posible que se avecinaran revoluciones socialistas por todo el continente europeo, de modo que el conflicto militar entre las potencias imperialistas se convertiría en guerras nacionales entre la burguesía y el proletariado. Por otro lado, según su análisis, en Rusia la guerra habían comenzado librándola tres fuerzas políticas principales: la monarquía zarista –sustentada en los terratenientes feudales y la burocracia estatal–, la burguesía unida a los terratenientes capitalistas que arrastraban a la pequeña burguesía –representada por los mencheviques– y los sóviets, organizaciones revolucionarias que eran capaces de unir a la mayoría de los obreros y campesinos. La primera fuerza había sido derrotada en febrero por la segunda con el apoyo de la tercera, concluyendo así la revolución democrático-burguesa. Empezaba entonces la pugna por el poder entre las fuerzas burguesas y la alianza obrero-campesina organizada en los sóviets[25].

Por consiguiente, los bolcheviques tenían que mantener una permanente hostilidad hacia el gobierno provisional y debían lograr que los sóviets asumieran esa posición. En realidad, la idea misma de que los sóviets eran una identidad definida dejaba mucho que desear según se puso de manifiesto en el transcurso de los meses. Aquellos que habían surgido en las grandes fábricas, reeditando la experiencia de 1905, presentaban un perfil con cierta uniformidad y estaban dirigidos por líderes mencheviques y eseristas moderados que reconocían la autoridad del gobierno provisional. De hecho, Aleksandr Kérenski, Irakli Tseretelli y Nikolái Chjeidze ostentaban los principales cargos en el Sóviet de Petrogrado y, a la vez, eran miembros del segundo gobierno de Lvov; más

adelante serían los principales dirigentes del siguiente gobierno provisional formado por mencheviques y eseristas. Por contra, los núcleos radicales contaban sólo con la décima parte de los miembros del Sóviet de Petrogrado, tratándose de una amalgama minoritaria de eseristas de izquierda, mencheviques internacionalistas, miembros del grupo Mezhrayontski («puente»)[26], bolcheviques y anarquistas. Otro tanto sucedía en Moscú y las demás ciudades importantes, donde la presencia de militantes radicales en la dirección de los sóviets era menor; se apreciaban, por lo demás, diferencias significativas en las características y la capacidad de organización de una gran parte de esos sóviets con respecto a los de la capital.

En Kronstadt y otras bases navales situadas en el Báltico, lo mismo que en los frentes militares y en las guarniciones estacionadas cerca de la capital, se formaron sóviets bastante más heterogéneos y menos controlados por los partidos socialistas. La mayoría estaban constituidos por soldados de extracción campesina, con escasa o nula formación educativa, ninguna consideración por las formas y los ritmos políticos, para quienes el caos desatado durante la guerra se había convertido en una escuela de amotinamiento contra la autoridad[27]. Sólo así cabe explicar la aprobación de la conocida como «orden n.o 1», por parte del Sóviet de Petrogrado a propuesta de los sóviets de soldados, con la que pretendían evitar que el comité militar de la Duma les desarmase. La orden consistía en un conjunto de puntos destinados a garantizar el pleno y continuado reconocimiento de la democracia en el ejército a todos los efectos, incluyendo las decisiones militares, la elección de los cargos jerárquicos militares y la radical eliminación de cualquier tipo de privilegio. Sólo en la tensión de aquellos momentos tan excepcionales cabía un acuerdo semejante, cuya primera consecuencia fue la variedad y los cambios súbitos de posición de los sóviets de soldados, unas veces promoviendo motines en los acuartelamientos, otras irrumpiendo en las instituciones oficiales y otras poniendo sus armas al servicio de determinadas decisiones políticas.

La posición de Lenin a favor de transferir el poder a los sóviets implicaba un choque frontal con eseristas y mencheviques, a quienes consideraba representantes de la burguesía dentro del movimiento obrero, a la vez que abría una auténtica «caja de Pandora» sobre las derivas que pudieran surgir de una gama tan variada de sóviets. El propósito de Lenin era combatir a los dirigentes rivales para disputarles la dirección de los sóviets y canalizar las decisiones de estos hacia el discurso revolucionario. Una propuesta que en abril sólo compartían los anarquistas y una parte, la franja más radical, de los

bolcheviques, no la mayoría de los dirigentes del POSDR(b), a quienes esa propuesta les sonaba a «puro blanquismo» o, como dijera un líder menchevique, a «Lenin ocupando el trono de Bakunin».

En mayo se produjo la primera fisura relevante entre el Sóviet de Petrogrado y el gobierno provisional cuando aquel propuso un objetivo que a todas luces parecía inviable: negociar la paz sin anexiones ni reparaciones. La intervención de Kérenski, siempre a caballo entre el sóviet y el gobierno, logró relajar la tensión por un tiempo. En junio, el I Congreso Panruso de todos los Sóviets dejó bien a las claras la aplastante superioridad de los mencheviques y eseristas, con más del 60% de diputados frente al 13% de bolcheviques. Tseretelli logró un apoyo bastante mayoritario para las posiciones del gobierno[28].

La situación viró de nuevo al comenzar el verano. Sin contar con el sóviet de la capital, los bolcheviques, anarquistas y otros radicales convocaron una manifestación que resultó masiva para protestar contra la ofensiva militar que había acordado el gobierno y exigir el traspaso del poder a los sóviets. La euforia desatada hizo que ciertos núcleos, que incluían a militantes bolcheviques, propusieran el inmediato derrocamiento del gobierno y llevaron a cabo motines, asaltos de cárceles y arsenales, y otros movimientos insurreccionales sin ningún control. Visto el cariz que tomaba la situación, el propio Lenin y el Comité Central (CC) del POSDR(b) desautorizaron la celebración de nuevas manifestaciones para evitar desbordamientos aventureros que pudieran desembocar en un choque militar frontal con el gobierno[29]. Los bolcheviques habían abierto una brecha a favor de radicalizar la movilización contra los cuatro incumplimientos centrales del gobierno: el fin de la guerra, el abastecimiento, la asamblea constituyente y una solución al tema de la tierra. Por ese resquicio habían irrumpido diversos sóviets de soldados, grupos anarquistas, miles de desertores que vagaban por las calles, delincuentes sacados de las cárceles y otros elementos del lumpen urbano. El gobierno culpó de esas acciones a los dirigentes bolcheviques, por lo que el POSDR(b) fue ilegalizado y sus líderes fueron encarcelados o tuvieron que ocultarse en la clandestinidad.

Las tensiones experimentaron otra vuelta de tuerca en julio. El gobierno presidido por Kérenski, con ocho mencheviques moderados, y con Víctor Chernov como figura eserista, optó por acentuar la contraofensiva militar e intentar «poner orden» en el frente militar, tomando las peores decisiones posibles. Ante el clima de indisciplina generalizada que reinaba en el ejército, aceptó las reiteradas solicitudes de los mandos militares, que en su mayoría eran

zaristas: restauró la pena muerte, autorizó disparar contra los soldados desertores y nombró como jefe del ejército a Kornílov, uno de los generales más reaccionarios. Al mismo tiempo, restringió las libertades civiles y atacó la autoridad del Sóviet de Petrogrado. Tal línea de actuación no podía alumbrar otros resultados que, de un lado, el fortalecimiento de los sectores militares más ultraconservadores y, de otro lado, la pérdida del apoyo de los sóviets y el reinicio de las movilizaciones obreras. Los dos polos de la confrontación confluyeron cuando Kornílov se propuso dar un golpe de Estado para instaurar una dictadura militar (con ecos bonapartistas), sin que Kérenski llegase a dejar claro si pretendía llegar a un acuerdo con él o simplemente hacía gala de una superlativa inoperancia para afrontar el golpe. Estallaron entonces mil formas espontáneas de oposición al golpe, dando lugar a la proliferación de milicias armadas creadas por los sindicatos, los sóviets, otras organizaciones fabriles, los bolcheviques u otros partidos.

El Sóviet de Petrogrado organizó manifestaciones masivas y los bolcheviques comenzaron a ganar posiciones. Por primera vez, el 5 de septiembre, el Sóviet de Petrogrado votó a favor de una resolución bolchevique, presentada por Kámenev y apoyada por los eseristas de izquierda y los mencheviques internacionalistas. La resolución negaba el apoyo al gobierno de Kérenski y proponía la formación de un gobierno que contase con la participación de todos los partidos socialistas. El acuerdo fue revocado inmediatamente por el Comité Ejecutivo Panruso de todos los Sóviets, que seguía dominado por los partidarios del gobierno menchevique-eserista. Otra decisión de ese comité fue convocar una Conferencia Democrática Estatal[30], sucedáneo de pre-parlamento, que, controlado por el gobierno, venía a justificar que siguiera aplazada la celebración de elecciones a la Asamblea Constituyente.

Conforme crecían las expresiones de rechazo de los sóviets al gobierno de Kérenski, a mediados de septiembre se inició el tercer fenómeno que caracterizó aquel singular proceso. En el interior del POSDR(b) se suscitaron fuertes divergencias entre sus dirigentes acerca de cómo y cuándo debía producirse el traspaso del poder a los sóviets. La persistencia de la guerra mundial y el vacío creado por la desaparición del sistema zarista habían mostrado fehacientemente la reiterada incapacidad de los sucesivos gobiernos provisionales para cumplir los compromisos básicos de la Revolución de Febrero. Las circunstancias se hicieron aún más excepcionales merced a la compleja trama de elementos contingentes que se fueron encadenando hasta configurar una realidad simpar, casi inverosímil. Esa realidad fue la que alumbró la posibilidad de realizar una

segunda revolución en la que los bolcheviques fueron los protagonistas absolutos.

Segundo embate: octubre de 1917

A mediados de septiembre, desde la clandestinidad impuesta por la ilegalización del POSDR(b), Lenin escribió dos cartas al Comité Central en las que propuso que el partido dejase de participar en aquella Conferencia Estatal y preparase de forma inmediata una insurrección para derrocar al gobierno y conquistar el poder[31]. A su juicio, se trataba de una oportunidad única debido a la inoperancia del gobierno, la descoordinación de los órganos estatales, la desorganización del ejército, el descontento social y las posiciones ganadas por los bolcheviques en los principales sóviets. Los dirigentes bolcheviques que lograron reunirse no estuvieron de acuerdo y decidieron dejar de lado el escrito de Lenin, pero este persistió en su idea hasta forzar un debate cuyas discrepancias se prolongaron durante semanas hasta que se produjo la toma del poder.

Todos los líderes coincidían en el objetivo de que los sóviets se hicieran con las riendas del poder estatal. Las diferencias surgían al debatir el modo y el momento de realizar ese objetivo. Unos defendían el acuerdo del Sóviet de Petrogrado para que se formase un gobierno de unidad de los partidos socialistas, proponiendo que fuera ese gobierno el encargado de hacer un traspaso pacífico del poder a los representantes de los sóviets. Otros se inclinaban por intentar que los sóviets convocaran elecciones y que fuese la Asamblea Constituyente la que acordase el trasvase del poder. Disintiendo de ambas posturas, Lenin no estaba preocupado por quién debía formalizar esa transferencia sino por la apremiante necesidad de preparar una insurrección[32], aunque en el curso de las discusiones propuso que fuera el inminente Congreso Panruso de todos los Sóviets de Obreros y Soldados, convocado para finales de octubre, el que formalizara el acuerdo de derrocar al gobierno. Todas las posturas parecían más viables a raíz de que Kérenski decidió formar un nuevo gobierno dando entrada al partido kadete, lo cual fue rechazado por la mayoría de los sóviets, favoreciendo que los bolcheviques acrecentaran su influencia. El Presídium del Sóviet de Petrogrado pasó a estar formado por cuatro

bolcheviques, dos eseristas y un menchevique, con Trotski de presidente. Igualmente, alcanzaron la mayoría en el Sóviet de Moscú, donde el bolchevique Víktor Noguín fue elegido presidente.

Seguidamente, el comité central bolchevique aprobó por mayoría preparar la insurrección, contra la opinión de líderes como Kámenev y Zinóviev, pero siguió sin concretar quién y cuándo se llevaría a cabo[33]. La división entre los dirigentes bolcheviques se trasladó a los órganos de los sóviets y ante la próxima celebración del Congreso de los Sóviets se perfilaron dos posturas. Una proponía que el congreso acordase directamente la formación de un gobierno (socialista) que acometería la solución de los problemas más urgentes y sentaría las bases para construir el socialismo. La otra postura defendía que el congreso convocase elecciones a la Asamblea Constituyente y que fuera esta, como expresión de la voluntad popular, la que decidiera el futuro del país y la formación del gobierno. Nadie parecía dispuesto a perder la oportunidad, pero muchos querían evitar que se malograra por precipitación o por equivocar el grado de representatividad del órgano que decidiera los destinos del país. La oposición a ambas alternativas corría a cargo del Comité Ejecutivo Central de los Sóviets, con mayoría de mencheviques y eseristas moderados, cuyo mandato expiraría al iniciarse el congreso.

El Sóviet de Petrogrado secundó la propuesta de que el Congreso de los Sóviets acordase tomar en sus manos el poder político. Los eseristas de izquierda lo apoyaron sin creer que fuera la mejor opción, pero sí la más viable ante el temor de que antes se produjese un golpe ultraderechista. La dirección de los sóviets de marineros de la flota del Báltico, compuesta por dirigentes bolcheviques y anarquistas, se declaró a favor de derrocar inmediatamente al gobierno provisional de Kérenski. Ante los rumores de un nuevo golpe y la dejación de funciones por parte del gobierno provisional, el Sóviet de Petrogrado formó un Comité Militar Revolucionario (CMR) en el que se integraron representantes de los sóviets de obreros y soldados de la capital, sindicatos, comités de fábrica y otras organizaciones que disponían de armamento. Su propósito inmediato era garantizar la celebración del Congreso de los Sóviets, pero los líderes socialistas moderados decidieron no participar en ese comité militar, dejando el camino expedito para que los bolcheviques se hicieran con el control.

Esa inesperada superioridad decantó la posición del comité central del POSDR(b) a favor de organizar la toma del poder sin contar con quienes podrían ser sus aliados, los eseristas de izquierda y los mencheviques internacionalistas,

sin precisar si esperarían a la celebración del Congreso de los Sóviets, el 25 de octubre. Yendo de un escondite a otro por el distrito de Viborg, Lenin enviaba misivas en las que insistía en que «daba igual quién organizara el levantamiento y conquistara el poder», lo decisivo era llevarlo a cabo. Kámenev, Zinóviev y otros insistían en la necesidad de sumar a los demás grupos socialistas que apoyaban el poder de los sóviets y que la decisión fuera adoptada por el propio congreso. Trotski, al frente del CMR, coincidía en esta segunda condición, pero al mismo tiempo el CMR desautorizó a los mandos del ejército y reclamó el control militar de la capital, sin que el desvencijado gobierno de Kérenski o los mandos militares fuesen capaces de hacer frente a esa decisión.

Dispuesto a resolver a su modo aquel terreno de nadie que surgía entre el acuerdo del POSDR(b), la decisión militar del CMR y el Congreso de los Sóviets, la noche anterior a la apertura del congreso Lenin se presentó en el Smolny, la nueva sede del Sóviet, y propuso que el CMR, o en otro caso los guardias rojos bolcheviques que pertenecían a ese comité, iniciasen el levantamiento. Se trataba de ordenar la disolución del gobierno provisional, detener a sus miembros y controlar los puntos estratégicos de la ciudad –correos, teléfonos, ferrocarriles, central eléctrica, banco estatal y ministerio de Hacienda–. Los disparos de advertencia lanzados desde el crucero Aurora y el control del Palacio de Invierno (sede del gobierno de Kérenski) sentenciaron el triunfo de lo que, meses atrás, Lenin proponía como un movimiento masivo que se convertiría en uno insurreccional, pero cuya realización efectiva se hizo mediante un putsch militar a cargo de los sóviets dirigidos por los bolcheviques. Invirtiendo el orden previsto por el acuerdo del comité central bolchevique, cuando en la mañana del 25 de octubre se inauguró el Congreso de los Sóviets de Diputados de los Obreros y Soldados, la toma del poder ya se había llevado a efecto.

¿Poder de los sóviets o de los bolcheviques?

La puesta en escena del congreso fue toda una declaración de principios de lo que había sucedido la noche anterior y de lo que estaba por llegar. En primera instancia, dos hechos parecían apuntar a que, según pretendían los líderes del POSDR(b), el congreso podría desarrollarse bajo la premisa de la unidad

socialista pero con el liderazgo bolchevique. En primer lugar, la presidencia del congreso no fue ocupada por quienes habían formado hasta ese momento el Comité Ejecutivo Central de los Sóviets, sino que tomaron asiento 14 bolcheviques y 7 eseristas de izquierda[34]. En segundo lugar, la composición de los asistentes mostraba una correlación de fuerzas diametralmente distinta a la que tenían los sóviets en el verano. Entre los 670 delegados asistentes, cerca de 300 eran bolcheviques o partidarios suyos, casi 100 eran eseristas de izquierda, y el resto eran miembros de los partidos socialistas moderados.

Sin embargo, en segunda instancia, aquella pretensión de unidad socialista tutelada por los bolcheviques se truncó cuando Mártov, líder de los mencheviques internacionalistas, solicitó que se negociara con el gobierno provisional (derrocado) la formación de un gobierno de izquierda y que los grupos armados que rodeaban el Palacio de Invierno se colocaran bajo el control del congreso. Los bolcheviques rechazaron ambas peticiones, insistiendo en que el gobierno provisional ya no ejercía ningún poder, lo que ocasionó la retirada de los mencheviques de Mártov y sembró mayores dudas entre los eseristas de izquierdas.

Seguidamente, las heridas parecían cerrarse cuando se procedió a la aprobación de las primeras medidas: negociación inmediata de la paz, nacionalización de la tierra de terratenientes para solucionar el problema central de los campesinos, control obrero de la producción, convocatoria de la Asamblea Constituyente, abastecimiento de pan a ciudades y de productos básicos a los pueblos, y reconocimiento del derecho de autodeterminación para todas las naciones de Rusia. Tampoco suscitó problemas relevantes la elección del órgano dirigente de los sóviets, reflejando la hegemonía bolchevique. Con Kámenev como presidente, tendría 62 bolcheviques, 29 eseristas de izquierda, 6 mencheviques internacionalistas y 4 miembros de otros partidos.

Pero, a continuación, la brecha volvió a quedar abierta cuando ese órgano acordó la composición del gobierno que dirigiría el país, denominado Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom). Se trataba de una propuesta que previamente había decidido el comité central del POSDR(b). Con Lenin como presidente, tendría mayoría bolchevique y tres ministerios a cargo de los eseristas de izquierda. Estos no aceptaron, volviendo a insistir en la necesidad de recomponer la unidad de todos los partidos socialistas.

La aprobación del gobierno monocolor del POSDR(b) fue el punto crucial

porque escenificó el momento en el que los sóviets, que detentaban un poder político puesto en sus manos por el putsch bolchevique, lo volvían a colocar en manos del partido bolchevique. Ese gobierno tenía que cumplir los acuerdos adoptados por el congreso, a propuesta de los bolcheviques y secundados por un amplio consenso de los asistentes. No obstante, muchas regiones del inmenso territorio heredado del imperio zarista seguían escapando al control del nuevo gobierno[35]. Tardó semanas en consolidar su autoridad en las regiones del Volga y los Urales, y todavía más tiempo en vencer las resistencias que presentaban sus opositores en las regiones al suroeste de Moscú, el este de Ucrania, Siberia y Asia central. Hasta febrero de 1918 no tuvo el control mayoritario del antiguo imperio, e incluso entonces su autoridad era débil en muchas zonas.

AGOBIOS DEL GOBIERNO BOLCHEVIQUE: DE LA URGENCIA A LA SUPERVIVENCIA

El 24-25 de octubre culminó la estrategia proyectada por Lenin para conquistar el poder político. Se habían hecho realidad dos de sus tesis centrales. Una, el enlazamiento entre la revolución democrática de febrero y la revolución (vocacionalmente) socialista; la otra, la función decisiva del partido bolchevique como fuerza dirigente de esa revolución. Quedaba por mostrar la viabilidad de la segunda parte del discurso: poner en marcha la construcción de una sociedad socialista. El propio Lenin, en su primera intervención ante el Congreso de los Sóviets, había señalado: «procederemos ahora a construir el orden socialista». Iban a entrar en juego dos tipos de factores arraigados en diferentes dimensiones temporales. De una parte, los elementos históricos relacionados con las premisas teóricas en las que se sustentaba el proyecto, según las cuatro primeras tesis leninistas acerca de la madurez de las condiciones materiales creadas por el desarrollo capitalista para acometer la construcción del socialismo. De otra parte, los elementos coyunturales vinculados a la excepcionalidad de todo lo que había acontecido desde la participación en la guerra mundial y la trepidante sucesión de acontecimientos entre febrero y octubre.

El «día después» pondría a prueba la frontera de posibilidades que habían quedado abiertas o cerradas por el «día antes» a través de una cadena de factores

tanto históricos como derivados de aquella coyuntura singular. Las tareas iniciales que había acordado el Congreso de los Sóviets coincidían con las proclamas que defendían los bolcheviques. Se trataba de ponerlas en marcha, como parecían confirmar los dos primeros decretos del gobierno. El primero propuso al gobierno alemán la negociación inmediata de un armisticio como paso previo para firmar un acuerdo de paz. El segundo cumplía formalmente con el programa agrario bolchevique, ya que abolía la propiedad privada de las grandes haciendas de terratenientes, Iglesia y Corona para convertirlas en propiedad del Estado. Sin embargo, en términos reales lo que hizo fue cumplir el programa de los eseristas; las tierras no quedarían como granjas colectivas gestionadas por los sóviets de campesinos, sino que se repartirían en usufructo perpetuo (por lo que de facto, eran donadas) entre millones de campesinos[36].

El bumerán de las primeras medidas

Los siguientes días y semanas el gobierno promulgó múltiples medidas para poner en funcionamiento la economía y para atender las necesidades de la población. Transfirió a los sóviets el control de la producción y la distribución de productos con el fin de garantizar los abastecimientos básicos. Creó el Consejo Económico Nacional (Vesenjá) para dirigir el conjunto de la economía. Nacionalizó los principales bancos y consorcios industriales. Confiscó el oro que estaba en manos privadas y expropió los bienes de la Iglesia ortodoxa. Prohibió el negocio con acciones. Se negó a pagar la deuda interna y externa del Estado. Aprobó la jornada de trabajo de ocho horas. Prohibió la educación en escuelas religiosas, estableció la separación entre la Iglesia y el Estado y la laicidad de los trámites civiles, desde los relativos al nacimiento hasta los concernientes al fallecimiento de los ciudadanos. Igualó los derechos entre hombres y mujeres. Inició la alfabetización de la población. Anunció el deseo de proporcionar ayudas públicas por enfermedad, minusvalías, jubilación o desempleo. Finalmente, cumpliendo con el compromiso adquirido, convocó elecciones por sufragio universal para formar la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, buena parte de las medidas tuvo una escasa repercusión sobre las condiciones de vida de la población. Unas, porque no pudieron llevarse a cabo; otras, porque fueron contrarrestadas por las adversidades del momento, o bien

porque el empeoramiento general de la situación hacía inviable que se pudieran alcanzar los objetivos que el gobierno pretendía. Teniendo en cuenta la gravedad de sus consecuencias, cabe destacar las derivas que tomaron las cuatro cuestiones asociadas a los temas cardinales que habían propulsado el camino hacia octubre: paz, tierra, pan y democracia. Esto es: la negociación para salir de la guerra, el reparto de la tierra a los campesinos, la gestión de la producción y distribución, y la Asamblea Constituyente. Las cuatro grandes urgencias convertidas en cuatro grandes desilusiones.

La primera desilusión se produjo con las negociaciones celebradas en Brest-Litovsk para salir de la guerra. La condición que impuso el gobierno alemán para firmar el armisticio acordado a principios de diciembre fue que Rusia cediera los territorios de Polonia, Lituania, Curlandia y una parte de Ucrania, es decir, las zonas en las que se ubicaban las mejores tierras de cereales, las minas y una parte de las industrias. El gobierno bolchevique accedió a ello y tras meses de negociación, en marzo de 1918, firmó el acuerdo definitivo, considerando que la prioridad era satisfacer la exigencia de paz de millones de soldados y de sus familias. Pensaba, además, que sería una pérdida temporal, ya que en breve Alemania sería derrotada por los aliados y/o estallaría una revolución obrera, lo que les devolvería los territorios perdidos. Sin embargo, la aceptación de esas duras condiciones suscitó divisiones entre los líderes bolcheviques, la decepción entre una parte de los militantes del POSDR(b)[37], la oposición frontal de mencheviques y eseristas[38], y la irritación de los gobiernos aliados que combatían contra Alemania. La peor consecuencia fue el efecto negativo que tuvo sobre la maltrecha economía la pérdida de capacidades agrarias e industriales en aquellas circunstancias de escasez de alimentos y parálisis productiva.

La segunda gran desilusión se presentó al cabo de los meses y se fue agudizando en los años siguientes: los efectos derivados del decreto sobre la tierra. El reparto de las tierras expropiadas fue recibido con alborozo porque satisfizo la aspiración de decenas de millones de campesinos que, durante siglos, habían padecido la opresión de los grandes propietarios, fuesen los terratenientes feudales, los patriarcas de las comunas, la familia real o los popes eclesiásticos. El Congreso de los Sóviets de Campesinos que se celebró en noviembre, con una amplísima mayoría de representantes eseristas[39], ratificó el decreto del gobierno bolchevique porque proporcionaba tierras a todos los campesinos, en usufructo perpetuo, y nivelaba la extensión de la mayoría de las explotaciones. El reverso era que la mayoría de las fincas tendría un tamaño mínimo y que se

produciría una gran diversidad de resultados económicos según fueran la calidad de las tierras y el tipo de cultivo.

El reparto fue complementado con la aplicación de bajos impuestos a los campesinos, lo cual, junto al enorme atraso tecnológico y al modo de pensar tradicional, dio lugar a que los campesinos careciesen de estímulos para aumentar la producción más allá de lo que necesitaban para su autoconsumo. Por un lado, la carencia de maquinaria, las formas arcaicas de cultivo y el reducido tamaño de las explotaciones frenaban el aumento de la producción. Por el otro, los escasos bienes industriales que los campesinos podían comprar no les incitaba a aumentar la producción destinada a vender alimentos a cambio de dinero; sin embargo, esos alimentos eran necesarios para abastecer a los trabajadores y demás grupos sociales que vivían en las ciudades.

Los efectos nocivos que aquella situación provocaba en la economía y en el suministro de las ciudades se acentuaron desde la primavera de 1918 tras el estallido de la guerra civil[40], ya que redujo más la oferta de bienes de consumo y casi desapareció el uso del dinero. Los campesinos no generaban excedentes, o bien los guardaban, sobre todo quienes poseían fincas de mayores dimensiones o mejor calidad, agudizando la falta de alimentos en las ciudades y en los frentes de guerra. El gobierno elevó el tono represivo para que los campesinos aumentasen la entrega de excedentes. De los llamamientos amigables y persuasivos pasó a la presión, y después a las requisas obligatorias realizadas por destacamentos militares. Surgió así un conflicto sin solución que enfrentaba a los campesinos con el mismo gobierno que les había convertido en poseedores de las tierras. La alianza obrero-campesina (smitchka) que proclamaba el gobierno no era más que una consigna propagandística que ocultaba una realidad dramáticamente contraria. El descontento era máximo entre los campesinos, al tiempo que los eseristas de izquierda abandonaron el gobierno sólo tres meses después de haberse incorporado. A la vez, el descontento crecía entre los trabajadores de la ciudad, por lo que los sóviets y sindicatos obreros exigían que se solucionara el problema del desabastecimiento de alimentos.

La tercera gran desilusión se produjo cerca de un año después de que el gobierno acordase transferir el control de la producción y la distribución de las empresas, en el marco de un amplio paquete de medidas laborales. Estas medidas mostraban una clara voluntad de mejorar las condiciones materiales de los trabajadores, incluyendo una legislación laboral que era la más avanzada de su época. Los problemas surgieron por el lado práctico, pues la nefasta situación de

la economía y el desorden reinante impedían la realización de muchas de ellas. Los problemas de mayor alcance giraron en torno al control obrero de la producción y la distribución en las empresas estatales –y algunas otras, privadas, que habían quedado bajo la vigilancia del gobierno zarista durante la guerra– sobre todo las minas de carbón y hierro, las fábricas de metalurgia, textiles, azúcar y otras.

Los sóviets y otras organizaciones (comités de empresa, sindicatos) tomaron el control de esas empresas y, desde marzo de 1918, lo ampliaron a las fábricas abandonadas por los propietarios que se exiliaban o que se unían a las fuerzas que combatían al gobierno. Esa situación dio lugar a la improvisada nacionalización de miles de empresas, muchas de ellas de pequeño tamaño, que se dedicaban a actividades productivas muy diversas. Pronto empezó a manifestarse un problema que llegaría a hacerse agobiante: ¿cómo gestionar esas empresas para llevar a cabo el control de la producción y distribución de los productos? Era necesario garantizar la continuidad del proceso de fabricación, la contabilidad de ingresos y pagos, la salida de los productos y su reparto hacia los lugares de destino. Si no ocurría así, el control se convertía en un obstáculo para el funcionamiento de la economía y para el abastecimiento de las necesidades de la población, a la vez que ocasionaba el desprestigio del gobierno y de los sóviets como autoridad.

Una vez constatada la gravedad del problema y la urgencia de ponerle remedio, el gobierno optó por caminar en la dirección contraria a su decreto inicial: las empresas serían dirigidas por personas competentes que tuvieran los conocimientos técnicos y organizativos con los que realizar una buena gestión. Como esos conocimientos sólo los poseía un número escaso de individuos dentro de las filas revolucionarias, el gobierno no escatimó formas alternativas con las que afrontar el problema, recurriendo a antiguos propietarios y a personal de la época zarista, a los que otorgaba plena autoridad para dirigir las empresas si cumplían con las directrices marcadas por el gobierno. Consecuentemente, los sóviets, comités, sindicatos y demás organismos obreros fueron apartados del control de las empresas. Cuando algunos se negaron a ceder ese control sufrieron las represalias del gobierno, cuya máxima preocupación era cómo hacer que las empresas volvieran a recuperar la actividad productiva. Un sector de dirigentes bolcheviques se revolvió contra el cambio de rumbo, criticando duramente al gobierno y formando una plataforma, la Oposición Obrera, encabezada por Aleksandra Kolontái y Aleksandr Shliápnikov[41].

En esas condiciones, el Consejo de Economía Nacional, creado para dirigir la economía hacia los objetivos socialistas, se convertía en un ornamento sin ninguna función efectiva. La agricultura generaba la mayor parte de la renta nacional y estaba a merced de microexplotaciones con escasa capacidad para elevar la producción, la eficiencia y el excedente. La industria sufría la merma de los territorios cedidos a los alemanes y estaba en manos de las decisiones personales de unos directores que hacían funcionar las empresas, pero carecían de la maquinaria y los suministros con los que aumentar la producción y, menos aún, modernizarla y hacerla más eficiente. La nacionalización de los bancos fue decretada en diciembre después de que sus propietarios se negaran a que su actividad quedase bajo control del gobierno. Tras ello, inicialmente el Estado dispuso de una cantidad de recursos (oro, acciones, depósitos), pero en poco tiempo pudo comprobar que su decisión tenía una escasa utilidad ya que, además de los consabidos problemas de gestión, la economía carecía de capacidad para generar ahorro y la escasa financiación disponible estaba sometida a un funcionamiento rudimentario del crédito y a la prudencia requerida para emitir moneda.

Un panorama económico sumamente adverso que penaba las consecuencias del desorden reinante en aquellos momentos, pero que en una medida mayor respondía al formidable atraso estructural que arrastraba la economía zarista, según lo descrito al inicio del capítulo. La imposibilidad de llevar a cabo medidas que tuvieran algún alcance transformador de la estructura económica chocaba frontalmente con el discurso leninista acerca de la madurez del capitalismo (monopolista de Estado) en Rusia; según Lenin, tras llevar a cabo la colectivización de la propiedad, daría comienzo la construcción del socialismo. De hecho, el grado de colectivización de la propiedad capitalista (nacional y extranjera) fue reducido porque reducido era el número de grandes y medianas fábricas industriales, minas y bancos en aquella economía abrumadoramente agraria.

Por esa razón, «el día después» el gobierno no podía acometer ningún tipo de transformación socialista y tuvo que priorizar el reparto de tierras a los campesinos (no la colectivización en grandes granjas estatales) y esforzarse por poner en funcionamiento unas industrias cuyo nivel productivo era precario. Las medidas posibles se tomaban venganza de la tesis que planteaba la inexistencia de peldaños intermedios entre el nivel capitalista alcanzado y la construcción del socialismo. Como tiempo después y con propósitos benevolentes señaló Gramsci, los bolcheviques habían llevado a cabo «una revolución contra El

capital». Una revolución vocacionalmente socialista en un país cuya economía estaba sostenida por una agricultura atrasada y una débil industria; cuya mano de obra mostraba una reducida proletarización en medio de una inmensa mayoría campesina. Hechos que apuntaban al inevitable conflicto entre los objetivos propugnados y la necesidad de hacer frente a una realidad radicalmente distinta a la pronosticada.

El embrollo de la Asamblea Constituyente: ¿qué democracia y para qué?

La cuarta gran desilusión se produjo con la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El gobierno convocó las elecciones para mediados de noviembre, apenas tres semanas después del 25 de octubre, reconociendo el derecho de las mujeres a votar. Con esa convocatoria, adoptada después de sopesar ciertas dudas, los bolcheviques satisfacían la demanda que desde mediados del siglo XIX reclamaban los demócratas constitucionalistas. Ignorada por los zares durante aquella mitad del siglo, burlada por las sucesivas dumas de Nicolás II y retrasada continuamente por los gobiernos provisionales desde febrero de 1917.

Los resultados electorales de los casi 42 millones de votantes se conocieron a mediados de diciembre[42]. El partido eserista obtuvo una contundente victoria, logrando casi la mitad de los diputados, gracias a la gran mayoría que consiguió en el campo y a su notable presencia en el voto de las ciudades. La mayoría de sus diputados se alineaba con la línea oficial del partido, pero una parte lo hacía con las posiciones de la izquierda y otra con los nacionalistas ucranianos y de otras regiones. En segundo lugar, el partido bolchevique logró cerca de la cuarta parte de los votos, con mejores resultados en Petrogrado, Moscú y otras ciudades importantes, así como entre los soldados de la flota del Báltico, pero con escaso apoyo en provincias con menor desarrollo industrial y casi nula influencia en los medios rurales. Los demás partidos cosecharon resultados muy inferiores, repartiéndose la tercera parte de los diputados entre mencheviques, kadetes, esenistas y un amplio abanico de minorías nacionales[43].

Se produjo entonces una situación ciertamente incómoda tanto para el partido bolchevique como para el eserista, uno como gobernante y el otro como

vencedor en las elecciones. El primero defendía las decisiones tomadas desde octubre y el segundo su derecho a ponerlas en cuestión, aunque las posturas eseristas eran diversas merced a la división existente en sus filas. Los dirigentes del POSDR(b) comenzaron a debatir si debía inaugurarse y con qué propósito la Asamblea Constituyente. En primer término, cuestionaron la representatividad de las elecciones (por ellos convocadas) con el argumento de que las listas votadas no reflejaban las coaliciones reales que correspondían a los cambios producidos en aquellas tres semanas; alegaban además que, en tan corto plazo de tiempo, el gobierno no había tenido oportunidad de mostrar las ventajas de sus medidas entre amplios sectores de la población. A continuación, incorporaron varios argumentos más para defender que el Congreso de los Sóviets tenía mayor legitimidad que las elecciones constituyentes porque los sóviets representaban una forma superior de democracia[44]; alegando también que una parte de los eseristas apoyaban las decisiones de los sóviets y que los bolcheviques habían ganado en las zonas con mayor población obrera, en cuyo nombre gobernaban[45].

Su posición final se resumía en que el carácter socialista de la revolución y el control del poder por los bolcheviques eran innegociables. De hecho, de ahí en adelante su línea argumental invertiría ambos términos: el control del poder en manos de los bolcheviques garantizaba el carácter socialista del nuevo régimen. La garantía no residía en un hipotético gobierno de unidad entre partidos socialistas, ni en un determinado tipo de medidas, sino que, precisamente, la bondad de las medidas y sus resultados dependían de que los bolcheviques retuviesen el poder. Ese planteamiento condujo los derroteros posteriores del partido, de los sóviets y del sistema político. En consecuencia, la Asamblea Constituyente era una instancia legislativa surgida de la revolución y estaba obligada a refrendar las decisiones tomadas por el congreso de los sóviets y el gobierno bolchevique. De forma taxativa, Lenin afirmó: «Todo intento directo o indirecto de considerar la cuestión de la Asamblea Constituyente desde un punto de vista formal, legal, dentro del esquema de la democracia ordinaria burguesa y sin tener en cuenta la lucha de clases y la guerra civil, sería una traición a la causa proletaria»[46].

Tratando de ganar tiempo, el gobierno consiguió el apoyo del Comité Ejecutivo de los Sóviets y puso en alerta a los marineros de la base naval de Kronstadt, retrasando la apertura de la Asamblea hasta el 5 de enero de 1918 a la vez que se convocaban para tres días después los respectivos congresos panrusos de los sóviets de obreros y soldados y de campesinos. Días antes de la apertura

constituyente, el gobierno dejó claro que nunca cedería el poder que le habían otorgado los sóviets y anunció que disolvería cualquier institución que cuestionase esa decisión[47], sentenciando el futuro de la Asamblea Constituyente.

La sentencia comenzó a ejecutarse en el primer acto de la sesión. En lugar de inaugurarla el diputado de mayor edad, eserista, subió a la tribuna el bolchevique Yákov Sverdlov para declarar abierta la sesión en nombre del Comité Ejecutivo de los Sóviets, proponiendo que la finalidad de la asamblea fuese aprobar las decisiones tomadas por el gobierno que había recibido el poder de manos de los sóviets. Sin embargo, la elección del presidente de la Asamblea mostró que la mayoría del parlamento seguía cayendo del lado de la oposición[48]. Sin márgenes para la negociación, la propuesta de Sverdlov fue rechazada por una amplia mayoría de 237 frente a 146. Los diputados bolcheviques y los eseristas de izquierda abandonaron la Asamblea, de modo que la sesión continuó con la aprobación de resoluciones contrarias a las medidas que había promulgado el gobierno. Al día siguiente, un decreto declaró disuelta la Asamblea, lo que fue ratificado esa misma tarde por el comité ejecutivo de los sóviets y dos días después por el Congreso de los Sóviets.

Culminaba así la confrontación entre dos posturas diametralmente enfrentadas. Una defendía la primacía de una democracia política basada en la soberanía del parlamento, el sufragio universal y la garantía de las libertades cívicas. Otra sostenía la primacía de la voluntad política revolucionaria, expresada por los acuerdos de los sóviets y del gobierno bolchevique, a los que debía someterse la democracia representativa de la mayoría social. La primera postura disponía de los votos y la segunda poseía el poder del Estado. En aquella encrucijada, Rosa Luxemburgo aconsejó a los bolcheviques que convocaran unas nuevas elecciones que midieran mejor el pulso de los acontecimientos y expresaran la realidad creada desde octubre. Luxemburgo criticó tenazmente que la única respuesta bolchevique fuese la disolución de la Asamblea, lo que suponía acabar con la democracia. Ella seguía defendiendo la misma idea que expuso a comienzos del siglo al criticar la posición centralista de Lenin: «La libertad es siempre para quien piensa distinto».

AISLAMIENTO POLÍTICO Y DERIVA DICTATORIAL

Los acontecimientos desencadenados a partir de 1918 no respondieron únicamente a lo sucedido con la Asamblea, pero ciertamente su eliminación sí fue el episodio que aceleró un proceso político al que se sumaron las consecuencias de la paz firmada con Alemania, los efectos de la reforma agraria y las dificultades de gestión de las empresas. A corto plazo, el POSDR(b), ya denominado PC(b), confirmó su incontestable posición de poder, pero sólo pudo ejercerlo como medio para garantizar su propia supervivencia política, intentando organizar un mínimo de actividad económica que impidiera el desencadenamiento de conflictos sociales. Sin embargo, ese dominio del poder pagaba dos facturas demasiado costosas para el presente y más aún de cara al futuro: la soledad política y la incapacidad de llevar a cabo reformas profundas que sintonizaran con los ideales socialistas.

Sobrevivir en tiempo de guerra civil

La pretensión de gobernar en exclusiva una sociedad con aquellas características socioeconómicas condujo a un sistema político basado en el dominio absolutista del partido bolchevique. El poder en solitario que conquistó la noche del 24 de octubre se trocó en un creciente aislamiento político sostenido por el uso permanente de la represión. Las críticas frontales de los partidos del centro y la derecha fueron respondidas con el cierre de periódicos, la detención de dirigentes y la prohibición de partidos. A ellos les siguieron los partidos menchevique y eserista, creándose una dinámica en la que la abierta hostilidad hacia el gobierno era contestada por este con sucesivas represalias y, finalmente, con la ilegalización. El camino hacia el precipicio quedó pavimentado en diciembre de 1917, cuando los partidos opositores se colocaron en rebeldía absoluta y se declararon favorables al derrocamiento del gobierno. El compás de espera hasta la apertura de la Asamblea Constituyente atemperó brevemente sus posiciones, pero cuando la Asamblea quedó prohibida, la oposición se hizo más radical y se sumó a la guerra que mantenían los mandos militares del gobierno provisional y de la época zarista con apoyo de los gobiernos occidentales. Esa oposición armada instrumentalizó a su favor la firma del Tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918, acusando al gobierno bolchevique de antipatriota por

las concesiones territoriales hechas a los alemanes[49].

En el transcurso de ese primer año, el gobierno se convenció de las ventajas inmediatas que reportaban los órganos represivos para extirpar la disensión, cerrando cualquier vía de negociación. La creación de la Comisión Especial para la Lucha contra el Sabotaje y la Contrarrevolución (Cheká) marcó el inicio de una espiral de terror político que puso en funcionamiento unos tribunales designados por los sóviets para perseguir y castigar los delitos considerados con el ambiguo concepto de «contrarrevolucionarios». No pareció importante que entre los miembros de esa comisión abundaran matones y asesinos confesos siempre que se pusieran al servicio de lo que los propios líderes soviéticos llamaron el «Terror Rojo». Las batallas libradas en los frentes militares eran sólo una parte de la guerra de supervivencia que encaraba el gobierno para organizar la economía, normalizar la vida de las ciudades y los pueblos, y afrontar las grandes decepciones que iban acarreando las principales medidas adoptadas.

Como se ha expuesto, las requisas de grano le enfrentaban a la mayoría de los campesinos a la vez que la escasez de grano requisado provocaba las protestas de los habitantes de las ciudades y de los soldados que estaban en los frentes de guerra y carecían de alimentos. La ausencia de materias primas y las dificultades para poner en funcionamiento la economía reducían la oferta de bienes de consumo para la población. Los salarios de los trabajadores eran abonados con retraso o en especie, pudiendo acceder a un número muy reducido de productos. La dirección centralizada de las empresas estatalizadas excluía la participación de las organizaciones obreras. La renuncia a ahogar a los campesinos con impuestos y la ausencia de crecimiento económico impedían que el gobierno dispusiera de un presupuesto con el que realizar gastos públicos para atender las necesidades sociales. La cesión de territorios a Alemania y la destrucción sembrada por la guerra civil lo empeoraban todo. En 1920, si la producción agraria suponía la mitad de la que se registró antes de la guerra mundial, la producción industrial era menos de la quinta parte de la de entonces. Más allá del superlativo atraso estructural que arrastraba, la economía se había convertido en una endeble actividad primitiva.

Los escritos de Lenin fueron incorporando sucesivos argumentos con los que justificar la represión política y la poquedad de los resultados ante la penuria económica. El endurecimiento represivo lo considera como si fuera un principio general de todo régimen revolucionario: «La dictadura revolucionaria del proletariado es un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida

por el proletariado sobre la burguesía, un poder no sujeto a ley alguna»[50]. Lo que Lenin calificaba como «sencilla verdad» no dejaba de ser una grosera generalidad, sin precisar quién era el proletariado que ejercía tal violencia ni quién la burguesía sobre la que se ejercía. Lenin identificaba a ese proletariado con el partido bolchevique que detentaba el poder y a la burguesía con cuantos se opusieran a dicho poder. En realidad, se trataba de un argumento de conveniencia cuyo anclaje teórico remitía a un texto fundamental de su pensamiento, El Estado y la revolución, escrito durante el verano de 1917, cuando se encontraba escondido en la clandestinidad, con la pretensión de establecer «la doctrina marxista» con respecto al ejercicio revolucionario del poder[51].

El empeoramiento de la economía le llevaba a justificar que «en Rusia, la dictadura del proletariado tiene que distinguirse inevitablemente por ciertas particularidades en comparación con los países avanzados, como consecuencia del inmenso atraso y del carácter pequeñoburgués de nuestro país»[52], reiterando que «la centralización incondicional y la disciplina más severa del proletariado son […] las condiciones fundamentales de la victoria sobre la burguesía»[53]. Desde 1919 se hicieron más frecuentes las alusiones al atraso económico y social de Rusia que veía reflejadas en la falta de capacidad para gestionar las empresas, el atraso de la organización del trabajo en la agricultura o en la carencia del tipo de organización taylorista y de técnicas industriales que sí poseían las principales economías capitalistas. Más adelante identificó ese atraso con la ausencia de «premisas civilizatorias» respecto de esos países capitalistas desarrollados.

Esas premisas civilizatorias eran el modo de referirse a la madurez de las condiciones económicas y sociales que Marx y Engels habían asociado con el desarrollo de la propiedad privada capitalista y el dominio de la burguesía industrial. Su carencia indicaba que los bolcheviques controlaban el poder político en un inmenso país en el que la propiedad capitalista y la base industrial siempre habían sido minoritarias. Sin embargo, en lugar de reconsiderar sus tesis anteriores sobre la madurez del capitalismo en Rusia, repetidas hasta los umbrales mismos de Octubre, echó mano de dos argumentos retóricos. El primero consistía en empaquetar el conjunto de medidas aplicadas por el gobierno como las necesarias para «iniciar el tránsito hacia la construcción del socialismo, ante la imposibilidad de aplicar las medidas decisivas»[54]. En ese paquete incluía tanto las destinadas a organizar la economía y a elevar la productividad como el decreto que repartía la tierra entre los campesinos, que

«no es socialismo pero sí un paso de gigante hacia el socialismo»[55]. El segundo argumento, ya mencionado, era identificar el carácter socialista no con las medidas efectivas sino con su contribución a la consolidación del partido bolchevique en el poder. Era el proyecto ideológico bolchevique (considerado el representante de la clase obrera) y no la realidad material lo que confería dicho carácter.

Las piruetas retóricas subieron de tono desde 1920, según se acercaba el final de la guerra civil, decantada a favor del gobierno. Los líderes bolcheviques se vieron ante la necesidad de justificar los nuevos peldaños que iban subiendo por una escalera que, inequívocamente, conducía a la anulación de cualquier vestigio de democracia política y a la consolidación de un régimen dictatorial. Un peldaño fue la represión contra los sindicatos y los comités de fábrica que querían participar en la gestión de las empresas y que exigían el cumplimiento de las medidas laborales aprobadas. En el X Congreso del PC(b), en marzo de 1921, Lenin sentenció: «toda intervención directa de los sindicatos en la administración de las empresas debe considerarse nociva e inadmisible»[56]. Quizá el momento más dramático de esa escalada se produjo ese mismo mes, cuando se rebelaron contra el gobierno los marineros de la base naval de Kronstadt, uno de los emblemas de la Revolución de Octubre. Protestaban, como meses antes otras manifestaciones en Petrogrado, contra las condiciones de vida y la regresión antidemocrática. El gobierno les aplicó el mismo correctivo que a cualquier disidencia: tachada de contrarrevolucionaria, la rebelión fue aplastada por el ejército mediante una durísima represión, seguida de detenciones y fusilamientos. Otro peldaño fue la eliminación de la democracia en los sóviets, justificada en aras de la necesidad de mayor disciplina y eficacia frente a las grandes adversidades existentes.

El último peldaño dejó fuera de la vida política a la mayoría de los militantes bolcheviques cuando se prohibieron las fracciones como formas organizativas desde las que establecer debates internos. El recurso a la disciplina y la unidad por encima de todo implicaba el sometimiento de los militantes y de los comités intermedios a las directrices del comité central del partido. La vida política quedaba restringida al núcleo dirigente que controlaba los resortes de poder en el partido y en el Estado. Se cumplían así los viejos temores anunciados por Plejánov, Luxemburgo y tantos otros cuando, a la vista del funcionamiento piramidal reclamado por Lenin, vaticinaron que su aplicación engendraría un sistema despótico ajeno a los ideales proclamados por el proyecto comunista. La minoría situada en la cúspide del Partido-Estado impuso una dictadura que

eliminó los derechos y libertades de la población, de los sindicatos, de los sóviets y de los propios militantes del partido. Todos ellos convertidos en ejecutores de órdenes establecidas por un núcleo dirigente convertido en grupo dominante. Como señaló Bertrand Russell después de una visita que realizó a Rusia en 1920 y tras declarar su apoyo a la causa del socialismo: «El bolchevismo no es meramente una doctrina política, es también una religión con dogmas elaborados y escrituras sagradas»[57], añadiendo que sólo se podía explicar mediante una combinación de factores procedentes de la tradición rusa, la situación creada por la guerra y las concepciones leninistas.

Sobrevivir en tiempo de paz: a favor del mercado y de los campesinos

A punto de concluir la guerra civil, a finales de 1920, el Congreso de los Sóviets acordó un programa económico basado en la extensión del uso de la electricidad (GOELRO) como parte de una estrategia general de rápido desarrollo industrial del país. Durante los primeros meses de 1921, los dirigentes bolcheviques se dedicaron a explicar las ventajas de ese programa, si bien cabía albergar dudas acerca de cuál sería la fuente que proporcionara los recursos materiales y financieros necesarios para realizar las grandes inversiones que requería su puesta en marcha.

Sin embargo, a mediados de marzo, durante la celebración del Congreso del PC(b), Lenin propuso un cambio drástico en la orientación de la política económica, que sería conocido por las siglas NEP (Nóvaia Ekonomichéskaia Polítika). La novedad más inmediata residía en sustituir el sistema de contingentes con el que tributaban las explotaciones agrarias por otro basado en el pago en especie, entregando al Estado una parte de la producción. Pero el alcance económico y político del cambio era muy superior, ya que implicaba un viraje radical de la estrategia económica del gobierno. Una vez realizado el pago en especie (equivalente a una moderada presión tributaria), los campesinos podrían vender libremente el resto de su producción en el mercado. Además, la industria daría prioridad a la fabricación de bienes destinados a los campesinos con el fin de que estos tuvieran incentivos para elevar su producción y venderla a cambio de dinero con el que comprar esos bienes. Con ello también se

conseguiría aumentar el suministro de alimentos en las ciudades.

Se trataba de una estrategia de crecimiento económico basada en el incremento de la renta campesina y en la extensión de los intercambios mercantiles, para que más adelante pudiera desarrollarse la industria en gran escala. De ese modo, se aplazaba sine die la idea central del GOELRO aprobado tres meses antes; su realización quedaba hipotecada a que se generasen mayores capacidades productivas y se fuera diversificando la estructura económica. Lenin no se anduvo con rodeos a la hora de explicar el viraje. La agricultura aportaba más de la mitad de la menguada renta nacional y en el campo seguía residiendo más del 90% de la población. Por tanto, era imposible gobernar el país y mantener el poder si continuaba el enfrentamiento con la mayoría campesina. Se trataba de «dar satisfacción en el sentido económico a los campesinos y llegar a liberar el intercambio de mercancías» como premisa para «mantener el poder del proletariado», por lo que la nueva política económica «determinaría la suerte de la revolución»[58]. En aquel viraje pesaban otros dos aspectos fundamentales: la constatación del descontento social, que en su máxima expresión había revelado la insurrección de los marineros de Kronstadt, y el fin de las esperanzas puestas en el triunfo de revoluciones socialistas en Alemania y otros países europeos.

Una vez más, Lenin identificaba al partido bolchevique como representante de la clase obrera, por lo que su discurso consideraba que la NEP recuperaba la alianza obrero-campesina y mantenía la orientación socialista en la medida en que contribuía a que el PC(b) siguiera en el poder. La paradoja de ese trueque de identidades estaba en que los obreros, que según su discurso eran los auténticos dueños del poder, seguían trabajando en las fábricas bajo duros regímenes disciplinarios, con salarios bajos y precarias condiciones de vida, sin derecho a participar en las decisiones de las empresas, sin libertades cívicas, ni derecho de voto, ni un parlamento en que estuvieran presentes quienes ellos mismos eligiesen como sus representantes.

Al mismo tiempo, la necesidad de insistir en las ventajas de la NEP hacía que el gobierno no valorase de forma adecuada, y menos aún que lo hiciese en público, los obstáculos que seguían presentes en la agricultura. El predominio de microexplotaciones atrasadas, unido a las medidas mercantiles aprobadas, generaba una creciente estratificación social entre los campesinos, así como un amplio margen de beneficio para los comerciantes que se aprovecharan de la desorganización reinante en los canales de distribución de los bienes agrarios. Atisbos de ello sí se recogen en los últimos textos que Lenin pudo escribir en

1922-1923 durante los escasos intervalos en los que su enfermedad le permitía trabajar. Buscando explicaciones a los pocos avances económicos que se conseguían y a las dificultades políticas, Lenin incorporó nuevas reflexiones acerca de la ausencia de premisas civilizatorias: «No sabemos administrar la economía […,] nos falta cultura para dirigir»[59]. Ante esa carencia «se necesita toda una revolución […,] una época histórica en el mejor de los casos de una o dos décadas»[60]; o bien «necesitamos asentar las premisas fundamentales de la civilización, aquellas que tienen los países avanzados»[61]. El argumento central se vuelve reiterativo: tenemos la premisa política (el poder), pero faltan las materiales y sociales debido al atraso («los métodos bárbaros heredados») del sistema zarista[62].

A su juicio, las incapacidades y los errores del Estado soviético también reflejaban ese atraso cultural civilizatorio, cuya consecuencia principal era la imposibilidad de acometer de manera inmediata una gran industrialización y comenzar la construcción del socialismo. Pero, al mismo tiempo, depositaba en ese Estado la esperanza de crear las premisas civilizatorias a través de un largo proceso de «revolución cultural». La contradicción del argumento se plasmó de manera nítida en su postrera propuesta de que el propio Estado burocratizado crease un «organismo de inspección» para combatir la burocracia y controlar la actividad de los demás órganos estatales.

Tras su muerte, en enero de 1924, faltó todavía algo de tiempo para que emergiese a la superficie una mayor contradicción que hasta entonces se mantuvo solapada debido a la autoridad de Lenin en el partido y al cierto alivio económico que comenzó a proporcionar la NEP. A mediados de la década, habían mejorado los indicadores económicos en el campo y, aunque menos, en la industria de bienes de consumo (alimentos, textiles y algunos artículos domésticos). No así en las ramas principales de la gran industria (maquinaria, química, electricidad, metalurgia), cuya dimensión seguía siendo raquítica y su tecnología muy atrasada. La mejora tampoco se constataba en la vida de los trabajadores de las ciudades. Los contrastes campo-ciudad y agricultura-industria dieron lugar a que entre los dirigentes comunistas se abriese un debate alrededor de dos preguntas cardinales: ¿hacia dónde vamos?, ¿qué tiene que ver la situación actual con la construcción del socialismo?

Una vez eliminada la participación política de la población, de los sóviets y de la militancia comunista[63], el debate sólo podía producirse en el restringido círculo de los altos dirigentes bolcheviques. Las respuestas se polarizaron en dos

alternativas. Por una parte, Bujarin y Tomski, con el apoyo de Kámenev y Zinóviev, plantearon que la NEP era la única opción viable, primero para sobrevivir y después para desarrollar las condiciones que permitirían avanzar hacia la gran industria como base del proyecto socialista. Por otra parte, Trotski, Serebriakov, Preobrazhenski y otros miembros que desde 1923 se habían agrupado en la «Oposición de Izquierda» plantearon que la continuidad de la NEP era un obstáculo para el desarrollo de la industria, para satisfacer las demandas obreras y para caminar hacia el proyecto socialista. Las dos posiciones coincidían en la meta perseguida, pero disentían diametralmente en la valoración del momento y en el trayecto que recorrer.

Constreñido el debate político a ese entorno elitista, las divergencias sólo podían derivar en una dirección: la lucha por el poder político. Quien dominara los resortes del Estado podría llevar a cabo la estrategia que proponía. La paradoja fue (otra más) que ninguna de las dos posiciones en liza y ninguno de sus protagonistas llegaron a prevalecer, sino que lo hizo una opción ajena al debate y carente de perfil estratégico. Su punto fuerte era, precisamente, que había ido haciéndose con buena parte de esos resortes del poder efectivo con el que se podían imponer las decisiones. Se trataba de una fracción liderada por Stalin, que había ido dominando los mecanismos desde los que se nombraban los cargos políticos y administrativos del Partido-Estado. Consciente de su poder, esa fracción concentró la resolución del debate en el lugar que convenía a sus intereses: el buró político del PC(b), la cúspide del poder[64]. Sin elaborar una propuesta propia, ni entrar directamente a debatir, tan pronto insistían en defender la continuidad de la NEP como declaraban la necesidad de acelerar el desarrollo industrial. En el terreno práctico, los órganos del Estado bajo su control parecían alinearse con la estrategia de la NEP, pero desde 1927 la orientación efectiva de sus decisiones se fue decantando hacia el impulso de la industria, al tiempo que el grupo de Stalin se desembarazaba de los líderes que habían defendido aquellas dos posturas.

Declarando la vigencia de la NEP, el gobierno elevó la presión fiscal sobre los campesinos a la vez que encareció los precios de los bienes de consumo que compraban y los alquilares que pagaban los campesinos por el uso de la escasa maquinaria a que tenían acceso. Los recursos obtenidos por esas vías se destinaban a realizar inversiones en la industria pesada. Sin embargo, esa manera de actuar se enfrentaba a un dilema de difícil solución. En 1928 las empresas estatales aportaban el 44% de la renta nacional, generado principalmente desde el sector industrial, el comercio y el (famélico) sistema financiero. Pero sólo

controlaba el 3% de la producción de la agricultura, que seguía aportando cerca de la mitad de la renta y concentraba la inmensa mayoría del empleo. Por tanto, la actividad agraria que llevaban a cabo los campesinos en las tierras que poseían en usufructo se mantenía como el principal sector de la economía, a pesar de su enorme atraso productivo, y seguía siendo el medio de vida de la mayor parte de la población.

Tal era el panorama al cabo de los doce años transcurridos desde octubre de 1917. La aurora de esperanza había despuntado con la desaparición del régimen zarista merced a las promesas de paz y democracia, el reparto de la tierra, el laicismo, la legislación laboral, la amplitud de los derechos de las mujeres, el impulso a la educación y múltiples expresiones artísticas. Después de aquel aldabonazo, se impuso el principio de realidad a través de un cúmulo de desilusiones, pasos atrás, límites al voluntarismo, monopolio del poder y deriva dictatorial. Doce años después, el grupo estalinista iba a promover un viraje que pondría en marcha el mayor experimento de «revolución desde arriba» que se ha conocido en la historia. Una obra de ingeniería social del Partido-Estado que transformó radicalmente la estructura de la economía y la organización de la sociedad, conformando un sistema que, en nombre de los obreros, extremó los mecanismos de opresión carcelaria contra esos obreros.

COROLARIO: POR UN CAMINO OPUESTO A LA EMANCIPACIÓN SOCIAL

La transformación emprendida por el grupo estalinista modificó todos los órdenes de la vida soviética. Cambió la vida de más de 160 millones de personas a lo largo y ancho del gigantesco territorio que, desde 1924, se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En menos de una década, de 1929 a 1937, la débil y desarticulada industria heredada del zarismo, zarandeada por la guerra civil y apenas restaurada a lo largo de los años veinte, se convirtió en una poderosa estructura productiva asentada en las ramas de maquinaria, metalurgia, carbón, electricidad, química y materiales de construcción. Por métodos draconianos y provocando una brutal hambruna con millones de muertos, las microexplotaciones agrarias fueron obligadas a formar parte de grandes fincas colectivas, que eran poco eficientes pero proporcionaban –junto con el esfuerzo

de los trabajadores en las ciudades– el excedente necesario para realizar grandes inversiones en la industria e infraestructuras. Los intercambios mercantiles quedaron eliminados y todas las relaciones económicas quedaron sometidas a decisiones administrativas que se planificaban desde el Estado. La economía experimentó un frenético ritmo de crecimiento a costa de incorporar varios lastres fundamentales: baja eficiencia productiva del colosal volumen de recursos utilizados, lento aumento de los bienes destinados a satisfacer el consumo de la población y un funcionamiento burocrático que fue acumulando rigideces cada vez más difíciles de solucionar.

La estructura social adquirió una fuerte homogeneidad debido a que millones de personas adultas pasaron a formar una ingente masa de asalariados que trabajaban para el Estado en fábricas, campos, tiendas, órganos administrativos y otros ámbitos laborales. Todos ellos sometidos a disciplina militar, privados de cualquier derecho democrático, con un limitado acceso a bienes individuales, aunque sí contaban con un satisfactorio acceso a servicios colectivos (sanidad, educación, cultura). Por encima de ese tejido social uniforme, se situaban los tramos de la pirámide de poder, compuestos por los cuadros de mando intermedios y superiores que se encargaban de garantizar el cumplimiento de las decisiones tomadas por la elite que dominaba el Partido-Estado.

La vida entera de las personas dependía de normas que controlaban esos cuadros funcionariales en los centros de trabajo, los barrios y pueblos, las escuelas y universidades, los ámbitos científicos y culturales y un sinfín de otros espacios a los que siempre llegaba la alargada sombra del Partido-Estado. Una estructura burocrático-policial que autorizaba y vigilaba los desplazamientos geográficos y las lecturas, los hábitos domésticos y las formas de pensar, las amistades y hasta las convicciones más íntimas. Un dominio monolítico y doctrinario que emanaba verticalmente desde la cúspide hacia el conjunto de la población.

Un dominio que alcanzó también a los órganos y a los militantes que formaban parte del PC(b). Si en los años veinte se produjo la eliminación política de los cuadros disidentes, después llegó su generalizada eliminación física hasta alterar de forma radical la composición del partido y de sus instancias de poder. Primero desaparecieron los líderes que en octubre de 1917 habían dirigido el partido bolchevique y los sóviets. Después llegó la exclusión masiva de la generación de militantes que había participado en la revolución. Unos fueron exterminados, otros encarcelados y otros, simplemente, sustituidos en sus cargos por personas que había nacido después de la revolución y que habían sido seleccionadas por

su adhesión al grupo estalinista. Cuando en 1939 se celebró el XVIII Congreso del PC(b), había muerto o desaparecido el 60% de los asistentes al anterior congreso de 1934, así como el 70% de los miembros elegidos entonces para el Comité Central. La mitad de los asistentes al Congreso de 1939 tenía menos de 35 años, por lo que eran menores de edad o ni siquiera habían nacido en 1917; el 90% de los secretarios de los órganos de dirección a escala regional y de distrito tenían menos de 40 años y el 80% había ingresado en el partido después de 1924, por lo que su promoción se la debían al grupo estalinista.

Vista la evolución de los acontecimientos, sería un burdo sarcasmo establecer algún tipo de semejanza entre la sociedad construida por la elite estalinista y los propósitos que habían animado el proyecto de los socialistas rusos al comenzar el siglo XX. Evidentemente, la nueva sociedad soviética carecía de propiedad privada de los bienes económicos, puesto que la base industrial había surgido directamente como propiedad estatal y la base agraria había sido colectivizada por la fuerza. Pero esa propiedad era colectiva sólo en apariencia pues, de hecho, su posesión efectiva recaía en la elite dominante que ejercía el control a través de la pirámide de poder. La explotación económica, la opresión social, la tiranía política y el dominio ideológico eran piezas de un mismo puzle: un sistema totalitario en las antípodas de cualquier proyecto socialista. Un amasijo de formulaciones huecas, extraídas del pensamiento de Marx y Engels, pasadas por la interpretación de Lenin y aliñadas por Stalin, componía la ideología de Estado con la que se justificaba la realidad creada por la elite dominante.

Finalmente, el fortísimo desarrollo industrial alumbró otro elemento decisivo: una formidable capacidad militar. Un factor que sería decisivo para resistir la invasión alemana a partir de junio de 1941, para derrotarla después y para desempeñar un papel clave en la desaparición del nazismo. También lo sería para ocupar los territorios que liberó el ejército soviético en el centro-este del continente, para formar un bloque de dominio y para constituirse en uno de los dos polos de referencia político-militar de la pugna EEUU-URSS conocida como la Guerra Fría. De ese modo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la URSS pasó a ejercer una notable influencia en el desenvolvimiento político de los países europeos.

[1] Uno de los líderes naródniki que mantenía relaciones epistolares con Marx era Nikolái Danielson, que había traducido al ruso El capital.

[2] OEME, tomo III, p. 162.

[3] OEME, tomo I, p. 102.

[4] En Acerca de la cuestión social en Rusia, al que en 1894 añadió unos párrafos finales, señalaba: «Quien sea capaz de afirmar que es más fácil hacer la revolución en un país donde, aunque no hay proletariado, tampoco hay burguesía, demuestra exclusivamente que debe aún estudiar el abecé del socialismo […]. No me atrevo a decir que esa comunidad haya conservado fuerzas suficientes […] como confiábamos Marx y yo todavía en 1882». OEME, tomo III, pp. 410-433.

[5] A pesar de su anterior pronóstico sobre el rápido aumento de las relaciones capitalistas en la agricultura, en 1905 el propio Lenin reconocía en La cuestión agraria el carácter medieval de la propiedad y el asombroso atraso que se constataba en todos los órdenes.

[6] Hacia finales de siglo, Rusia y Alemania contaban con un número similar de grandes empresas, unos 300 establecimientos con más de mil empleados. En Rusia esas empresas ocupaban a 2 millones de obreros, mientras que en Alemania no llegaban a 600.000. La fábrica metalúrgica de Putílov en San Petersburgo empleaba a 12.000 obreros.

[7] Una parte de esos trabajadores también mantenía vínculos con el medio rural y a veces alternaba su actividad entre el campo y la industria según las estaciones del año.

[8] La propia Zasúlich había participado en atentados terroristas por los que tuvo que huir a Suiza, lo mismo que María Spirodónova, quien después se consagraría como una de las mayores figuras revolucionarias liderando la izquierda del partido socialrevolucionario (eserista).

[9] Esos nombres se mantuvieron a pesar de que en los siguientes congresos la mayoría fue cambiando alternativamente a uno u otro grupo.

[10] Otra alerta primeriza fue la de Rosa Luxemburgo al polemizar con las tesis leninistas sobre la organización del POSDR y su misión política. En Cuestiones organizativas de la socialdemocracia rusa, publicado en 1904, rechazó el culto leninista por el centralismo y la visión elitista de la función del partido como si fuera el portador exclusivo de la conciencia política que insuflar en el

movimiento obrero. A su juicio, la combinación de ambos aspectos implicaba una concepción peligrosa del poder, que haría del Comité Central del partido el único elemento pensante, con lo que el partido y los trabajadores quedarían como meros cumplidores de sus órdenes: «El Comité Central se perpetuará a sí mismo, ejercerá el despotismo sobre el partido y hará que este lo ejerza sobre las masas» (Obras Escogidas, tomo I, pp. 188 y ss.)

[11] No eran partidarios de nacionalizar la industria y durante los primeros años, entre sus formas de organización y sus acciones políticas tuvieron cabida las células dedicadas a realizar atentados terroristas, con argumentos similares a los que usaban los anarquistas.

[12] Otra saga fue la de los «marxistas legales», que fueron los primeros que se habían opuesto a los naródniki en nombre de los principios marxistas, que ellos contribuían a difundir en periódicos y revistas. Entre ellos estaban varias figuras intelectuales que luego destacaron en los campos de la economía, como Mijaíl Tugan-Baranovski, de la filosofía, como Bulgákov y Berdiáev, y de la política liberal, como Piotr Struve.

[13] El primero estaba compuesto por la minoría de grandes propietarios de tierra, el segundo por los demás campesinos, el tercero por los propietarios burgueses de las ciudades y el cuarto por los trabajadores asalariados y otros grupos urbanos.

[14] El partido kadete tuvo 179 diputados y el trudovique 136. El resto se repartía entre numerosas minorías nacionales (121), nacionalistas rusos (60) y otros 70 diputados, de los que 18 eran mencheviques.

[15] Otra escisión de los eseristas, cuyo nombre se debía a las siglas rusas (NSs) del Partido Socialista Popular. La segunda Duma estaba formada por: 104 trudoviques, 47 mencheviques, 37 eseristas, 16 enesistas; además de 92 kadetes, 93 nacionalistas de todo tipo y 80 octobristas y otros de derecha.

[16] La Duma tenía 154 octobristas y 147 diputados de extrema derecha, frente a 52 kadetes, 13 trudoviques, 19 bolcheviques y 26 nacionalistas.

[17] La extrema derecha obtuvo 154 diputados, los octobristas 95, los kadetes 57, otros centristas 33 y el partido progresista 41, quedando un mínimo espacio para los trudoviques (10), bolcheviques (15) y nacionalistas rusos y no rusos (43).

[18] Las fechas referidas en este apartado corresponden al calendario juliano que se mantuvo vigente en Rusia hasta 1918, por lo que llevan catorce días de retraso con respecto al calendario gregoriano que regía ya en la mayoría de los países europeos. Por esa razón, se alude a la revolución rusa del 25 de octubre cuando, para los demás europeos, era el 7 de noviembre.

[19] El gobierno llegó a prohibir los cambios de lugar de trabajo y de residencia, aunque fuera a corta distancia.

[20] En Petrogrado –como se rebautizó oficialmente a la capital, San Petersburgo, al comienzo de la Gran Guerra– entre los dos millones de habitantes había más 400.000 obreros fabriles, más de 250.000 empleados en el servicio doméstico y unos 50.000 empleados en los transportes. En Moscú, con una población algo inferior, había unos 165.000 obreros, aunque la mitad desarrollaba trabajos más cercanos a la artesanía, junto a 30.000 empleados en transportes.

[21] El príncipe Gueorgui Lvov dirigió los dos primeros gobiernos provisionales. El primero lo formaron representantes de los partidos liberales, sin participación de los partidos socialistas, aunque sí de militantes a título personal, como Aleksandr Kérenski, antiguo trudovique y desde febrero militante menchevique.

[22] El partido menchevique estaba de acuerdo con ese planteamiento y seguía estando contra la guerra. De hecho, había participado en la conferencia celebrada en Zimmerwald, en septiembre de 1915, junto con los otros sectores y partidos socialistas que se oponían a la guerra.

[23] Así lo mantuvo a pesar de que, después de febrero, pocas semanas antes de subirse al tren alemán que le llevó a Petrogrado, reconocía que tanto él como los demás dirigentes bolcheviques en el exilio carecían de información para saber lo que estaba ocurriendo en Rusia.

[24] Lenin: «La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla», Obras Escogidas (OEL), Moscú, Progreso, tomo II, p. 277.

[25] Esas tesis quedaron recogidas en sucesivos escritos de Lenin a partir de Cartas desde lejos y en su intervención en la conferencia del POSDR(b) celebrada en abril.

[26] Las principales figuras de los eseristas de izquierda eran María Spiridónova

y Borís Kamkov. Los líderes de los mencheviques internacionalistas eran Mártov, Axelrod y Martínov. El grupo Mezhrayontski estaba encabezado por Trotski y contaba con figuras como Lunacharski, Laris y Riázanov, que meses después ingresaron en la dirección del partido bolchevique.

[27] La historia de los sóviets de campesinos es más difusa con respecto al momento de su formación y a su actuación hasta las semanas previas y posteriores a octubre.

[28] Sobre un total de 777 diputados, 248 eran mencheviques y 235 eseristas. Además de 105 bolcheviques, había 32 mencheviques internacionalistas y otros 73 socialistas no afiliados.

[29] Convocados con urgencia, Trotski y Zinóviev tuvieron que arengar a una concentración que rodeaba el Palacio de Táuride a finales de junio, instando a que se dispersase.

[30] Propuesta por Mártov, su composición fue manipulada por el gobierno para que hubiera una reducida presencia de los sóviets de obreros y soldados. Reunida la conferencia a mediados de septiembre, había 532 eseristas, de los cuales 71 eran de izquierda, 530 mencheviques, de los cuales 56 eran internacionalistas, y 134 bolcheviques.

[31] Las expresiones empleadas por Lenin no podían ser más categóricas. En la carta del 15 de septiembre afirmaba: «Los bolcheviques deben tomar el poder […] es ingenuo esperar la mayoría "formal" de los bolcheviques: ninguna revolución espera eso» (OEL, tomo II, p. 391).

[32] El 8 de octubre en el artículo «Consejos de un ausente», publicado en Pravda, Lenin sentenciaba: «El triunfo de la revolución rusa y de la revolución mundial depende de dos o tres días de lucha» (OEL, p. 456). El 20 de octubre en otro artículo, «La crisis ha madurado», insistía: «Los bolcheviques tienen asegurada ahora la victoria de la insurrección» (OEL, tomo II, p. 405). En «¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?» y otros escritos argumentaba la existencia de todas las condiciones para llevar a cabo esa revolución contando con mayorías en los sóviets de obreros, campesinos y soldados (OEL, p. 417).

[33] Para los anales históricos de hitos insólitos quedó el hecho de que, para dejar claro su desacuerdo, Kámenev llegó a hacer público que los bolcheviques preparaban la insurrección; y lo hizo en Rabochy Put; un periódico socialista

fuertemente crítico con los bolcheviques, que dirigía el escritor Maksim Gorki.

[34] Tres mencheviques internacionalistas que también estaban propuestos rechazaron integrarse como protesta por el hecho de que el gobierno provisional (de mayoría menchevique) estaba detenido en el Palacio de Invierno.

[35] El control de Moscú resultó más costoso que el de la capital, Petrogrado. La influencia bolchevique en el sóviet de soldados era menor y el sóviet de obreros carecía de un comité militar como brazo armado del levantamiento. Además, los líderes del POSDR(b) moscovita, Alekséi Rýkov y Víktor Noguín, formaban parte de los dirigentes más renuentes a la toma del poder en las condiciones propuestas por Lenin.

[36] Esa decisión fue la que hizo posible que semanas después, durante un par de meses, tres eseristas de izquierda se integrasen en el gobierno, uno de ellos como comisario de Agricultura.

[37] Desde marzo de 1918 pasó a llamarse Partido Comunista (bolchevique), PC(b).

[38] Los eseristas de izquierda asesinaron al embajador alemán para intentar romper el acuerdo.

[39] Participaron 110 eseristas de izquierda y otros 50 eseristas de otras tendencias, junto con 40 delegados bolcheviques, otros 15 simpatizantes suyos que eran nacionalistas ucranianos, y otros 40 diputados sin adscripción a ningún partido.

[40] Quienes comenzaron la guerra contra el gobierno bolchevique fueron los jefes militares que defendían al gobierno de Kérenski y otros anhelantes del régimen zarista. Después se incorporaron políticos de derecha y grupos étnicos, como los cosacos, descontentos con el gobierno. En marzo de 1918, tras el cierre de la Asamblea Constituyente, se unieron muchos dirigentes menchevique y eseristas. En las ciudades aumentaron los atentados terroristas contra líderes bolcheviques. No obstante, la capacidad operativa de ese conglomerado opositor habría sido limitada si no hubiera contado con el apoyo económico y militar de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Polonia, Japón, Serbia y otros, incluyendo el envío de tropas que combatieron en territorio ruso.

[41] Kolontái fue una de las dirigentes más importantes del comité central que

decidió la conquista del poder y después se incorporó al gobierno como comisaria de Asistencia Pública. Shliápnikov era uno de los líderes del Sóviet de Petrogrado y después fue nombrado comisario de Trabajo.

[42] Pravda, el órgano oficial del POSDR(b), publicó los resultados el 26 de diciembre (OEL, tomo II, pp. 527-531), pero debido a la lentitud del recuento en regiones alejadas nunca llegó a publicar los resultados completos. Por ese motivo, otras fuentes aportan resultados finales con pequeñas variaciones.

[43] El partido eserista obtuvo el 41% de los votos y 380 diputados sobre un total de 767 escaños; de ellos 39 eran de izquierda, 32 eran nacionalistas ucranianos y varias decenas más se alineaban con otras minorías nacionalistas. El POSDR(b) logró el 23,5% de los votos y 168 diputados. Los mencheviques tuvieron 18 escaños, los kadetes 17 y los enesistas 5. Los otros 179 correspondían a las minorías musulmana, ucraniana, bashkiria, kirguizia, armenia, judía, polaca, estonia, letona y cosaca.

[44] En las Tesis sobre la Asamblea Constituyente afirma Lenin: «La república de los soviets es una forma de democracia superior a la república burguesa ordinaria con su asamblea constituyente» (OEL, tomo II, 274-276).

[45] La validez de este argumento dependía de la muestra de ciudades que se tomara, pero, en todo caso, siendo la mayor fuerza política su apoyo electoral no alcanzaba la mayoría absoluta: los resultados en las ciudades que concentraban casi el 10% de la población otorgaban a los bolcheviques el 36% de los votos, a los kadetes el 23% y a los eseristas el 14%, repartiéndose la otra cuarta parte entre los demás partidos.

[46] OEL, tomo II, pp. 275-276.

[47] Días antes, el eserista y otros partidos de la oposición buscaron refrendar su fuerza política mediante diversas movilizaciones de apoyo. Para evitarlas, el gobierno decretó el estado de sitio en la capital, prohibió las concentraciones callejeras y colocó la ciudad bajo control de un Cuartel General Militar formado por bolcheviques y eseristas de izquierda. El día de la apertura de la asamblea, blindó los accesos a las sedes del parlamento y el ejecutivo, el Palacio de Táuride y el Instituto Smolny, impidiendo que se acercaran las manifestaciones convocadas por los partidos de la oposición.

[48] El candidato eserista, Chernov, ganó con holgura a la candidata bolchevique

por 244 votos frente a 153. Una parte de los diputados nacionalistas, incluyendo los que eran eseristas, decidió no acudir a la Asamblea; los ucranianos optaron por constituir su propia asamblea nacional y se desvincularon de lo que ocurriera en Petrogrado.

[49] El congreso de los eseristas celebrado en mayo de 1918 aprobó la preparación de un levantamiento en defensa de la Asamblea Constituyente. Una gran parte se unió a la Legión Checoslovaca que había derrocado al poder soviético en Siberia, Urales y Volga. Sin embargo, en febrero de 1919 su Comité Central abandonó la lucha armada en el bando contrarrevolucionario. Los bolcheviques aceptaron su vuelta a Moscú y la publicación de su periódico, pero como las posiciones eseristas seguían siendo disidentes el gobierno detuvo a sus dirigentes y los tribunales les condenaron a muerte, aunque las sentencias quedaron suspendidas.

[50] La revolución proletaria y el renegado Kautsky, OEL, tomo III, p. 69.

[51] Se publicó más tarde, en 1918 (OEL, tomo II, pp. 291-388). El texto es una prueba de su exhaustivo conocimiento de la obra de Marx y Engels, pero también un prodigio de unilateralidad a la hora de considerar las funciones del Estado desde un punto de vista exclusivamente instrumentalista. Su trasfondo se sustancia en tres tesis centrales: 1) El Estado es una maquinaria o instrumento de explotación de la clase dominante contra la oprimida; 2) El Estado y las instituciones capitalistas no sirven para construir la sociedad socialista, por lo que se requiere su previa desaparición; 3) el Estado obrero («una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa») tenderá a desaparecer cuando el socialismo alcance su madurez.

[52] La economía y la política en la época de la dictadura del proletariado, OEL, tomo III, p. 290.

[53] Ibid., p. 353.

[54] Las tareas inmediatas del poder soviético, OEL, tomo III p. 683. También en los discursos ante el tercer congreso de los sóviets de obreros, soldados y campesinos y ante el séptimo congreso del Partido Comunista (bolchevique).

[55] La ausencia de bienes de consumo que hacía estéril el uso del dinero, el pago de salarios en especie, el trueque, las requisas a los campesinos y otras evidencias de la penuria económica reinante fueron calificadas como medidas

del «comunismo de guerra»; ciertos dirigentes llegaron a considerar que servían para iniciar la construcción del socialismo.

[56] OEL, tomo III, p. 674.

[57] B. Russell (1969), Teoría y práctica del bolchevismo, Barcelona, Ariel, p. 10.

[58] OEL, tomo III, 579-589.

[59] Intervención en el XI Congreso del PC(b), OEL, tomo III, p. 699.

[60] Sobre la cooperación, OEL, tomo III, p. 780.

[61] Nuestra revolución, OEL, tomo III, p. 790

[62] También en Cómo tenemos que organizar la Inspección Obrera y Campesina y Mas vale poco y bueno, OEL, tomo III, pp. 790-803.

[63] El número de militantes del partido había crecido exponencialmente, de modo que los apenas 25.000 en 1917 se habían convertido en más de un millón. En ese intervalo de años, sobre todo durante la guerra civil, desapareció una parte de los dirigentes y de los cuadros intermedios que habían participado en la Revolución de Octubre.

[64] Tras eliminar a la mayoría de los líderes de octubre de 1917, tanto a sus aliados iniciales (Kámenev, Zinóviev, Bujarin) como a sus adversarios de la Oposición de Izquierda (Trotski, Rádek), el grupo de miembros del buró político que cerraban filas con Stalin estaba compuesto por Mólotov, Uglánov, Kosior, Shvérnik, Voroshílov y Rudzatak, con la posterior incorporación de Kúibishev, Ordzhonikie y Mikoyán.

6. Hitos y pautas declinantes de los partidos obreros durante la Edad de Oro del capitalismo

La conclusión de la Segunda Guerra Mundial abrió el telón de un escenario europeo radicalmente diferente al que existía durante las décadas anteriores a la contienda militar. Las estructuras económicas y sociales, los comportamientos colectivos y las relaciones entre las fuerzas políticas, todo, comenzó a desenvolverse en claves distintas a las que habían estado vigentes. Se configuró un escenario cuyos derroteros podrían haber sido distintos, pues no estaba predeterminado que el resultado fuera el que finalmente se produjo. De hecho, nadie lo había pronosticado así, sino que tomó forma a través del influjo catalizador de varios factores contingentes que fueron apareciendo durante los años de la guerra y de la inmediata posguerra. La entrada y la salida de la guerra marcaron el rumbo de las décadas siguientes por partida doble, tanto por la influencia que tuvieron en las condiciones internas de los países que participaron en el conflicto como por el impacto que tuvo la intervención de los ejércitos de la Unión Soviética y Estados Unidos en la victoria aliada. El peaje a pagar por esa intervención asomó en las conferencias de Yalta y Potsdam, celebradas entre febrero y agosto de 1945, cuando las dos potencias presentaron su factura: el reparto del continente en dos bloques de dominio.

La división penetró al interior de los países europeos y se convirtió en uno de los elementos fundamentales de lo que aconteció después. Más aún cuando, en 1947, el gobierno estadounidense puso en marcha un programa de ayuda financiera, el Plan Marshall, que favoreció la recuperación de las economías situadas en la parte occidental del continente[1] a la vez que estimulaba la exportación de productos norteamericanos y reforzaba el alineamiento político-militar de esos países con Estados Unidos. Desde los primeros años cincuenta, las economías occidentales crecieron con rapidez y experimentaron profundos cambios que repercutieron en las estructuras sociales. Los partidos socialistas y varios partidos comunistas fueron protagonistas en la aplicación de reformas sociales y la extensión de los derechos democráticos hasta cotas que ni siquiera en sueños hubieran previsto que se podían alcanzar bajo el capitalismo. Los partidos conservadores y centristas aceptaron pactos sociales y compromisos políticos que anteriormente habían rechazado de manera reiterada. Los episodios

insurreccionales pasaron a los libros de historia y no volvió a producirse ningún evento político de esas características.

Simultáneamente, fruto de la división continental, la vida política de los países occidentales estuvo permeada de manera continua por la gran capacidad militar de la Unión Soviética y el dominio que ejercía sobre el bloque oriental. Los temores que infundía la «amenaza soviética» estuvieron presentes en las decisiones adoptadas por los partidos gobernantes. Por un lado, ejerció como estímulo para que las fuerzas políticas conservadoras y los sectores empresariales estuvieran dispuestos a llevar a cabo ciertas reformas socioeconómicas con el fin de evitar que el descontento social pudiera derivar en conflictos políticos que favoreciesen a los partidos comunistas nacionales. De otro lado, acentuó las posiciones anticomunistas de muchos partidos socialistas, haciendo inviable la colaboración entre ambos partidos, y en ciertos momentos exacerbó un clima de histeria social en torno a la inminencia de un hipotético conflicto militar.

CÍRCULOS VIRTUOSOS

La práctica totalidad de los países europeos occidentales padecieron las consecuencias de la guerra, unos porque habían sufrido la invasión de los ejércitos alemán e italiano, otros porque también fueron escenario de enfrentamientos militares. Al concluir el conflicto, las economías estaban hundidas, las poblaciones luchaban por la mera supervivencia y las instituciones políticas estaban paralizadas. No cabía presagiar un futuro halagüeño durante el compás de espera creado en la segunda mitad de los años cuarenta. Sin embargo, un cuarto de siglo después, el panorama que se podía apreciar en los primeros años setenta era diametralmente distinto como consecuencia del cúmulo de transformaciones que habían ido encadenándose en la economía, la estructura social y la vida política. Transformaciones que cambiaron rasgos importantes del funcionamiento capitalista y que resultaron definitivas para los partidos obreros.

Crecimiento económico y distribución de la renta

Tras unos años de dificultades y privaciones, la ansiada recuperación de la economía comenzó en los años cincuenta y pronto puso de manifiesto que tenía pocas cosas en común con las condiciones que hasta entonces habían caracterizado a las economías europeas. Grandes cambios tecnológicos e institucionales hicieron que esas economías registraran un crecimiento rápido, generalizado, prolongado y estable. Durante un cuarto de siglo, la producción aumentó a una tasa media anual del 4%, lo que permitió multiplicar por 2,5 el nivel existente en 1950; gracias sobre todo a que la productividad se incrementaba cerca de un 3% anual, duplicando su nivel durante ese intervalo de tiempo. Unos ritmos de crecimiento desconocidos hasta entonces en la historia del capitalismo, pues tenían lugar de forma simultánea en más de una docena de países y persistieron durante un largo periodo. Esa novedad justificaba el término de la «Edad de Oro» del capitalismo, acuñado para destacar los resultados económicos de aquellas décadas.

Las principales actividades productivas que sostuvieron el rápido crecimiento fueron las industrias dedicadas a fabricar maquinaria, química y productos eléctricos, siendo también una novedad –ya conocida en Estados Unidos durante los años veinte– que una parte importante de esa producción fueran bienes destinados al consumo de la población, como los automóviles, electrodomésticos, fármacos y utensilios para el hogar. Productos que requerían de una demanda creciente, lo cual sólo era posible si aumentaba la capacidad adquisitiva y se facilitaba el acceso al crédito a una gran parte de la población. Lo mismo sucedía con la acelerada expansión de numerosos servicios para el consumo individual o familiar, sólo posible si la renta de los hogares crecía con dinamismo. El abaratamiento de los alimentos y otros productos básicos, debido a las mejoras de la productividad agraria e industrial, permitía que el aumento del consumo de las familias estuviera compuesto por una variedad cada vez más amplia de bienes y de servicios.

Desde el lado institucional, las negociaciones entre los empresarios y los sindicatos promovían la firma de pactos «fordistas» en los que se acordaban los salarios y otras condiciones laborales que condicionaban el reparto de la renta, generándose dos círculos virtuosos: el incremento de los salarios impulsaba el consumo de las familias y el incremento de los beneficios impulsaba la inversión de las empresas. Se reproducía así una dinámica interactiva que expandía la demanda privada interna y reforzaba las expectativas optimistas de empresarios

y trabajadores. A su vez, el Estado asumía un conjunto de funciones con las que favorecía el mantenimiento de los ritmos de crecimiento, suavizando las fases recesivas a través de la demanda pública, regulando el funcionamiento de los mercados y promoviendo la redistribución de rentas mediante los impuestos y los gastos sociales. La apertura del comercio exterior hizo que la expansión de las exportaciones reforzara el crecimiento de la demanda interna y fomentase la especialización productiva entre los países europeos; sobre todo entre los seis que crearon la Comunidad Económica Europea.

Consecuentemente, durante las décadas doradas, el capitalismo europeo elevó las retribuciones percibidas por los trabajadores, incrementó su capacidad de consumo y proporcionó mayores coberturas sociales, manteniendo una situación cercana al pleno empleo sin generar tensiones inflacionistas. Grandes cambios efectuados sin que se alterasen las constantes básicas del capitalismo. La mayor parte de los medios de producción seguía siendo de propiedad privada, las grandes empresas concentraban la mayor parte del capital. Los asalariados seguían supeditados a las estrategias y a las condiciones productivas decididas por los propietarios y directivos de las empresas. Por tanto, la «matriz capitalista» prosiguió incólume a la vez que muchos otros rasgos de su funcionamiento se alteraban, arrojando novedades relacionadas con el ejercicio del poder económico que se proyectaban al ámbito social con resultados inéditos hasta entonces.

Estructura social, pactos y estabilidad

El desarrollo económico condujo a máximos históricos dos elementos característicos del capitalismo industrial: la concentración de trabajadores en grandes fábricas y la especialización de los obreros cualificados. La expectativa de un crecimiento persistente de la demanda agregada promovía el aumento de las escalas de producción, haciendo que las grandes fábricas elevaran su tamaño y emplearan a un mayor número de obreros en la producción de metalurgia, maquinaria, química, electrodomésticos y equipos de transporte, así como en las industrias ligeras. Lo mismo sucedía en la minería, la construcción, los servicios de transporte y otras infraestructuras. La ampliación de las escalas productivas suponía también una profunda reorganización de los talleres y equipos de

trabajo, dotados de nueva tecnología, con una mayor cualificación de los obreros, los técnicos medios y los empleados dedicados a actividades de gestión.

El cambio tecnológico y organizativo hacía posible la producción en serie y la mayor especialización productiva, estableciéndose dos procesos contradictorios en la actividad de los obreros fabriles. Uno fomentaba la uniformidad de los ritmos de trabajo, el reparto de tareas y otras condiciones de trabajo, así como de los sistemas de remuneración. Otro fomentaba la diversidad de las actividades específicas que realizaban, de los talleres que formaban las cadenas productivas y de las categorías con que se jerarquizaban las relaciones productivas, sobre todo entre los empleados de «cuello azul» que participaban directamente en las cadenas y los de «cuello blanco» que se ocupaban de tareas técnicas, gestoras y otras. La diversidad era más manifiesta cuando se comparaban las condiciones laborales de los obreros fabriles con las de las múltiples segmentaciones de trabajadores asalariados que estaban ocupados en los servicios, realizando actividades que nada tenían que ver con la organización fabril. Y, al margen del universo asalariado, la diversidad regía el sinfín de empleos autónomos y de actividades que desplegaban los pequeños propietarios.

Los pactos acordados por los sindicatos con las organizaciones empresariales influyeron de manera decisiva, tanto en la dinámica expansiva de la economía como en la configuración de esa estructura social tensionada entre los elementos de uniformidad y diversidad. Las grandes empresas contaban con la ventaja de que sus elevados incrementos de productividad les permitían negociar mejores salarios y derechos laborales para garantizar un clima de paz social y generar mayores aumentos de productividad. Los sindicatos contaban con la ventaja de que el desempleo era reducido y que la concentración de trabajadores en grandes empresas favorecía la afiliación sindical y la posibilidad de emprender acciones reivindicativas para mejorar la posición negociadora. Además, ambas partes entablaban las negociaciones sin que en el horizonte se otearan tensiones inflacionistas ni cambios importantes en las expectativas, y con la garantía de que las instituciones del Estado velaban por el cumplimiento de los acuerdos. De ese modo, los pactos proporcionaron a los trabajadores una secuencia de aumentos salariales, junto con la jornada laboral de ocho horas, el pago de varias semanas de vacaciones, la salubridad e higiene de los lugares de trabajo, la estabilidad de las condiciones de contratación y muchas otras demandas de los trabajadores. La existencia de espacios de negociación por ramas, por territorios y a escala nacional hacía que los acuerdos obtenidos en las grandes empresas o en determinadas industrias tendieran a generalizarse hacia los trabajadores de

empresas de menor tamaño y de otras ramas manufactureras y de servicios; lo cual redundaba en un mayor desarrollo del movimiento sindical.

Por consiguiente, los pactos sociales ocuparon la posición central en la red de vínculos creados entre la dinámica económica y la estructura social, desempeñando una función decisiva en el mantenimiento de la estabilidad social. En el interior de las empresas, las mejoras logradas por los trabajadores iban acompañadas de compromisos que contribuían a reforzar el orden jerárquico. Se abstenían de llevar a cabo acciones reivindicativas durante la vigencia del acuerdo, aceptaban los métodos organizativos fijados por los empresarios, no cuestionaban las relaciones de propiedad ni la capacidad de decisión sobre las cuestiones estratégicas de las empresas. Fuera de las fronteras que delimitaban los pactos quedaban dos colectivos. Uno era el de las empresas que se descolgaban de los acuerdos porque sus menores aumentos de demanda y de productividad entraban en contradicción con los incrementos salariales y otras condiciones pactadas. El otro era el de los núcleos de trabajadores, a veces organizaciones locales de los sindicatos, que disentían de la labor negociadora llevada a cabo por los líderes sindicales, promoviendo conflictos reivindicativos que fueron denominados «huelgas salvajes» porque se llevaban a cabo fuera de los cauces oficiales y con frecuencia no eran legales.

En el conjunto de la sociedad, tres elementos contribuían a reforzar la estabilidad, operando como mecanismos inhibitorios que diluían la posibilidad de confrontaciones que pudieran derivar en graves conflictos sociales: la desaparición del miserabilismo, la incorporación laboral de un gran número de mujeres y la emergencia del consumismo. Una de sus características históricas de las anteriores etapas del capitalismo había sido la situación de miseria y desamparo a la que se veían sometidas las franjas de la población que carecían de trabajo o que, teniendo trabajo, percibían salarios que no garantizaban las condiciones básicas para su subsistencia; apreciándose notables diferencias entre países según la extensión e intensidad que presentaba esa miserable situación. Sin embargo, desde los años cincuenta la pobreza se redujo hasta mínimos históricos, tanto por la disponibilidad de empleo, de modo que la mayoría de los asalariados obtenía ingresos crecientes, como por las políticas con las que el Estado garantizaba al conjunto de la población unas condiciones básicas de subsistencia.

La incorporación de las mujeres a la actividad laboral formó parte de uno de los cambios históricos fundamentales, la lucha por consolidar los derechos de las

mujeres en todas las esferas de la sociedad. Los movimientos feministas, junto con las innovaciones tecnológicas y las trasformaciones institucionales, propiciaron avances importantes en la posición de las mujeres en el mercado de trabajo, el sistema educativo, la familia, el control de su cuerpo, la reproducción y otros ámbitos en los que la desigualdad de género seguía soportando los signos de una opresión milenaria. En ese sentido, el trabajo asalariado y la cualificación que proporcionaban los niveles educativos tuvieron gran importancia para contingentes cada vez más amplios de mujeres. Disponían de ingresos con los que incrementar la renta de los hogares, a la vez que desarrollaban su autonomía personal y sus relaciones sociales a través del ejercicio de los derechos democráticos y el acceso a las políticas de protección estatal.

El tercer elemento, el consumismo, se vinculaba con los dos anteriores merced al aumento de los ingresos domésticos y los cambios promovidos en el funcionamiento familiar y social. Un fenómeno que combinaba el deseo y la oportunidad que tenían los trabajadores de acceder a la posesión de una cantidad creciente de bienes y servicios. Primero arraigó en los segmentos que percibían mayores salarios y, por tanto, presentaban mayores garantías para devolver los préstamos con los que adquirían automóviles y electrodomésticos, realizaban viajes y pagaban otros servicios. Después, las facilidades llegaron a quienes percibían salarios de menor rango pero con expectativas de elevarlos. Más tarde, alcanzó a jóvenes y mujeres que, aunque careciesen de empleo, eran atraídos por una labor propagandística cada vez más profesionalizada que inducía a comprar productos específicos según las edades, el género y otras características. El desarrollo capitalista encontró así nuevas posibilidades para expandirse gracias a la producción en serie de nuevos tipos de bienes, al diseño de programas de obsolescencia y otros mecanismos que promovían la reposición periódica de los productos, y a la utilización de nuevas modalidades de comercialización y financiación. Se extendió una cultura social profusamente difundida por periódicos, radios, televisiones, libros, películas y otros medios dirigidos al gran público. Se instaló un imaginario colectivo en el que la creciente posesión de productos se identificaba con la satisfacción personal y con el progreso social. Trabajar para comprar y consumir era una de las máximas de aquella «cultura de masas». Renovar y rotar los productos-símbolo se convertía en una necesidad, artificialmente inducida, para grupos cada vez más numerosos de la población. Se conformó así una espiral autorreproductiva en la que el conjunto de la vida personal daba lugar a objetos mercantiles, el horario no laboral pasaba a ser tiempo de consumo y las aspiraciones sociales se asociaban con las expectativas de elevar el nivel de consumo.

Compromisos políticos y estado de bienestar

El marco institucional de los países europeos registró un segundo tipo de acuerdos en forma de compromisos de carácter político, aunque no siempre se plasmaron de manera explícita en la firma de documentos, adoptando distintas modalidades de consensos parlamentarios y/o de gobiernos de coalición entre los partidos obreros y otras fuerzas políticas. Merced a esos compromisos se aprobaron leyes, otras normas legislativas, políticas económicas y medidas administrativas que ensancharon el perímetro de los derechos laborales y sociales a la vez que el ejercicio de las libertades cívicas. En unos casos se reconocieron los derechos a colectivos que hasta entonces estaban excluidos, en otros se incorporaron nuevos derechos en esferas o ámbitos que hasta entonces carecían de ese reconocimiento, y en otros casos se crearon instituciones públicas o se reforzaron las existentes con el fin de que los órganos del Estado protegieran de manera efectiva tales derechos.

La búsqueda del pleno empleo y la redistribución de la renta hacia los grupos sociales desfavorecidos pasaron a ser objetivos que los poderes públicos tenían que garantizar. Esa prioridad abrió la puerta a la implementación de un amplio repertorio de medidas, tales como: la nacionalización de sectores productivos e infraestructuras considerados estratégicos, la fijación de normas reguladoras de los mercados, el establecimiento de objetivos de política industrial, el suministro de bienes y la prestación de servicios sociales gratuitos o a bajo precio, y la utilización del gasto estatal como complemento de la demanda privada para evitar la desaceleración de la economía[2]. Medidas cuya responsabilidad recaía, según los casos, en los gobiernos nacionales o bien en los gobiernos regionales y municipales.

Esos compromisos asentaron los fundamentos del «estado de bienestar», como se denominó al entramado institucional formado para conseguir tres objetivos simultáneos: mejorar las condiciones de vida, reducir la desigualdad y favorecer el pleno empleo. Un entramado que nació en el cruce de tres elementos fundamentales. Primero, el desarrollo capitalista ofrecía la posibilidad de hacer compatibles esos tres objetivos con los requisitos planteados por el crecimiento económico y la estabilidad social. Segundo, los partidos obreros y los sindicatos

tenían la fuerza que les permitía impulsar la realización de esos objetivos. Tercero, los aires reformistas alcanzaron a los partidos conservadores, en parte inducidos por su temor a que la penuria social alentase desórdenes que favoreciesen el ascenso político de los partidos comunistas obreros y, por extensión, abonasen la influencia de la Unión Soviética. Con resultado, cundió la idea, de inspiración fabiana, de que el Estado debía garantizar como derecho universal un mínimo obligatorio de vida civilizada para todos los miembros de la sociedad. Venía a ser la respuesta en clave de civilización al nefasto rumbo que, en clave destructiva, había tomado el capitalismo en el periodo de entreguerras.

Las medidas con las que el Estado garantizaba los tres objetivos giraban en torno a cuatro líneas de acción. Primera, concesión de prestaciones monetarias a los grupos que carecían de ingresos suficientes (ayudas familiares) y a quienes no trabajaban por motivos de jubilación, desempleo, accidente o enfermedad (percepción de seguros). Segunda, suministro generalizado de servicios públicos, unos gratuitos y universales (educación y sanidad) y otros subvencionados (transporte, cultura). Tercera, promoción de políticas laborales activas para generar puestos de trabajo y elevar la cualificación laboral. Cuarta, políticas fiscales que proporcionasen los ingresos públicos que necesitaba la realización de las medidas anteriores.

Esas líneas de política social se complementaban con las que en el ámbito de las empresas pactaban los sindicatos y las organizaciones patronales. La articulación de los dos tipos de acuerdos contribuía a establecer una demarcación entre lo posible, demandado por los sindicatos y los partidos obreros (reformas laborales y sociales), y lo inadmisible para la oligarquía capitalista y la elite política conservadora (cuestionar la propiedad y el poder de decisión de las empresas). El estado de bienestar se atenía a esa demarcación. Por un lado, se ocupaba de aportar ingresos a grupos sociales que carecían de capacidad para generarlos y garantizaba protección y seguridad al conjunto de los ciudadanos. Por otro lado, garantizaba que el poder económico quedaba al margen de las disputas que pudieran surgir en los conflictos laborales y sociales. A través de la política social, el Estado universalizaba un conjunto de derechos sociales y, a la vez, legitimaba el orden capitalista.

El cumplimiento de ese consenso básico hacía innecesario que los grupos dominantes tuvieran que recurrir asiduamente a la utilización de mecanismos inhibitorios de índole represiva y que los grupos subalternos tuvieran que recurrir a la confrontación permanente para ampliar sus derechos. Un consenso

que era el correlato político de lo que sucedía a escala social, donde las aspiraciones y las formas de vida de la mayoría de los trabajadores daban por buena una estabilidad que proporciona su progreso, identificando este con la mejora paulatina de la capacidad de consumo a través de sus ingresos y de la protección pública a través del Estado. Un convenio o contrato social a todos los efectos.

NUEVAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LOS PARTIDOS OBREROS

Al hilo de los profundos cambios que experimentaban la economía y la sociedad capitalistas se hicieron patentes nuevas oportunidades para que los partidos obreros ganaran influencia social y adquiriesen la fuerza política con la que se convirtieron en los principales protagonistas de los hitos sociales y democráticos logrados durante las décadas doradas. En esa misma medida, la convergencia de aquellos cambios, la fuerza política y las conquistas colocaron a los partidos obreros ante una situación que comportaba nuevas exigencias en dos direcciones fundamentales: redefinir el proyecto y el discurso socialista, y adecuar sus funciones y su vida orgánica al hecho de que el ejercicio de poder político les convertía en componentes del Estado.

Como muestran los apartados posteriores, las trayectorias de los partidos socialistas y comunistas discurrieron por diferentes sendas, condicionadas por factores propios de la escena política en cada país. Pero al mismo tiempo se constata un elenco de elementos comunes que concernían al modo en que los partidos socialistas respondieron a los desafíos planteados, tanto en el caso de los partidos que procedían de la metáfora propuesta por Marx y Engels como en aquellos otros que se habían mantenido ajenos a dicha metáfora. En el caso de los comunistas, esos desafíos afectaron sobre todo a los partidos de Italia y Francia, que fueron los que contaron con cierta fuerza política para incidir en la escena política, mientras que los restantes partidos continuaron parapetados tras la coraza de los dogmas y siguieron condenados a la irrelevancia política.

Entre el viaje de Ícaro y la prevención de Creonte

El primer desafío consistía en redefinir el proyecto y el discurso que cada partido socialista había construido en sus orígenes ante realidades capitalistas que eran muy diferentes a las que existían durante las décadas doradas. Todavía en 1951, la Segunda Internacional, refundada como Internacional Socialista con la participación de los partidos laboristas y socialdemócratas europeos, mantenía las críticas tradicionales a la propiedad privada y a la explotación capitalista, reclamando la construcción de un nuevo orden social basado en la emancipación de los trabajadores. Este era el santo y seña que había dotado de razón histórica al nacimiento de los partidos obreros y que se mantuvo como expresión de los anhelos socialistas mientras los logros conseguidos seguían siendo modestos. De hecho, la mayoría de los partidos retuvieron esas ideas en las declaraciones de sus congresos y ante determinadas conmemoraciones. Pero al mismo tiempo, en el transcurso de las décadas doradas todos los partidos pretendieron reformular sus grandes objetivos y la estrategia para lograrlos. Así lo requería la nueva complejidad que entretejían los círculos virtuosos creados en la dinámica económica, las modificaciones de la estructura social y el escenario resultante de los pactos sociales y los compromisos políticos.

La combinación de esos pactos y compromisos hacía posible compatibilizar la defensa de los intereses de los asalariados con la extensión de los derechos sociales al conjunto de la ciudadanía. Los pactos sociales recogían las demandas de los trabajadores, mientras que los compromisos políticos ampliaban las libertades cívicas y la protección del estado de bienestar con alcance universal. A la vista de esa dinámica política y sindical, la redefinición efectiva que llevaron a cabo los partidos socialistas tuvo una orientación marcadamente táctica, destinada a dar cohesión a los nutrientes de corto plazo en los que basaban su acción reformista.

Su formulación se puede resumir en tres tesis principales. Primera, el desarrollo económico, junto con los derechos laborales y sociales conquistados, promovía una movilidad vertical que transformaba a una proporción creciente de asalariados en «clase media». Segunda, el grado de satisfacción colectiva de esa clase media garantizaba la estabilidad social y política. Tercera, la continuidad del desarrollo capitalista y de la fuerza política del partido socialista permitía seguir ampliando los derechos laborales de los trabajadores, la protección social

de los ciudadanos y las libertades cívicas.

Por tanto, la sustancia del discurso renovado era la existencia de una causa común entre el capitalismo fordista, el progreso social de la mayoría, la fuerza política de los socialistas y los resultados electorales. Siendo así, carecía de sentido mantener el carácter obrerista de las viejas formulaciones, lo mismo que la pretensión de establecer una visión estratégica distinta que la marcada por la trayectoria de ese paulatino progreso social. No había lugar, por tanto, para persistir en cualquier proyecto guiado por metas de transformación que entraran en confrontación directa con los intereses vitales de los grandes propietarios capitalistas.

El segundo desafío venía determinado por la situación creada a raíz de que los resultados electorales hicieran posible la formación de gobiernos socialistas y que las organizaciones obreras ganaran presencia en los principales órganos del Estado. Disponiendo de cuotas relevantes de poder político, pasaban a ser parte constitutiva del Estado. Este desafío mantuvo un feedback con el anterior, ya que el nuevo estatus político condicionó la ausencia de una auténtica reformulación del proyecto y el establecimiento de un discurso alicorto. A la vez, la ausencia de cualquier horizonte de transformación restringía el potencial de la acción política y el funcionamiento de la vida orgánica de los partidos socialistas, pagando por ello sucesivas facturas que se examinan a continuación.

Por un lado, en el centro del pensamiento político de los socialistas anidó una lectura ideológica de la acción política que hasta entonces era patrimonio de los partidos conservadores. Sin un horizonte referencial hacia el que proyectar las reformas en curso, parecía que un partido obrero ya no tenía que nadar contracorriente, ni necesitaba trabajar de manera continuada y capilar a favor de la movilización y organización de los trabajadores; salvo en situaciones puntuales, generalmente por conflictos sindicales, o con manifestaciones ritualizadas que se celebraban por motivos conmemorativos. Ahora se trataba de defender propuestas destinadas a una mayoría social capaz de otorgar triunfos electorales con los que acceder y conservar los resortes del poder político. Consecuentemente, una vez abandonado el espacio social como escenario de confrontación democrática, el parlamento era el único espacio en el que desplegar la pugna política, y el gobierno era el instrumento con el que hacer realidad las reformas. Todo giraba en torno al juego de mayorías y minorías, prefijadas periódicamente por los resultados electorales y modificables mediante cambios de alianzas entre los partidos parlamentarios.

Una lectura cierta pero limitada y nada fecunda desde el punto de vista de las posibilidades de la democracia política, ya que mutilaba la capacidad de acción de los partidos para dotarse de fuerza política y empobrecía el sentido histórico de las conquistas que habían hecho posible la construcción de los sistemas democráticos. La imprescindible función de representatividad que ejercían los partidos en el parlamento, la deseable estabilidad parlamentaria y su papel como espacio central de negociación y entendimiento político, se formulaban como principios excluyentes de otros elementos con los que desarrollar la acción política desde la sociedad. Tal lectura del sistema político aceptaba la existencia de líneas rojas, marcadas principalmente por el poder económico, que quedaban al abrigo de cualquier propósito de transformación, aunque viniera reclamado por la sociedad mediante el ejercicio de las libertades cívicas. Con el paso del tiempo, muchos líderes socialistas que ocupaban cargos gubernamentales, en lugar de apoyarse en los movimientos de trabajadores, fueron dando muestras de temer a dichos movimientos, hasta el punto de que algunos llegaron a tomar medidas de represalia contra ellos.

Buscando el triunfo electoral que diera acceso al poder, los programas electorales de los socialistas se dirigían al caladero de votos de esa clase media. Para lo cual dejaban de lado propuestas económicas, laborales y sociales que interesaban a los asalariados peor situados, cuya defensa podría deshilvanar las costuras de un tejido social tan heterogéneo y redundar en una merma de votos entre ciertos grupos de electores. Para evitar esa situación, la mayoría de las propuestas defendidas por los socialistas ignoraban las demandas que comportaban exigencias hacia los empresarios y tenían como destinatario al Estado, centrándose en la ampliación de los derechos sociales y las libertades cívicas que implicaban al conjunto de los ciudadanos. Cuando lograban el éxito electoral, esas eran las demandas que debían satisfacer los gobernantes socialistas, afrontando como principales restricciones las que imponía la relación ingresos-gastos en el presupuesto estatal y las derivadas de la formación de gobiernos de coalición con partidos liberales u otras fuerzas centristas menos proclives a tales reformas. Cada vez con mayor frecuencia, el acceso a los resortes del poder político dejaba de ser un medio para convertirse en un fin: ocupar espacios estatales, preservarlos y, en lo posible, ampliarlos. El posibilismo de la acción práctica se transfiguraba en posibilismo estratégico.

Por otro lado, la vida interna de los partidos socialistas se vio atrapada entre la profesionalización masiva de sus cargos públicos y el angostamiento de su funcionamiento orgánico. La influencia que ejercían esos cargos había aparecido

tempranamente, décadas antes, cuando los socialistas alemanes, los laboristas británicos y otros comenzaron a cobrar cierta relevancia parlamentaria; pero fue durante las décadas doradas cuando alcanzó una dimensión superior e introdujo nuevos elementos. Cuando pudieron formar gobiernos socialistas o de coalición con cierta continuidad y el número de dirigentes y militantes que participaban en las instituciones estatales pasó a contarse por miles. Una plétora de líderes y cuadros intermedios que dirigían o participaban en los ayuntamientos, los parlamentos y gobiernos regionales, los parlamentos nacionales y los múltiples organismos de la estructura del Estado relacionados con la prestación de servicios sociales, la educación y las empresas nacionalizadas. Cuanta mayor presencia política cobraba el partido y su red de organizaciones conexas, mayor número de cargos ocupaban tentacularmente los organismos de gestión de los diferentes niveles de la administración.

Su actividad política consistía en el ejercicio cotidiano de poder, e incluso cuando estaban en la oposición establecían relaciones próximas con el poder. Gestionaban o controlaban la realización de los asuntos públicos. Tenían proyección social a través de los medios de difusión. Tomaban decisiones sobre la utilización de recursos materiales, humanos y financieros. Poseían información preferencial. Gozaban de ventajas no accesibles para el resto de los militantes y de la población. Negociaban de manera continua con los líderes de los demás partidos, con los dirigentes de todas las instituciones y con los grandes empresarios. Representaban al electorado (parlamentos) o al propio partido (instituciones de gestión), ejerciendo una actividad profesionalizada, que se reproducía y/o se promocionaba en el transcurso del tiempo.

Desarrollaban una función cuyas características y condicionamientos, tanto materiales como subjetivos, generaban hábitos y pautas de pensamiento y de actuación tendentes a incorporar ciertos intereses propios. La continuidad y la promoción de sus posiciones como cargos públicos dependían del refrendo periódico de los votantes a través de las elecciones, pero previamente dependían de su posición en el partido cuando se confeccionaban las listas electorales y se acordaban los nombramientos. Por tanto, la preparación de las elecciones y la promoción interna en los órganos del partido eran requisitos asociados al estatus profesional de esos cargos. Se creaba así un estímulo permanente para que la acción política se decantase a favor de la actividad electoral y para que el funcionamiento orgánico se colocase al servicio de ese objetivo.

La vida interna se llenaba de incentivos que instaban al acomodamiento. La

trama central de los debates y la vertebración jerárquica de los organismos giraba en torno a la preparación de las continuas contiendas electorales en los diferentes niveles territoriales. Los programas y la labor propagandística se formateaban con la exclusiva finalidad de captar votos. Los recursos materiales y humanos tenían idéntico destino. La búsqueda de ideas políticas era sustituida por la repetición cacofónica de consignas pulidas por la búsqueda del éxito electoral, excluyendo la disidencia y la finura del matiz. El abismo que separaba a los dirigentes de la mayoría militante corría paralelo a la difusa distinción entre militantes y votantes, salvo en el hecho de que la misión de los primeros era atraer a los segundos. Pasados los momentos de clímax electoral y de nombramiento de cargos, la vida orgánica se sometía a inercias rutinarias, siempre proclives al conformismo y temerosas a los cambios. Sintomáticamente, la vida orgánica se agitaba y llegaba a suscitar controversias, que a veces derivaban en duros conflictos, cuando se producían importantes derrotas electorales, poniéndose en cuestión el liderazgo del grupo dirigente que hasta entonces había controlado la toma de decisiones.

El ensimismamiento de la acción política, ceñida a la preparación de elecciones y a la actividad parlamentaria, y de la vida orgánica al servicio de esa acción política, pagó otro gran peaje de alto calibre: la incomprensión y la displicencia ante la aparición de nuevas preocupaciones sociales que despuntaron en el transcurso de aquellas décadas. Fue entonces cuando cristalizaron nuevos movimientos contra la desigualdad de género y a favor del pacifismo, la defensa del medio ambiente y los valores contraculturales de sectores juveniles.

En primer lugar, las reclamaciones de las mujeres contra las desigualdades de género fueron alcanzando a sucesivos aspectos de la vida social. Cada nuevo paso adelante y cada nuevo derecho que lograban ponía de manifiesto una realidad basada en la persistente posición subalterna de las mujeres, alimentando nuevas demandas. Sin embargo, los partidos socialistas ignoraron esa palpitante constatación, tanto en su acción política como en su vida interna, quedando al margen del desarrollo que iban adquiriendo los movimientos feministas. En segundo lugar, los requerimientos pacifistas se plasmaban en protestas contra los bloques militares, las prácticas imperialistas, el armamento nuclear y la permeabilidad de la sociedad a ciertas formas de pensamiento propias de la Guerra Fría. Demandas que llegaron a movilizar masivamente a los ciudadanos de distintos países europeos, ante la indiferencia de algunos partidos socialistas y la hostilidad de otros que se alineaban con la política internacional de Estados Unidos; una adhesión similar a la mostrada por los partidos comunistas a favor

de las posiciones de la URSS.

En tercer lugar, hicieron aparición las críticas contra los efectos ambientales que provocaba la masiva emisión de residuos contaminantes debida a la profusa utilización de combustibles fósiles, metales pesados y otros recursos empleados en gran escala por las grandes industrias. Cuestiones que sedimentaron las bases de movimientos ecologistas, sin que los partidos socialistas captaran el significado y la transcendencia que tenían aquellas demandas ambientales. En cuarto lugar, se fue poniendo de manifiesto una creciente insatisfacción generacional por parte de los jóvenes criados al amparo de décadas de crecimiento, mayores ingresos, incremento del consumo, protecciones públicas, derechos sociales y parlamentarismo democrático. Al contrario de la generación previa –para la que muchos de esos elementos habían sido conquistas logradas con esfuerzo y sufrimiento–, para aquellos jóvenes se trataba de elementos de partida sujetos a críticas, por sus defectos e insuficiencias, proponiendo nuevos valores y aspiraciones contra el autoritarismo, la represión sexual, el modelo de familia tradicional, la lejanía social de las instituciones estatales y otros aspectos, que tampoco en este caso los partidos socialistas fueron capaces de considerar.

En suma, cuatro cuestiones que apuntaban a hechos y consecuencias relacionados con la dinámica de producción y consumo, la estructura social y la ideología resultante del desarrollo capitalista de la Edad de Oro. Nuevos focos de disidencia para los que los partidos socialistas no encontraron respuestas adecuadas, como tampoco los comunistas. Peor aún, abundaron las ocasiones en las que esos partidos chocaron con las nuevas demandas suscitadas, saliendo repelidos y quedando aislados del desarrollo que iban teniendo esos movimientos.

A la postre, contemplando en su conjunto la trayectoria de los partidos socialistas en el curso de las décadas doradas, cabe recurrir a la mitología griega para disponer de dos referencias simbólicas con los que dar cuenta de lo sucedido. A tal propósito sirve bien el mito de Ícaro, pudiendo reforzarse con la advertencia lanzada por Creonte. En la tragedia de Antígona, Sófocles pone en boca de Creonte, rey Tebas, una sentencia que habla de la imposibilidad de conocer los sentimientos y el pensamiento de cualquier humano antes de que se le vea ejerciendo el poder y aplicando las leyes.

Por su parte, Ícaro y su padre Dédalo escaparon de Creta mediante unas alas, fabricadas por Dédalo a partir de plumas, cera e hilo que permitían volar a

semejanza de los pájaros. Dédalo le explicó a su hijo que debía levantar el vuelo para que la espuma del mar no mojase sus alas, pues entonces el exceso de peso se lo impediría; pero no debía volar tan alto como para que el calor del sol derritiese la cera, pues entonces se precipitaría al vacío. Una vez fuera de la isla, Ícaro cumplió la primera parte del consejo de su padre pero no la segunda, de modo que tras despegar se fue elevando hasta acercarse al sol, cuya proximidad hizo que las plumas se despegaran y cayese al mar, donde desapareció.

Ambas referencias se prestan a lecturas universales, pero en nuestro caso bien pueden aplicarse al efecto simultáneo ocasionado por la importancia de los derechos logrados, el acrecentamiento de la fuerza política y los resultados electorales de los partidos socialistas. Estos se elevaron hasta acercarse al meollo estelar del poder, pero en ese vuelo de aproximación extraviaron sus señas de identidad: abandonaron de hecho todo proyecto y discurso transformador, derritiendo su acción política y su vida orgánica. Con las alas desvencijadas, su carácter de partidos obreros con aspiraciones transformadoras quedó sustituido por el de gestores acomodaticios a la realidad existente. Comenzó entonces un declive que se ahondaría a partir de los años setenta, precipitándoles al vacío estratégico y político en las décadas posteriores. Cumpliendo el vaticinio de Creonte, el ejercicio de poder, en el contexto de los grandes cambios habidos, puso a prueba a unos partidos que alteraron sus objetivos, sus líneas de actuación y su vida interna. Ciertamente, los hitos alcanzados modificaron ciertos rasgos del capitalismo, pero a su vez ese capitalismo de los años dorados transformó en profundidad a dichos partidos.

El mito de Ícaro también sirve con referencia para el proceso seguido por los partidos comunistas, si bien en su caso el extravío no se produjo por volar alto sino por lo contrario. La pesada coraza de la doctrina con la que mantenían un discurso revolucionario y una acción maximalista carentes de viabilidad, junto con su inquebrantable fidelidad a la Unión Soviética, les incapacitó para ganar influencia social y obtener fuerza política. El oleaje del mar empapó sus alas y nunca levantaron el vuelo, siendo marginales en la escena política. Únicamente los partidos comunistas de Francia e Italia alcanzaron la relevancia política que se expone más adelante, encontrando como respuesta unos sistemas políticos embridados que se blindaron para impedirles acceder al poder estatal.

Signos acentuados de declive ante la quiebra de la Edad de Oro

La crisis económica de los años setenta ahondó las tendencias anteriores, ya que lastró las ventajas que había aportado la Edad de Oro y generó un cúmulo de adversidades para la acción política de los partidos socialistas. El término de «estructural» con el que se califica aquella crisis pretende subrayar que se trató de una fractura completa, una quiebra de los mecanismos que durante más de dos décadas habían impulsado la dinámica económica y habían vertebrado la sociedad. El signo más evidente fue la intensa desaceleración del ritmo de crecimiento. Por el lado de la demanda, expresaba el debilitamiento del consumo y de la inversión privada, unido al menor impulso de la demanda pública y al freno de las exportaciones. Por el lado de la oferta, expresaba el menor incremento de la productividad del trabajo y las dificultades para mantener el nivel de empleo.

Emergieron entonces tres elementos desestabilizadores que parecían desterrados después de décadas de crecimiento estable y prolongado. Primero, el rápido aumento del desempleo. Segundo, la inestabilidad monetaria en forma de creciente inflación y de presiones sobre las tasas de cambio. Tercero, los desajustes del sector exterior en un contexto europeo y mundial que frenaba los intercambios comerciales y fomentaba la aplicación de medidas proteccionistas. Las políticas económicas de los gobiernos, fuesen conservadores o socialistas, no acertaron a solventar esos elementos de desestabilización, poniendo de manifiesto la inoperancia de los instrumentos que se habían empleado durante la Edad de Oro para encarar la nueva situación.

En tales circunstancias, el curso de la crisis fue destruyendo los pilares económicos que habían sostenido la estabilidad social y política de las décadas doradas. El menor incremento de la renta redujo el margen de negociación entre empresarios y asalariados para consensuar el reparto entre beneficios y salarios. Igualmente, ese menor crecimiento de la renta obstaculizó la posibilidad de mantener la presión fiscal con la que recaudar los ingresos para hacer frente a unos gastos públicos en ascenso. Las tensiones monetarias y la elevada incertidumbre internacional eliminaron cualquier vestigio de optimismo y predictibilidad por parte de sindicatos, patronales y gobiernos. De esa manera los círculos virtuosos de la época dorada mutaron en círculos viciosos. La pugna distributiva por el reparto de la renta elevó la conflictividad social y debilitó más el crecimiento económico. El cierre de las expectativas favorables incidió en el mismo sentido. Los límites a la recaudación fiscal obligaron a incurrir en

mayores déficit públicos y/o a frenar los gastos del estado de bienestar. En definitiva, los pactos sociales y los compromisos políticos quedaron cuestionados y, en su lugar, se configuraron nuevos escenarios que instaban a tensionar las fuerzas respectivas, tanto entre los partidos políticos como entre sindicatos y patronales.

Escenarios de tensión para los que no estaban preparados los partidos obreros y, en gran medida, tampoco los sindicatos después de su trayectoria anterior. Además, estaban obligados a intervenir en una situación que en parte desconocían y con la presencia de factores desfavorables para la acción sindical y política. Como había revelado la gran crisis estructural de 1929, distintos elementos cuestionaban la vieja idea de que los momentos críticos avivarían la capacidad movilizadora de los trabajadores. Se pudo constatar que el empeoramiento de las condiciones laborales y sociales no generaba por sí mismo un mayor espíritu de rebeldía y, en cambio, sí ponía en marcha mecanismos inhibidores por parte de los empresarios y de las elites conservadoras para activar los temores a la pérdida del empleo, los desórdenes públicos y a otros aspectos disuasorios de la acción colectiva.

En tal momento crítico, difícilmente podía prender la llama de la rebeldía contra los efectos de la crisis si previamente no existía una dinámica reivindicativa y organizativa a la que aportar un plus de combatividad y de confianza con propuestas viables ofrecidas por los sindicatos y los partidos obreros. A la altura de los años setenta, esa dinámica sólo existía de forma moderada a través del sindicalismo en algunos países, dando como resultado una mayor conflictividad social y unos resultados desiguales en cuanto al logro de mejoras laborales y sociales. En algunos casos, la confrontación llegó a superar las pretensiones de los líderes sindicales, con huelgas y otras acciones que se salían de los cauces negociadores habituales.

Sin embargo, los partidos socialistas habían perdido la capacidad de reprise para llevar a cabo una acción política marcada por la tensión, con la que acumular fuerzas y dotar de confianza a las propuestas contra la crisis. Al contrario, en primera instancia, optaron por mantener una línea de continuidad con sus anteriores políticas económicas y sociales. Después, cuando la persistencia de esas políticas se reveló inviable o contraproducente, bien por su experiencia al frente de gobiernos, o bien escarmentados en la cabeza ajena de gobiernos de centro y de derecha, los líderes socialistas optaron por recoger la lectura de la crisis y las soluciones defendidas por los empresarios y los partidos

conservadores.

Asumieron entonces la retahíla de verdades a medias y de vulgares eslóganes variopintos que, sucintamente, se resumen en los siguientes: sólo se podía repartir si había más crecimiento; los salarios y los déficits públicos eran los responsables de la persistente inflación; la lucha contra la inflación era prioritaria y no distinguía a los colores políticos; la recuperación de los beneficios empresariales era la condición previa para que se generase empleo a través del aumento de la inversión; las políticas de demanda habían fracasado y las únicas viables eran las que se basan en el ajuste monetario y las reformas estructurales de oferta; las reformas estructurales consistían en liberalizar los mercados de trabajo, bienes y capitales; el sostenimiento del estado de bienestar dependía de la moderación salarial y de la implementación de las políticas de ajuste. La carencia de un proyecto y un discurso propios indujo a una reconversión ideológica que abrazó el proyecto característico de los conservadores, precisamente cuando el capitalismo se hallaba atravesando una cruda crisis.

Los daños políticos de ese viraje copernicano comenzaron a ser irreparables. De un lado, cundió el desencanto entre los militantes y los segmentos electorales más politizados y combativos, que se mostraban refractarios a aceptar que sólo cabía aplicar políticas favorables para los propietarios del capital, que cada nueva reforma «estructural» pusiera en peligro los derechos laborales y sociales, y que, en el mejor de los casos, sólo cabía intentar que se produjeran los menores retrocesos posibles. De otro lado, se debilitó el apoyo de aquella clase media como caladero electoral. Construida desde el discurso del progreso paulatino, basado en el aumento de los ingresos, la capacidad de consumo y la protección social, ahora ese conjunto de capas sociales sufría los rigores del estancamiento y afrontaba serias dudas acerca de su futuro, constatando que lo ganado podía ser reversible y que los partidos socialistas gobernantes no ofrecieran ninguna garantía.

El declive estaba llamado a profundizarse teniendo en cuenta las tendencias que iban despuntando en la economía y en la sociedad durante esos años. Las grandes empresas aceleraban su internacionalización mediante la creación de filiales en diferentes países. De esa manera, el proceso económico se hacía transnacional mientras que la negociación de los trabajadores y la actuación de los gobiernos seguía circunscrita al espacio nacional. Los grandes bancos cobraban un protagonismo creciente en las distintas fases del proceso económico, favoreciendo que tanto sus propietarios como las grandes empresas

y los grupos sociales con mayores rentas encontraran operaciones e instrumentos más favorables para elevar la rentabilidad de su riqueza financiera. En un sentido distinto, la sociedad consolidaba un conjunto de inquietudes que daban lugar a los nuevos movimientos antes mencionados, para los que los partidos socialistas y comunistas seguían careciendo de propuestas.

El vacío político creado por los partidos obreros tradicionales abrió la posibilidad de que nuevas alternativas ocuparan ese espacio, apareciendo en escena una variada gama de nuevos partidos comunistas ubicados en la extrema izquierda. Sin embargo, en ningún país ese tipo de propuesta radical llegó a disponer de relevancia social y de fuerza política para condicionar el curso de los acontecimientos. La mayoría de ellos enarboló la doctrina clásica de la metáfora comunista, pero alejada de las formulaciones vigentes en la Unión Soviética, tomando ahora nuevos cánones a través del maoísmo, el trotskismo, el foquismo guevarista u otras referencias. Todos apostaban de manera más o menos explícita por el viejo discurso insurreccional y por una acción política basada en la radicalización de las líneas de actuación promovidas por los partidos comunistas tradicionales. Sin embargo, tanto el discurso como las propuestas radicales de actuación se quedaban en retóricas sin capacidad operativa para propulsar movimientos de cierta entidad. Repetían así la situación vivida en los años veinte, cuando se crearon los partidos comunistas provistos del bagaje leninista con el que enarbolaron la bandera contra los partidos socialistas.

PARTIDOS SOCIALISTAS CON POSICIONES PROTAGONISTAS

Antes de la Primera Guerra Mundial, los partidos socialistas de los países escandinavos (Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia[3]) y del centro del continente (Alemania, Austria y los territorios de Bohemia y Moravia) llegaron a convertirse en la principal fuerza parlamentaria. Después de la Segunda Guerra Mundial, en tres países escandinavos y, por intervalos, en Gran Bretaña y Holanda, los partidos socialistas fueron los principales protagonistas políticos durante el cuarto de siglo de la Edad de Oro.

En Noruega, tras un periodo previo de intensa radicalidad[4], el Partido

Laborista accedió al gobierno por primera vez en 1935 y encabezó un gobierno de concentración con participación comunista en 1945. Desde entonces ganó siete elecciones consecutivas hasta finales de los años setenta[5]. Gobernando en solitario o dirigiendo coaliciones, protagonizó la escena política y la construcción de uno de los estados de bienestar más avanzados. En Dinamarca, la fuerza parlamentaria del partido socialdemócrata fue algo menor, pero también se mantuvo como principal partido y lideró los sucesivos gobiernos de coalición[6] que edificaron otro de los estados de bienestar más importantes. En Holanda, el partido socialdemócrata, refundado como Partido de los Trabajadores, dirigió y participó desde 1946 en sucesivas coaliciones de gobierno[7], siendo el mayor promotor de las reformas y el principal artífice de otro de los estados de bienestar más desarrollados.

No obstante, los dos países en los que los partidos socialistas fueron considerados como referentes reformistas y constructores del estado de bienestar eran Suecia y Gran Bretaña. Como los tres anteriores, sus partidos obreros siempre fueron ajenos a proyectos revolucionarios, fundamentando su línea programática en el logro de las aspiraciones socialistas a través de la profundización de la democracia política bajo regímenes monárquicos parlamentarios. Su acción política contaba con el apoyo de sindicatos con probada capacidad para movilizar y organizar a los trabajadores en la defensa de sus reivindicaciones laborales. Suecia construyó el mayor estado de bienestar que se ha conocido, con el protagonismo absoluto de un partido socialista que se mantuvo en el poder de forma ininterrumpida durante más de medio siglo. Gran Bretaña construyó el suyo con un Partido Laborista cuya presencia en el gobierno fue intermitente.

Hitos sociales de Suecia

El Partido Socialdemócrata Sueco (SAP, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti) se hizo con las riendas del poder político en 1921 y las mantuvo hasta 1976. Tras ganar las primeras elecciones con casi el 40% de los votos, formó un gobierno de coalición que puso en marcha unas primeras coberturas sociales (todavía modestas) y laborales (jornada de ocho horas). Después de renovar su victoria electoral dos veces más, pero sin mayoría parlamentaria, en

1932 obtuvo un triunfo aplastante que le otorgó la mayoría absoluta en el parlamento. Pese a ello, optó por gobernar en coalición con el partido agrario, pactando una política económica frente a la crisis que combinaba las medidas liberalizadoras que satisfacían a las empresas con otras destinadas a crear empleo, elevar la inversión pública, aumentar las prestaciones sociales e incrementar la fiscalidad del Estado para poder realizar esos gastos. Fue así como Suecia se convirtió en una de los escasos países que afrontaron con éxito aquella crisis. Fue también pionero en implementar políticas sociales que garantizaban un primer sistema universal de pensiones, un seguro de accidente que equivalía al 60% del salario, un programa contra la pobreza, subvenciones públicas para crear seguros voluntarios en casos de enfermedad y desempleo y para la construcción de viviendas, además de otras medidas sobre guarderías y ayudas familiares orientadas a fomentar la igualdad de género.

El Pacto de Saltsjöbaden firmado en 1938 entre la confederación de sindicatos (LO, Landsorganisationen) y la organización patronal fue otro paso fundamental hacia la creación de consensos sociales. El pacto y los acuerdos con otros partidos fueron puestos a prueba en las adversas condiciones de la Segunda Guerra Mundial, cuando arreciaban las tensiones entre los distintos actores involucrados en esos compromisos. El SAP mantuvo un gobierno de coalición que acentuó el control del Estado sobre la economía, aplicando medidas para planificar la producción y garantizar el pleno empleo.

Concluida la guerra, el SAP ganó las diez elecciones parlamentarias celebradas entre 1944 y 1972 con porcentajes de voto en torno al 45%, alcanzando un máximo del 50% en 1968. También ganó en 1976, con el 43%, pero entonces una coalición de otros partidos le desbancó del gobierno por primera en 55 años. Durante el periodo de la Edad de Oro, el estado de bienestar sueco alcanzó su mayor desarrollo, siguiendo las pautas de lo que se conoce como el modelo de Gösta Rehn y Rudolf Meidner, economistas que formaban parte de la LO.

El estado de bienestar pretendía lograr el pleno empleo, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y corregir la desigualdad social. Las medidas que aplicó se centraron en cuatro ámbitos: prestaciones monetarias, políticas laborales activas, política fiscal y políticas de solidaridad entre los asalariados. La primera premisa para llevar a cabo esas medidas era el mantenimiento de un crecimiento económico prolongado[8], sin tensiones inflacionistas, que aportara beneficios a las empresas y mejoras importantes para los trabajadores. Una segunda premisa era que se mantuvieran el pacto social negociado por la LO con

la patronal y el compromiso político acordado por el SAP con los partidos de centro[9]. Tales consensos no excluían la pugna política entre los partidos, ni los conflictos laborales, sino que los canalizaban hacia marcos de negociación sometidos a límites recíprocos: las fuerzas del capital aceptaban las reformas sociales y laborales; y las fuerzas obreras aceptaban la propiedad privada y el poder de decisión de los propietarios en las empresas. Ya en los años cincuenta los resultados sociales fueron bastante satisfactorios en la mayoría de las cuestiones en juego, pero aún lo fueron más durante las dos décadas siguientes.

Considerando las prestaciones monetarias, las pensiones de vejez cubrían a la totalidad de los jubilados y fueron elevando notablemente su cuantía, financiándose en parte con ingresos del Estado y en parte con aportaciones de las empresas y los trabajadores; el subsidio de enfermedad cubría a la totalidad de los afectados desde 1955 y su duración se fue ampliando; las prestaciones por accidente se hicieron universales desde 1960; el seguro de desempleo completó su cobertura en los años sesenta, aumentando su cuantía y duración, financiándose con recursos del Estado y con aportaciones de los asegurados; también mejoraron los seguros de viudedad, orfandad e invalidez.

Considerando los servicios sociales, los resultados fueron modélicos a escala mundial en cuanto a la universalización y la calidad de la educación, la sanidad, la atención a las personas mayores y los cuidados infantiles. También lo fue la colección de ayudas en forma de subsidios y préstamos a distintos colectivos sociales, incluyendo el pago de 10 días de vacaciones para las mujeres dedicadas al trabajo en su casa y el programa de erradicación de la pobreza, vigentes desde 1960. El cumplimiento de esos hitos exigía una redistribución de la renta, inaudita antes y después en Europa, efectuada principalmente a través de la progresividad del impuesto sobre la renta y la asignación social del gasto público[10].

Durante los años setenta, el estado de bienestar tuvo que afrontar los retos que planteaban tres elementos: el nivel de los logros conseguidos, los cambios estructurales habidos en la economía y las restricciones derivadas de la crisis internacional. En primer término, los éxitos alcanzados en las décadas anteriores se convertían en el origen de nuevas dificultades por superar. El (casi) pleno empleo implicaba un aumento continuado de la ocupación en el sector público, mientras que las grandes empresas no creaban empleo neto y eran las que registraban grandes aumentos de productividad y beneficios. Surgía así un dilema a la hora de fijar unos criterios salariales comunes para el conjunto de los

trabajadores, ya que se trataba de conseguir que –de manera simultánea– no perjudicasen la productividad de las grandes empresas (si los salarios tendían a una moderación excesiva), ni a los beneficios de las pequeñas y medianas empresas ni a la inflación (si los salarios tendían a alzas excesivas), ni a la solidaridad entre los trabajadores (si los salarios discriminaban conforme a la productividad).

A la vez, las variaciones que registraba la estructura del empleo añadían dificultades al ejercicio de la solidaridad salarial entre los trabajadores y a la negociación de los actores sociales. El rápido aumento de los técnicos y especialistas con mayor nivel de cualificación incentivaba a que esos grupos de empleados buscasen mejorar sus condiciones laborales al margen del resto de trabajadores, fomentando el amarillismo con la creación de sindicatos propios y oponiéndose a que las negociaciones fuesen centralizadas. Los dilemas se tornaban más complejos debido a la rápida expansión de las actividades de servicios y la consiguiente heterogeneidad de las empresas y de las ocupaciones laborales. Surgían así nuevas dificultades para mantener la alta afiliación sindical, la cohesión de los intereses de los trabajadores y el modelo de negociaciones centralizadas. Por otro lado, dado que los criterios de fijación de los salarios aportaban mayores beneficios a las grandes empresas, surgieron núcleos obreros dispuestos a sostener conflictos laborales al margen de los dirigentes sindicales, promoviendo una oleada de huelgas no oficiales, sobre todo a finales de los sesenta, en disconformidad con los acuerdos vigentes.

La desaceleración de la productividad y el desorden monetario provocado por la crisis internacional hicieron que aflorasen tensiones inflacionistas y se crease un clima de incertidumbre que perjudicaba a la negociación de los pactos sociales y también a otra de las piezas claves del consenso: el presupuesto estatal. El menor aumento de los ingresos personales hacía más complicado seguir elevando la presión fiscal con el fin de incrementar la recaudación, lo que sin embargo era necesario para sostener el incremento de los gastos públicos. La otra vía, por la que se optó, era aumentar las cotizaciones a la seguridad social, pero con ello se afectaba a la creación del empleo privado y al gasto público, ya que la administración pública ocupaba a casi el 30% del empleo total.

No obstante, a pesar del cúmulo de novedades y dificultades presentes, el partido socialista mantuvo sus posiciones críticas hacia el sistema capitalista y conservó su proyecto de sociedad igualitaria basada en la democracia económica. El compromiso con los objetivos del estado de bienestar fue ratificado con nuevos

aumentos de las prestaciones monetarias, los servicios públicos, el empleo público y la fiscalidad. El esfuerzo desplegado durante la primera mitad de los setenta quedó bien reflejado en 1976 cuando, aunque el SAP quedó fuera del gobierno, las políticas previamente establecidas hicieron que los resultados registrados siguieran mejorando en casi todos los ámbitos del estado de bienestar.

Fue también en aquel momento cuando una pequeña fracción del movimiento sindical suscitó controversia acerca de una cuestión que los compromisos políticos y los pactos sociales habían dejado de lado. La propuesta consistía en profundizar la democracia económica adentrándose en dos territorios intocables: el derecho de propiedad y las decisiones estratégicas de las empresas, que hasta entonces se consideraban competencias exclusivas de los propietarios y directivos de las empresas.

Desde tiempo atrás, las empresas con más de cien empleados habían ido creado varios «fondos de los asalariados». Su origen estaba en el intento de evitar el aumento excesivo de los salarios de los trabajadores de esas empresas (con mayores aumentos de productividad) para mantener la solidaridad entre los asalariados. Se acordó que el 1% de las nóminas no se destinaría a la remuneración, sino a la formación de diversos fondos gestionados por los propios trabajadores de esas empresas de manera colectiva. La nueva propuesta de esos núcleos de la LO consistía en incrementar la dotación destinada a esos fondos con el propósito de utilizarlos para ir adquiriendo partes del capital accionarial de las grandes empresas. De esa manera, la propiedad y, como consecuencia, la toma de decisiones irían perdiendo su carácter privado y tendrían un creciente alcance colectivo a favor de los trabajadores.

La propuesta fue rotundamente rechazada por la coalición de centro-derecha que gobernaba en 1976, mientras que encontró un apoyo más bien tenue en los dirigentes del SAP. De hecho, la mayoría de esos dirigentes se iba decantando hacia posiciones políticas tendentes a aceptar «la nueva realidad económica». Cuando en 1982 el SAP recuperó el gobierno, se limitó a dictar un conjunto de normas generales (ya que la utilización de los fondos figuraba en su programa electoral), sin apostar por un desarrollo práctico de la democracia económica. En consecuencia, la propuesta quedó aparcada y no tuvo materialización. El interés de recordarla reside en que aquella alternativa, favorable a la colectivización de la propiedad de las grandes empresas a través del control directo de los trabajadores, fue la única que llegó a formular un partido socialista que contaba

con gran fuerza política –que no mantenía un discurso revolucionario– para transformar el poder económico de las empresas.

Logros y claroscuros del laborismo británico

Cualquier relato sobre la llegada del Partido Laborista al gobierno en 1945 va acompañado habitualmente de algún comentario referido a la sorpresa que supuso su abrumadora victoria electoral sobre el Partido Conservador de Winston Churchill, que había sido el jefe del gobierno de concentración que afrontó el masivo bombardeo de la aviación alemana durante la guerra. Un segundo comentario suele ir asociado al vínculo del gobierno laborista con el potente estado de bienestar construido en Gran Bretaña a partir de aquella fecha. Para contextualizar ambas alusiones es necesario destacar la presencia laborista en aquel gobierno de unidad nacional.

En 1942, el laborista Ernest Bevin, sindicalista convertido en ministro de Trabajo, encargó un primer informe dirigido por William Beveridge, quien era un liberal de izquierda con influencias fabianas[11]. El informe planteaba una idea central: ofrecer ciertas seguridades a los trabajadores frente a los vaivenes de la vida y la economía (accidentes, enfermedades, desempleo, vejez) era una cuestión de derechos sociales y no un ejercicio altruista de caridad propio de la beneficencia pública. El informe proponía un diseño de cuotas aportadas con regularidad periódica para obtener los recursos financieros que permitieran cubrir esos seguros sociales. Dos años después un segundo informe dirigido asimismo por Beveridge apuntaba ya en su título, Trabajo para todos en una sociedad libre, cuál era su objetivo: vincular los derechos sociales de los ciudadanos con una política económica cuya prioridad fuese mantener el pleno empleo. El contenido sustancial del informe y sus propuestas prácticas se basaban en el convencimiento de que las reformas sociales ejercerían una influencia positiva en el crecimiento de la productividad laboral y en el funcionamiento general de la economía.

La combinación de políticas económicas y sociales quedó recogida en el programa electoral con el que los laboristas obtuvieron casi 12 millones de votos (49,7% del total) y 393 diputados, esto es, 239 más de los que tenían[12]. El

gobierno, dirigido por Clement Attlee, se ocupó de dotar de fuerza legal y viabilidad económica al reconocimiento de los derechos sociales, considerados como derechos ciudadanos de carácter universal, mediante sucesivas leyes que entre 1946 y 1948 crearon la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud y otras instituciones complementarias. La política económica basada en el pleno empleo condujo a la nacionalización de sectores estratégicos de la economía: minas, energía eléctrica, industria siderúrgica, ferrocarriles, telégrafos, radio y televisión, transporte por carretera de larga distancia y Banco de Inglaterra.

Los derechos reconocidos a todos los ciudadanos británicos abarcaban una colección de medidas referidas a distintos seguros asistenciales (enfermedad, accidente, invalidez, maternidad, paro, viudedad), pensiones de jubilación, ayudas a familias necesitadas y otras subvenciones como la destinada al acceso a vivienda para hacer frente a la enorme destrucción de edificios causada por los bombardeos alemanes. El Servicio Nacional de Salud proporcionaba asistencia integral y gratuita (incluyendo ya entonces la adquisición de gafas y la odontología), para lo cual el ministro Aneurin Bevan tuvo que librar una dura pugna con las asociaciones médicas profesionales. Algo similar ocurrió con la generalización del sistema educativo como servicio público fundamental contra el interés de las jerarquías religiosas y otros grupos privados[13].

La otra cara de la moneda consistía en considerar las implicaciones económicas de aquellas medidas. Para financiar la política social se necesitaba una política fiscal profunda, basada en la progresividad de la tributación según los niveles de ingresos. La vinculación de la política social con la política laboral hacía necesaria una amplia actuación del gobierno en temas laborales, debido a que la firma de pactos sociales centralizados a escala estatal no ocupaba un lugar relevante en la tradición de las trade unions. La preferencia de estas por las negociaciones locales –a nivel de empresas, ramas o territorios– conllevaba el doble peligro de generar presiones inflacionistas si las alzas salariales eran excesivas y de fomentar la disparidad salarial entre trabajadores si las alzas se correspondían con los incrementos de productividad.

El panorama económico presentaba dos restricciones más y también un factor de alivio. La primera restricción era la debilidad de la libra esterlina como consecuencia del volumen de deuda exterior acumulada durante la guerra y de los derroches que seguía ocasionando el mantenimiento de un imperio británico en declive. La segunda restricción era el fracaso de las tentativas llevadas a cabo para potenciar las industrias que presentaban estructuras productivas obsoletas y

soportaban la presión competitiva de las empresas estadounidenses. El factor de alivio era la ayuda financiera recibida del Plan Marshall con la que se podían adquirir alimentos, materias primas y equipos industriales para relanzar la economía. Como contrapartida, el gobierno estadounidense exigía el ingreso en la OTAN y el férreo alineamiento político y militar con las posiciones internacionales norteamericanas.

Con la política social en marcha y sin que la economía mostrase signos favorables de importancia, las elecciones celebradas en 1950 volvieron a dar la victoria a los laboristas, pero con una ajustada mayoría de sólo cinco escaños. Intentando mejorar esos resultados, el Partido Laborista convocó nuevas elecciones y, para su sorpresa, perdió la mayoría parlamentaria. La derrota volvió a repetirse en las dos elecciones siguientes, de manera que entre 1951 y 1964 gobernaron los conservadores y sus aliados, liderados primero por Churchill y después por MacMillan, con resultados cada vez más favorables[14]. La paradoja fue que durante casi década y media los conservadores gobernaron bajo el marco socioinstitucional previamente conformado por los laboristas, de modo que la presión de los sindicatos y la fuerza política que mantenía el Partido Laborista limitaron los retrocesos que pretendían llevar a cabo los conservadores.

La segunda etapa laborista empezó en 1964 y terminó en 1970, otra vez sin que concluyese la legislatura. Gobernaron en solitario con dos mayorías parlamentarias, la primera leve y la segunda más holgada[15], ambas bajo el liderazgo de Harold Wilson. Dos de sus principales características enlazaban con la primera etapa: la apuesta por profundizar la política social, incluyendo el planeamiento urbanístico de los territorios, y la convicción keynesiana en el empuje de la demanda pública para sostener la dinámica de crecimiento económico. También se mantuvieron las dos restricciones básicas: el declive de una parte de la industria, tras fracasar diversas tentativas de modernización, y la debilidad monetaria interna (inflación) y externa (tasa de cambio). Pero entonces ganaron presencia tres elementos que fueron dando cada vez más crédito a la tesis de que las políticas laboristas habían agotado su potencial de reformas si no eran capaces de modificar los planteamientos.

En primer lugar, el aumento del gasto público que comportaba el estado de bienestar hacía necesario que se elevara la presión fiscal. A ello se oponían tanto los grupos sociales privilegiados (lo cual no era novedoso porque nunca estuvieron de acuerdo con la progresividad de los impuestos ni con el destino de

los gastos) como los sectores obreros con mejores salarios, los profesionales urbanos con mayores ingresos y los propietarios pequeños y medianos. Esto sí era novedoso porque, a cambio de los impuestos, tenían acceso a servicios y protecciones con los que nunca hubieran soñado. Sin embargo, sucumbiendo al relato conservador, en aquel momento pasaron a considerar que esas prestaciones eran costosas si requerían de nuevas subidas de impuestos. El relato tachaba como perjudicial los impuestos, la intervención del Estado en la economía y, de manera paulatina, la protección que se daba a los núcleos sociales más desfavorecidos. La contrapartida a esa resistencia hubiera sido una mayor presencia social y política de las fuerzas favorables a la política social, pero hacía tiempo que el Partido Laborista había perdido credibilidad y carecía de capacidad movilizadora.

De hecho, el segundo gran problema del gobierno laborista era el empeoramiento de sus relaciones con los sindicatos, en particular con las trade unions de las grandes industrias tradicionales. Ramas como siderurgia, minería, naval y fabricación de maquinaria y material de transporte presentaban fuertes síntomas de declive, concentraban bastante empleo y soportaban la creciente competencia exterior. Al no apreciar que el gobierno y los empresarios presentaran alternativas viables de reestructuración, los sindicatos optaron por defender el empleo y presionar por mejoras salariales y laborales que difícilmente sintonizaban con el debilitamiento productivo que sufrían esas industrias. La imposibilidad de pactos entre sindicatos y empresarios hizo que afloraran los conflictos, algunos de alta intensidad, aumentando las huelgas y otras formas de presión, con o sin dirección de los sindicatos, lo que forzó la radicalización de estos para evitar fugas descontroladas. Sin pactos sociales y con mayor conflictividad laboral, el gobierno de Wilson recurrió a medidas de autoridad, incluyendo las represivas, para poner en marcha su política económica. Su principal decisión fue aplicar una política de rentas uniforme, de alcance nacional, llegando a decretar la congelación de salarios y a poner límites a la negociación colectiva. Medidas prácticas de corto plazo, que contribuyeron a acentuar su aislamiento político con respecto a un gran número de trabajadores que formaban parte de su base social.

La tercera gran dificultad surgía de la necesidad de encontrar soluciones para financiar los crecientes déficits del sector exterior, aceptando nuevas rutas (indeseadas) que no lograron solventar los problemas derivados de la inestabilidad de la libra. La pretensión de que la demanda interna mantuviera su dinamismo, a pesar de las evidentes debilidades de la industria, sólo era factible

si se facilitaba la entrada de capital extranjero para financiar el desajuste exterior; mediante la entrada de inversiones productivas –sobre todo de compañías estadounidenses– y financieras. Como los movimientos financieros internacionales estaban severamente restringidos por los acuerdos de Bretton Woods, el modo de favorecer la entrada de capital financiero era recurriendo a argucias ideadas por los bancos de la City londinense utilizando sus sucursales localizadas en las islas del Canal de la Mancha, que eran «paraísos» al margen de las normas legales y fiscales. El gobierno laborista aceptó ese entramado financiero porque facilitaba la entrada creciente de capital, cubriendo el déficit de la balanza por cuenta corriente y permitiendo que la demanda interna siguiera creciendo.

La ausencia de otras propuestas de política económica que fueran más acordes con los intereses de los trabajadores hizo que aumentaran los desencuentros del gobierno con los sindicatos, a la vez que ampliaba la brecha con los segmentos obreros mejor remunerados y con otros empleados y profesionales urbanos[16]. La situación política se hizo más complicada cuando se avivó el conflicto de Irlanda del Norte, librado entre la mayoría católica, que contaba con la fuerza militar del IRA, y la minoría protestante, apoyada por el ejército británico.

La amalgama de errores y dificultades condujo a la derrota laborista en las elecciones de 1970[17], dulcificada por el hecho de que los conservadores al frente del gobierno tampoco fueron capaces de sacar del atolladero los problemas más apremiantes. De hecho, el gobierno de Edward Heath mantenía el clásico discurso conservador pero retuvo el objetivo del pleno empleo como guía principal de la política económica, continuó otorgando financiación pública a la industria y patrocinó nuevas leyes que elevaban la intervención del gobierno en la economía. Los síntomas de la crisis económica internacional y el agudo enfrentamiento con los mineros en huelga provocaron la caída del gobierno de Heath y la celebración de elecciones en 1974. La mínima victoria lograda por los laboristas hizo preciso que se convocaran nuevas elecciones, como preludio de años de inestabilidad política que se prolongaron hasta el final de la década[18].

El gobierno laborista cambió el liderazgo de Wilson por el de James Callaghan, todavía más inclinado hacia posiciones centristas. Fue Callaghan quien definitivamente abandonó la aplicación de políticas keynesianas basadas en el pleno empleo. Enredado en el dilema de cómo hacer frente al aumento simultáneo de la inflación y el desempleo, en 1976 recurrió a solicitar un préstamo del FMI para estabilizar la libra, que le fue concedido con la condición

de que aplicase una política económica contraria a la que había prevalecido durante casi treinta años. Inició entonces una política centrada en la estabilidad monetaria que priorizaba la lucha contra la inflación por encima de cualquier otro objetivo, lo que supuso la contención del gasto público, el retroceso de la protección social y la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios.

Era la política que correspondía al discurso liberal-conservador aplicada por un gobierno laborista, lo que originó nuevas disputas con los sindicatos y polémicas internas con el ala izquierda del partido[19]. Se allanaba así el camino para una próxima victoria conservadora, cuya nueva líder, Margaret Thatcher, estaba dispuesta a demostrar cómo ser consecuente con un programa de gobierno profundamente contrario a los sindicatos, a las reformas sociales y a las funciones que venía desarrollando el Estado[20]. Ahora sí, desde 1979, el escenario político cambiaría de forma drástica, pasando a ser un precedente de referencia con grandes repercusiones a escala europea y mundial.

PARTIDOS SOCIALISTAS CON POSICIONES INFLUYENTES

Bélgica y Austria fueron países cuyos estados de bienestar se construyeron cuando sus respectivos partidos conservadores ostentaron mayorías parlamentarias y gobernaron en solitario o en coalición con los socialistas y otras opciones políticas. En Bélgica, la primacía correspondió al Partido Social-Cristiano al frente de coaliciones con los otros dos partidos relevantes, liberal y socialista. Con cuotas electorales del 30-40%, el Partido Socialista no tuvo posibilidad de dirigir el gobierno, pero sí alentó y condicionó muchas de las reformas, mientras que el Partido Comunista mantuvo inicialmente una cierta fuerza política, adquirida en la resistencia contra el ejército alemán durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

En Austria, el Partido Socialista (SPÖ) había sido la mayor fuerza política después de la Primera Guerra Mundial y llevó a cabo importantes medidas laborales y sociales[21] hasta que la jerarquía católica lideró la formación de una coalición de fuerzas con la exclusiva finalidad de desplazar a los socialistas del gobierno. La coalición derechista dominó hasta el viraje de ultraderecha que puso el país en manos de la Alemania hitleriana[22]. Como en el caso belga, tras

la Segunda Guerra Mundial, el SPÖ participó como minoría en gobiernos de coalición liderados por los conservadores, con porcentajes de voto que raramente bajaron del 40% hasta 1966. Desde ese año, los socialistas encabezaron la coalición de gobierno (con liberales) y después, entre 1971 y 1983, lo hicieron en solitario, bajo la dirección de Bruno Kreisky, con porcentajes de voto por encima del 50%. En esos años, además de fortalecer el estado de bienestar, los socialistas llevaron a cabo importantes reformas, como las que fijaron las normas reguladoras de los mercados y la participación en la gestión de las empresas. La evolución política de Alemania fue similar. Los socialistas pasaron a gobernar después de una década y media de dominio conservador.

Binomio democristiano y socialdemócrata alemán

Alemania salió de la Segunda Guerra Mundial en las peores condiciones posibles: dividida territorialmente y sometida a las cuatro potencias aliadas, con la economía destruida, sin otras instituciones políticas que las creadas por los nazis y prohibidas por los vencedores, con una población hambrienta y con los anhelos nacionalistas sometidos a otra humillante derrota. Cuando en 1949 se consumó la división en dos países, la República Federal hubo de construir un régimen político parlamentario sin otro precedente que la débil y breve experiencia de la república de Weimar, con una elite económica, política y funcionarial que mayoritariamente habían apoyado o colaborado con el régimen nazi. El reto, en palabras de Habermas, era construir una democracia sin demócratas. A lo que cabría añadir que con unas grandes dosis de amnesia colectiva para dejar de lado las responsabilidades y los recuerdos de la guerra.

Por suerte para la RFA, en el gobierno de Estados Unidos no triunfaron las tesis defendidas por el Secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, y los jefes militares que estaban dispuestos a imponer unas condiciones que hicieran de ese país dividido un territorio agrario, sin gran industria ni armamento. El enfrentamiento EEUU-URSS convenció a los líderes norteamericanos de la necesidad de contar en el centro del continente europeo con un país de notables dimensiones, que tuviera una economía fuerte y un régimen político estable y alineado con sus posiciones antisoviéticas. El destino de los recursos proporcionados por el Plan Marshall y la integración en la OTAN fueron decisiones tomadas por los

funcionarios estadounidenses que pilotaron la creación de la RFA, como también lo fueron los primeros pasos para instaurar un régimen republicano parlamentario.

En el plano político, la decisión crucial fue adoptada en 1945 por los representantes del gobierno de Estados Unidos y del Vaticano: poner en marcha un partido demócrata-cristiano, la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Tomaron como precedente a Zentrum, el partido católico que existía desde los tiempos de la monarquía imperial, y auparon como líder a Konrad Adenauer, un miembro de ese partido que había sido represaliado por los nazis. Una vez formada la CDU y su aliada en Baviera, la Unión Social Cristiana (CSU), ambos partidos recibieron el apoyo económico y político norteamericano, a la vez que el apoyo social e ideológico de las jerarquías católicas y protestantes. Su principal dificultad consistía en convencer al electorado de que el SPD era la viva representación del comunismo y del peligro soviético, cuando se trataba de un partido con credenciales históricas que nada tenían que ver con tales adherencias; además, a las elecciones concurría el partido comunista (KPD), que sí se alineaba con Moscú, pero también presentaba un historial de lucha y represión bajo el régimen nazi. El factor decisivo para favorecer a la coalición CDU-CSU fue la introducción de un sistema electoral que asignaba los diputados mediante mayorías relativas en circunscripciones uninominales, reservando un pequeño porcentaje para ser adjudicado de forma proporcional según los resultados totales[23].

Las primeras elecciones al parlamento (Bundestag), celebradas en 1949, proporcionaron una mayoría ajustada a la coalición CDU-CSU frente al SPD, quedando lejos los otros dos partidos que alcanzaron una cierta representación, los liberales (FDP) y los comunistas (KPD)[24]. Sin mayoría parlamentaria, la coalición CDU-CSU tuvo que aliarse con el FDP y con otro partido centrista (DP) para formar gobierno. Una operación similar a la que tres años antes se había realizado en Italia, según se expone más adelante, y cuyo éxito se reprodujo en las tres siguientes elecciones, con Adenauer al frente de la CDU y del gobierno hasta que se retiró en 1963. Un nuevo ajuste del sistema electoral[25] redujo drásticamente los partidos presentes en el Bundestag de 17 a 6 en 1953, a 4 en 1957 y a 3 desde 1961. Además, el KPD fue prohibido en 1956 a pesar de que desde tres años antes carecía de representación parlamentaria. La coalición CDU-CSU cosechó el 45-50% de los votos en las cuatro elecciones celebradas entre 1953 y 1965, lo que le reportaba mayorías ajustadas en el Busdestag, que ampliaba al 60-70% mediante alianzas con el FDP y/o el DP.

Fue, por tanto, bajo el dominio político de la democracia cristiana cuando se forjó el potencial económico y se configuró la estructura social de la RFA. La economía se basaba en los pilares del denominado «cuadrado mágico»: rápido crecimiento, pleno empleo, mínima inflación y máxima estabilidad del marco. Se desarrolló entonces una fortísima estructura industrial, altamente tecnificada y con elevados aumentos de productividad; forjada a través de un tejido empresarial que combinaba la fortaleza de grandes compañías, cada vez más importantes a escala mundial, con un amplio número de empresas de tamaño medio que contaban con una gran cantidad de obreros cualificados. La denominada «sociedad de los tres tercios» mostraba una segmentación con amplia movilidad vertical. El notable aumento de los salarios, la mejora de las condiciones laborales y las políticas sociales dotaron a la mayoría de los trabajadores de una creciente capacidad de compra y una extensa red de coberturas públicas a cargo del estado de bienestar.

Esas características marcaban el perímetro dentro del cual se desplegaba la fuerza de los movimientos laborales y sociales, que los potentes sindicatos obreros trasladaban a los pactos sociales con los empresarios y que el partido socialista defendía en el Bundestag y aplicaba en los länder que gobernaba. Los cauces reivindicativos no superaban ciertos límites, de modo que las demandas laborales no podían dañar la rentabilidad de las empresas, en algunos de cuyos comités de gestión participaban los sindicatos; mientras que las demandas sociales no podían dar lugar a una ampliación del gasto público si su financiación amenazaba con elevar el déficit presupuestario o requería subidas importantes de impuestos. Eran las reglas de juego fijadas por lo que se calificó como «capitalismo renano» o también «ordoliberalismo», con referencia a la escuela de pensamiento impulsada desde los años treinta por teóricos como Walter Eucken, defensores de la creación de un «Estado social» que diera prioridad a dos objetivos simultáneos: el crecimiento económico sin inestabilidad monetaria y la cohesión social. El Estado debía jugar un papel muy activo, pero no lo haría mediante intervenciones que alterasen el funcionamiento de los mercados, sino con políticas sociales y otras medidas favorables a ese funcionamiento.

La escena política mostró síntomas de agotamiento al cabo de una década y media, tras las elecciones de 1965, cuando los liberales del FDP abandonaron el gobierno de coalición con CDU-CSU. La economía atravesaba una breve recesión que dificultaba las negociaciones laborales y acentuaba las demandas sociales. La coalición CDU-CSU contaba con el 49,5% de los escaños, pero su

soledad política era una novedad con respecto a la trayectoria previa. Los dirigentes democristianos valoraron que se trataba de una situación transitoria y propusieron al SPD formar una Grosse Koalition para finalizar la legislatura. Hasta entonces, el SPD había logrado un apoyo menor que los democristianos, pero recorriendo una senda ascendente[26]. La gran coalición hizo que el líder socialista, Willy Brandt, fuera vicecanciller, y que otros dirigentes socialistas estuvieran al frente de ministerios importantes, como el de Finanzas.

Aquel breve gobierno se convirtió en una fuente de importantes novedades, auspiciadas por el clima social del momento. Primero tuvo que afrontar el escollo que supuso el nombramiento de Kurt Kiesinger como canciller, ya que al finalizar la guerra su pasado nazi le había llevado a un campo de internamiento. La mayoría parlamentaria de la CDU hizo valer ese nombramiento, pero seguidamente la pretensión de dotar al canciller y a su gobierno de atribuciones especiales para hacer frente a la situación, juzgada de emergencia, rememoró el tiempo en que la «ley habilitante» fue utilizada por el partido nazi como señuelo para acabar con la república de Weimar. Las protestas sociales contra el nombramiento y la solicitud de atribuciones especiales se sumaron a otras de quienes criticaban la continuidad de las bases militares norteamericanas en territorio alemán dos décadas después del final de la guerra. Las mayores movilizaciones corrían a cargo de sectores juveniles, sobre todo universitarios, y de núcleos radicales que criticaban la colaboración del SPD, dando forma al Movimiento de Oposición Extraparlamentaria (APO).

El gobierno CDU-CSU-SPD siguió desarrollando la política social que fortalecía el estado de bienestar y aprobó normas que dotaban a los sindicatos de atribuciones en los órganos de decisión de las empresas. Pero, al mismo tiempo, fiel a los criterios del ordoliberalismo, el gobierno aprobó una ley que obligaba a moderar los salarios y limitó la capacidad de gasto de los gobiernos regionales. Esas decisiones favorecieron el acercamiento entre la APO y ciertos sectores obreros, elevando el tono de la contestación social y contribuyendo al desgaste político de la Grosse Koalition. El clima político alcanzó efervescencia cuando entró en funcionamiento el mecanismo de represión-reacción, de modo que cada medida coercitiva del gobierno y de las autoridades universitarias contra las protestas servía de estímulo para que más gente se sumara a los movimientos y para que subiera el tono de radicalidad de los objetivos y de las acciones emprendidas. En la primavera de 1968 la sección juvenil del SPD, los jusos, y su sindicato de estudiantes se sumaron a los movimientos de protesta. La dirección del SPD radicalizó su posición en sentido contrario: expulsó del partido a los

líderes juveniles y se colocó frontalmente contra esos movimientos, convirtiéndose en el baluarte del sistema parlamentario que cuestionaban los movimientos en la calle[27].

Todo apuntaba al final de un camino que cerraba el periodo de dominio democristiano, para el que se había preparado el SPD desde el congreso de Bad Godesberg de 1959. El acuerdo más llamativo de aquel congreso fue la decisión de abandonar el marxismo como referencia ideológica, pero esa decisión estuvo acompañada de dos cambios con mayor transcendencia práctica. De un lado, se produjo un vuelco radical en la formulación de los principios básicos que hasta entonces habían definido al partido como una organización obrera cuyo objetivo era construir una sociedad socialista. De otro lado, se reorientó la línea política fijando como objetivo central la consecución de una mayoría parlamentaria que le condujese al gobierno. Uniendo los dos cabos, en Bad Godesberg el SPD acordó transformar el proyecto, el discurso y la acción política, colocando como finalidad el acceso al gobierno. Pese a las retóricas que caracterizaban a los documentos del partido y a las declaraciones de sus líderes, en el aire quedaba sin precisar la respuesta concreta al interrogante de qué harían cuando tuviesen el gobierno.

La respuesta práctica llegó a raíz de las elecciones de 1969. Con menos votos y menos escaños que CDU-CSU, el SPD ofreció a los liberales la formación de un gobierno de coalición presidido por Willy Brandt[28]. La precaria mayoría se vio más mermada cuando varios diputados liberales se pasaron a la CDU como protesta por la política de colaboración del gobierno de Brandt con los gobiernos de Alemania Oriental y la URSS. Esa realpolitik supuso un cambio muy significativo de la política exterior alemana, mientras que en la situación interna la característica sustancial fue la continuidad con las políticas económicas y sociales de los gobiernos democristianos, con la salvedad del impulso que cobró el reconocimiento de ciertos derechos referidos a las libertades personales (matrimonio, familia y otras) y la elevación de los niveles educativos obligatorios y gratuitos; mientras proseguía fortaleciéndose el estado de bienestar.

El SPD logró la mayoría parlamentaria en las elecciones de 1972, mejorando su cuota de votos y el número de diputados, en detrimento de CDU-CSU, pasando a ser la primera fuerza política del Bundestag. El margen de actuación del nuevo gobierno de coalición fue mayor gracias a que su socio liberal también mejoró los resultados, a pesar de la escisión que había sufrido[29]. Aquel fue el mejor

momento político de los socialistas, pues en adelante no cesarían las malas noticias hasta el final de la década[30]. Brandt dimitió en 1974 porque su principal colaborador era un espía de la RDA. La economía desaceleró su crecimiento y aumentó la inestabilidad monetaria debido a la influencia de la crisis internacional. Los sindicatos ampliaron sus márgenes de codecisión en las empresas, pero el parlamento restringió su capacidad de negociación a gran escala para evitar que se desarrollasen movimientos de alcance nacional. El grupo terrorista Baader-Meinhof, surgido de núcleos minoritarios de la APO, entró en la escena política merced a una serie de asaltos a bancos, secuestros y asesinatos. El gobierno impuso unos decretos represivos (berufsverbot) que lesionaban las libertades de asociación, manifestación y expresión de colectivos disidentes que nada tenían que ver con los grupos terroristas, sino que se aplicaban a quienes protestaban contra las bases militares norteamericanas, las armas nucleares, las agresiones al medio ambiente y el autoritarismo político y social.

La coalición SPD-FDP prosiguió hasta las elecciones de 1980. Dos años después, los liberales acordaron deshacer el camino abierto en 1966 y abandonaron el gobierno con el SPD para volver con CDU-CSU. Terminaba así una década y media de mayoría socialista-liberal con mayores similitudes que diferencias respecto de la época dominada por los democristianos en lo concerniente a la orientación de la economía, la vida social y la política, salvo lo relativo a la política exterior hacia la URSS-RDA. La política económica del canciller socialista Helmut Schmidt, sucesor de Brandt, mantuvo el compromiso prioritario con la estabilidad monetaria, siguiendo las directrices marcadas por el Banco Central. El final del periodo socialista puso claramente de relieve el agotamiento de la estrategia de un partido, desprovisto de proyecto y de discurso, que había fiado las cartas de su acción política al acceso al gobierno. Logrado ese objetivo, su actividad se había limitado a gestionar las condiciones de cada momento, carente de cualquier afán de transformación y sometido a la restricción adicional que implicaba gobernar en coalición con un partido liberal que era un firme valedor de los poderes económicos y se mostraba renuente a la hora de aprobar reformas sociales.

PARTIDOS COMUNISTAS INFLUYENTES PERO VETADOS PARA GOBERNAR

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial sólo algunos partidos comunistas ejercían una moderada influencia social, pero su fuerza política era escasa y su presencia parlamentaria era modesta. Sin embargo, al concluir la guerra y como consecuencia de su comportamiento durante el conflicto, varios de esos partidos habían acumulado una notable relevancia social y un buen potencial político. Lo cual desató la alarma de los grupos económicos y políticos dominantes, dispuestos a impedir que esa fuerza pudiera traducirse en un control de los órganos del Estado. El caso extremo y más temprano fue el de Grecia, donde la exclusión de Partido Comunista (KKE) se produjo por procedimientos militares y con la decisiva intervención de Gran Bretaña y Estados Unidos[31]. Los dos casos más destacados correspondieron a los partidos comunistas de Francia e Italia, que se exponen a continuación, apuntando también la fuerza inicial que tuvieron los comunistas en Finlandia[32].

El PCF ante el dominio conservador-gaullista

El entreguismo del gobierno francés al ejército alemán hizo que el peso de la resistencia armada contra la invasión recayese en organizaciones civiles entre las que destacó la acción partisana de los comunistas. El PCF presentaba tres ventajas principales. Primera, capacidad para organizarse en la clandestinidad e incorporar a un número creciente de resistentes. Segunda, convicción ideológica y voluntarismo doctrinal, creyendo que así aceleraba el camino hacia la revolución socialista. Tercera, ausencia de vínculos con las clases dominantes que pudieran fomentar la tibieza de sus posiciones. Ese bagaje le proporcionó un creciente reconocimiento social y una fuerza armada con la que en 1944 se ganó el derecho a participar en el gobierno provisional que preparó las elecciones constituyentes de la cuarta república.

Las elecciones se celebraron al año siguiente, ya con el derecho de voto reconocido a las mujeres y con un sistema electoral que garantizaba el reparto proporcional de los escaños según los votos obtenidos. El PCF fue la fuerza más votada, seguido de cerca por otros dos partidos con los que formaría un gobierno de coalición liderado por el general De Gaulle, el mismo que había presidido el

gobierno provisional. Los dos aliados eran los socialistas, que seguían denominándose Sección Francesa de la Internacional Obrera, y los republicanos del Mouvement Républicain Populaire (MRP), también respaldados por su pasado resistente contra los nazis[33].

A continuación, De Gaulle presentó la dimisión alegando que la constitución que preparaban los partidos daría lugar a un sistema político similar al de la tercera república. De Gaulle no aceptaba que el presidente de la república tuviera limitadas sus atribuciones, alegando que se iba a establecer un juego parlamentario destinado a incurrir en los mismos errores de pérdida de autoridad y falta de eficacia para solucionar los problemas pendientes. Una vez aprobada la Constitución, las elecciones de 1946 confirmaron al PCF como mayor fuerza, logrando el que sería su mejor resultado histórico (28%), y fortalecieron la mayoría parlamentaria de la coalición tripartita, si bien con un cambio en la relación de fuerzas ya que PCF y MRP aumentaron su presencia parlamentaria en detrimento de la SFIO[34]. El primer gobierno constitucional tuvo que afrontar una situación plagada de dificultades económicas y sociales tras la destrucción causada por la guerra, lo cual limitaba severamente la posibilidad de emprender grandes reformas sociales. Sí introdujo cambios estructurales en la economía, sobre todo la nacionalización de varios sectores estratégicos y ciertas infraestructuras.

Entonces hizo su aparición el factor que provocó la ruptura de la coalición de gobierno y, a la postre, dio lugar a la modificación radical del escenario político. En medio de grandes presiones –ejercidas desde el interior por los grupos económicos y las elites dominantes, y desde el exterior por las continuas injerencias de Estados Unidos y Gran Bretaña–, los dirigentes de SFIO y MRP adoptaron las posiciones anticomunistas que mantenían los partidos de derecha y centro; abonadas con denuncias infundadas acerca de un supuesto golpe de Estado que preparaban los comunistas. El disenso parecía estar centrado en la diferencia de posturas con respecto al Plan Marshall, pero su trasfondo era la tensión bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Finalmente, el PCF abandonó el gobierno, al que no volvería durante las tres décadas siguientes, criticando la escasez de reformas sociales y la financiación de la guerra que el ejército francés libraba en Indochina, sin que antes se hubiera opuesto al colonialismo de esa región.

Tras la ruptura de la coalición, desde 1947 hasta 1958 el funcionamiento político de la república tuvo como columna vertebral la alianza MRP-SFIO, dando

entrada en el gobierno a los radicales y otras fuerzas centristas en coaliciones, y desde 1951 introduciendo un nuevo sistema electoral diseñado para aislar a los comunistas y a los nacionalistas-gaullistas[35]. En términos económicos, las principales medidas mantenían el mismo cariz liberal que las que en otros países llevaban a cabo los partidos conservadores, pero incorporando una función más activa del Estado a través de los sectores nacionalizados y orientada a garantizar los objetivos fijados por la política económica. En términos sociales, comenzaron a implementarse las reformas características del estado de bienestar, demandadas por los movimientos que organizaban los sindicatos y el PCF, siendo de menor relevancia la participación de la SFIO, cuyo celo reformista era inferior al que mostraban el laborismo británico y otros partidos socialistas europeos.

Por parte del PCF, el aislamiento causado por su salida del gobierno estuvo acompañado de una radicalización de posiciones en la que no faltaron ciertas veleidades retóricas de tipo insurreccional. No obstante, en poco tiempo sus dirigentes recondujeron la acción política y sindical hacia batallas por los derechos laborales, sociales y democráticos, contra la lentitud de las reformas aplicadas por el gobierno y contra las arbitrariedades coercitivas con que este reprimía algunas huelgas y manifestaciones. El PCF continuó siendo el partido más votado, pero desde 1953 sufrió los efectos de la reforma electoral destinada a mermar su presencia parlamentaria y a favorecer la creación de mayorías de gobierno.

A pesar de esa obstrucción, el tándem SFIO-MRP no pudo mantener el control parlamentario y se creó una inestabilidad similar a la que hubo en la tercera república. Entre 1947 y 1955 se sucedieron 16 jefes de gobierno, con el consiguiente baile de partidos que se formaban, aliaban, fusionaban o desaparecían, en medio de múltiples mudanzas oportunistas[36]. El precario equilibrio parlamentario no pudo soportar las tensiones políticas y sociales que acarreó el agravamiento del conflicto sobre la «cuestión argelina», cuyo desenlace en 1958 dio al traste con la cuarta república y alumbró una quinta con nuevas reglas de juego.

El detonante de esa mutación fue la situación creada desde mediados de los años cincuenta a raíz del vigor que cobró el Frente de Liberación Nacional (FLN) que dirigía el movimiento por la independencia en Argelia. El gobierno francés se negó a realizar cualquier concesión y asistió complaciente al desarrollo del contramovimiento derechista de los pieds noirs, defensor acérrimo del statu quo

colonial. El desastre se precipitó en 1956 cuando el gobierno presidido por el socialista Guy Mollet obtuvo del parlamento (incluido el PCF) un acuerdo que otorgaba al ejército plenos poderes para acabar con la rebelión, lo que condujo a una espiral sin salida[37]. Como en el pasado, la postura a favor de opciones militares favorecía a los partidos conservadores, alzándose las voces que reclamaban «un golpe de timón» en el gobierno para colocar a una figura que fuera capaz de aplastar al FLN y solucionar la cuestión argelina. La paradoja fue que ese golpe de timón llevó a resultados contrarios a los pretendidos por aquellas voces.

El protagonista del giro político fue el general De Gaulle[38]. Su retorno contó con el rechazo del PCF y de los líderes del Partido Radical, Mendès-France y Mitterrand, que señalaban la falta de respaldo legal, el carácter antidemocrático y la dudosa eficacia de aquel cambio para resolver la cuestión argelina. Una vez en el gobierno y dotado con plenos poderes, De Gaulle constató la imposibilidad de seguir con la represión militar y de ignorar la autoridad política del FLN. En 1962 decidió negociar el reconocimiento de la soberanía nacional de Argelia y la retirada incondicional del ejército francés. El famoso «Je vous ai compris» con el que en 1958 se dirigió a la extrema derecha y al ejército para aplacar los ánimos golpistas se tornó en lo contrario. Su decisión fue apoyada por un referéndum en el que una mayoría de franceses, cansados y asustados, aprobó negociar la independencia argelina.

De Gaulle formó un gobierno de concentración sin presencia comunista, elaboró una constitución presidencialista hecha a su medida y modificó de nuevo el sistema electoral para favorecer la creación de mayorías en torno a él y seguir aislando al PCF[39]. En adelante, un diputado de la mayoría gaullista necesitaría 20.000 votos, un socialista casi 80.000 y un comunista 380.000. Fue así como durante la siguiente década la estabilidad política estuvo garantizada por el protagonismo personal de De Gaulle, utilizando la Union pour la Nouvelle République (UNR) para articular sucesivas coaliciones con las que confeccionar mayorías parlamentarias[40]. La estabilidad política iba acompañada de no pocos elementos autoritarios y nacionalistas, derivados de la personalidad del presidente y de su incontestable poder, sólo en parte contrarrestado por la acción política y sindical del PCF y de la CGT.

Las restricciones del sistema electoral hacían que, disponiendo del 20-21% de los votos, la presencia comunista en el parlamento fuera reducida. Su mayor influencia residía en la capacidad de generar movimientos contra los abusos de

poder y a favor de reformas sociales. La otra servidumbre que lastraba el potencial del PCF era su apoyo incondicional a la Unión Soviética cuando la opinión pública ya conocía las barbaridades militares, la represión dictatorial y los ostensibles fracasos del sistema soviético. Por su parte, la SFIO abandonó el acunamiento gaullista desde 1962 y se sumó a la oposición, encabezando a mediados de la década una coalición de formaciones socialistas que, por primera vez desde la posguerra, superó en votos al PCF, anunciando entonces su disposición a entablar una colaboración política entre ambos partidos[41].

Solventada la cuestión colonial, en plena bonanza económica y mientras se consolidaba el estado de bienestar, la vida política se topó con un nuevo e inesperado sofoco en la primavera de 1968: «el mayo francés», cuyos ecos parecían remitir, al menos en apariencia, al pasado insurreccional parisino del siglo XIX. Ahora con otro protagonista muy distinto: los estudiantes y otros grupos juveniles. Los antecedentes que catapultaron aquel movimiento no podían ser más anecdóticos y circunstanciales, pues se inició el año anterior en el campus universitario de Nanterre con diversas protestas contra el deterioro de las instalaciones y la norma que establecía el funcionamiento de las residencias estudiantiles. El trasfondo que latía tras esas denuncias era doble: la insuficiencia de los presupuestos universitarios para atender al rápido aumento del número de estudiantes y el descontento de los jóvenes con las decisiones autoritarias de los cargos universitarios.

Sin embargo, el curso de los acontecimientos reveló que el malestar social y generacional era mucho más profundo y terminó plasmándose en un pulso contra los poderes vigentes en la sociedad. El factor que activó la generalización del movimiento fue la espiral represión-reacción entre, de un lado, las medidas coercitivas y sancionadoras de las autoridades y, de otro, las respuestas críticas de los estudiantes. La espiral subió de tono con dos elementos que proyectaron el movimiento hasta el corazón geográfico y político de la vida parisina. Primero, la solidaridad de otras universidades de la capital, principalmente la Sorbona, dando paso a la ocupación de varias facultades ubicadas en el centro de la ciudad y a una sucesión de asambleas y manifestaciones en pleno Barrio Latino que contaron con el apoyo de destacados intelectuales. Segundo, la incorporación de demandas relacionadas con las preocupaciones generacionales de amplios segmentos juveniles nacidos y crecidos durante la posguerra. Aunaban el rechazo a la tutela autoritaria y al moralismo familiar, educativo y social, la insatisfacción ante la propensión consumista y el tipo de expectativas profesionales, la negación del imperialismo y la indiferencia ante el sistema

político instituido.

Todo formaba parte de un elenco crítico que alumbró un festival de deseos y de consignas expresadas mediante referencias intelectuales, políticas, artísticas o musicales; desde el rechazo a la guerra de Vietnam, pasando por la negación de los sindicatos, los partidos tradicionales y el parlamento, y llegando a la demanda de nuevos derechos personales relacionados con la igualdad de género y la libertad sexual. Una variada iconografía plasmada en manifestaciones y barricadas que la represión de la policía contribuía a que fueran más numerosas y a que elevaran el tono de las consignas. Una suma de negaciones que apostaba por escapar del perímetro de la realidad vigente, sin aportaciones propositivas con las que componer una alternativa a esa realidad.

A continuación se produjo un tercer elemento que resultó ser un arma de doble filo y que después decantó la dirección de los acontecimientos: el vínculo de los estudiantes con los obreros, con el que el movimiento proyectó su protesta más allá de las universidades e institutos. En primera instancia, los dirigentes y piquetes universitarios acudieron a las grandes fábricas y a los sindicatos para que se sumasen a las protestas. De hecho, en París, Lyon y otras ciudades se convocaron huelgas, hubo ocupaciones de fábricas y se celebraron manifestaciones comunes que también arrastraron a otros grupos sociales. La huelga general del 13 de mayo convocada por la CGT parecía ser la confirmación de esa convergencia, pero de hecho sirvió para mostrar que, salvo en la crítica contra la dura represión de la policía, no existía un único movimiento. Con excepción de pequeños núcleos radicalizados, la mayoría de los obreros fabriles apostaba por mantener sus demandas laborales y sociales, mientras que el PCF, la SFIO y los sindicatos recelaban de la orientación que tomaban los acontecimientos.

Nunca llegó a conformarse un movimiento social confluyente y menos aún con capacidad para imponerse a los poderes dominantes. Las simpatías iniciales de la opinión pública hacia los estudiantes se tornaron en temores cuando se endurecieron los enfrentamientos con la policía. Muchos sectores sociales pasaron a desear que acabase aquel desorden. No obstante, más allá de los eslóganes exhibidos en las manifestaciones y de las proclamas que hacían los núcleos radicales, en ningún momento estuvo en juego el poder político. Se trató más de una revuelta que de una insurrección que pudiera emparentarse con los episodios del siglo XIX[42].

Las organizaciones de empresarios, los partidos conservadores y el presidente de la república reaccionaron con una propuesta restauradora del statu quo. Primero movilizaron a sus fuerzas sociales y las hicieron confluir en una gran contramanifestación celebrada a finales de mayo. Después convocaron elecciones en junio en las que el bloque de derechas obtuvo una victoria apabullante, favorecida por el sistema electoral vigente, mientras que el PCF y la nueva marca de los socialistas, Fédération de la Gauche Démocratique et Socialiste, sumaban más del 40% de los votos pero menos del 20% de los diputados[43].

El fiasco para los partidos obreros volvió a repetirse en las dos elecciones celebradas en los años setenta, a pesar de que la retirada y posterior muerte de De Gaulle dejó una sensación de orfandad entre los partidos conservadores[44]. La oposición corrió a cargo del refundado Partido Socialista (PSF), liderado por François Mitterrand, y del Partido Comunista, siendo testimonial el bagaje de votos obtenido por los partidos que nacieron con el movimiento del 68; además, se presentaron divididos y ninguno de ellos logró representación parlamentaria[45]. Para el PSF, la mejor noticia estuvo en los resultados de las elecciones presidenciales de 1974[46], confirmando su potencial ascendente y haciendo que fuera más ostensible la disposición del PCF a establecer relaciones de colaboración con los socialistas. Por su parte, los partidos situados a la izquierda del PCF desplazaron su actividad hacia los movimientos surgidos en torno al ecologismo, el feminismo, las alternativas culturales y otras iniciativas. También es relevante destacar que, a diferencia de lo sucedido en Italia o Alemania, la frustración creada por los derroteros políticos no indujo derivas de índole terrorista.

La singularidad de la escena política francesa mostraría una última novedad, ciertamente breve, a comienzos de los años ochenta: la formación de una alianza de gobierno del PSF, PCF y otras fuerzas de izquierdas, con un programa económico radicalmente distinto a los que defendían los socialistas en los demás países europeos. Este episodio queda pendiente para el siguiente capítulo.

El PCI ante el dominio democristiano

Al concluir la guerra mundial y durante los primeros años posteriores, la evolución del Partido Comunista Italiano presentaba notables similitudes con la del PCF, aunque también ciertas diferencias significativas que tenían su origen en las trayectorias anteriores de ambos partidos. Conviene, pues, esbozar con tres breves apuntes los antecedentes de esas disparidades.

El primero se refería al remoto pasado del movimiento obrero y la formación del Partido Socialista Italiano (PSI) a finales del XIX. La economía italiana era bastante más débil que la francesa, seguía dominada por una agricultura latifundista que funcionaba con técnicas de producción y formas organizativas anticuadas. Sin embargo, las regiones del norte poseían un grupo de industrias de gran tamaño en las que pronto comenzó a desarrollarse un movimiento obrero con notables influencias de las ideas y formas de organización anarquistas. En ese contexto se creó el PSI, contando con la influencia de un grupo de dirigentes cuya formación intelectual e ideológica estaba influida por la figura de Antonio Labriola. Pronto asumió una cultura de alianzas que le permitía distinguir entre los ideales revolucionarios y las posibilidades de actuación del momento, derivando de ello un rápido ascenso electoral y el establecimiento de coaliciones con las fuerzas liberales para combatir la unidad de intereses de la monarquía y los terratenientes[47].

El segundo antecedente tenía que ver con la experiencia del bienio rosso y el posterior proceso político que desembocó en el régimen fascista de Mussolini. En las grandes fábricas de Turín, Milán y otras ciudades del Piamonte y Lombardía, se desencadenó en 1919 un fuerte movimiento huelguístico de carácter consejista, impulsado por fuerzas anarcosindicalistas y bajo el influjo de los sóviets que dos años antes habían formado parte de la Revolución rusa. Los consejos se encargaban de impulsar el movimiento mediante la ocupación de las fábricas y otras acciones directas dirigidas contra los empresarios y sus propiedades. Los líderes consejistas rechazaban la división entre la lucha sindical y la política, considerando que el combate contra el poder económico y el poder estatal eran complementarios. Las movilizaciones contaron con la participación de militantes socialistas, pero fueron rechazadas por la dirección del PSI al considerar que eran contrarias a una estrategia socialista y que estaban condenadas a la derrota. Los líderes socialistas proponían canalizar la fuerza adquirida por el movimiento hacia la negociación de demandas laborales, logrando que ciertos empresarios hicieran concesiones para desactivar las ocupaciones de fábricas.

Finalmente, en el otoño de 1920, la represión policial consiguió desalojar a los ocupantes, la mayoría de los cuales fueron despedidos y muchos fueron encarcelados o tuvieron que huir. Lo que siguió a continuación parecía ser una restauración de la monarquía parlamentaria[48], pero en realidad lo que se produjo fue un dramático viraje cuando el rey y la mayoría del parlamento entregaron el gobierno a Benito Mussolini. Era un antiguo militante socialista que pasó a encabezar una banda de pistoleros rompehuelgas, ferozmente antisocialista y anticomunista. Con el gobierno en sus manos y la clase política achantada, en 1924 Mussolini instauró una dictadura fascista que eliminó la democracia política, dando paso a un régimen sin partidos, sin libertades ni elecciones libres.

El tercer antecedente concernía a la creación del PCI y las posteriores reflexiones de Gramsci sobre la «hegemonía». Como en otros países, el Partido Comunista de Italia surgió de una escisión del PSI en el congreso de Livorno de 1921, arrastrando a una minoría de militantes y dirigentes socialistas que apoyaron las directrices de la III Internacional, en cuya dirección llegaron a participar quienes desde 1924 serían sus líderes principales, Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti. Dos años después, en plena dictadura fascista, Gramsci fue detenido y permaneció en la cárcel hasta la antesala de su muerte en 1937. Los Quaderni del carcere que escribió durante el cautiverio muestran su alejamiento parcial de los planteamientos leninistas más ortodoxos, destacando la elaboración de sus tesis sobre la hegemonía que, décadas después, ejercieron cierta influencia en la estrategia del PCI.

Con la distancia que le daba su aislamiento, enfermo y prisionero, Gramsci rechazó que hubiera leyes inexorables sobre el cambio social y las posibilidades revolucionarias. Rechazó también que el Estado fuera el simple traslado funcional del dominio económico al ámbito del poder político, y que el dominio político se sostuviera sola o principalmente mediante los órganos de represión. Instituciones como la educación, los medios de comunicación, las organizaciones religiosas y muchas más segregaban ideología a favor del dominio político a través de las formas de pensar, los hábitos, las convenciones, las tradiciones y otras facetas que operaban en la sociedad civil. En suma, la clase dominante lo era también porque lograba que su ideología fuese hegemónica, lo que la permitía formar un bloque social favorable al orden existente.

Según Gramsci, sin disputar esa hegemonía ideológica era imposible que el

partido comunista pudiera encabezar una revolución. Consecuentemente, proponía un discurso distinto al canónico en el que el acceso al poder requería que previamente los comunistas hubieran ganado el liderazgo intelectual y moral de la mayoría social para conformar un bloque alternativo. Sólo así podrían nacer las ideas y las instituciones con las que diluir el bloque que sustentaba la hegemonía capitalista. Se trataba, por tanto, de una lucha larga, una guerra de posiciones, y no de un movimiento de asalto al poder estatal, lo que a todas luces resultaba inviable.

El ostracismo político de la clandestinidad y de las cárceles con el que la dictadura fascista condenó a comunistas y socialistas empezó a romperse tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las formaciones políticas dispuestas a combatir militarmente contra el ejército alemán y el Estado fascista crearon en 1943 el Comité de Liberación Nacional que dirigió la liberación de las regiones del norte. En el transcurso de aquellos años de resistencia, el PCI adquirió un creciente protagonismo, mientras que los socialistas procedían a refundar su partido completando el nombre con los términos Unidad Proletaria (PSIUP). Como en el caso francés, los comunistas italianos se convirtieron en la principal fuerza de la resistencia merced a su capacidad organizativa y a la firmeza de sus convicciones ideológicas, convencidos de que el desenlace victorioso de la guerra abriría la puerta a un proceso revolucionario.

Terminada la guerra, el PCI contaba con más de un millón y medio de afiliados y una implantación extendida por todo el territorio nacional, siendo el componente fundamental del gobierno provisional creado a partir del Comité de Liberación Nacional. El cometido de ese gobierno era hacer frente a las urgencias más apremiantes y preparar las elecciones constituyentes de 1946, que serían las primeras desde que Mussolini impuso su dictadura y también las primeras en las que podrían votar las mujeres.

La antesala de las elecciones reflejó una escalada de las tensiones entre las dos fuerzas que marcarían la vida política italiana. En un lado, el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos apostaron por recrear el viejo Partido Popular (formado en 1919 por sacerdotes y otros grupos católicos con el respaldo del papa Benedicto XV) bajo el formato de la Democracia Cristiana (DC). Sus mayores activos eran la influencia social de la Iglesia católica y el apoyo estadounidense mediante dinero y medios materiales, incluida la fuerza militar que permanecía en territorio italiano. Para organizar la DC recuperaron a numerosos cuadros políticos, militares y funcionarios que habían sido fieles a

Mussolini, a la vez que las autoridades vaticanas anunciaban la excomunión de quienes votasen a partidos no católicos. En el otro lado, el PCI disponía de influencia política, seguía alineado con la URSS y contaba con una gran base de militantes entre los que seguía latiendo un discurso revolucionario; a pesar del giro promovido por Togliatti en 1944, cuando los dirigentes comunistas decidieron, simultáneamente, la entrega de las armas en manos de los partisanos, el rechazo a la vía insurreccional y la aceptación del juego político bajo una república parlamentaria.

Las elecciones dictaron el triunfo de la Democracia Cristiana, aunque el resultado conjunto de PSIUP y PCI fue superior tanto en votos como en escaños[49]. Manteniendo el consenso anterior, el líder democristiano, Alcide De Gasperi, formó un gobierno de unidad nacional en el que los tres partidos principales pactaron la mayoría de acuerdos que dieron lugar a la Constitución republicana que se aprobó en 1947. Sin embargo, en la fase final de aquel proceso volvieron a aflorar las tensiones del periodo electoral, ahora mucho más intensas.

La presión de los partidos conservadores y de sus valedores externos (EEUU y Vaticano) se orientó, igual que en Francia, a forzar que el PCI saliera del gobierno. Con tal propósito, arreció una campaña política, tanto en el parlamento como en la sociedad, apoyada por un formidable aparato propagandístico que se encargó de difundir infundios acerca de las intenciones ocultas e inminentes del PCI. Supuestamente, los comunistas se aprestaban a emprender la expropiación de las propiedades privadas, instaurar una dictadura, imponer el ateísmo y favorecer la invasión soviética. Lanzada la campaña, con una parte de la opinión pública amedrentada y otra parte confusa, el PCI salió del gobierno nacional, si bien mantuvo su presencia en los gobiernos de varias regiones y en los ayuntamientos de ciudades y de zonas rurales importantes.

Las espadas siguieron en alto hasta que, al año siguiente, se celebraron las elecciones posteriores a la aprobación de la Constitución. Las fuerzas seguían tensadas porque la exclusión del PCI no había supuesto la ruptura de sus vínculos con el PSIUP (de nuevo llamado PSI), liderado por Pietro Nenni, si bien ambos partidos tenían diferentes posiciones en torno al Plan Marshall. El golpe de Estado perpetrado en febrero de 1948 por los comunistas checoslovacos hizo resurgir las suspicacias y las campañas contra los comunistas. El inicio de la Guerra Fría, el manantial de dólares procedente de Estados Unidos y las manipulaciones políticas[50] no impidieron que socialistas y comunistas

concurrieran unidos en el Frente Democrático Popular (FDP), lo que provocó una escisión entre un grupo de socialistas, marcadamente anticomunistas, que crearon Unidad Socialista como paso previo a lo que después sería el Partido Socialdemócrata.

En un clima de virulenta crispación, la suma de apoyos políticos y económicos acumulados por la DC decantó a su favor el pulso con el FDP y permitió la puesta en marcha de las condiciones que conformaron el escenario político que perduró durante las tres siguientes décadas[51]. De Gasperi formó un gobierno de coalición en el que se integraron los pequeños partidos liberal, republicano y socialdemócrata, dispuestos a plegarse al dominio hegemónico democristiano a cambio de ciertas prebendas en el ejercicio de poder. Una alianza que se mantuvo con ligeros cambios de formato durante siete elecciones generales, dando lugar a gobiernos que siempre estuvieron presididos por dirigentes de la DC hasta 1982; unas veces en solitario, otras con uno u otro aliado, otras con los tres y desde 1963 contando también con un PSI ya virado hacia posiciones centristas y anticomunistas[52].

Sin embargo, a pesar del amplio dominio parlamentario de esas coaliciones, el gobierno estuvo sometido a una permanente inestabilidad originada por el juego de fuerzas internas que existía entre los dirigentes de la DC. Formada con la urgencia que requerían las elecciones de 1946, con el paso del tiempo la DC se convirtió en un partido de masas, aglutinado en lo doctrinal por el catolicismo vaticano y en su desenvolvimiento práctico por las dádivas clientelistas repartidas gracias al control permanente del gobierno, de las empresas públicas y de muchos gobiernos regionales y municipales. Los órganos directivos de la DC estaban permeados por la influencia de diferentes núcleos de poder: finanzas, gran capital industrial, Vaticano, gobierno estadounidense, fuerzas regionalistas, mandos del ejército e incluso organizaciones mafiosas. Muchas decisiones importantes del parlamento y del gobierno suscitaban intensos debates internos en la DC y se resolvían mediante correlaciones de fuerzas alternantes, ocasionando frecuentes cambios en la dirección del partido y del gobierno.

El PCI continuó siendo la segunda fuerza política, con una cuota electoral que creció desde el 23% en la primera mitad de los cincuenta al 27% en los sesenta, hasta alcanzar un máximo del 34% en 1976, sólo a cuatro puntos y 35 diputados menos de la DC. A la vez que ejercía la oposición en el parlamento, el PCI era una poderosa fuerza política fuera de él, merced a su influencia en el movimiento obrero, en el gobierno de municipios y regiones importantes, y

mediante una actividad capilar que se extendía por múltiples entidades sociales, intelectuales y culturales. A mediados de los años cincuenta, el PCI comenzó a distanciarse de la Unión Soviética y a despojarse de parte de los dogmas canónicos que caracterizaban el discurso de los partidos comunistas ortodoxos. Incorporó una versión de las tesis de Gramsci sobre la hegemonía, asumiendo que para acceder al poder necesitaba transformar su capacidad dirigente en fuerza ideológica dominante, concediendo cada vez más importancia al trabajo en las instituciones que se ocupaban de generar ideología y a la necesidad de atraer a intelectuales y profesionales con notable influencia cultural. Esos mismos propósitos movían a la DC, con la ventaja de contar a su favor con una audiencia previa: los mecanismos en manos del Vaticano cuyo radio de acción eran los millones de creyentes que seguían sus directrices.

Desde los años sesenta, muchas de las reformas sociales y laborales, así como la ampliación de derechos cívicos y muchas iniciativas aprobadas por el parlamento y el gobierno, pivotaron alrededor de las propuestas del PCI, de su sindicato (CGIL) y de otras organizaciones vinculadas a los comunistas. Los «cinturones rojos» en torno a las grandes ciudades y la «galaxia-PCI», a modo de red tentacular tejida a escala social, eran las mayores muestras de su apuesta por la hegemonía.

Sin embargo, la lejanía del poder estatal originó sucesivos debates y tensiones internas en la dirección comunista entre quienes consideraban que moderando sus propuestas políticas ampliarían las oportunidades de acercarse al poder y quienes pensaban que era mediante un discurso inequívocamente transformador como ganarían a nuevos sectores para fortalecer un bloque mayoritario frente a la DC. Giorgio Amendola y Pietro Ingrao eran las principales figuras de ambas posiciones. Amendola proponía refundar un único partido obrero que incluyese a los socialistas y otros socialdemócratas, despojado definitivamente de las posiciones programáticas que eran irrealizables para concentrarse en las políticas capaces de lograr mayorías[53]. Ingrao proponía vertebrar en torno al PCI los movimientos políticos, sociales y culturales que iban apareciendo al calor del rápido desarrollo industrial y de las modificaciones de la estructura social.

La posición de Amendola ganó un apoyo mayoritario en el congreso del partido celebrado en 1966, pero después, cuando hubo que designar al líder que sucediera al fallecido Luigi Longo, el elegido fue Enrico Berlinguer, que había estado al margen de la disputa entre las dos posturas estratégicas. Seguidamente, influido por los grandes movimientos sindicales que se desataron a finales de la

década y por la unidad de acción del sindicato comunista (CGIL) con los sindicatos socialista (UIL) y democristiano (CISL), Berlinguer propuso crear una alianza similar en el ámbito político en la que también podría participar una parte de militantes y dirigentes de la DC.

La aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1970 condensó cuatro elementos fundamentales que parecían ir en esa dirección. Primero, logró una legislación laboral que recogía ampliamente las demandas de los trabajadores. Segundo, había contado con el apoyo combativo del movimiento obrero. Tercero, se había debatido y aprobado democráticamente en el parlamento. Cuarto, había permitido la unidad de los dirigentes y militantes progresistas de todos los partidos. Dando un paso más, en 1973 Berlinguer propuso un «Compromiso histórico entre las fuerzas de progreso» que debía concretarse en la formación de un gobierno de emergencia nacional compuesto por todo el arco parlamentario con el objetivo de hacer frente a la crisis económica e implementar las reformas políticas más apremiantes[54].

Esta propuesta parecía abrirse paso en los años siguientes. Las elecciones regionales de 1975 otorgaron al PCI el 33% de los votos, solo dos puntos menos que la DC, y junto con el PSI formó gobiernos de coalición en muchas regiones. La misma corta distancia separó a los dos grandes partidos en las elecciones provinciales y municipales; ciudades como Nápoles, Roma, Turín y Florencia pasaron a tener alcaldes comunistas o respaldados por ellos. Al año siguiente, las elecciones al parlamento refrendaron la misma tendencia: el PCI obtuvo el 34,4% frente al 38,7% de la DC, separados por millón y medio de votos, y acaparando conjuntamente casi el 75% del electorado. Parecía que el rígido esquema bipolar y excluyente de las décadas anteriores terminaría por derrumbarse para alumbrar un nuevo escenario político. Una posibilidad que suscitó debates en el interior de la DC y entre sus aliados de gobierno.

Las disensiones dentro de la DC y con sus socios hicieron que el gobierno surgido de las elecciones de 1976 fuera exclusivamente democristiano, mientras sus aliados se colocaban a la espera del curso que tomaran las relaciones con el PCI. En las filas de la DC hubo gestos de acercamiento hasta entonces inéditos, a cambio de los cuales exigieron que los comunistas aceptasen las políticas acordadas por el gobierno. Cuando Pietro Ingrao fue elegido presidente del parlamento por consenso DC-PCI, la dirección comunista aceptó hacer concesiones en apoyo del gobierno democristiano, considerando que con ello se avanzaba hacia el Compromiso histórico. Otros sectores del PCI pensaban que

ese objetivo seguía tan lejos como décadas atrás y que las concesiones debilitaban la base social y política de los propios comunistas.

En un último paso de acercamiento, en 1977 Berlinguer formuló una propuesta de política económica, que denominó «austeridad transformadora», en la que defendía que las medidas de ajuste monetario y de liberalización podían ser compatibles con una redefinición de los objetivos estratégicos del PCI para eliminar el despilfarro, corregir el exagerado consumo improductivo y avanzar en la participación democrática de los trabajadores en las empresas. Ideas de difícil digestión para una gran parte de la militancia y de cuadros intermedios comunistas, no tanto para algunos núcleos intelectuales que eran más receptivos a las novedades, ni para la infinidad de cuadros que ocupaban cargos públicos, más proclives al seguidismo de las líneas marcadas por los altos dirigentes.

Las conjeturas sobre lo que podría suponer el Compromiso histórico quedaron sin respuesta cuando, en mayo de 1978, se truncó aquel proceso a raíz del asesinato de Aldo Moro, uno de los dirigentes democristianos que se mostraba partidario de colaborar con el PCI. Los hechos posteriores desvelaron que ese suceso marcó el punto de no retorno hacia un escenario político desfavorable para el PCI y para otro actor político menor que había irrumpido a finales de los años sesenta: los movimientos y las organizaciones de extrema izquierda.

Su emergencia guardó alguna similitud con los consejos obreros del bienio 1919-1920. En varias fábricas del norte (Turín, Milán, Véneto) se formaron núcleos obreros, en su mayoría bastante jóvenes, dispuestos a radicalizar las reivindicaciones y las formas de organización de las movilizaciones obreras. Proponían que las demandas salariales incorporasen la exigencia de subidas igualitarias para todos los trabajadores y que las condiciones de trabajo incorporasen el rechazo a los métodos de control y de castigo que aplicaban los empresarios. Su objetivo era impulsar un movimiento operaio basado en la «autonomía obrera», opuesto a la legalidad vigente y al trabajo enajenado, que fundiera la lucha económica y la de carácter político para convertir las fábricas en el centro del conflicto contra el poder económico, contra el Estado y contra los sindicatos y el PCI. La formación de consejos obreros, las ocupaciones de fábricas y las formas alternativas de organización social serían los instrumentos con los que potenciar ese movimiento autónomo.

Era un discurso que combinaba las viejas ideas del anarquismo libertario y el anarcosindicalismo con otras que sometían a revisión varios dogmas marxistas.

Un emparejamiento que caló también en núcleos de estudiantes que se movilizaban contra el autoritarismo y la burocracia universitaria, utilizando distintas formas de desobediencia. Los mayores hitos fueron la prolongada huelga que en 1968 llevaron a cabo los obreros de Fiat en la fábrica de Turín, las huelgas de otras fábricas emblemáticas y las movilizaciones estudiantiles en las mayores universidades del país.

Aquel ardor se apagó a lo largo de los años setenta, tanto por la dificultad de mantener un pulso de extrema radicalidad como por la respuesta represiva que sobrevino a cargo de los órganos judiciales, la policía y los grupos fascistas[55]. También contribuyeron a ese debilitamiento el rechazo frontal de los dirigentes del PCI y la CGIL[56] y la propia incapacidad de los movimientos para articular una alternativa organizativa. Esa articulación política, rechazada por los grupos anarquistas, fue intentada con poco éxito por Lotta Continua y Potere Operaio. En términos electorales, en 1976 se formó una coalición de organizaciones a la izquierda del PCI (Partito di Unità Proletaria per il Comunismo, Lotta Continua, Avanguardia Operaia y otras) que se presentó como Democrazia Proletaria y obtuvo más de medio millón de votos (1,5% del total) y 6 diputados. Un modesto techo que reflejaba su reducida influencia a escala nacional, siendo algo mayor en las principales ciudades[57]. Más tarde, su presencia política quedó esterilizada por sucesivas escisiones y rivalidades internas en el seno de esas organizaciones.

El fruto más desgraciado de los movimientos estudiantiles fue el surgimiento de organizaciones terroristas, como Nuclei Armati Proletari y, sobre todo, Brigate Rosse, formada en 1970 por militantes radicales de Trento, Milán y la región de Reggio Emilia, el feudo del PCI. Tras unas primeras acciones simbólicas, pasaron a perpetrar secuestros, asaltos y extorsiones, iniciando en 1976 una cadena de asesinatos que dos años después les llevó al secuestro y asesinato de Aldo Moro. Aquel suceso marcó la fase terminal de una aventura siniestra y repleta de incógnitas acerca de quién y cómo se determinaron los objetivos de sus acciones.

Se juzgue o no que el asesinato de Moro fue el hecho determinante que detuvo el ascenso del PCI y su pretensión de compartir el gobierno, dos elementos quedaron fuera de dudas: la estrategia del PCI quedó inutilizada y el espacio político que dejó vacío su posterior desplazamiento hacia posiciones de centro-izquierda no fue ocupado por ninguna fuerza con capacidad para alentar movimientos a favor de reformas profundas[58]. El flanco izquierdo quedó

huérfano cuando el PCI sentó las bases que le llevarían a su desnaturalización y posterior desaparición como partido. Los primeros pasos del camino hacia el declive se constataron en las últimas elecciones de la década, celebradas en 1979: su cuota cayó al 30% y perdió más de 25 diputados. Lo que ocurrió después, su crepúsculo político, se aborda en el siguiente capítulo.

DICTADURAS DE PARTIDOS-ESTADO EN LOS PAÍSES DEL ESTE

Los países en los que el ejército soviético expulsó a las tropas nazis formaban dos tipos de territorios sometidos a algún imperio. Unos habían estrenado su soberanía nacional al concluir la Primera Guerra Mundial tras el desmembramiento de los imperios austríaco y otomano. Otros habían gozado de soberanía siglos atrás y la recuperaron cuando desaparecieron esos dos imperios –o, en el caso polaco, cuando cayó el zarismo–. Con pocas excepciones, esos países compartían varios rasgos: el atraso de sus economías basadas en la agricultura, la mínima industrialización, el bajo grado de urbanización, el dominio social de las relaciones feudales, el autoritarismo de sus regímenes políticos mediante monarquías absolutistas o con dictaduras militares, y la debilidad de sus partidos obreros. Los años de ocupación alemana habían provocado una intensa destrucción y el expolio de sus recursos, hundiendo hasta el extremo sus precarias economías. Adicionalmente, la guerra dejó una estela de litigios fronterizos, exterminio étnico (judíos, gitanos) y movimientos migratorios. En la mayoría de esos países, la invasión nazi contó con el apoyo previo o con la colaboración posterior de los gobernantes nacionales y de organizaciones que aportaron tropas y milicias encargadas de llevar a cabo la represión contra judíos, gitanos, socialistas, comunistas y otros. El fin de la invasión y la expulsión del ejército alemán fueron consecuencias de las derrotas militares infringidas por el ejército soviético en su avance hacia Alemania.

Checoslovaquia era el país que presentaba más excepciones a ese cuadro de referencias comunes. Antes de la invasión, contaba con un notable desarrollo de la industria y con una mayor proporción de obreros y de grupos urbanos, sobre todo en Bohemia y Moravia. Era el único país que había mantenido un sistema democrático parlamentario desde su creación en 1919 hasta la invasión en 1938.

También era el único en el que el Partido Comunista tenía cierta presencia política (10% en las elecciones de 1935) y uno de los pocos cuyas milicias partisanas, lideradas por los comunistas, lucharon contra los nazis. Igualmente, su gobierno fue de los pocos, con el polaco y el yugoslavo, que se opusieron a la invasión nazi, por lo que tuvo que exiliarse en Londres.

Hungría presentaba como excepción el hecho de contar con un movimiento obrero minoritario pero con un pasado combativo, incluyendo la existencia de organizaciones revolucionarias que, en 1919, protagonizaron un fallido episodio insurreccional paralelo al que promovieron los espartaquistas en Alemania. Se formaron entonces consejos de obreros y soldados, y su líder comunista, Béla Kun, llegó a proclamar una dictadura obrera. La rebelión fue aplastada por la intervención de las potencias exteriores (Entente) en apoyo de la monarquía y las fuerzas aristocráticas. En Yugoslavia y Bulgaria, la excepción al cuadro general fue que contaron con ejércitos de partisanos liderados por los comunistas que habían resistido la invasión. En el caso yugoslavo lograron derrotar y expulsar a los alemanes sin la participación militar soviética, mientras que en Bulgaria liberaron algunas zonas antes de que el ejército soviético expulsase a los alemanes.

El escenario surgido al concluir la guerra quedó ratificado por las conferencias de Yalta y Potsdam, con la Unión Soviética como potencia dominante de toda la región. Salvo en Checoslovaquia y Yugoslavia, la URSS mantuvo tropas en cada país y designó a la autoridad militar que actuaría como responsable político interno y se encargaría de enviar a la URSS alimentos, materias primas, material ferroviario y otros recursos, como reparaciones de guerra, impuestas sobre todo a Hungría, Rumanía y la RDA. Desde Moscú se acordaron los cambios territoriales por los que zonas de unos países se asignaron a otros o a la propia URSS.

El primer paso emprendido por todos los países fue la formación de gobiernos de coalición provisionales. La decisión estuvo a cargo de la autoridad militar soviética, salvo en Checoslovaquia y Polonia, donde se hizo mediante negociaciones directas entre Moscú y los gobiernos que estaban en el exilio. Estos últimos tuvieron que aceptar, por pragmatismo o por presión occidental, el cumplimiento de los acuerdos fijados en Yalta y Potsdam. Algunos gobiernos se formaron a partir de las alianzas creadas durante guerra, mientras que en otros se utilizaron criterios diversos, pero en todos los casos el denominador común consistió en que la jefatura del gobierno recayó en políticos no comunistas

mientras que los ministerios claves, como Interior y Economía, quedaban en manos comunistas. Esos gobiernos fueron los que tomaron las primeras decisiones económicas, generalmente consensuadas, que incluían la nacionalización de sectores básicos y otorgaban al Estado la misión de garantizar el suministro de alimentos a la población y de materias primas a las empresas.

El segundo paso consistió en celebrar elecciones para formar parlamentos constituyentes y poner en marcha nuevos gobiernos. Fue en ese momento, entre 1946 y 1947, cuando las autoridades soviéticas y los ministros del Interior condicionaron el curso de los procesos electorales y sus resultados, sin escatimar ningún tipo de prácticas represivas y ventajistas. Las restricciones iniciales al ejercicio de las libertades políticas impuestas a ciertos partidos fueron seguidas de prohibiciones tajantes y de persecuciones políticas. En los países en los que las elecciones se celebraron con rapidez, esas prácticas se hicieron más intensas después de las elecciones, mientras que en los países que demoraron la convocatoria electoral las medidas discriminatorias y las represalias a la disidencia fueron previas y condicionaron los resultados. Unas y otras dinámicas fueron distintas según la fuerza inicial con la que contaban los partidos comunistas para afrontar el proceso electoral.

En Checoslovaquia, el partido comunista tenía una indudable influencia política y las elecciones le convirtieron en la primera fuerza del parlamento, con el 38% de los votos. Edvard Beneš se mantuvo como presidente de la república y el líder comunista Klement Gottwalt encabezó un gobierno de coalición en el que los comunistas eran minoría pero controlaban el ministerio del Interior y otras carteras importantes. En Bulgaria y en Albania, las autoridades soviéticas dirigieron la formación de frentes patrióticos, controlados por los comunistas, con otros partidos como el socialista y el agrario que fueron obligados a integrarse. En la RDA, la rama del SPD fue conminada a fusionarse con la del partido comunista (KPD) para formar el Partido Socialista Unificado (SED).

En los países donde los comunistas eran claramente minoritarios el proceso requirió un uso más flagrante de la violencia. En Hungría, el Partido de los Pequeños Propietarios logró el 57% de los votos y con su aliado agrario sumó una mayoría del 70% frente al 15% del Partido Comunista. Sin embargo, la presión soviética hizo que esos dos partidos aceptaran la formación de un gobierno de coalición que puso en manos comunistas varios ministerios claves. En Polonia, el proceso resultó más largo y plagado de obstáculos. Primero, el gobierno provisional vetó la participación de ciertos partidos de derecha;

después, la autoridad soviética forzó al Partido Campesino (PSL), cuyo líder era el presidente llegado del exilio, Stanisław Mikołajczyk, a autoimponerse una cuota máxima equivalente a la cuarta parte de los escaños[59]; por último, el acoso al PSL culminó con la vuelta al exilio de Mikołajczyk y la obligada fusión del Partido Socialista con el Comunista para formar el Partido Obrero Unificado bajo control comunista. En Rumanía, la autoridad soviética organizó un frente de partidos y organizaciones controlado por los comunistas, pero las elecciones dieron una abrumadora victoria al Partido Campesino. La autoridad soviética modificó los resultados y decidió que la victoria correspondía al bloque encabezado por los comunistas, que fue el que formó gobierno.

A la vuelta de 1947 todos los países habían celebrado elecciones y habían instalado los cimientos para el desarrollo de procesos políticos casi idénticos, cuyos últimos detalles terminaron de perfilarse al año siguiente. En Checoslovaquia, un golpe de Estado forzó el abandono del presidente Beneš y de los ministros no comunistas, quedando todo el poder en manos del Partido Comunista. En varios países, culminó la absorción de los partidos socialistas por los comunistas y se fijaron las condiciones en las que los demás partidos y organizaciones legales reconocían la función dirigente de los partidos comunistas. Se escenificaba así una representación teatral en la que sistemas políticos convertidos en dictaduras de un solo partido tomaban apariencia democrática con parlamentos que simulaban ser pluralistas y gobiernos que simulaban ser de coalición.

Antes de iniciarse la década de los cincuenta, todos los países presentaban las mismas características. Sus constituciones consagraban la fórmula de repúblicas populares con parlamentos monocordes, que no podían ocultar la vigencia de regímenes dictatoriales. La industria era propiedad del Estado y en varios países la agricultura también había sido colectivizada. La economía estaba rígidamente controlada por la aplicación de planes quinquenales. Las organizaciones sociales estaban sometidas al control del Estado. En sumar, el mismo canon instaurado en la Unión Soviética, cuya piedra angular era el absoluto dominio del Partido-Estado sobre la sociedad. Con el añadido de que cada partido nacional se sometía al dominio del Partido Comunista de la URSS[60].

Esos partidos actuaban como carceleros de la democracia política, hostiles a cualquier reclamación surgida de los trabajadores y antagónicos con cualquier afán emancipador. En adelante, cuando el dominio que ejercían presentase fisuras, la respuesta siempre sería la represión estatal y/o la intervención del

ejército soviético. En la RDA, la policía y el ejército, con el apoyo de tropas soviéticas, acabaron en 1953 con las manifestaciones obreras que exigían mejorar las condiciones laborales y sociales. Las mismas fuerzas represivas acallaron la disidencia de los intelectuales (Barho, Harich) que reclamaban cambios en correspondencia con las ideas que decían defender los líderes del SED. En Hungría, el ejército soviético aplastó en 1956 un levantamiento popular encabezado por el jefe de gobierno, Imre Nagy, con el propósito de reformar en profundidad el sistema. En Polonia, ese mismo año las autoridades soviéticas y la policía nacional reprimieron las manifestaciones ciudadanas que, con el apoyo de algunos líderes comunistas, demandaban reformas. Fueron los mismos que, en 1964, acabaron con la disidencia de intelectuales marxistas (Kuroń, Modzelewski) que criticaban el funcionamiento del país. Finalmente, en Checoslovaquia, el ejército soviético aplastó en 1968 el movimiento popular que, encabezado por el secretario general del PC, Alexander Dubček, pretendía modificar el sistema político y el funcionamiento de la economía. Una tras otra, cada experiencia frustrada demostró que aquel sistema totalitario era irreformable.

[1] Al final del capítulo se aborda brevemente la trayectoria de los países de la parte oriental, colocados bajo el dominio de la Unión Soviética y de partidos similares al existente en la URSS. Dos asuntos escapan al contenido del capítulo: las razones y las modalidades con las que Estados Unidos y la Unión Soviética efectuaron esa fractura europea; y el clima de confrontación bipolar (Guerra Fría) que asfixió la política internacional durante la segunda mitad del siglo XX.

[2] Otro acuerdo económico de carácter político, en este caso de alcance internacional, fue el compromiso que los gobiernos europeos y muchos otros adquirieron en la Conferencia de Bretton Woods celebrada en 1944 para mantener fijas las tasas de cambio de sus monedas y controlar los flujos internacionales de capital financiero. Medidas que impulsaron el comercio mundial y favorecieron la estabilidad monetaria interna de las economías.

[3] Noruega y Dinamarca compartieron un pasado común de seis siglos, desde finales del siglo XIV hasta 1814. Después, Noruega fue anexionada a Suecia hasta 1905. Los tres países y Holanda mantuvieron regímenes monárquicos parlamentarios y fueron pioneros en el reconocimiento del derecho de voto a las mujeres entre 1918-1922.

[4] De hecho, el Partido Laborista Noruego pidió el ingreso en la III Internacional y, tras fraccionarse en dos, fue la posición mayoritaria la que se mantuvo en la Komintern hasta 1923. Se separó por discrepancias con los planteamientos políticos de quienes lideraban esa organización y por la exigencia de fidelidad hacia la URSS. Las dos fracciones volvieron a unificarse en 1927, excepto una exigua minoría escindida cuatro años atrás, que formó el Partido Comunista de Noruega.

[5] Cuatro veces estuvo por encima del 46% de los votos, otras dos superó el 42% y sólo en 1973 registró un 35%.

[6] Hasta 1968 obtuvo alrededor del 40%, y entre 1964-1973 formó varios gobiernos en coalición con una escisión del partido comunista que tenía algo menos del 10% de los votos. En 1973 su porcentaje de votos bajó al 30%, pero después volvió a recuperar su cuota precedente.

[7] En los años cincuenta mantuvo porcentajes de votos en torno al 30%, bajando al 25% en los sesenta y subiendo al 35% en los setenta.

[8] Entre 1950 y 1970, el PIB creció a una tasa media del 3,7% anual y la productividad por hora trabajada lo hizo al 2,9%, mientras que el empleo creció de forma moderada (al ritmo que lo hacía la población) y se concentró en el sector público. Por el lado de la demanda interna, la inversión de las empresas y el consumo de las familias se incrementaron a buen ritmo (4,2% y 3%), y aún más lo hicieron la inversión y el consumo del gobierno (6% y 4,6%).

[9] El SAP nunca formó coaliciones con el Partido Comunista, alineado fielmente con la URSS y con una escasa representación de 5-10 diputados, que aumentó hasta 15-20 cuando una escisión disidente de Moscú fundó el Partido de Izquierda-Comunista. El principal aliado del SAP fue el Partido Popular, de orientación liberal, y ocasionalmente el Partido de Centro.

[10] Desde 1950 hasta mediados de los años sesenta, los ingresos públicos elevaron su proporción con respecto al PIB en diez puntos (del 25% al 35%), la mitad de ellos procedente del impuesto sobre la renta personal. Los gastos públicos se elevaron en trece puntos porcentuales con respecto al PIB, de los que nueve se destinaron a las partidas sociales, que pasaron del 11,5% al 20% del PIB.

[11] El propio Beveridge había influido en 1911 en que el gobierno liberal de

Lloyd George aprobase varias reformas sociales, incluidas las primeras coberturas sobre pensiones y desempleo.

[12] El Partido Conservador con sus aliados obtuvo casi el 40% y 210 diputados, y el Partido Liberal el 9% y 12 diputados. Fueron las únicas elecciones hasta finales de los años setenta en las que el Partido Comunista de Gran Bretaña alcanzó representación parlamentaria, con dos diputados.

[13] Otro empeño laborista fue la extensión de los derechos democráticos, incluyendo la lucha contra las discriminaciones raciales, ciertas desigualdades de género y los privilegios de que seguían gozando ciertos grupos dominantes. En este último sentido, no lograron la eliminación de la Cámara de los Lores, pero sí consiguieron que se redujeran sus funciones políticas, se restringieran los puestos hereditarios y se permitiera el ingreso de mujeres y de miembros de los partidos políticos.

[14] Entre 1950 y 1959 el Partido Conservador con sus aliados elevó su cuota de votos: 43,4%, 48%, 49,7% y 49,4%, y el número de diputados: 298, 321, 345 y 365 diputados; mientras que el Partido Laborista mantuvo una cuota del 46% de votos (salvo en 1955, con 44%) y fue perdiendo diputados: 315, 295, 277 y 258.

[15] En las elecciones de 1964 y 1966 el Partido Laborista obtuvo el 44% y 48% de votos, respectivamente, con 317 y 364 diputados. El Partido Conservador con sus aliados se situó en 43% y 42%, con 304 y 253 diputados. El Partido Liberal seguía sufriendo la desproporcionalidad del sistema electoral, ya que con porcentajes de votos del 11% y 8,5% apenas tuvo 9 y 12 diputados, sin posibilidad de incidir en la formación de mayorías parlamentarias.

[16] Otro hecho destacable fue que la efervescencia de movimientos juveniles se concentrase en la música, la moda y otras facetas culturales, sin derivar en ningún tipo de transgresión política. Ni siquiera hubo revueltas estudiantiles como las que se produjeron en otros países europeos.

[17] Los conservadores obtuvieron el 46,4% de los votos y 330 diputados frente al 43,1% y 281 diputados de los laboristas. La debilidad de los liberales (7,5% y 6 escaños) seguía colocándoles al margen de las coaliciones de gobierno.

[18] En las dos elecciones de 1974, los laboristas subieron del 37% al 39% de votos, de 301 a 319 diputados, mientras que los conservadores cayeron del 38% al 37%, de 297 a 277 diputados. Los liberales tuvieron cuotas del 19-18%, pero

sólo 14 escaños.

[19] Políticos y economistas como Michael Foot, Tony Benn, Stuart Holland, Nicholas Kaldor y Wynne Godley se opusieron a ese viraje pero no tuvieron capacidad efectiva para impedirlo.

[20] El Partido Conservador obtuvo el 44% y 339 diputados frente al 37% y 269 del Partido Laborista. Los liberales siguieron siendo minoritarios con el 13,8% y sólo 11 diputados.

[21] Su líder, Karl Renner, dirigió en 1918 un gobierno de coalición con partidos del centro y de derecha, si bien las reformas estaban inspiradas principalmente por el núcleo más a la izquierda, conocido como «austromarxistas» (Max Adler, Rudolf Hilferding, Otto Bauer), cuyas tesis programáticas y prácticas combinaban posiciones radicales, afines a las propuestas por Marx y Engels, con posiciones más moderadas.

[22] El principal partido era el Socialcristiano, con un monseñor al frente del gobierno. Vetado su acceso al gobierno desde finales de los años veinte, el SPÖ mantuvo cuotas electorales por encima del 40% y estuvo en contra de la anexión alemana. La excepción fue Viena, donde los socialistas siguieron gobernando hasta 1934, haciendo de ella un modelo de progresividad fiscal, desarrollo de servicios públicos y planeamiento urbanístico.

[23] Las elecciones no se celebraron en la región del Sarre, bajo protectorado francés, ni en Berlín Oeste, con un estatus especial. Los diputados de esas zonas se fueron incorporando en elecciones posteriores.

[24] CDU-CSU obtuvo el 31% de los votos y 139 diputados; SPD 29% y 131 diputados; FDP 12% y 53; KPD casi 6% y 15; también tuvieron una pequeña presencia otros como el Partido de Baviera (BP), el Partido Alemán (DP) y Zentrum, que siguió existiendo durante un tiempo.

[25] Cada elector depositaba dos votos: uno para elegir de forma directa por mayoría relativa a un diputado por cada circunscripción, y otro para elegir de forma proporcional en cada estado (land) a los candidatos más votados de las listas (bloqueadas y cerradas) que obtuvieran un mínimo del 5% de los votos.

[26] Desde 1953 a 1965, el SPD había ido subiendo su porcentaje de votos (31%, 34%, 38% y 41%) y su presencia parlamentaria: 151, 169, 190 y 202

diputados.

[27] Varios atentados de ultraderecha agravaron el clima de indignación social contra la inacción de la policía y la permisibilidad de los partidos gobernantes a lo largo de 1967-1968.

[28] El SPD obtuvo el 43% de los votos y 224 diputados frente al 49% y 242 de CDU-CSU; FDP tuvo el 6% y 30 diputados.

[29] El SPD obtuvo el 46% de los votos y 230 diputados frente al 45% y 225 de CDU-CSU; FDP tuvo el 9% y 41 diputados.

[30] En las elecciones de 1976 y 1980, el SPD obtuvo el 43% y 44% de los votos, con 214 y 218 diputados, respectivamente; CDU-CSU logró 49% y 55%, con 243 y 226 diputados; FPD tuvo 8% y 11%, con 39 y 53 diputados. En 1980 hizo su aparición electoral el Partido de los Verdes, pero con el 1,5% de los votos no obtuvo representación.

[31] El Partido Comunista de Grecia había formado un ejército que hizo frente a la invasión alemana e italiana y logró liberar una parte del territorio griego, granjeándose el apoyo social y la incorporación de militantes y simpatizantes socialistas y liberales. Por su parte, el rey en el exilio y los partidos conservadores patrocinaron otra fuerza de resistencia, formada con la parte del ejército evacuada a Egipto y con apoyo de Gran Bretaña, pero inferior en número y con escasos resultados militares. Al finalizar la guerra, la pretensión de controlar el poder por ambas partes derivó en un choque frontal que se decantó en 1947 del lado monárquico gracias a la intervención del ejército británico y la ayuda financiera estadounidense, mientras que los comunistas, sin apoyo de la URSS, sólo recibieron ayuda de Yugoslavia. Previamente, en 1946, unas elecciones amañadas, sin participación de comunistas y socialistas, otorgaron la mayoría a una coalición conservadora que preparó un plebiscito, igualmente fraudulento, para restaurar la monarquía. La derrota militar de los comunistas fue seguida de su aplastamiento feroz, permaneciendo ilegalizados y perseguidos durante las siguientes décadas. La vida política quedó en manos de los partidos de derecha y centro-derecha, pero era el rey quien tomaba las principales decisiones y nombraba al jefe de gobierno; hasta que, en 1967, un golpe militar instauró una dictadura y mandó al rey al exilio.

[32] En las primeras elecciones celebradas después de la guerra, el Partido

Comunista de Finlandia obtuvo el 23,5% de los votos, mientras que los partidos comunistas de su entorno (en Dinamarca, Noruega, Holanda, Suecia y Bélgica) cosecharon porcentajes de voto del 10-12%, quedando al margen de los primeros gobiernos constitucionales.

[33] El PCF tuvo el 26% de los votos y 159 diputados, la SFIO 23% y 146, y el MRP 24% y 150. Los partidos del centro y la derecha sumaron 124 escaños, prosiguiendo el baile de siglas y alianzas ya conocido durante la tercera república.

[34] El PCF tuvo el 28% de los votos y 186 diputados, la SFIO 18% y 102, y el MRP 26% y 173.

[35] De manera descarada, se estableció una normativa especial para los departamentos de París y Seine-et-Oise, donde comunistas y gaullistas eran ampliamente mayoritarios. En ambos casos no se permitían listas de coaliciones y no se adjudicaban los escaños a quien tuviera la mayoría sino mediante reparto proporcional; lo contrario que en los demás distritos del país. Como consecuencia, cada escaño del PCF requería 52.000 votos frente a los 25.000-30.000 para los partidos de la coalición gobernante. De ese modo, el PCF obtuvo la tercera parte de votos y de escaños en París, mientras que en el resto de Francia, con el 25% de votos, sólo tuvo el 16% de los escaños. En las elecciones de 1953 y 1956 alcanzó el 25-26% del total, y su número de diputados pasó de 101 y 150.

[36] En las elecciones de 1953 y 1956 la SFIO redujo su presencia a 107 y 95 diputados, sucesivamente. En el mayor ejemplo de volatilidad política de aquel periodo, gracias a la fuga de votantes del MRP, una organización gaullista (RPR) emergió con gran fuerza en 1953, con el 22% de los votos y 120 diputados, pero se hundió en 1956, con sólo el 4% de los votos y 22 diputados. En esas elecciones los partidos de derecha y centro alcanzaron el 32% de los votos y 214 diputados frente al 27% de SFIO-Radicales con 172 diputados.

[37] En poco tiempo se hicieron públicas las barbaridades represivas cometidas por el ejército y su incapacidad para frenar el avance del FLN. Cuando el gobierno envió más tropas y se propuso ampliar la duración del servicio militar, se encontró con una creciente división social que se trasladó al interior del gobierno y de cada partido acerca de cómo afrontar la cuestión argelina.

[38] A mediados de mayo de 1958, De Gaulle se declaró «listo para asumir los poderes de la república». El 1 de junio, fue requerido por el presidente Coty como «el más ilustre de los franceses» y aceptó el nombramiento del parlamento como jefe del gobierno con la condición de disponer de plenos poderes para gobernar durante seis meses y para elaborar otra constitución.

[39] Volvió a los distritos uninominales cuyos escaños se adjudicaban por mayoría absoluta e incorporó una segunda vuelta a la que no podían acudir las opciones con menos del 5% de los votos (elevado al 10% desde 1966). Para reforzar su posición, en 1962 De Gaulle convocó un referéndum para cambiar la Constitución de modo que el presidente de la república fuera elegido por sufragio universal. Así, tras acceder a la presidencia en 1958 mediante un colegio electoral, en 1965 se mantuvo a través del sufragio directo. En la primera vuelta alcanzó el 45% frente al 32% de Mitterrand, mientras que en la segunda tuvo el 55% frente al 45%.

[40] En 1958, aunque la coalición en torno a la UNR logró una amplia mayoría, De Gaulle forzó a que la SFIO y el MRP se integraran en la «Mayoría por la Quinta República», que acaparó el 75% de los votos y el 97% de los escaños. En 1962, tras la victoria de una nueva coalición a partir de la UNR (55% de votos y 79% de diputados), la SFIO pasó a la oposición. En 1967, la coalición en torno a la UDR sumó el 53% de los votos y el 60% de los diputados.

[41] Esa mayor presencia estaba favorecida por el sistema electoral. En 1962 con menos del 15% de los votos logró 65 diputados, mientras que el PCF, con el 21%, tenía 41. En 1967, presentándose unida a otras fuerzas como la Fédération de la Gauche Démocratique et Socialiste, logró el 24% y 117 diputados mientras que el PCF, con el 21%, tenía 73.

[42] De forma desdeñosa, Tony Judt en Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, dice que mayo de 1968 fue una «imitación de atrezzo» de las revoluciones del siglo XIX.

[43] La coalición gaullista concentró el 47% de los votos y el 73% de los diputados, llegando al 81% con el apoyo de otras formaciones de derecha. El PCF mantuvo el 20% de votos y sólo obtuvo 34 escaños, mientras que la Fédération de la Gauche Démocratique et Socialiste, con el 21% de votos, tuvo 57 diputados. Sintomáticamente, la abstención fue menor que en elecciones anteriores.

[44] En 1973, la alianza gaullista, liderada por Georges Pompidou, concentró el 54% de los votos y casi dos tercios de los diputados, cayendo en 1978 al 50% de votos y el 59% de los escaños.

[45] En 1973 el Mouvement de Gauche Radical-Socialiste logró el 24% de los votos y 102 escaños, y en 1978 el PSF en solitario subió hasta el 28% de votos, pero se mantuvo en 104 escaños. El PCF registró porcentajes del 20% y el 18%, con 73 y 86 diputados. El conjunto de partidos de extrema izquierda sumó 190.000 votos (0,3%) en 1973 y después se acercó al millón de votos (0,8%). En las presidenciales de 1974 dos candidatos de extrema izquierda concentraron 700.000 votos (2,8%), además de otros 600.000 votos de las formaciones ecologistas.

[46] En la primera vuelta François Mitterrand superó holgadamente al primer candidato de la derecha, Valéry Giscard d'Estaing (43% vs. 32%), pero en la segunda venció Giscard gracias al agrupamiento de los votos del centro y la derecha (50,8% vs. 49,2%).

[47] Los 6 diputados iniciales que tuvo el PSI en 1892 se elevaron a 32 en 1900, 74 en 1913 y 156 en 1919, convirtiéndose en la principal fuerza política, pero una coalición de partidos de centro y derecha no le permitió gobernar. En el último año citado, el triunfo del PSI fue rotundo en regiones como Emilia-Romagna (60% de votos), Piamonte (50%) y Lombardía (46%).

[48] Las elecciones de 1921 volvieron a refrendar al PSI como partido más votado, con el 24,5% votos y 123 diputados, pero por debajo de la alianza del Partido Popular y el Bloque Nacional, que sumaban el 39% y 213 diputados. El Partido Comunista, recién formado y liderado por Amadeo Bordiga, sectario hasta el extremo, consiguió 300.000 votos y 15 escaños.

[49] El sistema de reparto de escaños era directamente proporcional a los votos. La DC obtuvo el 35% de los votos y 207 diputados, el PSIUP 21% y 115, y el PCI 19% y 104. La otra cuarta parte se repartía entre liberales, monárquicos, regionalistas sicilianos y otros.

[50] La Central Intelligence Agency (CIA) se estrenó en la labor de manipular situaciones políticas en países extranjeros. Financió principalmente a la DC, pero también a los partidos liberal y republicano. Fueron célebres las continuas campañas de radio anunciando los horrores que se producirían si ganaba el

Frente Democrático Popular formado por socialistas y comunistas, mientras las tropas norteamericanas realizaban exhibiciones de su capacidad militar, el Vaticano anunciaba excomuniones, el gobierno prevenía contra el corte de las ayudas del Plan Marshall y los grupos fascistas cometían atentados y provocaciones. Décadas después quedó demostrado que en aquellos años se organizó la «Red Gladio» en la que los servicios secretos estadounidense e italiano, junto con grandes empresarios, políticos, mandos militares y policiales, intelectuales, partidarios monárquicos y fascistas, tenían previsto varios operativos ante una hipotética victoria electoral del FDP.

[51] La DC obtuvo el 48,5% de los votos y 305 diputados frente al 31% y 186 diputados del FDP; la escisión Unidad Socialista logró el 7% y 33 diputados, repartiéndose el resto entre los partidos liberales, republicanos, regionalistas y monárquicos.

[52] La DC obtuvo siempre porcentajes de votos en torno al 40% y 260-270 diputados, a los que sumaba 50-60 de sus aliados, hasta que el PSI se convirtió en su principal socio aportando 60-75 diputados –si bien su crecimiento electoral lo hizo a costa de los otros pequeños partidos–. El viraje de 1963 ocasionó una escisión en el PSI por la izquierda que recuperó el nombre de PSIUP, pero la debilidad política de ese partido le hizo desaparecer en 1972.

[53] Con inusitada franqueza, en varios artículos publicados en Rinascita en 1964, Amendola reconocía los escasos logros de los partidos obreros occidentales, tanto socialistas como comunistas, en la realización del proyecto socialista, defendiendo que ya no tenían sentido las razones de la ruptura producida entre ambas tendencias y que el modelo soviético tampoco servía.

[54] Berlinguer acompañó su propuesta con una nueva valoración de la DC, según la cual no era un partido conservador ni defendía solamente los intereses de la burguesía, sino que representaba también a grupos sociales que formaban parte de las capas medias y de la clase obrera. También aceptó la pertenencia de Italia a la OTAN.

[55] Esos grupos emprendieron una cadena de atentados terroristas, varios de ellos sangrientos, que sirvieron de coartada para que policías y jueces se los imputaran al movimiento autonomista y aumentasen las represalias. De paso, aquella «estrategia de la tensión» servía también para canalizar el miedo contra el PCI y mantenerle alejado del poder estatal.

[56] El rechazo frontal de la dirección del PCI hacia los nuevos movimientos fue uno de los motivos de la disidencia planteada por un pequeño pero relevante grupo de intelectuales (Magri, Rossanda, Pintor, Castellini) que, tras ser expulsados, crearon Il Manifesto. Cuando fracasó su apuesta electoral en 1972, con apenas 220.000 votos (0,7%) y sin representación parlamentaria, participaron en la creación del Partido de Unidad Proletaria por el Comunismo (PUPC), junto con los restos del PSIUP y varias organizaciones surgidas de los movimientos estudiantiles. Después de las elecciones de 1976, una parte de aquellos intelectuales volvió al PCI.

[57] Tras convertirse en partido político, Democrazia Proletaria se presentó en 1979 con una nueva coalición de partidos de extrema izquierda (NSU), pero sin el PUPC, siendo este último el que mantuvo el medio millón de votos y los 6 diputados, mientras que NSU obtuvo menos de 300.000 votos y se quedó sin presencia en el parlamento.

[58] La excepción fue la cierta ascendencia que alcanzó el Partido Radical en sus campañas relacionadas con la defensa y la ampliación de las libertades personales.

[59] Una prueba de la distinta fuerza real que tenían el Partido Campesino (PSL) y el Partido Obrero Unificado se pudo de relieve cuando este segundo forzó al gobierno provisional a convocar un referéndum para aprobar su propuesta de reforma agraria y de nacionalización de la industria. El rechazo promovido por el PSL contra esa propuesta hizo que los resultados fueran un sonoro fracaso para las pretensiones comunistas.

[60] Yugoslavia fue la excepción notable en diversos aspectos. Su primer gobierno provisional surgió de un pacto directo entre el Partido Comunista, que lideró la lucha contra el ejército alemán, y el gobierno monárquico en el exilio, apoyado por Gran Bretaña. El segundo aceptó que el nuevo gobierno estuviera formado en una proporción de dos a uno a favor de los comunistas bajo la dirección de Tito. El gobierno colaboró con la URSS, pero en todo momento dio prioridad a la autonomía nacional de sus decisiones. El descontento de los dirigentes de la URSS con esa autonomía, y la sospecha de que Tito pretendía ampliar su influencia hacia los Balcanes (Grecia, Bulgaria, Albania), condujeron a un choque de intereses en el que se gestaron otras dos novedades relevantes: el carácter federal de la organización del Estado y el funcionamiento autogestionario de los centros de trabajo, si bien en ambos aspectos los

dirigentes comunistas mantenían un estricto control sobre las principales decisiones. Cuando las demás formaciones políticas decidieron no presentarse a las elecciones, los comunistas alcanzaron una hegemonía plena e instauraron un sistema dictatorial.

7. La senda de los partidos obreros hacia el ocaso: doblando la esquina de la historia

Si la salida de la Segunda Guerra Mundial alumbró una Europa con características muy distintas a las que tenía en las décadas anteriores, algo similar cabe decir del viraje que experimentaron la economía, la sociedad y la política europeas a partir de la situación creada tras la quiebra de los fundamentos de la Edad de Oro. Sucedió sin que se produjera una tragedia militar como aquella guerra mundial, pero con efectos quirúrgicos no menos traumáticos si se considera la envergadura que, en las décadas posteriores, han tenido las convulsiones en las estructuras económicas, las relaciones sociales y los escenarios políticos, con consecuencias letales para los partidos socialistas y comunistas.

Como en épocas anteriores del capitalismo, los hechos que jalonaron esas transformaciones estuvieron marcados por dos tiempos complementarios. Un tiempo de ruptura, en el que las principales características de las décadas doradas fueron desapareciendo o mutando con nuevos rasgos. Y un tiempo de encaje constructivo, en el que se configuraron nuevas características, fruto de los cambios tecnológicos e institucionales que se producían en todos los órdenes de la sociedad. Ambos tiempos estuvieron condicionados por dinámicas que acontecían en cada espacio nacional a la vez que por factores que afectaron a todo el espacio capitalista europeo. Entre estos, unos se gestaron en el propio ámbito continental, como fueron la reunificación alemana y los derroteros de la Unión Europea, mientras que otros lo excedían, como fueron la desaparición de la URSS y su bloque de dominio, la emergencia de la potencia china y el vuelco de las relaciones internacionales.

Por orden de aparición, es preciso destacar en primer lugar la modificación radical de las relaciones económicas a escala mundial, si bien en su caso no se trató de un episodio puntual en el tiempo sino que, con ciertas raíces en las décadas doradas, los cambios terminaron de gestarse a caballo de los años setenta y ochenta, y se fueron consolidando en las siguientes décadas. Tras la quiebra de la Edad de Oro, las incertidumbres que se cernían sobre el sistema monetario, la parálisis que atenazaba al comercio internacional y las

restricciones a los movimientos financieros saltaron por los aires con la abrupta irrupción de Margaret Thatcher y Ronald Reagan como líderes políticos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Los dos gobiernos anglosajones promovieron una contundente liberalización comercial y financiera de sus economías y lograron que la apertura de las relaciones exteriores se generalizara a la mayor parte de las economías a escala mundial; con el monocorde apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE. En un contexto tecnológico fuertemente innovador, la apertura externa aceleró la expansión de las compañías transnacionales, la internacionalización de los procesos productivos, el rápido aumento de los intercambios comerciales y la superlativa ampliación de los negocios financieros. En adelante, los espacios nacionales, las políticas económicas y el ejercicio del poder político de los gobiernos europeos se verían cada vez más condicionados por el funcionamiento de los mercados internacionales.

En segundo lugar, formando parte de esa liberalización, los líderes europeos acordaron que el siguiente paso para avanzar en la integración de la Comunidad Económica Europea fuese el funcionamiento de mercados plenamente desregulados, tanto para los bienes y servicios como para los capitales, seguido de la creación de un espacio monetario común y de la sucesiva ampliación del número de países miembros de lo que pasó a denominarse Unión Europea. La alternativa liberalizadora que eligieron para incrementar la integración implicó un amplio repertorio de restricciones para las políticas económicas y para el funcionamiento de las economías en el marco interno de cada país. Mientras la pretendida unidad política que sobrevendría a esa integración económica siguió sin arrojar resultados importantes.

En tercer lugar, a finales de los años ochenta se derrumbaron los sistemas totalitarios basados en el dominio del Partido-Estado. Primero fue en Polonia, Hungría y Checoslovaquia; después, el proceso se generalizó al resto de los países del bloque, incluyendo el desguace de la Unión Soviética. Los nuevos gobernantes orientaron sus estrategias hacia la integración con las economías occidentales y la construcción de sistemas políticos basados en la democracia parlamentaria, si bien sus respectivos procesos de cambio arrastraran notables lacras debidas al atraso acumulado y a la querencia por utilizar mecanismos de dominación propios del pasado totalitario. El derrumbe abrió la oportunidad de desarrollar el perímetro de los negocios privados y de ampliar el espacio de integración europea, a la vez que disipó la amenaza soviética que había condicionado la política internacional y distintas facetas de la vida interna de los

países europeos occidentales.

En cuarto lugar, en el contexto de aquel derrumbe se produjo la rápida reunificación de las dos alemanias, RFA y RDA. La primera absorbió a la segunda, tanto en términos económicos, como sociales y políticos. Muchos parámetros de la vida europea se modificaron a raíz de la unificación, comenzando por los que experimentó la antigua RFA. Una vez consolidada la unidad, emergió una Alemania desprovista de los complejos políticos heredados de la Segunda Guerra Mundial y dispuesta a hacer valer en la política europea y en las instituciones de la UE la fuerza que le otorgaba su potencia económica.

En quinto lugar, las reformas económicas introducidas en China condujeron a su rápida incorporación a los mercados internacionales, siguiendo la estela iniciada por otras economías de Asia Oriental y bajo el férreo control de los dirigentes políticos. La consolidación de los cambios internos y de la inserción exterior convirtió a China en una potencia mundial cuya relevante posición contribuía a empequeñecer más la endeblez de las economías europeas en los mercados mundiales, con la excepción del creciente peso de la economía alemana.

Fueron cinco grandes novedades que condicionaron el discurrir de las transformaciones internas de los países europeos. Desde los años ochenta, la historia dobló una nueva esquina, el capitalismo adoptó un nuevo régimen de acumulación y atrás quedó la mayoría de las características establecidas durante la Edad de Oro. Como si de un espejo caído se tratara, su rotura dejó hecho añicos el intenso crecimiento de la productividad y de la renta, el pleno empleo, el pacto por el reparto de la renta, la regulación de la economía en el espacio nacional y a cargo de los poderes políticos nacionales. Se acabaron las garantías de un ascenso paulatino de los ingresos, la capacidad de consumo y las protecciones públicas para el conjunto de los ciudadanos. Concluyó así el periodo caracterizado por una economía europea boyante en la escena mundial, un contrato social cívico que vinculaba a Estado y ciudadanos y una estabilidad social consensuada para beneficio de los distintos grupos sociales. Cesó el espejismo de un capitalismo socialmente amigable e ignorante de los límites biofísicos del planeta. Se disiparon los elementos que habían hecho posible los hitos logrados y quedó al desnudo la indigencia estratégica de los partidos obreros como fuerzas de cambio social.

EL VÉRTIGO DE LAS TRANSFORMACIONES

No resulta fácil ordenar el encadenamiento de secuencias que han ido produciéndose en la economía, la estructura social y la escena política de los países europeos desde los años ochenta. Tampoco lo es el entrelazamiento de causas y efectos en cada uno de esos ámbitos y entre unos y otros. Por mi parte, cada intento que he realizado desde finales de los años ochenta[1] siempre me ha dejado un punto de insatisfacción, bien sea por defecto, cayendo en la cuenta de las lagunas que dejaba de tratar, bien por exceso, ante las dudas que suscitaba el modo de formular ciertas cadenas de secuencias y ciertos vínculos de causalidad. Sin embargo, es preciso persistir en el esfuerzo analítico con el propósito de establecer un cuadro integral y consistente de las características que han ido adquiriendo las sociedades europeas en las que se han desenvuelto los partidos obreros durante las últimas décadas.

Economía internacionalizada, financiarizada y liberalizada

El recuento detallado de los cambios habidos en la economía a partir de la crisis internacional de los setenta pone de manifiesto el gran número de novedades que han ido presentando las economías europeas con respecto al capitalismo de la Edad de Oro. Desapareció la economía fordista y los círculos virtuosos que entrelazaban la productividad y el reparto de la renta, el consumo estandarizado y el salario, el reparto de la renta y la demanda agregada, la dinámica interna y el sector exterior, las innovaciones tecnológicas y las instituciones nacionales. En su lugar, entre las múltiples novedades aparecidas, cinco fenómenos merecen una atención específica por ser los mayores responsables de la convulsión experimentada por las estructuras económicas: la internacionalización del conjunto del proceso económico, el dominio de las finanzas, el funcionamiento de mercados desregulados, la privatización de empresas y servicios públicos, y el apogeo de la avidez consumista.

La internacionalización del proceso económico se inició en las décadas doradas cuando las grandes empresas industriales empezaron a instalar filiales

productivas y redes comerciales en distintos países. Primero lo hicieron mediante formas de organización horizontal, fabricando el mismo tipo de productos en varios países para venderlos en distintos mercados. Después se organizaron de forma vertical, de manera que un mismo producto era fabricado segmentadamente, por fases, entre las filiales ubicadas en distintos países. Al cabo del tiempo, esa dimensión internacional se hizo predominante en la mayoría de las actividades productivas, determinando las características de los flujos de comercio exterior, condicionando la distribución de la renta y determinando el destino de las inversiones. De ese modo, la dinámica de acumulación del capitalismo se recompuso a escala internacional y el protagonismo de la producción, la distribución de la renta y la acumulación de capital pasó a corresponder a las grandes empresas industriales, comerciales y financieras de carácter transnacional. Estas han ido siendo las que principalmente han definido el perímetro en el que se desenvuelve cada economía nacional, diseccionando las facetas del proceso económico que se desarrollan dentro de las fronteras y su conexión con las que se desarrollan en los demás espacios nacionales.

El dominio de las finanzas en el proceso económico remitía también en sus primeras expresiones a las décadas doradas, cuando las grandes empresas encontraron nuevas formas de gestionar sus ingresos y de financiar sus inversiones, a la vez que los bancos y las grandes fortunas hallaban nuevas vías para rentabilizar su riqueza financiera. En el transcurso de las siguientes décadas, los grandes cambios habidos en el sector financiero han hecho que una gran parte de las actividades de producción, distribución de renta y acumulación estén condicionadas por las decisiones que toman los bancos y otras instituciones que movilizan el capital financiero. Los mercados financieros internacionales, a través de sus operaciones, sus instrumentos y sus agentes, determinan en gran medida el comportamiento de las economías nacionales.

Los mercados desregulados fueron configurándose al compás de que los intercambios de bienes, servicios y capitales iban funcionando sin las normas reguladoras que regían en las décadas doradas. La decisión correspondió a los gobernantes de cada país, si bien es cierto que lo hicieron bajo presión o en colaboración de los grandes grupos empresariales y de los organismos internacionales que enarbolaban el discurso liberalizador. La Unión Europea se sumó a ese discurso en la segunda mitad de los años ochenta y lo abrazó definitivamente en la década siguiente. A veces el argumento utilizado era la necesidad de eliminar o modificar ciertas restricciones que no se correspondían

con los tiempos o que podían derivar en problemas adicionales. Con mayor frecuencia, la liberalización pasó a ser un mantra con el que, de forma genérica, se aludía a las ventajas innatas de los mercados libres para favorecer la eficiencia productiva y el crecimiento de las economías. En su nombre, las relaciones laborales, el comercio de bienes y servicios y la movilidad de los capitales fueron quedando desprovistas de normativas que regulasen su desenvolvimiento.

La privatización de empresas y servicios públicos inició su andadura bajo las mismas premisas que la liberalización, pretendiendo justificar que el Estado no debía realizar determinadas actividades ni incurrir en ciertos gastos, que se juzgaban como innecesarios o contraproducentes para el funcionamiento de la economía. Al cabo del tiempo, se pudo apreciar que el alcance de tales proposiciones era mucho mayor y respondía directamente a una combinación de motivaciones ideológicas y lucrativas. La merma de algunas actividades a cargo de los poderes públicos implicaba la desprotección de colectivos sociales vulnerables, como eran los desempleados y las familias con bajos ingresos. La desaparición de otras actividades suponía la venta de empresas estratégicas y el abandono de la provisión de servicios públicos a favor de los negocios privados. De ese modo podían producir, gestionar o comercializar bienes y servicios que hasta entonces escapaban de sus manos o no respondían a sus intereses.

El apogeo del consumo inducido sentó sus bases en la Edad de Oro conforme fue en aumento la compra masiva de bienes duraderos estandarizados, principalmente automóviles, electrodomésticos y otros artículos domésticos. Junto con ciertos servicios y una mayor disponibilidad de alimentos y vestimentas, esos bienes duraderos componían la norma de consumo fordista a la que se podía acceder mediante el incremento de los salarios y las mayores facilidades financieras. Al cabo del tiempo, el acceso masivo se extendió a muchos otros bienes (electrónicos, químicos, mecánicos) y servicios (viajes, cuidados personales). Diferentes según los géneros, los tramos generacionales –desde la infancia a la vejez– y los segmentos de renta, abarcando de manera multifacética todas las esferas de la vida personal, desde las relaciones familiares, afectivas, culturales, sexuales, religiosas y otros espacios de ocio y esparcimiento. Un consumo ávido que se iba convirtiendo en una exigencia rutinaria para la mayoría social y comportaba la continua reposición o rotación de productos. La amplificación permanente de la demanda privada contribuía a reproducir la «producción de lo superfluo» como elemento fundamental de la dinámica de acumulación de capital.

Los cinco fenómenos apuntados corrían parejos con otro conjunto de hechos de los que no eran los únicos responsables, pero sí condicionantes destacados merced a la incidencia que iban teniendo en la dinámica general de los países. Primero, las economías europeas han venido creciendo a un ritmo bastante menor que en las décadas de la Edad de Oro. Segundo, la productividad del trabajo ha ido aumentando débilmente a pesar de las grandes innovaciones tecnológicas con las que contaban esas economías. Tercero, la industria manufacturera ha perdido bastante peso relativo[2], merced a la reducción de las escalas productivas (en capital y empleo) de las grandes empresas, cuya actividad se ha trasladado parcial o totalmente a otros países. Cuarto, la desigualdad en la distribución de la renta ha experimentado un notable aumento, tanto en términos de reparto entre salarios y beneficios, como en términos de los hogares clasificados según sus ingresos. Quinto, el clima de inestabilidad y elevada incertidumbre se ha intensificado, teniendo como principal foco la volatilidad de los mercados financieros y afectando a la producción y el comercio. Sexto, el estallido recurrente de crisis económicas remite a las interacciones negativas que se generan entre la insuficiencia de demanda, el reparto de la renta y la expansión de las finanzas. Rasgos que se exacerbaron durante las recesiones que tuvieron lugar a comienzos de cada una de las tres décadas desde los años ochenta, alcanzando una dimensión ostensiblemente mayor la que se desencadenó a partir de 2009.

La constatación de esas debilidades productivas y esa inestabilidad suscita no poca perplejidad cuando se considera que han ido sucediéndose en un periodo caracterizado por grandes innovaciones tecnológicas[3] que han modelado muchas de las características actuales de las economías europeas. El desarrollo tecnológico ha desplazado la frontera productiva, ampliando su potencial y modificando profundamente los qué, cómo y dónde producir. Ha abierto la posibilidad de que las empresas puedan ofrecer infinidad de gamas de bienes y servicios intermedios, que a su vez multiplican las variedades de productos finales, con menores costes, mejor calidad y mayor rapidez. Ha hecho posible la fragmentación técnica de los procesos de producción, separando sus fases en distintos espacios geográficos. Ha proporcionado equipos de transporte que amplían la movilidad del comercio de productos a mayores distancias, con más rapidez y menos costes. Ha dado lugar a sistemas de comunicación que favorecen la capacidad de transmitir datos, sonidos e imágenes en condiciones hasta hace poco desconocidas.

La convulsión desatada por esa onda tecnológica explica también que la

industria europea haya adelgazado su tamaño y haya afilado su especialización conforme las grandes empresas han ido virando sus estrategias hacia la formación de cadenas productivas internacionales. Mientras, las finanzas han adquirido una dimensión descomunal, por su tamaño internacional y por las múltiples formas de condicionar la mayoría de las actividades económicas. Todo ello ha redundado en una sucesión de novedades que aportan importantes ventajas relativas a la mayor amplitud de conocimientos, comodidades, salud y otras facetas para quienes vivimos en esta época. A la vez que grandes ventajas para los mayores detentadores de capital, ahora transnacional, y la consolidación de unas relaciones netamente asimétricas con respecto a los demás colectivos sociales.

Desarme social de lo colectivo

La organización social ha conocido modificaciones estructurales de similar alcance. Siendo numerosas y diversas, cabe destacar la influencia de tres fenómenos principales que han operado como vectores causales para determinar una resultante decisiva: el desarme de la capacidad de reacción colectiva de los trabajadores. Primero, la desproletarización del empleo. Segundo, la identificación de la posición social a través del consumo. Tercero, el deterioro del estado de bienestar.

En primer lugar, la desproletarización del empleo ha trabado el desarrollo del movimiento obrero hasta eliminar su protagonismo en la dinámica social. Este ha sido probablemente el fenómeno de mayor significación histórico-política entre los muchos cambios acecidos en las últimas décadas, en la medida en que ha impactado en la línea de flotación del buque insignia de la tradición socialista: los obreros fabriles que se concentraban por miles en grandes empresas dedicadas a fabricar productos siderúrgicos, mecánicos, químicos, barcos, locomotoras y otros, bajo condiciones de organización, disciplina, horarios y remuneración relativamente homogéneas. Un colectivo que nunca llegó a ser la mayoría numérica de los asalariados, pero que tuvo un gran crecimiento y, sobre todo, fueron sus demandas, sus sindicatos y sus movilizaciones las que ejercieron como catalizadores y aglutinadores de los grandes movimientos de trabajadores a favor de los derechos laborales, sociales

y democráticos.

Tras el obrero característico de los tiempos de la Revolución industrial, la organización fordista del trabajo había aportado un segundo arquetipo de obrero fabril. La articulación entre talleres y tareas segmentadas que componían las cadenas de montaje de aquellas fábricas con grandes escalas de producción, generó nuevos rasgos tendentes a la uniformidad a la vez que otras características que acentuaban la especialización y la diversidad entre los obreros. Los mecanismos de negociación que fijaban las pautas salariales y demás elementos laborales favorecían la afiliación sindical, la celebración de asambleas masivas y otros comportamientos colectivos en los que se sustentaba la generalización de huelgas y otras acciones cooperativas de los obreros de diferentes empresas, ramas y territorios.

Desde los años ochenta, ese proletariado fabril fue quedando diezmado en su número y alterado en sus características. Dos elementos abrieron el camino de la desproletarización del empleo –el rápido descenso del número de asalariados en las fábricas y la decreciente proporción de obreros vinculados a los trabajos directos de fabricación manufacturera–, y un tercero –la debilidad negociadora– marcó la senda hacia el eclipse de las pautas que aglutinaban a los colectivos fabriles y, por extensión, la dinámica social del conjunto de los trabajadores.

La generalización de procesos productivos basados en la mecanización automática y el traslado a otros países de industrias enteras o de fases amplias de esos procesos de producción, provocaron un sensible adelgazamiento de las plantillas fabriles, junto con la menor concentración en fábricas de gran tamaño y la desaparición de muchas empresas que habían forjado un tejido industrial a su alrededor en las regiones donde se hallaban aquellas grandes fábricas. Las nuevas tecnologías fueron modificando las características técnicas y laborales de quienes trabajaban en la industria, promoviendo una polarización hacia dos tipos de trabajos: unos cada vez más cualificados debido a las máquinas y los conocimientos técnicos requeridos por la producción; otros, de escasa cualificación, ocupados en tareas auxiliares simples merced al uso de esas nuevas tecnologías. Ambos tipos de trabajos, bajo nuevas formas de organización, rompían con las características de los obreros del capitalismo fordista. Los viejos polígonos industriales pasaron a formar parte de la arqueología del capitalismo y sus grandes superficies encontraron usos distintos. Muchas tareas de gestión y administración que se realizaban en aquellas empresas fueron externalizadas a empresas de servicios contratadas al efecto, en

el mismo país o en otros.

Al cabo del tiempo, el empleo industrial ha ido siendo una parte cada vez más minoritaria en el conjunto del empleo asalariado. La gran mayoría de los trabajadores ha ido formando parte de la amplísima diversidad de empresas dedicadas a servicios, cuya gama de actividades se multiplica hasta el infinito. Con profesiones y cualificaciones dispares, lo mismo que las formas de organizar el trabajo, las categorías jerárquicas, el tamaño de los establecimientos, las condiciones laborales y los métodos de retribución salarial. Un universo asalariado netamente adverso para que se identifiquen intereses comunes, para que se vertebren movilizaciones reivindicativas y para que se articule su presencia colectiva en la sociedad.

La desproletarización y la heterogeneidad entre los asalariados serían factores suficientes para entender el debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores, pero a ellos se agrega la combinación de otros dos aspectos que han ennegrecido y lesionado más esa capacidad: el comportamiento de la productividad y la internacionalización de las empresas. De un lado, el lento crecimiento que ha ido registrando la productividad del trabajo propendía al incremento de la pugna por el reparto de una renta que crecía con lentitud. De otro lado, empresarios y asalariados se han presentado en condiciones muy desequilibradas para desarrollar esa pugna distributiva, ya que la dimensión internacional de uno y la ubicación microempresarial del otro les colocaban en escenarios asimétricos. Las grandes empresas lo hacían desde una escala internacional y con vocación expansiva, mientras que los trabajadores lo hacían a escala local, ramal o, cada vez más, de cada empresa.

La apertura exterior de las economías otorgó a las grandes empresas plena libertad de movimientos tanto para decidir sus estrategias productivas –creando o comprando nuevas empresas, contratando a otras– como para realizar los intercambios comerciales y negociar con activos financieros. De ese modo, han combinado el diseño de estrategias globales con otras implementadas de manera específica para las filiales localizadas en distintos países. Mientras que los trabajadores se han limitado al marco estricto de cada empresa, forzados a competir a la baja en sus reivindicaciones, pues de otro modo los empresarios podrían decidir deslocalizarse a otro país, o que las inversiones previstas se efectuasen en la filial del lugar donde los empleados estuvieran dispuestos a rebajar sus demandas. Esa asimetría también ha arrastrado a los trabajadores de empresas que no eran compañías transnacionales y, más aún, a las de menor

tamaño, ya que la apertura de las economías acentuaba la competencia externa –en la que predominaban las grandes transnacionales–, quedando sometidos a restricciones similares de su capacidad negociadora.

Se comprende así que las organizaciones empresariales rechazaran los pactos sociales basados en un reparto compensado de las mejoras de la productividad y las concesiones recíprocas, aceptando únicamente acuerdos nacionales y/o ramales en los que los sindicatos se plegaban a las condiciones empresariales. En caso contrario, las negociaciones se realizaban a escala de cada empresa, a sabiendas de la decreciente fuerza reivindicativa y organizativa de los trabajadores. Los sindicatos quedaban desarbolados y su posición negociadora describía una lánguida trayectoria de «hoy me opongo a lo que terminaré aceptando mañana». Un trayecto repleto de derrotas y concesiones, autoalimentado con la desazón que ello provocaba en los núcleos de dirigentes y afiliados sindicales que, tiempo atrás, eran combativos y estaban más organizados.

El poder económico de los empresarios quedó exento de cualquier tipo de temor a conflictos que pudieran perturbar su dominio, siendo la mayor prueba de ello el modo en que se naturalizó, a escala social, que las posiciones empresariales no sólo eran incuestionables sino que repercutían en provecho de toda la sociedad. En el lado de los trabajadores, la debilidad llevaba aparejado el enraizamiento de una segmentación cada vez más radical. Ciertos grupos podían seguir logrando aumentos de salarios y otras mejoras y derechos laborales; otros mantenían sus niveles salariales cediendo derechos; otros se incorporaban al mercado de trabajo con peores salarios y contratos sin apenas derechos; y otros permanecían largo tiempo en situación de desempleo (obreros industriales de mayor edad) o no podían acceder a un primer empleo (jóvenes, mujeres, emigrantes). Estos últimos nutrían las franjas de trabajadores cuyos salarios no garantizan los estándares vitales, siendo cada vez más abundantes incluso en economías fuertes como las de Gran Bretaña, Alemania y Francia, con contratos de corta duración, carentes de derechos y fácil despido.

Desproletarización, heterogeneidad superlativa, estamentos segmentados, mínima capacidad de movilización, endeblez sindical y debilidad negociadora son las notas características que marcaron la despedida histórica del movimiento obrero como colectivo determinante de la dinámica social desde las últimas décadas del siglo XIX. Tal vez, la expresión más desilusionante de ese ocaso sea constatar cómo los medios de comunicación, los empresarios, muchos

economistas, o incluso ciertos trabajadores, se refieren a las mejoras salariales y a los contratos que reconocen los derechos laborales como si se tratara de privilegios limitados a ciertos grupos de asalariados. O bien el modo tan habitual con el que se ensalzan los buenos resultados empresariales, vinculando el aumento de los beneficios con la contención de los salarios, la reducción de plantillas y la restricción de los derechos laborales.

Un segundo fenómeno que opera en el desarme de lo colectivo es el que se refiere a la identificación de la posición social a través del consumo. Un fenómeno que alcanza a todos los grupos de edades y al conjunto de los ámbitos de la vida personal, que contribuye a profundizar la pérdida de identidad de los trabajadores como colectivo laboral y traslada su depósito de expectativas a la esfera del consumo, acentuando la pretensión de acceder a un flujo estandarizado y creciente de bienes. Así lo requiere el desarrollo de la producción de lo superfluo y la incesante obsolescencia programada por las empresas, y así lo difunden los mecanismos de propaganda, desplazando continuamente el menú de productos a través de una vivaz rotación y de inducir a la compra de otros nuevos. Tal y como empezó a visualizarse décadas antes, el tiempo de no trabajo equivale a una sucesión de momentos destinados a comprar y consumir bienes y servicios no básicos como si se tratasen de necesidades cotidianas[4].

Cada persona se ubica como comprador-consumidor, según los productos que posee y a los que aspira, difuminando su condición como asalariado-productor que realiza una actividad económica formando parte de un colectivo laboral. Las pautas culturales entronizadas por los medios de comunicación convierten esa avidez de consumo en una sensación de «gozosa subalternidad», un simulacro de «reino del hedonismo» que confecciona un imaginario en el que la búsqueda de bienestar, placer o diversión parece responder a decisiones libremente elegidas, cuando en realidad está severamente regimentada por mecanismos de dominio ideológico. La atracción por las grandes marcas y la renovación incesante de modas ejercen de señuelos, presentando como elecciones personales lo que son decisiones gregarias que responden a actitudes ideológicas alimentadas de manera permanente. Los comportamientos imitativos y manipulados quedan ocultos detrás de la creencia en la autonomía personal de las decisiones de compra, ante panoplias de productos que resultan imprescindibles para que se reproduzca la producción de lo superfluo y se ahonde la banalización tanto de la vida personal como de los comportamientos sociales.

La constatación de una creciente desigualdad social y la reducida movilidad

vertical de la sociedad –que debería ser promovida por los ingresos y las mejoras sociales– quedan sustituidas por una sensación de nivelación y movilidad ascendente a través del consumo. Las tarjetas prepago para uso de niños, los tenderetes de objetos mercantiles en torno a las iglesias y la utilización permanente de los teléfonos móviles –convertidos en cordón umbilical de las relaciones sociales– son tres exponentes modélicos del trastocamiento de los valores y actitudes que rigen la presencia de sujetos sociales convertidos en compradores-consumidores.

El tercer fenómeno que interviene en el proceso de desarme de lo colectivo ha corrido a cargo del deterioro del estado de bienestar. La crisis de los años setenta conllevó un primer cerco de dificultades, debido tanto al menor crecimiento económico como a las presiones que recibía el presupuesto estatal con el aumento de ciertos gastos públicos –sobre todo la cobertura del creciente desempleo– y las resistencias que encontraba el aumento de la presión fiscal. Años después, el estado de bienestar fue sometido a un intenso asedio en bastantes países, derivado en parte de los cambios estructurales de la economía y en parte de la drástica modificación de la correlación de fuerzas a favor de las grandes empresas y las fortunas personales. Contrarias a las políticas de protección social y a pagar más impuestos, esas empresas y fortunas encabezaron la oposición al aumento del gasto público, argumentando que no era viable en momentos de crisis (que, a su juicio, requerían austeridad) ni se podía sostener desde el punto de vista fiscal, además de atentar contra el funcionamiento virtuoso de los mercados.

Establecían así una amalgama que juntaba argumentos de coyuntura con criterios de política fiscal, con tesis macroeconómicas acerca de cómo generar crecimiento y bienestar social, y con postulados ideológicos vinculados a sus intereses particulares. Los argumentos acerca de la coyuntura y las posibilidades fiscales podían someterse a contraste empírico para evaluar su grado de validez, pero no así los postulados ideológicos acerca de las funciones que el Estado debía desarrollar, ni las bondades intrínsecas de los mercados, ni la prioridad que debían tener los negocios privados, ya que respondían a principios doctrinarios de imposible contraste, defendidos por planteamientos conservadores e intereses lucrativos.

Ciertamente, la desaceleración del crecimiento, el mayor desempleo y la internacionalización de la economía generaban desventajas para el desarrollo del estado de bienestar. Tampoco era desdeñable la evidencia de signos de ineficacia

redistributiva que mostraban algunas partidas de gastos, ni la presión ejercida por la composición demográfica de unas sociedades europeas cada vez más envejecidas, con alrededor del 15-20% de mayores de 65 años. Pero, a la postre, el factor más decisivo contra el estado de bienestar fue el viraje de las políticas económicas, después de desprenderse del anterior compromiso con el pleno empleo, la redistribución de renta y la gestión del ciclo económico. El control de los salarios, la reducción del gasto público, el impulso de la movilidad internacional del capital, la privatización de empresas y servicios, y la prioridad unilateral hacia la estabilidad monetaria, sentenciaron la menor capacidad del Estado para proporcionar prestaciones monetarias, suministrar servicios públicos universales, aportar estímulos a la demanda agregada y captar los ingresos necesarios. No obstante, el grado de retroceso registrado por las distintas facetas de la protección social arroja diferencias sensibles entre países, dependiendo del nivel que previamente habían alcanzado sus respectivos estados de bienestar y de la intensidad con la que se han aplicado esas políticas económicas.

Los gobiernos nacionales se vieron afectados por una especie de trastorno de personalidad disociada. De un lado, sus decisiones liberalizadoras desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de los mercados internacionales, la expansión de las relaciones financieras y la ampliación de los negocios privados hacia empresas y suministros que antes eran de carácter público. De otro lado, las medidas desreguladoras, los mercados internacionales y la prominencia de las finanzas han ido constriñendo los instrumentos en manos de los gobiernos para cumplir las funciones que les habían legitimado y prestigiado décadas atrás, cuando influían en el impulso de la economía, evitaban comportamientos indeseados de los mercados y suministraban protección social.

De ese modo, la ruptura de los pactos sociales en detrimento de los salarios, y de los compromisos políticos en detrimento de la protección social, suponía una vuelta atrás en los afanes redistributivos de la Edad de Oro. El lento crecimiento de los salarios se convirtió en una restricción al aumento de la demanda de consumo, haciendo imprescindible que los mecanismos financieros hicieran viable ese incremento del consumo a costa de elevar la carga financiera de muchas familias. A la vez, la prominencia de los mercados financieros y la preferencia de las grandes empresas por realizar sus inversiones fuera de los países europeos desarrollados dañaban el volumen de inversiones internas que impulsaran el crecimiento. El menor dinamismo de la demanda agregada interna provocaba la desaceleración de la producción y situaba a las economías europeas ante un dilema: crecer creando empleo, a costa de un débil aumento de la

productividad, o apostar por actividades que generasen mayores incrementos de productividad, a costa de crear pocos puestos de trabajo.

Poder político aprisionado por la economía

La escena política de los países europeos experimentó sacudidas igualmente sísmicas, estrechamente enlazadas con las transformaciones económicas y sociales expuestas y con decisivas implicaciones para los partidos obreros. La internacionalización del proceso económico, la primacía de las finanzas, los mercados desregulados y demás cambios económicos convergían con la heterogeneidad del universo de asalariados, los descompromisos sociales del Estado, el reenfoque de la política económica, el decantamiento de la correlación de fuerzas a favor de las grandes empresas y la preeminencia de nuevos mecanismos inhibidores de la acción colectiva. La vida política quedaba marcada por las exigencias de un capitalismo áspero cuyos criterios de eficiencia y objetivos de rentabilidad no encajaban con la cultura de los pactos y compromisos establecidos durante la Edad de Oro. El poder político, plasmado a través del funcionamiento de las instituciones del Estado y vehiculado por los partidos, dejó de ejercer varias de sus funciones previas que revertían a favor de la cohesión social y la legitimación del sistema político. Se convirtió en un poder inaprensible, difícil de precisar su radicación y plegado a las exigencias de una economía cuya dinámica estaba determinada fundamentalmente por decisiones transnacionales.

Los gobiernos y otras instituciones estatales amputaron tres funciones centrales. La función normativa, que les había permitido regular los mercados; la macroeconómica, que les dotaba de herramientas para intervenir en el ciclo de crecimiento; y la redistributiva, que les permitía garantizar protección a los colectivos ciudadanos más desfavorecidos. Esas funciones mutaron en otras a favor de los negocios privados, la estabilidad monetaria a cualquier precio y la beligerancia en la pugna distributiva. El camino emprendido por la Unión Europea, a raíz de la creación del mercado único y del espacio monetario del euro, fomentó la internacionalización, la liberalización y la pérdida de autonomía económica de los Estados miembros. En ese transcurso, entraron en juego los elementos retóricos de la ideología dominante haciendo uso de una intensa

perversión del lenguaje. Los gobiernos promovían políticas de rentas que sólo se referían al control de las rentas salariales, sin medidas similares para los beneficios y las rentas de capital. Gobiernos y empresarios apostaban por una flexibilidad de los mercados que consistía en eliminar normas que limitaban la libertad de acción de las empresas. Impulsaban una modernización de la administración pública que se agotaba en medidas destinadas a la reducción de gasto público y a cambios organizativos meramente ornamentales. Patrocinaban reformas estructurales que siempre se sustanciaban en la reducción de derechos laborales y sociales adquiridos. Clamaban por ganar competitividad y eficiencia, que se traducía en ajustes de plantillas, limitaciones salariales, reducciones de impuestos y mayor liberalización de los mercados. La fidelidad a esos principios por parte de los gobiernos difuminó las líneas de demarcación entre conservadores y socialistas, siendo cada vez más difícil establecer distinciones significativas entre sus programas, siempre orientados al corto plazo, y más aún entre las leyes y las acciones prácticas emprendidas.

La otra clave del dominio ideológico radica en la manipulación del usuario-consumidor como sujeto descolectivizado. La falsa imagen creada por la posibilidad de elección ante un elenco de productos ha ido aliñada con un conjunto de retóricas vertidas mediante un vocabulario trivial y eufemístico que ensalza la presunta personalidad y responsabilidad de los consumidores. La fusión de contenidos banales y de formatos efímeros ha cultivado la profunda enajenación de un magma social compuesto por individuos dotados de un conocimiento distorsionado de la realidad social, narcotizados por el temor a perder el universo de consumo que poseen –y que aspiran a elevar–, socialmente inactivos y políticamente conservadores.

La suma de los mecanismos inhibidores y las inercias generadas por las transformaciones producidas durante estas últimas décadas –en ausencia de fuerzas contrarrestantes de cierta entidad– diluye las responsabilidades por los peores efectos que genera la dinámica capitalista, a la vez que evita la conformación de movimientos importantes de contestación. A pesar de que el dominio de la economía corresponde a las grandes empresas y se genera principalmente a través de los mercados internacionales, a la hora de encontrar a los responsables de la desaceleración en el crecimiento, de las crisis y el desempleo, de la mayor desigualdad social y demás desperfectos, han sido los gobiernos quienes han quedado señalados y a quienes los ciudadanos pasan factura en las elecciones. Como por birlibirloque, los dirigentes empresariales, que son quienes toman las decisiones que determinan el curso de la economía,

han quedado al margen de esas responsabilidades. Un hecho reiteradamente constatado que pone de manifiesto la existencia de un velo ideológico que coloca fuera de los focos sociales, y por supuesto de los medios de comunicación, cuáles son las relaciones de poder económico, quiénes lo ostentan y cuáles son las consecuencias de sus decisiones.

Sin embargo, ni los velos ideológicos ni la carencia de movimientos de oposición de gran envergadura han podido evitar que se desarrolle un malestar social incubado al calor de la insatisfacción generada por las medidas monocordes de las políticas económicas, los desperfectos sociales y el emborronamiento de las líneas de separación entre opciones políticas, como indicativo de la falta de alternativas efectivas. Un malestar latente que obedece al serio deterioro, próximo a la ruptura, del «contrato cívico» por el que el orden social garantizaba un horizonte de progreso para la mayoría social basado en el incremento de los ingresos, de la capacidad de consumo y de las protecciones públicas. Un contrato que está cuestionado por el funcionamiento de la economía y por la actuación de un poder político sometido a ese capitalismo áspero y transnacional.

El malestar social, como término antónimo al del bienestar social, condensa las insatisfacciones materiales y sentimentales que amplios sectores sociales han acumulado según se iban lesionando esos tres pilares, ocasionando un rebrote de las bolsas de pobreza y mayor desigualdad distributiva. Malestar acrecentado por la desatención política y la displicencia de los gobiernos que se han ido sucediendo, incapaces o inapetentes para revertir esas pérdidas y para proponer un horizonte creíble en el que recuperarlas y después mejorarlas.

Cerrado el horizonte para amplios segmentos sociales, en particular para importantes contingentes juveniles, el malestar emerge a la superficie de forma discontinua y pluriforme. A veces surge como rechazo contra ciertos conflictos bélicos, a favor de la paz y el desarme militar; contra el cambio climático y demás agresiones ambientales, a favor de la integración con el entorno biofísico; contra las represiones sexuales, familiares o de conciencia, a favor de la extensión de las libertades personales; contra la discriminación de las mujeres, a favor de la igualdad de género. Expresiones todas ellas que han seguido desarrollando movimientos cuyas dinámicas son diferentes, atraen aspiraciones de distintos segmentos sociales, no siempre fáciles de conjuntar entre sí y aun de articular con las demandas sociolaborales de los trabajadores y con los apremios de los colectivos precarios que tienen mínimos ingresos y prestaciones públicas.

Otras veces el malestar se expresa de manera abrupta y temerosa contra las instituciones, la cultura y la ciencia, los partidos políticos y el sistema parlamentario; o bien contra los emigrantes y ciertas minorías étnicas. Un cóctel al que más recientemente, a raíz de las actuaciones del terrorismo de matriz islamista, se han sumado la aceptación de mayores controles policiales y los peores sentimientos de miedo y xenofobia en los que hurgan sin límite las posiciones más reaccionarias.

El epicentro político generado por el malestar social es la crisis de representatividad con la que esos amplios sectores ciudadanos señalan su alejamiento con respecto a las instituciones del sistema político democrático. Son muchas las situaciones en las que se pone de manifiesto que los partidos, el parlamento, los órganos de justicia o la celebración de elecciones quedan lejos de los intereses de esos sectores. Con sorprendente rapidez se acortan las distancias que existen entre la decepción, la desconfianza y el rechazo franco a esas instituciones por considerarlas ajenas e inoperativas para resolver las reclamaciones. Un alejamiento que también involucra a las instituciones europeas, empeñadas en acaparar atribuciones y en condicionar las acciones nacionales desde posiciones netamente conservadoras y sin estar sometidas a un control democrático digno de tal calificativo.

Las expresiones relativas a «ellos y nosotros» se nutren de las huellas que van dejando el funcionamiento mortecino de las instituciones, la corrupción rampante, los comportamientos de doble rasero, el enrocamiento en posiciones desgastadas, la reiteración de un lenguaje vacío y la evidencia de que muchos problemas se aletargan sin solución. Huellas sintomáticas que forman parte del proscenio de un escenario político que, entre bastidores, alberga causas sobre las que generalmente el foco de la crítica social apenas arroja luces: oligarquías poderosas que mantienen el poder, sociedades heterogéneas que no satisfacen las aspiraciones mayoritarias de los ciudadanos, fracturas en la cohesión social, idiotizadora cultura de consumo y opciones gobernantes incapaces de alentar nuevos horizontes.

Las costuras crujen pero no llegan a rasgar las vestimentas. Las fuerzas sostenedoras del sistema político entonan periódicamente el mea culpa ante la mayor abstención electoral y otras muestras de desinterés social, pero a continuación su única apuesta es continuar bajo las mismas coordenadas políticas. En frente, posiciones críticas que reiteran sus denuncias, pero carecen de resortes con los que activar y organizar el potencial de respuesta que late en

torno al malestar social.

EL RECORRIDO DE LA INDIGENCIA ESTRATÉGICA A LA INANIDAD POLÍTICA

«Hasta cierto punto los socialistas vivimos en una simbiosis con el capitalismo […]. La crisis actual del capitalismo es al mismo tiempo una crisis de la sociedad industrial, y es nuestra tarea rescatar a esta sociedad. Hoy en día debemos no sólo defender la sociedad industrial sino también ayudarla a que se siga desarrollando y tenga bases más profundas»[5]. Esta frase pronunciada en 1976 por Olof Palme, el líder socialista sueco, sirve bien para situar la encrucijada en la que se encontraban los partidos socialistas antes de que se adentraran en un viaje hacia la oscuridad. Su contenido era meridianamente lúcido, reconociendo que vivían en simbiosis con el capitalismo industrial. De un lado, el desarrollo capitalista de las décadas doradas había fortalecido la presencia social del núcleo fundamental de su base política, el proletariado fabril, que había sido el sustento principal de las grandes conquistas sociales y democráticas. De otro lado, el desarrollo socialista había promovido los pactos sociales y los compromisos políticos que habían servido como resortes de crecimiento para consolidar la dinámica de acumulación del capitalismo durante la Edad de Oro.

Ese maridaje estaba en peligro desde los años setenta, cuando la crisis puso en cuestión la continuidad de la estructura industrial del capitalismo europeo y la base social de los socialistas, amenazando con provocar una conmoción en los cimientos de la escena política y los hitos conseguidos. Por esa razón, Palme apostaba por defender la economía y la sociedad fordistas, una aspiración que después se revelaría como inviable. Ni la trayectoria capitalista ni los partidos obreros pudieron preservarlas. La vorágine de transformaciones económicas, sociales y políticas alumbró una dinámica capitalista muy distinta, adversa para las posiciones socialistas y comunistas. A la vez, la actuación de estos partidos se encargó de elevar más la montaña de obstáculos contra su propia historia.

Agotando su función histórica

Las transformaciones económicas y sociales fueron acumulando malas noticias para los partidos obreros. La fuerza de los sindicatos se desinflaba como consecuencia de la desproletarización del trabajo, la diversidad reinante entre los asalariados, la posición asimétrica en la pugna por el reparto de la renta y demás elementos adversos. El espacio nacional, como marco central para el desenvolvimiento de la acción política, se vio cada vez más condicionado por la internacionalización del proceso económico y la creciente influencia de fuerzas transnacionales. El poder político del Estado y su acción legitimadora del orden social mermaron conforme decrecían sus funciones normativas, macroeconómicas y redistributivas. Atrás quedaron los pactos sociales y los compromisos políticos entre fuerzas relativamente compensadas; sustituidos por disputas desiguales que reflejaban una clara superioridad de los empresarios y de los partidos conservadores. Así ocurría tanto en la esfera económica, con respecto al reparto de la renta y a las políticas económicas, como en las medidas de carácter social y político. Los estímulos a la acción colectiva sucumbían ante los cambios en la estructura social, la cultura del consumo ávido y los demás mecanismos inhibidores que dominaban los comportamientos sociales.

No obstante, esas transformaciones y los efectos señalados no operaron de manera externa a los partidos socialistas, ya que la mayoría de estos participaron –y algunos de ellos fueron protagonistas– de los gobiernos que fomentaron la liberalización, la internacionalización de la economía, las políticas económicas, las medidas laborales favorables a los empresarios y las políticas sociales que lastraban al estado de bienestar. Ciertamente, los partidos socialistas no obraron de forma mimética, por lo que cabe establecer grados de intensidad y matices diferenciales entre unos y otros, así como entre la mayoría de ellos y los partidos conservadores. De manera general, los gobiernos socialistas mostraron un menor celo monetarista en el enfoque de la política económica, una mayor atención al cuidado de ciertas prestaciones sociales y una menor presteza en la liquidación de derechos.

Sin embargo, los matices pierden relevancia cuando se trata de confrontar la posición adoptada por todos los partidos socialistas ante la desaparición de la causa común que les unía con el capitalismo industrial y con la base social que les otorgaba su confianza electoral para llevar adelante aquel contrato social.

Con la mirada permanentemente puesta en el corto plazo electoral, se vieron agobiados por la catarata de grandes cambios que trascendían ese corto plazo. Fue así como se revelaron, en primer término, las consecuencias de la indigencia estratégica que arrastraban desde las décadas doradas. Sin proyecto ni discurso, eran incapaces de ofrecer alternativas a la segmentación de los asalariados para soldar la creciente fractura que se abría entre los grupos de trabajadores que mantenían su estatus de ingresos y derechos laborales, y quienes quedaban desposeídos de dicho estatus. Sólo con nuevos proyectos y discursos habrían podido mantener la defensa del colectivo de trabajadores y reconfigurar su movimiento como columna vertebral de la dinámica social. Pero, en realidad, hacía tiempo que la mayoría de los partidos socialistas había abandonado esa función catalizadora entre los trabajadores.

Otro tanto les sucedía con respecto al universo ciudadano por el que habían sustituido al de los asalariados como apuesta sociológico-electoral. La indigencia estratégica les privaba de alternativas que ofrecer a una base ciudadana defraudada por la erosión del contrato social que garantizaba un progreso paulatino. Los socialistas carecían de propuestas con las que afrontar los perjuicios que ocasionaba a una parte importante de esos ciudadanos la quiebra de la tendencia ascendente de los ingresos, el mantenimiento de las aspiraciones de consumo a costa de endeudarse y los pasos atrás en el estado de bienestar. Tampoco tenían propuestas con las que responder a la banalización cultural y social que arrastraba consigo la avidez consumista y demás mecanismos de dominio ideológico. Ni tenían propuestas para integrar las mejores aportaciones de los movimientos que ponían el acento en los derechos igualitarios de las mujeres, la adecuación de los parámetros económicos y sociales a las condiciones biológicas y físicas del planeta, y políticas exteriores cooperativas que alejaran los riesgos de conflictos militares.

La indigencia estratégica les impedía comprender la dimensión que alcanzaban las rupturas que se estaban produciendo, la profundidad del desarme social de lo colectivo y las dinámicas fracturadas que se ponían en marcha. El malestar social requería de fuerzas políticas con voluntad, conocimiento y capacidad para contrarrestar el dominio de aquellas tendencias económicas, sociales, ideológicas y políticas. Sin nada que proponer en ese sentido, sin atisbo de inclinación hacia una acción política encaminada a afrontar esa realidad, los dirigentes socialistas profundizaron su orientación hacia aquello para lo que sí se habían preparado durante las décadas previas: el ejercicio del poder político mediante la apuesta electoral por conseguir mayorías gobernantes. Con la malaventura de que

incluso ese poder político se hallaba cuarteado por las fuerzas que dominaban la economía internacionalizada y financiarizada. Siendo así, los partidos socialistas asumieron como razón de Estado la «razón económica» que fomentaba su plena aquiescencia con los poderes dominantes, pasando a ser gestores de un capitalismo mal avenido con las preocupaciones sociales.

Por tanto, efectivamente tocaba poner el reloj en la hora del tiempo histórico que se vivía durante las décadas finales del siglo XX. Y lo hicieron aceptando y no cuestionando las características de la nueva dinámica capitalista; apoyando sus consecuencias y no proponiendo reformas para contrarrestarlas; posicionándose del lado del poder dominante y no colocándose del lado de sus damnificados. Alineados con las posiciones del poder dominante, se produjo la paradoja de que las decisiones de muchos gobiernos socialistas contribuyeron a reducir los márgenes de actuación en cada espacio nacional, a disminuir la capacidad de acción del Estado, a debilitar la fuerza sindical y a erosionar el estado de bienestar. Todo lo cual debilitaba la base social en la que se sustentaba su fuerza política y electoral. Pasaron a defender el mismo enfoque que los conservadores acerca de los objetivos de la política económica: la subordinación a la lógica del beneficio privado, el ensalzamiento de las virtudes intrínsecas de los mercados, criterios convencionales sobre la competitividad y el modo de entender la eficiencia de la economía.

Puestos a ello, ahondaron en la misma visión conservadora del orden social y del ejercicio de la democracia política, dejando de lado cualquier tipo de participación activa de los ciudadanos, así como en una política internacional netamente alineada con las posiciones de EEUU como potencia hegemónica del orden capitalista mundial. Sin olvidarse de acompañar esa actuación, sobre todo en determinados momentos conmemorativos, con vagas alusiones genéricas a la igualdad, la solidaridad, el progreso y otros términos siempre válidos para toda persona biempensante. Expresiones desnutridas de cualquier contenido que tuviera correspondencia con las actuaciones prácticas que llevaban a cabo.

Hacía décadas que llegar al poder político, aunque estuviera cuarteado, había dejado de ser un medio desde el que impulsar iniciativas reformadoras para convertirse en el fin mismo de la acción política. Alcanzar parcelas de poder, a través del gobierno, el parlamento y demás instituciones, implicaba un denodado esfuerzo por mantenerlas con el objetivo de que después pudieran ser aumentadas Un trucaje entre medios y fines que resultaba satisfactorio tanto para curtidos políticos profesionales como para otros advenedizos y futuros aspirantes

a ostentar cargos públicos. En ese sentido, era coherente que el funcionamiento interno de los partidos socialistas fuera un pantano desértico, carente de debates sobre el contenido estratégico y práctico de sus acciones, servil a las exigencias electorales más inmediatas. Como también era coherente que, una vez en sus cargos, esos políticos socialistas siguieran la estela tradicional de los conservadores en la adopción de actitudes, lenguajes y gestualizaciones.

Emprendieron así el tramo final de un recorrido que les conducía desde la decadencia, que iniciaron al renunciar a cualquier propósito transformador, hacia la inanidad política en la que incurrían al abandonar la pretensión de pugnar por conseguir reformas sociales de cierto alcance. El último peldaño de la caída consistió en adoptar medidas regresivas que perjudicaban tanto las condiciones laborales de los trabajadores como las aspiraciones económicas y sociales de una parte importante de los ciudadanos. Con esas medidas, los partidos socialistas llegaban exhaustos al ocaso de su trayectoria histórica, perdiendo su función histórica como defensores de los trabajadores. Los dirigentes y los amplios grupos de cuadros intermedios que ocupaban parcelas institucionales del Estado ejercían, efectivamente, poder; pero lo hacían sin señas que les identificasen con los trabajadores. Por más que en el interior del partido siguieran existiendo cuadros y militantes crédulos a tales señas, o que cuando los partidos están en la oposición se permitan hacer promesas veleidosas que recuerden tiempos pasados. Pero lo cierto es que la lánguida vida orgánica de los partidos ha seguido de espaldas a la necesidad de formular una estrategia y emprender una línea de acción política con pretensiones transformadoras. Una vez regresados al poder, han persistido en la inanidad política, mientras que su reconversión ideológica acentúa las afinidades con los partidos conservadores a propósito del funcionamiento de la economía, el ordenamiento social y el sistema político.

Un siglo después de que se formasen aquellos partidos obreros, el hecho de que personajes como Tony Blair y Gerhard Schröder hayan liderado a los laboristas británicos y a los socialistas alemanes, respectivamente, sólo cabe considerarlo como una patética broma con la que la historia ha querido dar muestras del triste ocaso de esos partidos. Como traca de despedida, faltaba una vuelta de tuerca más a raíz de la última crisis económica.

Naufragio socialista

La crisis manifestó su mayor crudeza a partir de 2009, poniendo de manifiesto los graves defectos con los que se había construido la Unión Europea desde mediados de los años ochenta, contando ya entonces con una amplia participación de líderes socialistas de distintos países. El punto de arranque fueron los acuerdos que diseñaron la creación de un mercado único y después la unión monetaria como ejes centrales de una Unión Europea basada en la plena movilidad de los bienes, servicios y capitales, y dotada de una moneda dirigida por el Banco Central Europeo (BCE). Antes y después de la creación del euro, las elites políticas que dirigieron esa construcción, con sus respectivos economistas de cabecera, no mostraron ninguna atención a las consecuencias que tendría una integración en la que se mantenían fuertes diferencias estructurales y macroeconómicas entre los países miembros. La credulidad en las virtudes de un espacio común liberalizado y con una misma política monetaria les mantuvo ignorantes o despreocupados de los efectos que acarreaba el aumento de las diferencias tecnológicas, productivas, comerciales, laborales y sociales entre las economías integradas[6].

El curso del tiempo, en menos de una década, se encargó de desvelar las consecuencias de esa Unión Europea construida de un modo tan sesgado hacia la liberalización de los mercados y hacia una dinámica económica estrechamente dependiente de los mercados financieros. La UE funcionaba como una máquina de crear heterogeneidades que ampliaban las diferencias entre las economías más fuertes y las más débiles, acrecentando la desigualdad de sus capacidades productivas, comerciales y financieras[7].

La crisis estalló en Europa bajo el impacto de la que previamente se inició en Estados Unidos. La parálisis financiera arrastró la caída de la producción, la contracción de la demanda interna, el aumento del desempleo y demás secuelas críticas. La elevada concentración de los intercambios comerciales y financieros dentro del espacio regional hizo que las interacciones negativas repercutieran de unas a otras economías nacionales. Las carencias institucionales de la UE impedían que hubiera resortes con los que afrontar la crisis financiera y los efectos de la recesión. En esa encrucijada, se revelaron dos hechos políticos fundamentales que marcaron la actuación de la UE: la nula disposición a compartir responsabilidades y esfuerzos para afrontar la crisis, y la mínima disposición a modificar, salvo detalles de segundo rango, las características de la construcción europea.

La Comisión Europea y el BCE asumieron con ello las dos tesis principales de las elites políticas alemanas, secundadas por los dirigentes de otros países, tanto por socialistas, como por liberales y conservadores. Primera, únicamente las economías deudoras eran las responsables de sus deudas. Segunda, las consecuencias de la recesión debían afrontarse mediante políticas ortodoxas de ajuste monetario. Por lo tanto, ninguna responsabilidad para los bancos acreedores que habían concedido créditos sin el debido respaldo, ni para los gobiernos que se lo habían permitido, ni para los dirigentes europeos, ni para el funcionamiento del espacio integrado.

Las economías del norte y centro mantuvieron un rigor presupuestario que les condenaba a un bajo crecimiento, mientras que las economías meridionales –sin posibilidad de recurrir al BCE u otra institución europea como prestamista de última instancia– se vieron atrapadas en una sucesión de crisis entrelazadas, de modo que la quiebra financiera y la depresión económica se vieron acompañadas de una aguda crisis fiscal y de una crisis de sobreendeudamiento[8]. A continuación, cuando esas crisis se habían hecho más profundas, la Comisión y el BCE (también el FMI) decidieron conceder varios paquetes de ayudas financieras para reflotar a los bancos de los países meridionales (también de Irlanda), imponiendo a los gobiernos dos condiciones: asumir las pérdidas derivadas del salvamento de los bancos privados y aplicar duros programas de austeridad con los que garantizar la devolución de la deuda externa[9]. De forma descarada, las autoridades europeas se inmiscuyeron en las políticas internas de esos países controlando la actuación de los gobiernos nacionales, imponiendo un cambio de gobierno en Italia y entrometiéndose en los procesos electorales de esos países.

Esa línea de actuación se mantuvo durante casi cuatro años, salvo en Grecia, donde los controles y las actuaciones punitivas prosiguieron en los siguientes años. La situación comenzó a virar a finales de 2012, cuando el nuevo gobernador, Mario Draghi, alteró drásticamente la política monetaria del BCE. Siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal de EEUU, puso en marcha un vasto programa de expansión monetaria mediante la compra masiva de deuda pública y también de deuda de bancos y empresas, aportando un enorme caudal de financiación hacia las economías europeas. No obstante, el mal ya estaba hecho por partida múltiple.

Las instituciones europeas habían mostrado su claro decantamiento a favor del poder de Alemania, de los grandes bancos y de las posiciones ideológicas

conservadoras. El crecimiento europeo siguió siendo reducido a la vez que aumentaba la heterogeneidad de las economías europeas. Los costes sociales del ajuste fueron notables en casi todos los países, llegando a la exageración en aquellos en los que la dureza de la austeridad provocó descensos de los salarios reales y pérdidas de programas sociales. Ninguna de las tenues reformas que después han aprobado las instituciones de la UE (algunas de ellas reversibles y otras inoperantes) apunta a cambios importantes en el funcionamiento del espacio integrado. Casi una década después de que estallara la crisis, la Unión Europea sigue carente de propuestas destinadas a mejorar la integración de sus miembros. Parece un espacio desvencijado, incapaz de generar los resortes que permitan mayor crecimiento, fortalecer su posición en la economía mundial y defender a las mayorías sociales de cada país.

La pésima actuación de las instituciones comunitarias y de los gobiernos nacionales indica que los partidos socialistas han tenido una gran responsabilidad en todo lo sucedido desde que se establecieron los pilares de una integración europea basada unilateralmente en la liberalización de los mercados. Los dirigentes del Partido Socialista Francés cobraron un activo protagonismo en la aprobación del Acta Única y del Tratado de Maastricht, lo mismo que otros dirigentes socialistas que participaron en el diseño práctico del BCE y la gestión de la moneda única siguiendo los cánones alemanes. Como se muestra más adelante, varios partidos socialistas gobernaban en sus países con políticas económicas fieles al enfoque liberal, encargándose de poner en marcha las medidas favorables a la libre movilidad de los productos y de los capitales, la pérdida de soberanía nacional sobre la moneda y las restricciones presupuestarias.

Una vez que estalló la crisis, los socialistas que formaban parte de los distintos órganos de poder de la UE cerraron filas para imponer aquella lectura unilateral de la crisis, seguida de la aplicación generalizada de políticas de ajuste y la imposición de severas medidas de austeridad en los países meridionales. La mayor responsabilidad podría particularizarse en los miembros socialistas que formaron parte de la Comisión Europea y de la dirección del BCE, y en los que participaban como ministros de Economía en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, y en el informal pero poderoso Eurogrupo, bajo la presidencia del impresentable Jeroen Dijsselbloem, ministro socialista del gobierno holandés.

Sin embargo, tal concreción en los cargos que han ostentado las máximas responsabilidades en los organismos europeos no ignora que el naufragio

socialista fue generalizado, tanto a escala europea como al frente de los países en los que estaban gobernando, tanto por lo que hicieron como por lo que dejaron de lado. En ninguna instancia, desde la Internacional Socialista, pasando por el grupo socialista en el parlamento europeo y demás órganos comunitarios, y llegando hasta los respectivos espacios nacionales, los partidos socialistas dieron una mínima prueba de que disponían de propuestas diferentes a las que imponían los líderes democristianos alemanes, los dirigentes de los grandes bancos y compañías transnacionales, y los mercados financieros internacionales. De hecho, por enésima vez, los líderes socialistas ni siquiera fueron capaces de establecer posiciones unitarias a escala europea, cuando era en ese escenario donde se dirimían las posiciones ante la crisis. Sin potencia de pensamiento, sin estrategia alguna y en la inanidad política, los socialistas identificaban sus ideas, su radio de acción y sus medidas con los dictados establecidos por los poderes que dominan la economía y la sociedad.

MODALIDADES DE TRAYECTOS HACIA EL OCASO

Los rasgos comunes que han caracterizado el recorrido por la decadencia y hacia el ocaso de los partidos obreros se yuxtaponen a los rasgos específicos con que cada partido ha deambulado en su país. La variedad de trayectos queda patente en los cinco casos que se analiza en este apartado: el tránsito de los partidos socialista y comunista de Francia después de la breve experiencia del gobierno de izquierda; el liberalismo thacherista asumido por el laborismo en el gobierno; los retrocesos de los partidos con robustas estructuras industriales y fuertes estados de bienestar, como Alemania y Suecia; la autoflagelación de los comunistas italianos; y las ilusiones malgastadas de los partidos de los países meridionales que transitaron desde dictaduras a sistemas democráticos, como Portugal y Grecia; también España, pero este caso se analiza de manera extensiva en los dos próximos capítulos.

El vacío que siguió al breve gobierno de izquierdas en Francia

La última aparición en el escenario europeo de un gobierno portador de reformas profundas se produjo en la primavera de 1981, tras la victoria de François Mitterrand en las elecciones presidenciales seguida del triunfo de la coalición PSF-PCF en las legislativas[10]. A lo largo de los años setenta, el renovado PSF había logrado encabezar sucesivas coaliciones socialistas con las que llegó a superar en votos al PCF. Entonces abandonó la postura tradicional de la SFIO y se mostró dispuesto a colaborar con los comunistas para presentar una alternativa conjunta de gobierno. El PCF aceptó negociar un programa común, para lo cual dejó de lado algunas de sus propuestas más radicales.

Las elecciones presidenciales de 1981 invirtieron los resultados que se habían registrado siete años atrás. En la primera vuelta, los partidos coaligados presentaron a sus propios candidatos y Mitterrand obtuvo un porcentaje de votos levemente inferior al que logró el principal candidato de la derecha, Giscard d’Estaing. En la segunda vuelta, le superó con el apoyo de todas las opciones de izquierda y centro izquierda[11]. Un mes más tarde, las elecciones legislativas ratificaron el triunfo de la coalición PSF-PCF en torno al Programa Común. Debido a la desproporcionalidad del sistema electoral, la coalición tuvo una victoria más rotunda en escaños (68%) que en votos (54%), con una abrumadora mayoría de diputados socialistas y una presencia menor de comunistas y miembros de otras formaciones aliadas[12].

A pesar de que el Partido Comunista volvía a participar por tercera vez en un gobierno, después de las remotas experiencias del Frente Popular en 1936-1938 (apoyo externo) y del gobierno de coalición de 1944-1947, las elecciones parecían ser una encrucijada de la que salían dos caminos bien distintos, uno de ascenso para los socialistas y otro de descenso para los comunistas. Estos tendrían cuatro ministros en el gobierno presidido por el socialista Pierre Mauroy, pero ese hecho no ocultaba que habían perdido casi dos millones de votos y más de cuarenta diputados con respecto a las elecciones de cuatro años antes. Ahora, el PSF aventajaba al PCF en 5,4 millones de votos, y en el parlamento la relación numérica era de seis diputados socialistas por cada diputado comunista.

El programa común contenía una fuerte crítica al capitalismo y apostaba por el desarrollo de una «vía francesa al socialismo». Para ponerla en marcha, teniendo en cuenta el contexto recesivo en el que se hallaban la economía francesa y el conjunto de las europeas, el gobierno estableció tres ejes: la expansión de la demanda, la aplicación de reformas (laborales, sociales y fiscales) y la

nacionalización de grandes empresas estratégicas. En el terreno político, se propuso ampliar los derechos civiles, junto con otras medidas como la abolición de la pena de muerte y el comienzo de una fuerte descentralización administrativa.

Las primeras medidas adoptadas fueron la elevación del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 39 horas por semana, la mejora de las pensiones y de otras prestaciones sociales, la concesión de una quinta semana de vacaciones pagadas, el anticipo de la edad de jubilación y la aplicación de un impuesto sobre la riqueza para el 15% de los hogares con mayores ingresos. Otras medidas de política económica se orientaban a facilitar el crédito para incentivar el consumo y la inversión privada, mientras que el notable aumento del consumo y la inversión pública cumplía con la idea keynesiana de utilizar el gasto estatal como impulsor de la recuperación de la demanda agregada. En el terreno de las nacionalizaciones, optó por concentrarse en el sector financiero poniendo bajo control estatal 39 bancos, a la vez que en cinco grandes empresas industriales de sectores estratégicos: química (Rhône-Poulenc), metalurgia (Pechiney), materiales de construcción (Saint Gobain), electrónica (Thomson) y electricidad (Compagnie Générale d’Électricité); además de otras de alimentación, siderurgia y armamento que ya contaban con la participación del Estado en su propiedad.

La novedad del programa no residía en su contenido, pues las medidas nacionalizadoras, las políticas expansivas de demanda y las reformas sociolaborales y fiscales ya habían sido llevadas a cabo por otros gobiernos europeos durante la Edad de Oro. Lo novedoso estaba en el carácter integral de su formulación y, sobre todo, en el momento en el que se aplicaba. El programa se inscribía dentro de un discurso de transformación en el que las medidas acordadas pertenecían a una primera fase y tendrían continuación en fases posteriores. Parecían escapar a la mera retórica que había caracterizado a los enunciados electorales de muchos partidos obreros, cuya acción práctica poco tenía que ver con los grandes propósitos que proclamaban ocasionalmente en sus documentos.

El momento más que novedoso resultaba insólito. En esos primeros años ochenta, los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos estaban iniciando su ofensiva internacional a favor de las políticas ortodoxas de ajuste monetario, la liberalización de las relaciones económicas, la expansión de los movimientos financieros y la privatización de empresas y servicios públicos. Es decir, el

camino antagónico al que propugnaba para Francia la coalición socialista-comunista. A favor de la ofensiva thatcherista-reaganiana estaban los grandes capitales, los organismos internacionales (FMI, BM, OCDE) y los ideólogos que predicaban las bondades del enfoque liberal, lo que, por supuesto, compartían las elites políticas y económicas francesas, firmemente opuestas a las medidas del gobierno de coalición.

Se trataba, por tanto, de un pulso desigual que, a la luz de lo que sucedería en los dos años siguientes, no parece que los líderes socialistas y comunistas hubieran previsto, o al menos no se habían preparado para afrontar tal grado de oposición interna e internacional. Al cabo de pocos meses constataron que se hallaban ante dos dilemas que requerían de respuestas rápidas. Por un lado, las medidas expansivas no estaban proporcionando un crecimiento rápido, pero sí generaban tensiones monetarias cuya corrección (tipos de interés al alza) podría repercutir negativamente sobre la demanda y retardar la recuperación del crecimiento. Por otro lado, la reacción de los mercados internacionales y de los capitales internos contra las escasas oportunidades de rentabilidad de las inversiones financieras afectaba al comercio exterior y a la depreciación del franco, fomentando la salida de capitales franceses y frenando la entrada de capitales extranjeros. Ambos dilemas cuestionaban la posibilidad de hacer compatibles el crecimiento, la estabilidad de precios, la contención del déficit fiscal, la implementación de las reformas, la expansión del comercio exterior, la estabilidad del franco y la gestión de los movimientos externos de capital.

La primera respuesta del gobierno fue confirmar su apuesta inicial, para lo cual introdujo medidas administrativas para controlar los movimientos financieros con el fin de moderar las tensiones alcistas sobre los tipos de interés y de limitar la salida de capitales. Sin embargo, las inercias de la dinámica económica y las actuaciones premeditadas de las fuerzas hostiles siguieron intensificando las tensiones que afectaban a la inflación, la tasa de cambio del franco, las exportaciones y la fuga de capitales nacionales. En la superficie de la economía, los problemas afloraban en forma de desajustes macroeconómicos internos (precios, déficit fiscal) y externos (déficit por cuenta corriente con difícil financiación a través de la balanza de capital). Pero, soterradamente, latía una cuestión crucial: la viabilidad de la política económica del gobierno ante la desigual lucha que mantenía con el conglomerado de fuerzas opositoras, políticas y económicas, unas visibles y otras emboscadas a través de los mercados.

Las respuestas posteriores del gobierno mostraron bien a las claras de qué lado se decantaba esa pugna. La marcha atrás comenzó con unas primeras medidas de rectificación, continuó con enmiendas de mayor calibre y finalizó con un viraje que entonó el mea culpa y supuso el abandono del programa común. En junio de 1982, el gobierno se declaró dispuesto a compatibilizar las medidas de su programa con dar prioridad al control de la inflación, para lo que decretó la congelación de los salarios y los precios, frenó el gasto público y aplicó una fuerte devaluación del franco con la pretensión de relanzar las exportaciones. A lo largo de 1983 y 1984, tras la pérdida de las elecciones a los ayuntamientos y al parlamento europeo, el gobierno acentuó el acercamiento de la política económica marcada por los cánones del ajuste monetario. Por último, el gobierno presidido por Laurent Fabius abrazó la política económica convencional. El PCF abandonó el gobierno y el programa común dejó de existir.

Para el terreno de las conjeturas especulativas quedan las hipótesis sobre la viabilidad técnico-económica de aquel programa y sobre los errores de percepción que, por distintas razones, cometieron los líderes de la coalición. Bien por su incomprensión de las restricciones que operaban en aquella situación de recesión generalizada a escala europea. Bien por el modo práctico con que aplicaron las medidas del programa. Bien por la deficiente valoración de las fuerzas internas y externas a las que se enfrentaban. Bien por su incapacidad para entender que la magnitud de lo que estaba en disputa necesitaba conformar un movimiento político sustentado en un fuerte apoyo social y no bastaba con la victoria electoral.

Las consecuencias de aquel fallido intento para poner en marcha una alternativa estratégica alejada de la convencional no se ciñeron a lo que después sucedió en la escena política francesa, sino que tuvo dos impactos muy importantes a escala europea. El primero fue que, a continuación, aquella experiencia se tomó como prueba de la imposibilidad de llevar a cabo políticas económicas y reformas distintas a las marcadas por la ortodoxia conservadora. El segundo fue que los líderes socialistas sufrieron tal conversión paulina que pasaron a ser los paladines de la ortodoxia dentro de la Unión Europea. Se convirtieron en los mayores impulsores de las medidas que ampliaban la liberalización comercial, favorecían la movilidad internacional de capitales y, a raíz del Tratado de Maastricht, impulsaron la creación del espacio monetario con las características señaladas.

En el espacio nacional, el PSF perdió las elecciones de 1986, reduciendo su cuota de votos al 32%, lo que le supuso 70 diputados menos, a pesar de que previamente habían modificado el sistema electoral; cambiando la distribución de las circunscripciones e incorporando la asignación proporcional de diputados, con el propósito de dividir a los partidos de derecha y evitar que el ascenso de la extrema derecha permitiera su presencia en el parlamento. El gaullista Jacques Chirac formó gobierno, pero dos años después Mitterrand repitió su victoria presidencial y forzó la convocatoria de unas nuevas elecciones en las que el PSF subió su cuota al 37,5% y obtuvo 260 diputados, logrando el apoyo de otras fuerzas para alcanzar una mayoría parlamentaria con la que recuperó el gobierno.

Desde aquel momento, a lo largo de tres décadas se han producido sucesivas victorias y derrotas socialistas, con las que han retornado y abandonado la presidencia de la república y el gobierno. Sin embargo, a raíz del fracaso del programa común, el PSF perdió cualquier seña de identidad como fuerza política defensora de los intereses de los trabajadores. Se convirtió en un partido cuya guía de actuación estaba determinada por la pretensión de recuperar el poder político y aspirar a mantenerlo. La viva representación de la indigencia estratégica y la vacuidad política.

Por su parte, el camino recorrido por el PCF le condujo a una paulatina insignificancia electoral. Antes de la alianza con los socialistas, los casi 6 millones de votos que cosechó en 1978 le otorgaron una cuota por encima del 20%. En las elecciones de 1986 y 1988, sus votos y su cuota electoral se redujeron a la mitad. Sin capacidad para formular una estrategia viable y creíble, se adentró en una precipitada caída que le llevó a tocar fondo en 2007: menos del 5% de votos, apenas un millón y medio de votos, y sólo 15 diputados. Después se propuso encubrir su penuria política con distintos formatos electorales, pero los resultados siguieron colocándole en la frontera con la marginalidad política, sin fuerza para incidir en el desarrollo de los acontecimientos.

Tampoco los partidos a su izquierda fueron capaces de cubrir los espacios políticos y electorales que desocupaban el PSF y el PCF. Su apoyo electoral siguió siendo mínimo, reflejando una escasa fuerza política a tono con su pequeña influencia social. La incidencia más relevante ha estado a cargo de los movimientos que surgieron en los años sesenta, en la medida en que han sido capaces de permear ciertos comportamientos sociales, mediante la asimilación

de algunas de sus ideas y propuestas. También han sido un factor dinámico en la aprobación de reformas favorables al medio ambiente, la extensión de las libertades personales y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Si bien esos movimientos no han generado una fuerza movilizadora que les permitiera ganar una presencia continuada en la escena política.

El laborismo como posthatcherismo remilgado

La mayoría parlamentaria lograda por el Partido Conservador en las elecciones de 1979 hizo de Margaret Thatcher un personaje insólito en la escena británica, ya que una vez en el gobierno puso en marcha el programa, rotundamente liberal y antisocial, que había anunciado. Se apresuró a romper los pactos y compromisos tejidos por los laboristas desde finales de los años cuarenta y que, en buena medida, habían seguido vigentes durante décadas de alternancia laborista-conservadora; ya con notables erosiones en los años setenta. El gobierno Thatcher atacó frontalmente el pacto social, culpando a los sindicatos de distorsionar el funcionamiento del mercado de trabajo y proponiéndose anular su capacidad negociadora frente a los empresarios. Del mismo modo, negó cualquier compromiso político del Estado con el pleno empleo y la redistribución de la renta, culpándole de distorsionar los mercados por medio de las regulaciones normativas, las grandes empresas públicas y los crecientes gastos e impuestos. Por consiguiente, el camino de vuelta consistía en eliminar esas normas, desembarazarse de las empresas estatales, reducir los gastos sociales y acabar con la progresividad fiscal. Los poderes públicos tendrían como responsabilidad exclusiva garantizar dos objetivos: la estabilidad monetaria (precios y moneda) y el funcionamiento de los mercados sin intromisiones sindicales o gubernamentales.

Como era de esperar, la aplicación de semejante programa ocasionó una contundente modificación de las relaciones económicas y sociales, proporcionando crecientes ventajas para las empresas y desventajas para los perceptores de salarios y los destinatarios de las políticas sociales. En el lado de los ganadores, los grandes beneficiados fueron las compañías financieras, que llevaron a cabo una descomunal expansión internacional, y los grupos industriales que resultaron favorecidos por la privatización de las empresas

energéticas (British Gas, British Petroleum), automovilísticas (Rolls-Royce, Rover), siderúrgicas (British Steel), telefonía (British Telecom), aviación (Airways) y otras. No así la mayor parte de la industria británica, ya que una parte desapareció y otra se mantuvo aquejada de importantes deficiencias frente a la competencia externa. Quebraron miles de empresas y otras fueron compradas por compañías transnacionales, sobre todo norteamericanas y alemanas.

Del lado de los damnificados, la lista de grandes perdedores estuvo encabezada por los obreros industriales y los sindicatos, sin capacidad de reacción ante el rotundo dominio de las grandes empresas británicas y extranjeras. Thatcher puso mucho de su parte para que así fuera, tanto por los cambios normativos que introdujo como por la función ideológica que llevó a cabo para inclinar de su lado, o al menos neutralizar, a los sectores urbanos con respecto al ataque frontal contra los sindicatos. Mediante normas parlamentarias y administrativas, eliminó el salario mínimo, restringió los derechos de huelga y manifestación, obstaculizó la labor de los piquetes, fomentó las prácticas de los esquiroles e impuso que las decisiones laborales se adoptaran por votaciones secretas. Mediante la política económica, provocó la desaparición de empresas y la reducción de las plantillas industriales, eliminó programas sociales y utilizó el aumento del desempleo como instrumento disciplinario para inhibir las protestas. Mediante el discurso ideológico, exacerbó el distanciamiento de los segmentos profesionales, pequeños propietarios y capas asalariadas mejor remuneradas con respecto a la intervención del Estado, los gastos públicos y las políticas fiscales.

El Partido Laborista también salió malparado, merced al debilitamiento de la fuerza sindical y de su base electoral, sin capacidad para recomponer un proyecto político propio. La primera reacción de los militantes sí se orientó en ese sentido, colocando al frente del partido a dirigentes que representaban posiciones situadas más a la izquierda. En 1980, Michael Foot fue elegido líder político y, en 1981, Tony Benn estuvo a punto de ser elegido líder del grupo parlamentario. Sin embargo, las inercias precedentes y la rigidez organizativa que arrastraba el partido impidieron que se produjese una reflexión a fondo sobre su trayectoria y que la elección de nuevos dirigentes fuera acompañada de la elaboración de una estrategia coherente desde la que potenciar la acción política con la que trabajar para ganar a la mayoría social. En lugar de un debate sobre esas cuestiones, lo que hubo fue un pulso por el poder laborista. Varios de los dirigentes desplazados provocaron una escisión, intentando crear una nueva formación de centro-izquierda, el Partido Socialdemócrata, que no tendría

ningún futuro. En pleno esplendor thatcheriano, los dirigentes de izquierda tampoco fueron capaces de impulsar la renovación política y orgánica del partido, limitándose a presentar un programa insustancial que condujo a una sonada derrota electoral en 1983, seguida de su descabalgamiento al frente del partido. El naufragio del laborismo se saldó con tres nuevas derrotas que mantuvieron a los conservadores en el gobierno hasta 1996, sin Thatcher al frente desde comienzos de esa década.

En el desconcierto de esos años, dentro del laborismo se abrió paso lo que se llamó «nuevo laborismo» o «tercera vía», con Anthony Giddens como principal teórico y Tony Blair como líder político. Acompañada de una sonora fanfarria propagandística, la propuesta llevaba hasta las últimas consecuencias la desnaturalización del discurso histórico del laborismo, sometiéndolo a la estricta disciplina de un pragmatismo político que aspiraba a competir con los conservadores en su mismo terreno electoral: las políticas económicas y las medidas con las que había promovido el desmantelamiento parcial del estado de bienestar durante dos décadas. Una propuesta adobada con genéricas apelaciones a favor de la justicia social y la igualdad de oportunidades para el «acceso de todos a las condiciones que ahora gozan unos pocos». Tomaba prestadas las ideas thatcheristas del «capitalismo para todos», pero revestidas con eslóganes, argumentos publicitarios y líderes nuevos, poniendo énfasis en la mejora del sistema educativo y las oportunidades que brindaban las nuevas tecnologías.

El agrupamiento laborista en torno a ese discurso, unido al desgaste político conservador al cabo de dos décadas al frente del gobierno, condujo en 1997 a la victoria electoral de Tony Blair. Una vez más con el voto disciplinado de su tradicional base sindical, junto con el procedente de otros sectores urbanos descontentos con los conservadores, sumándose el apoyo de quienes encontraban en el joven líder una versión actualizada de los ideales thatcheristas. Llegado al gobierno, la política de Blair no introdujo cambios fundamentales en las coordenadas económicas y políticas establecidas por los conservadores. En temas relativos a la economía, fue bastante más lejos que sus predecesores a la hora de conceder ventajas y medidas desreguladoras, sobre todo a favor del principal poder económico, la banca. El Banco de Inglaterra obtuvo plena independencia como autoridad monetaria y financiera, se redujeron más los controles públicos, se permitió la creación de cuantos productos y operaciones financieras favorecían la expansión de la City, convertida a través de sus tentáculos en paraísos fiscales en el mayor centro de operaciones de muchos mercados relacionados con los nuevos productos financieros.

Blair renovó dos veces más su victoria, hasta que en 2008, en plena crisis económica y habiendo quedado señalado por el escándalo de las mentiras con las que justificó su apoyo a la invasión estadounidense de Irak, cedió el gobierno a Gordon Brown, que perdería las siguientes elecciones. No obstante, ya desde la formulación que le llevó a liderar el partido y tras permanecer más de una década en el gobierno, Blair y el nuevo laborismo estaban marcados por la misma indigencia estratégica y vacuidad política que caracterizaban a sus homólogos europeos. Resultaba una labor ardua, al borde de lo inverosímil, encontrar atisbos para identificar ese final de recorrido con los propósitos y las realizaciones que habían dado vida al laborismo.

Extravío del contenido reformista en Alemania y Suecia

El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) dejó el gobierno en 1982 por el mismo motivo por el que había llegado al poder quince años antes: el abandono de la coalición por parte de los liberales (FDP). La convocatoria de elecciones le colocó en minoría con el 39% de los votos, el porcentaje más bajo desde 1961, frente al 49% de la coalición CDU-CSU. Comenzó entonces otro largo periodo de dominio democristiano. Bajo el liderazgo de Helmut Kohl, ganaron cuatro elecciones sucesivas desde 1983 a 1998, gobernando en coalición con el FDP.

Durante ese tiempo se produjo la reunificación del país y la reestructuración del funcionamiento de la economía, tanto para absorber a la RDA como para incorporar en el «capitalismo renano» ciertos cambios que tenían lugar a escala internacional. La reunificación se acometió de manera rápida, a pesar de que sólo unos meses antes prácticamente nadie pensaba que sería posible. La crisis que vivía la Unión Soviética, sumada a las presiones de la política internacional a cargo de EEUU, Gran Bretaña y el Vaticano (Reagan, Thatcher, Wojtyła), lograron que las crisis nacionales de los países sometidos al dominio soviético derivaran en el resquebrajamiento de todo el bloque. Los sistemas totalitarios de Polonia, Hungría y Checoslovaquia se derrumbaron como piezas de un castillo en demolición, seguidas de otras, hasta que le llegó el turno a la RDA. La desaparición del Muro de Berlín a finales de 1989 supuso la caída de su régimen político, ante la inhibición del gobierno de la URSS y la actitud asustadiza de gobiernos como el francés y el británico, recelosos del poderío potencial de una

Alemania unida. Esa fue la apuesta del gobierno de Kohl, consumada en sólo unos meses con la firma del Tratado de Unificación en octubre y la celebración de elecciones al nuevo Bundestag en diciembre de 1990.

Este acontecimiento histórico coincidió en el tiempo con una nueva recesión económica en los países europeos. En condiciones ciertamente difíciles, el gobierno de Kohl afrontó el triple reto que suponía absorber a los empobrecidos territorios orientales, proporcionar estímulos económicos para superar la recesión y reformar las instituciones para hacer frente a las exigencias de la reunificación y a las tendencias liberalizadoras e internacionalizadoras que predominaban en el continente[13]. El impacto económico inicial fue desfavorable, pues, por primera vez desde hacía cuatro décadas, en la economía germana afloraron las tensiones monetarias, aumentó el déficit fiscal y se desequilibró la balanza por cuenta corriente. Sin embargo, en los años siguientes el gobierno recondujo la situación y recuperó una política económica basada en las tradicionales precauciones contra la inestabilidad de la moneda y de las cuentas públicas, al tiempo que fortalecía su sector exterior. Lo logró a la vez que introducía medidas favorables a la liberalización y la internacionalización de la economía sin perturbar significativamente las relaciones entre los sindicatos y las organizaciones patronales, entre los bancos y la financiación de las empresas, entre las grandes y las medianas empresas. De ese modo, consolidó la solidez de su tejido industrial y la política social del gobierno.

Forzado a mantenerse en la oposición, el SPD, liderado por Johannes Rau, intentó reformular sus objetivos como partido con aspiraciones de gobierno sin abdicar de sus intenciones reformistas. Sin embargo, la caída electoral de 1987, con el 37,5% de los votos, continuó después de la unificación en 1990 (34%) y apenas se recuperó en 1994 (36%)[14]. En ese transcurso, la principal novedad fue el acceso al Bundestag del Partido de los Verdes, cuyo recorrido resultó fundamental para el cambio de correlación de fuerzas parlamentarias que se produjo en 1998. Ese año el SPD elevó su cuota electoral hasta el 41%, y la alianza con los Verdes –gracias al sistema de reparto de escaños– le proporcionó una ajustada mayoría parlamentaria (51%). Así pudo formar un gobierno de coalición sin necesidad de contar con el Partido del Socialismo Democrático (PDS), que entonces estaba liderado por figuras del régimen de la RDA y había alcanzado el 5% de los votos, que era el tope mínimo que daba acceso al Bundestag.

La presencia del SPD al frente del gobierno se renovó en las elecciones de 2002

y resultó decisiva sobre todo por un motivo. Bajo el liderazgo de Gerhard Schröder, terminó de recorrer, a zancadas, su viaje al vacío político. La culminación llegó con las reformas de la política laboral y las prestaciones sociales que formaban parte de la denominada «Agenda 2020». El gobierno modificó la legislación que regía los sistemas de contratación y los servicios de creación de empleo, relajando las normas sobre los contratos para trabajos temporales. La reforma facilitó la extensión de los trabajos de pocas horas, bajos salarios, mínimos derechos y escasa contribución a la seguridad social. Al mismo tiempo, permitía la entrada de entidades privadas en los servicios de empleo, como parte de una colección de medidas que favorecían a los empresarios a la hora de contratar y despedir a sus empleados. El debilitamiento de los derechos laborales de un gran número de trabajadores se produjo a la vez que en las principales ramas industriales, tecnológicamente más desarrolladas, los sindicatos y los empresarios firmaban acuerdos con los que se garantizaba el empleo y se consolidaban los derechos laborales. La contrapartida era la moderación de los salarios y el cumplimiento de normas de productividad que favorecían la modernización de las empresas y su capacidad exportadora.

Paralelamente, el gobierno abordó la reforma a fondo de su estructura presupuestaria, llevando a cabo una reducción de la presión impositiva sobre las empresas y un descenso de los gastos que afectaba a varias partidas de contenido social. Las pensiones de jubilación fueron objeto de cambios notables para elevar la edad de retiro y endurecer las condiciones a considerar en el cómputo de la percepción, fijadas con el exclusivo propósito de reducir su cuantía. Lo mismo ocurrió con el subsidio de desempleo, aumentando las exigencias que daban derecho a percibir la prestación y acortando el periodo de cobertura. Las restricciones llegaron también a otras ayudas y a la prestación de los servicios de salud.

Teniendo en cuenta la sólida cimentación institucional y el arraigo social que tenían los pactos laborales y el estado de bienestar, esas medidas no derivaron en un empeoramiento general, pero sí causaron un indudable perjuicio en los derechos de muchos trabajadores. También provocaron la desilusión de su base social, puesto que era el propio SPD el que aplicaba esas medidas contrarias a los trabajadores, sin que procediera del mismo modo con los empresarios. La factura política que acarreó esa pérdida de credibilidad se plasmó en los resultados de las elecciones de 2005. Sin un vencedor decantado, finalmente se reeditó una Grosse Koalition entre CDU-CSU y SPD, con la candidata democristiana, Angela Merkel, al frente del gobierno[15]. El quebranto político

que le supuso al SPD participar en esa coalición quedó en evidencia cuando las siguientes elecciones se saldaron con una mayoría favorable a la alianza de CDU-CSU con los liberales del FDP. En las siguientes, el FDP no logró alcanzar el listón del 5% de los votos y quedó sin presencia parlamentaria, de modo que el SPD volvió a reincidir en su mortífera coalición con CDU-CSU, nuevamente bajo el liderazgo de Merkel, volviendo a evidenciar su prioridad por acceder a parcelas del poder político como sustitutivo de su inopia estratégica y su vacuidad política. Un partido exhausto, agotado en sus afanes reformistas.

Con respecto a la novedad que supuso la emergencia de Partido de los Verdes, cabe formular tres consideraciones. En primer lugar, desde su génesis en 1979 quedó de manifiesto que las cuestiones de índole económico-social no figuraban en el centro de sus señas de identidad. Sus promotores procedían de grupos de extrema izquierda que habían formado parte de la oposición extraparlamentaria (APO), junto con pequeños núcleos salidos del SPD e incluso de la CDU, unidos principalmente por objetivos ecologistas e impregnados en diferente grado por otras propuestas de signo pacifista, feminista y antiautoritario. Su configuración inicial estaba más cerca de la laxitud organizativa de los movimientos que de la estructura jerárquica que tenían los partidos tradicionales. Tras su entrada en varios parlamentos estatales, el estreno en el Bundestag se produjo en 1983, con una cuota electoral del 5,6% que les proporcionó 27 diputados, elevados hasta el 8,3% de votos y 44 diputados en 1987. En 1985 se estrenaron en Hesse como partido con responsabilidades políticas, aliándose con el SPD para obtener la mayoría parlamentaria que dio paso a un gobierno de coalición.

En segundo lugar, los avances electorales colocaron a los Verdes ante dos disyuntivas, siempre presentes en el periodo juvenil de las formaciones políticas que cosechan sus primeros éxitos electorales: definir las coordenadas de su acción política y articular su estructura organizativa. Los calificados como «fundamentalistas» (fundis) ponían el acento en el desarrollo de los movimientos sociales y en las formas horizontales de organización. Los calificados como «realistas» (realos) lo ponían en la labor parlamentaria, orientada a lograr los objetivos defendidos en el programa por el que fueron elegidos, y en la vertebración de una estructura organizativa más eficaz. Ante esas disyuntivas, los acuerdos formales y más aún su funcionamiento de hecho se fueron decantando hacia la segunda opción. Sobre todo desde que en 1990, en las elecciones celebradas después de la reunificación, obtuvieran menos del 4% de los votos y quedaron fuera del nuevo Bundestag. No así Alianza 90/Verdes del Este, formada por activistas procedentes de la RDA, que logró tener presencia en

el parlamento[16]. Después de sufrir sucesivos abandonos y escisiones, en las siguientes elecciones ambas formaciones concurrieron unidas como Alianza 90/Verdes, logrando cuotas electorales en torno al 7-9% que les otorgaban una representación de 50-60 parlamentarios[17].

En tercer lugar, su participación en el gobierno federal, como aliado del SPD durante dos legislaturas, y su continuada presencia en los parlamentos y gobiernos estatales –incluyendo la dirección del gobierno de Baden-Württemberg en 2011– confirman dos hechos fehacientes. Primero, su actitud consecuente en la defensa de los objetivos centrales de su programa. Esa actitud ha sido fundamental para que se tomaran decisiones relativas a la implantación de medidas ambientales, la eliminación de la energía nuclear, el impulso a las energías renovables, los derechos de las mujeres, el apoyo a los inmigrantes y otras. Segundo, su agudo pragmatismo a la hora de formar alianzas para alcanzar esos objetivos. Su participación en gobiernos de coalición con el SPD no han sido óbice para entablar otras alianzas, incluyendo la formación de un gobierno de coalición con la CDU en Hamburgo.

Pasando a examinar el recorrido del Partido Socialdemócrata Sueco (SAP), la idea central es que su comportamiento ofrece una similitud principal con el SPD: el extravío de su ímpetu reformista en una sociedad fuertemente cohesionada por la amplitud de los derechos sociales y democráticos instaurados a lo largo de muchas décadas. El sólido armazón construido en ese tiempo ha sufrido ciertas erosiones que han ido deteriorando la posición hegemónica del SAP como constructor de ese sociedad y han dañado la cohesión social.

Los primeros pasos hacia atrás fueron tímidos y se remontan al momento en el que, tras las elecciones de 1976, el SAP quedó fuera del gobierno después de ejercerlo durante más de medio siglo. En plena crisis económica, los tres partidos de centro y derecha que gobernaron en coalición (Centro, Moderado y Liberal) insistieron en nuevas formas de intervención estatal y elevaron varios subsidios, a la vez que anunciaban la necesidad de reformar el «modelo sueco». En esos años, quien llegó más lejos en la oposición a ese modelo fue la organización patronal que agrupaba a los grandes y medianos empresarios, pasando a cuestionar los pilares que sostenían la negociación con los trabajadores y diversos aspectos de la protección social. Fue emblemático el cierre patronal (lockout) que llevaron a cabo en 1980, para oponerse

frontalmente a las demandas reivindicativas que impulsaban los sindicatos.

Sin embargo, las primeras medidas prácticas en la vuelta atrás las puso en marcha el SAP tras regresar al gobierno con una rotunda victoria en las elecciones de 1982, en las que obtuvo el 46% de los votos. Triunfo que renovó en las dos elecciones siguientes, con cuotas en torno al 45%. Previamente Olof Palme, su carismático líder, asesinado en 1986, había seguido expresando fuertes críticas contra las políticas económicas thatcheristas, pero el retorno socialista al frente del gobierno no estuvo acompañado de planteamientos que concordaran con esas declaraciones. Más bien al contrario, el SAP ponía el acento en dar prioridad a la estabilidad monetaria, a pesar de que las tensiones de precios no eran elevadas. Insistía también en la necesidad de elevar el crecimiento como una condición previa para que hubiera redistribución, cuando hasta entonces había defendido que un reparto compensado era un componente básico del crecimiento. Abundaron las declaraciones a favor de la flexibilidad del mercado laboral, la contención del gasto público y las restricciones que imponían los condicionantes internacionales. Asuntos todos ellos que, como era lógico, debían abordarse en el diseño de la política económica. La novedad radicaba en que sus objetivos pasaban a ordenarse y a enfatizarse de un modo muy distinto esta vez.

No obstante, hasta el estallido de la crisis financiera de 1990 los cambios efectivos que se produjeron fueron limitados y se referían principalmente a modificaciones en el presupuesto, a través de reducciones impositivas que menguaban el carácter progresivo del sistema tributario y del descenso de los gastos estatales en ciertas partidas. Más relevantes que esos cambios eran las cuestiones omitidas, ya que la política económica había abandonado la guía keynesiana basada en el impulso de la demanda agregada y el pleno empleo, sin que fuera sustituida por otros criterios que dieran consistencia a las medidas que adoptaba el gobierno. Igualmente relevante era el hecho de que en 1983 el sindicato de la metalurgia, uno de los principales de la confederación de sindicatos suecos (LO), decidiera emprender sus propias negociaciones, cuestionando el carácter centralizado de las negociaciones sindicato-patronal y el principio de solidaridad entre los asalariados. Sin embargo, llegados al borde de la crisis financiera, el estado de bienestar seguía incólume. La única mácula significativa era la autorización de fondos de pensiones privados, tema que hasta entonces, como todas las prestaciones sociales, se consideraba que era de la exclusiva incumbencia del Estado.

La crisis de 1990 fue el momento de inflexión que separó las dinámicas del

pasado de las que sobrevendrían en adelante. El hecho mismo de que se produjese tal crisis resultaba sintomático, pues se trataba de una crisis financiera que afectaba al conjunto del sistema bancario y era la consecuencia de un febril proceso especulativo en torno a sendas burbujas inmobiliaria y bursátil. Lo cual sólo había sido posible por la aprobación de medidas liberalizadoras y la dejación de las funciones reguladoras que ostentaba el Estado. La amenaza de quiebra del sistema bancario hizo necesario que el gobierno aportase grandes ayudas públicas para sanear unos negocios que eran privados. Una decisión que contribuyó a que el SAP perdiera las elecciones al año siguiente. Antes, en el fragor de la crisis, el gobierno congeló los salarios y los precios, mientras la patronal daba por finalizado el tiempo de las negociaciones laborales centralizadas y de la presencia de comités externos (representativos de las instituciones sociales) que dirigían la gestión de los organismos públicos.

El segundo regreso del gobierno de centro-derecha sí llegó acompañado de propuestas más contundentes para cambiar los pilares laborales, socioeconómicos y políticos. Propósito que profundizó el SAP cuando retomó las riendas del gobierno. Definitivamente, los dirigentes socialistas, secundados sólo en parte por los líderes sindicales, asumieron un discurso que abrazaba la mayoría de las tesis conservadoras sobre la liberalización de la economía y la reforma del estado de bienestar, contraviniendo el discurso sostenido a lo largo de su trayectoria histórica. Con un apoyo electoral que se mantenía en torno al 45%, la política económica ortodoxa no encontró obstáculos significativos para apostar por medidas favorables a los intereses empresariales, volcados hacia el impulso de las exportaciones y, por ello, muy sensibles a la innovación tecnológica y la modernización productiva como factores decisivos que condicionaban la competitividad exterior. Cuestiones que cobraron más vigencia a partir de 1996, cuando Suecia se integró en la Unión Europea.

La erosión se hizo más aguda en lo que concernía a las políticas laborales y al funcionamiento del mercado de trabajo, en presencia de un tejido social con un predominio creciente de los asalariados ocupados en servicios dispersos y heterogéneos. En adelante, las negociaciones se fueron descentralizando, los incrementos salariales mermaron, dentro de un abanico muy amplio, a la vez que aumentaba la proporción de trabajos temporales, se reducía el empleo del sector público y abundaban los efectos derivados del debilitamiento de la capacidad negociadora de muchos grupos de trabajadores. Tras el ingreso en la UE, se produjo una nivelación a la baja de ciertas normas laborales, de modo que las empresas suecas preferían apelar a la legislación europea para resolver ciertos

conflictos antes que a las leyes suecas.

No obstante, siendo ostensibles los pasos atrás en ciertos derechos laborales, los retrocesos fueron menores que los registrados en la mayoría de los países europeos, debido a la fortaleza que seguía teniendo la estructura industrial y a unos sindicatos que seguían contando con una afiliación mayoritaria y una notable capacidad negociadora. También es destacable la influencia ejercida por los movimientos feministas en la defensa de los derechos laborales de las mujeres. Como consecuencia, el descenso de los salarios en el reparto de la renta ha sido reducido y su proporción sigue siendo de las más altas entre los países europeos, mientras que el desempleo y la temporalidad son más bajos, la dispersión salarial es menor, el empleo público sigue siendo bastante mayor, se mantienen ciertas políticas laborales activas y la tasa de actividad de las mujeres ha seguido creciendo.

Otro tanto cabe decir de forma concluyente a propósito de la política social. El estado de bienestar ha sufrido ciertos menoscabos en algunas de sus partidas, pero en conjunto mantiene un alto contenido social, muy por encima, junto con Noruega y Dinamarca, de lo logrado por los demás países europeos. En términos generales, los retrocesos en ciertos indicadores durante la crisis financiera se recuperaron después, pero no volvieron a alcanzar los niveles previos que se habían alcanzado. Así ha ocurrido con las pensiones de jubilación, las ayudas a la vivienda y el gasto en empleo público, a la vez que han ido ganando presencia las empresas privadas en sectores como la educación, la sanidad y las pensiones. Sin embargo, ninguno de esos aspectos ensombrece la importancia que mantiene el amplio repertorio de prestaciones monetarias a cargo del Estado –incluidas las pensiones, el desempleo, los demás seguros y otras ayudas– y servicios públicos –educación, salud, atención a niños y ancianos–. Todos los indicadores muestran una elevada protección social, teniendo en cuenta la cobertura de los beneficiarios, las cuantías y los mecanismos de financiación.

Se presenta así una paradoja a la hora de enjuiciar la actuación del SAP, que ha seguido gobernando la mayor parte del tiempo desde 1994, excepto en el intervalo de 2006 a 2014. Por un lado, es el mayor responsable de los retrocesos que han mermado la capacidad redistributiva y de cohesión social a cargo del Estado. Desde niveles sumamente elevados, la moderación de algunas transferencias sociales, la menor progresividad fiscal, la dispersión salarial y el aumento de las rentas financieras han hecho que los indicadores de equidad detecten un crecimiento rápido de la desigualdad. Por otro lado, la persistencia

de la capacidad negociadora de los sindicatos y la elevada función redistributiva que mantiene el estado de bienestar hacen que los niveles de desigualdad de Suecia sigan siendo sustancialmente bajos, mientras que sigue corrigiéndose la diferencia distributiva entre las mujeres y los hombres.

Sin embargo, la persistencia de un fuerte estado de bienestar no oculta dos realidades complementarias. Primera, a diferencia del pasado, la dinámica de la economía marcha por derroteros adversos para la política social. Segunda, el Partido Socialdemócrata se ha desprovisto de la estrategia y de la acción política que movieron el curso histórico del país, perdiendo su ímpetu reformista y quedando a expensas de la fuerza electoral que le proporciona una base social en declive[18].

La autoesterilización política del PCI: viaje a ninguna parte

Después de alcanzar su tope electoral en 1976, el PCI sufrió sucesivos retrocesos entre 1979 y 1987, tanto en las tres elecciones parlamentarias celebradas como en las que hubo a nivel regional, provincial y municipal. No obstante, en ese último año, todavía retuvo 10 millones de votos, con una cuota del 27% y 177 diputados. El número de militantes también iba disminuyendo, contabilizando a finales de los ochenta 1,2 millones, menos de la mitad de los que registraba dos décadas antes. Muchos de ellos se habían marchado desilusionados por la escasa disposición del PCI y la GCIL para enfrentarse a las políticas económicas y la ausencia de reformas por parte de los gobiernos de la Democracia Cristiana, así como a la ofensiva desatada por los empresarios contra la escala móvil que regulaba la fijación de los salarios y contra otros derechos laborales. Los líderes comunistas preferían apostar por unas hipotéticas alianzas con los otros sindicatos y partidos, a pesar de que los hechos mostraban la nula disposición de los líderes de esas formaciones para acercarse al PCI. Tras la muerte de Berlinguer, de la mano de un líder carente de carisma como Alessandro Natta y de un ideólogo brillante como Giorgio Napolitano, el PCI rebajó más el alcance político de sus objetivos, alejándose de cualquier inclinación hacia el conflicto social y eliminando las críticas al capitalismo.

La Democracia Cristiana siguió siendo la fuerza política dominante con una

cuota electoral del 33-34%. Hasta 1992 retuvo el control de la jefatura del gobierno que había ejercido desde 1947; con la salvedad del intervalo 1982-1987 en que Bettino Craxi –el líder de un partido socialista derechizado, aliado de la DC, y absolutamente corrupto como desveló años después la justicia– estuvo en el cargo. La hegemonía democristiana con coaliciones de tres, cuatro o cinco partidos concluyó con estrépito cuando un grupo de jueces puso al descubierto lo que se denominó «Tangentopolis». Se trataba de un entramado criminal de sobornos, financiación ilegal, corrupción, extorsión y actividades mafiosas, en el que estaban involucrados diversos dirigentes de la DC y de sus partidos aliados, junto con altos funcionarios de los órganos del Estado. A pesar de ello, la DC volvió a vencer en las elecciones de 1992, patrocinando un gobierno cuadripartito y sin ostentar la jefatura del gobierno. El experimento finalizó en 1994.

Se produjo entonces la primera pirueta transformista de los líderes del PCI. Su secretario general, Achille Occhetto, disolvió el partido para crear el Partito Democratico della Sinistra (PDS), con la pretensión de ocupar el hipotéticamente ancho espacio político de centro-izquierda. Sustituyó el ambiguo y desfasado programa estratégico del PCI por otro vacío de contenido, una nadería genérica repleta de lugares comunes y con exclusivas intenciones cortoplacistas. A la vez, eliminó la estructura organizativa, pensada para impulsar movilizaciones sociales y promover la hegemonía cultural, y la sustituyó por una maquinaria electoral al estilo de la que tienen los partidos estadounidenses. Una pirueta baldía, pues al año siguiente sólo obtuvo el 16% de los votos, con cuatro millones menos de votantes que los recibidos por el PCI en su última contienda[19]. Apenas tres puntos más que el anquilosado PSI, pese a que este partido, como el resto de los aliados de la DC, estaba acusado por la justicia de haber cometido graves delitos.

A pesar de las graves incriminaciones y de su breve duración, aquel último gobierno de coalición implicado en Tangentopolis aprobó un sistema electoral que marcó el futuro del escenario político. Introdujo un enrevesado mecanismo de adjudicación de escaños en el que sólo una cuarta parte se asignaba de forma proporcional a los votos obtenidos a nivel nacional mediante listas cerradas; el otro 75% se asignaba por mayoría en circunscripciones uninominales, lo cual hacía imprescindible la formación de grandes alianzas electorales.

Conforme a ello, desde 1994 a las elecciones concurrieron dos grandes agrupaciones. Una formada por un amplio espectro de las fuerzas de derecha,

incluida la más extrema, como la exfascista Alianza Nacional y la Liga Norte, además de restos del Partido Radical de Marco Panella y, sobre todo, Forza Italia, creada al calor del dinero y el olor del poder en torno al millonario y corrupto Silvio Berlusconi. La otra formación, de centro e izquierda, cubría otro amplísimo espectro que iba desde los restos del PSI y otros antiguos aliados de la DC, al nuevo PDS y Rifondazione Comunista. Ambas agrupaciones son las que se han repartido la mayoría parlamentaria y la formación de gobierno durante las dos últimas décadas, utilizando nombres distintos y variaciones menores en su composición, con la salida de algunas siglas y la incorporación de otras. Con más frecuencia ha predominado la alternativa de derechas, por lo que su líder principal, Berlusconi, ha sido el mayor protagonista de la escena política.

Entre tanto, el PDS realizó una segunda pirueta dirigida por Massimo D'Alema, convirtiéndose en Democratici di Sinistra (PS) para incorporar a pequeños núcleos de socialistas, democristianos y otras tendencias, con la pretensión de ser un partido socialdemócrata. Un viraje hacia ninguna parte, como se comprobó de primera mano en 1998, cuando el propio D'Alema ejerció la jefatura de gobierno durante año y medio. Por fin se hizo realidad la vieja aspiración de que un (ex)comunista estuviera al frente del gobierno. Sin embargo, la actividad de ese gobierno fue similar en casi todo a la que habían realizado los anteriores y a la que llevarían a cabo los posteriores, siguiendo la misma orientación, las medidas de política económica, los recortes de la política social y el aprisionamiento de la vida política entre las paredes de un sistema dual marcadamente conservador. Otro tanto sucedió cuando en 2006 el también excomunista Giorgio Napolitano accedió a la presidencia de la república. Un cargo con escasa capacidad ejecutiva al que imprimió un comportamiento de cierta ejemplaridad ética, pero ninguna consecuencia política. El cierre de L'Unità en 2000, el periódico con el que el PCI había recorrido una trayectoria de casi ochenta años, vino a ser el símbolo del final del camino de aquel partido que en su tiempo fue la mayor fuerza comunista europea, el partido obrero con mejor construcción teórica y con mayor capilaridad desde la que desarrollar su influencia social. Las dos piruetas refundacionales habían provocado la agonía terminal de un partido exánime.

Por su parte, ni Democrazia Proletaria, desaparecida a finales de los ochenta[20], ni Rifondazione Comunista, ni el Partito dei Comunisti Italiani (PdCI) –una escisión del anterior protagonizada por quienes defendían la línea de Berlinguer– fueron capaces de cubrir aquel vacío. En el transcurso de las elecciones

celebradas entre 1994 y 2008, Rifondazione y los eurocomunistas del nuevo PdCI perdieron los 2-3 millones de votos que escapaban al PDS y luego al DS. Aquella izquierda alternativa quedó sin representación parlamentaria, a pesar de que en 2008 Rifondazione y el PdCI formaron una coalición, La Sinistra, junto con varias formaciones ecologistas y otros aliados. La soledad extraparlamentaria ponía de manifiesto su mínima incidencia social y su endeble fuerza política.

Ilusiones malgastadas en las nuevas democracias

Durante los años setenta los tres países meridionales, sojuzgados durante décadas por sistemas dictatoriales, lograron instaurar democracias parlamentarias. En los años noventa los países sometidos al dominio de la URSS se desprendieron de sus sistemas totalitarios y establecieron democracias parlamentarias. Dejando para próximos capítulos el proceso político en España, este último epígrafe compara brevemente lo ocurrido en Grecia y Portugal, en los que los recorridos políticos de los partidos obreros fueron muy distintos pero condujeron al mismo destino que sus homólogos europeos.

En Grecia, la dictadura militar que en 1967 acabó con una monarquía conservadora tuvo su propio fin seis años después; si bien lo hizo permitiendo la formación de un gobierno provisional compuesto por civiles, que fue el que en 1973 organizó las elecciones constituyentes y el referéndum en el que la población rechazó la vuelta de la monarquía. Poco tiene de extraño que quien lideraba aquel gobierno –que dispuso las condiciones en las que se iban a celebrar las elecciones– fuera el vencedor de las mismas: Constantinos Karamanlis, al frente del partido conservador Nueva Democracia; más aun teniendo en cuenta que recibió el apoyo de otros partidos europeos de la misma orientación. Karamanlis mantuvo el gobierno hasta 1981. En ese intervalo de años, se fue consolidando el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), una formación creada también en torno a un líder, Andreas Papandréu. Tras lograr el 13,6% de los votos en 1974 y el 25,3% en 1977, obtuvo una rotunda victoria en 1981 con un 48% de los votos que le proporcionó una holgada mayoría parlamentaria. Paralelamente, el Partido Comunista (KKE) elevó ligeramente su cuota electoral entre ambas elecciones, desde el 9,5% al 11%, de manera que en

ese último año la suma de las dos formaciones se situó en el 60% de los votos, un porcentaje superior al que alcanzaban socialistas y comunistas en los demás países europeos.

Como en las elecciones francesas celebradas el mismo año, los dos partidos que gozaban de ese fuerte apoyo político expresaban fuertes críticas al capitalismo y, en plena recesión, ofrecían programas económicos y sociales con importantes reformas estructurales. Otro factor que había polarizado la disputa electoral y granjeado un gran apoyo al PASOK y al KKE era su posición contra el reciente ingreso en la Comunidad Europea y en la OTAN. Sin embargo, inmediatamente después, una vez instalado en el gobierno, Papandréu cambió radicalmente sus posiciones y, tras renegociar algunos aspectos, aceptó la permanencia en ambas organizaciones, mientras que puso en marcha una conjunto de medidas económicas que nada tenían que ver con las reformas prometidas. A pesar de ello, volvió a ganar las siguientes elecciones, con el 45% de los votos, y también las de 1990 con el 40%; pero entonces la oposición de las demás fuerzas inició un bloqueo parlamentario que se resolvió con la vuelta temporal de Nueva Democracia al gobierno.

No obstante, la amplitud de su base electoral siguió otorgándole al PASOK nueva mayorías a partir de 1993, mostrándose ya como un partido marcadamente nacionalista cuya aspiración principal era reproducir su permanencia en el poder mediante prácticas clientelistas. Ninguna de sus actuaciones tenía parentesco con su programa inicial, en un país cuya débil economía y raquítico estado de bienestar eran ajenos a los hitos logrados por los países europeos desarrollados. La crisis financiera de 2008 arrolló al PASOK hasta llevarlo al borde de la desaparición política.

Emergió entonces una nueva formación, Syriza, creada años antes como alianza en la que convergieron numerosos grupos procedentes de la izquierda comunista y de los movimientos ecologistas y pacifistas. La oposición de Syriza a la desastrosa gestión de la crisis por parte de conservadores y socialistas –con un gobierno y un sistema bancario en quiebra financiera– y a la continua intromisión de los dirigentes de la Unión Europea en los asuntos internos elevó rápidamente su fuerza electoral hasta auparla al gobierno en 2015; acercándose a la mayoría parlamentaria, que alcanzó aliándose con un partido nacionalista de derechas. A continuación, ante las insistentes presiones europeas para que continuara en vigor el draconiano programa de austeridad impuesto cuatro años antes, Syriza relajó sus pretensiones reformistas y centró su actividad en intentar

suavizar el impacto de las políticas de austeridad que siguieron aplicando en la maltrecha economía y contra la muy castigada mayoría social. En tal contexto, quedó anulada la posibilidad de llevar a cabo reformas estructurales y mejoras sociolaborales para los trabajadores.

En Portugal, el dominio totalitario que ejercía el Estado Novo salazarista desde los años veinte fue derrocado por una conspiración política llevada a cabo por grupos de oficiales militares de segundo rango, que formaron el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) que organizó un golpe de Estado en 1974. Creado a partir del rechazo a las condiciones que soportaba el ejército en las colonias portuguesas en África, los promotores dotaron al MFA de un creciente contenido democrático y social, por lo que la rebelión obtuvo un superlativo apoyo de la población y de los partidos obreros que sobrevivieron a décadas de durísima represión. Tras patrocinar la formación de un gobierno provisional, encabezado por el general António de Spínola, militar de alto rango bastante conservador, los líderes del MFA hicieron gala de posiciones políticas bastante radicales, que afianzaron más después de paralizar un intento de golpe de Estado protagonizado por Spínola y por grupos conservadores de militares, políticos y empresarios.

Los líderes más radicales proponían una profunda transformación de la economía mediante la nacionalización de los bancos, de las grandes empresas y del transporte, además de una drástica reforma agraria y un amplio conjunto de medidas sociales. Una posición similar a la que históricamente habían defendido los partidos obreros y que, en aquel momento, mantenía el Partido Comunista de Portugal. La puesta en práctica de las reformas corrió a cargo de un nuevo gobierno provisional, encabezado por el coronel Vasco Gonçalvez, cuyo objetivo era impulsar la «transición al socialismo».

Sin embargo, las elecciones constituyentes realizadas en el primer aniversario de la «revolución de los claveles» arrojaron una correlación de fuerzas bastante alejada de esos propósitos radicales. El Partido Socialista (PSP) pasó a ser la mayor fuerza parlamentaria, con el 38% de los votos y 116 diputados, mientras que el Partido Comunista lograba el 12,5% y sólo 30 diputados. Los comunistas exhibían su mayor influencia en las zonas campesinas del sur, mientras que los socialistas predominaban en los núcleos urbanos donde se ubicaban las principales industrias con las que contaba la débil economía portuguesa. Los demás partidos socialistas y de extrema izquierda no lograron acceder a la Asamblea Constituyente, de la que surgió un gobierno socialista, liderado por

Mário Soares, cuya principal tarea era atender los problemas más urgentes mientras se elaboraba una constitución democrática.

Se plasmó entonces una situación política tensada por dos fuerzas en litigio. De un lado, la gestión socialista al frente del gobierno se hizo más moderada de lo que anunciaba su programa, volcando su política económica hacia la estabilidad monetaria, dando prioridad a la negociación del ingreso en la Comunidad Económica Europea y minimizando las medidas de carácter social. El gobierno del PSP se propuso también desandar el camino de las nacionalizaciones y otras medidas puestas en marcha por el anterior gobierno provisional. De otro lado, el grupo de militares más radicalizados del MFA retenía resortes importantes de poder, junto con el PCP, que era una minoría en el parlamento y se posicionaba contra la orientación del gobierno. A finales de aquel 1975 se produjo un momento convulso, entendido por muchos como un intento de golpe de Estado dirigido por el PCP y los militares radicales, que fue desbaratado por otro sector del MFA, liderado por Melo Antunes, cercano a las posiciones del PSP. Varios líderes radicales fueron encarcelados y llevados a juicio, mientras que otros eran expulsados del ejército y el MFA quedó disuelto.

La Constitución aprobada se hizo eco de la aportación del MFA al nacimiento de la república democrática y, a efectos testimoniales, mantuvo algunas de las proclamas genéricas de la revolución de abril de 1974, si bien su objetivo era establecer los fundamentos de un sistema parlamentario basado en la democracia política. Las elecciones de 1976 confirmaron al PSP como primera fuerza, con el 36% de los votos. Desde ese momento los socialistas alternaron las mayorías parlamentarias, el gobierno y la presidencia de la república con dos partidos conservadores, también creados en 1974, el Partido Popular Democrático y el democristiano Centro Democrático y Social, a veces coaligados.

La homologación política con los demás países del continente se hizo extensiva a la aplicación del mismo tipo de políticas económicas convencionales y a las características del Partido Socialista, despojado de cualquier discurso estratégico que tuviera relación con la revolución de 1974. Por su parte, el Partido Comunista intentó mejorar su cuota electoral del 14% formando coaliciones con otras organizaciones menores. Durante los años ochenta lo hizo con el rótulo de Movimiento Democrático, alcanzando el 15%-17%, en torno a 40 diputados. Después lo hizo de forma más duradera con Coalición Democrática Unitaria (CDU), junto a grupos ecologistas, pero su cuota ya no superó el 9%, con sólo 15 diputados, limitando su radio de influencia a las zonas rurales del sur.

Posteriormente, a partir de 2009 otra formación de izquierdas igualmente radical, el Bloco de Esquerda (BE), logró superar los resultados electorales del PCP. El Bloco nació en 1999 de la confluencia de pequeños grupos de la extrema izquierda, cuya modesta cuota se fue elevando en cada una de las participaciones electorales, del 2% al 10% en votos, y de 2 a 16 diputados. Después de sufrir un cierto retroceso, en 2015 volvió a recuperar esos resultados, que son los que le permitieron participar en la alianza forjada por el Partido Socialista para alcanzar la mayoría parlamentaria y formar un gobierno de coalición PSP-BE-CDU.

Por último, en el caso de los países del centro-este del continente, cabe consignar tres aspectos relativos a los partidos socialistas creados tras el derrumbe de los sistemas totalitarios. Primero, el origen de esos partidos estuvo en la convergencia de ciertos dirigentes de los partidos comunistas con algunos disidentes represaliados, para participar en las elecciones que siguieron a la instauración de los nuevos sistemas democráticos. Segundo, ese origen hizo que inicialmente los partidos socialistas quedaran postergados, pero años después lograron llegar al gobierno, solos o en coalición, aprovechando la desilusión y los estragos causados por las políticas económicas, fielmente ortodoxas, que aplicaron los partidos conservadores. Tercero, una vez establecida la alternancia política no se percibe ningún signo que haga destacar la actuación de esos partidos socialistas. Se constata una carencia de referencias programáticas, sustituidas por el empeño puesto en parecerse a sus homólogos occidentales, sin poder evitar la persistencia de ciertos resabios propios de las décadas de dominio totalitario.

[1] Véanse, en las referencias bibliográficas que figuran al final del libro, los trabajos: E. Palazuelos et al. (1988), Dinámica capitalista y crisis actual; E. Palazuelos (2000), «El capital a casi siglo y medio de distancia. Estudio preliminar», en K. Marx, El capital; y E. Palazuelos (dir.) (2015), Economía Política Mundial, todos ellos publicados en Akal. En esa recopilación final se recogen otros trabajos que dan cuenta de tales transformaciones.

[2] Alemania y Suecia son excepciones en ese comportamiento general de las economías europeas desarrolladas.

[3] En parte se ha tratado del desarrollo de tecnologías ya conocidas en industrias como la química, la maquinaria industrial y la maquinaria eléctrica; y, en parte, son hallazgos primigenios en tecnologías relacionadas con la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, junto con otras surgidas de la investigación científica en distintos campos de la física, la química y la biología. Esa oleada innovadora impulsó grandes modificaciones en los procesos técnicos de producción y en el tipo de productos (intermedios y finales), a la vez que favorecían el entrelazamiento de unos avances con otros, difundiéndose entre empresas de diferentes sectores.

[4] El debilitamiento de las condiciones salariales hace que una proporción creciente de esos productos sean adquiridos a través de una extensa gama de instrumentos de crédito que elevan los niveles de endeudamiento de las familias. El consumo también se ve favorecido por el abaratamiento de los bienes básicos gracias a las nuevas tecnologías de la producción de alimentos y a la importación de otros, pero sobre todo merced a la avalancha de artículos industriales procedentes de China y otros países de Asia Oriental.

[5] O. Palme (1976), «Conversación entre Willy Brandt, Bruno Kreisky y Olof Palme», Nueva Sociedad 23, 2.

[6] Tampoco prestaron atención al creciente dominio de los grandes bancos privados, la descomunal magnitud de los flujos financieros, el sobreendeudamiento que en varias economías nacionales provocaban la especulación inmobiliaria y su traslado al sobreendeudamiento de unas economías con respecto a otras. Nunca pensaron en la posibilidad de una crisis financiera que se extendiera a través del espacio integrado sin que la UE y los gobiernos nacionales dispusieran de instrumentos de política económica para hacerla frente. Los gobiernos habían perdido la soberanía monetaria y cambiaria, no existía ningún tipo de coordinación efectiva entre sus políticas económicas nacionales, la Comisión Europea vigilaba la disciplina fiscal de los gobiernos y el BCE únicamente se dedicaba al control de la inflación, teniendo prohibido financiar a los gobiernos y no estando previsto que pudiera ejercer como prestamista de última instancia ante apuros financieros en cualquier país.

[7] Las economías con menores capacidades productivas y mayores tasas de inflación, las más débiles (España, Grecia, Italia, Portugal), pudieron acceder a una financiación voluminosa y barata para impulsar el crecimiento de su demanda interna, incurriendo en crecientes déficits por cuenta corriente que

financiaban con ahorro procedente de las economías del centro y norte. Estas, con Alemania a la cabeza, mantenían un débil crecimiento interno al tiempo que fortalecían sus estructuras industriales, modernizaban sus servicios y mejoraban su posición comercial y financiera en la UE. Mientras que aquellas meridionales, con España a la cabeza, impulsaban un mayor crecimiento al tiempo que perdían capacidad industrial, mermaban su productividad y, sin resortes comerciales y cambiarios en su mano, reducían su competitividad comercial y elevaban su endeudamiento externo.

[8] La ausencia de ese prestamista de última instancia hizo que los gobiernos tuvieran que financiarse en unos mercados financieros escasos de liquidez y exigentes en los niveles de rentabilidad (tipos de interés), lo que hizo aumentar el déficit presupuestario.

[9] Los programas contenían cuatro tipos de medidas: a) fuerte reducción del gasto público, afectando al número y a la retribución de los funcionarios, el pago de pensiones, las transferencias a los desempleados, la protección social y la inversión en infraestructuras; b) privatización de empresas y servicios públicos, junto con la introducción de medidas de copago para acceder a ciertos bienes y servicios públicos antes gratuitos; c) reducción de los salarios reales, provocando la contracción de su poder adquisitivo y el abaratamiento de los costes laborales; y d) elevación de los impuestos que afectan a la mayoría de la población, con el fin de incrementar la capacidad recaudatoria, que a su vez tendía a reducirse por las medidas contractivas aplicadas.

[10] La refundación del Partido Socialista Francés se produjo entre 1969 y 1971. Primero tuvo lugar la fusión de varias organizaciones socialistas (SFIO, Partido Socialista Unificado y Centre d'Études, de Recherches et d'Éducation Socialiste, CERES) y después se agregó la Convention des Institutions Républicaines, cuyo líder, François Mitterrand, pasó a liderar el nuevo PSF.

[11] En la primera vuelta, Giscard obtuvo el 28,3%, Mitterrand el 25,9%, Chirac (gaullista) el 18% y Marchais (comunista) el 15%, mientras que un candidato ecologista y otro trotskista lograron el 3,9% y el 2,3%, respectivamente. En la segunda vuelta entraron en liza Mitterrand y Giscard, con la victoria del primero con el 51,8% frente al 48,2% de los votos.

[12] El PSF tuvo el 37,5% de los votos y 283 diputados, de los que 14 correspondían a su aliado el Mouvement des Radicaux de Gauche. El PCF logró

el 16% de los votos y 44 diputados; y otros partidos menores obtuvieron 6 diputados. Fuera de la coalición se presentaron los partidos de extrema izquierda y los ecologistas que, conjuntamente, sumaron alrededor de 600.000 votos (2,4%) y quedaron sin representación parlamentaria. Al otro lado del espectro, los partidos de derecha (RP, UDF y otros menores) alcanzaron el 43% de los votos pero sólo el 32% de los diputados, quedando también sin representación el Frente Nacional de extrema derecha.

[13] Las dificultades en el ámbito político fueron menores, ya que, como paso previo a la reunificación, en marzo de 1990, en la RDA se celebraron unas elecciones que otorgaron una abultada victoria a la CDU y sus aliados en torno a «Alianza por Alemania». Tuvieron el 48% de los votos frente al 22% del SPD y el 16% de los excomunistas (PDS); el grupo de formaciones que habían encabezado la lucha final contra el régimen de la RDA cosechó un raquítico 3%.

[14] La coalición CDU-CSU pudo seguir gobernando en 1987 porque su retroceso (45%) fue compensado por el aumento de sus aliados liberales (10%). La situación volvió a repetirse en 1990 con cuotas del 44% y 12%, respectivamente. Después, en 1994, tanto CDU-CSU como FDP perdieron cuota electoral (41% y 7%), pero con la entrada de nuevos partidos el reparto de escaños siguió otorgándoles una leve mayoría parlamentaria.

[15] El motivo por el que el SPD anticipó la convocatoria de elecciones fue la acumulación de derrotas en las sucesivas elecciones celebradas para los parlamentos estatales, lo que dejó a la coalición SPD-Verdes en minoría dentro de la cámara alta, el Bundesrat. El motivo que forzó la gran coalición de los dos grandes partidos fue que, con resultados similares entre CDU-CSU (226 diputados) y SPD (222), ninguno de los dos alcanzaba una mayoría suficiente si se aliaba únicamente con su socio preferente, uno con FDP (61 diputados) y otro con Alianza 90/Verdes (50 diputados); ya que ambos rechazaban contar con el apoyo del Partido del Socialismo Democrático, que contaba con 51 diputados.

[16] Merced a los acuerdos de unificación, tanto Alianza 90/Verdes del Este como el PDS tuvieron representación parlamentaria a pesar de que obtuvieron, respectivamente el 1% y 2% de los votos, pero concentrados en los territorios de la antigua RDA.

[17] En las seis elecciones habidas entre 1994 y 2017 sus porcentajes de votos fueron: 7,3%, 6,7%, 8,6%, 8,1%, 8% y 8,9%; y su número de diputados: 49, 47,

55, 50, 63 y 67.

[18] El SAP gobernó en solitario de 1994 a 2006, con cuotas electorales sucesivas del 46%, 37,5% y 41%. Tras perder el gobierno, con cuotas del 37% y 32%, lo recuperó en 2014 pero su cuota se mantuvo en el 32%, la más baja en cien años. A pesar de gobernar en alianza con el Partido de los Verdes (7%), el gobierno carece de mayoría parlamentaria, lo que le coloca en una posición bastante vulnerable.

[19] En esa pérdida, 2,2 millones fueron a Rifondazione Comunista, partido formado por la fracción del PCI disconforme con la conversión en PDS, y otro millón fue a la Federación de los Verdes.

[20] La presencia parlamentaria de Democrazia Proletaria durante los años ochenta era una rareza en Europa, aunque su representación fuese casi testimonial. En 1983 logró 540.000 votos, el 1,5%, con 7 diputados, mientras que en 1987 obtuvo 640.000 votos, el 1,7%, y 8 diputados.

8. Los partidos obreros españoles: las huellas de un pasado trágico

La ruptura que vivieron los países europeos desarrollados a partir del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, abriendo paso a los grandes cambios económicos y sociales de la Edad de Oro del capitalismo, tardó décadas en llegar a España. Y lo hizo con dos particularidades muy relevantes, ya que los primeros cambios tuvieron lugar en el marco político de una dictadura y se produjeron en un país cuyas estructuras económicas y sociales seguían siendo notablemente menos desarrolladas que las de aquellos países. Los cambios alentaron unas dinámicas radicalmente distintas a las que habían perdurado desde comienzos del siglo XX, que a su vez eran herederas de un enorme atraso secular.

Conviene, pues, detenerse a considerar las características centrales del atraso histórico al que se enfrentó la Segunda República, instaurada en 1931, desatando un complejo proceso de tensiones que culminó trágicamente, primero con una cruenta guerra y después con la imposición de un régimen fascista. Fue precisamente bajo ese régimen cuando, en los años sesenta, comenzó a transformarse la estructura económica, promoviendo un intenso desarrollo industrial y una nueva inserción en los mercados internacionales. Otro tanto sucedió con la estructura social, llevándose a cabo una profunda modificación de la composición de los grupos sociales y la aparición de nuevos hábitos, comportamientos y anhelos. Al calor de unas y otras alteraciones, emergieron los movimientos sociales y los partidos políticos que replantearon los objetivos y las formas de combatir al régimen franquista.

ESTIGMAS DE UN ATRASO SECULAR

Herencias históricas ante la aparición de las organizaciones obreras

El atraso que mostraba la economía española en las primeras décadas del siglo XX no exhibía rasgos sustantivamente distintos de los que se han mencionado en capítulos anteriores para la Alemania de mediados del XIX, la Italia de finales de aquel siglo y muchos otros países y territorios europeos con escaso desarrollo capitalista. La agricultura era el sector fundamental de la estructura productiva, utilizaba tecnologías y métodos de cultivo anticuados, y ocupaba a más de las dos terceras partes de la población activa. La industria era muy reducida, padecía escasez de capital y de tecnología, se dedicaba a fabricar bienes tradicionales y se localizaba en pocas zonas geográficas. Las infraestructuras brillaban por su ausencia, tanto las físicas (transportes, comunicaciones, redes comerciales) como las sociales (sistema educativo, sanidad). Los rasgos del subdesarrollo capitalista se hacían igualmente patentes en la estructura social, con un dominio asfixiante de la aristocracia terrateniente, que incluía a la jerarquía católica entre los grandes propietarios de tierras. La presencia social de la burguesía industrial y comercial era débil y presentaba una escasa cohesión. La amplísima mayoría social estaba compuesta por masas campesinas hambrientas e insatisfechas. El proletariado fabril era exiguo, se concentraba en pequeñas zonas industriales y estaba sometido a una intensa explotación.

Desde el punto de vista político, presentaba los rasgos comunes que tenían los países con sistemas monárquico-aristocráticos. Ejercicio autoritario del poder a cargo del monarca, la elite de los terratenientes y, por delegación, los altos funcionarios de la administración estatal. Fuerte influencia de los altos mandos militares y de las jerarquías eclesiásticas. Parlamento con las atribuciones políticas recortadas y un funcionamiento sometido a las decisiones del núcleo de poder. Libertades políticas sólo al alcance de las franjas vinculadas a ese núcleo de poder. Mecanismos electorales adaptados al mantenimiento de un juego de partidos políticos que se sometían al mismo núcleo de poder. Profundo alejamiento político de la mayoría social, oprimida y analfabeta, víctima de prácticas caciquiles y clientelistas.

Junto con esos rasgos comunes a otros países atrasados, la realidad española de las décadas iniciales del siglo XX ponía de manifiesto otras características que influyeron en el desarrollo político posterior. Una primera a destacar es el modo específico que adoptó la reconfiguración del sistema político tras la restauración del dominio borbónico en 1874. El pacto entre los líderes de los dos partidos conservadores, Cánovas y Sagasta, instauró un funcionamiento parlamentario, el turnismo, que pretendía funcionar como lo hacía en el sistema político británico, incluyendo el sufragio masculino desde 1890, pero sin la estructura social ni la

base económica que tenía ese país. Por esa razón, lo que en Gran Bretaña estaba siendo el periodo decisivo de la formación de un sistema basado en la democracia política, en España sólo era un simulacro al servicio del autoritarismo monárquico, con el ingrediente especialmente reaccionario y vivamente antidemocrático que aportaba la influencia ejercida desde los cuarteles y las iglesias. El colofón de esa relación simbiótica fue la alfombra que el rey Alfonso XIII acondicionó para que el general Primo de Rivera impusiera una dictadura militar en 1923.

La segunda característica reseñable es el modo en que comenzó a abrirse paso el reclamo democrático en la sociedad española, principalmente a través de pequeños grupos de intelectuales y profesionales que defendían la construcción de un sistema parlamentario con los atributos auténticos de la democracia política. La debilidad de la burguesía hizo que la mayoría de los propietarios industriales y comerciales fuera propensa a estrechar los lazos, incluso familiares, con la aristocracia y se sometiera al dominio del núcleo de poder monárquico; mientras otra parte de los grandes y medianos propietarios se acercaba a ese núcleo por el temor que les infundían los desbordamientos de rebeldía que esporádicamente surgían desde las filas campesinas y obreras. En presencia de un sucedáneo de parlamentarismo borbónico, la bandera de la democracia quedó en manos de grupos de burgueses ilustrados, conscientes de que ese objetivo debía ir acompañado de la modernización de la agricultura, el sistema educativo y la cultura social para romper con el dominio de aristócratas, militares y eclesiásticos. En esencia, ese era el contenido medular del republicanismo tejido con los ideales krausistas de la Institución Libre de Enseñanza y sostenido por los anhelos reformistas de las formaciones republicanas que se sucedieron entre la Primera y la Segunda República, con Nicolás Salmerón y Manuel Azaña como figuras que enlazaban ambos cabos[1].

La tercera característica apunta de lleno a elementos que formaron parte de la configuración del movimiento obrero y de sus organizaciones. Las infames condiciones de trabajo y de vida que soportaban los campesinos y los obreros estaban sometidas a dos tipos de factores antagónicos. De un lado, los mecanismos inhibitorios que alejaban la rebeldía social, merced a la utilización que los grupos dominantes hacían de la ignorancia, el analfabetismo, la beatería religiosa y el servilismo caciquil. De otro lado, los mecanismos catalizadores que propulsaban esa rebeldía, merced a la actividad agitadora y organizativa de los sindicatos y a las acciones espontáneas de colectivos tendentes a desencadenar estados de euforia desde los que exigían soluciones inmediatas y

radicales a problemas profundos y gangrenados desde tiempos lejanos.

Los fuertes movimientos que jalonaron las primeras décadas del siglo no pueden explicarse sin esa combinación de mecanismos catalizadores e inhibidores. De hecho, la formación de los dos grandes sindicatos (Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional del Trabajo) y del Partido Socialista Obrero Español tuvo lugar en aquellas condiciones sociales, y su actuación contribuyó a reproducir aquella dinámica espasmódica. La penetración de las primeras semillas obreristas introdujo en España la división fraccional que existía en la Asociación Internacional de Trabajadores, a través de pautas territoriales y sociales distintas a las mencionadas para otros países. Las ideas próximas a la metáfora comunista propuesta por Marx y Engels penetraron a través de la influencia de Guesde, Lafargue y otros socialistas franceses, arraigando en las zonas obreras del norte donde se localizaban las concentraciones mineras y algunas industrias. Las ideas anarquistas, importadas a través del bakuninista Giuseppe Fanelli, enraizaron en la zona más industrial, Cataluña, y en zonas campesinas de Aragón, Valencia y Andalucía.

Tomando las formulaciones marxistas, en 1879 un minúsculo grupo de obreros pertenecientes al modesto y disperso tejido industrial asturiano, vasco y madrileño, puso en marcha el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dotándose de un proyecto socialista y un discurso revolucionario bastante simples. La sociedad española estaba configurada por un esquema binario formado por trabajadores y explotadores cuyos intereses eran antagónicos. La defensa de los trabajadores exigía acabar con el capitalismo mediante una revolución social desde la que construir la sociedad socialista. Al servicio de este objetivo, no cabían alianzas con los partidos burgueses. El anarquismo era una corriente hostil a los intereses del socialismo. La creación de una república no constituía un objetivo relevante para los obreros. Diez años después, la celebración del primer congreso del partido y su adhesión a la II Internacional reforzaron esa visión obrerista, revolucionaria e intransigente, que mantenía al PSOE como un corpúsculo minoritario y aislado de la escena política.

La actividad sindical que comenzó a desarrollar la Unión General de Trabajadores (UGT), creada directamente por el PSOE en 1888, generó la oportunidad de que los socialistas tuvieran un primer acercamiento a la práctica reformista. El sindicato debía llevar a cabo la defensa de las reivindicaciones de los obreros que trabajaban en un reducido número de empresas, localizadas sobre todo en la cornisa cantábrica y en Madrid. Fue en esas zonas donde la

UGT cobró su primera influencia. Paralelamente, el ingreso en el PSOE de intelectuales de inspiración krausista contribuyó a que germinase una sensibilidad republicana, democrática y laicista. Ese grupo aportó al partido unas ciertas miras teóricas para analizar la realidad española, a la vez que incorporaba una cultura ético-humanista ajena a los principios doctrinarios del marxismo, cuya monótona repetición agotaba el catálogo de recursos intelectuales de los líderes que habían fundado el partido.

Entrada socialista en la vida política

La situación política surgida a raíz de la «Semana Trágica» en Cataluña, en julio de 1909[2], significó un primer punto de viraje en la trayectoria socialista. Al año siguiente, cuando se convocaron elecciones al parlamento turnista, el PSOE aceptó formar parte de una coalición de fuerzas, Conjunción Republicano-Socialista, opuesta a los dos partidos que sostenían el régimen monárquico[3]. La Conjunción obtuvo sólo el 7% de los escaños y todavía fueron peores los resultados de las siguientes elecciones, mejorando en convocatorias sucesivas. Sin embargo, la importancia del hecho no residía en esos resultados, inexorablemente modestos dada la estructura política de poder, sino en que supuso la ruptura del cascarón aislacionista por parte del PSOE y su consiguiente estreno en la vida política. Lo cual desató una premonitoria división interna entre los dirigentes que apostaban por incorporar la actividad electoral a la acción política y quienes se oponían por considerar que el reclamo de democracia y la alianza con los republicanos alejaban la acción del partido de su discurso revolucionario a favor del socialismo. Esta segunda posición implicaba el regreso al reducto como grupo muy minoritario y aislado, en espera del momento propicio para desencadenar esa revolución.

La presencia socialista alcanzó cierta sonoridad durante el periodo de intensa inestabilidad social y política vivido entre 1916 y 1918. La penuria que castigaba a obreros y campesinos dio origen a una sucesión de movimientos reivindicativos espontáneos, algunos de los cuales fueron contundentes. La participación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), constituida en 1910 bajo inspiración anarcosindicalista e implantada con fuerza en los centros fabriles catalanes, aportaba mayores ingredientes de radicalidad. Fruto de esa

competencia sindical, en el seno de la UGT ganaron presencia las voces que apostaban por realizar acciones directas que encendieran los ánimos revolucionarios. El acuerdo conocido como «Pacto de Zaragoza», firmado en 1916 por los dirigentes de los dos sindicatos (Pestaña y Seguí por la CNT y Largo Caballero y Besteiro por la UGT) promovió una huelga general de un día y puso a las claras la prominencia de las voces revolucionarias entre los líderes sindicales. El éxito de la convocatoria dio lugar a que llamaran a una huelga general revolucionaria que resultó fallida. Fue el estreno de los sindicatos como sujetos políticos, capaces de lograr un creciente respaldo obrero a pesar de la fortísima represión que el Estado monárquico desató contra ellos. A finales de la década, CNT contaba con más de 700.000 afiliados y UGT con otros 210.000. Cuatro veces más que la militancia del PSOE, a quien el acuerdo entre los dos sindicatos y la convocatoria de la huelga general colocó en un brete.

Una parte de los dirigentes del partido compartían el discurso de quienes lideraban la UGT, esto es, la apuesta por transformar las estructuras capitalistas a través de la vía revolucionaria; mientras que otros dirigentes estaban convencidos de la inferioridad que presentaba el movimiento obrero, tanto en efectivos como en conciencia política, para emprender un combate frontal. Estos últimos consideraban que era prioritario centrar los objetivos en la lucha contra el sistema monárquico para instaurar una república democrática desde la que impulsar la modernización de la economía, lo que haría posible el acrecentamiento de la conciencia obrera y la fuerza política del PSOE.

Se trataba del mismo debate que se había presentado en Rusia, Italia y otros países, y que –sin pretenderlo de forma explícita– habían abierto Marx y Engels a mediados de los años cuarenta del siglo XIX en La ideología alemana. Como se ha expuesto en el primer capítulo, su tesis era que el escaso desarrollo industrial de Alemania hacía que la débil burguesía no pudiera encabezar una revolución democrática y que tuviera que ser la clase obrera, también débil, quien liderase simultáneamente la revolución democrática y la suya propia. Una tesis paradójica –«a mayor debilidad material, doble reto revolucionario»– que después presidió los debates en países cuyas economías presentaban un escaso desarrollo capitalista.

El debate cundió en el PSOE y condicionó el modo que adoptó en España la confrontación provocada por los líderes soviéticos cuando, en 1920, la III Internacional llamó a romper los partidos socialistas de cada país para crear partidos comunistas. Como antecedente previo, fue significativo que la

revolución bolchevique de octubre de 1917 fuera recibida con muestras de apoyo tanto por el PSOE y las Juventudes Socialistas (JSE) como por los líderes de la UGT y de la CNT. A continuación, la exigencia de que los partidos adheridos a la Komintern debían cumplir los 21 puntos que condensaban la idea leninista sobre la revolución socialista, fue aprobada por las JSE mientras que, en el seno del PSOE, las posiciones favorables –«terceristas»– sacaron adelante un acuerdo para incorporar al partido como organización si se garantizaba que mantendría su autonomía nacional. También la CNT envió representantes al congreso de la Internacional, entendiendo que serían acogidos como sindicalistas revolucionarios. Sin embargo, tras tomar contacto con los dirigentes soviéticos, las intenciones previas de unos y otros se desvanecieron. Las JS no consumaron la adhesión, el PSOE la rechazó y la CNT constató que sus principios no tenían cabida en esa organización.

Aquella modificación de las intenciones iniciales estuvo en el origen sainetero del modo en que se produjo la creación de un partido comunista alineado con las posiciones soviéticas. Los enviados de la Komintern que llegaron en la primavera de 1920 carecían del más mínimo conocimiento de la realidad política española, de modo que cuando contactaron con un pequeño grupo de militantes de las JS que apoyaban sus tesis decidieron que ese raquítico corpúsculo servía para fundar el Partido Comunista Español. Seguidamente, tras la marcha atrás del PSOE en sus intenciones de adhesión, un pequeño grupo de terceristas se escindió para crear el Partido Comunista Obrero Español. Al constatar la existencia de dos grupos, a finales de 1921 la Komintern exigió su fusión en un único Partido Comunista de España (PCE), minúsculo, formado por personajes sin ningún relieve político, carentes de capacidad para ejercer atracción sobre el granero de militantes revolucionarios que pertenecían al PSOE, UGT y CNT.

Los duros años de la dictadura militar de Primo de Rivera dejaron pocos resquicios para el desarrollo de las movilizaciones obreras, ya que inmediatamente eran castigadas con despidos por los empresarios, con encarcelamientos por el código penal y con tiroteos y muertes por el pistolerismo gansteril patrocinado por las organizaciones patronales. En las filas socialistas se suscitó un nuevo debate acerca de la posiciones que cabía adoptar con respecto a la dictadura y sus medidas favorables a la intervención del Estado en la economía, el proteccionismo de la industria y la extensión de las obras públicas. Mientras la mayoría de los dirigentes del PSOE sufría la represión y apostaba por combatir a la dictadura, en el seno de la UGT ganó ascendencia una postura bien diferente. Con Largo Caballero a la cabeza, los líderes ugetistas que

enarbolaban un discurso revolucionario se decantaron por una postura de neutralidad política ante la dictadura, de modo que el sindicato estuvo dispuesto a ejercer como interlocutor para negociar demandas laborales que pudieran favorecer a los trabajadores. Una posición que la dictadura no desaprovechó para intentar legitimarse mediante la concesión de ciertas medidas sociales que consensuó con los líderes ugetistas. La CNT rechazaba de plano esa postura y era objeto de una severa represión.

Por tanto, en la antesala del derrocamiento de la monarquía, el PSOE y la UGT habían afrontado dos pruebas en los que afloraron las diferencias que después serían recurrentes durante la república. La primera tuvo lugar con la entrada en la escena política tanto del partido, en su alianza con los republicanos, como del sindicato, en su acuerdo con el anarcosindicalismo. La segunda se produjo durante la dictadura, cuando las posiciones combativas que defendían los principales dirigentes del partido eran respondidas con represalias y la neutralidad ugetista hacía factibles algunos acuerdos laborales.

En ese recorrido, una parte de los líderes socialistas confirmó su convicción acerca de la necesidad de situar la conquista de una república democrática y modernizadora como objetivo central, aunque a su vez entre Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos existían notables diferencias acerca de cómo llevar a cabo ese proceso político. Otra parte de los dirigentes sostenía que la alternativa seguía siendo la misma que había planteado Pablo Iglesias al fundar el partido: acabar con el capitalismo por la vía insurreccional; para lo cual resultaba accesorio y funcional todo lo que mediara hasta el momento en que madurase el momento revolucionario. De ese modo, líderes como Francisco Largo Caballero, Wenceslao Carrillo y Julián Besteiro, con diferencias entre ellos, coincidían en considerar que asuntos como el reclamo de derechos democráticos, el juego parlamentario y las relaciones con el régimen dictatorial debían ser valorados según conviniera en cada circunstancia a la causa socialista.

En capítulos anteriores se ha mostrado cómo esos posicionamientos fueron recurrentes en la trayectoria de los partidos obreros de los distintos países, reproduciéndose debates y alineamientos similares. Pero, al mismo tiempo, respondían también a elementos específicos que se alojaban en el comportamiento sociológico de la realidad española, merced a la influencia que ejercían las distintas organizaciones y a las formas específicas de opresión que se derivaban de las estructuras económicas, sociales, religiosas y políticas. Expresiones de ello eran la sucesión de episodios de furia que pretendían

alcanzar resultados inmediatos con los que erradicar situaciones estructurales, el exceso de credulidad hacia discursos demagógicos que patrocinaban soluciones balsámicas, y las premuras por entablar conflictos frontales sin considerar la correlación entre las fuerzas propias y ajenas.

EL FUTURO SOCIALISTA ENCADENADO AL DEVENIR DE LA REPÚBLICA

El régimen monárquico agotó las fórmulas con las que dar continuidad a un sistema político autoritario que no satisfacía las demandas de la mayoría de la población y que, al cabo de los años, tampoco era capaz de reprimir las crecientes protestas de obreros, campesinos y estudiantes. Bajo los efectos de la crisis económica internacional que había comenzado en 1929, muchos sectores conservadores dejaron de apoyar al monarca y prestaron sus oídos a los partidos que proponían una transición sin traumas hacia un régimen republicano. La confluencia del PSOE y de los partidos republicanos que habían combatido a la dictadura con otras formaciones recién desgajadas del régimen borbónico se produjo en torno a una nueva Conjunción Republicano-Socialista.

Dentro del PSOE se reprodujeron los debates acerca de si la consecución de una república debía ser un objetivo del partido o bien el tipo de régimen era una cuestión secundaria y los socialistas no debían aliarse con fuerzas republicanas. Prieto era la figura más representativa entre los partidarios de consolidar el frente republicano, mientras que Largo Caballero tardó tiempo en aceptar esa alianza a la vez que seguía dando prioridad al discurso revolucionario. Besteiro defendía una idea de cómo avanzar hacia el socialismo que era ajena al discurso revolucionario, pero intentó disolver el comité que socialistas y republicanos habían formado para preparar el derrocamiento del rey proponiéndose hacer fracasar la participación socialista en la Conjunción.

La convocatoria de elecciones municipales en abril de 1931 fue el momento elegido para echar un pulso definitivo al régimen monárquico, a pesar de la desventaja que suponía el hecho de que los derechos democráticos con los que llevar a cabo la campaña electoral fueron reconocidos sólo tres semanas antes por el último gobierno del rey. Los resultados de las principales ciudades dejaron

meridianamente claro que los votantes se decantaban por la amplia y variopinta gama de formaciones políticas favorables a la instauración de una república democrática. Al margen de esa propuesta estaban la recién creada Federación Anarquista Ibérica (FAI), hermanada con la cada vez más numerosa CNT, y el PCE, que seguía siendo minúsculo y sin ninguna influencia.

Los resultados dieron lugar a dos lecturas complementarias. En el plano municipal, otorgaron a la Conjunción un gran número de alcaldes y concejales, sobre todo en las ciudades y los principales centros comarcales. En el plano nacional, supusieron un plebiscito de rechazo a la monarquía. Sin embargo, los aliados de la Conjunción no habían establecido cómo actuarían en caso de tal victoria, de modo que los dirigentes del comité que pudieron reunirse el día de las elecciones[4] permanecieron a la espera de ver cuál era la respuesta del ejército antes de formar un gobierno provisional. Finalmente, tras conocer que el rey se preparaba para el exilio (sin abdicar de forma explícita) y que las grandes manifestaciones de trabajadores promovidas en Madrid y otras ciudades no estaban sufriendo la represión del ejército, optaron por proclamar la república y formar un gobierno provisional. Este gobierno se encargaría de preparar las elecciones constituyentes en el mes de junio y pondría en marcha las reformas más urgentes.

Fueron meses de interinidad pero decisivos porque, en ese tiempo, se desvelaron los cuatro vectores que después marcarían la escena política: las iniciativas del gobierno, las restricciones impuestas por la crisis económica, los apremios reivindicativos exigidos por los trabajadores y el azuzamiento de conflictos provocado por las fuerzas reaccionarias que habían sido desplazadas.

Tiempo de grandes esperanzas

Las elecciones constituyentes arrojaron dos resultados fundamentales[5]: el aplastante triunfo de las fuerzas republicanas y la primacía del PSOE como principal fuerza parlamentaria. Los socialistas obtuvieron casi la cuarta parte de los escaños y el conjunto de las formaciones favorables a la república sumó más del 85% de los diputados[6]. A continuación, los convergentes tuvieron que decidir la composición y el programa del gobierno.

La formación del gobierno fue resuelta con pragmatismo, pero dejando secuelas que más tarde serían importantes. Manuel Azaña fue nombrado jefe de gobierno, a pesar de que su pequeño partido, Acción Republicana (AR), sólo contaba con el 6% de los escaños, mientras que Alejandro Lerroux era nombrado ministro de Estado como reconocimiento a que su Partido Radical (PR) era la mayor fuerza entre los partidos republicanos; otros miembros de AR y PR y de los partidos catalán y gallego ocuparon distintas carteras, mientras que el PSOE quedó con tres ministerios de indudable notoriedad[7]. A propuesta de Azaña, el parlamento eligió a Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la república, líder de otro partido minoritario, Derecha Liberal Republicana. Esta fue otra decisión que entraría en la trama de conflictos desatados posteriormente. Una vez constituido el gobierno, la vida política del parlamento, las decisiones del gobierno y las posiciones de los partidos giraron en torno a ocho grandes cuestiones.

Primera, la elaboración de una Constitución para instituir un sistema republicano basado en la democracia política. El texto final quedó preparado en pocos meses para que pudiera ser aprobado antes de que concluyera aquel primer año. Proclamaba el establecimiento de una «república de trabajadores de toda clase» y recogía como pilares básicos la soberanía del parlamento (con una sola cámara), el pleno reconocimiento de las libertades políticas y el sufragio universal. Un marco que dos años después permitió la aprobación del derecho de voto de las mujeres[8], además del matrimonio civil, el divorcio y otras extensiones de las libertades cívicas.

Segunda, la reforma del ejército para modernizarlo y eliminar los privilegios que le colocaban como una institución por encima de la sociedad, incluso del poder político. Además de sustituir a muchos mandos militares y de favorecer la retirada de otros claramente antirrepublicanos –manteniendo su remuneración–, redujo drásticamente el número de jefes y oficiales, y suprimió los derechos que otorgaban a la institución una jurisdicción propia que ejercían los mandos militares sobre cualquier tipo de delito.

Tercera, la reforma agraria para proporcionar tierra a una gran cantidad de campesinos que carecían de ella, sobre todo en las zonas latifundistas. Se procedió al reparto de ciertas fincas, se legisló la posibilidad de expropiar tierras no trabajadas, se prohibió el desahucio de aparceros y otras medidas guiadas por el convencimiento de que la transformación de la agricultura era determinante para garantizar el sustento alimenticio de los campesinos y para avanzar en la modernización de la economía. Sin embargo, en el terreno práctico, la aplicación

de las medidas aprobadas fue lenta y, peor aún, con escasos resultados.

Cuarta, el replanteamiento de las relaciones del Estado con la Iglesia católica y la actuación contra sus múltiples privilegios. Unas relaciones inevitablemente conflictivas debido a la oposición frontal de la jerarquía católica contra el laicismo, la extensión de las libertades cívicas y la normalización de la enseñanza. Cada medida en ese sentido era denunciada como si se tratase de agresiones contra las ideas religiosas cuando, en realidad, se trataba de actuaciones contra sus desmesurados privilegios[9].

Quinta, la reforma de la enseñanza como principal factor de regeneración social para fomentar el conocimiento y los valores asociados a la democracia y la tolerancia. Se instauró la educación básica, obligatoria y gratuita, se organizó un programa generalizado de alfabetización, se alentaron las innovaciones pedagógicas, se fomentó la coeducación de niñas y niños, se construyeron miles de escuelas y se las dotó de maestros, excluyendo la formación religiosa de los centros de educación. Las Misiones Pedagógicas, guiadas por el ideario de la Institución Libre de Enseñanza, impulsaron una gran cantidad de iniciativas culturales en los medios rurales y las ciudades pequeñas, hasta entonces carentes de bibliotecas, actividades teatrales y otras manifestaciones culturales.

Sexta, la reestructuración del Estado para afrontar las demandas relativas a la «cuestión nacional». Esta fue planteada por los partidos republicanos catalanes el mismo 14 de abril, cuando el coronel Francesc Macià proclamó una República Catalana como parte de una Confederación Ibérica. Tras una rápida negociación con el gobierno provisional, Macià y su partido dejaron de lado esa proclamación y acordaron que el gobierno catalán fuera una Generalitat dotada de ciertas funciones mientras se elaboraba un estatuto de autonomía que establecería las funciones transferidas por el Estado. Una vez concluido y aprobado por el parlamento, el estatuto institucionalizó un amplio abanico de derechos y atribuciones, abriendo la puerta a la preparación de otros similares que demandaban las fuerzas nacionalistas del País Vasco y Galicia.

Séptima, la reforma laboral para garantizar la extensión de los derechos democráticos al ámbito de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Se legisló la obligatoriedad de convenios colectivos en los que ambas partes pactasen las condiciones de trabajo, actuando los sindicatos como representantes de los trabajadores. Se crearon jurados mixtos para mediar en los conflictos laborales.

Octava, medidas económicas para activar el crecimiento y elevar la protección social. En este sentido, la mayor parte de los propósitos no fueron más que enunciados inconcretos que reflejaban las aspiraciones de los partidos y los movimientos sociales, pero con escasas aplicaciones prácticas. Ciertamente, la situación depresiva en la que se encontraba la economía desde 1929 restringía los márgenes de maniobra, pero en todo caso ninguno de los partidos aliados contaba con propuestas de política económica capaces de afrontar la crisis[10].

¿Muchas o pocas reformas?, ¿grandes o pequeños cambios? Son preguntas para las que las posibles respuestas dependen de cómo se ponderen los condicionantes de la situación de partida, las promesas avanzadas por los partidos, las expectativas de millones de campesinos y obreros, las adversidades que afrontó el gobierno y el margen del tiempo de que dispuso para ponerlas en marcha. Las cuatro primeras cuestiones saldaban cuentas con el pasado, con la intención de erradicar las bases que habían cimentado el dominio monárquico-terrateniente-militar-eclesiástico. La quinta, la reforma educativa, apuntaba a la médula del pensamiento republicano, a sabiendas de que no podía haber ningún futuro venturoso sin que la mayoría de la población saliese del analfabetismo y la ignorancia, y sin que se fuera creando un acervo científico y cultural. La sexta pretendía atender las exigencias de los nacionalistas republicanos para construir un Estado plurinacional. Las dos últimas concernían al difícil equilibrio entre las (escasas) posibilidades de satisfacer las demandas inmediatas de las masas trabajadoras para salir de la penuria y las (imprescindibles) reformas estructurales que necesitaba la economía para superar su atraso histórico.

Visto así el panorama, la república tenía por delante un reto titánico por cuatro motivos. Primero, la necesidad de compaginar reformas de muy diversa índole, cada una de las cuales arrastraba sus propias urgencias. Segundo, la magnitud de los adversarios que habían quedado desplazados y se negaban a desprenderse de su poder. Tercero, la dificultad de satisfacer en el corto plazo muchas de las expectativas desatadas entre la mayoría social. Cuarto, la diversidad de intereses y características de los partidos republicanos, incluyendo las que concernían a los principales líderes que ahora ejercían el poder político.

Sin que ellos pudieran saberlo, las fuerzas políticas y los movimientos sociales se encontraban ante una oportunidad única de comenzar a romper con el pasado y de cimentar, con bastante modestia, el futuro sobre con nuevas bases sociales y económicas bajo un sistema democrático. La suma de incomprensiones, dificultades y fatalidades desvelaría después que el cambio de rumbo producido

en 1934 era mucho más que un viraje electoral que dio paso a un gobierno de derechas. Era la evidencia de una oportunidad perdida cuyas principales consecuencias serían la involución del proceso de reformas, el fortalecimiento de las fuerzas reaccionarias, la profunda desafección social y el debilitamiento político de la república. Cuatro consecuencias similares a las que se produjeron en Alemania a partir de los primeros años veinte, en la también naciente república de Weimar. En ambos casos, la república dependía de lo que hicieran los socialistas, y el futuro de estos quedaba atado al devenir de la república.

Los hechos que explican la dinámica centrífuga sobrevenida a partir del verano de 1931, una vez constituido el parlamento y formado un gobierno de coalición, pueden presentarse a modo de un tríptico en el que cada panel recoge el comportamiento respectivo de los movimientos sociales, las fuerzas reaccionarias y el arco político de las organizaciones republicanas.

Primer panel: en la base social republicana se abrieron numerosas fisuras que llegaron a convertirse en importantes fracturas. El origen cabe fijarlo en dos elementos que se alimentaban entre sí: las enormes ilusiones desatadas por la proclamación de la república y el rechazo de partida que adoptaron las fuerzas que apostaban por el desarrollo de una revolución social. El curso de los acontecimientos hacía difícil, a veces inviable, distinguir en qué medida las expresiones de descontento de sectores obreros y campesinos surgían del apremio con el que exigían al gobierno reformas que aportaran resultados inmediatos, o en qué medida esas expresiones de descontento, sobre todo las más radicales, derivaban de la influencia de quienes sólo aspiraban a desencadenar procesos de desafección contra el gobierno como mecanismo de atracción hacia su discurso revolucionario.

Uno y otro aspecto se activaron inmediatamente después del 14 de abril mediante huelgas sectoriales, generalmente convocadas a escala comarcal o provincial, y ocupaciones de tierras, sobre todo en Andalucía. Muchos segmentos de obreros y campesinos tenían prisa por plasmar en hechos la nueva fuerza adquirida, a la vez que FAI-CNT[11], sectores del PSOE y sobre todo de UGT reclamaban mayor profundidad a las reformas que debía emprender el gobierno. Según corrían los meses, las primeras acciones dieron paso a otras que se alimentaban de tres nutrientes: la exigencia de soluciones rápidas, el rechazo de algunas de las medidas que iba aprobando el gobierno y las represalias que llevaban a cabo la guardia civil, los terratenientes, los empresarios, los mandos militares, los cargos eclesiásticos y las autoridades civiles. La espiral de acción-

reacción-acción provocó buena parte de las huelgas obreras, levantamientos campesinos y choques entre manifestantes y fuerzas represivas.

A su vez, las medidas del gobierno relacionadas con la agricultura, la negociación laboral y otras servían de revulsivo para confrontar los magros resultados con las grandes promesas iniciales. La CNT alentó movimientos locales de carácter insurreccional, principalmente en zonas de Cataluña y en Andalucía, proclamando el «comunismo libertario» y el rechazo frontal a la autoridad del gobierno. La sección agraria de la UGT (Federación de Trabajadores de la Tierra) aceptaba el envite anarquista y radicalizaba sus acciones entre los campesinos; algo que también ocurría, aunque en menor medida, con las secciones obreras de UGT en algunas zonas industriales y con ciertas agrupaciones del PSOE en núcleos urbanos.

En esa disyuntiva, el gobierno estaba obligado a considerar otro plano urgente de actuación: el mantenimiento del orden público, que tristemente pasó a ser prioritario en 1933. En enero se produjo un levantamiento campesino en el pequeño municipio gaditano de Casas Viejas, como forma de participar en una huelga general convocada por la CNT y que sus propios dirigentes calificaron como «gimnasia revolucionaria» contra la consolidación de la república. El gobierno quedó seriamente malparado cuando la opinión pública conoció los detalles de la despiadada represión con que habían actuado la guardia civil y la guardia de asalto[12]. Sin embargo, la cuestión de fondo tenía un doble calado bastante más profundo. De un lado, la CNT, secciones importantes de UGT y una parte del PSOE habían tomado como objetivo impedir el desarrollo de la república si esta no asumía un carácter revolucionario. De otro lado, la fuerza movilizadora de esa disidencia tenía capacidad para desbordar la legalidad republicana en ciertas zonas, tratando de que prevaleciera la legitimidad sociopolítica de sus demandas revolucionarias.

Segundo panel: la hostilidad de las fuerzas reaccionarias fue ganando terreno. Inicialmente quedaron desnortadas por la precipitación de los acontecimientos, hasta el punto de que los monárquicos se presentaron divididos a las elecciones de junio de 1931 y sin otra propuesta que la de regresar al régimen borbónico. La única formación que logró cierta representación fue el Partido Agrario, que sólo tuvo 25 diputados, apenas el 5% de los escaños parlamentarios. Ese resultado actuó como revulsivo para que monárquicos, latifundistas, banqueros, grandes empresarios, mandos militares y jerarcas católicos entendieran que, ante su escasa presencia parlamentaria, debían desplazar al terreno social la

confrontación contra las fuerzas republicanas. De camino, los periódicos, los cuarteles y los púlpitos, el control de los resortes económicos y la influencia en la vida social de pueblos y pequeñas ciudades debía servir para crear partidos políticos antirrepublicanos y sembrar la discordia en las filas gubernamentales con el fin de ganar a los sectores conservadores.

Pronto comenzaron las colectas entre gentes piadosamente millonarias, dispuestas a realizar aportaciones económicas con las que favorecer la preparación de complots y financiar la creación de partidos políticos. Las medidas del gobierno para modernizar el ejército, repartir la tierra, la enseñanza laica y gratuita, el estatuto de Cataluña, el divorcio, los convenios colectivos y otras, al igual que los recurrentes desórdenes públicos, sirvieron como pretexto para cultivar una montaña de agravios republicanos contra los mayores mantras reaccionarios: dios, patria, propiedad y orden, en los que se parapetaban la aspiración de retornar a los privilegios que había ostentado la oligarquía compuesta por los dirigentes de la iglesia, el ejército, la monarquía, los banqueros y los terratenientes. Considerados como el principal recurso operativo, los militares prepararon sucesivos complots, unos abortados antes de su inicio y otros llevados a cabo, sobre todo el intento de golpe de Estado que inició el general Sanjurjo en el verano de 1932. Las nuevas organizaciones políticas no se recataban a la hora de expresar su identificación con los ideales totalitarios de los fascistas italianos y el pujante ascenso nazi en Alemania.

Tercer panel: la división entre los partidos republicanos a medida que se debilitaban el espacio político y la base social que sostenía la política del gobierno. Se suscitaron tres tipos de diferencias notables. En primer lugar, las discrepancias acerca de la profundidad que debía alcanzar la democracia republicana. Sobre todo las relativas a la extensión de las libertades cívicas, colectivas e individuales, que afectaban al laicismo social y a la separación Iglesia-Estado, entrando en conflicto los sectores más conservadores con el PSOE y el Partido Radical[13]. En segundo lugar, las discrepancias sobre cuestiones sociales. Las posiciones socialistas siempre llegaban más lejos y su comprensión ante los conflictos desatados era mayor que la mostrada por el Partido Radical y los partidos nacionalistas, ya que estos estaban más vinculados a las demandas de los propietarios medianos o pequeños, tanto urbanos como rurales, y a los grupos profesionales que les votaban. En tercer lugar, las divergencias sobre la organización territorial de la república. En este caso se cruzaban de forma transversal las posturas que se mantenían en cada uno de los partidos entre federalistas y centralistas, y entre nacionalistas centrales y

periféricos.

Esa geometría variable de concordias y discrepancias se veía exacerbada por otros choques en los que primaban las animadversiones personales, entre las que destacaban dos. Uno era la difícil relación entre las dos máximas autoridades del Estado, Alcalá-Zamora y Azaña, personalidades dispares desde cualquier perspectiva, tanto intelectual e ideológica como de talante personal, reflejada en compromisos muy distintos con el ideario republicano: tenue en Alcalá-Zamora (procedente del turnismo monárquico) e intensa en Azaña. El otro choque enfrentaba a Alejandro Lerroux con el PSOE, no tanto con uno u otro dirigente socialista. Una inquina que excedía las diferencias políticas. Siendo su Partido Radical el más votado entre los republicanos, Lerroux se consideraba el líder de todos ellos para impedir cualquier hegemonía socialista (nunca intentada en esos años). Para lo cual cualquier momento o tema le resultaba propicio, haciendo gala de un rabioso antisocialismo, practicado con lenguaraz demagogia, sólo a la altura de su ilimitada ambición personal.

Un efecto directo de las divisiones partidistas y los enconos personales fueron las crisis gubernamentales de la coalición. La primera se produjo durante la elaboración de la Constitución, cuando el parlamento aprobó la separación Iglesia-Estado. Alcalá-Zamora y Maura dimitieron como presidente de la república y como ministro de la Gobernación, respectivamente, forzando una rápida remodelación que apenas duró dos meses, ya que una vez aprobada la Constitución, muy a su pesar, Azaña volvió a proponer a Alcalá-Zamora para que el parlamento lo eligiera como presidente constitucional de la república. En ese momento, Azaña tuvo que dimitir formalmente para de inmediato formar un gobierno similar a los anteriores, con la salvedad de que el Partido Radical decidió quedarse al margen y se incorporó Esquerra Republicana de Catalunya. De ese modo, Lerroux pudo afilar los dardos que seguidamente lanzó contra las medidas gubernamentales.

La siguiente crisis fue catapultada por los acontecimientos de Casas Viejas, pero venía precedida de un cúmulo de problemas que castigaba a la alianza republicana. El nuevo gobierno de junio de 1933 tenía una composición similar al precedente, pero estaba acechado por esa acumulación de asuntos no resueltos. Sin que mediara ningún acontecimiento específico, detonó una crisis en la que volvieron a entrar en liza Alcalá-Zamora y Lerroux. En octubre, el primero decidió retirar la confianza al gobierno de Azaña y encargó la formación de otro nuevo a Lerroux con la presencia de todos los partidos republicanos,

incluido el de Azaña. Fuera, sin brindarle su apoyo, quedó el PSOE, que era la mayor fuerza parlamentaria, lo que supuso el final de la alianza forjada en 1931 y abrió el camino a las segundas elecciones del periodo republicano.

Sin embargo, aunque esa narrativa se atiene bien a los hechos resulta superficial si no toma en consideración que, más allá de disputas palaciegas, latían dos fenómenos de extrema gravedad: la fragmentación de la estructura social y la distancia que separaba a las distintas tendencias socialistas.

En el transcurso de 1931 a 1933, en plena crisis económica internacional, la sociedad experimentó una fragmentación de índole socioeconómica que añadía mayores obstáculos contra la consolidación de la república; sometiéndola a un vaivén cada vez más intenso derivado tanto de las esperanzas-desilusiones de las masas trabajadoras como de los temores-ambiciones de una oligarquía dispuesta a recuperar su dominio político. Las huellas del atraso histórico se hacían presentes en una escena política atrapada entre los apremios de las clases oprimidas y las reacciones frontales de las elites dominantes. Aquellas querían compensaciones amplias y urgentes; mientras que estas escatimaban cualquier concesión.

El drama consistía en que, muy pronto, esa oligarquía supo agruparse en torno a las posiciones que defendían sus intereses, mientras que los grandes contingentes de campesinos y obreros diseminaban sus posiciones políticas: unos, hacia la demagogia lerrouxista; otros, hacia las aventuras revolucionarias, y muchos otros veían menguar su depósito de ilusiones con la proliferación de las divisiones entre las filas republicanas y en el seno de los socialistas, incapaces de fijar unos objetivos comunes en los que concentrar su acción política.

Los dilemas internos del PSOE no eran distintos a los que se dirimían desde que nació la república, pero al cabo de esos dos años la diferencia estribaba en que se había convertido en un partido de masas, con casi un millón de afiliados, por lo que su fuerza política y su incidencia social eran fundamentales. Aunque no estaba al frente del gobierno y contaba sólo con tres ministros, las decisiones del PSOE podían marcar en buena medida el rumbo de la república. Por eso, el futuro de esta y el suyo propio como alternativa política permanecían hermanados, para conformidad de unos y enojo de otros. Motivo por el cual las divisiones, los titubeos, las omisiones y los errores socialistas pesaban tanto en el desarrollo de los acontecimientos.

Las tres posturas iniciales que se debatían en la dirección del PSOE y se trasladaban al conjunto de la militancia derivaron hacia una disputa dual conforme dos de ellas confluyeron. Una agrupaba a quienes se declaraban autistas en lo referente a la forma del Estado, el marco de libertades políticas y las reformas sociales, importándoles sólo si aportaban mayor caudal a favor del desarrollo de capacidades revolucionarias. Otra estaba formada por quienes habían aceptado la alianza con los republicanos y habían participado en las primeras tareas de gobierno, pero que, con el paso del tiempo, preferían apuntar sus críticas hacia la lentitud y las carencias reformistas del gobierno. La tercera posición no era más condescendiente ante esa lentitud y esas carencias, pero por encima de todo mantenía la necesidad de sostener la república para intentar avanzar en el desarrollo de las reformas según el margen de posibilidades que ofrecía la situación. Prieto se mantuvo en esta última postura, mientras que Largo Caballero encabezó la confluencia de las otras dos, desplegando un doble discurso. Unas veces se pronunciaba por la preparación de la toma insurreccional del poder político para instaurar una dictadura revolucionaria del proletariado (Lenin dixit), y otras veces se refería a la hegemonía del poder dentro del sistema político constitucional (socialdemocracia alemana o laborismo de comienzos de siglo dixit).

Aquel binomio fuera-dentro de la Constitución republicana era fundamental para demarcar la dirección de la línea política del PSOE y trazar sus alianzas. La ambigüedad encubierta tras las proclamas revolucionarias unas veces derivaba en posiciones políticas huecas e inoperantes, y otras veces se decantaba por acciones que proponían el desbordamiento del marco legal sin precisar cuáles serían las consecuencias posteriores. En el otro lado, la pasividad ante las inhibiciones y errores del gobierno tampoco favorecía el desarrollo de una dinámica política que afrontara las dificultades existentes. Difícil es, por supuesto, conjeturar cuál podría haber sido la posición adecuada que habría fortalecido la unidad y la energía política del PSOE para liderar el rumbo de la república. Pero fácil es constatar los efectos derivados de la ausencia de un consenso interno y una acción política desnortada.

Siendo así, las debilidades de la república y de los socialistas dejaban el camino abierto para que la derecha enfilara la recuperación del poder político, precisamente cuando llegaban los ecos del acceso del nazismo al poder en Alemania. Sin embargo, muchas voces radicales cifraban en ese hecho la posibilidad de un escenario en el que sería factible el desencadenamiento de un proceso revolucionario. Se trataba de una reedición del «cuanto peor, mejor», ya

vista en otros momentos históricos.

Cuanto peor, peor: esperanzas marchitadas y fuga insurreccional

Lo que sucedió a continuación en el campo republicano fue lo más parecido a una cadena de actos suicidas, que comenzó con el consabido cruce de reproches de unos a otros partidos, mostrando todos ellos un nulo ejercicio autocrítico que pudiera contribuir a poner de manifiesto las responsabilidades en las que estaban incurriendo. El lerrouxismo se beneficiaba de ese comportamiento y preparaba su desembarco en una coalición con las fuerzas contrarias a la república. Incapaces de recomponer su alianza, los partidos republicanos se encaminaron por separado a unas elecciones cuyo sistema de asignación de escaños favorecía a las coaliciones, como hicieron las fuerzas derechistas para concurrir en bloque. Esas fuerzas, ya entonces llamadas «nacionales», tenían fácil consensuar un programa común basado en los agravios que las medidas del gobierno habían provocado en sus intereses. Demandaban, por tanto, la anulación de las reformas, mano dura para mantener el orden público, amnistía para los militares sublevados y reposición en sus puestos a los que habían sido retirados. Su programa consistía en una enardecida defensa de los sagrados valores de la patria, la religión, la propiedad y el orden.

La gravedad de los litigios que abrasaban políticamente al PSOE quedó de relieve en el planteamiento defensivo de su campaña electoral, centrada en señalar las amenazas que representaban Lerroux y la llegada de los partidos totalitarios al poder. Nada tuvo de extraño que los resultados electorales de noviembre de 1933 fueran los peores posibles en todos los sentidos, tanto para el propio partido como para la vida republicana.

El Frente de Derechas cosechó una victoria clara, pues con 243 diputados obtuvo dos tercios de los escaños. Dentro del frente, la primera fuerza parlamentaria fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)[14], formada por grupos heterogéneos en torno a un ideal, el Estado totalitario, y un líder, José María Gil Robles, que premeditadamente emulaba las formas de Mussolini y Hitler. Fuera del frente, los partidos republicanos de derecha obtuvieron más diputados que los de centro e izquierda (140 vs. 94), y entre aquellos aumentó el

predominio del Partido Radical de Lerroux, que elevó su representación hasta 102 escaños, ejerciendo como segundo partido parlamentario, a corta distancia del primero (CEDA) y a gran distancia del tercero. Ese lugar lo ocupó el PSOE, cuyo hundimiento le supuso quedarse con 60 diputados. Otro tanto le sucedió a Acción Republicana, el partido de Azaña, y a Esquerra Republicana, con un número exiguo de diputados. El Partido Comunista hizo su estreno parlamentario con un diputado, mientras su nueva dirección política seguía haciendo gala de un rudo obrerismo y de la máxima fidelidad a la Komintern. Los nuevos líderes, José Díaz y Jesús Hernández, consideraban al PSOE como el enemigo a batir, al que calificaban de social-fascista.

A las fuerzas obreras y republicanas les tocaba remar contracorriente dentro y fuera del parlamento, en condiciones considerablemente peores que las de tres años antes. La opción vencedora, la CEDA, calibró que no era el momento de presentar un ataque frontal contra la república y accedió a que Lerroux encabezara un gobierno con ministros radicales e independientes de derecha. Se trataba de un gobierno sin la CEDA pero con el programa de la CEDA, centrado en destejer el camino andado en el trienio anterior. A ello se aplicaron con ahínco tanto el gobierno como el parlamento, anulando las leyes, decretos y demás disposiciones que se habían dictado sobre las distintas cuestiones que lesionaban los intereses reaccionarios.

El revulsivo opositor se mantuvo disperso. Una parte del PSOE, la UGT y los republicanos contrarios al gobierno lerrouxista se esforzaban en vano por levantar diques de contención contra la marcha atrás de las reformas. Otra parte de los socialistas y ugetistas, junto con la CNT-FAI, optó por la detonación de levantamientos campesinos y la promoción de huelgas y enfrentamientos con la guardia civil, entre otros conatos episódicos[15]. En el triángulo PSOE-JSE-UGT se produjo un viraje favorable a las tesis de Largo Caballero, cosidas a nivel intelectual por Luis Araquistáin y Julio Álvarez del Vayo, acerca del agotamiento de las posibilidades políticas reformistas de la república y la necesidad de preparar una insurrección armada.

El modelo bolchevique de octubre de 1917 era importado en su totalidad, solo que sin ninguna de las condiciones básicas que habían estado presentes en Rusia. El aparato civil del Estado y, menos aún, el ejército no estaban descompuestos, ni existían como contraparte sóviets organizados y armados. Pese a lo cual, las direcciones de las tres organizaciones socialistas formaron un comité conjunto para preparar la insurrección. El motivo y el momento sería el acceso de la

CEDA al gobierno, considerando que era un punto de no retorno porque representaba la llegada del fascismo al poder. El medio para preparar el levantamiento sería la formación de «alianzas obreras»[16], a la vez que se proponían contactar con mandos militares favorables y acumular importantes cantidades de armamento.

Transcurrieron nueve meses desde la formación del gobierno sin presencia de la CEDA hasta que esta y su líder tomaron asiento en el gobierno. Meses en los que las fuerzas de derecha dejaron patentes sus desacuerdos sobre las prioridades y el ritmo con que debía realizarse el desmantelamiento de las reformas. En tan corto periodo hubo tres crisis de gobierno. Las dos primeras mantuvieron la primacía del Partido Radical, aunque en la segunda Lerroux fue sustituido por su correligionario Ricardo Samper y la CEDA intentó forzar su entrada. En la tercera, a comienzos de octubre de 1934, Lerroux recuperó la jefatura y la CEDA entró con tres ministros, asumiendo Gil Robles el ministerio de la Guerra.

Fue el pistoletazo de salida de la insurrección prevista. A pesar de que la CNT no había aceptado formar parte de la alianza obrera, que los contactos con mandos militares no habían generado adhesiones relevantes y apenas habían logrado hacerse con armas. La espoleta prevista era la convocatoria de una huelga general revolucionaria que generaría efectos multiplicadores: movilizaciones masivas que se hicieran con el control de los órganos de poder estatal y de los centros neurálgicos civiles y militares. Ciertamente, la huelga fue seguida por un gran número de obreros en Bilbao, Guipúzcoa, Madrid y otros lugares, pero al concluir aquel 5 de octubre, salvo pequeñas escaramuzas, ya habían acabado los destellos rebeldes.

Sólo en Asturias y Cataluña la huelga continuó en forma de insurrección general. En Asturias porque, además de contar con el apoyo de la CNT regional, el levantamiento de las cuencas mineras proporcionó fuerza política y un particular arsenal militar (la dinamita) con los que los destacamentos obreros pudieron controlar las principales ciudades y deponer a las autoridades de la región. En Cataluña, sin apoyo de la CNT que era la principal fuerza, porque contó con la adhesión de la Generalitat, enfrentada a un gobierno que había paralizado el estatuto de autonomía. Aquel mismo día, Companys declaró el «Estat Català» dentro de Republica Federal Española, y apoyó a los obreros insurrectos.

Dos zonas levantadas que en pocos días quedaron aisladas frente a una fuerza militar muy superior que les amenazaba con represalias inapelables. Tras una

primera resistencia numantina las dos tuvieron que rendirse, aunque no por ello –especialmente los obreros asturianos– pudieron eludir una feroz represalia después de que fuera aplastado el levantamiento. Fusilamientos, detenciones masivas, juicios sumarios con condenas a muerte y largas penas de cárcel, castigos a familiares y demás lindezas cometidas por jefes militares profundamente antirrepublicanos y antisocialistas. Agraviados por la reforma militar del gobierno azañista, se valieron de tropas marroquíes expresamente llevadas por el general Franco para perpetrar aquella carnicería.

Un destrozo trágico por la violencia desatada y por sus consecuencias posteriores. Un impulso desventurado surgido de la reacción exasperada que se hizo preponderante entre los socialistas, sustituyendo la autocrítica y la lucidez por una visión obnubilada de la realidad. La debilidad política, la nula legitimidad y la carencia de preparación y capacidad militar condenaban de antemano al fracaso aquel propósito insurreccional. La desorientación ulterior en las filas socialistas quedó parcialmente solapada por la posibilidad de atizar la indignación popular contra la represión militar y el ánimo vengativo de un gobierno derechista que, dando un gran paso en falso, acusó a Azaña y al conjunto de los dirigentes del PSOE como responsables directos de los sucesos de Asturias.

Alcalá-Zamora criticó abiertamente a la CEDA por esa actitud y por su pretensión de acabar con la república. A continuación, los afanes totalitarios generaron nuevas tensiones en el bloque de gobierno, provocando sucesivas crisis[17] hasta que, a finales de 1935, el desmembramiento de la coalición radical-cedista obligó a celebrar las terceras y últimas elecciones de la república. No todas las fuerzas del bloque querían volver a una restauración monárquica y menos aún veían con buenos ojos cómo los sectores más derechistas promocionaban a militares tan reaccionarios como Franco, Goded y Fanjul, ni la reintegración a sus puestos de los militares monárquicos de la época de la dictadura, ni el intento de restaurar los tribunales de honor que volvían a situar al ejército con una jurisdicción propia al margen del poder civil. Medidas que despedían un hedor demasiado intenso a golpismo militar y reaccionarismo aristocrático.

Agotada la coalición al cabo de un «bienio negro», las elecciones convocadas para febrero de 1936 originaron otra oscilación pendular de la escena política. Pero sólo en apariencia se iba a retornar al punto de partida, con una nueva alianza de las fuerzas republicanas, pues resultaban demasiado evidentes tanto la

debilidad institucional de la república como las fuertes diferencias que separaban al conjunto de fuerzas republicanas a propósito de qué tipo de sistema político proponían. En primera instancia, la posibilidad de forjar una nueva alianza solapó esas evidencias debido al entusiasmo social que desató la posibilidad de ganar las elecciones.

El Frente Popular como segunda oportunidad malograda

La propuesta de recomponer una alianza la formuló Azaña en un mitin multitudinario celebrado en las afueras de Madrid a finales de octubre de 1935. Siendo su partido, ahora refundado como Izquierda Republicana (IR)[18], un pequeño grupo integrado principalmente por intelectuales, aquella multitud asistente estaba compuesta por la base obrera y popular del PSOE y las JSE, de UGT y CNT. Azaña propuso un «Frente de Izquierdas», no como una convergencia de todos los republicanos, sino como alianza entre los partidarios de consolidar una democracia avanzada que profundizara las reformas sociales.

El permanente debate interno del triángulo PSOE-JSE-UGT encontró en la propuesta frentista una oportunidad para establecer un consenso temporal entre quienes miraban la alianza como una apuesta sólida en la que la democracia y las reformas favorecerían el desarrollo del movimiento obrero, y quienes la miraban como una apuesta circunstancial que podría servir para generar mayor potencial revolucionario hacia la conquista del poder. Coincidiendo ambas posturas en que, a la vez, era el modo de evitar el triunfo de las alternativas fascistas. Por esa razón, la alianza era deseada por la fracción que lideraba Prieto, que recobró vigor a raíz de la desventura insurreccional de 1934, y fue aceptada por la fracción de Largo Caballero, poniendo como condición que participasen el pequeño PCE y su diminuto sindicato, CGTU.

Además, las dos posturas aceptaron la propuesta hecha por algunos líderes de UGT de que una cosa era el programa electoral para ganar las elecciones y otra distinta lo que haría el gobierno formado tras la victoria electoral. El interés de Largo Caballero por integrar al PCE residía en su pretensión de sumar un socio para inclinar la alianza a favor de la radicalidad; de hecho, los comunistas seguían siendo un partido que tenía una modesta presencia en las zonas mineras,

cuya primera influencia la había logrado durante la insurrección de Asturias y que sólo unos meses antes había abandonado el calificativo de social-fascistas con el que definía al PSOE, a la vez que había establecido buenas relaciones con dirigentes de las JSE.

La alianza tomó el nombre de Frente Popular y quedó compuesta por tres organizaciones republicanas (IR, UR y ERC), el PSOE, el PCE, un partido marxista aún más minoritario, el POUM, y el Partido Sindicalista creado por la fracción minoritaria de la CNT. El programa consensuado tenía un claro propósito electoral y aunaba tres cuestiones. Primera, reparar en lo posible la violenta represión sufrida en 1934 mediante la amnistía de quienes seguían presos, ayudas a las familias que habían sido castigadas y persecución de los militares represores que hubieran incurrido en delitos. Segunda, dotar de mayor aliento a los afanes reformistas de 1931 y revertir los retrocesos del bienio negro para profundizar las reformas en la agricultura, la educación, los estatutos de autonomía y otras. Tercera, un conjunto de medidas, muchas de ellas expresadas de forma genérica, destinadas a mejorar la situación de la economía y la vida de los trabajadores, destacando la necesidad de reformar el sistema bancario y desarrollar la industria.

Significativamente, el manifiesto electoral declaraba de forma explícita que no se llevarían a cabo nacionalizaciones de empresas ni colectivizaciones agrarias, y que no existiría un control obrero del poder político, dejando constancia de que esa era una propuesta del PSOE que no había sido aceptada. Según el manifiesto, la república no estaría dirigida por motivos económicos de clase, sino que sería un régimen de libertad democrática, para elevar las condiciones morales y materiales de trabajadores. También hacía mención a que la concentración de riqueza era un obstáculo para el desarrollo de la democracia.

El breve tiempo que hubo para preparar las elecciones fue suficiente para que la campaña del Frente Popular pusiera al descubierto dos enfoques. Azaña y Prieto fijaban como idea central la consolidación del contenido democrático y social de la república. Largo Caballero arengaba a favor de la inminente revolución socialista. Ambos enfoques utilizaban a su favor la campaña de la CEDA cuyo lema central era «Todo el poder para el jefe». Sectores conservadores republicanos, incluso monárquicos y católicos, sentían temor por la indisimulada apuesta totalitaria que barruntaba aquel eslogan hitleriano, lo que supuso un obstáculo para la colusión de las fuerzas de derecha.

La primera vuelta se saldó con un reparto de votos similar para las dos grandes agrupaciones, con un 34% para el Frente Popular y un 32% para el Bloque de Derechas. La exigencia de que el ganador en cada circunscripción alcanzara al menos el 40% de los votos hizo que en una segunda vuelta fuera determinante la mayor unidad lograda por el Frente Popular. Obtuvo 278 escaños frente a 150, correspondiendo el resto a las fuerzas no alineadas en esas coaliciones, destacando el estrepitoso hundimiento del partido lerrouxista[19]. Dentro del Frente Popular, los resultados ajustaron bastante la correlación entre el PSOE (99 diputados) e IR (88). A la vez, la suma de los escaños de IR, de UR (39) y ERC (36) hacía que los partidos republicanos tuvieran mayor representación parlamentaria que la suma de los socialistas y comunistas (17). CNT y FAI no se integraron en el Frente Popular, ni participaron de forma explícita en las elecciones, si bien tampoco desplegaron una campaña agresiva contra el frente. Tanto la menor abstención (28% frente al 37% de las anteriores) como los resultados dejaron ver que una parte de los afiliados y simpatizantes de CNT-FAI habían contribuido al triunfo frentepopulista.

Tras las elecciones resurgieron los dilemas aparcados durante la elaboración del programa y la campaña, al tiempo que también lo hacía la oscura labor de zapa de las fuerzas involucionistas. Sólo tres días después de las elecciones el presidente saliente, Portela Valladares, encargó a Azaña la formación de gobierno, pero ya antes, en ese breve intervalo de días, Portela había recibido dos ofertas que rechazó. Una, del jefe del Estado Mayor del Ejército, Francisco Franco, brindándose a ejecutar un golpe de Estado para impedir la formación del gobierno del FP. La otra, de un emisario de la CEDA, anunciando su disposición a alinearse con un golpe de Estado que se propusiera la misma finalidad. No eran los únicos movimientos subterráneos que afrontó el nuevo gobierno en su bautizo.

El hecho de que fuera Azaña el elegido para encabezarlo podía interpretarse como la consecuencia de que los diputados republicanos superasen en número a socialistas y comunistas. Sin embargo, hubo un motivo más concluyente que respondía a la situación interna del PSOE y que dio lugar a que sus dirigentes acordaran apoyar al gobierno pero sin participar en él. Sucedía que si el gobierno tuviera que ser dirigido por el partido con más votos y diputados, entonces sería un líder el PSOE quien lo encabezase, igual que meses después sucedió en Francia con la victoria del Front Populaire que colocó a Léon Blum a la cabeza del gobierno. En ese caso, por la correlación interna entre los socialistas, el jefe de gobierno hubiera sido Indalecio Prieto. Pero esta posibilidad era rechazada de

plano por Largo Caballero, buena parte de la dirección de la UGT y una parte de los dirigentes del PSOE. Por tal razón, el único consenso logrado fue que el PSOE no tuviera presencia en el gobierno, lo cual revelaba la intensidad del hervidero interno del socialismo.

Azaña compuso un gobierno con mayoría de ministros de IR y otros de UR. Seguidamente, en mayo, el cese de Alcalá-Zamora como presidente de la república supuso el nombramiento de Azaña para ese puesto y fue Santiago Casares, también de IR, quien pasó a dirigir el gobierno. En el parlamento, el Frente Popular no se constituyó como grupo único sino que lo hicieron sus integrantes por separado, comprometidos con un programa electoral que poco decía sobre cuáles serían las medidas prácticas a poner en marcha por el gobierno.

Como si la amnesia fuera una enfermedad consustancial al comportamiento político, condenado a un eterno retorno, la escena política quedó al arbitrio de las mismas fuerzas centrífugas que en los inicios de la república. El entusiasmo por la victoria electoral desató grandes expectativas entre los obreros, campesinos y otras capas subalternas acerca del alcance de las reformas que esperaban y la rapidez con que serían ejecutadas[20]. Por vía de urgencia el gobierno tramitó en el parlamento la amnistía política y ciertas reparaciones familiares, anunciando la posibilidad de acusar ante la justicia a los mandos militares que se hubieran excedido en la represión de Asturias. Alejó de sus cargos a generales como Franco, Mola y Goded, y declaró nulos los pasos atrás que se habían dado durante el bienio negro en la reforma militar. Repuso a los alcaldes y concejales que habían sido sancionados arbitrariamente. Restauró las medidas de la reforma agraria y muchas otras canceladas o revertidas. Decretó la readmisión e indemnización de los obreros despedidos por realizar huelgas. Ilegalizó a la Falange y detuvo a su líder por la actuación violenta de sus comandos ultraderechistas. Sin embargo, ese esfuerzo por neutralizar a las fuerzas más reaccionarias no iba acompañado de nuevas iniciativas que aportaran soluciones para los problemas sociales más acuciantes. Las protestas populares iban en ascenso, a la par que las críticas a la timidez con que el gobierno se enfrentaba a la marabunta militar-fascista.

Huelgas, manifestaciones, choques con la guardia civil y desbordamientos que alcanzaban cierta violencia se sucedían, bien como explosiones espontáneas, bien auspiciadas por las organizaciones locales de CNT, UGT, JSE-JSU[21] y PCE. A la vez, provocaciones ultraderechistas, acciones represivas y actos

vejatorios a cargo de fuerzas militares y policiales, que exaltaban el clima de desórdenes públicos y la exasperación popular. Las muertes sucedidas en uno u otro bando servían para justificar escandaleras mayores, acompañadas de lenguajes ampulosos y excluyentes que multiplicaban de manera exagerada la dimensión de cada suceso. Así transcurrieron seis meses, a lo largo de los cuales cada vez resultaba más difícil discernir quién estaba a favor de la república, qué fuerza política no trabajaba por subvertirla y qué fuerza política no competía con otras de su mismo bando por llevar más lejos su radicalidad. La CEDA lo hacía con respecto al Bloque Nacional de Calvo Sotelo, mientras que la Falange y otras pequeñas organizaciones fascistas lo hacían con respecto a las anteriores, en un pulso por mostrar quién era más virulento a la hora de propugnar el derrocamiento del gobierno y el final de la república. En el otro lado, PCE, JSU, CNT, gran parte de UGT y una parte del PSOE sostenían otro pulso por ver quién cuestionaba más la labor del gobierno y proponía la vía revolucionaria más contundente. En su congreso de mayo, la CNT ofreció a UGT una alianza con el fin de «destruir por completo el régimen político y social vigente»; un paquete en el que iba incluida la república.

El drama residía en que ambos discursos tenían consecuencias diametralmente distintas en la precipitación de los acontecimientos. Los comunistas, anarcosindicalistas y parte de las socialistas hablaban de revoluciones carentes de viabilidad y de cuya preparación se desentendían. Mientras, proseguía el deterioro de la situación política y social, y, desde el otro lado, las fuerzas reaccionarias sí preparaban su contrarrevolución. Desde el mes de marzo fue tomando cuerpo y ganando apoyos financieros una conspiración militar organizada por altos jefes del ejército, que utilizaba a su favor las actuaciones de las fuerzas políticas derechistas, pero sin depender de ellas. Cada nuevo suceso violento era un jalón que acercaba la preparación de lo que después fue el golpe fascista del 18 de julio. Concebido al modo de los pronunciamientos militares del siglo XIX, su fracaso parcial, unido a la incapacidad del gobierno para abortarlo de raíz, dieron paso a un escenario de guerra que duró casi tres años.

Trágico final

Una vez desencadenada la guerra, su recorrido se explica a través de estrategias

militares cuyo estudio escapa por entero al propósito de este libro. Sin embargo, el desenvolvimiento de la contienda presenta ciertas dinámicas políticas que merecen atención por sus implicaciones. Comenzando por los motivos que pueden explicar por qué la respuesta del gobierno al golpe militar fue tan alicorta. Era un clamor público que con el triunfo del Frente Popular la desafección de la mayoría de los altos jefes militares hacia la república había derivado en claras intenciones golpistas. Pero los hechos muestran que ni el gobierno republicano ni las organizaciones obreras valoraron la hondura conspirativa y la inminencia de dicho golpe[22]. Menos aún elaboraron un plan destinado a desbaratar la conspiración y todavía menos prepararon actuaciones unitarias a tal efecto. Fruto de todo ello, el gobierno tuvo una reacción tardía y claramente insuficiente[23]. El «día después» llegó como si se tratase de una sorpresa, y como tal se improvisaron medidas a todas luces inoperantes para frenar lo que estaba por llegar.

La debilidad de las organizaciones obreras ante los acontecimientos se pudo apreciar en dos sentidos principales durante los días que siguieron a la sublevación. De un lado, el paulatino armamento logrado por las milicias de UGT, CNT, PCE y otros no contó con una dirección que fijara los objetivos prioritarios para contener la onda expansiva de la sublevación. En su lugar, se multiplicaron las acciones desperdigadas, heroicas unas por la generosidad con la que los militantes pusieron sus vidas en juego, estériles otras por la escasa eficacia de sus actuaciones, y nada edificantes otras por su carácter vengativo y destructivo. De otro lado, la división con la que los dirigentes de esas organizaciones se posicionaban y desplegaban sus acciones: unos para defender a la república y otros para destruirla como condición para instaurar el comunismo libertario o la revolución socialista, según la orientación ideológica de cada cual. Desorientación y división que dieron demasiadas ventajas a quienes sí unificaron con rapidez su propósito, su mando y su orientación política: instaurar un régimen fascista (cuyo formato entonces no estaba definido[24]) con gran protagonismo del ejército y dominado por las elites terratenientes, financieras y católicas.

Durante toda la guerra no cabe encontrar un solo momento en el que el bando republicano mostrara una unidad similar, ni en los propósitos ni en la dirección política, ni en la estrategia militar. El nuevo gobierno formado en septiembre, presidido por Largo Caballero, parecía apuntar en ese sentido, pero estuvo lejos de conseguirlo, menos aún desde que se trasladó a Valencia. Apenas duró nueve meses. La incorporación del PSOE al gobierno, así como la del PCE y la

posterior de la CNT, parecían apuntar hacia esa unidad[25]. En primera instancia el gobierno reorganizó el ejército y las milicias, trazó planes de defensa y contraofensiva en distintos frentes, y mejoró el control de la precaria producción industrial. Sin embargo, de inmediato se acumularon las malas noticias derivadas de los reveses militares, la pérdida de ciudades importantes y la carencia de apoyos internacionales, después del infame acuerdo de «no intervención» auspiciado por Gran Bretaña y Francia (con Léon Blum como jefe de gobierno), mientras los gobiernos de Italia y Alemania acrecentaban su apoyo al bando sublevado.

Noticias graves todas ellas, pero no tanto como las fracturas que sufría el gobierno, asaeteado por una enrevesada geometría de disputas. En primer lugar, Largo Caballero había exigido la entrada de comunistas en el gobierno para fortalecer su posición dentro del PSOE frente a la fracción de Prieto, persistiendo las tensiones de largo recorrido entre ambas posiciones, tanto en el partido como en la UGT. De hecho, Largo Caballero confeccionó el gobierno sin consultar a los dirigentes del PSOE. En segundo lugar, aunque Largo Caballero renunció de forma explícita a formar un gobierno obrero, los miembros de los partidos republicanos (IR, UR, ERC; también el PNV) se sentían cada vez más incómodos y marginados. Una expresión de distanciamiento que se reproducía a escala social entre los grupos de propietarios, intelectuales, profesionales, maestros y otros afines a esos partidos frente a las decisiones que tomaban las organizaciones obreras. La continua ambigüedad de Largo Caballero acentuaba esa incomodidad. Tan pronto se refería a que la prioridad del gobierno era acabar con la guerra, como soltaba soflamas acerca de que era el momento de avanzar al socialismo.

En tercer lugar, la entrada en juego de la Unión Soviética, único apoyo exterior que tenía el gobierno, se convirtió en fuente de tensiones debido a la influencia que comenzó a cobrar el PCE. Los dirigentes de la URSS aportaban armas y cierta logística al ejército republicano, y eran los que habían organizado las brigadas internacionales en apoyo del ejército. La fuerza política del PCE seguía siendo escasa, pero los emisarios soviéticos y los enviados por la Komintern empezaron a hacer valer su influencia apoyando al PCE, al tiempo que introducían en España las persecuciones sangrientas que Stalin llevaba a cabo contra los disidentes comunistas. Todo lo cual provocó enfrentamientos de los líderes comunistas con Largo Caballero a propósito de ciertas decisiones políticas y militares del gobierno, al tiempo que le presionaban para que persiguiera a los militantes del POUM y otros disidentes antiestalinistas.

En cuarto lugar, desde el momento mismo del golpe fascista, CNT-FAI promovieron un foquismo revolucionario basado en la creación de colectividades agrarias y obreras siguiendo el ideario libertario, con un funcionamiento propio, sin guardar otra disciplina que la decidida por ellas mismas y sin reconocer otra autoridad que la de los dirigentes anarquistas. Las tensiones que por ese motivo surgieron entre CNT-FAI y PSOE-PCE fueron utilizadas por aquellos para alimentar el entendimiento entre CNT y UGT, ambos con milicias armadas y con afiliaciones masivas, contribuyendo más al desarrollo de acciones que escapaban al control del gobierno y contravenían la legalidad vigente.

Una alambicada geometría de fuerzas que era la antítesis de la unidad requerida por el momento bélico y que abocaba a disputas fratricidas con desastrosas consecuencias. La primera manifestación de extrema gravedad se produjo en mayo de 1937 debido a los enfrentamientos militares que se produjeron en Cataluña. La coalición que gobernaba la Generalitat decidió acabar con los «comités milicianos antifascistas» que controlaba la CNT, alegando los continuados abusos de poder en los que incurrían llevando a cabo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias e incendios de recintos religiosos. En realidad, el objetivo del partido republicano (ERC) y de su aliado, el recién creado Partido Socialista Unificado (PSUC)[26], era debilitar el enorme poder que tenían CNT-FAI en Cataluña y eliminar las colectividades que habían formado en el campo y en las fábricas de armas. Otro propósito del PSUC, siguiendo órdenes moscovitas, era acabar con el POUM, que participaba en los comités milicianos.

La decisión de la Generalitat provocó la reacción de las milicias armadas de la CNT, convirtiendo Barcelona en un escenario de guerra abierta por el control militar de cada barrio y de cada instalación estratégica. Una lucha militar entre partidos que formaban parte del mismo gobierno, sin que los líderes de ambas partes pudieran encauzar el conflicto hacia la negociación. Un hecho que sólo podía acarrear efectos desgarradores cuando el gobierno envió desde Valencia tropas dotadas de armamento pesado para acabar con las milicias anarquistas y controlar la ciudad. La lucha militar concluyó, pero no la pelea política, haciendo inviable la continuidad del gobierno. Fue el final del gobierno de Largo Caballero y de la vida política del propio líder.

En adelante, el desequilibrio a favor de los militares fascistas siguió abriendo las brechas entre las fuerzas republicano-obreras. La coalición siguió desmembrándose y cada partido o fracción se mantuvo parapetada en sus

posiciones. El gobierno formado por Juan Negrín, hasta entonces un dirigente socialista de segundo rango, se convirtió en lo más parecido a una pugna de «todos contra todos». La CNT se posicionó radicalmente en contra de cualquier reedición de gobierno republicano mientras los demás partidos, en particular el PCE, se mostraron taxativamente opuestos a que continuasen los experimentos de las colectividades. El presidente Azaña no confiaba en que Negrín fuera capaz de encarrilar la situación.

En el seno del PSOE, los líderes de las tendencias contendientes tampoco congeniaban con Negrín y su gobierno, convirtiéndole en el objetivo principal de sus reproches. Unos le rechazaban por su escaso pedrigrí socialista, pues era un médico y profesor académico que se afilió en 1929. Otros, por la decisión que tomó, siendo ministro de Hacienda, de preservar las reservas de oro del Banco de España enviándolas a Moscú, aunque lo hizo en cumplimiento de un acuerdo del gobierno de Largo Caballero y con esas reservas se pagaban las compras de armamento soviético. Otros le rechazaban por considerar que había sellado una alianza con el PCE. Prieto decía que esa alianza le había excluido, primero de la jefatura de gobierno y después del propio gobierno; Besteiro culpaba a esa alianza de continuar una guerra que ya estaba perdida; los seguidores de Largo Caballero (antes, los más cercanos a los comunistas) culpaban a estos de su descabalgamiento del gobierno, de atacar la unidad sindical y de todas las derrotas militares que sobrevendrían en adelante.

Era un hecho fehaciente la fuerza cada vez mayor del PCE y, por detrás de él, la querencia de los enviados soviéticos y de la Komintern por interferir en los asuntos españoles, aprovechando el respaldo que suponía que la URSS fuera el único suministrador de armas para el ejército de la república. En el terreno militar, los comunistas ganaron influencia por varias razones. Por un lado, fueron los primeros, junto con Azaña, en reclamar la prioridad absoluta hacia la defensa militar para ganar la guerra por encima de cualquier otro objetivo. Además, algunos de sus militantes alcanzaron puestos de mando gracias a sus logros en los frentes de guerra. Por otro lado, crearon un mecanismo, inspirado por los enviados soviéticos, por el que los «comisarios políticos» enviados a los distintos frentes llegaron a disponer de atribuciones superiores a las que tenían los mandos militares. También parece cierto que los ministros comunistas influyeron en las discrepancias surgidas con Largo Caballero y que, tras la crisis de gobierno, hicieron posible la ascensión de Negrín.

Sin embargo, el vínculo de Negrín con el PCE no cabe encontrarlo más que en la

recíproca convicción, ya minoritaria, que compartían acerca de que continuar la guerra era el único camino viable. Sólo un pequeño núcleo socialista que apoyaba a Negrín, pocos republicanos, ciertos mandos militares y los dirigentes del PCE estaban de acuerdo en que, a pesar de las derrotas militares que se sucedían, la única esperanza residía en mantener el conflicto militar para enlazar la guerra española con el inminente desencadenamiento de una guerra europea contra Hitler y Mussolini, o en poder negociar con el ejército de Franco, pero no en rendirse.

En aras de ello, esa nueva coalición de gobierno se mostró implacable en la represión de las colectividades anarquistas que se mantenían en Aragón[27] y mantuvo la lucha a pesar de la caída sucesiva de los frentes de guerra. En febrero de 1939, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña reconocían el gobierno franquista, sólo unos meses antes de que Hitler ocupara los territorios que marcaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

En ese contexto de incertidumbres, fueron también miembros de casi todo el espectro republicano los que desde meses antes tejían una conspiración contra aquel gobierno resistente. Altos mandos del ejército como Miaja y Casado, socialistas como Besteiro y Wenceslao Carrillo, cenetistas como Cipriano Mera y Eduardo Val, y republicanos como San Miguel o José del Río, terminaron dando un golpe de Estado contra el gobierno de Negrín y formaron en Madrid un simulacro de Consejo Nacional de Defensa. La justificación que esgrimieron fue que habían derrocado a un gobierno comunista, sin importarles que en ese gobierno participaran miembros del PSOE, IR, UR y ERC, además del PCE.

Tres semanas después, la entrada de Franco en Madrid puso trágicamente al descubierto las vanas ilusiones de aquellos golpistas en que el vencedor se avendría a negociar ciertas condiciones. La única respuesta que encontró la rendición fue la de los fusilamientos, las cárceles, los campos de internamiento y los juicios sumarísimos, salvo para quienes lograron exiliarse y los pequeños grupos que se escondieron en las montañas para seguir resistiendo. Un empeño épico pero sin salida, una vez que durante la Segunda Guerra Mundial las potencias aliadas dejaron al margen de sus preocupaciones y estrategias al régimen franquista.

RENACER POLÍTICO BAJO LA DICTADURA: DE LAS

VIEJAS AÑORANZAS A LAS NUEVAS ESPERANZAS

La crueldad de que hizo gala el ejército fascista como vencedor militar fue el anuncio de lo que serían sus pretensiones al concluir la guerra. Se trataba, por supuesto, de derrotar al bando republicano, pero también de aniquilar sus ideas y cualquier vestigio de personas y símbolos que rememorasen el susto que habían pasado la oligarquía económica, los mandos militares y la jerarquía católica desde 1931. Por eso, el dominio fascista se dirigió de forma conjunta al paquete formado por la democracia política, las libertades, el parlamentarismo, las elecciones, los partidos, los sindicatos, la república, el laicismo, la reforma de la tierra, los obreros, los maestros, la educación, la cultura y los intelectuales. El tic favorito de Franco acerca de la «conjura judeo-masónica-comunista» expresaba ese totum revolutum de adversarios. Un propósito que guio la política de «tierra quemada» que siguió a 1939, con un régimen franquista que gobernó la sociedad con la misma visión militar, represiva y de exterminio que había mantenido durante la guerra.

Varados en una agónica supervivencia

Un ejercicio de fuerza irresistible contra los vencidos que habían sobrevivido, imposible de hacer frente para los guerrilleros que luchaban en las montañas y otros que, tras exiliarse, volvieron a cruzar las fronteras para combatir a la dictadura. En ese intento sucumbieron los militantes socialistas y comunistas que pretendían recomponer sus respectivas organizaciones. La proeza titánica de su esfuerzo tenía compensación en el sentimiento del deber cumplido, en la ética de combatir lo intolerable y en el ejemplo que otros recibían, pero no podía tenerlo en el terreno de la política práctica. Una tras otra, las diferentes formas de resistencia terminaban en el cementerio o en las cárceles.

En el exilio, las consecuencias políticas e ideológicas de la derrota final fueron igualmente duras y adversas. Ante la ausencia de perspectivas políticas, en los dirigentes y militantes de cada partido comenzó a forjarse una interpretación legendaria, casi mitológica, de lo que había sido la república, que incluso

algunos repiten en la actualidad. Consistía en pintar de azul celeste el tiempo republicano para contrastar mejor con el color negro de los rivales a los que cada cual consideraba responsables de los problemas que fueron surgiendo; aunque, por supuesto, la responsabilidad última sólo podía imputarse a los militares sediciosos y a las fuerzas civiles que les apoyaron. Así, la república era un dechado de virtudes cuyas debilidades cabía imputar a una determinada fracción. Para los partidos republicanos podía ser el largocaballerismo o el tándem Negrín-PCE. Para los socialistas de cada tendencia la responsabilidad recaía en las otras y/o en ese tándem. Para los comunistas residía en el anarquismo y en las vacilaciones de una u otra tendencia socialista. Para los anarquistas los responsables eran quienes se opusieron al comunismo libertario.

Corrió el tiempo y parecía que todos ellos sólo concordaban en el empeño común por no afrontar sus propias responsabilidades y las nefastas consecuencias de la miopía política y el sectarismo con el que todos hicieron imposible la unidad y desperdiciaron las mejores oportunidades. Aquel tipo de discurso fue envejeciendo al compás que lo hacían las personas que lo divulgaban y la esterilidad de unos partidos incapaces de comprender e influir en la realidad española de la posguerra. Pocos parecían interesados en reflexionar por qué se perdió en 1931-1932 la oportunidad de encauzar los objetivos de la república, por qué volvió a suceder lo mismo en 1936, por qué no se afrontaron medidas eficaces que disolvieran la preparación del golpe militar ni se abortó de raíz una vez se produjo. Pasados los primeros momentos, las condiciones se tornaron más adversas, mientras seguían operando los mismos factores negativos que habían impedido reaccionar bien en el momento adecuado. Por esa razón, las virtudes democráticas y sociales de la república, así como su potencial transformador, se habían ido debilitando en el transcurso de su corta vida.

El triunfo de los reproches mutuos no permitía reflexionar sobre las oportunidades de consenso que se habían desaprovechado en los años republicanos. Quienes defendían la democracia y las reformas con demasiada frecuencia confundieron la moderación de los objetivos y medidas con la actitud titubeante, temerosa y a veces meliflua. El resultado fue que muchas de esas medidas democráticas y sociales se quedaron en el camino o fueron insatisfactorias. Quienes defendían la revolución con demasiada frecuencia se limitaron a proclamar una retórica repetitiva o a realizar ensayos puramente testimoniales, quizá porque ellos mismos constataban que la realización práctica de su proyecto ideal quedaba fuera de las posibilidades reales. El resultado fue que muchas consignas radicales confeccionaban un discurso estrictamente

estético-ideológico, sin realización práctica.

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, sólo la obcecación sectaria hacía difícil que se aceptara el hecho de que la experiencia de la república requería dos niveles de valoración. Primero, su asesinato sólo tuvo un tipo de responsables: quienes participaron en el levantamiento fascista. Segundo, su debilitamiento, bajo las difíciles circunstancias históricas en las que nació, tuvo demasiados responsables antes del golpe militar.

Las banderas desplegadas por los partidos desde el exilio seguían mirando hacia atrás, y su único propósito era cerrar las filas partidistas, sin aprender de las enseñanzas de aquellos años y sin buscar el modo de ser prácticos en el desarrollo de una acción política que se correspondiera con el hecho de que el régimen franquista se había consolidado. Las rencillas que se mantenían en el seno del gobierno republicano en el exilio, sus cambios de composición y sus estériles decisiones componían una patética escena, una exhibición de enajenamiento político con respecto a lo que acontecía en la vida política española. Lo mismo sucedía en cada una de las escuálidas formaciones republicanas y obreras ubicadas en el exilio. Las dificultades para conectar con los militantes del interior venían a representar la mínima conexión que mantenían con una realidad que, a partir de los años sesenta, comenzó a cambiar de manera acelerada.

El franquismo no dejó de ser un sistema político con aspiraciones totalitarias, aunque al cabo de dos décadas era evidente que su contenido ideológico (fascista) hacía aguas y que ejercer una represión masiva resultaba contraproducente. La vestimenta ideológica que aportaban el falangismo y el clericalismo católico se convirtieron en un decorado de cartón, carente de contenido, incapaz de integrar bajo sus ideas y actividades a grupos sociales significativos ni de servirse de las mismas para legitimar el poder y cohesionar las filas políticas. La represión comenzó a generar formas de contestación desde mediados de los cincuenta, de modo que las represalias (despidos y detenciones) contra los huelguistas en grandes empresas siderúrgicas y en la minería asturiana, o bien contra la celebración de varios eventos universitarios, originaban expresiones de protesta contra las actuaciones policiales y de solidaridad hacia los represaliados, en un grado hasta entonces desconocido. La existencia de representantes obreros a través del sindicato fascista, el florecimiento de movimientos obreros cristianos[28] y algunas publicaciones de prensa facilitaban el emboscamiento de militantes con intenciones subversivas.

Un anticipo de lo que, en mayor escala, sucedería en los años sesenta.

Nuevos movimientos y protagonismo del PCE

Entre aquellos balbuceos y la creación de movimientos antifranquistas medió la transformación acelerada que se produjo durante esa década de la mano del desarrollo industrial y de muchos nuevos servicios, la urbanización y el cambio de composición social de la población, incrementándose la presencia de obreros fabriles y otros asalariados, junto con nuevas capas de propietarios, profesionales y funcionarios urbanos. La apertura de la economía al exterior aportaba capitales, turismo y remesas de emigrantes con los que importar máquinas e insumos imprescindibles para la industrialización, a la vez que contribuía a cambiar el clima social y cultural. Los mejores salarios permitían elevar el consumo y comprar nuevos productos. Surgieron nuevas instituciones, nuevos comportamientos y nuevas aspiraciones. Casi todo iba cambiando, mientras persistían las leyes, las Cortes, el Movimiento Nacional, el Sindicato Único, los plebiscitos y demás elementos del sistema fascista. Un fardo sumamente pesado, al que le sobraban demasiados muertos, detenidos y saña vengativa como para cambiar.

Ese contexto novedoso y viejo a la vez sirvió de marco para el desarrollo de una acción política diferente que tuvo como protagonistas centrales e interactivos a un renacido movimiento obrero y un creciente movimiento estudiantil, y a un Partido Comunista que combinaba la innovación y el atavismo.

El movimiento obrero que comenzó a tomar forma en los primeros años sesenta fue el fruto de cuatro elementos convergentes. Primero, la situación de penuria sociolaboral de los trabajadores, a pesar de las mejoras salariales y de condiciones de trabajo que se fueron logrando, pero partiendo de niveles raquíticos. Segundo, el desarrollo económico que favoreció la gran concentración de obreros –en su mayoría jóvenes emigrados desde zonas rurales– en grandes fábricas industriales y en barrios situados en la periferia de las grandes ciudades. Tercero, las modificaciones laborales introducidas por el régimen para intentar una cierta adaptación a esa nueva realidad, como fueron las figuras de los enlaces y jurados que representaban a los trabajadores y la

posibilidad de negociar convenios colectivos, siempre a través del sindicato fascista. Cuarto, la actuación de militantes cristianos y comunistas dispuestos a aprovechar las condiciones creadas por la masificación obrera y las medidas del régimen para impulsar la defensa de los trabajadores.

Se trataba de un material social potencialmente peligroso para el régimen. Una gran cantidad de obreros jóvenes, concentrados en sus lugares de trabajo y de vida, sometidos a penurias sociales, represaliados si protestaban, con nuevas aspiraciones vitales y sin los traumas de la guerra. Un obstáculo se oponía a su desarrollo: la carencia de libertades y la sempiterna represión. Obstáculo nunca eludible hasta el final del franquismo, repitiéndose los despidos, las amenazas, las detenciones, los juicios y las condenas. La falta de libertades sólo pudo paliarse mediante la utilización de la legalidad del sindicato vertical para celebrar asambleas, ganar presencia entre los enlaces elegidos como representantes y negociar convenios, favoreciendo el impulso de acciones reivindicativas. A la vez, esa utilización servía para poner de manifiesto ante los trabajadores las carencias de esos órganos de representación y negociación en ausencia de libertades de expresión, reunión, asociación, huelga y manifestación. Una labor tenaz, dura, con reveses, que primero se abrió paso en las cuencas mineras y en los «cinturones rojos» de las grandes ciudades, donde se encontraban las fábricas de automóviles, metalurgia, electrodomésticos, construcción naval y textiles, además del sector de la construcción.

Los movimientos a escala local, en cada territorio, fábrica o sector, tomaron un contorno más sólido a raíz del surgimiento de las Comisiones Obreras (CCOO). Nacidas en las huelgas mineras de Asturias y León de 1962, se extendieron a los centros industriales y tomaron un formato organizado gracias a la actuación de líderes cristianos y comunistas en la preparación de candidaturas a las elecciones sindicales de 1966 y de plataformas reivindicativas con las que negociar los convenios. A continuación, se consolidaron como una fuerza obrera con creciente influencia entre los trabajadores ya bajo la absoluta hegemonía de militantes del PCE. Esa fuerza organizada y combativa dio sus frutos en forma de mejores salarios[29] y condiciones de trabajo, lo que a su vez favorecía la capacidad movilizadora y negociadora de las CCOO y su extensión a otras zonas y sectores. La persistente represión franquista avivaba muchos de los conflictos y hacía más accesible la incorporación de demandas democráticas que chocaban directamente con los topes políticos de la dictadura.

El otro movimiento que provocó quebraderos de cabeza al régimen franquista

fue el de los estudiantes universitarios, desplegado a partir de la segunda mitad de los años sesenta. Convertida en un erial intelectual, con excepciones muy aisladas, la universidad vivía bajo el dominio de personajes falangistas e integristas católicos que habían destacado por su labor en la delación y represión de profesores republicanos. Cualquier iniciativa académica o intelectual, y cualquier repulsa hacia alguno de esos personajes, chocaba con las autoridades fascistas y generaba represalias como única respuesta. Así sucedió con los eventos que contribuyeron al despertar democrático de estudiantes que en su inmensa mayoría pertenecían a familias alineadas en el bando franquista.

Las acciones cobraron continuidad y ganaron en número cuando sus demandas apuntaron directamente contra el sindicato fascista (SEU) y contaron con el respaldo de pequeños grupos de profesores. El resultado fue la creación de sindicatos democráticos de estudiantes universitarios que desde 1966-1967, sobre todo en Barcelona y Madrid, se convirtieron en catalizadores de movimientos de protesta política y académica, y en revulsivos culturales que promovían un renacimiento de la vida intelectual en las universidades. El liderazgo de esos sindicatos ilegales lo compartieron el PCE y Frente de Liberación Popular (FLP), mientras que el alcance social de las movilizaciones se vio favorecido por la incorporación de amplias cohortes de estudiantes que ingresaban en la universidad y también por la presencia continua de destacamentos de policía en los recintos de varias universidades, lo cual multiplicaba los episodios de conflicto.

Tanto el movimiento obrero como el universitario acrecentaron su vigor, ganando en masividad y en organización, ampliando el eco social de sus movilizaciones y activando las muestras de solidaridad entre intelectuales, artistas y otros grupos que criticaban la represión de la dictadura contra esos movimientos. El ascenso quedó temporalmente truncado cuando, en el verano de 1968, el gobierno franquista decretó un estado de excepción en el País Vasco y en enero del año siguiente lo extendió a todo el territorio español. Siguieron meses de intensas represalias contra esos movimientos, sus organizaciones (CCOO, SDEU) y sus recientes liderazgos, logrando debilitarles y anular sus movilizaciones. Al mismo tiempo era patente que se había inaugurado un nuevo tiempo histórico en el que la dictadura no era capaz de acabar con esos movimientos y mantener el orden público sin llevar la represión hasta límites que evocaban los años de la posguerra.

Al doblar la década, levantado el estado de excepción, esos movimientos

siguieron reforzando sus demandas y alimentándose de la espiral reacción-acción. Las represalias que sufrían las huelgas y manifestaciones nutrían posteriores acciones de protestas. Algunas de estas alcanzaron la categoría de movilizaciones ciudadanas en la medida en que sus demandas y quienes se movilizaban no eran de una u otra profesión o sector; en particular, las desencadenadas contra el proceso militar celebrado en Burgos que condenó a muerte a seis miembros de ETA y las que se realizaron contra el procesamiento de los dirigentes de CCOO y que les condenó a muchos años de cárcel.

Los primeros efectos de la crisis económica iniciada en 1973 y las fisuras internas del bloque político que apoyaba al régimen, sobre todo a raíz del asesinato de Carrero Blanco por ETA, acrecentaron el hostigamiento a la dictadura. Los movimientos de obreros y estudiantes se hicieron más frecuentes y ganaron presencia social, se sucedieron las convocatorias políticas a favor de la democracia, se desarrollaron otros movimientos como los vecinales en los barrios, los profesores en institutos y universidades, los de sectores campesinos, los de abogados, periodistas y otros en torno a sus respectivos colegios profesionales. A la altura de 1975 existía un hervidero social al que se incorporaron nuevas franjas de la población que superaban el miedo a la represión para defender sus demandas y se atrevían a expresar sus aspiraciones democráticas.

El protagonista central del proceso político y social descrito fue el Partido Comunista, como principal impulsor del movimiento obrero y estudiantil y de otros que fueron surgiendo. La actividad del PCE estuvo sujeta a dos tipos de factores que actuaban en distinta dirección, unos tendentes a mantener el proyecto, el discurso y la acción política del pasado y otros que incorporaban novedades para acrecentar su fuerza política y su influencia social.

Por un lado, aunque los viejos dirigentes del partido habían sido relevados en los años cincuenta, los nuevos líderes y la mayoría de cuadros intermedios y militantes seguían cerrando filas en torno al doctrinarismo ortodoxo, manteniendo la misma credulidad hacia la metáfora comunista, la misma organización ultracentralizada y la misma dependencia con respecto a los dirigentes de la URSS. Alejados en el exilio, su análisis de la situación española repetía machaconamente que la dictadura era débil y estaba siendo derrotada por grandes movimientos políticos que preludiaban una próxima insurrección, cuyo desencadenante sería la convocatoria de una huelga general política. Los fracasos que en 1958 y 1959 tuvieron las convocatorias de huelgas generales,

escasamente secundadas y duramente reprimidas, no lograron que la dirección comunista, liderada por Santiago Carrillo, desistiese de seguir planteando el mismo discurso político, convertido en una ensoñación extraña a la realidad.

Por otro lado, es probable que sin ese sueño difícilmente los dirigentes y militantes hubieran encontrado las fuerzas con las que seguir combatiendo contra el muro infranqueable de la dictadura. A la vez, esos mismos dirigentes incorporaron en 1956 una formulación política sobre la «Reconciliación Nacional» que aportaba tres elementos novedosos en el discurso: proponía la unidad de todas las fuerzas democráticas dispuestas a acabar con la dictadura franquista, situaba como objetivo la formación de un gobierno democrático de coalición[30] y afirmaba el carácter pacífico de la lucha política por la democracia y el socialismo. Tres elementos que desde entonces quedaron integrados en su estrategia.

Uno de los episodios más reveladores de la compleja contradicción que caracterizaba el comportamiento de los líderes del PCE se produjo a mediados de los sesenta, cuando dos de esos dirigentes elaboraron unas tesis sobre la nueva realidad española que obligaba a introducir serios correctivos en la línea política. Fernando Claudín era uno de los máximos dirigentes y, como casi todos los demás, vivía en el exilio, mientras que Federico Sánchez, nombre clandestino de Jorge Semprún, era responsable de que las organizaciones comunistas en el interior siguieran los acuerdos tomados por los dirigentes en el exilio. El informe que presentaron en 1964 al Comité Central argumentaba que en España se estaban produciendo grandes cambios económicos y sociales, que la dictadura franquista estaba lejos de desmoronarse y que no existían grandes movimientos con fuerza para derrocarla. Por tanto, el partido tenía que abandonar la mirada catastrofista con la que contemplaba lo que ocurría en el país y prepararse para llevar a cabo una tarea de largo plazo con el fin de generar nuevas dinámicas de movilización obrera y otros movimientos que, potencialmente, podían luchar contra la dictadura.

Las respuestas que encontró aquel planteamiento pertenecen al catálogo de las alucinaciones políticas más disparatadas, a cargo de líderes probadamente combativos pero abducidos por un doctrinarismo y un apego disciplinario que les privaban de cualquier rasgo de lucidez intelectual. Se negaron en redondo a ser despertados de su ensueño. El informe Claudín-Semprún fue rechazado como una herejía, prohibiéndose su difusión y su debate entre la militancia. Sus autores fueron expulsados del partido, lo mismo que sucedió después con un

pequeño grupo de militantes que se declararon favorables a las tesis del informe.

Sin embargo, a la luz de la posterior actuación práctica del PCE, muchas de las decisiones que adoptó para utilizar los resquicios de la legalidad franquista, generar movimientos reivindicativos, levantar organizaciones obreras y estudiantiles, atraer a intelectuales y artistas, y un largo etcétera, eran coherentes con los cambios que se iban generando en la realidad española. Sin asumir de modo consistente el contenido del informe Claudín-Semprún, los dirigentes comunistas sí fueron dando muestras de que se hacían eco de ciertas implicaciones derivadas del desarrollo económico y de las modificaciones que experimentaba la estructura social. Sin estar dispuestos a prescindir del viejo bagaje doctrinario, apostaron por el desarrollo paciente de movimientos por demandas concretas y la utilización de cuantas palancas impulsaran la lucha por la democracia.

En 1968, a raíz de la invasión de Checoslovaquia por los tanques soviéticos, los dirigentes iniciaron su alejamiento de la tutela de la URSS y en 1969, cuando Juan Carlos de Borbón fue nombrado delfín sucesor de Franco, concretaron más el eje central de su acción política: el Pacto por la Libertad, por el que ofrecían una alianza con todas las fuerzas democráticas para derrocar a la dictadura. Pero esa evolución se produjo sin que los dirigentes y el conjunto de la militancia llevaran a cabo una reflexión sobre la trayectoria pasada, capaz de aquilatar un nuevo proyecto con un discurso y una acción política acordes con la situación histórica del momento. Sin esa transformación, unas organizaciones pétreas, forjadas en la dureza de la clandestinidad, preparadas para soportar la represión y con una creciente capacidad para impulsar los movimientos sociales, mantenían un funcionamiento interno basado en la fidelidad vertical a las consignas transmitidas desde los órganos superiores. Al mismo tiempo, la combatividad y el liderazgo ejercido en los movimientos sociales atraían a nuevos militantes, muchos de los cuales ingresaban sin prestar importancia al trasfondo de los dogmas comunistas o a su historia pasada, encontrando que el PCE les aportaba mejores oportunidades para luchar contra la dictadura.

Por parte del Partido Socialista, las noticias eran escasas ya que durante muchos años su actividad fue mínima, y su organización era exigua. En los primeros tiempos de la posguerra, los intentos de reconstrucción sufrieron la misma represión vengativa que los demás partidos antifranquistas. A partir de ese momento, su militancia y su participación en los movimientos emergentes fueron muy modestas, mientras que sus dirigentes en el exterior se ocupaban de

mantener una férrea posición anticomunista y mostraban una nula capacidad de comprensión de lo que acontecía en España. En 1956, un pequeño núcleo de universitarios creó la Asociación Socialista Universitaria, pero después no tuvieron ninguna influencia en la construcción del movimiento universitario de los sesenta. Lo mismo sucedió con las organizaciones de la UGT con respecto al resurgimiento del movimiento obrero en las cuencas mineras y las grandes fábricas industriales, con escasas excepciones. Sin incidencia en los movimientos sociales, las noticias más destacadas de los socialistas eran las relacionadas con los sucesivos intentos por desbancar a los viejos dirigentes, liderados por Rodolfo Llopis, que desde el exilio controlaban el partido[31].

Siguiendo la estela del Congreso de Épinay, cuando en 1971 los socialistas franceses refundaron su partido (PSF), en octubre de 1974 el congreso celebrado en territorio francés, en Suresnes, acordó una declaración programática según la cual el objetivo del PSOE era «la conquista del poder político y económico por los trabajadores y la radical transformación de la sociedad capitalista en una sociedad socialista». Escuchando a sus jóvenes líderes, Felipe González y Alfonso Guerra, el PSOE se declaró un partido obrero revolucionario, muy a la izquierda de la socialdemocracia europea[32] e incluso bastante a la izquierda del PCE. Todo ello, claro está, en un plano nominativo, en el terreno del lenguaje y los gestos simbólicos; otra cosa eran las propuestas efectivas con las que daban sus primeros pasos para elevar su influencia en la sociedad. Simultáneamente, el congreso otorgó el control del partido a las organizaciones del interior.

La prolongada incomparecencia del PSOE en la escena política de los años sesenta hizo posible que la disidencia con respecto al PCE se canalizara hacia la formación de otros partidos comunistas situados a su izquierda. Estos partidos adquirieron cierta ascendencia en los movimientos que emergían merced a que recogían la antorcha del radicalismo estratégico que abandonó el PCE cuando centró su objetivo en lograr una alianza de las fuerzas políticas para instaurar un sistema democrático. La novedad de esos partidos, igual que sucedía en otros países europeos, residía en que las referencias ideológicas de su discurso revolucionario no procedían de la influencia de la URSS –sometida a fuertes críticas que negaban su validez como alternativa de socialismo–, sino de otras experiencias como eran el maoísmo chino y el trotskismo que había denunciado el estalinismo[33].

El más precoz fue el PCE Marxista-Leninista, surgido a comienzos de los sesenta a raíz del conflicto ideológico que enfrentó a los líderes chinos con los

soviéticos. Asumiendo las tesis maoístas, un pequeño grupo de militantes abandonó el PCE, tachándolo de revisionista en cuanto a su doctrina marxista y de reformista en cuanto a su acción política. Como quiera que los líderes de esa pequeña escisión vivían en el exilio, su enraizamiento interno fue escaso, con mínima presencia en los principales movimientos sociales[34]. Otras dos formaciones de orientación maoísta tuvieron su origen en sendas escisiones del PCE a finales de los años sesenta, sobre todo en Cataluña, el Partido Comunista de España (internacional) y Organización Comunista Bandera Roja. El primero más volcado en los movimientos reivindicativos y el segundo con más atracción en medios intelectuales. Los grupos de militancia cristiana fueron el origen principal de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), igualmente de orientación maoísta, la misma que tenía el Movimiento Comunista de España (MCE), creado a partir de una escisión de la organización terrorista ETA. La Liga Comunista Revolucionaria (LCR), de orientación trotskista, fue creada por militantes procedentes del Frente de Liberación Popular (FLP) y sus variantes en Cataluña y País Vasco (FOC, ESBA).

La alusión a esos cinco partidos queda corta si se tiene en cuenta que cada uno de ellos se fusionó con otros y, a la vez, registró escisiones que alumbraron un mapa sumamente diverso de pequeñas organizaciones comunistas, definidas por cuatro denominadores comunes. Primero, su permanente posición crítica hacia el PCE, que era la fuerza hegemónica, realizando un esfuerzo sistemático por radicalizar las demandas y las acciones de los movimientos sociales. Segundo, la persistente competencia entre ellos, cada cual haciendo gala de una generosa autoestima para considerarse el verdadero representante de los intereses de la clase obrera y negando esa condición a los demás. Tercero, la nula elasticidad ideológica y la limitada capacidad de elaboración teórica, con cierta salvedad en el caso de Bandera Roja, sustituidas por el cierre de filas en torno a los dogmas doctrinarios de la ortodoxia marxista, adobada en cada caso con los complementos maoístas o trotskistas correspondientes. Y cuarto, una gran entrega personal de los militantes en el ejercicio de su intenso activismo en los movimientos sociales, lo que les otorgó una cierta influencia en las movilizaciones obreras, estudiantiles, vecinales y otras, de la que generalmente carecían los partidos homólogos en otros países europeos.

Toma de posiciones ante los estertores del franquismo

A la altura de 1974, la escena política se hallaba en una encrucijada de caminos. El régimen franquista ensayaba pero no encontraba un modo de llevar a cabo el principio puesto en boca del príncipe siciliano ideado por Giuseppe Lampedusa en su novela El gatopardo, «cambiar algo para que nada cambie»; esto es, un lavado de cara de la dictadura para mantener las riendas del poder político. La elección de un personaje decadente como Carlos Arias Navarro era un fardo más de los que impedían que aquel elefantiásico sistema político tuviera alguna posibilidad de reforma. Los gobiernos formados por Arias, tras las sucesivas desapariciones de Carrero Blanco y de Franco, volvieron a llenarse de falangistas y nacionalcatólicos. Cada pequeño intento de apertura se cerraba al instante y se regresaba al enrocamiento represivo. El régimen guardaba una ejemplar simetría con la evolución biológica del dictador; camino de la desaparición, ambos sufrían un agónico proceso final. En su última antesala, la dictadura se despidió como había comenzado: cinco condenas a muerte que decidieron y ejecutaron tribunales militares sin ningún tipo de garantía procesal contra militantes de una organización anarquista, ETA y FRAP[35]. El fracaso del ensayo evolucionista agrietó las relaciones entre los órganos políticos, los mandos militares, la jerarquía católica y demás valedores históricos del franquismo, además de originar diversas fugas hacia grupos ultraderechistas decantados por el terrorismo.

Los movimientos sociales arreciaron. Entre los obreros, espoleados por la convergencia de la negociación de convenios colectivos y las muestras de rechazo a las actuaciones represivas de la dictadura. Entre los universitarios, por una masificación de unas aulas que se topaba con la escasez de recursos materiales y por la presencia de la policía en los recintos académicos. Las medidas del gobierno para hacer frente a la crisis económica aportaban motivaciones adicionales para el desarrollo de huelgas y manifestaciones.

El escenario creado en Madrid a comienzos de 1976 fue la expresión más evidente de un entorno social conflictivo, coincidiendo la huelga que paralizó el metro con distintas movilizaciones de grandes fábricas de metalurgia, material eléctrico, fabricación de automóviles, maquinaria y textiles, con huelgas en el sector de la construcción y en grandes servicios como Telefónica, Correos y Banca. Un movimiento estudiantil también en ebullición, junto con la decisión de militarizar varios servicios públicos y el cierre patronal de algunas grandes empresas, arrojaron todavía más combustible a los conflictos. Con menor grado

de generalización, el escenario se repetía en los centros industriales de muchas ciudades del país. Cualquier nuevo conflicto reivindicativo encontraba muestras de solidaridad, y cualquier represalia se topaba con muestras de rechazo. Hitos represivos como las cinco muertes causadas por los disparos de la policía y el ejército contra una asamblea obrera en Vitoria, en marzo de 1976, elevaban la exigencia de libertades democráticas hasta cotas no conocidas hasta entonces.

Sin embargo, entre el involucionismo franquista y el avance de las luchas sociales y democráticas existía una amplia y difusa franja de la sociedad española que permanecía al margen, presentando diferentes grados de simpatía y conocimiento, o bien de temor e ignorancia, con respecto a los acontecimientos. El fuerte aumento de las movilizaciones ponía de relieve que había muchos más participantes que hasta entonces y mayor conciencia democrática que en el pasado; pero eso no era aplicable para una mayoría social. El dominio de las ideas y de los comportamientos conservadores había ido en claro descenso, erosionando el paternalismo vigente en el entorno familiar, la exagerada influencia del clero en la educación y en el medio rural, los argumentos con los que se justificaba la privación de los derechos de las mujeres y el temeroso recuerdo de la guerra civil.

Por tanto, muchos de los mecanismos inhibidores de la acción colectiva habían ido diluyéndose, mientras que las consecuencias de la crisis hacían lo propio con el efecto adormecedor que había causado el primerizo acceso a ciertos bienes de consumo duradero, quedando al descubierto la modestia de los ingresos de muchas familias y la mínima protección social que brindaba el franquismo[36]. Sin embargo, esas novedades parciales sucedían en un magma social formado por muchos segmentos de población que trabajaba en empresas, actividades y lugares muy diferentes de los centros industriales y de servicios de las grandes ciudades, en lugares donde no había prendido la llama reivindicativa ni la conciencia democrática.

Un gran tejido social con demasiadas pequeñas empresas, talleres, comercios y otros centros en los que trabajaba la mayoría de los asalariados, profesionales y pequeños propietarios, cuyas vivencias y convicciones escapaban a las que iban arraigado en los colectivos que participaban en los movimientos reivindicativos[37]. Un tejido con demasiadas personas con edades maduras cuyo recuerdo de la guerra seguía evocando sombríos temores, y muchas otras gentes a las que cualquier muestra de desorden público o cualquier amenaza represiva les paralizaba. Demasiadas personas formadas en ambientes

conservadores, rurales y clericales cuya evolución ideológica era limitada. Demasiados funcionarios que trabajaban en los distintos escalones de la administración pública, curtidos en la mugre administrativa e ideológica del franquismo. Demasiadas mujeres afectadas por la bajísima tasa de actividad laboral, que seguían sometidas al ejercicio de las funciones tradicionales entre las paredes domésticas. Sin embargo, la democracia anhelada por los movimientos en marcha implicaba el reconocimiento de los derechos para esa gran cantidad de ciudadanos que estaban al margen, sin legitimar la dictadura pero sin activar una postura favorable a la democracia.

La escena política se componía de esa realidad dual, unos movimientos democráticos en ascenso y unas amplias franjas inermes. En esa realidad actuaban los partidos antifranquistas que pretendían acabar con la dictadura. El PCE fue el primero en mover ficha cuando, en el verano de 1974, patrocinó la formación de la Junta Democrática (JDE). Una iniciativa con mayores pretensiones político-propagandísticas que operativas, puesto que los demás integrantes no aportaban ninguna capacidad de movilización social, salvo la que desde su izquierda generaba el Partido del Trabajo de España (PTE), la nueva denominación del PCE(i). Les acompañaban el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno y un pequeño ramillete de nombres[38] que todavía hoy cabe preguntarse cuál era su resonancia, más allá del hecho de que aceptaran ir de la mano de aquellos partidos comunistas.

Para el PCE, como impulsor, la relevancia de esos nombres residía en que con ellos aparentaba formar parte de una alianza con que rompía su situación de aislamiento; aportando el partido la influencia social mientras que aquellos nombres servirían como banderín de enganche para que otros les siguieran. El objetivo de la JDE era promover la ruptura del franquismo mediante métodos democráticos para formar un gobierno provisional que garantizase la amnistía, la legalización de los partidos políticos y los sindicatos, y la puesta en marcha de un sistema político democrático[39]. Desde la junta estatal pasaron a constituirse juntas por territorios, cuyo radio de actuaciones se circunscribía a la capacidad que aportaban PCE y PTE en los movimientos sociales, más intensa desde el verano de 1975, logrando la incorporación de ciertos núcleos intelectuales influidos principalmente por el PCE.

El PSOE celebró aquel congreso de refundación en Suresnes unos meses después de la creación de la Junta Democrática. La retórica anticapitalista y antiimperialista de la que se adornó le permitía criticar el programa democrático

de la JDE en nombre de la lucha de clases y de los objetivos que suponía la construcción del socialismo. Al mismo tiempo, sin influencia social pero contando con el pedigrí y el apoyo económico de los grandes partidos socialistas europeos, la auténtica tarea que los nuevos dirigentes pusieron en marcha fue reunirse con representantes de otras fuerzas políticas, tan minoritarias y carentes de influencia como los socialistas, para crear otra alianza publicitaria desde la que contrarrestar la iniciativa juntera del PCE. Esa alianza fue la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD), formada en el verano de 1975 por el PSOE y la UGT con un variopinto número de pequeñas organizaciones[40] y aliñada, igual que la JDE, con formaciones de extrema izquierda, en este caso dos, ORT y MCE, además de varias personas a título independiente a los que se suponía adscritas a posiciones democristianas y socialdemócratas. Por supuesto, más aún que la JDE, la única actividad que tenía a su alcance esa PCD era realizar acciones publicitarias divulgadas a través de la prensa y de instituciones socioculturales para dar a conocer un programa democrático sin diferencias apreciables con el que había propuesto la JDE.

La comunicación establecida entre junta y plataforma condujo a su posterior fusión como Coordinación Democrática (CD), constituida en marzo de 1976, con el añadido de varias organizaciones nacionalistas catalanas. Siendo lógica, no obstante esa alianza implicaba cuatro elementos relevantes. Primera, el PSOE aceptaba colaborar con el PCE por primera vez desde el inicio de la dictadura, aunque seguían siendo numerosas las muestras de anticomunismo heredadas de los tiempos finales de la república. Segunda, el PCE aceptaba colaborar con organizaciones de extrema izquierda (PTE, ORT, MCE) cuando, hasta entonces, había rehuido un reconocimiento expreso de las mismas. Tercera, aunque la mayoría de los demás partidos sólo eran reuniones de pocas personas bajo unas siglas, sus señas de identificación política abarcaban un vasto espectro antifranquista. Cuarta, la unificación de las siglas coincidía con el mayor desarrollo conocido hasta entonces de los movimientos sociales y democráticos al cabo de tres décadas y media de dictadura.

Todos los integrantes de la CD coincidían en unos objetivos centrales. Como previamente había sucedido en Grecia y Portugal, la ruptura democrática supondría el derrocamiento de la dictadura para lograr la amnistía, las libertades políticas y la convocatoria de elecciones libres a un parlamento constituyente. El dilema residía en cómo llevarlo a cabo. Ahí las ideas seguían siendo vagas, aludiéndose al desarrollo de los movimientos sociales, la vinculación de más partidos y personalidades y el aislamiento de los partidarios de la continuidad

franquista, ahora bajo formato monárquico con Juan Carlos de Borbón como rey. Movilizar y negociar eran los verbos más conjugados.

[1] Sin que faltaran personajes que después se fugaron hacia el conservadurismo monárquico, como Melquiades Álvarez, o al reaccionarismo de derechas, como Alejandro Lerroux.

[2] Aquellos sucesos fueron una prueba evidente de las irrupciones abruptas que generaba el profundo malestar que tenían los trabajadores. Los sucesos se iniciaron en Barcelona y otras ciudades contra el embarco de reservistas hacia Marruecos. La mayoría de los movilizados que se enviaban eran obreros catalanes y madrileños para construir el ferrocarril, además de obreros y campesinos que servirían como carne de cañón en aquel encarnizado conflicto militar. La negativa de un grupo que iba a embarcar arrastró a otros y atrajo las muestras de simpatía de la ciudad. La represión policial acentuó la radicalidad de las acciones de protesta, decretándose una huelga que derivó en barricadas, asaltos a instalaciones con armas y otras muestras de revuelta urbana. La mayor represión originó acciones más desesperadas, incluyendo el incendio de iglesias y otras instalaciones. La superioridad militar del ejército y la policía aplastó la rebelión.

[3] La candidatura estaba encabezada por Benito Pérez Galdós y, formando parte de ella, Pablo Iglesias fue el único socialista elegido como miembro del parlamento.

[4] Parte de sus miembros socialistas y republicanos estaban detenidos y otros se habían exiliado temporalmente o estaban en la clandestinidad.

[5] Sin otra ley electoral que la de 1907, concebida para reproducir el turnismo de la restauración borbónica, el gobierno provisional introdujo varias modificaciones con el propósito de evitar el control caciquil que se ejercía en las pequeñas circunscripciones rurales merced a un mecanismo uninominal que asignaba el escaño al candidato más votado. En su lugar se aplicó un sistema mixto de doble vuelta que seguía siendo más mayoritario que proporcional pero haciendo que las circunscripciones fuesen las provincias, asignando un diputado por cada una y otro más por cada 50.000 habitantes con un reparto final de los residuos. También se redujo la edad de voto a los 23 años y se mantuvo

reservado sólo para los hombres, por lo que las mujeres podían ser elegidas pero no votantes.

[6] Tras los 115 diputados del PSOE (24%), los principales fuerzas republicanas eran el Partido Radical con 90 (19%), el Partido Radical-Socialista con 52 (11%), Esquerra Republicana de Catalunya con 37 (8%), Acción Republicana con 30 (6%), Derecha Liberal Republicana, con 25 (5%), Federación Republicana Gallega con 14 y Agrupación al Servicio de la República con 13.

[7] Los tres se mantendrían en los sucesivos gobiernos de 1931-1933. Fernando de los Ríos como ministro de Justicia, más tarde pasaría a Instrucción Pública; Prieto como ministro de Hacienda, más tarde en Obras Públicas; y Largo Caballero como ministro de Trabajo.

[8] Las tres mujeres presentes en aquel primer parlamento republicano sostuvieron posiciones diferentes en el debate que finalmente aprobó el voto de las mujeres a partir de las siguientes elecciones. Clara Campoamor, elegida por el PR, fue la mayor impulsora de ese derecho; Victoria Kent, por el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), se opuso alegando razones de oportunidad, pues consideraba que en aquel momento el voto femenino favorecería a las fuerzas de la derecha. Margarita Nelken, por el PSOE, mantuvo una actitud ambivalente, pero en la votación también se opuso.

[9] El punto más conflictivo fue la ley de 1933 que prohibió la existencia de órdenes religiosas que no reconocieran su acatamiento a las leyes civiles por considerar que, por encima, estaban las decisiones de las propias autoridades eclesiásticas. El choque principal fue con la Compañía de Jesús y supuso su expulsión de España y la expropiación de sus bienes.

[10] Una carencia que, como se ha dicho, compartían el laborismo británico, los socialistas alemanes y otros que en aquel momento gobernaban, con la excepción del SAP en Suecia.

[11] Un paso previo fue la pérdida de influencia del sector sindicalista liderado por Pestaña y Peiró, que era partidario de centrar las acciones cenetistas en las reivindicaciones laborales. Se hizo hegemónica la fracción de Durruti, García Oliver y Ascaso, partidarios de la acción revolucionaria, para lo cual incorporaban todo tipo de reivindicaciones que sirvieran a ese propósito, sin necesidad de precisar objetivos concretos ni tiempos de realización.

[12] Los campesinos del pueblo habían asaltado el pequeño cuartel de la guardia civil, tomando sus armas; hirieron a varios guardias, de los cuales uno murió. La represión contra los campesinos la inició un contingente de guardias civiles llegados a las pocas horas y se convirtió en masacre cuando fueron reforzados por un destacamento de guardias de asalto, con órdenes directas del ministerio de Gobernación de aplastar una rebelión que ya no existía.

[13] Entre las filas conservadoras se encontraba el presidente de la república, Alcalá-Zamora, que en 1930 proponía la creación de una «República Católica». Pretendían limitar ciertos derechos relacionados con el orden público y, sobre todo, eliminar otros en aras de sus convicciones religiosas. En el otro extremo, los radicales y socialistas profundamente anticlericales deseaban llevar lo más lejos posible el laicismo y el despojamiento de cualquier privilegio para la Iglesia católica.

[14] La CEDA tuvo 115 diputados y entre los demás integrantes del frente los mejores resultados fueron para el Partido Agrario, 36 diputados, Comunión Tradicionalistas, 20, Renovación Española, 15; también participaron la Lliga Catalana, 26, y el Partido Nacionalista Vasco, 12.

[15] Resurgió también un movimiento estudiantil impulsado por la Federación Universitaria Escolar (FUE) que había protagonizado importantes movilizaciones en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera. Los choques de mayor intensidad sucedieron por la presencia de grupos falangistas, claramente fascistas, en los centros universitarios madrileños.

[16] El precedente esgrimido era la alianza formada en Cataluña en 1933 entre la UGT y varias pequeñas organizaciones, como el Bloque Obrero e Izquierda Comunista, y con parte de la CNT. El problema era que esa parte de CNT era la que formaban los «trentistas», una fracción minoritaria dentro del sindicato, mientras que la mayoría cenetista y sus dirigentes principales se negaban a integrarse en semejantes alianzas.

[17] A lo largo de 1935 se produjeron gobiernos con/sin Lerroux, con/sin miembros de la CEDA, con/sin independientes al frente del gobierno.

[18] IR nació de la fusión de Acción Republicana con una parte del Partido Republicano Radical-Socialista y con la Organización Republicana Gallega Autónoma. Otra parte del PRRS se había unido al Partido Radical Democrático

para formar Unión Republicana (UR)

[19] En la derecha, la CEDA seguía siendo el principal partido, con 88 diputados, teniendo también representación el Bloque Nacional, el Partido Agrario, Comunión Tradicionalista, Renovación Española y otros. En el centro, el Partido de Centro tuvo 16 diputados, la Lliga Catalana 12 y el PNV 10. Al margen, el Partido Radical de Lerroux obtuvo sólo 4 escaños.

[20] La primera y ejemplar evidencia de ello se produjo con la amnistía política. Antes de que el parlamento por la vía de urgencia aprobase el 21 de febrero la amnistía, sólo una semana después de las elecciones y apenas tres días desde que se formara el gobierno, en varias ciudades se produjeron asaltos a las cárceles por parte de ciertos grupos que por la fuerza impusieron la liberación de cuantos presos encontraron, incluyendo a muchos delincuentes comunes.

[21] El acercamiento de los dirigentes del PCE con los dirigentes de las JSE cristalizó en la unificación de estas con un reducido número de jóvenes comunistas para crear las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU).

[22] Contra la leyenda fabricada entonces por los militares facciosos y reproducida después por la dictadura franquista, el golpe no fue secundado inicialmente por la mayoría del ejército. Tuvo un seguimiento parcial en el ejército de tierra, que permitió hacerse con la franja central del territorio (Galicia, Castilla-León, Rioja, Vitoria y gran parte de Aragón), además de Baleares y focos locales en varias provincias andaluzas. Sin embargo, ocho de los nueve mandos de la península no se sublevaron, ni la mayor parte de la armada y de la fuerza área, ni de la guardia civil, ni de los guardias de asalto.

[23] Como primera reacción, la noche del 18 al 19 se formó un nuevo gobierno, con Martínez Barrio (UR) al frente, que ofreció un pacto al general Mola, el jefe de los sublevados. Este lo rechazó y al día siguiente se formó otro gobierno con José Giral (IR), incapaz de tomar medidas conforme la sublevación seguía extendiéndose. Medidas como el armamento de los trabajadores y la organización de milicias dirigidas por mandos militares, ni estaban previstas ni se desplegaron después por miedo a que las organizaciones obreras dispusieran de fuerza militar. Tampoco se atrevió el gobierno a decretar el licenciamiento general de los soldados, sobre todo en las zonas donde se hallaban los jefes militares más antirrepublicanos, dispuestos a manipularlos. Tampoco se contempló la concesión inmediata de la independencia a Marruecos, con lo que

difícilmente Franco hubiera dispuesto de las tropas de choque para hacer su traslado a la península y arrastrar sucesivos apoyos de otros mandos y tropas.

[24] Intentando que se decantara hacia un régimen monárquico, Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, intentó sumarse a las fuerzas golpistas, llegando a entrar en Navarra a principios de agosto, pero Mola ordenó su vuelta al exilio.

[25] Los tres dirigentes comunistas se hicieron cargo de los ministerios de Obras Públicas, Agricultura e Instrucción Pública; cuando en noviembre se incorporaron cuatro anarquistas, sus carteras fueron las de Justicia, Sanidad, Industria y Comercio.

[26] El PSUC se formó en julio de 1932 mediante la unión de la débil Federación Catalana del PSOE, la sección catalana del PCE y otros partidos también pequeños como Unión Socialista y el Comunista Proletario. El control pasó a los líderes afines al PCE y a la URSS.

[27] La dimensión real de los ensayos de comunismo libertario es probable que se encuentre en algún lugar incierto del camino entre la leyenda levantada por los anarquistas y la denostación de que fue objeto por parte de los comunistas. La leyenda los reviste de rasgos idílicos referidos a un funcionamiento igualitario y fraternal, a la vez que como formas eficaces de lucha contra el ejército fascista, tirando muy por lo alto a la hora de calcular la magnitud de personas que participaron y las colectividades establecidas. La demonización los considera experiencias circunstanciales, construidas principalmente en medios rurales atrasados, con escasa eficiencia en sus resultados económicos y con un efecto corrosivo sobre la acción militar contra la rebelión franquista, minimizando tanto su número como sus posibilidades de continuidad.

[28] Buena parte de los gérmenes políticos que afloraron en los años cincuenta lo hicieron a través del resquicio que ofrecían espacios como las Hermandades Obreras (HOAC) y la Juventud Obrera (JOC). También ETA (Patria y Libertad) nació de círculos católicos vascos, y el Frente de Liberación Popular (FLP) lo formaron intelectuales y universitarios con veleidades guerrillero-castristas surgidos de entornos cristianos.

[29] Entre 1961 y 1974, el salario real medio por hora trabajada creció al 8,8% anual, lo que significa que se multiplicó por 2,6 a lo largo del periodo, pero teniendo en cuenta que su nivel inicial era muy bajo. Consecuentemente, la cuota

de los salarios en la renta nacional creció con gran rapidez debido a ese incremento del salario-hora y al aumento del número de asalariados (1,7% anual).

[30] Según la declaración del Comité Central de junio de 1956, el PCE apoyaría «cualquier gobierno que diera pasos efectivos hacia la realización de una política de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, de paz, independencia nacional y restablecimiento de las libertades democráticas».

[31] En 1969 Enrique Tierno fundó el Partido Socialista en el Interior (PSI), y al año siguiente los dirigentes socialistas de varias agrupaciones internas (País Vasco, Madrid, Andalucía) lograron desplazar a Llopis y a su grupo, dotando de mayor influencia a las organizaciones del interior, al tiempo que utilizaban un discurso retórico acusadamente revolucionario.

[32] Aunque eran precisamente los principales dirigentes de esos partidos europeos quienes avalaban en términos políticos y quienes apoyaban con recursos financieros a los líderes del PSOE.

[33] No obstante, al margen del PCE, la mayor incidencia política corrió a cargo del terrorismo de ETA, tanto por la repercusión de sus continuadas acciones, asesinatos, atentados y secuestros, como sobre todo por las repercusiones que tuvo el asesinato de Carrero Blanco, el delfín de Franco destinado a sucederle.

[34] Posteriormente, en los primeros años setenta, la repercusión pública del PCE(m-l) fue mayor no por su importancia política, sino a raíz de que una organización por él patrocinada, el FRAP, se adentró en la lucha terrorista.

[35] La conmutación de las penas de muerte, ejecutadas en septiembre de 1975, había sido solicitada por el Vaticano y la mayoría de los gobiernos europeos. Muchos de ellos retiraron a sus embajadores en España.

[36] Todavía en 1974 el gasto social representaba menos del 9% del PIB, cuando en los países europeos desarrollados se situaba entre el 22-28%.

[37] El rápido desarrollo económico de los años sesenta había potenciado la existencia de un núcleo de grandes empresas –la mayoría pertenecientes al capital extranjero, a la banca o al Estado–, pero era en centenares de miles de pequeñas empresas y talleres donde se empleaba a la mayor parte de los asalariados.

[38] Tales como Rafael Calvo Serer, José Vidal Beneyto, Carlos Hugo de Borbón-Parma, José Luis de Vilallonga y Antonio García Trevijano.

[39] Como principales medidas se especificaban: la eliminación de las instituciones franquistas, el reconocimiento de las libertades políticas, la independencia judicial, la separación entre Iglesia y Estado, la neutralidad del ejército dedicado a la defensa exterior, la unidad del Estado y el reconocimiento de las características propias de los pueblos catalán, vasco, gallego y las otras comunidades regionales que lo decidiesen democráticamente. Incluía también el compromiso de convocar una consulta popular, en un plazo de 12-18 meses, para decidir sobre la forma monárquica o republicana del Estado, y la negociación para integrarse en la Comunidad Económica Europea.

[40] Los partidos era: Izquierda Democrática, Partido Gallego Social Demócrata, Unión Socialdemócrata Española, Unió Democràtica del País Valencià, Partido Carlista, Consejo Consultivo Vasco y Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya.

9. Los partidos obreros españoles: ascenso y decadencia bajo el sistema democrático

Un hecho imprevisto comenzó a modificar la escena política, surgiendo un nuevo protagonista provisto de una versión del verbo negociar que alteró su contenido y el rumbo del proceso posfranquista. Sobrevino en el verano de 1976, cuando el rey borbónico destituyó a Carlos Arias y nombró en su lugar a Adolfo Suárez como jefe de gobierno. En adelante, Suárez y en cierta forma el propio rey se convirtieron en actores políticos principales, poniendo en marcha la demolición interna del régimen y fijando las condiciones desde las que, posteriormente, se produjo la transformación del sistema político[1]. Si en el momento de su nombramiento nadie creyó ver en Suárez a un interlocutor de las fuerzas del régimen que podían estar dispuestas a llevar a cabo una reforma, meses después los hechos mostraron que sí lo era. Más tarde resultó evidente que era el protagonista central de la transición que se llevó a cabo hasta la instauración de un sistema basado en la democracia política, con las singulares características que se derivaron del propio proceso de transición.

PRIMER TIEMPO DE LA TRANSICIÓN: NEGOCIACIONES BAJO DETERMINADAS PREMISAS

En un corto espacio de tiempo al frente del gobierno, Suárez mostró una creciente tolerancia hacia la actividad de la mayoría de los partidos agrupados en Coordinación Democrática, dejando de lado la legalidad que seguía vigente. A la vez, hizo públicas sus primeras ideas sobre la posibilidad de establecer un sistema político democrático y su disposición a desmantelar el andamiaje institucional de la dictadura. La combinación de muestras de tolerancia hacia la oposición y propósitos reformista hacia el interior del régimen definían el programa con el que Suárez se preparaba para controlar el tiempo y el contenido de las relaciones con las fuerzas constitutivas del franquismo y con las fuerzas de la oposición antifranquista. Con aquellas, la prioridad fue negociar una Ley

de Reforma Política que mandó las instituciones fascistas al desván de la historia, aprobada por unas Cortes franquistas que votaron su propia disolución y la desaparición de la mayor parte de su personal político[2]. Todo ello al más puro estilo franquista, apurando el sometimiento a la autoridad del gobierno (Suárez) y del Estado (Juan Carlos), sin un auténtico debate sobre lo que realmente significaba. Lo mismo que sucedió en diciembre cuando se sometió dicha ley a referéndum, sin que estuvieran reconocidas las libertades y presentándola como la única alternativa posible, cuando de hecho era la alternativa que hacía posible que el proceso posterior siguiera bajo control del gobierno. El 92% de votos favorables no tenía nada que envidiar a los plebiscitos que Franco había ganado por goleada.

Iniciativa negociadora controlada por el gobierno

A continuación, el modo en que Suárez planteó las relaciones con las fuerzas opositoras fue el factor más determinante del proceso de transición, ya que marcó muchas de las características del sistema político construido a partir de las elecciones de 1977. Que Suárez pretendiese ejercer el control sobre el contenido y el ritmo de las negociaciones resultaba enteramente lógico, porque con ello favorecía su propia posición y la del grupo de fuerzas reformistas del régimen. El quid de la cuestión radica en explicar el comportamiento de las fuerzas opositoras para que ocurriera de ese modo, siendo clave la postura adoptada por el PCE. Desde la perspectiva del Pacto por la Libertad propuesto por los comunistas y según los acuerdos de la JDE, la PCD, y la CD, el pilotaje del proceso democrático tenía que recaer en un gobierno provisional compuesto por las fuerzas democráticas, o en todo caso integrado por esas fuerzas y los reformistas del régimen.

Los factores que explican por qué no fue así cabe encontrarlos en la secuencia de acontecimientos que se produjo en el segundo semestre de aquel 1976. Aupado por sus primeros pasos en el interior del régimen, Suárez anunció su intención de entablar negociaciones con las fuerzas agrupadas en CD, para lo cual fijó dos condiciones que, una vez aceptadas, marcaron el rumbo de las negociaciones. En primer lugar, Suárez propuso que Coordinación Democrática nombrase unos representantes que ejercieran como interlocutores. Los nueve representantes

designados fueron: tres por los partidos obreros (PCE, PSOE, PSP), tres por los partidos nacionalistas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y otros tres afines a las sensibilidades políticas liberal, socialdemócrata y demócrata-cristiana[3]. Una composición ciertamente ajena a la realidad interna de la oposición y más aún a la influencia social que tenían las distintas fuerzas que componían CD. Los partidos de extrema izquierda quedaron excluidos, el partido con mayor capacidad política y organizativa, el PCE, quedó minimizado, y los tres partidos obreros quedaron en minoría[4]. Más aún después de que el propio PCE aceptase la segunda condición de Suárez: que en lugar de su líder, Santiago Carrillo, se incorporase un representante menos conocido para no suscitar enconos frontales en las filas franquistas que estaban siendo arrastradas hacia la reforma.

Una vez que CD aceptó esa composición de su comisión negociadora, el control de las conversaciones por parte de Suárez se hizo manifiesto. Condicionó el éxito de lo negociable a que la oposición abandonase toda idea acerca de un gobierno provisional que dirigiese la transición, a que no cuestionase la monarquía ni el Estado unitario, a que no criticase al ejército ni a la iglesia y a que no exigiesen responsabilidades por los años de la dictadura. El argumento empleado a modo de justificación y de manera reiterada fue la necesidad de evitar a toda costa que la democracia fuera o pareciera ser una «vuelta a la tortilla» por parte de los antiguos vencidos con respecto a los vencedores de la guerra; sólo así se podría contar con el apoyo de los segmentos reformistas del franquismo y se podría neutralizar a los segmentos más duros que se oponían a esa transición. La democracia política llegaría paso a paso.

Sin embargo, esas líneas rojas y las omisiones subsiguientes tenían un significado muy superior a lo que requería cualquier cautela o maquillaje de las formas. De hecho, vaciaban el contenido político con el que la JDE, la PCD y la CD habían formulado la «ruptura democrática». Una vez aceptado el cauce por el que debían discurrir las negociaciones, lo que quedaba por abordar eran cuestiones importantes pero parciales sobre cómo y cuándo desmantelar los aparatos y el marco legal franquistas y de qué modo ir estableciendo las bases del sistema democrático. Pero también en esos aspectos Suárez actuó con ventaja, ya que cada paso hacia ese desmantelamiento, imprescindible como premisa para asentar el sistema democrático, fue considerado como una concesión de su parte que le otorgaba la posibilidad de obtener una contrapartida en la configuración del nuevo sistema.

Así fue ocurriendo a partir de que la Ley de Reforma Política fue aprobada por

una mayoría abrumadora en el referéndum de diciembre de 1976 con sólo un 23% de abstención, siendo esta la postura que habían defendido los partidos de la CD. Parecía que ese resultado legitimaba a Suárez como conductor del proceso de cambio, cuando de hecho había sido un referéndum ajustado a los cánones franquistas, con el absoluto control de todos los resortes del poder estatal y de los medios de comunicación, sin que se levantara ninguna de las prohibiciones al ejercicio de las libertades cívicas. Otro tanto sucedió cuando el gobierno fue decretando una amnistía parcial, la desaparición del Movimiento Nacional, del Tribunal de Orden Público, del Sindicato Vertical y demás aparatos fascistas, a la vez que aprobaba la libertad de prensa y otros derechos democráticos. Cada medida se presentaba como concesión cuando, en realidad, eran requisitos básicos para preparar las elecciones constituyentes que se habían convocado para el mes de junio.

En el inicio de 1977 Suárez decidió formar un partido, Unión de Centro Democrático (UCD), con el que concurrir a las elecciones. Un «partido del poder» concebido y organizado como una potente aspiradora destinada a absorber un amplio espectro de franquistas reformistas, altos funcionarios sin definición política y una amalgama de personajes que antes se habían integrado en Coordinación Democrática y que ahora prestaban un aroma (democristiano, liberal o socialdemócrata) con el que dar credibilidad a la orientación centrista con la que UCD pretendía definir su cartel electoral. Un partido sin perfil político, sin militantes ni vida orgánica, pero que controlaba los organismos y los recursos del Estado, la televisión y la mayoría de los medios de comunicación. Un partido con posibilidad de fijar las condiciones en las que tendrían lugar las elecciones.

Posiciones divergentes en la oposición

Diversas razones pueden explicar por qué las fuerzas opositoras, sobre todo las de izquierda y en particular el PCE, aceptaron aquella deriva del proceso negociador. Coordinación Democrática no dejaba de ser una inconsistente alianza de conveniencia, tenue y con escasa identidad política, en la que buena parte de sus integrantes sólo pretendía hacer compatibles dos cabos imposibles de unir bajo el franquismo: garantizar su presencia política en un sistema

democrático. Tras constatar el fortalecimiento político de Suárez a raíz del referéndum de diciembre de 1976 y el control de las negociaciones, al olor de las elecciones su olfato condujo a muchos de aquellos personajes hacia UCD como mejor garantía para tener presencia en la vida política. En el caso de las fuerzas nacionalistas, su cupo de demandas quedó cubierto cuando Suárez aceptó que, tras las elecciones, se elaborarían estatutos de autonomía para las tres nacionalidades históricas, tomando como referencia los que hubo en tiempos de la república.

Otro factor que influyó en la decisión de ciertas personas y pequeños grupos políticos fue el enrarecimiento del clima social en los primeros meses de 1977. Bandas de extrema derecha que cometían acciones violentas y varios asesinatos; organizaciones terroristas (ETA, GRAPO) que secuestraban y mataban; y altos mandos militares que emitían declaraciones ultramontanas en las que abominaban de las plagas que acarrearía el sistema democrático. Una concurrencia de fuerzas oscuras que golpeaba el escenario político, llamaba a la cautela de quienes apostaban por la democracia y atemorizaba a los más indecisos y apocados.

Por parte del PSOE, la cercana perspectiva de las elecciones insufló aires de optimismo derivados del potencial que ofrecía el socialismo como marca política. Un optimismo acentuado por varios hechos que se iban produciendo en aquellos meses. Sin estar todavía legalizado, recibía una tolerancia preferencial por parte del gobierno. Muestra de ello fue que, a principios de diciembre de 1976, el PSOE pudo celebrar su congreso sin ninguna restricción y con una gran repercusión en los medios de comunicación. En dicho congreso, los dirigentes del PSOE recibieron el respaldo de la crema del liderazgo socialdemócrata europeo: el sueco Olof Palme, el alemán Willy Brandt, el italiano Pietro Nenni, el francés François Mitterrand, el portugués Mário Soares, el británico Michael Foot y el danés Anker Jørgensen; muchos de ellos situados al frente del gobierno en sus países. Estos líderes brindaron su apoyo y su asesoramiento político para las elecciones de junio, comprometiendo también varios de ellos ayuda económica para financiar la costosa campaña electoral. Otro factor favorable era que su líder, Felipe González, figuraba como principal interlocutor de Suárez, estando ambos igualmente interesados en minimizar la presencia del PCE en la comisión negociadora y en limitar su proyección pública. Ventajas adicionales eran la asidua presencia de González en los medios controlados por el Estado y la pronta legalización de UGT, postergando durante meses la de CCOO.

La dirección socialista confeccionó entonces un doble discurso destinado a facilitar su audiencia en dos tipos de público. Un discurso radical, de corte obrerista, republicano y socialista, dirigido a los sectores de trabajadores y otras capas urbanas politizadas, y hacia quienes evocaban el recuerdo del viejo PSOE y su posición anticomunista. Otro discurso moderado, que apostaba por la construcción tranquila de una democracia a la europea y por la modernización de la economía y la sociedad, dirigido al amplio contingente social escasamente politizado que no congeniaba con los herederos del franquismo. La juventud de los líderes socialistas representaba esos afanes de modernidad al tiempo que contribuía a limar la resistencia de quienes peor recuerdo tenían de la república y de la guerra. Un último factor a su favor era que, en el curso de aquellos meses, el PSOE engulló a otros pequeños partidos que utilizaban las siglas socialistas, unos provenientes de la ruptura con la vieja dirección en el exilio años atrás y otros surgidos a escala regional e integrados principalmente por intelectuales.

En suma, el Partido Socialista tenía una escasa capacidad movilizadora con la que oponerse al rumbo que tomaron las negociaciones con Suárez, pero además estaba convencido de que el proceso de transición desembocaría en un escenario para el que estaba colocado en una posición destacada. No tenía, pues, ni voluntad, ni capacidad para oponerse. Sólo lo haría si el curso político que impulsaran otros partidos le forzara a adoptar una posición más exigente y combativa. Pero tal situación no se produjo, dado que el PCE tampoco apuntaba en esa dirección.

El PCE afrontó en aquellos meses dos dilemas que se hicieron recurrentes a lo largo de todo el proceso de transición. Su fuerza política residía en la influencia que ejercía en los movimientos sociales y en una organización interna nutrida por militantes curtidos en esa labor movilizadora. Su debilidad consistía en que tanto su pasado como su fuerza política infundían temores en otros partidos y en las filas reformistas de Suárez. Siendo así, un primer dilema era cómo acrecentar su fortaleza política para hacer frente a las condiciones impuestas por Suárez y cómo ganar presencia como interlocutor principal, sin poner en peligro la alianza con otras fuerzas opositoras y sin suscitar mayores temores que pudieran excluirle de las negociaciones. Es decir, hasta dónde tensar la cuerda que unía la movilización con la negociación. Un segundo dilema era cuánta fuerza política podía lograr a través de su influencia en los movimientos sociales, sin que un impulso excesivo de esos movimientos condujese a una radicalidad que favoreciese a los partidos situados a su izquierda y sin que un déficit de capacidad movilizadora pusiera de manifiesto que su influencia no era tanta

como se le suponía. Es decir, cuánta cuerda podía tensar.

Colocados ante esos dilemas, los dirigentes comunistas optaron por hacer pocas probaturas y eludieron, siempre que pudieron, tensar los conflictos sociales. Los momentos en los que el PCE mostró su músculo político fueron ciertamente limitados. Dos de ellos fueron una convocatoria de huelga general en noviembre de 1976 y otra jornada de lucha en enero de 1977. Ambas las llevó a cabo a través de CCOO, actuando con otros sindicatos desde la Coordinadora de Organizaciones Sindicales y combinando el reclamo de demandas laborales con el rechazo a la Ley de Reforma y la exigencia de libertades sindicales y políticas. La convocatoria de noviembre tuvo un gran seguimiento, alcanzando un alcance intersectorial y geográfico como no se había conocido en la época de la dictadura; pero se trató de una movilización puntual de un día y con un contenido político inconcreto. Ambas convocatorias mostraron la fuerza que se le suponía al PCE, pero tampoco más; suficiente para confirmar la necesidad de contar con él, pero sin dotarle de mayor capacidad para influir en el curso de las negociaciones. Al margen de esos episodios, sólo hubo conflictos reivindicativos de baja intensidad y a escala local, ante los cuales el gobierno de Suárez se mostró cuidadoso en las represalias para evitar que dieran lugar a posteriores movimientos de mayor relieve.

El otro momento, acaso el más estelar, fue durante el entierro de los abogados de CCOO, la mayoría de ellos militantes comunistas, asesinados por la ultraderecha. Un acto de tremendo dramatismo organizado enteramente por el PCE, que llenó las calles céntricas de Madrid, haciendo posible que la indignación por los crímenes y el respeto por las víctimas fueran de la mano de una contundente reclamación de las libertades políticas, sin que se produjese ningún tipo de desorden público. Fue la mayor demostración de fuerza política del PCE merced a la dimensión masiva que tuvo la concentración, la disciplina mostrada por sus militantes, la capacidad de control sobre una situación tan peliaguda y la firmeza con la que se reclamó la democracia. Una demostración que deshizo cualquier duda en las filas de Suárez, y también en algunos partidos de la oposición, acerca de la inevitabilidad de legalizar al PCE para que concurriera a las elecciones. La legalización se produjo tres meses después, a comienzos de abril, después de que el PCE limitase sus ostentaciones públicas a ciertos actos simbólicos como las pequeñas manifestaciones hechas, tras la amnistía parcial decretada[5], cuando fueron siendo excarcelados varios de sus militantes que llevaban años, algunos de ellos décadas, en las cárceles franquistas.

La quietud política del PCE se basada en un diagnóstico optimista de la situación inducido por una «lectura italiana» de la escena política española[6]. Pensaban que las elecciones de junio le otorgarían una posición de superioridad con respecto al PSOE que le colocaría en disposición de negociar directamente con Suárez y de instar a la formación de un gobierno de concentración desde el que profundizar las reformas sociales y democráticas. Guiados por ese convencimiento, los dirigentes comunistas valoraron que lo prioritario era lograr la legalización del partido y que las elecciones tradujesen en votos el prestigio ganado en la lucha antifranquista y la influencia en los movimientos sociales. En aras de ello, el Comité Central no tuvo inconveniente en proclamar, prácticamente sin debate, que aceptaba la monarquía y símbolos como la bandera rojigualda. Por el mismo motivo, tampoco tuvo problemas para justificar su aceptación de las condiciones puestas por Suárez y el rumbo que tomaban las negociaciones.

La celebración de masivos actos durante la campaña electoral afianzó esas expectativas optimistas, creyendo que tras las elecciones se crearía el gobierno de concentración democrática que impulsaría la elaboración de una constitución con la que consolidar las instituciones democráticas y aplicar un plan de recuperación y saneamiento de la economía. Con ese horizonte, el programa electoral del PCE no prestó especial cuidado en precisar sus propuestas económicas, aludiendo de manera general a un conjunto de medidas que garantizasen un «desarrollo económico democrático», sustentado en cinco puntos: reforma fiscal progresiva; reforma y control de la Seguridad Social; control sobre el uso de los recursos financieros de bancos y cajas de ahorro; utilización adecuada de los institutos nacionales encargados de la vivienda y el urbanismo; y saneamiento y democratización del Instituto Nacional de Industria y de las empresas públicas.

La pretensión de tensar la cuerda de la movilización social y el cuestionamiento del rumbo que tomaba la transición recayeron en los partidos comunistas más radicales. Aquellos meses pusieron a prueba tanto las virtudes como los defectos y limitaciones de PTE, ORT, MCE, LCR y otros partidos menores. Con innegable tesón, promovieron movilizaciones en los lugares donde contaban con capacidad para encabezar acciones reivindicativas, a la vez que participaron en otras movilizaciones donde su influencia era menor. Siempre con la pretensión de elevar el contenido político de las demandas y de radicalizar el alcance de las iniciativas emprendidas en el movimiento obrero[7], el campo andaluz, los movimientos estudiantiles y vecinales en los que cada partido tenía alguna

incidencia local o provincial. Sin embargo, aquel esfuerzo, cargado de voluntarismo, no obtuvo los resultados pretendidos.

Algunos conflictos alentados por esos partidos sí alcanzaron la fuerza suficiente con la que lograron ciertas reivindicaciones laborales, pero su acción política quedó muy lejos de generar la masa crítica de capacidad política y organizativa que se hubiera necesitado para contrarrestar, siquiera en parte, el curso de los acontecimientos que condujo a las elecciones de junio de 1977. Más aún, en el transcurso de los meses esos partidos también albergaron un exceso de optimismo acerca de cómo su participación en los movimientos podría redundar en votos, a pesar de que siguieron sin ser legalizados hasta después de las elecciones y, por esa razón, tuvieron que presentarse con carteles electorales distintos a sus nombres[8]. La asistencia que lograban sus mítines, el aumento del número de militantes y otros ecos que deseaban escuchar les hicieron creer, más a PTE y ORT que a los otros, en la posibilidad de obtener una pequeña representación parlamentaria con las que después podrían potenciar su acción política.

SEGUNDO TIEMPO DE LA TRANSICIÓN: MIMBRES DEL NUEVO SISTEMA POLÍTICO

El despliegue de la campaña permitió conocer la valoración que los distintos partidos obreros hacían de cómo se había desenvuelto el primer tiempo de la transición. Todos constataban la ausencia de un movimiento político con capacidad de imponer la ruptura democrática, pero hacían lecturas enfrentadas de los motivos por los que había sucedido de ese modo. Lecturas que quedaron instaladas en el debate político acerca del proceso que condujo a la construcción del sistema político democrático. Los partidos más radicales señalaban al PSOE y, mucho más, al PCE como responsables por no haber estado dispuestos a potenciar el desarrollo de ese movimiento político con el que hacer viable la ruptura, o por lo menos haber proporcionado mayor capacidad negociadora frente a las filas reformistas del régimen y a las fuerzas más medrosas de la oposición.

La lectura de los partidos que habían estado implicados en las negociaciones

apelaba a las condiciones políticas que realmente operaban en la sociedad española para explicar que se había conseguido lo que era posible: libertades suficientes para celebrar elecciones libres que, después, permitirían construir el sistema democrático. La presión de las fuerzas más reaccionarias del régimen, la capacidad de maniobra de Suárez y la limitada movilización social habían determinado los resultados de unas negociaciones que, a juicio de PSOE y PCE, cabía considerar como una «ruptura pactada».

Las elecciones como punto de inflexión

La primera lectura hacía gala de un flagrante irrealismo a la hora de (sobre)valorar el potencial que presentaban los movimientos sociales, pero no se equivocaba al apuntar que PSOE y PCE habían tenido interés en destensar los movimientos y en dejar de lado cualquier elemento que pudiera obstaculizar la meta en la que tenían puesta su mirada fija: las elecciones.

La segunda lectura justificaba con un juego de palabras sus actuaciones y su posición en las negociaciones, ya que, si se trataba de construir un sistema democrático desde una dictadura, era evidente que tendría que producirse una ruptura institucional; pero acompañarla con el calificativo de pactada obligaba a aclarar, al menos, que se trataba de un pacto bastante desequilibrado, puesto que una de las partes, el suarismo, había establecido la mayoría de las condiciones.

Entre ambas lecturas cabría hacer distintas conjeturas acerca de las posibilidades que ofrecía la situación de 1976-1977 para acrecentar la capacidad negociadora y, por tanto, las condiciones exigidas para un acuerdo más compensado. Con la incertidumbre de cuáles hubieran sido las oportunidades que se habrían abierto y/o cerrado para la continuidad del proceso de transición.

Todos los partidos obreros coincidían en que el mayor logro era el hecho mismo de que se celebrasen las elecciones y el clima de pre-libertades políticas que comenzaba a respirarse. Todos confiaban en que servirían de palancas para profundizar el carácter democrático del sistema político pendiente de construir y para satisfacer las demandas apremiantes de los trabajadores. Todos afrontaban las elecciones con cuatro rasgos comunes. Primero, ninguno aspiraba a ganar.

Segundo, todos pensaban obtener buenos resultados con respecto a las metas que perseguían: el PSOE, para situarse como alternativa, única y socialdemócrata, frente a los partidos de la derecha; el PCE, para superar al PSOE y condicionar la formación de un gobierno de concentración; los partidos más radicales, para tener una presencia parlamentaria que facilitara la disputa con el PCE por la hegemonía en los movimientos sociales. Tercero, minusvaloraban el efecto que tendría la participación de millones de ciudadanos que se habían mantenido ajenos a los conflictos sociales y a las movilizaciones democráticas; iba a ser el conjunto de una sociedad débilmente democrática el que decidiera la correlación parlamentaria encargada de fijar los cimientos del sistema democrático[9]. Cuarto, ninguno valoraba con precisión las implicaciones de unas normas electorales que sobredimensionaban la representación de las provincias menos pobladas, menos urbanizadas y con menor desarrollo económico[10].

Cada partido elaboró sesudos programas electorales cuyas diferencias había que auscultar en los detalles, puesto que ninguno se olvidaba de mencionar cuáles eran los grandes problemas pendientes ni de formular las soluciones generales que ofrecían. De ese modo, la difusión de los respectivos programas se concentraba en reiterar sus principales eslóganes, lo que inevitablemente originaba un sonido cacofónico, casi redundante, indicativo de que no serían esas propuestas las que determinasen las señas de identidad electoral de cada partido. Ese lugar lo ocupaban ciertos símbolos y referencias implícitas con las que cada partido pensaba que su electorado potencial percibiría las diferencias con respecto a los demás para decantar sus preferencias. Se trataba, por tanto, de encontrar los símbolos y los gestos que sintonizasen con las condiciones sociológicas y las aspiraciones políticas de amplias mayorías. Estas serían quienes decidirían cuáles iban a ser los principales actores de la nueva escena política y, por tanto, la orientación de los cambios del sistema político, la economía, la organización social, las relaciones exteriores y tantas otras cosas más.

Finalmente, los resultados mostraron que el PSOE había hecho una buena apuesta. Le convertían en la segunda fuerza parlamentaria, con un 29% de los votos que el sistema electoral primaba elevando su cuota a casi el 34% de los diputados (118), a enorme distancia del PCE y de su rival en siglas, el PSP, que lograba una mínima presencia con sólo 6 diputados[11]. El PSOE recogía una gran cosecha de votos procedentes de las zonas obreras y de muchos otros trabajadores, profesionales y capas urbanas con afanes democráticos y sociales. Por su parte, el PCE había hecho un pésimo cálculo de sus bazas. Obtuvo el 9%

de los votos y se vio castigado por un sistema electoral que redujo su cuota de escaños por debajo del 6%, con sólo 20 diputados; casi seis veces menos que los socialistas. También habían sido malos los pronósticos de los partidos más radicales, con el doble hándicap de acudir sin estar legalizados y de hacerlo por separado bajo carteles electorales que se pretendían unitarios. Lograron un número de votos muy bajo y ninguno obtuvo representación parlamentaria[12].

No obstante, el resultado decisivo de las elecciones fue que Suárez, con su partido de aluvión, continuaría pilotando el proceso de transición. Ese era el objetivo de su apuesta reformista y a él contribuyeron el descarado uso de la televisión y demás medios estatales junto con una normativa electoral que convirtió su 35% de votos en el 47% de escaños. Con 167 diputados se acercaba a la mayoría absoluta en el parlamento y podría formar un gobierno compuesto únicamente por UCD. Su granero de votos estaba en las regiones menos desarrolladas, pero también en amplios sectores urbanos de las principales ciudades, con la excepción de Cataluña y el País Vasco. Además, el hecho de que Alianza Popular sólo tuviera el 8% de los votos, reducido al 5% en escaños (16 diputados), suponía dos buenas noticias para Suárez. Ese partido derechista había atraído a las urnas a las franjas sociales afines al franquismo más reaccionario y, a la vez, su reducida presencia parlamentaria no obligaba a que UCD tuviera que contar con su apoyo, salvo cuando así le conviniera[13].

Los dos grandes consensos

Comenzó entonces una segunda fase de la transición, en buena medida tan semejante a la que había transcurrido desde que Suárez iniciase las negociaciones con las huestes franquistas y con la oposición hasta la celebración de las elecciones. Este segundo tiempo estuvo marcado por dos acuerdos que implicaron a la casi totalidad del arco parlamentario surgido de las elecciones. Dos consensos que se convirtieron en el arco de bóveda de la construcción del sistema democrático y de la dinámica económica y social. En octubre de 1977 se firmó el acuerdo conocido como «Pactos de la Moncloa» y, a lo largo de esos meses finales y del año siguiente, se elaboró y aprobó la Constitución.

La rapidez con la que se pusieron en marcha las negociaciones que culminaron

en los Pactos de la Moncloa estaba justificada por un hecho unánimemente reconocido, tanto por los partidos parlamentarios como por los que se quedaron al margen: la economía española presentaba graves desequilibrios que debían ser corregidos con urgencia. Principalmente, la persistente elevación de los precios (inflación), el empeoramiento de las cuentas del Estado (déficit fiscal) y el desajuste exterior (déficit por cuenta corriente)[14]. También había una coincidencia significativa a la hora de apuntar en el diagnóstico de la situación: la gravedad de los desequilibrios obedecía a importantes problemas estructurales que arrastraba la economía y a la negligente política económica de los gobiernos franquistas desde que estalló la crisis económica internacional cuatro años antes. Por último, con más matices, también había una convicción generalizada acerca de que un clima agudo de conflictividad social y de alteraciones del orden público haría más difícil afrontar las soluciones económicas y obstaculizaría la construcción del sistema democrático. Enrique Fuentes Quintana, el vicepresidente económico del gobierno que lideró las negociaciones, solía decir que «o los demócratas acababan con la crisis económica, o la crisis acabará con la democracia».

Donde ya no había unanimidad era en la valoración de las consecuencias que tendrían las medidas que finalmente se pactaron; si bien los partidos que participaron en ese acuerdo pusieron todo su empeño en presentarlas como las únicas posibles, o al menos, las mejores. El acuerdo fue logrado en un tiempo récord, mediando apenas cuatro semanas desde que el gobierno entregó su borrador hasta que el 25 de octubre los partidos firmaron el documento final. Ninguno de los participantes presentó algún texto alternativo con propuestas marcadamente distintas, por lo que la cancha de juego fue la que estableció el gobierno de Suárez. Tampoco hubo interés en alentar algún tipo de debate público sobre el documento que se estaba negociando, de modo que el texto final se presentó como un hecho consumado. Su enunciado, aludiendo al saneamiento y la reforma, condensaba bien cuál era su contenido sustancial: primero estabilizar para después cambiar, concretándose tres categorías de medidas acordadas: las urgentes, las que se comprometían a reformas y las de índole político-institucional.

Salvo detalles menores, las medidas que se formulaban con precisión, sin posibilidad de equívocos o ambigüedades, eran las que componían la política económica de corto plazo con la que afrontar los tres desequilibrios: ajustar los salarios a la inflación prevista (no a la existente), devaluar la moneda, contener el gasto público y controlar el crédito bancario. Eran los instrumentos

característicos de las políticas estabilizadoras de los partidos conservadores para llevar a cabo ajustes de carácter monetario que provocaban una drástica contención de la demanda agregada.

La política de rentas en realidad sólo se refería a la contención de los salarios, ajustados a una previsión de inflación bastante inferior a la que ya se había producido, por lo que inevitablemente supondría una notoria pérdida del salario real y, por tanto, de la capacidad de compra de los asalariados. La devaluación de la peseta, unida a la caída del salario real, debía abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones, con lo que se reduciría el déficit externo. La contención del gasto público disminuiría la necesidad de emitir moneda y/o elevar la deuda del gobierno, siempre que la recesión provocada no redujese los ingresos. El control del crédito mediante fuertes subidas de los tipos de interés y otras medidas administrativas frenaría la demanda de dinero por parte de las empresas y las familias. Cuanto más contundente fuera la aplicación de esas medidas, como efectivamente lo fue, más probable sería que lograran su efecto estabilizador; pero también mayores serían los efectos contractivos sobre la demanda y, en consecuencia, sobre la producción y el empleo.

Todo estaba inventado. Esa política económica se sustentaba en una colección de medidas cuyo éxito en términos de ajuste monetarista implicaba perjuicios salariales y sociales que recaían en los trabajadores. La presencia de los partidos obreros en el acuerdo pretendía garantizar que la aplicación de esas medidas no generase conflictividad social, mientras que, por parte de esos partidos, la justificación de su presencia en el acuerdo residía en las contrapartidas recogidas en las otras dos categorías: las reformas a emprender y las concesiones institucionales. El problema estaba en que las características de esas contrapartidas eran muy distintas a las del paquete de medidas urgentes.

Unas reformas se enunciaban de manera genérica y otras incorporaban medidas cuya vaguedad sembraba las dudas acerca del modo y el momento en el que serían aplicadas. Habría una reforma fiscal para que los impuestos directos cobraran mayor importancia y, dentro de ellos, que el impuesto de la renta fuera general y progresivo. Se crearía un tribunal de cuentas para controlar el gasto público. Se caminaría hacia la gratuidad de la enseñanza y la mejora de todos los niveles del sistema educativo. Se revisaría la legislación sobre urbanismo, suelo y vivienda. Mejoraría la gestión y el control de la seguridad social. También las prestaciones sociales. Habría una nueva política agraria y de pesca. Se reformaría el sistema financiero. Habría una nueva política energética y un

estatuto de la empresa pública.

Todavía se podrían mencionar más enunciados que se incluían en esa parte de los pactos. Pasados los años, unas reformas se llevaron a cabo antes y mejor que otras, pero en todo caso la mayoría no eran propiamente contrapartidas que compensaran a los trabajadores de los costes que supuso la política estabilizadora, sino que eran exigencias imprescindibles para modernizar la economía. Otras reformas se llevaron a cabo con un inequívoco sesgo favorable hacia los grupos de poder económico; otras quedaron en papel mojado, como aquellas que comprometían a un mayor gasto del gobierno (inversiones, protección social) cuando las medidas de ajuste imponían mayores restricciones a ese gasto público. Sin contenidos precisos y sin plazos, ni siquiera se creó una comisión de seguimiento que se encargara de velar por su cumplimiento. El gobierno quedó con las manos libres para proceder según su conveniencia.

Por lo que respecta a las contrapartidas de índole institucional, se establecieron diversas medidas para que los sindicatos y las organizaciones empresariales participaran en la gestión de varios organismos públicos, a la vez que se garantizaba la presencia sindical en la negociación de los convenios laborales. Otros compromisos se referían a la libertad de prensa y la desaparición de la censura previa, la aprobación de los derechos de asociación política, reunión y expresión; también se reformaría el código penal para castigar la violación de esos derechos y otros delitos como la tortura, junto con el derecho a asistencia letrada para los detenidos y la despenalización del adulterio; terminaría el desmantelamiento de las estructuras fascistas que aún quedaban. Sin embargo, todas esas medidas eran premisas necesarias que debía incorporar un sistema político para ser democrático, y así quedaron después recogidas en la Constitución. No se trataba de contrapartidas específicas que compensaran a los trabajadores.

A pesar de ello, el soniquete de las «concesiones recíprocas» fue trasladado a la sociedad de forma monocorde por los partidos firmantes: UCD, PSOE[15], PCE, PSP, PNV, Minoría Catalana (futura CiU) y AP, si bien este último no lo hizo en la parte política. Tiempo después lo firmaron las organizaciones patronales y, tras algunas reticencias iniciales, los sindicatos UGT y CCOO. El PSOE mantuvo una actitud de cierta displicencia, tanto en la elaboración del acuerdo como tras su firma, dejando clara su disposición al consenso pero sin presentarse como promotor o protagonista. Lo contrario que el PCE, interesado en mostrarse como uno de los impulsores del acuerdo creyendo que así, al ser protagonista

activo de una cuestión tan decisiva como los pactos para enderezar el rumbo de la economía, patrocinaba mejor la viabilidad de su presencia en un gobierno de concentración. Llevado por su fervor consensual, el PCE presentó aquel acuerdo como un gran logro para los trabajadores, a la vez que un requisito imprescindible para consolidar la democracia.

Ese último aspecto admite una seria consideración, pues apunta a las hipotéticas consecuencias que, para la construcción del sistema político, hubiera acarreado el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos, con mayor incertidumbre y mayor conflictividad social. Sólo cabe conjeturar acerca de lo que no pasó, pero sin duda se trata de una cuestión importante que no se puede ignorar cuando se valora lo sucedido en aquellos años. Sin embargo, rayaba en la falacia la pretensión de que el acuerdo fuera ventajoso para los trabajadores. No lo era en su formulación escrita y menos aún lo fue en su realización práctica. Los costes sociolaborales fueron duros, y las reformas que aportaron contrapartidas fueron escasas y lentas. Para colmo, los efectos estabilizadores resultaron efímeros, pues al concluir el año de vigencia de los Pactos de la Moncloa, en 1979, en plena crisis internacional, reaparecieron los desequilibrios y el desempleo alcanzó dimensiones exageradas[16].

No obstante, presto a convertir la necesidad en virtud, el congreso del PCE celebrado en abril de 1978 aprobó una resolución según la cual aquel acuerdo económico podía favorecer la estrategia hacia el socialismo. Tremenda conclusión si se tiene en cuenta que, en sentido inverso, los Pactos de la Moncloa marcaron tres sendas posteriores que resultaron ciertamente demoledoras. Primera, durante años la negociación laboral discurrió de modo que los trabajadores continuaron perdiendo renta en la medida en que los aumentos salariales eran menores que la inflación. Segunda, los pactos formularon una interpretación convencional de la economía que siguió dominando las políticas económicas posteriores: el crecimiento quedaba sometido a la estabilización, y tanto la distribución de la renta como el empleo dependían unilateralmente de los beneficios logrados por las empresas[17]. Tercera, la capacidad de movilización y organización de los sindicatos quedó seriamente dañada a raíz de su defensa de los pactos, mientras que los pobres logros socioeconómicos fueron uno de los principales factores que influyeron en el desánimo y el desencanto político de los núcleos de trabajadores más combativos, incluyendo a muchos militantes de CCOO y PCE.

Desde la perspectiva actual, cabe reconocer con honestidad que en la encrucijada

de problemas presentes en aquel intervalo de finales de 1977 y 1978 existía un margen real bastante limitado para combinar las urgencias del ajuste con las reformas estructurales, las medidas de corto con las de medio plazo. Por consiguiente, no cabían salidas fuera de tono que desatendieran esas urgencias y que ignorasen las restricciones externas de una economía tan debilitada como lo estaba la española, ni que se dejase de considerar el momento político y sus consecuencias. Pero, al mismo tiempo y con similar honestidad, es necesario reconocer que las medidas aplicadas fueron desfavorables para los trabajadores, encauzaron una dinámica económica unilateral y contribuyeron al desfondamiento político de segmentos importantes de los movimientos sociales.

El segundo gran consenso se forjó en torno a la Constitución, siguiendo unos procedimientos que guardaron notables semejanzas con los que dieron lugar a los Pactos de la Moncloa. Un mes después de las elecciones de junio de 1977, una comisión comenzó a elaborar el proyecto constitucional, con el ruido de fondo de los bramidos que militares, eclesiásticos y políticos franquistas lanzaban contra los males del libertinaje democrático. A la vez, proseguía el desmantelamiento del viejo aparato fascista y, en octubre, el parlamento aprobó una ley de amnistía general que eximía de enjuiciamiento a cualquier antiguo responsable de la dictadura[18].

Con mayoría de miembros de la UCD[19], la comisión acordó que el texto no sería una breve recopilación de derechos en los que sustentar las bases del parlamentarismo democrático, sino que tendría una redacción amplia en la que se recogiera con detalle el conjunto de elementos que compondrían el nuevo sistema político democrático. Retomando el comienzo de las conversaciones de Suárez con la oposición, la primera prioridad de UCD fue dejar fuera de toda discusión la institucionalización de la monarquía, la inviolabilidad del rey, el papel del ejército como garante de la unidad del país, el carácter unitario del Estado de las autonomías y el reconocimiento explícito de la posición de la Iglesia católica en la sociedad española. El PSOE puso ciertos reparos formales a la monarquía y a la posición de la iglesia en el sistema educativo, pero prescindió de hacer una contrapropuesta que abriera la puerta a un posible plebiscito sobre el tipo de régimen político o la vigencia consecuente del laicismo en la vida social. En su lugar, PSOE y PCE, sin ningún tipo de alianza específica, pusieron el acento en la necesidad de despojar a la monarquía de poderes efectivos y de fortalecer el reconocimiento de los derechos democráticos y de ciertos derechos sociales.

Posteriormente, el texto y los votos particulares incorporados por cada ponente pasaron a ser debatidos por la comisión constitucional del parlamento. Se constató entonces cómo la UCD recurría al apoyo de AP cuando se trataba de limitar el reconocimiento de ciertos derechos y cómo PSOE, PCE y las minorías vasca y catalana lo hacían en sentido inverso. La mayoría de las divergencias que seguían pendientes fueron resueltas de forma negociada entre el vicepresidente político del gobierno, Fernando Abril, y el vicesecretario general socialista, Alfonso Guerra. Optando por redactar de forma deliberadamente ambigua ciertos artículos y celosos siempre de que los temas no transcendieran al debate público. El pleno del Congreso aprobó el texto de la Constitución en julio de 1978, con sólo 6 votos en contra y 14 abstenciones[20], y, tras su paso por el Senado, quedó confeccionado el texto definitivo que se sometió a referéndum de la población en el mes de diciembre.

La campaña del referéndum fue casi monocorde debido a la aplastante mayoría política favorable, a la que se sumaron el PTE y la ORT, los sindicatos UGT y CCOO, y multitud de instituciones más. La discordancia procedía de la extrema derecha, una parte de los partidos radicales de izquierda y sectores nacionalistas, sobre todo vascos. Sin debate social que pudiera influir en su contenido, el texto plebiscitado no dejaba lugar a la duda: el sistema democrático se construiría con los mimbres recogidos en él; en caso contrario, se reabriría la amenaza de volver al pasado. Así planteado, el 88% de los votantes dio su conformidad, siendo significativo que la abstención se elevase al 33% del censo, once puntos más que en las elecciones, porcentaje que se acercó al 60% en Guipúzcoa y Vizcaya.

Como ocurrió con los Pactos de la Moncloa, la aprobación de la Constitución dio paso a dos lecturas contrarias que fueron la base de sendas leyendas sobre el proceso de la transición: una ensalzaba el consenso alcanzado hasta conferirle atributos ideales, mientras que la otra lo rechazaba y consideraba que daba continuidad al régimen de la dictadura bajo un simulacro de democracia. El mito construido por la primera lectura componía un relato acerca de un modelo ejemplar de transición consensuada que evitó las tensiones rupturistas y las ambiciones partidistas, haciendo que prevaleciera el objetivo común de construir una democracia parlamentaria. Líderes moderados, inteligentes y responsables con aquel momento histórico habían hecho realidad esa transición con generosidad, sin riesgos ni aventuras, sorteando los obstáculos del terrorismo, las presiones involucionistas y la crisis económica. El mito construido por la segunda lectura demonizaba el proceso y lo tachaba de un pacto para instalar una nueva versión del turnismo, que había vaciado de contenido la democracia y

devino en una posdictadura bajo un régimen monárquico en el que las aspiraciones democráticas quedaron traicionadas.

Colocados ante aquella realidad y con la perspectiva que ofrece la posterior dinámica política, sólo una mezcla de sobrecarga ideológica y de estulticia supina podría justificar cualquiera de esas lecturas. La evidencia de los hechos no permite que se ponga en duda que UCD impuso premisas sine qua non para que progresara el texto constitucional; es opinable si estaban o no justificadas, pero no que existieran esas premisas. También fue evidente que toda la confección del texto se sustrajo al conocimiento público y que, al someter el texto íntegro a plebiscito, se evitó que tanto las premisas como otros elementos polémicos pudieran ser cuestionados. Años más tarde así lo reconocieron dirigentes ucedistas y socialistas. Rafael Arias-Salgado, ministro de varios gobiernos de Suárez, señaló que «el consenso fue una manera de imponer límites y silencios al debate nacional»[21]. José María Maravall, teórico y ministro socialista, escribió que «el monopolio de la política por una elite partidista y la desmovilización general fueron requisitos para construir un orden democrático nuevo»[22].

Por tanto, la Constitución incorporó sesgos no necesariamente consensuados, sino impuestos por unos y acatados por otros, a la vez que sí se consensuaron el silencio, el monopolio de la política y la desmovilización social. Cuestiones que posteriormente serían relevantes y pasarían factura en la vida política, pero que no contradicen la constatación de que el sistema político cimentado por la Constitución se basara inequívocamente en los atributos de la democracia política: elecciones libres, libertades cívicas y parlamento soberano. Es decir, la antítesis de cualquier dictadura, y en particular de la franquista. Nadie mejor que un recio ejemplar de la estirpe fascista como Raimundo Fernández-Cuesta para dar cuenta de lo sucedido: «Después de Franco, han venido las instituciones contrarias a él y vencidas por él».

Ciertamente, aquella Constitución no era la única posible sino la que resultó de una determinada correlación de fuerzas, quedando al margen importantes aspiraciones sociales y democráticas de los movimientos que se habían opuesto al franquismo. Sin que sea posible calibrar la magnitud de los resultados que con otra correlación se hubieran podido conseguir. En ese sentido, resulta equívoco confundir el potencial de exigencia democrática de aquella sociedad española con las aspiraciones de los núcleos más politizados que habían ido cobrando fuerza en las zonas industriales y urbanas. La evidencia de que Franco murió en

la cama era un hecho que no por lacerante dejaba de testimoniar la certeza de que la fuerza efectiva de esos movimientos era limitada con respecto a la amplitud de las franjas sociales que permanecían pasivas o eran conservadoras.

A su vez, tampoco cabe obviar el repertorio nada desdeñable de problemas políticos que acarrearon ciertos contenidos del texto constitucional y los procedimientos con los que fue elaborado. Entre los más relevantes se pueden mencionar cinco extensiones desdichadas del «monopolio de la política» que apuntaba Maravall. Primera, el exceso de intromisión de los partidos mayoritarios en el nombramiento y el funcionamiento los órganos del Estado. Segunda, la rigidez oligárquica de la vida interna de los partidos, con todo el poder efectivo en manos de las cúpulas dirigentes. Tercera, el obsesivo recurso a la elaboración de leyes y normas administrativas para reformar muchos ámbitos que requieren la aparición de nuevas mentalidades, comportamientos y métodos. Cuarta, la eliminación de espacios políticos para desarrollar la participación ciudadana en los asuntos públicos y el desdén por la incorporación a las decisiones sobre esos asuntos a personas especializadas pero que no fueran militantes o afines a los respectivos partidos. Quinta, el déficit de aprendizaje ciudadano en el ejercicio práctico de los derechos y deberes democráticos ocasionado por la preeminencia a los estímulos a favor de una actitud pasiva.

En otro orden, tres aspectos más se han derivado de ciertos contenidos constitucionales. Primero, los privilegios jurídicos que retuvo la monarquía. Segundo, el ventajismo de la jerarquía católica en el orden jurídico, económico y educativo. Tercero, la ambigua vertebración de la estructura territorial del Estado, dejando demasiadas imprecisiones acerca del significado de las tres nacionalidades reconocidas explícitamente, así como de los derechos y responsabilidades que correspondían a las respectivas comunidades autónomas. Finalmente, no es menos importante un lastre que se fue reproduciendo desde los descompensados acuerdos firmados en los Pactos de la Moncloa: el escaso aprendizaje de los poderes económicos para practicar un consenso en el que existan concesiones recíprocas. Desde el inicio de la transición, esos poderes se han acostumbrado a disponer de una correlación de fuerzas favorable, siempre amparada por las políticas económicas de los sucesivos gobiernos.

Replanteamientos de los partidos obreros

La aprobación de la Constitución hizo necesaria la convocatoria de las segundas elecciones democráticas, en marzo de 1979. Previamente, mientras se establecían los dos grandes consensos, los partidos obreros experimentaron diversos cambios importantes que afectaron a esa nueva concurrencia electoral y a la escena política que se configuró a continuación.

El Partido Socialista orientó toda su actividad política y orgánica hacia un objetivo que las elecciones de junio de 1977 habían desvelado factible: convertirse en la alternativa al gobierno de la UCD. Si su refundación en el congreso de Suresnes había seguido el ejemplo de los socialistas franceses, ahora, para alcanzar ese objetivo, las referencias serían una combinación de las enseñanzas de los socialistas suecos para enfocar su acción política y de los alemanes para efectuar su reconversión ideológica y organizativa. De un lado, como el SAP sueco, para convertirse en alternativa de gobierno tenía que consolidar su hegemonía en el electorado obrero y en otras capas sociales decantadas hacia la izquierda y el centro-izquierda, alcanzando una mayoría parlamentaria con la que gobernar sin interferencias ni rivalidad de los comunistas. Esa era la razón por la que su participación en los consensos siempre estuvo acompañada de ciertos signos de distanciamiento con respecto al gobierno de UCD, a la vez que, en el parlamento y en los medios de comunicación, utilizaba un lenguaje duro de oposición contra el gobierno de Suárez.

De otro lado, para convertirse en alternativa de gobierno necesitaba desprenderse del revestimiento izquierdista con el que había reaparecido en la vida política al final del franquismo. El futuro electoral requería el abandono de la fraseología sobre la lucha de clases, la crítica frontal al capitalismo, la revolución socialista, la crítica a la socialdemocracia europea como gestora del capitalismo, el reclamo como partido de la clase obrera y demás latiguillos de los que se había adornado. Tenía que presentarse como un partido que se dirigía a una amplia base social de carácter trasversal, provisto de un ideario ecléctico, alimentado por frases insustanciales sobre la igualdad, la justicia, la democracia y la modernización; sin olvidar ciertos recordatorios anticomunistas. Esa mutación era la cuestión de fondo del debate que los dirigentes socialistas provocaron en el congreso celebrado en mayo de 1978 y que adoptó la forma de una disputa acerca de si el partido debía seguir reclamándose del marxismo como hasta entonces[23]. Aunque lo pareciera, no se trataba de una decisión nominalista y, de hecho, los

defensores de la referencia al marxismo tampoco contaban con un discurso acorde con las señas de identidad revolucionarias. Como en el caso del SPD alemán veinte años atrás, en su congreso de Bad Godesberg, la sustancia del debate era cómo posicionar la acción política del PSOE en un camino que le permitiera llegar al gobierno.

Al mismo tiempo, aquel congreso de mayo de 1978, inconcluso en lo que concernía al debate político-ideológico, adoptó varios acuerdos de índole orgánica que serían cruciales para esa configuración del PSOE como alternativa de gobierno. Los dirigentes socialistas necesitaban garantizar su control sobre un partido resurgido sin apenas militantes y que estaba experimentando un rápido crecimiento, que previsiblemente se aceleraría conforme fuera acercándose al umbral del poder político. De hecho, entre 1976 y 1978 el número de afiliados pasó de 10.000 a 100.000, a la vez que se diversificaban su procedencia social y sus referencias ideológicas.

Los estatutos fueron reformados para evitar que esa diversidad perjudicase el carácter uniforme que debía tener la línea política marcada por los dirigentes del partido. Se eliminó el derecho de las agrupaciones de militantes a elegir directamente a los delegados que participaban en los congresos, que era donde se decidían los acuerdos políticos y la composición de los órganos de dirección en los respectivos niveles territoriales. En su lugar, los delegados a los congresos serían elegidos mediante candidaturas elaboradas desde los órganos directivos territoriales, y cada delegación llevaría un único mandato para todos los miembros que la componían. De ese modo, se impedía que el voto fuera personal, de cada delegado, al tiempo que el cómputo de votos de cada delegación se ponderaba según su peso relativo en el ámbito territorial correspondiente, fuese comarcal, provincial, regional o nacional.

Igualmente, los órganos directivos dejarían de formarse mediante un sistema proporcional para acoger las distintas sensibilidades que representaban las candidaturas, y lo harían por un sistema mayoritario, con los miembros de la propuesta ganadora. Tampoco se permitirían la existencia de tendencias, ni reuniones paralelas fuera de los órganos regulados. La participación en determinados actos, manifestaciones y otras movilizaciones requeriría de la autorización de los órganos directivos, pudiendo estos imponer sanciones a quienes infringiesen las normas establecidas. Las listas electorales serían acordadas por los órganos directivos. En definitiva, un mecanismo reglamentado para garantizar el control jerárquico, diseñado para disciplinar las posiciones de

los militantes y de los organismos inferiores por parte de los superiores. En el congreso extraordinario de septiembre, terminaron de atarse los últimos cabos de ese mecanismo de control con normas relativas a los militantes liberados, los cargos públicos y la admisión de nuevos militantes[24].

El Partido Comunista tenía por delante un camino más complicado después de los débiles resultados que obtuvo en junio de 1977. Sin embargo, a diferencia de las iniciativas adoptadas por el PSOE, los dirigentes comunistas «no movieron ficha» ni en el terreno de la acción política ni en el orgánico. Hicieron una lectura de los resultados electorales como si hubieran sido un mero ensayo que diera lugar a un escenario provisional en el que la debilidad del PCE, sobre todo con respecto al PSOE, se explicaba por motivos circunstanciales. Según esa lectura, los resultados de junio de 1977 se debían a la pervivencia de ciertos lastres que habían atizado los miedos anticomunistas, al escaso tiempo transcurrido desde la legalización, la rebaja de la edad de voto a los 21 años –recibiendo ese derecho muchos jóvenes sin conocimientos políticos– y un sistema electoral que desfiguraba la relación entre votos y escaños. Por tanto, el transcurso del tiempo y la actuación del PCE, sobre todo en los dos grandes consensos sobre los Pactos de la Moncloa y la Constitución, desvanecerían la influencia de esos obstáculos y le colocarían en el lugar prominente que le correspondía. Las siguientes elecciones le brindarían la posibilidad de ejercer una función decisiva en la vida política.

Consecuentemente, el PCE debía mantener su línea política a favor de un gobierno de concentración democrática, la moderación ideológica y la disciplina interna. El congreso celebrado en abril de 1978 ratificó ese «vamos por el buen camino», con ciertos aires triunfalistas que aludían a los avances logrados, el coprotagonismo en los dos grandes consensos y la fluida interlocución con la UCD. Carrillo propuso la eliminación del leninismo como referencia identificativa del PCE, lo cual se aprobó sin que llegasen a aflorar de forma consistente las voces internas discrepantes, cuya existencia podía detectarse bajo distintos síntomas. Había quejas por el abandono de las señas históricas y la asunción de simbologías ajenas (monarquía, bandera). También por el exceso de moderación política, la pérdida de iniciativa y la inacción en los movimientos sociales. O bien por el escaso bagaje de contrapartidas efectivas que había proporcionado la moderación y participación en los consensos. Otras quejas ponían el acento en la ausencia de debates en profundidad, una carencia que podía estar justificada durante los tiempos de la clandestinidad pero no en los que regía la democracia.

Ninguno de esos brotes de malestar entró en el debate congresual. En cambio, sí se acordó un cambio organizativo que tendría implicaciones de largo alcance. Las agrupaciones sectoriales, que habían sido la base celular con la que los militantes comunistas habían potenciado su labor en los movimientos sociales, fueron sustituidas por agrupaciones territoriales en las que confluían militantes de distintas profesiones, lugares de trabajo y tipo de actividades. El cambio obedecía a la lógica electoral por considerar que era la estructura organizativa más efectiva para preparar las campañas, desplegadas a escala territorial en correspondencia con los espacios en los que se encuadraban los votantes. Una estructura que nada tenía que ver con lo que requería la acción política orientada al impulso de los movimientos sociales. Esa decisión no fue del agrado de muchos militantes, pero en aquel momento no tuvo réplicas significativas. Todas ellas sobrevendrían tiempo después, tras los resultados cosechados en las segundas elecciones.

Finalmente, los partidos comunistas radicales coincidieron en valorar el cúmulo de adversidades presentes después de junio de 1977, aunque las ponderasen de diferente manera. Todos excluyeron cualquier veleidad aventurera a pesar de que mantenían discursos revolucionarios. Seguían considerando que el potencial de transformación social se veía retardado por la actuación del PCE, pero también constataron las limitaciones para impulsar el desarrollo de movimientos a contracorriente. Esa constatación provocó una decepción profunda, sin que de ella se derivasen efectos inmediatos de mayor transcendencia, que sí llegaron después de las segundas elecciones.

Entre los partidos se produjeron dos reacciones dispares hacia esas elecciones. Los dirigentes de PTE y ORT pusieron el acento en la posibilidad de superar algunos de los factores que habían estado presentes en junio de 1977, por lo que perseverando en la misma línea política, intensificando la actividad en los movimientos sociales y preparando mejor las elecciones, podrían alcanzar una modesta representación parlamentaria. Como así lo creían ambos, su opción fue continuar actuando por separado y rivalizando por el mismo espacio electoral. Por su parte, los dirigentes de MC, LCR y otros grupos mostraron un mayor desapego hacia las elecciones y concentraron su labor en la denuncia propagandística de los problemas económicos y sociales, y las insuficiencias del sistema democrático, además de participar en el desarrollo de movimientos feministas, pacifistas y otros de reciente emergencia.

Interludio de elecciones y comienzo de las despedidas

Los resultados de las elecciones de marzo de 1979 sancionaron un escenario que en primera instancia era relativamente similar, pero albergaba efectos retardados que se desvelarían en los siguientes años. La UCD retuvo su dominio político, volviendo a ser el partido más favorecido por el sistema electoral, pues manteniendo en torno al 35% de los votos logró el 48% de los escaños, quedando al borde de la mayoría parlamentaria. El PSOE se consolidó como única alternativa política; pero teniendo en cuenta que había absorbido al PSP sus resultados fueron levemente peores que los cosechados por la suma de ambos en las primeras elecciones. El PCE siguió quedando relegado, pese a tener una pequeña mejora, obligado a considerar que su relevancia en la vida política sería secundaria[25]. Los partidos a su izquierda volvieron a cosechar un modesto número de votos que les condenaba a permanecer fuera del parlamento[26].

Al mes siguiente, las elecciones municipales mostraron un mapa político con tres diferencias notables. El dominio de UCD era inferior, con menos del 31% de los votos, y se concentraba en los municipios rurales y las ciudades de regiones con menor desarrollo. La posición del PSOE también decaía ligeramente en votos (28%), pero aliado con el PCE pasaba a controlar la mayoría de las ciudades más pobladas y muchos otros municipios importantes, salvo en el País Vasco, donde la primacía la ostentaba el PNV. La fuerza del PCE era algo mayor (13%) y la alianza con los socialistas le proporcionaba presencia en los ayuntamientos de muchas ciudades importantes. Los partidos comunistas a la izquierda no mejoraban sus resultados en votos, pero sí conseguían un pequeño número de concejales y algunos alcaldes.

Las elecciones autonómicas que se celebraron en Cataluña y País Vasco en 1980 añadieron un nuevo perfil al escenario político merced al predominio de los respectivos partidos nacionalistas, siendo el PSOE la siguiente fuerza y quedando UCD relegada a posiciones secundarias que erosionaban su papel como fuerza política a escala estatal. En Cataluña, la alianza Convergència i Unió (CiU), dirigida por Jordi Pujol y claramente alineada hacia el centro-derecha, ni siquiera había alcanzado el 20% de votos en las elecciones generales de 1979, pero en las autonómicas fue la alternativa más votada con el 28%. Pudo formar gobierno gracias al apoyo de UCD que, con el 10%, quedó como cuarta

fuerza cercana a la quinta (ERC). El partido socialista (PSC) redujo su casi 30% de las generales al 22% de voto autonómico, quedando cerca del 18% de los comunistas (PSUC), que tenían en Cataluña su mayor bastión electoral en todo el país. Sin coalición socialista-comunista, CiU tomó las riendas de la Generalitat y las retendría durante más de veinte años. En el País Vasco, el triunfo nacionalista fue más contundente no sólo por el 38% alcanzado por el PNV, sino por el 17% logrado por Herri Batasuna, superando el 14% del PSOE. En adelante, el PSOE alternaría con HB en el segundo puesto, llegando a formar parte de algunos de los gobiernos dirigidos por el PNV, cuya hegemonía se prolongó también durante más de dos décadas.

Tras ese periodo de convocatorias electorales sólo el PSOE permaneció sin alteraciones sustanciales. Su acción política se mantuvo centrada en tres objetivos. Primero, intensificar la labor de desgaste hacia UCD. Segundo, gestionar la amplia parcela de dominio político que había logrado en el ámbito municipal. Tercero, organizar la unidad y la disciplina interna una vez que decenas de miles de sus militantes se convertían en concejales, alcaldes, parlamentarios autonómicos, parlamentarios estatales y demás cargos que dirigían o participaban en instituciones públicas. El congreso celebrado en 1981 supuso el abandono definitivo de cualquier tipo de alusión a lo que José María Maravall, considerado su principal teórico de entonces, denominó «sueños milenaristas y telarañas seudorrevolucionarias», manteniendo únicamente una suave mención general a que las reformas que proponían estaban orientadas hacia un socialismo democrático. A esas alturas, era más ventajoso presentar la imagen de un PSOE reformista guiado por propósitos modernizadores, y provisto de ética y honestidad con la que disponerse a gobernar. El tándem González-Guerra encabezaba una renovada cantera de dirigentes y cuadros que se preparaba para ejercer el poder estatal. Sólo un tercio de los asistentes al congreso había participado en el que se celebró dos años antes.

Las turbulencias afectaron a los demás partidos. Los resultados de 1979 abocaron al PCE a un callejón de difícil salida que destapó las contradicciones alojadas en su seno desde el inicio de la transición. El techo electoral desmentía que la estrategia «a la italiana» hubiera sido una buena elección, lo que apuntaba al cuestionamiento de los tres elementos centrales de la línea seguida: relativa inacción en los movimientos sociales, búsqueda de protagonismo en los grandes consensos y moderación destinada a «tocar poder» mediante el ascenso electoral. Al cabo de tres años, se constataba un balance ciertamente modesto por la escasez de contrapartidas políticas obtenidas y la posición secundaria a la que el

PCE se veía relegado en la escena política. Sin embargo, en lugar de un debate ordenado sobre las posibles causas que podrían explicar ese balance, el malestar afloró por vías nada constructivas.

Primero detonó en el País Vasco, donde una corriente mayoritaria se inclinó a considerar que la falta de sensibilidad hacia los temas nacionales vascos había redundado en una penuria de votos; de modo que, en 1980, se produjo la fuga de buena parte de dirigentes y militantes hacia Euskadiko Ezkerra. Al año siguiente, la divergencia saltó en Cataluña en torno a la cuestión del abandono del leninismo, considerada por muchos como la expresión del abandono de los principios programáticos que históricamente habían fundamentado la estrategia y la acción política del PSUC. El partido se fracturó en varias tendencias y hubo varias escisiones, siendo numerosa la que llevaron a cabo los militantes que se mantenían afines a los planteamientos prosoviéticos. Finalmente, la crisis cobró alcance estatal por otra costura abierta desde hacía años: la estrechez de los cauces orgánicos, la primacía unilateral de la disciplina y el centralismo, la ausencia de democracia interna.

El flujo de militantes que abandonaba el partido (cayendo la afiliación desde 200.000 en 1977 a 130.000 en 1980) y la profunda desilusión política de muchos otros hicieron que la crítica también anidase entre algunos de los altos dirigentes. Estos exigieron responsabilidades a Santiago Carrillo y otros máximos responsables de las decisiones adoptadas durante los últimos años. La reacción de los interpelados no se separó un ápice de lo que había sido su respuesta tradicional: acusar a los detractores de intenciones ocultas y expulsarles del partido. La salida de esos cuadros fue secundada por miles más, que diezmaron la militancia y sentenciaron la deriva posterior del PCE[27].

La despedida de la escena política resultó más elocuente en el caso de los partidos comunistas radicales. La confirmación del modesto techo de sus posibilidades electorales instó a los dirigentes del PTE y de la ORT a tomar una iniciativa que sintonizaba con la aspiración latente en una parte de sus militantes desde hacía años: unificarse. Con la salvedad de que esa unificación tuvo lugar en unas condiciones políticas netamente adversas y se efectuó de la peor manera posible, quizá porque a esas alturas se trataba de un reto inviable. El primer paso se saldó con amargura, ya que, a pesar de ir en coalición a las elecciones municipales, los resultados de ambos fueron peores que los que habían logrado un mes antes en las elecciones legislativas. El momento era desfavorable porque las respectivas evoluciones de los dos partidos habían conformado culturas

políticas divergentes en lo que concernía al modo de considerar los principios doctrinarios, los fundamentos de su discurso, la valoración de la situación política y el acercamiento a los nuevos movimientos sociales. A la hora de establecer las bases de la unificación, ninguna de las dos partes estuvo dispuesta a ceder en sus planteamientos ni en el método para establecer la composición de los órganos del nuevo partido.

Llegado el momento de la fusión, en el verano de 1979, se produjo una unificación meramente formal, pues continuaron las rivalidades y, de hecho, ambas formaciones mantuvieron funcionamientos paralelos, con sus direcciones, cuadros intermedios y militantes. El espejismo duró apenas medio año y dio paso a la ruptura de lo que ciertamente nunca se había unido. Lo siguiente fue la diáspora. Muchos militantes abandonaron la acción política, otros se acercaron al PSOE o al PCE, y otros se integraron en movimientos sindicales, ecologistas, pacifistas y feministas. En esos movimientos, o dedicados a la labor editorial de periódicos y revistas, teóricas y de divulgación, se encontraba también la militancia de MC, LCR y demás partidos supervivientes del naufragio que la transición supuso para las formaciones con discursos revolucionarios.

Así fue como se abrió la puerta por la que se fueron despidiendo de la acción política un cúmulo de pequeños partidos que, en conjunto, pudieron llegar a contar con 20.000-25.000 militantes. En su mayoría eran bastante jóvenes, pero muy curtidos en el activismo radical a través del movimiento obrero, estudiantil y vecinal, o entre intelectuales y profesionales. Contando con un escaso número de personas veteranas que aportaran buena formación teórica y experiencia política, esos partidos se arroparon con los dogmas doctrinarios que proporcionaban las fuentes marxistas, leninistas, trotskistas o maoístas que cada cual tomó como referentes. Sus principales virtudes se habían forjado en la lucha contra la dictadura, combinando una crédula ingenuidad, un máximo voluntarismo y mucha valentía. El periodo de la transición desveló que esos ingredientes no servían para consolidar un partido –menos aún varios en competencia– que desempeñara un papel relevante en la escena política por su capacidad para impulsar la transformación social[28].

PROLONGADO DOMINIO DEL PSOE: AUGE Y DECADENCIA

Las convulsiones de UCD, siendo el partido gobernante, terminaron de asfaltar el camino expedito del PSOE hacia el poder político. La buena noticia que recibió Suárez con la segunda victoria electoral de su partido le duró poco, pues pronto se agolparon las adversidades que le convirtieron en el blanco favorito de un concurso de tiro en el que participaban los propios dirigentes de UCD y personajes vinculados a la monarquía. El estallido de una crisis internacional en 1979 hacía que, en España, los efectos de esa recesión se sumaran a los problemas que seguían sin ser resueltos.

La labor de desgaste del PSOE se hizo más intensa, dando lugar a episodios parlamentarios de gran crudeza. Las victorias de los partidos nacionalistas elevaban las demandas autonomistas en los estatutos que se estaban elaborando. Las fuerzas más reaccionarias entendían que se estaban agotando sus posibilidades de dar marcha atrás hacia los tiempos oscuros, por lo que se recrudecían las voces ultramontanas y se sucedían los ecos conspirativos. El rey se mostraba menos dispuesto a mantenerse en el papel políticamente pasivo que le asignaba la Constitución. El desvarío de ETA elevaba la intensidad de sus acciones terroristas. En suma, demasiadas tensiones para que la artificial unidad de personajes y sensibilidades cobijadas en UCD no alentase aspiraciones fraccionales. Cada cual deseaba situarse lo mejor posible para el momento «después de Suárez». Las fisuras se convirtieron en fracturas, y las presiones sobre Suárez, en brasas ardientes.

El agónico recorrido final de la UCD a lo largo de 1981-1982 estuvo marcado por tres acontecimientos principales: la dimisión de Suárez, el entrecruzamiento de golpes militares fracasados que confluyeron en el sainete que el 23-F protagonizó el trío Tejero-Armada-Milans, y el anodino gobierno de Calvo-Sotelo. Así quedó cerrado el proceso de transición, no sin antes dejar cuatro últimas huellas importantes.

Primera, el estado inerme de la mayoría de la sociedad. A pesar de las lisonjas lanzadas por los políticos hacia la responsabilidad y la madurez de la población española, lo cierto es que durante el 23-F, en un clímax de máxima incertidumbre sobre el futuro del sistema democrático, no hubo ningún tipo de reacción cívica de carácter colectivo por parte de los partidos, movimientos sociales u otras instancias, excepción hecha de la rápida apuesta constitucional del diario El País. La masiva manifestación posterior tuvo la valía de ser la más

numerosa habida hasta entonces, pero no deshizo la flagrante evidencia de que la sociedad carecía de resortes con los que acrecentar y hacer valer la conciencia democrática.

Segunda, en ese contexto surgió otra de las leyendas del periodo de la transición acerca de la actuación del rey a favor de la democracia, tratando de convertirle en el símbolo que pudiera compensar la debilidad institucional y ciudadana que había puesto al descubierto el intento golpista. Ciertamente, la reacción última del monarca fue determinante para que fracasaran las distintas variantes del golpe, pero nada dice de sus andanzas en los meses previos, ni de sus más que probables dudas durante las largas primeras horas del golpe.

Tercera, el modo de resolver la rebelión militar volvió a reincidir en la generosidad con la que empezó la transición en su comportamiento con los delitos del bando fascista. Evitando una intervención judicial que depurase responsabilidades penales, en la trastienda política se acordó que la mayoría de los golpistas quedaban eximidos de cualquier acusación, de manera que sólo habría imputaciones de delito para los altos mandos que habían participado. De hecho, quien firmó el llamado «pacto del capó» por el lado constitucional fue el general Armada, es decir, uno de los partícipes del golpe, primer síntoma que anunciaba la levedad de las condenas y la brevedad de las estancias en la cárcel.

Cuarta, el asustadizo gobierno que siguió al golpe, encabezado por Leopoldo Calvo-Sotelo, confirmó con creces todos los temores que se podían esperar: dureza social de las medidas económicas, congelación de medidas encaminadas a consolidar el sistema democrático, condescendencia política con los sectores derechistas e ingreso en la OTAN contra la opinión de las demás fuerzas políticas y de la mayor parte de la opinión pública.

Apabullantes victorias electorales

El desguace de UCD alfombró el recorrido del PSOE hacia la contundente victoria electoral en octubre de 1982. Con un mínimo histórico de abstención (20%), los socialistas lograron más de diez millones de votos, el 48%, que, con la ventaja del sistema de reparto, les otorgó el 57% de los escaños, 202

diputados. Ganaron en 44 de las 52 circunscripciones provinciales y el análisis posterior reveló que habían arrasado entre los votantes de centro y de izquierda moderada, pero también que habían sido los más votados entre los votantes de derechas y entre los situados a su izquierda.

Una gran noticia electoral, ya que por primera vez en su historia los socialistas gobernarían en solitario. Los demás partidos quedaban bastante lejos: Alianza Popular, con 107 diputados, tenía casi cien menos que el PSOE, UCD obtenía sólo 11 y el PCE 4, menos incluso que los nacionalistas vascos y catalanes[29]. La vía italiana concebida por los líderes comunistas al inicio de la transición había resultado una alternativa imposible y desembocó en una debacle. La vía sueca de los socialistas hacia el gobierno en solitario había conseguido un éxito electoral, que se prolongaría durante casi catorce años. Quedaba por ver si el acierto electoral se convertía en tino político según cuales fueran sus realizaciones prácticas.

Las dificultades del gobierno formado a finales de 1982 por Felipe González comenzaban por lo que el PSOE había escrito en su programa electoral y había comprometido durante la campaña, con dos señuelos estelares: crear 800.000 puestos de trabajo netos y realizar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN. De hecho, existían diferencias apreciables entre las características políticas de los dirigentes que habían preparado el programa y quienes después fueron nombrados para gobernar. Dejando de lado las inevitables exageraciones que conlleva la elaboración de cualquier programa electoral, navegando entre el exceso de enunciados generales y el riesgo de detallar demasiadas medidas sobre aspectos que después escaparán a su control, lo cierto es que el programa presentado por el PSOE en 1982 fue pródigo a la hora de reconocer las notables dificultades que existían para la puesta en marcha de sus propuestas.

Estas propuestas se condensaban en ocho temas principales. Primero, aplicar una política económica expansiva, con el pleno empleo como objetivo prioritario y motor del crecimiento. Segundo, otorgar gran protagonismo al Estado, a través de una planificación democrática y concertada, de modo que las empresas y el sector público colaboraran y compartieran responsabilidades, tanto para llevar a cabo las inevitables reestructuraciones pendientes, como para impulsar nuevos sectores en los que sustentar la modernización de la estructura productiva. Tercero, establecer un marco de relaciones laborales que fuera democrático, facilitara el consenso y garantizara la participación de los sindicatos en las decisiones económicas fundamentales que interesaban a los trabajadores. Cuarto,

crear un sistema de protección social en el que cimentar un estado de bienestar hasta entonces muy precario. Quinto, extender los derechos y libertades cívicas a los ámbitos sociales en los que todavía no estaban reconocidos. Sexto, consolidar las instituciones democráticas, tanto las nuevas como las remodeladas a partir de otras ya existentes. Séptimo, desarrollar el marco autonómico como parte fundamental de la construcción democrática del Estado. Octavo, integrar a España en el concierto internacional de países democráticos, ingresar en la Comunidad Económica Europea y replantear la presencia en la OTAN[30].

Una primera cuestión a solventar tenía que ver con que González nombró como responsables de la economía a dos ministros, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, cuyos planteamientos estaban bastante alejados de las tres primeras propuestas. Y todavía se distanciaron más cuando el gobierno de unidad de la izquierda que se había formado en Francia comenzó a dar marcha atrás en su política expansiva, según se ha expuesto en el capítulo VII. De hecho, la política económica dirigida por Boyer y la gestión del sector industrial a cargo de Solchaga fueron radicalmente opuestas a las propuestas que figuraban en el programa electoral.

La política económica consistió en un plan de ajuste monetario muy similar al iniciado por los Pactos de la Moncloa y con los mismos objetivos centrales: prioridad unilateral para la estabilidad monetaria (control de la inflación) y el crecimiento de los beneficios empresariales como condiciones sine qua non para que aumentase la inversión y el empleo. Las principales medidas eran la contención de los salarios y del gasto público, la devaluación de la moneda y la restricción del crédito. La misma política contractiva que aplicaban los gobiernos más conservadores y a la que se fueron rindiendo los gobiernos socialistas. De ahí que acuñaran como justificación que era la «única posible», por lo que las diferencias con los conservadores se desplazaban a lo que pudieran hacer a través de ciertas políticas sociales, según aparece más adelante.

En el olvido quedaban las propuestas relativas a impulsar el crecimiento y el empleo, la planificación concertada, la responsabilidad compartida empresas-Estado para desarrollar nuevas actividades productivas y la participación de las organizaciones sindicales en las empresas sobre los temas claves que incumbían a los trabajadores. El empleo no era una prioridad, sino que fue la mayor víctima de la política económica supeditada al ajuste monetario. La promesa de los 800.000 empleos netos derivó en una cruel realidad, ya que la cifra de empleos netos destruidos fue incluso mayor.

Una parte considerable de tal fiasco era atribuible a lo que se calificó con el ambiguo término de «reconversión industrial», conducida con mano de hierro por Solchaga. Afrontar una política industrial no era precisamente una tarea sencilla si se tiene en cuenta que los problemas de sectores como la construcción naval, la siderurgia y la minería se habían agravado durante una década de pasividad por parte de los gobiernos franquistas y ucedistas. Al cabo de ese tiempo, a los excesos de producción con respecto a la demanda interna y a las posibilidades de exportación se unían las dificultades financieras que habían acumulado las grandes empresas, públicas y privadas, considerando además que esas grandes producciones daban vida a comarcas enteras de Asturias, Vizcaya, Cádiz, Cartagena, Ferrol y otras, con numerosos efectos inducidos hacia otros sectores productivos y otras regiones.

Por tanto, resultaba evidente la dificultad de partida que presentaban los ajustes de capacidades productivas y empleos, así como los problemas tecnológicos y financieros de los sectores en crisis[31]. No obstante, la gravedad de los problemas tomó una dimensión muy superior por la influencia de tres factores cuya responsabilidad cabe atribuir al gobierno y a su ministro responsable. Primero, la decisión de abordar la reestructuración al modo thatcherista que alentaba la OCDE, es decir, de golpe y sin negociar con los sindicatos. Segundo, la decisión de responder a las inevitables protestas de los trabajadores del peor modo posible, con duras represalias laborales y un olímpico desprecio hacia sus demandas y sus representantes. Tercero, la carencia de propuestas constructivas por parte del gobierno para impulsar industrias con mayor desarrollo tecnológico. No fueron pocas las veces en las que el ministro y otros dirigentes socialistas dieron muestras de su interés por imponer castigos ejemplares con los que eliminar la oposición de los trabajadores y prescindir de la intervención de los sindicatos obreros, incluida la UGT. Tampoco faltaron las declaraciones de rechazo a cualquier actuación proactiva del gobierno en la generación de una nueva estructura industrial. La creación de zonas de reindustrialización no proporcionó la respuesta necesaria para compensar la tremenda destrucción de tejido industrial que se produjo a lo largo de los años ochenta.

A las palabras huecas sobre la modernización industrial, les siguió la jactancia de Solchaga declarando que la mejor política industrial era la que no existía, lo que suponía colocar al Estado fuera del diseño, gestión y realización de nuevos proyectos industriales. Era el adiós definitivo a las tres primeras propuestas centrales del programa electoral del PSOE, a la vez que se ponía en evidencia la indisimulada satisfacción con que sectores empresariales y del gobierno

celebraban la desaparición de las grandes empresas siderúrgicas, navales y mineras que formaban parte de los centros neurálgicos del movimiento obrero.

Las luces del auge y las sombras de la decadencia

El hecho de que se hayan abordado con cierto detenimiento los derroteros iniciales de la política económica del primer gobierno socialista se debe a que aquella actuación determinó el enfoque de muchos otros aspectos de su actividad. Si bien, resulta meridiano que cualquier balance requiere que se tengan en cuenta otras consideraciones fundamentales sobre asuntos que tuvieron lugar en aquel periodo de dominio socialista en el que apenas contó con rivales políticos. De hecho, tras el arrollador triunfo de 1982, cuatro años después el PSOE mantuvo la mayoría parlamentaria, en 1989 todavía logró la mitad de los escaños y en 1993 se quedó cerca, necesitando el apoyo externo de CiU. Por tanto, a lo largo de esos 14 años, el gobierno estuvo en manos exclusivamente socialistas[32].

A lo largo de ese tiempo las mejores realizaciones socialistas se registraron en los campos relacionados con la normalización de la vida social, el fortalecimiento de la democracia política y la ampliación del estado de bienestar. Todo ello sin olvidar el tremendo problema que supuso el martilleo continuo de los actos terroristas, en forma de asesinatos, secuestros, explosiones de artefactos, extorsiones y demás formas de provocar al ejército, incitar al endurecimiento represivo y amedrentar a la sociedad.

A través de normas legislativas y de actuaciones administrativas, el PSOE promovió una notable ampliación de los derechos democráticos relacionados con el ejercicio de las libertades políticas colectivas y otras de índole personal. Igualmente, fue el artífice de la consolidación institucional de un gran número de organismos que se hallaban en estado embrionario o ni siquiera habían sido creados durante el periodo de la transición. También tuvo protagonismo en el desarrollo de los estatutos de autonomía y la descentralización y modernización de la administración pública. A la vista de la penosa trayectoria histórica que arrastraba el ejército, otro de los hitos socialistas fue llevar a cabo una reforma que logró reducir drásticamente su número de efectivos y el exceso de mandos; a

la vez que la reorganización, profesionalización y modernización de su actividad. Como consecuencia, desactivó definitivamente la amenaza golpista que perennemente latía entre los jefes militares más reaccionarios. Parte de la factura pagada por ello fueron las generosas concesiones económicas con las que se alentó su retiro, un exceso de condescendencia hacia quienes siguieron mostrando apego a las conspiraciones y la, finalmente aceptada, integración en la estructura militar de la OTAN, que más adelante se comenta.

La otra realización más importante estuvo asociada al esfuerzo desplegado en la construcción del estado de bienestar. Las primeras medidas de protección social estuvieron relacionadas con la reconversión industrial. El paliativo compensatorio con que se llevó a cabo el shock fue la concesión de prestaciones monetarias en forma de indemnizaciones, prejubilaciones subsidiadas y otras ayudas para mineros, siderúrgicos y trabajadores de los astilleros, cuyas plantillas laborales quedaron escuálidas. No así otras prestaciones como las dedicadas al seguro de desempleo, las pensiones y la asistencia social. La política económica Boyer-Solchaga y el subsiguiente estancamiento productivo impedían que, a corto plazo, se elevase el gasto público con el que proporcionar una mejor cobertura al creciente número de parados, jubilados y familias necesitadas de ayudas complementarias.

La mejora de la protección social siguió siendo modesta cuando se activó el crecimiento económico en 1984, y se hizo bastante más intensa a raíz de la huelga general de 1988 con la que grandes sectores de la sociedad, no sólo de asalariados, expresaron su rechazo a las políticas sociales y laborales del PSOE. Fue a partir de ese momento cuando el gobierno incrementó con celeridad los recursos destinados a la política social, sobre todo a la cobertura del desempleo, las pensiones mínimas y las no contributivas, junto a otras prestaciones monetarias.

Los cambios fueron previos y más profundos en lo que concierne a los servicios públicos colectivos, principalmente educación, sanidad y cultura. Más allá de las críticas merecidas al dudoso enfoque de varias reformas educativas y su peor puesta en práctica, las realizaciones socialistas fueron numerosas y de gran alcance. El gobierno universalizó la prestación de esos servicios a los sectores de la población que no tenían acceso, amplió las instalaciones y las dotó de medios materiales y humanos. Así ocurrió con los centros educativos en los diversos niveles y con los centros sanitarios de asistencia primaria, especializada y hospitalaria, así como con un gran número de instituciones y actividades

dedicadas a la creación y la difusión cultural.

En el lado oscuro quedaron algunos elementos relacionados con esos mismos ámbitos. Tal vez, los peores contraejemplos fueran la aquiescencia mostrada con los privilegios de la Iglesia católica y con las tramas y atavismos que persistían en la justicia, la policía y otros órganos del Estado, así como el escaso empeño por cuestionar las huellas del pasado franquista. El PSOE no estuvo dispuesto a afrontar el coste que suponía pugnar contra el interés de la jerarquía eclesiástica por preservar su dominio en la educación y los medios de comunicación, sus ventajas fiscales y otros privilegios empleados con el propósito de seguir dictando las normas de comportamiento social. Fueron numerosas las pruebas dadas por las autoridades católicas de su tenaz negativa a reconocer que los asuntos asociados con el ejercicio de las libertades cívicas eran potestativos de los poderes democráticos. Como consecuencia, la sociedad siguió soportando los costes económicos e ideológicos derivados de semejantes privilegios, sin que los gobiernos socialistas dejaran de sufrir los embates políticos de aquellas jerarquías cada vez que afrontaba algún tipo de reforma que contravenía los principios e intereses eclesiásticos. Una situación que ha continuado hasta convertirse en uno de los obstáculos que debilita la calidad de la democracia política.

La pasividad también reinó en las limitadas reformas en la administración de la justicia y los cuerpos de seguridad, en los que seguían incrustados numerosos miembros y mecanismos de funcionamiento hostiles al ejercicio democrático[33]. Y otro tanto sucedió con las renuencias a presentar ante la sociedad una mirada certera sobre el pasado franquista. El exceso de celo por eludir cualquier imputación vengativa, además de las leyes benevolentes aprobadas al inicio de la transición, privó a la sociedad del posible grado de conflicto y griterío que inevitablemente habrían desencadenado las fuerzas reaccionarias. Pero con el silencio se evitó que la mayoría social dispusiera de conocimientos sobre hechos fundamentales acerca de la plena legalidad democrática de la república, la absoluta ilegalidad del golpe de Estado militar, el carácter fascista de la dictadura franquista y las salvajadas cometidas por el régimen después de su victoria militar.

La débil conciencia democrática con que una amplia mayoría de la sociedad llegó al final de la dictadura siguió sin nutrientes democráticos durante la transición, y así prosiguió en el periodo socialista. Otro lastre para la calidad de la democracia, puesto que el solo recuerdo de las decenas de miles de cadáveres

que siguen en fosas desconocidas o el rechazo a que sigan vigentes símbolos fascistas que homenajean a sus víctimas siguen constituyendo temas espinosos que alimentan la ignorancia, suscitan dudas y provocan tensiones que no existen en otros países que padecieron regímenes del mismo tipo.

Otro baldón muy notable fue el abrazo de la causa atlantista proestadounidense en la política internacional, cuyo primer paso lo dio el argumentario con el que el PSOE afrontó el referéndum sobre la OTAN en 1986. «Sorprendente» puede ser el calificativo que mejor encaje para explicar la pirueta que supuso convocar un referéndum para defender la permanencia en esa organización militar cuando el origen de la propuesta había sido la participación de los socialistas en el movimiento masivo que se levantó para protestar contra la decisión de ingreso que tomó el gobierno de Calvo-Sotelo en 1981.

Entre una fecha y otra, mediaron dos acontecimientos decisivos para explicar el giro de los dirigentes socialistas. Primero, como se ha mencionado, ya el programa electoral había introducido una fórmula ambigua acerca de lo que podía ser su posición con respecto al referéndum comprometido. Segundo, el acuerdo con los líderes europeos que impulsaron la resolución tomada en el Consejo Europeo celebrado en Stuttgart, en junio de 1983, para un rápido ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. A cambio, los socialistas aceptaban mantenerse en la OTAN, con el matiz final de que no lo harían en su estructura militar; lo que más tarde se revelaría como irrelevante, además de resultar pintoresco en términos efectivos: el ingreso en una organización militar quedando al margen de la estructura militar. La posición pro-OTAN fue aprobada por la población, después de una campaña en la que Felipe González empeñó su compromiso de abandonar el gobierno si la propuesta no resultaba vencedora[34].

Además del hecho mismo de que aquella pirueta supuso un cambio de posición por parte de los dirigentes socialistas, de cara al futuro esa decisión tuvo dos consecuencias importantes. Primera, cerró filas en torno a una política atlantista, plenamente dominada por la administración estadounidense y por el eje anglosajón Reagan-Thatcher, precisamente en unos años en los que ambos presionaban a favor de los cambios favorables al capitalismo globalizado que se han expuesto en el capítulo VII. Sin ningún rubor, entre los argumentos favorables a la OTAN los socialistas enfatizaron las ventajas de situarse con las grandes potencias occidentales, donde se gestaban tecnologías y pedidos militares valiosos para la economía. Segunda, el adiós a la posición crítica contra

los bloques militares que figuraba en su programa de 1982, así como el fin del apoyo a causas internacionales que no resultaran del agrado de EEUU.

Pese a todo lo anterior, las cuestiones más determinantes para la trayectoria decadente que emprendió el PSOE fueron las relativas a la conducción de la economía y a la política laboral. No en balde afectaban más directamente a la característica sustancial de un partido obrero: la defensa de los intereses de los trabajadores.

El enfoque de la política económica iniciada en 1982 estableció la regla de conducta posterior en la medida en que, con el antecedente de los Pactos de la Moncloa, situó la concepción del PSOE sobre la dinámica de la economía dentro de los cánones ortodoxos conservadores. Ese enfoque implicaba el desplazamiento de la trayectoria socialista hacia un recorrido que, en primera instancia, era ajeno y que con frecuencia resultaba contrario a los intereses de los trabajadores. En adelante, esa política sólo se tradujo en medidas liberalizadoras, privatizaciones, apertura al exterior, relegamiento de las funciones activas del Estado y supeditación a la lógica del beneficio empresarial, recubierta de eufemismos acerca de la política de rentas, la flexibilidad, las buenas intenciones redistributivas y un sinfín de frases hechas con raigambre conservadora.

Se puede constatar que, habiendo pasado la economía por sucesivas fases recesivas y expansivas entre 1982 y 1996, en todos los momentos las políticas económicas tuvieron como guía las exigencias requeridas por las grandes empresas, los grandes bancos y los capitales extranjeros. Ciertamente, en ese intervalo de años la economía experimentó grandes cambios que fueron decisivos para el crecimiento posterior hasta que estalló la crisis en 2009. Pero también es cierto que la práctica totalidad de esos cambios, así como el crecimiento logrado y los nuevos rasgos de la economía, fueron protagonizados y estuvieron al servicio de los poderes económicos. Más aún desde el ingreso en la CEE y, sobre todo, desde la firma del Tratado de Maastricht, cuando se produjo un mayor acercamiento a las políticas económicas seguidas por los gobiernos conservadores. Pasaron los años sin que los dirigentes del PSOE se separaran un ápice de esa versión dominante y sin que se percataran, o dieran señales de preocupación, de las consecuencias que acarreaba el tipo de liberalización, globalización y financiarización de las economías a escala mundial.

El reverso de ese obstinado enfoque de la dinámica económica acontecía por el

lado de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. La sistemática prioridad otorgada al control de la inflación, y la utilización del ajuste salarial como principal medida para lograr ese control, supuso una pertinaz pérdida de capacidad adquisitiva del salario medio y el aumento del desempleo hasta cotas muy elevadas. Algunos grupos laborales contaban con capacidad para negociar sus salarios y sus condiciones de trabajo, por lo que podían obtener ciertas mejoras o experimentar pérdidas menores, pero una proporción creciente de asalariados cargó con retrocesos muy acusados. Paralelamente, por vía parlamentaria y administrativa, los socialistas aprobaron sucesivas medidas «flexibilizadoras» que proporcionaban mayores facilidades para los empresarios a la hora de contratar y despedir a los empleados, mientras que con otras medidas endurecían las condiciones que daban acceso al seguro de desempleo. En ocasiones, el gobierno participó o auspició acuerdos entre empresarios y sindicatos que recogieron esos retrocesos salariales, el abaratamiento de los despidos, el aumento del trabajo temporal y otras desventajas. En otras ocasiones, el gobierno se mostró beligerante contra las muestras de desacuerdo por parte de los sindicatos hacia ese tipo de acuerdos, a pesar de que se hizo frecuente que, por su debilidad, los sindicatos rechazaran en una negociación medidas que terminaban aceptando en la siguiente.

El enfrentamiento del gobierno con los trabajadores alcanzó tal punto que la UGT llegó a romper el vínculo fraternal que mantenía con el PSOE desde el nacimiento de ambas organizaciones un siglo antes. El siguiente conato se produjo con el seguimiento masivo de la huelga general convocada por UGT y CCOO en diciembre de 1988. Limitada a un solo día y centrada en la protesta contra un plan de empleo juvenil que fomentaba la temporalidad y precarizaba más la contratación laboral, el apoyo masivo que tuvo la huelga mostró el profundo malestar laboral y social que reinaba en la sociedad por la evolución de los salarios, la cobertura por desempleo, las pensiones y demás demandas desatendidas por el gobierno socialista. La arrogancia y las muestras de histerismo de que hicieron gala algunos ministros y líderes socialistas en los días previos avivaron más ese malestar y contribuyeron a que la huelga fuera secundada de forma tan mayoritaria.

Tampoco cabía engañarse sobre el significado de aquel día de huelga general. La capacidad de movilización efectiva y de organización por parte de los sindicatos, lo mismo que la disposición reivindicativa de los trabajadores, no conformó un movimiento con mayor recorrido. Los núcleos obreros más combativos habían sido diezmados por la reconversión industrial y las posteriores reestructuraciones

de los sectores de automoción, maquinaria, química y textil. Otros núcleos habían abandonado la acción sindical y política tras los años de los grandes consensos, seguidos del desencanto que ocasionaba la constatación de las escasas contrapartidas logradas. Simultáneamente, operaban los demás factores que se han analizado en el capítulo VII sobre la heterogeneidad creciente entre los asalariados y del conjunto de la estructura social, los mecanismos inhibidores de la acción colectiva, las restricciones que sufría el espacio nacional, los condicionamientos internacionales y las ventajas de que disponían las compañías transnacionales.

Aquella huelga puntual no produjo mayores efectos que la ya mencionada mejora de ciertas políticas sociales y el refuerzo momentáneo de las negociaciones laborales en algunas empresas. Sin embargo, tuvo una enorme carga simbólica, pudiendo situarse en aquel momento el punto de inflexión del PSOE, a partir del cual la indigencia estratégica y la vacuidad política succionaron cualquier aliento para llevar a cabo reformas importantes, y menos aún proponerse transformaciones económicas y sociales de gran alcance. En adelante, seguiría mostrándose como partido defensor de las libertades e impulsor de pequeñas medidas, pero desprovisto de relevancia como portador de ideas y de actuaciones guiadas por un discurso transformador cuya guía fuese la defensa de los trabajadores. El mismo destino que sus homólogos europeos, con la particularidad de que estos recorrieron un largo trayecto como partidos reformistas antes de agotar esa capacidad, mientras que los socialistas españoles apenas habían iniciado el camino de ida cuando emprendieron la vuelta atrás.

El influjo personal de González logró que el PSOE tuviera una nueva victoria electoral en 1993, pero su posición en la escena política estaba bastante debilitada por lo que desde entonces pasó a ser la patología más seria del sistema político: la corrupción que anidaba en los entresijos del poder político y económico. La sucesión de grandes escándalos parecía no tener final y, con frecuencia, eclipsaba otros muchos de menor relieve que se entremezclaban con masivas prácticas clientelares en todos los niveles de la organización del Estado.

La «magia» de González y, años antes, la eficacia del tándem González-Guerra llegaron a su fin, aflorando a la opinión pública las pugnas internas por controlar los espacios de poder y la cadena de delitos cometidos por la financiación del propio PSOE, el uso indebido de los fondos reservados a cargo de los responsables del ministerio del Interior, los desfalcos del responsables de la guardia civil, las inversiones ilegales del gobernador del Banco de España, las

atrocidades perpetradas por el general responsable en el País Vasco de la lucha contra el terrorismo, paralelas a las tropelías cometidas por dirigentes de grandes bancos y otras empresas. Un continuo desfile hacia los juzgados y los centros penitenciarios que ennegrecía la imagen del partido gobernante. Por primera vez en su historia, los dirigentes de la UGT decidieron no pedir el voto para el PSOE, y este acordó poner fin a la obligatoriedad de que sus militantes tuvieran que afiliarse al sindicato. Otro signo de la época que se cerraba.

Las décadas posteriores han deparado pocas novedades, ninguna sustancial, relacionadas con la decadencia estratégica y política del PSOE. Una vez desplazado del gobierno por el Partido Popular, en 1996, González dimitió y llegaron tiempos turbulentos, repletos de inestabilidad y nadería. Líderes sin capacidad de liderazgo, altos dirigentes y cuadros intermedios preocupados por su statu quo político individual y/o por la parcela de poder de su fracción. Un partido sin coordenadas de referencia, al vaivén de las oportunidades políticas que pudiera ofrecer cada momento. La posibilidad de volver al gobierno llegó ocho años más tarde, en 2004, ante un PP hundido por sus propios escándalos y la canallesca gestión que hizo de los atentados cometidos por el terrorismo islamista tres días antes de las elecciones.

Sin coordenadas en las que ubicar un discurso consistente y una acción política consecuente, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero combinó la implementación de algunas medidas de protección social y, sobre todo, medidas que ampliaban las libertades personales con el continuado servilismo de una política económica fiel a los dictados ortodoxos marcados por los poderes económicos, incapaz de afrontar cualquier reforma de cierta hondura. El hecho más audaz fue la súbita decisión de abandonar la participación en la guerra de Irak. La muestra más desgraciada de servilismo se produjo en 2010, cuando Rodríguez Zapatero se plegó con diligencia a las exigencias impuestas por Alemania, a través de la Unión Europea, para que aplicara varias de las medidas de lo que después, ya bajo el gobierno del PP, fue un duro programa de austeridad, como los referidos en el capítulo VII.

Por parte del PCE tampoco hubo novedades destacadas después del proceso de descomposición política que siguió al naufragio electoral de 1982, sin capacidad para aprovechar los vacíos que creaba la decadencia socialista[35]. Transmutado en Izquierda Unida (IU) junto con varios pequeños grupos y ciertos intelectuales, la mayoría de los cuales habían abandonado el PCE años antes, las elecciones de 1986 reflejaron una leve mejoría, consiguiendo cerca del 5% de los votos y 7

diputados. Bajo el liderazgo de Julio Anguita, los resultados mejoraron más en la siguiente convocatoria (9% y 17 diputados), pero las contiendas posteriores de 1993 y 1996 confirmaron que ese era su techo, situado en torno a la décima parte de los votos y la veintena de diputados. De hecho, comparando los datos de 1989 con los cosechados en 1996, cuando González perdió las elecciones, el PSOE perdió 34 diputados e IU sólo ganó 4, de manera que en ese último año los socialistas seguían multiplicando por siete el número de escaños de IU. Las limitaciones políticas no se circunscribían a esos resultados, donde IU siempre era perjudicada por las normas electorales en el reparto de escaños.

La recuperación de la política del sorpasso al PSOE patrocinada por Anguita condujo a un callejón sin salida, ya que centró su acción política en la crítica continua y el enfrentamiento con el PSOE. Lo cual no mejoró los resultados electorales ni aportó mayor influencia social, y tampoco fortaleció su modesta capacidad movilizadora. La línea impulsada por Anguita favorecía la cohesión interna de las filas de IU tanto como le alejaba de Comisiones Obreras, de amplios sectores politizados y de gran parte de los votantes de izquierda. Cuando en el año 2000 Anguita cesó al frente de IU, se produjo una nueva combinación adversa, ya que la pérdida de liderazgo se unía al descenso de la fuerza política y la influencia social. El resultado fue que, en adelante, su porcentaje de votos no superó el 5%, con un número mínimo de diputados. La reacción subsiguiente osciló entre las posiciones tranquilas y consistentes que defendía su líder, Gaspar Llamazares, a veces poco diferenciables de las que mantenía el PSOE, y las posiciones abrasivas de núcleos más radicales de carácter testimonial, que empujaban a IU hacia posturas de marginalidad política.

Tampoco otras opciones políticas aprovecharon el ocaso socialista. Desaparecidos los pequeños partidos comunistas radicales, cuya trayectoria parecían imitar esos núcleos de IU, otros, mucho más pequeños y sin implantación, cosecharon resultados electorales raquíticos, situados en la absoluta marginalidad política. No les fue mejor a las diversas candidaturas ecologistas, presentes en elecciones desde 1986, siempre divididas y arrastrando unos comportamientos similares a los que habían caracterizado a los partidos comunistas radicales.

NOVEDADES RECIENTES: 15-M Y PODEMOS

La economía recuperó un buen ritmo de crecimiento desde 1994 y lo mantuvo durante casi una década y media, aunque con resultados agridulces. Crecía como ninguna otra entre las economías europeas desarrolladas, pero al mismo tiempo el reducido incremento de la productividad del trabajo ponía de manifiesto que mantenía sus debilidades estructurales: endeble desarrollo tecnológico, insuficiente capital productivo, exagerado predominio del empleo localizado en pequeñas empresas y escasa articulación del tejido empresarial. La economía creaba mucho empleo, pero lo hacía en sectores y en empresas con una abusiva preponderancia de puestos de trabajo con bajas retribuciones y precarios derechos laborales. Por primera vez, un grupo de grandes empresas españolas adquiría dimensiones transnacionales, pero se trataba de compañías cuyas actividades (construcción e infraestructuras, energía, finanzas) mostraban una reducida capacidad de enganche con el resto de los sectores internos. La demanda interna de consumo e inversión crecía con rapidez, pero ocasionando un déficit cada vez mayor de la balanza por cuenta corriente y, por tanto, un aumento de las necesidades de financiación externa. Entraban grandes flujos de capital extranjero, pero en gran medida lo hacían como inversiones financieras destinadas a reproducir la burbuja creada en torno al sector de la construcción y la compra de viviendas, mientras que otra parte de las inversiones corría a cargo de empresas transnacionales que copaban sectores enteros de la industria.

Tiempo hubo para reflexionar y adoptar medidas con las que corregir esa dinámica económica que generaba crecimiento a la vez que reproducía una estructura productiva y una distribución de la renta con las mismas flaquezas de antaño. En su lugar, los gobiernos que se sucedieron en ese largo periodo –PSOE, PP y de nuevo PSOE– prefirieron repetir el mismo soniquete y colgarse las mismas medallas con aquello de «somos el país que más crece y que crea más empleo». Sin importar las características y las consecuencias de ese tipo de crecimiento y de empleo.

Empujada por ese comportamiento económico, la sociedad parecía ir en volandas del incremento de la renta derivado de la gran cantidad de empleo creado y de la mejora de las prestaciones del estado de bienestar. Como había sucedido en las principales economías europeas durante la Edad de Oro, la dinámica social respondía a un contrato basado en el paulatino aumento de los ingresos, la capacidad de consumo (aquí complementado con la inversión en vivienda) y la protección que brindaban las políticas públicas. Con la variante de

que los vientos favorables que empujaban el aumento del empleo, la renta familiar, el consumo, el crédito a la vivienda, la mejora de las cuentas públicas y el aumento de las prestaciones sociales se sustentaban en dos resortes que no podían ser permanentes: la burbuja especulativa en torno a la construcción y compra de viviendas, y el creciente endeudamiento de las empresas y los bancos con el exterior.

Siendo así, el crecimiento, el contrato social y el vuelo de la sociedad concluyeron de forma simultánea en 2009-2010, cuando la crisis financiera arreció en el continente y cerró la puerta a la financiación exterior de la que se beneficiaba la economía española; lo cual aceleró y amplificó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Se produjo una espiral en la que «todos debían a todos» que dio paso a otra en la que «todos perdían». Una cadena de interacciones negativas convirtió el crecimiento en depresión, la creación de empleo en rápido aumento del desempleo, la compra de productos y de viviendas en productos sin mercado y viviendas sin compradores, la esplendidez crediticia en nula financiación disponible, el reembolso de las deudas en demoras e incumplimientos de los pagos.

Desde las profundidades del malestar social

Las inercias y la credulidad de aquella sociedad narcotizada quedaron hechas trizas en la primavera de 2010, cuando la larga mano alemana hizo que las autoridades de la Unión Europea impusieran al gobierno de Rodríguez Zapatero un primer paquete de medidas bastante lesivas para las prestaciones sociales y las condiciones laborales. Un impacto doloroso que sólo fue el anticipo de las que aplicó el gobierno del PP durante los siguientes años siguiendo el canon de los programas de austeridad expuestos en el capítulo VII.

Siendo cierto que ninguna sociedad desarrollada está preparada para soportar las malas noticias que aporta cualquier crisis, esa certeza es más firme en casos como el de aquella sociedad española que, durante más de una década, saboreó las mieles de parecerse, e incluso superar, en determinados consumos –también en la compra de vivienda– y protecciones sociales los niveles que presentaban otras sociedades bastante más desarrolladas. Lo mismo sucedía con las empresas

que arrojaban beneficios y se comprometían con deudas muy por encima de las que alcanzaban empresas europeas bastante más potentes.

Súbitamente, el azote de la crisis obligó a realizar un viaje de regreso. La caída de los salarios y la extensión del desempleo reducían la renta de muchos hogares, dejando en la intemperie financiera a quienes estaban obligados a devolver deudas y en la penuria a quienes carecían de ingresos mínimos para atender su subsistencia. Las reformas laborales acentuaron ambos procesos en la medida en que abarataban y facilitaban los despidos, a la vez que restringían los salarios de gran parte de los trabajadores en activo y, sobre todo, de los de nueva contratación. Las exigencias de austeridad presupuestaria provocaban sucesivos recortes de los desembolsos públicos en sanidad, educación y otros servicios, a la vez que se congelaban o caían las prestaciones monetarias destinadas a pensiones, desempleo, personas discapacitadas y demás seguros sociales.

La sensación general de abatimiento produjo distintos regueros de protesta. El centro de la indignación era la pérdida de ingresos y empleos, derechos y prestaciones, pero el malestar social encontraba tres motivos adicionales para entrar en combustión. Primero, el miserable descaro con el que primero el gobierno del PSOE y después el del PP justificaron la adopción de aquellas medidas. Sin reconocer que se trataba de imposiciones externas, ni las responsabilidades de su gobierno, Rodríguez Zapatero presentó el primer paquete de restricciones como si se tratara de reformas que reportaran ventajas para la economía y para los ciudadanos. El mismo modo de proceder que después tuvieron Rajoy y sus ministros cada vez que anunciaban recortes en salud pública y educación, y elevaban las dificultades para tener acceso a las prestaciones monetarias, como si se tratase de oportunidades favorables con las que fortalecer los servicios y las prestaciones.

El segundo motivo era el compromiso adquirido por el gobierno en 2012, a instancias forzadas desde la UE, de asumir el coste de la reestructuración financiera de las cajas de ahorro y algunos bancos que se hallaban en bancarrota. Por un lado, se trataba de una monumental cifra, en torno a 65.000 millones de euros, que en su mayor parte supondrían pérdidas para el mismo gobierno que recortaba los servicios y las prestaciones. Por otra parte, haciendo gala de un tremendo descaro, el gobierno presentó aquella financiación europea como si no comportara controles por parte europea ni grandes pérdidas para las cuentas públicas.

El tercer motivo era el conocimiento público de los mayúsculos escándalos de corrupción que se venían perpetrando en los distintos niveles de la administración del Estado, con unas cifras de expolio y una reiteración de casos a la altura de la desfachatez que mostraban los implicados, sus encubridores, los partidos políticos a los que pertenecían y las empresas que habían participado.

Un crisol en el que cada motivo elevaba la temperatura a la que se fundía el malestar que alentaba protestas esporádicas y algunos movimientos. Unos rechazaban las condiciones sociales que ocasionaban los despidos, los bajos salarios y las reformas laborales. Otros reaccionaban contra casos de desahucios de viviendas por el impago de las hipotecas. Otros expresaban la repulsa contra las mil caras de la corrupción política y los escándalos económicos, con la sospecha de que el epicentro de esa corrupción era bastante más profundo. Otros presentaban un cariz generacional, con grupos juveniles que se revolvían contra el cierre de un horizonte material como el que había tenido la generación precedente en términos de empleo, renta, vivienda, condiciones laborales y prestaciones sociales.

Núcleos de activistas ejercían como catalizadores que promovían y daban continuidad a esos movimientos, propiciando su acercamiento y convergiendo en manifestaciones de protestas simbióticas como la que se convocó en mayo de 2011 y terminó con una acampada en pleno centro de Madrid. Para gran sorpresa de la opinión pública y también de los convocantes, que formaban parte de ese mapa difuso de expresiones de descontento, la acampada fue cobrando masividad y se instaló con carácter permanente. También resultó una sorpresa que el gobierno socialista no decidiera su desmantelamiento.

Con esos ingredientes de partida, el curso de los días desveló cómo las entretelas del malestar social ponían en acción un potencial de rechazo capaz de conformar un movimiento ciudadano (el 15-M) de grandes dimensiones y honda repercusión en la sociedad. No se trataba de un movimiento socioeconómico, tampoco de un movimiento político, ni de índole cultural; menos aún era un movimiento por las demandas de los trabajadores o de alguna franja social concreta. Era un conglomerado de personas y sensibilidades diversas que sintonizaba con el eco generado por un mar de fondo, el malestar social acumulado, que irrumpía de forma pública y masiva. Una sedimentación de insatisfacciones materiales y sentimentales que se había almacenado a raíz de los perjuicios materiales, los agravios morales y la abrupta interrupción de lo que se había considerado un contrato cuyas contrapartidas (ingresos, consumo y

protección) garantizaban la subalternidad al orden social establecido. Finalmente, un movimiento vitalizado por la energía de núcleos juveniles, sobre todo universitarios, encorajinados por el cierre de perspectivas a sus aspiraciones de empleo, renta y derechos.

Varios elementos adicionales se sumaron al aliño de sorpresas. La utilización de los nuevos medios de comunicación aportados por la revolución digital servía para difundir extensivamente los ecos de aquel movimiento ciudadano. Los micrófonos y los platós de televisión, y las páginas de los periódicos, se abrían a activistas desconocidos que clamaban «de forma razonable contra todo» y mostraban una franca incorrección con los procedimientos políticos al uso. Amplios sectores de la opinión pública encontraban también razonables los variados temas de la protesta, y reconocidos artistas e intelectuales brindaban su apoyo a la acampada. La mudez del PSOE, entonces en el gobierno, iba a tono con su carencia de discurso político, en tanto que la presencia de los dirigentes de IU era recibida con algún resquemor por considerarla un recubrimiento de escaparate con fines propagandísticos y ajenos a los latidos de la protesta.

Durante las semanas que duró la acampada surgieron consignas y debates que disparaban contra todo lo que se meneaba. Reuniones y discusiones multifacéticas. Frases brillantes que hacían fortuna y se difundían por doquier. Programas elaborados a lo «camarote de los hermanos Marx», que sumaban una tras otra las medidas que se proponían hasta componer una amalgama sin fin. Toda la rebeldía del mundo densamente concentrada en el espacio de la madrileña Puerta del Sol, irradiando simpatías sociales e imitaciones de menor calibre en otras capitales. Un movimiento que, tras su actitud de rechazo contundente y su lema de «no nos representan», carecía de pretensiones propositivas. En aquellas semanas no se confeccionó un cuadro preciso de demandas ni se adoptó una disposición a negociar con las autoridades del Estado. Finalmente, al cabo de casi un mes, el desalojo de la acampada puso fin a ese movimiento central y los activistas instaron a mantener la efervescencia mediante la proliferación de iniciativas locales, cuya vinculación quedaba a expensas de las posibilidades de conexión que aportaban las redes digitales.

En un primer balance, parecía que aquel episodio se ajustaba bien a la idea de Karl Polanyi sobre la existencia de periodos en los que, tras la furibunda invasión que el capitalismo llevaba a cabo en todas las parcelas de la sociedad, esta hace acopio de revulsivos para generar mecanismos compensadores. Aquel episodio podía ser un punto de arranque de ese tipo de revulsivos. Otra opinión

diferente era la de quienes pensaban que se trataba de una eclosión episódica por lo que, tras el desalojo, se desvanecería sin más repercusiones políticas. Algo así había resultado ser la huelga general de diciembre de 1988, cuando una convocatoria por parte de los sindicatos derivó en una protesta general de carácter ciudadano a la que se incorporaron múltiples franjas sociales que clamaban contra las políticas laborales y sociales del PSOE.

Medio año después de la acampada se celebraron las elecciones que dieron la victoria al Partido Popular, cuyo gobierno acentuó el deterioro social y político legado por el gobierno socialista. Algunos grupos vinculados al 15-M intentaron recuperar la masividad del movimiento para combatir contra ese deterioro, pero únicamente se registraron acciones minoritarias de protesta. Felizmente, sin que en ningún momento se produjeran desbordes gruesos que, fruto de la exasperación, hubieran desembocado en aventuras desgraciadas. Los activistas regresaron a sus orígenes locales. Sólo las «mareas» que protestaban contra la privatización de la sanidad y el fuerte empeoramiento de la enseñanza y otros servicios públicos mantuvieron convocatorias en las que hubo una sólida participación ciudadana.

También se registraron diversas iniciativas infructuosas para convertir el activismo en plataforma de lanzamiento de nuevas formaciones políticas. Una de esas iniciativas, que parecía similar a otras anteriores, fue la aparición pública, en enero de 2014, de un manifiesto titulado Mover ficha: convertir la indignación en cambio político. Contaba con el apoyo de alguna publicación digital y de varios intelectuales y activistas, proponiendo la formación de una candidatura alternativa para las elecciones al parlamento europeo, a celebrar en mayo. El manifiesto terminaba con una última palabra, Podemos, que sería el santo y seña de un fenómeno político que iba a germinar.

Cabalgando sobre la ola buena

Las elecciones a un parlamento europeo bastante anodino, con escasas funciones legislativas y un funcionamiento casi desconocido para la mayoría de la sociedad, no parecían ser el mejor reclamo para atraer el interés de los votantes y menos aún hacia una candidatura sin pedigrí político. Esa era la impresión de

quienes desconocían el despliegue de comunicación que previamente estaban llevando a cabo varios activistas que promovían aquella iniciativa, demostrando una notable habilidad para utilizar las redes digitales. Sin embargo, su radio de acción se limitaba a los núcleos que accedían a ciertas televisiones locales y a esos otros medios de difusión. Sólo los promotores parecían tener confianza en que, con tan escasos mimbres, tenían posibilidad de hacer mella en la corriente de malestar social para convertirla en caladero electoral.

Por eso, a los ojos de la opinión pública resultó sorprendente que en tan sólo unos meses de vida y unas semanas de campaña electoral ese caladero proporcionase un primer resultado satisfactorio: cinco escaños; casi tantos como IU, que tuvo uno más. A escala nacional, Podemos obtuvo cerca del 8% de los votos, pero en Asturias su cuota se acercó al 14%, en Madrid, Baleares y Canarias estuvo por encima del 10% y en la Comunidad Valenciana y Galicia superó a las fuerzas nacionalistas de izquierda ya asentadas, Compromís y Bloque Nacionalista Galego, respectivamente.

La segunda sorpresa llegó la noche misma de las elecciones, cuando después de mostrar su satisfacción por ese logro, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, declaró que sólo se trataba de un primer paso y que su aspiración inmediata era aglutinar toda la desafección latente para lograr una mayoría de gobierno en las elecciones generales. Fue un signo de atrevimiento presentado como un pulso por el poder que, como se demostró a continuación, estaba llamado a conmocionar la escena política. Podemos se convirtió en la referencia inevitable tanto a favor como en contra. Suscitó la crítica persistente de los grandes partidos y los principales medios de comunicación, a la vez que se convertía en depósito de las esperanzas de quienes exigían reformas que acabaran con el malestar reinante y de los disidentes radicales contra el orden capitalista.

La ola favorable reportó dos nuevos éxitos electorales en 2015. El primero en mayo, cuando se celebraron las elecciones autonómicas en trece comunidades y las elecciones municipales. En las autonómicas, Podemos obtuvo en torno al 20% de los votos en Aragón, Madrid y Asturias; y entre el 10-15% en Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia y Rioja. Convertido en la tercera fuerza política de la mayoría de esas comunidades, junto con el otro nuevo partido, Ciudadanos, pudo decidir si gobernaba el PSOE o lo hacía el PP, según se inclinara o se abstuviera de apoyar la investidura de los candidatos socialistas. En las municipales, los resultados fueron similares o mejores, pero con un mayor efecto político, ya que Podemos

se presentó en coaliciones con otras fuerzas que lograron ser las más votadas. Pasaron a formar parte de los gobiernos en Madrid, Barcelona, Valencia, otras ciudades importantes y muchos otros municipios.

El siguiente logro tuvo lugar en diciembre, ante el reto central que se había planteado desde su nacimiento: las elecciones generales. Los resultados de Podemos fueron claramente satisfactorios si se valoran desde la doble perspectiva de su corto recorrido vital, apenas dos años desde su fundación, y de la trayectoria política que venía caracterizando a la sociedad española y al esquema bipartidista que organizaba el ejercicio del poder político. Obtuvo casi 5,2 millones de votos, con una cuota cercana al 21%, que le proporcionó 69 diputados; teniendo en cuenta que 27 de ellos pertenecían a coaliciones con las que concurrió en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, donde la cuota se situó en el 25%. Podemos y sus aliados pasaron a ser la tercera fuerza a una distancia discreta del PSOE como segunda, mientras que el Partido Popular era el partido más votado pero sin una mayoría parlamentaria con la que formar gobierno.

El recorrido posterior de Podemos una vez adquirida esa fuerza electoral pertenece a una nueva fase que se aborda en el siguiente apartado. Previamente, para completar las características que hicieron posible el surfeo por aquella ola venturosa, es preciso considerar varios aspectos que conciernen a su discurso, incorporación a la escena política y funcionamiento a lo largo de 2014-2015.

El modo en que hicieron su aparición como fuerza política en los medios de comunicación, prolongada después a través de una intensa presencia en esos medios, marcó ciertos rasgos posteriores. Se presentó como exponente y representante del movimiento ciudadano del 15-M con una imagen de «ángel justiciero», provisto de una acerada crítica contra la representatividad del sistema político vigente y contra cada una de las evidencias de injusticia, corrupción, represión o desigualdad. Convertido en partido político por las exigencias legales de las elecciones, declaraba su vocación de partido-movimiento en cuyo seno tuviera cabida el conjunto de las expresiones organizativas que vehiculaban las protestas de la sociedad. Ambos elementos le colocaban en una posición frontal contra el orden existente y, por ello, contra la trayectoria pasada y el presente del PSOE y de IU. Formulaban dos críticas frontales: una contra el sistema político institucional, que en su lenguaje era «el Régimen del 78», y otra contra las fuerzas dominantes, que en su lenguaje formaban «la casta».

El sustento argumental de ambas críticas frontales lo proporcionaban las tesis que aportaba el principal teórico de la formación, Íñigo Errejón, siguiendo los planteamientos que desde los años ochenta proponía el argentino Ernesto Laclau, profesor en la Universidad de Essex. Laclau desarrolla su teoría a partir de dos conceptos nodales: el discurso político y la lucha por la hegemonía, de raíces neogramscianas y estrechamente vinculados a las experiencias de los populismos de izquierda que habían triunfado en América Latina[36]. Sus tesis rechazan que la acción política deba basarse en hechos parciales o específicos existentes, de cualquier índole, desde los cuales conformar un movimiento político, al modo de hilos de los que ir tirando para formar una madeja. Alejándose de esa idea, propone una acción política basada en la capacidad de captar actividades o temas (significantes) que permitan elaborar un relato con el que se pueda identificar la mayoría social. En ese sentido, su concepto de discurso político equivale a la construcción de un significado o relato integral con el que la mayoría (la gente) forme una identidad colectiva (pueblo) y tome una posición enfrentada a la elite dominante. Bajo determinadas condiciones históricas, si se acierta en la elaboración y el desarrollo del discurso alternativo, es posible disputar la hegemonía al discurso dominante y crear la oportunidad de conquistar el poder político.

El traslado de ese planteamiento a la realidad española suponía que el Régimen del 78 había agotado su vigencia histórica. El enlazamiento de sus problemas seculares con las consecuencias del azote de la crisis había potenciado las condiciones con las que el discurso pueblo versus casta podía ganar a la mayoría social y desplazar del poder a la elite dominante a través de las elecciones. Dejando de lado la opinión que merezca aquel planteamiento teórico, el hecho concreto fue que las aportaciones de Errejón otorgaban a Podemos un sustento argumental desde el que entablar diálogo con la realidad para formular un discurso (difícil de precisar si era de carácter estratégico o sólo de oportunidad práctica) con el que aunar a cuantos se sentían atraídos por el mensaje de «por fin con Podemos se puede apostar a ganar».

No obstante, como se desveló poco tiempo después, ese discurso era compartido sólo en parte, como en préstamo, por otros dirigentes en la medida en que lo consideraban funcional para escenificar la apuesta política con la que presentar una oferta ganadora de cara a las elecciones. Era un discurso difícil de asimilar para un buen número de dirigentes, comenzando por el líder, Pablo Iglesias, que procedían de las Juventudes Comunistas, de la versión anguitista del PCE-IU y de otras organizaciones radicales, sin haberse desprendido de los principios

doctrinarios que sustentaban la metáfora comunista de Marx y Engels. Menos aún por quienes procedían de la LCR y que, después de entrar y salir de IU, había formado Izquierda Anticapitalista. En ellos estaba presente el sentido de oportunidad para abandonar la marginalidad política, aspirando a ampliar la influencia social y a disponer de presencia parlamentaria. Pero su discurso estratégico se mantenía dentro de los cánones de la metáfora.

La mayoría de los dirigentes estaba compuesta por jóvenes universitarios, con una formación académica y política bastante superior a la que, por ejemplo, ostentaban los líderes socialistas y de los distintos partidos comunistas al inicio de la transición. Procedentes de tradiciones distintas, acertaron al interpretar que el momento que se vivía en aquellos años, tras los últimos destrozos del PP, era favorable para la formación de una organización como Podemos. Acertaron después al proponer una visión alternativa a la realidad existente que, pese a las divergencias señaladas, les permitía capitalizar el malestar social y potenciar su fuerza política.

Ambos aciertos permitieron que Podemos se nutriera de gran parte de la disidencia histórica a la vez que de nuevos contingentes de jóvenes que participaban en los recientes movimientos de repulsa social. A sus filas llegaron viejos militantes comunistas, activistas de los tenues movimientos tradicionales y nuevos activistas movilizados en los últimos años, contando con la simpatía y la actitud expectante de amplios grupos sociales. Fueron muchos los que pensaron que Podemos podría elevar al terreno político lo que subyacía en el movimiento ciudadano del 15-M. En el lenguaje de Laclau y Errejón, creían que Podemos podría potenciar la identificación de millones de personas en torno a un único constructo: un pueblo unido para echar del poder a la elite política.

Algo que, en efecto, trascendía al marco ideológico y al discurso político de la izquierda radical, pues la posibilidad de una eventual mayoría electoral implicaba la suma de anteriores votantes de centro y de la derecha. Lograrlo dependía, según ese discurso transversal, del acierto con que se utilizaran los elementos (reivindicativos, simbólicos, anhelantes) capaces de componer el relato que articulara esa mayoría. Se entiende así el empeño, no siempre bien trasladado a sus simpatizantes y a la opinión pública, en negar que Podemos fuera un partido de izquierdas y menos aún socialista o comunista; así como la crítica que hacían sus líderes contra el acomodamiento en la marginalidad política que había caracterizado a la izquierda radical, incluida IU, motivo por el que rechazaban aliarse con siglas organizativas desprovistas de respaldo social.

El sujeto a crear era diferente, no tenía un contenido específico de clase ni un contorno social concreto. Era la gente-pueblo construida por oposición a la casta-oligarquía, dotada de una lectura de la realidad que exigía la necesidad de una alternativa radicalmente distinta, que sería la que aportase Podemos cuando ejerciera el poder político.

Sin embargo, en el trayecto jalonado de éxitos electorales también eran perceptibles varias rémoras que parecían no importar, o al menos merecían una preocupación menor, a quienes estaban convencidos de que Podemos podía disputar las elecciones a los dos grandes partidos tradicionales.

En el terreno político, la crítica radical y permanente incitaba a proponer enunciados milagrosos, con lo que a problemas arduos se ofrecían soluciones balsámicas. A su vez, la crítica al «Régimen del 78» introducía continuas confusiones según que la descalificación se dirigiera a los grandes consensos con los que comenzó a andar el sistema político, o bien al contenido íntegro y a los logros del sistema político, lo cual resultaba aberrante, o bien a su agotamiento final, como expresión de la elocuente incapacidad de llevar a cabo reformas que parecían imprescindibles. Otra cuestión relevante era la indefinición acerca de las medidas que se consideraban más apremiantes, dejando la impresión de que esa inconcreción pretendía evitar fisuras en el aglomerado «gente». De manera que, en lugar de una oferta de propuestas ponderadas según el grado de urgencia y la envergadura de las dificultades para ser aplicadas, se trataba de una propuesta genérica de índole cesarista que ofertaba la confianza en el liderazgo de una persona y un partido: «confiad en nosotros, votadnos y, una vez tengamos la mayoría, gobernaremos con medidas que favorezcan al pueblo».

Sin embargo, ya antes de las elecciones legislativas, la difusión de ese discurso transversal era verbalizada con distinto grado de consistencia por los dirigentes. En labios de algunos, como el propio Iglesias, los términos se tornaban volátiles: hoy soy transversal y no de izquierdas, mañana soy socialdemócrata y pasado mañana expreso ideas sacadas de un manual leninista. Lo cual no favorecía la credibilidad del discurso. Tampoco ayudaban las continuas muestras de improvisación en torno a determinadas medidas, unas veces planteadas como moderadas y otras veces con un trasfondo de radicalidad que desmentía la tonalidad transversal; unas veces dando muestra de que lo que decían formaba parte de una reflexión consistente y otras veces poniendo de manifiesto una improvisación irreflexiva. La intensa exposición mediática jugaba de forma ambivalente, revelando tanto las fortalezas como las flaquezas.

En el camino hacia las elecciones se torcieron otros dos elementos, cuyo origen era externo a Podemos pero ante los cuales, una vez aparecidos, las decisiones tomadas por los dirigentes ocasionaron notables desperfectos a su potencial electoral.

El primero fue el apoyo incondicional a Syriza, la formación política griega cuya posición en la escena política griega presentaba ciertas semejanzas con la que aspiraba a tener Podemos. A favor de ese apoyo cerrado jugaban el hecho de que, en enero de 2015, Syriza había obtenido un triunfo electoral con el que pudo formar gobierno y, a continuación, comenzó a batallar contra las grandes instituciones (FMI, BCE, Comisión Europea) para lograr una buena solución para el patético hundimiento de la economía griega. Luchaba por acabar con unos paquetes de rescate financiero que sólo provocaban más austeridad, más deuda, más decrecimiento y más penuria social. En contra de Podemos jugaban dos aspectos. Primero, al menos en apariencia, Syriza mantenía una posición radical que no convenía a la imagen más transversal que Podemos pretendía presentar ante ciertas franjas sociales. Segundo, finalmente Syriza cedió a la presión de aquellas instituciones y terminó aceptando un tercer rescate financiero que supuso mayores dosis de austeridad contra el crecimiento económico y contra la mayoría social, siendo ahora su gobierno el que aplicaba las medidas.

El segundo elemento fue la aparición de Ciudadanos como partido de ámbito estatal. No se equivocaban los líderes de Podemos al considerar que se trataba de un partido situado a la derecha del espectro político. Así lo atestiguaba su trayectoria previa en Cataluña, su proceso de formación como partido estatal –engullendo a múltiples pequeñas organizaciones conservadoras de ámbito local y provincial– y, sobre todo, sus posiciones en los principales temas económicos y sociales. Sin embargo, no era ese el único bagaje que portaba Ciudadanos, provisto de ciertas propuestas relativas a la modernización de la sociedad española –que cuanto menos merecían atención– y en mayor medida de iniciativas políticas para ampliar ciertos derechos democráticos y poner coto a la corrupción.

Sin considerar esta segunda faceta, ni los ecos favorables que encontraba en franjas aquejadas del malestar social, los líderes de Podemos cerraron filas con un planteamiento monocorde de hostilidad frontal, porque Ciudadanos: era un partido de derechas y merecía el mismo rechazo que el PP. Una posición ajena al hecho principal de que Ciudadanos le disputaba a Podemos la atracción de esas franjas de votantes, con propuestas que competían con el discurso de la

transversalidad y ganaban una audiencia social que restaba potencial a Podemos. Cabía prever que Ciudadanos ejerciera mayor atracción en los sectores más moderados, pero emplazaba a Podemos a ser más convincente para rivalizar por el voto de sectores que centraban sus aspiraciones en luchar contra la corrupción, ampliar los derechos personales, defender el laicismo y mejorar el sistema político, con reformas que podían compartir ambos partidos. Limitarse a descalificar a Ciudadanos y declararle una hostilidad frontal no parecía ser el procedimiento adecuado para disputarle esa parte del electorado.

Por último, en el terreno organizativo, la contundente crítica contra el funcionamiento oligárquico y mortecino de los partidos tradicionales indujo a formular unos afanes radicales de transparencia y democracia que difícilmente podrían llevarse a efecto. La idea original de un movimiento político convertido en partido sólo por imperativos legales se diluyó con celeridad según avanzó su configuración organizativa. Tanto la preparación previa, como la celebración del congreso fundacional en la Asamblea Ciudadana Estatal, en octubre de 2014, desvelaron la construcción de un partido netamente jerarquizado, en el que los círculos de base y los simpatizantes inscritos por vía electrónica ocupaban un lugar subalterno. Cada consulta electrónica que se llevó a cabo se hizo en los términos planteados por el núcleo dirigente y se decantó a favor de las propuestas defendidas por dicho núcleo. No se trataba de ninguna casualidad, sino que era la tercera condición del triángulo con el que se aspiraba a provocar la convulsión política de la sociedad española: un discurso populista sumamente simplificado, un liderazgo fuerte y personalizado, y una organización cohesionada verticalmente para ser eficaz.

Cuando la ola llega a la costa: viejos tics en nuevos formatos

Ciertamente, conseguir más de cinco millones de votos y ostentar la representación de más de la quinta parte del electorado era un enorme avance político para un partido que concurría por primera vez a la contienda de alcance estatal. Sin embargo, parecía poco porque no se correspondía con el objetivo que había alentado la dirección de Podemos entre su base política, crédula en la posibilidad de ganar. Tampoco dejó conformes a los dirigentes, convencidos de que al menos sí superarían al PSOE, para afrontar la legislatura como alternativa

al PP. El desaliento parcial de la base y de la dirección presentaba perfiles distintos, pero apuntaba en la misma dirección: cómo situarse ante los socialistas y también con respecto a Ciudadanos. Un dilema peliagudo porque, de ese posicionamiento, dependía que el PP, repudiado por los demás partidos, siguiera al frente del gobierno.

La dirección de Podemos afrontó el desafío con dos posiciones iniciales. Primera, mantener la hostilidad frontal hacia Ciudadanos, enfatizando el carácter liberal-conservador de sus propuestas económicas. Segunda, declarar una mayor sintonía con el PSOE en el terreno económico y social, pretendiendo distanciarle de las lacras políticas que arrastraba y de las ataduras que buena parte de sus dirigentes mantenían con los grupos económicos dominantes. De ambas posiciones surgía una conclusión en la que se cruzaban la realidad y el deseo: aspirar a la formación de un gobierno de coalición PSOE-Podemos, con algún tipo de apoyo de los partidos nacionalistas con los que sumar la mayoría parlamentaria. El obstáculo a superar era la presión de los dirigentes socialistas que se oponían a que Pedro Sánchez y el grupo que lideraba el partido estableciera una alianza con Podemos y a la vez algún tipo de compromiso con los nacionalistas catalanes –en pleno órdago independentista–. En caso de que tal alianza no resultara posible, la otra alternativa favorable para Podemos sería forzar unas nuevas elecciones en las que lograra sobrepasar al PSOE. Salvando las distancias, esta alternativa supondría trasladar a unas elecciones en 2016 una situación como la de 1979, en la que el partido-alternativa (ayer PSOE, hoy Podemos) se preparaba para ganar las elecciones siguientes.

Al poco tiempo de iniciarse las negociaciones resultó evidente que los socialistas negaban sin paliativos la posibilidad de esa alianza PSOE-Podemos con apoyo de los nacionalistas; menos aún cuando Podemos y los nacionalistas catalanes ponían como condición que se convocara un referéndum en Cataluña en el que una de las opciones fuera la independencia. Posibilidad rechazada de forma expresa por el Comité Federal del PSOE[37]. Ante tal hecho incuestionable, la única alianza viable para desplazar al PP era la formada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, con un acuerdo de mínimos para poner en marcha medidas consideradas de extrema urgencia. Cabía que Podemos y/o Ciudadanos se mantuvieran al margen del gobierno de coalición, dejando que fuera el PSOE en solitario, o con uno u otro aliado, brindándole un apoyo externo condicionado al cumplimiento de las medidas acordadas. Dejando de lado los dimes y diretes a cargo de las tres partes en liza, lo cierto fue que Ciudadanos y Podemos se declararon mutuamente excluyentes y que las gestiones realizadas por Pedro

Sánchez tampoco dieron ninguna credibilidad a su presunta intención de formar esa coalición triangular. En su lugar, negoció un acuerdo bilateral con Ciudadanos que estaba condenado al fracaso parlamentario salvo que contara con el (imposible) apoyo de Podemos.

Lo sucedido podía calificarse como un rebuscado juego en el que cada cual sólo buscaba el modo de erosionar a sus rivales y, sobre todo, no agraviar a sus respectivas bases más incondicionales. PSOE y Ciudadanos pretendían dañar a Podemos, mostrando que, con su voto negativo en el parlamento contra esa propuesta de gobierno, era Podemos el responsable de que el PP siguiera gobernando. A su vez, Ciudadanos pretendía hacer lo mismo con respecto al PP, dando muestras de su capacidad de entendimiento con el PSOE. Por su parte, el PP mantuvo una quietud absoluta con la que pretendía hacer ver que el fracaso de la alianza PSOE-Ciudadanos revelaba que no existía ninguna opción viable que no se basara en él como partido más votado. Podemos intentaba dañar al PSOE señalando su inclinación hacia la derecha por aliarse con Ciudadanos, a la vez que pretendía dañar a Ciudadanos por su ecléctico maridaje bien con PSOE, bien con PP.

La cada vez más próxima necesidad de acudir a nuevas elecciones permitía constatar cómo cada partido persistía en anteponer sus intereses en medio de un festival de llamadas a la unidad y al entendimiento que siempre acababa con acusaciones a los demás como responsables de que no hubiera una mayoría de gobierno. Ya entonces cabía intuir que la peor parte podría recaer en Podemos, teniendo en cuenta que era quien portaba con énfasis el reclamo de medidas de extrema urgencia contra la penuria social, los desahucios y los cortes de energía eléctrica a familias que carecían de ingresos para abonar la factura.

Todavía fue peor cuando el líder y otros dirigentes de Podemos llevaron a cabo una sucesión de escenas circenses, a través de ruedas de prensa, gestos e intervenciones en el parlamento, que dejaban patente su nulo compromiso con la búsqueda de una solución urgente para acabar con aquella espiral de desacuerdos y hacer viable un gobierno que aplicara las medidas más apremiantes y desalojara al PP del gobierno; premisa decisiva para descongestionar el asfixiante clima político que se vivía.

En lugar de ese compromiso, los líderes de Podemos tan pronto formulaban ataques frontales contra el PSOE y sus dirigentes, como solicitaban un gobierno de coalición en el que Podemos ostentase los ministerios más importantes. No

era difícil captar que esa actitud obedecía a un cálculo de probabilidades, luego desvelado como erróneo, acerca del sorpasso al PSOE si la situación de bloqueo desembocaba en nuevas elecciones. Un cálculo de probabilidades y un tipo de actuaciones durante aquellos meses de 2016 que enlazaban con elementos incubados desde su estreno político dos años antes.

Durante la preparación de los documentos para la Asamblea Ciudadana y los estatutos que se aprobaron en octubre de 2014, el núcleo dirigente del partido se blindó frente a posibles cuestionamientos de una base que parecía receptiva a una mayor radicalización política que la deseable para preparar las convocatorias electorales. La centralización respondía también a la lógica preocupación por disponer de instrumentos con los que, en pleno aluvión de afiliados, protegerse contra posibles arribistas que pretendieran utilizar el partido para acceder a cargos públicos. Ese blindaje acentuó el control de las decisiones políticas y el liderazgo unipersonal de Pablo Iglesias como secretario general, con algunas atribuciones internas que, al menos formalmente, nunca llegaron a tener los máximos líderes de la URSS y de otros partidos de cuño leninista. Sin embargo, esa centralización orgánica quedaba velada para gran parte de los militantes merced a las reiteradas apelaciones al funcionamiento de abajo hacia arriba y a la celebración de consultas electrónicas en las que los afiliados-usuarios siempre apoyaban de forma masiva las propuestas de los líderes.

Desde el punto de vista del contenido político, el discurso con el que «hacer pueblo» siguió arrastrando flaquezas. Las proclamas gruesas con las que Podemos había captado la atención inicial y la adhesión de los sectores más radicales presentaban un difícil encaje en un planteamiento envolvente que pretendía incorporar a amplios sectores moderados en torno al rechazo de «la casta».

Un primer recurso para procurar ese encaje fue guardar en el armario las formulaciones más gruesas contra el Régimen del 78, contra el pago de la deuda externa y otras; con el riesgo de que periodistas y rivales utilizasen esos silencios como signos de inconsistencia y de propensión a la demagogia. Otro recurso fue navegar por los mares de la ambigüedad a la hora de precisar propuestas que pudieran encontrar ecos dispares según los sectores; con el riesgo de que, a fuerza de eludir posiciones precisas sobre cuestiones básicas de la economía, la política exterior, la organización social o la estructura política, se fuera sembrando desconcierto o se pudiera imputar que ofrecían «humo», como signos de una posición política vaporosa u oportunista. Un tercer recurso fue utilizar

recipientes simbólicos, como la nación o el patriotismo, con la intención de dotarlos de un sentido que pudiera potenciar la identificación de «los de abajo». Todo ello era coherente con el trasfondo del discurso dirigido a solicitar la confianza genérica en el líder y en el partido con el compromiso, también genérico, de que si alcanzaban el poder gobernarían de forma radicalmente distinta y a favor del pueblo. Es decir, la quintaesencia del discurso populista de izquierda latinoamericano, mitigando el exceso presidencialista de esas experiencias e incorporando ciertas adaptaciones a la situación española.

Un enfoque que perdía más fuelle conforme Ciudadanos consolidó un espacio electoral, aunque luego fuese la cuarta en orden de importancia, y el PSOE retenía una notable base electoral, aunque fuese en retroceso. Incordios que acotaban el potencial de Podemos, cuyos dirigentes parecían empeñados en mermar enseñando su peor cara pública. Sin capacidad política para desarrollar movimientos a favor de sus propuestas y sin una organización preparada para ejercer influencia capilar en la sociedad, su única fortaleza residía en los resultados electorales y en la difusión propagandística de sus ideas a través de los medios de comunicación[38] y de las redes sociales.

A la postre, una vez celebradas las elecciones y con tales carencias, 69 diputados «daban para lo que daban» aritméticamente. La negativa a aceptar que Podemos ostentaba una posición significativa pero minoritaria en el parlamento, que le impedía convertirse en protagonista de la escena política, alentó gestos y propuestas que nunca podrían redundar en su beneficio. El error de cálculo acerca del sorpasso inminente había negado cualquier posibilidad de plantear fórmulas que, desde esa posición minoritaria, podrían haber favorecido su credibilidad, en lugar de adoptar un rechazo sin paliativos a cualquier entendimiento conjunto con PSOE y Ciudadanos.

Dos últimos elementos terminaron de perfilar las condiciones con las que Podemos acudió a las nuevas elecciones convocadas para el mes de junio: el apoyo cerrado a la exigencia de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la alianza con Izquierda Unida. En primer lugar, el cierre de filas a favor del referéndum estuvo condicionado por el hecho de que las alianzas previas en Cataluña (En Comú-Podem) y Galicia (Podemos-En Marea-Anova-EU) incorporaban a fuerzas nacionalistas que hacían valer esa exigencia como uno de los temas fundamentales; mientras que en el País Vasco y en Navarra, Podemos había obtenido cuotas electorales del 26% y 23%, respectivamente, gracias a que atrajo el voto de buena parte del electorado que antes apostaba por

Amaiur, y luego por EH-Bildu. La cuestión de fondo residía en que Podemos carecía de una propuesta acerca de cómo organizar el Estado, de modo que su posición oscilaba entre frases genéricas a favor del referéndum y otras que expresaban el deseo de continuidad del Estado «bajo nuevas formas pactadas».

En segundo lugar, la alianza con IU, ya efectiva en las coaliciones de Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, había sido rechazada a cal y canto antes de diciembre de 2015, pero en los meses posteriores se formalizó a escala estatal debido a dos motivos principales: la presión de las bases de ambas formaciones y el cálculo electoral de que así sumarían nuevos votos con los que superar al PSOE. El problema en este caso era que, más allá de desdecirse en pocos meses de la posición anterior, la vinculación con IU aportaba mayores dosis con las que identificar a Podemos como partido de izquierda, desde luego a la izquierda del PSOE, lo que contravenía el contenido central del discurso basado en la transversalidad.

Llegado el momento, las elecciones de junio de 2016 arrojaron un fiasco para la alianza Unidos Podemos. Logró 71 diputados, los mismos que seis meses antes habían sacado por separado (69+2), si bien ahora con algunos escaños menos para Podemos y algunos más para IU. Pero lo más significativo era que la coalición había perdido un millón de votos con respecto a los obtenidos por ambos seis meses antes cuando concurrieron por separado, lo que en porcentaje suponía una pérdida de tres puntos relativos, quedando en el 21%. Relevante era también constatar las fuertes caídas de votos en las tres comunidades en las que ya habían ido en coalición en 2015 y también en Madrid[39]. Entre los demás graneros electorales, sólo en Andalucía y el País Vasco los votos de Unidos Podemos fueron ligeramente mejores que en diciembre, ganando un diputado en ambas comunidades, si bien en Andalucía los votos quedaron lejos de la suma que había registrado por separado[40].

El PSOE también retrocedió y el PP elevó sus diputados. Sin disponer de mayoría absoluta, y tras un amago por reeditar las estériles disputas de los meses anteriores, la parte del PSOE opuesta a su líder decidió dar un golpe de mano e impuso que sus parlamentarios se abstuvieran –no lo hicieron todos– para que el PP pudiera formar gobierno. Un broche nefando para todos los partidos que no habían sido capaces de formar una mayoría alternativa. Negativo para Podemos porque no había logrado el objetivo de superar al PSOE (71 vs. 85), había perdido electorado, había diluido más su discurso y seguía sin disponer de más fuerza política que la electoral. Con 71 escaños, no tenía capacidad para

condicionar el curso político, mientras que en el seno de su grupo parlamentario las fuerzas coaligadas sí tenían capacidad para condicionar ciertas posiciones de Podemos.

Tocaba afrontar una travesía del desierto, comenzando por revisar las razones por las que se habían perdido tantos votos, apuntando hacia la infructuosa alianza con IU, la vana estrategia del sorpasso, la nula capacidad de movilización social y la ausencia de una organización dotada de mecanismos para llevar a cabo un paciente trabajo entre amplios grupos sociales.

En lugar de esa reflexión, la fracción mayoritaria de la dirección optó por emprender un rumbo escapista, una fuga hacia delante que, según ratificó la segunda Asamblea Ciudadana, también era mayoritaria entre los militantes de los círculos y los simpatizantes por medios telemáticos. Ni autocrítica, ni revisión de lo que había sucedido. Por tanto, ninguna responsabilidad de los dirigentes en lo que había pasado, salvo un genérico «claro que hemos cometido errores», inconcreto, imposible de someter a debate, e incapaz de aportar líneas de corrección. Lejos del poder político, sin cuestionar abiertamente el discurso de la transversalidad, las declaraciones de los líderes y la permanente sucesión de gestos llamativos fueron ubicando, de facto, la posición política de Podemos en los contornos de un partido radical de izquierda, con un querencia cada vez mayor por las posiciones testimoniales, más propias de IU y de Izquierda Anticapitalista, sin mecanismos para potenciar su acción política y definir un discurso de mayorías.

Un comportamiento acorazado con probadas cualidades para «salvar el alma» de la ideología y anestesiar las inquietudes acerca del futuro próximo. Reaparecían así los tics característicos de la izquierda radical, ahora complementados con los modos de comportamiento de los partidos parlamentarios. No se hicieron esperar las evidencias en ambos sentidos. De un lado, el gusto por las propuestas maximalistas, las expresiones despechadas como reacción a su posición en minoría y los ataques frontales contra aquellos a los que, a la vez, se proponen alianzas. De otro lado, el abuso de eufemismos, el retorcimiento de las verdades a medias y la abundancia de expresiones vacuas. Síntomas que parecen apuntar a un viaje de vuelta con tanta rapidez como lo fue su irrupción ascendente.

No obstante, siendo corto el intervalo de tiempo transcurrido, las sombras que arroja el recorrido desde el verano de 2016 no admiten valoraciones tajantes ni vaticinios concluyentes sobre lo que puede deparar la escena política española.

El malestar social sigue latente y, en consecuencia, también lo están los regueros de disidencia, aunque sean estrechos los cauces para su desarrollo. A la vez, los militantes socialistas expresan periódicamente su descontento por los corsés a que está sometida la vida política y orgánica del PSOE. También está pendiente una reflexión a fondo sobre las buenas y las malas experiencias cosechadas por Izquierda Unida y Podemos, que podrían animar a forjar mejores contribuciones que las que actualmente parecen ofrecer.

[1] Un mes antes, en junio de aquel 1976, con Arias al frente del gobierno, las Cortes se habían negado a eliminar del Código Penal que la afiliación a un partido político fuese delito. Es un hecho que la decisión de colocar a Suárez como jefe de gobierno expresaba el propósito de acabar con el involucionismo vigente. Otro asunto bien distinto, que queda fuera del análisis de este capítulo, es el increíble mito de que existiera un proyecto concebido años atrás por el rey y sus asesores, celosamente guardado hasta el momento oportuno, para poner en marcha un sistema político democrático.

[2] Aunque Suárez se cuidó de enviar mensajes halagüeños acerca de que, con un sistema electoral adecuado, los miembros de aquellas Cortes podrían reconvertirse en futuros diputados y senadores.

[3] Sintomáticamente esos tres representantes recalarían meses después en el partido creado por Suárez (UCD), Joaquín Satrústegui, Francisco Fernández Ordoñez y Antón Cañellas.

[4] De hecho, más adelante una parte de las negociaciones las llegó a cabo una subcomisión de la «Comisión de Nueve» cuya composición aún era más adversa ya que estuvo formada por cuatro representantes: González, del PSOE; Jáuregui, del PNV; Satrústegui como liberal, y Cañellas como demócrata-cristiano.

[5] La amnistía general no se produjo hasta después de las elecciones cuando, en octubre, el parlamento aprobó una ley referida tanto a los delitos imputados a los militantes antifranquistas como a los delitos cometidos por las filas franquistas.

[6] Con anterioridad, en 1976, es probable que la influencia de esa perspectiva «a la italiana» influyera en la decisión tomada por los dirigentes comunistas que lideraban Comisiones Obreras de no apostar por la formación de una única organización de los trabajadores que mantuviera los rasgos asambleístas y

flexibles de CCOO, siendo tan reducida la presencia de UGT y de otros sindicatos en los movimientos reivindicativos y en los centros de trabajo. En lugar de esa alternativa, el congreso de CCOO optó por crear un sindicato tradicional con afiliados y órganos cerrados de dirección.

[7] El PTE y la ORT tenían sus propios sindicatos minoritarios, CSUT y SU, mientras que LCR y MCE trabajaban en Comisiones Obreras.

[8] PTE lo hizo como Frente Democrático de Izquierdas; ORT como Agrupación Electoral de Trabajadores; MCE como Candidatura de Unidad Popular; y LCR como Frente por la Unidad de los Trabajadores. Cada uno de ellos integró a personas independientes y a otros pequeños partidos con los que dar sentido a esos nombres.

[9] De hecho, hubo una abstención electoral relativamente baja, en torno al 22%.

[10] El sistema era de tipo proporcional pero bastante corregido. Otorgaba dos diputados a cada circunscripción provincial y otro más por cada 114.000 habitantes, exigiéndose un mínimo del 3% de los votos para participar en el reparto. Las candidaturas se presentaban en listas cerradas y bloqueadas.

[11] El PSP se presentó con pequeños partidos socialistas regionales, siendo castigado por el sistema de reparto que redujo su 4,5% de los votos al 1,7% de los diputados. Otra formación de izquierdas, Euskadiko Ezkerra, obtuvo un diputado pese a lograr sólo el 0,3% de los votos a escala estatal, pero superando el 3% en su circunscripción porque la mayor parte se concentraba en Guipúzcoa. Ambos, PSP y EE, se integraron más adelante en el PSOE.

[12] El FDI, rótulo del PTE, tuvo 123.000 votos, menos del 0,7%, con el único consuelo de que en Cataluña se había presentado formando parte de la coalición Esquerra de Catalunya-Front Electoral Democràtic, que, con 122.000 votos, sí logró un diputado, Heribert Barrera, que pertenecía a la casi inexistente ERC. AET, el rótulo de ORT, no alcanzó los 80.000 votos, y los demás tuvieron menos.

[13] Las fuerzas nacionalistas del País Vasco y Cataluña serían mejores apoyos cuando UCD necesitase mayorías desde la derecha. El PNV tuvo 8 diputados y el Pacte Democràtic per Catalunya (una coalición electoral catalana, antecedente de Convergència i Unió) obtuvo 11.

[14] Se aludía a un cuarto desequilibrio, el aumento del desempleo, pero como se muestra a continuación las medidas aprobadas no sólo se desentendieron de su reconducción, sino que provocaron un incremento más rápido del desempleo.

[15] También lo firmaron Convergència Socialista de Catalunya y la Federación Catalana del PSOE que se hallaban en proceso de fusión.

[16] De hecho, a las puertas de las segundas elecciones, en 1979 ningún partido estuvo dispuesto a prorrogar los pactos.

[17] De hecho, cuando en 1979 volvieron a recrudecerse los desequilibrios macroeconómicos, ante la imposibilidad de sellar un nuevo pacto, el gobierno de Suárez aplicó de forma unilateral una política económica que reeditaba la de los Pactos de la Moncloa. Como veremos, lo mismo hizo el primer gobierno socialista en 1982.

[18] La amnistía incluía «los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley»; y «los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas».

[19] De los siete miembros, tres pertenecían a UCD y los demás al PSOE, Minoría Catalana (cedido por el PSOE), PCE y AP.

[20] Frente a los 325 votos afirmativos, los votos negativos fueron 4 de AP y 1 de Euskadiko Ezkerra; las 14 abstenciones eran 7 del PNV, 3 de AP, 2 de UCD, 1 de Minoría Catalana y 1 de Esquerra Republicana de Catalunya.

[21] R. Arias-Salgado (1988), «Una perspectiva de la transición española a la democracia», Cuenta y Razón 41, p. 82.

[22] J. M. Maravall (1980), «La alternativa socialista: la política y el apoyo electoral del PSOE», Sistema 35, pp. 3-48.

[23] El debate tuvo una deriva paradójica, pues Felipe González planteó que, si se acordaba mantener la referencia al marxismo, él abandonaría el liderazgo del partido. Lo que en efecto ocurrió. Cuando el congreso votó a favor de que continuase la referencia, González presentó su dimisión. Pero entonces los dirigentes que habían defendido la propuesta vencedora no aceptaron formar una

candidatura para liderar el partido, por lo que este quedó interinamente en manos de una comisión gestora que preparó un nuevo congreso para meses después. Celebrado este, la propuesta defendida por González para abandonar la referencia expresa que vinculaba al PSOE con el marxismo obtuvo una amplísima mayoría y él volvió a encabezar la dirección elegida en el congreso.

[24] En ese tiempo el PSOE absorbió al PSP y los dirigentes socialistas establecieron los criterios que después aplicarían con los dirigentes y cuadros medios provenientes del PCE y de otros partidos comunistas, o también de UCD, de modo que no llegasen a ocupar puestos de relevancia en la estructura de decisión jerárquica del partido.

[25] UCD obtuvo 168 diputados. PSOE logró el 30,5% de votos y el 34,5% de diputados (121). PCE se acercó al 11% de votos pero sólo tuvo el 6,6% de diputados (23); AP, bajo el cartel de Coalición Democrática, redujo su cuota de votos al 6% y, castigada por el sistema electoral, sólo obtuvo el 2% de los escaños (10). La ultraderecha fascista asomó con un diputado. PNV y CiU redujeron su presencia a 7 y 8 diputados respectivamente, mientras emergían el Partido Andalucista (5), Herri Batasuna (3) y una coalición canaria de izquierdas (1), siguiendo con su diputado el Partido Aragonés, de derechas, y Euskadiko Ezkerra.

[26] El PTE obtuvo 193.000 votos, la ORT 128.000 y el MC, coaligado a otro partido (OIC), 85.000. Entre los tres no sumaron medio millón de votos (2,3%), muy lejos de los 1,9 millones del PCE y más aún de los 5,5 millones del PSOE.

[27] Entre los dirigentes expulsados figuraban Manuel Azcárate, Pilar Brabo, Alonso Zaldívar y Julio Segura. La sentencia llegó en 1982, tras la estrepitosa caída electoral hasta una cuota inferior al 4% de los votos, acelerando el goteo de abandonos; unos ingresaron en el PSOE y otros dejaron la militancia política.

[28] Como símbolo postrero de su débil implantación, en las elecciones autonómicas de Cataluña de 1980 concurrieron en una única candidatura los restos del PTE y de Bandera Roja, con MC y LCR, obteniendo 30.000 votos, apenas el 1,2% del total.

[29] AP obtuvo el 26% de votos y el 30% de escaños; UCD 6,8% y 3,4%; PCE 4% y 1,1%; PNV 1,9% y 2,3%; CIU 3,7% y 3,4%.

[30] El programa contenía una redacción que ya no era la posición original que

se oponía a la OTAN, ni la de «De entrada, no», sino más matizada. Aclaraba que el PSOE era contrario a la política de bloques militares y que, con respecto a la OTAN, el gobierno «trabajaría por elevar el grado de autonomía y desvincularse del plano militar». El compromiso quedaba circunscrito, primero, a paralizar las negociaciones para integrarse en el plano militar y, después, a convocar un referéndum sobre la permanencia.

[31] Las negociaciones con la CEE tampoco ayudaban a afrontar el problema, puesto que los representantes comunitarios estaban interesados en que se produjera una drástica reducción de las capacidades productivas españolas en esos sectores y exigían al gobierno que quedara resuelta la reestructuración de la industria antes de que se produjera el ingreso.

[32] En 1986, con el 44% de votos, obtuvo el 53% de los escaños, con 184 diputados; en 1989 bajó del 40% de votos y retuvo el 50% de los escaños, con 175 diputados; en 1993, la leve caída al 39% de votos le otorgó el 45% de los escaños, con 159 diputados. En las tres convocatorias, los escaños logrados por la antigua AP, primero como Coalición Popular y luego como Partido Popular fueron: 105, 107 y 141; ascenso favorecido por la desaparición del Centro Democrático y Social (el nuevo partido de Suárez) que anteriormente disponía de unos 20 diputados.

[33] Aunque todavía se mantienen puntos oscuros, es probable que en el «caso GAL», el terrorismo de Estado utilizado contra ETA, el propio gobierno socialista se hubiera visto enredado por esas tramas. Los grupos formados para llevar a cabo aquella guerra sucia existían desde años antes con diversos nombres, utilizando el de GAL desde 1983 e integrando en la comisión de sus delitos a varios mandos del ejército y la policía, junto con algunos cuadros socialistas.

Tiempo después, en los años noventa, tampoco fue desdeñable el traspié involucionista de una Ley de Seguridad Ciudadana que abría la puerta a la inseguridad en el ejercicio de los derechos ciudadanos.

[34] Previamente, ya en el congreso del partido celebrado en diciembre de 1984, a pesar del control que ejercían sobre las delegaciones, González, Guerra y otros líderes tuvieron que volcarse para lograr que la posición favorable a permanecer en la OTAN ganara por 412 votos frente a 126 contrarios y 42 abstenciones. Después, en el referéndum de marzo de 1976, la permanencia obtuvo un 52,5%

de los votos frente al 36% en contra, con una significativa abstención del 40%.

[35] En 1984, otro de los viejos líderes de la época del exilio, Ignacio Gallego, fundó un partido (PCPE) prosoviético que no tuvo ningún futuro político. En 1985, Santiago Carrillo fue expulsado y fundó otro partido (PTE-UC) que tampoco tuvo ningún recorrido y cuyos militantes, salvo el propio Carrillo, terminaron ingresando en el PSOE.

[36] Las tesis de Laclau se alejan en aspectos fundamentales de las formulaciones marxistas e incorporan elementos del psicoanálisis en la versión de Jacques Lacan, y de los enfoques filosóficos de Jacques Derrida y Michel Foucault. Era este último quien sostenía que «los discursos son prácticas que crean su sujeto». Véanse E. Laclau y Ch. Mouffe (2015), Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia, Madrid, Siglo XXI; E. Laclau (2013), La razón populista, México, Fondo de Cultura Económica; E. Laclau (1996), Emancipation(s), Londres, Verso.

[37] Las fracciones hostiles al secretario general, Pedro Sánchez, pusieron difícil cualquier tipo de pacto de gobierno, reclamando el control último sobre las decisiones. Esa exigencia se ajustaba formalmente a lo escrito en los estatutos, pero nunca antes ese comité lo había reclamado, sino que a posteriori secundaba fielmente lo decidido por el líder. Ahora se reflejaba con claridad la desconfianza política hacia quien era el secretario general.

[38] Con sobrada razón, desde las filas de Podemos se quejaban de las continuas campañas en su contra emprendidas por muchos medios de comunicación, unas veces a partir de hechos inventados y otras por hechos ciertos y exponencialmente amplificados o tergiversados. No obstante, qué otra cosa era de esperar si apuntaban su crítica hacia los poderes dominantes. Dando por sentado el desencadenamiento de tales campañas, se trataba de proporcionar los menos motivos posibles y de disponer de antídotos con los que paliar su impacto en los sectores sociales en los que pretendían disputar la hegemonía de discursos.

[39] Comparando los datos de diciembre de 2015 y junio de 2016, en Cataluña, la misma coalición mantuvo los escaños (12) y redujo sus votos en 80.000; en Galicia, la misma coalición perdió un escaño (5) y 64.000 votos; y en la Comunidad Valenciana, aliados con Compromís, mantuvo los escaños (9), y redujo los votos en 15.000. En Madrid, Podemos perdió 20.000 votos, sin contar

los casi 190.000 que había obtenido IU, si bien la coalición retuvo el número de escaños (8) que tenía antes.

[40] En Andalucía Unidos Podemos obtuvo cerca de 790.000 votos (18,6%), mientras que previamente por separado habían alcanzado 794.000+256.000 votos, el 22,7% en conjunto; gracias al reparto electoral, los 10 diputados de Podemos se convirtieron en 11 de la coalición. En el País Vasco Unidos con votos casi similares elevaron la cuota electoral (29%) y los diputados (6) gracias a una mayor abstención.

Epílogo

Si lo intentas bien, algunas veces puedes conseguir lo que pretendes

Cuentan las crónicas musicales que, en el emblemático 1968, Beatles y Rolling Stones grabaron dos célebres canciones que indirectamente hacían referencia a los sucesos políticos de la época. Mick Jagger había participado en la gran manifestación celebrada en Londres contra la guerra de Vietnam, mientras John Lennon se encontraba con sus compañeros en la India practicando meditación trascendental. A su regreso, cuando le llegaron las críticas por su ausencia en las protestas, Lennon compuso Revolution. Cada una de las estrofas comenzaba aludiendo a las buenas intenciones, después mencionaba algún reparo y terminaba negando el apoyo. En aquellos meses, Jagger compuso You can't always get what you want, cuyas estrofas empezaban con ese «No siempre puedes conseguir lo que quieres», para agregar a continuación «pero si lo intentas algunas veces puedes encontrarlo y conseguir lo que deseas».

Un diálogo musical que bien podría considerarse como el reflejo de la confrontación que, con mil caras, han mantenido históricamente distintos sectores de los movimientos sociales, unos combativos y politizados, otros cautelosos y moderados. Forzando más la referencia parabólica, se podría extrapolar al contraste que caracterizó el recorrido de las organizaciones obreras desde su nacimiento hasta su ocaso, tensado entre dos posiciones: una con propósitos ambiciosos y ritmo presuroso; y otra con medidas pacatas y ritmo premioso.

Este epílogo afronta posibles respuestas que pueden ofrecerse a las preguntas planteadas al comienzo del libro, si bien resulta necesario aquilatar con precisión si los interrogantes ponen el acento en los objetivos socialistas del proyecto o en la actividad desarrollada y los resultados conseguidos por los partidos obreros. No es lo mismo responder a por qué no se ha alumbrado un camino real hacia una sociedad socialista, como proponían las distintas versiones del proyecto, que responder a cómo han actuado y qué han conseguido los partidos obreros a lo largo de una trayectoria animada por aquel objetivo.

El primer interrogante necesita que se someta a consideración la formulación misma del objetivo, tomando en cuenta los requisitos con los que se dotaba de contenido a la sociedad propuesta, sopesando en qué medida se trataba de una combinación de ideales y/o de propósitos verosímiles. El segundo interrogante apunta a los procesos reales cuyo esclarecimiento se ha ido abordando en los sucesivos capítulos, atendiendo al cruce de los factores causales propuestos al comenzar el libro; unos, dependientes de los partidos obreros y otros externos a ellos, pero igualmente condicionantes de su actuación. Al final, como es lógico, ambos interrogantes se hallan articulados, pero si se toma la precaución de discernirlos se puede establecer mejor cuál es el criterio de contraste, a modo de espejo en el que mirarse: ¿el trayecto recorrido durante más de un siglo de desarrollo del movimiento obrero y de sus partidos, o el ideal propuesto como final del trayecto?

LA TRAYECTORIA DE UN CICLO VITAL

La situación creada a partir de los años ochenta del siglo XX puede considerarse como el tiempo en el que se produjo el repliegue histórico de los movimientos y los partidos obreros. Ambos habían sido los nutrientes que alimentaron las esperanzas de quienes aspiraban a transformar la sociedad capitalista para construir otra de carácter socialista. Ambos habían sido los protagonistas centrales de las batallas sociales y democráticas. En su origen, los partidos socialistas y comunistas asumieron la apuesta histórica de defender a los trabajadores y de ejercer como catalizadores de movimientos políticos que hicieran posible lograr una sociedad que acabara con las condiciones de explotación y opresión generadas por el capitalismo. Ese desafío era, en primer término, una apuesta por el desarrollo de un movimiento político cuya columna vertebral eran los obreros, ya que, por su posición en el sistema productivo, constituían la clase o grupo social más homogéneo, numeroso y combativo para enfrentarse a los defensores del capitalismo. La misión de los partidos consistía en tomar esas condiciones favorables de la clase obrera para desarrollar la fortaleza política que permitiera disputar el poder a las clases dominantes.

Nacieron, pues, para nadar contracorriente, puesto que el dominio de esas clases dominantes era una cruda y perseverante realidad, tratándose de un poder

poliédrico que ejercían en la economía, las estructuras políticas, las ideas imperantes, los comportamientos sociales y las tradiciones arrastradas. La apuesta de las organizaciones obreras era la sustancia de un proyecto emancipador que pretendía abrirse camino contra dicho poder hegemónico. La metáfora comunista de Marx y Engels que fecundó el nacimiento de una parte de los partidos obreros aportaba dos grandes alivios ante tamaña adversidad. Uno era proclamar que la meta de la sociedad socialista estaba garantizada por el curso lógico de la historia. El otro era que los éxitos del capitalismo favorecían la causa socialista en la medida en que un mayor desarrollo capitalista daba lugar a una clase obrera más explotada, más pobre, y más privada de derechos; lo que, sumado a que era la clase más numerosa y homogénea, fomentaría la toma de conciencia y la capacidad de lucha a favor del proyecto de emancipación. Dando un paso más, tirando del hilo planteado por los creadores de la metáfora, los teóricos del partido socialista alemán formularon una ventaja adicional: el capitalismo estaba abocado a una crisis económica terminal crearía las condiciones para que, mediante una huelga general, la clase obrera se hiciese con el poder del Estado.

No se precisa hacer ningún esfuerzo de memoria ni de análisis para constatar que esos tres alivios no han existido y que los vaticinios a favor del proyecto no se han cumplido. El capitalismo continúa siendo el sistema que rige la organización económica y social de los países europeos desarrollados. Ni siquiera se ha producido un pulso político directo, pues no ha registrado ningún momento en el que el movimiento obrero y sus organizaciones políticas hayan amenazado de manera inminente la continuidad de los poderes que sustentan el sistema capitalista. Tampoco se percibe señal alguna que indique que la historia camina hacia un destino predeterminado. Sin embargo, al mismo tiempo, en el curso de más de un siglo han sucedido demasiadas cosas y mucho han cambiado las sociedades europeas merced al protagonismo del movimiento obrero y de sus organizaciones.

Tiempos de juventud: el futuro como meta cercana

En plena fase ascendente de los primeros países que se industrializaron, los obreros fabriles se convirtieron, efectivamente, en un colectivo social cada vez

más numeroso y con unas condiciones de trabajo y de vida relativamente homogéneas, concentrados en fábricas cuyo tamaño iba creciendo y en barrios periféricos de ciudades cuyas poblaciones aumentaban con rapidez. Los sindicatos intensificaron las demandas laborales y sociales, organizaron a un gran número de afiliados y alcanzaron una creciente capacidad negociadora frente a los empresarios. Los partidos socialistas ganaron presencia en la escena política hasta convertirse, según los países, en la segunda o la primera fuerza nacional.

No obstante, en el intervalo de las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, ninguno de esos partidos socialistas que cobraban fuerza política situó como eje central la confrontación directa por la conquista del poder político: ni se lo propusieron, ni hubieran podido lograrlo. Las respectivas versiones del proyecto socialista (laboristas y marxistas) quedaron como referencias de última instancia, como meta que servía para elaborar discursos estratégicos con los que cohesionar la cultura política de la militancia, con los que atraer a futuros militantes, con los que identificar la marca ideológica de los partidos y, a fin de cuentas, con los que trazar el vínculo entre la actuación del presente y las aspiraciones futuras. Sólo los partidos carentes de fuerza política, sin incidencia real en los acontecimientos, siguieron poniendo el énfasis en esas aspiraciones últimas, con discursos radicales que justificaban propuestas maximalistas y limitaban su radio de acción y su escasa influencia social.

El hecho de que el acrecentamiento de la fuerza política no condujese a disputas frontales por el poder político puede explicarse, en primer término, por la superioridad de las fuerzas que detentaban ese poder y su capacidad para desarrollar mecanismos inhibitorios que limitaban o desactivaban la acción colectiva de los obreros y otros sectores oprimidos. En países como Alemania, bajo un sistema político autoritario, operaron por encima de todo los mecanismos de carácter represivo. El rápido aumento de la presencia parlamentaria del SPD y de su influencia política en la sociedad nunca pudo hacer frente a la muy superior fuerza militar y a los apoyos políticos del régimen imperial. En Francia, Gran Bretaña y otros países desarrollados, los grupos dominantes también emplearon resortes represivos (penales y laborales), a veces con gran dureza, contra determinadas movilizaciones obreras y a veces como elemento disuasivo para que tales movilizaciones no se llevaran a cabo. Sin embargo, la institucionalización de sistemas parlamentarios basados en los atributos de la democracia política hizo que cobraran mayor importancia inhibitoria los mecanismos relacionados con el dominio ideológico. Una

colección de instituciones, ideas, valores y comportamientos que favorecían la reproducción del poder se hizo hegemónica entre amplios sectores obreros y demás grupos de trabajadores, haciendo que asumieran su condición subalterna.

Los mecanismos inhibitorios formaron pareja como factor causal con los cambios habidos en la estructura social durante aquellas décadas. Ciertamente, el desarrollo capitalista impulsó el rápido aumento del número de obreros fabriles y del conjunto de los asalariados. Al mismo tiempo, la especialización técnica de ciertos puestos de trabajo en las grandes empresas, la especialización productiva entre industrias y la expansión de los servicios crearon diferencias, sobre todo, entre los obreros fabriles, los demás grupos asalariados y quienes malvivían con otros trabajos o carecían de ellos.

Una dinámica de homogeneidades y diversidades que aprovecharon los empresarios y los gobiernos para ahondar las diferencias, fomentando divisiones que dificultaban la articulación de intereses comunes. Servían para ello los estímulos materiales que escalonaban las categorías jerárquicas, generaban disparidades salariales, discriminaban las formas de promoción laboral y fragmentaban las expectativas. Servían también otros elementos con los que azuzar la disgregación por zonas de procedencia de los obreros –según fueran nativos o inmigrantes desde otras regiones y países–, las distinciones derivadas de las creencias religiosas u otras vinculadas a los valores tradicionales, en los que sembrar los mecanismos inhibitorios a favor de la disciplina ante la autoridad y el orden, inculcados por las familias, las escuelas y las iglesias.

Sin embargo, entre las características de la estructura social, el alejamiento de las condiciones de miserabilismo –debido a las mejoras de los salarios y otras demandas laborales– no parece que fuera por sí mismo un factor determinante para el desarrollo de los sindicatos y de la fuerza política de los partidos obreros. Así lo pone de manifiesto la comparación de las experiencias británica y alemana. En Gran Bretaña, el aumento de los salarios y otras demandas laborales se concentró en los núcleos obreros más cualificados, que eran también los que contaban con mayor afiliación e influencia en los sindicatos, y a través de estos en el Partido Laborista; mientras que los segmentos con menor cualificación laboral aportaban menor afiliación y tenían una menor influencia en las trade unions. Por el contrario, en Alemania, donde el desarrollo capitalista fue más tardío, pero a la vez más acelerado, concentrado y tecnológicamente avanzado, los obreros obtuvieron rápidas mejoras salariales y laborales, que también fueron mayores para quienes tenían más cualificación, pero las diferencias derivadas de

la formación profesional y de la ubicación en distintos sectores industriales no impidieron la afiliación masiva a los sindicatos y el acrecentamiento del apoyo político al Partido Socialdemócrata entre una gran mayoría de los asalariados, lo que redundó en su temprano y fuerte crecimiento electoral[1].

Siendo así, parece que los mecanismos inhibidores y la estructura social fueron decisivos para garantizar el statu quo dominante de aquellas décadas, prevaleciendo sobre las causas que se derivaron de los factores asociados a las características de los partidos obreros, relativas al proyecto y el discurso, la acción política y la organización interna.

Los objetivos y las estrategias de los partidos socialistas de Alemania, Francia, España, Italia y otros nacieron con la impronta doctrinaria de Marx y Engels. Apostaban por un discurso basado en el desarrollo de las condiciones revolucionarias que harían posible la conquista del poder político por los trabajadores, como premisa sine qua non para construir el socialismo. Por su parte, los partidos socialistas de Gran Bretaña, Suecia y otros respondían a objetivos socialistas más eclécticos y genéricos, sólo tangenciales con los principios marxistas, y elaboraron un discurso en el que el control del poder estatal y la adopción de medidas socialistas se producirían a través de una estrategia gradual, sin rupturas de carácter revolucionario. Sin embargo, entre los partidos marxistas, el SPD alemán se formó mucho antes y registró un fulgurante ascenso político, no sólo electoral, mientras que el partido francés (SFIO) tardó tiempo en aglutinar a diversas tendencias y su fuerza política se acrecentó lentamente, sin lograr nunca la potencia del SPD. Este hecho asemejaba más a la SFIO con el Partido Laborista británico, cuya creación también fue más tardía y cuya fuerza política aumentó más modestamente. Mientras que las semejanzas del SPD cabe establecerlas con el partido sueco (SAP), ya que, a pesar de las grandes diferencias de sus discursos, ambos cobraron gran fuerza en sus respectivos escenarios políticos.

Desde el punto de vista de la relación entre los discursos estratégicos y las líneas políticas de actuación, todos los partidos destacaron por su compromiso y sus dosis de combatividad en la defensa de los derechos sociales y democráticos de los trabajadores; si bien con diferencias notorias en cuanto al alcance práctico de sus propuestas y el grado de atrevimiento de sus acciones movilizadoras. El SPD fue pionero, entre los partidos de inspiración marxista, en reubicar la funcionalidad de su discurso revolucionario –hacia la cohesión interna y la demarcación ideológica– para dar preferencia a una acción política de carácter

reformista, sumamente pragmática ante las restricciones existentes. La tesis acerca de un hipotético punto de ruptura revolucionario sin especificación temporal, que sería cuando detonase una crisis final del capitalismo, proporcionaba un holgado margen para justificar que, mientras tanto, la práctica reformista era la adecuada. Por el contrario la SFIO, con similar matriz marxista, mantuvo un mayor aferramiento al discurso que enfatizaba la apuesta por el proceso revolucionario y la preferencia por actuaciones radicales, atemperadas por la influencia de la fracción reformista liderada por Jaurès.

También fueron distintos los caminos de SPD y SFIO en lo concerniente a las relaciones partido-sindicato. En Alemania, funcionaron al unísono y siempre el partido dirigió al sindicato, cuyos dirigentes lo eran también del partido y su actuación se ceñía a la línea marcada por el SPD. En Francia, la CGT retuvo la influencia del anarcosindicalismo y, durante aquellas décadas, rivalizó con la SFIO en el propósito de impulsar movilizaciones políticas. Las diferencias fueron igualmente notorias con respecto al establecimiento de alianzas y sus consecuencias. La existencia de un sistema político autoritario bajo el régimen imperial del káiser, junto con las escasas atribuciones que tenía el Bundestag, hacían que el SPD prestara bastante más importancia a sus vínculos con organizaciones sociales que favorecieran su acción política que a posibles acuerdos con unas fuerzas centristas que se iban decantando hacia la órbita política del káiser. En Francia, con un sistema democrático parlamentario, los frecuentes signos de sectarismo inducidos por sus posiciones radicales hicieron que la SFIO también rechazara las alianzas con los partidos republicanos centristas o liberales, lo que contribuía a su aislamiento político y mermaba su incidencia social[2].

Por el lado de los partidos sueco y británico, con discursos parecidos, se apreciaban diferencias significativas en su vínculo con la acción política. En el SAP, el discurso ejerció una función activa, insistiendo en proclamar su aspiración a avanzar hacia un modelo de sociedad justa, igualitaria y democrática, en aras de lo cual justificaba sus propuestas de reforma. Una posición compartida por la Confederación de Sindicatos Suecos (LO), de modo que el discurso estratégico ejercía una doble función relevante. Por un lado, servía para la cohesión interna de ambas militancias y el estrechamiento de los vínculos entre partido y sindicato. Por otro lado, servía de referencia para implementar sus respectivas actuaciones reformistas. En el laborismo británico, el discurso quedó más relegado y fueron las aspiraciones reformistas de las trade unions las que ejercieron como principal elemento de cohesión interna y de

movilización obrera. Motivo por el que los líderes sindicales siguieron siendo los más influyentes en las decisiones políticas del partido. Con respecto a la posición favorable a las alianzas con partidos liberales, los dos partidos mantuvieron un comportamiento similar, con resultados bastante mejores para el SAP que para los laboristas británicos.

Por último, el funcionamiento orgánico de los partidos no parece que presentara diferencias que pudieran ser consideradas como un factor influyente durante aquel periodo. La posición prominente de los parlamentarios y otros cargos públicos en las decisiones políticas fue un rasgo común a todos los partidos, entre otras razones porque los principales líderes políticos y sindicales eran también parlamentarios y la actividad parlamentaria fue adquiriendo mayor relevancia en su acción política. Al mismo tiempo, la jerarquización de las relaciones entre los distintos niveles orgánicos abonó el terreno hacia un funcionamiento vertical con inevitables dosis de autoritarismo. Conforme aumentaba la afiliación, los dirigentes buscaban formas de disciplinar al colectivo de militantes en aras de cohesionar sus filas y de garantizar la eficacia de la acción política. Cuanta mayor afiliación contaran, mayor presencia de cargos públicos y mayor número de organismos internos tuvieran los partidos –con el SPD a la cabeza con gran distancia de los demás–, más necesidad tenían de establecer criterios y formas orgánicas con que garantizar la cohesión y la unidad de acción.

La madurez al compás de disrupciones contingentes

Los factores contingentes son sucesos históricos que se producen sin que necesariamente se deriven de las condiciones previas, sino que estas precisan de otros eventos episódicos sin los cuales se habrían configurado escenarios distintos a los que tuvieron lugar. En ese sentido, es imprescindible destacar los decisivos impactos que causaron cuatro factores con esas características en el devenir de los partidos obreros: el estallido de la Gran Guerra, el Tratado de Versalles impuesto a Alemania por las potencias que ganaron la guerra, el rupturismo patrocinado por la III Internacional y el escenario resultante de la Segunda Guerra Mundial.

El paso del tiempo consolidó la tesis de que el ascenso económico y el fortalecimiento militar de la Alemania imperial abocaron de manera irremediable a un conflicto militar en gran escala, debido a la feroz competencia capitalista y el reparto de territorios coloniales que se había realizado décadas antes. Ciertamente, esa competencia y ese reparto eran focos de conflictos agudos entre las grandes potencias, lo que aumentaba la probabilidad de choques militares. Sin embargo, esas premisas no tenían por qué conducir al desencadenamiento de una guerra abierta; menos aún a que fuera tan generalizada y encarnizada como la que tuvo lugar entre 1914 y 1918; y todavía menos a que las posiciones de los partidos obreros nacionales tuvieran que ser las que en efecto adoptaron.

Durante los años previos al estallido resultaba evidente que el exacerbamiento de los ánimos nacionalistas, militaristas y xenófobos perjudicaba la acción política del SPD, la SFIO y otros partidos obreros del continente. Esos ánimos formaban parte del menú favorito de las fuerzas más derechistas y desplazaban de las preocupaciones públicas las cuestiones relativas al ejercicio democrático y a los problemas sociales, dando preferencia a otras afines a los idearios reaccionarios, que inevitablemente amenazaban el ejercicio y los valores de la democracia y se decantaban a favor del orden, la patria, la tradición y el ejército. Conscientes de ello, los partidos agrupados en la II Internacional se oponían a los propósitos beligerantes de nacionalistas y militaristas, defendiendo que, en caso de que estallara un conflicto, las organizaciones obreras se opondrían, se negarían al reclutamiento obligatorio y convocarían una huelga general. Si bien hacía tiempo que en los partidos obreros se constataba la existencia de sectores con actitudes favorables, o al menos benevolentes, hacia las prácticas imperialistas de sus gobiernos nacionales, defendiendo las ventajas que pudieran aportar para el crecimiento económico y la mejora de los salarios de los trabajadores. En ciertos partidos tampoco había recato a la hora de mostrar recelos hacia otras naciones, como ocurría en sectores del SPD que declaraban la animadversión que sentían hacia Rusia, fundida con el rechazo al régimen zarista, o en sectores de la SFIO hacia Alemania, fundida con el rechazo al Reich alemán y la evocación de la victoria prusiana sobre el ejército francés en Sedán.

Sin embargo, lo que ningún diagnóstico, por pesimista que fuera, podía prever era la rapidez con la que el SPD primero e inmediatamente después la SFIO y la CGT, el Partido Laborista y las trade unions, y así, uno tras otro, la mayoría de los partidos socialistas y de los sindicatos, cerraron filas en torno a sus gobiernos y a sus ejércitos. Primero apoyaron en sus respectivos parlamentos los créditos con los que financiar las necesidades militares, después se integraron en

gobiernos de unidad, quedando presos del compromiso incondicional con su ejército y anulados para defender las demandas sociales y democráticas, sacrificadas en aras de la unidad nacional. Llegados a ese punto, no había forma de escapar de aquel cepo reaccionario. Valores y símbolos referidos a la patria, la nación, la bandera y la victoria militar no podían tener otro significado que el patrocinado por los partidos conservadores. Una vez aceptadas las primeras decisiones, los partidos obreros estaban condenados a someterse a quienes ostentaban el poder político.

¿Qué otra cosa podrían haber hecho los dirigentes del SPD colocados en la disyuntiva de junio de 1914, siendo la primera fuerza parlamentaria de un Reichstag que, entre sus escasas atribuciones, estaba la aprobación del presupuesto? Resulta evidente el ventajismo de cualquier respuesta expresada un siglo después, pero al mismo tiempo es difícil congeniar con su actuación de entonces: al apoyar los créditos de guerra, mostraban su aquiescencia con un rumbo militar cuya conducción estaba en manos del káiser, de los altos mandos militares y de los grandes industriales. A continuación, su integración en un gobierno carente de las principales funciones políticas anuló la posibilidad de mantener cualquier postura autónoma. Los dirigentes socialistas guiaron sus decisiones por dos razones supremas: la razón de Estado, Alemania por encima de todo, y la razón de Partido, no poner en peligro la fuerza política alcanzada. Ciertamente, el SPD hubiera quedado expuesto a represalias que son imposibles de calibrar y a que sus dirigentes hubieran sido encarcelados, como lo fueron Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Clara Zetkin y demás líderes espartaquistas que se negaron en redondo a secundar a los dirigentes del SPD. Líderes como Hugo Hasse, Karl Kautsky y Eduard Bernstein, que al año siguiente se negaron a votar la renovación de los créditos de guerra, fueron expulsados del SPD, vituperados y condenados al ostracismo político.

El apoyo del SPD tuvo un efecto dominó en las decisiones nacionalistas de los demás partidos obreros, con escasas excepciones, arrastrando las mismas contradicciones cada vez que intentaron desmarcarse del cierre de filas exigido por el nacionalismo. Las crueles consecuencias de aquellas decisiones se prolongaron más allá de los años que duró guerra y constituyeron un factor decisivo en la desgraciada deriva que tuvo el SPD a raíz de los episodios de 1919-1920. La derrota militar dio paso al desmoronamiento del aparato estatal del Reich, y la abdicación del monarca supuso la proclamación de una república cuyos principales cargos provisionales fueron dirigentes del SPD y del escindido por la izquierda USPD, con el pleno apoyo de los consejos de obreros y soldados

extendidos por todo el país.

Las dos respuestas que se produjeron en aquella encrucijada marcaron a los socialistas alemanes y anularon la posibilidad de mantener la apuesta por una república firmemente asentada en los atributos de la democracia política y capaz de proporcionar importantes reformas económicas y sociales. De un lado, los líderes del SPD afrontaron la construcción de lo que era la primera experiencia de un sistema político democrático en Alemania sin poner en cuestión lo que había pasado desde 1914. Sin examinar sus responsabilidades, ni las muy superiores en las que habían incurrido los órganos del Estado imperial, en particular el ejército y los jueces, así como las ideas militaristas y nacionalistas que habían alentado el choque bélico. La falta de atrevimiento político y el nulo coraje transformador negaron cualquier posibilidad de oponerse a esos poderes y de generar reformas que dieran contenido social a la república que se estaba gestando. De otro lado, los líderes espartaquistas rechazaron esa actitud y el rumbo previsto de los acontecimientos, optando por embarcarse en la aventura imposible, suicida y fratricida de intentar una insurrección armada contra el SPD. Una decisión exasperada que desató una cadena de adversidades de gran calibre: aniquilamiento de los núcleos obreros más combativos, empujón a la derecha del SPD y vía libre para el fortalecimiento de las fuerzas reaccionarias.

Aquel momento de 1919-1920 fue culminante, pues, como volvería a repetirse en otras coyunturas de otros países, las oportunidades perdidas para lograr cambios de gran alcance originan después escenarios desfavorables que alejan la posibilidad de esos cambios. Evidentemente, en el fragor de los acontecimientos, los protagonistas desconocen que será así, pero lo cierto es que los errores que se cometen en tales coyunturas hacen que se desaproveche el potencial de cambio y se disipe la oportunidad de promover avances importantes.

El segundo factor contingente a considerar, el Tratado de Versalles, hizo que los efectos derivados de aquellos errores socialistas fueran más desgraciados. El ímpetu vengador del gobierno francés y de otros gobiernos aliados provocó que los acuerdos impuestos en Versalles se convirtieran en un dogal asfixiante para la economía y la sociedad de la Alemania derrotada. La pérdida de territorios y los elevados pagos financieros ahogaron cualquier posibilidad de recuperación económica y alimentaron el rencor nacionalista del vencido humillado. Esa incapacidad económica y ese rencor se volvieron contra el SPD y los otros partidos democráticos que componían el primer gobierno republicano, a los cuales les correspondió firmar la aceptación de las draconianas condiciones

impuestas; mientras que los ideólogos, políticos y militares alemanes que habían sido los mayores responsables de la guerra resurgían al calor de la indignación popular contra Versalles.

La república de Weimar estuvo condicionada por dos flaquezas de origen que permanecieron a lo largo de su corta vida: el mínimo aliento reformista del gobierno para satisfacer las demandas de los trabajadores y el acrecentamiento de las fuerzas opuestas a la democracia política, en una sociedad sin tradición democrática y sometida al bombardeo persistente de la ideología reaccionaria. También la tercera república francesa vivía bajo los efectos de un bombardeo similar desde que concluyó la guerra. Incapaz de levantar el vuelo de la economía, los dirigentes conservadores utilizaron el cebo del patriotismo para centrar la atención pública en la necesidad de que los acuerdos que se tomaran en Versalles castigaran de forma ejemplar al acérrimo enemigo fronterizo. Una vez logrado ese objetivo siguieron instigando para que el cumplimiento de los acuerdos fuera estricto, provocando que el ejército francés invadiera territorio alemán para exigir el pago de las reparaciones financieras. Una dinámica absolutamente nociva para la acción política de los partidos obreros de ambos países.

El tercer factor contingente fue la política rupturista de la III Internacional, con efectos devastadores en varios partidos socialistas y alumbrando unos partidos comunistas cuya brújula apuntaba al ataque continuado contra los socialistas. Los orígenes de aquel factor se remontaban también a la situación creada desde 1914. El abrazo de la causa nacionalista por parte de los dirigentes socialistas provocó la reacción de las fracciones que se oponían a la guerra. Primero los disidentes se reunieron en la Conferencia de Zimmerwald y después en la de Kienthal, donde se constataron dos diferencias importantes en torno a la posición política frente a la guerra y con respecto a la II Internacional a la que pertenecían los partidos socialistas. La primera discrepancia dividía a una mayoría que apostaba por lograr una paz que acabase con los enfrentamientos bélicos frente a una minoría agrupada en torno a Lenin que consideraba el estallido militar como un episodio favorable para promover la revolución en la medida en que la guerra entre naciones se convirtiera en guerras nacionales entre clases. La segunda discrepancia dividía a la mayoría que se decantaba por refundar la II Internacional frente a la minoría leninista que apostaba por la ruptura frontal para crear otra organización integrada exclusivamente por partidos revolucionarios.

Las disputas quedaron pendientes durante años. Entre tanto, se produjo la revolución rusa de octubre de 1917 y el final de la guerra mundial. Fue después, en 1919, cuando los dirigentes bolcheviques, con el poder en sus manos, pero absolutamente aislados y en plena guerra civil, decidieron convocar en Petrogrado una conferencia para fundar la III Internacional (Komintern). Un hecho que inicialmente atrajo el interés de sectores muy amplios de socialistas e incluso anarcosindicalistas de diferentes países, como ocurrió en España con las Juventudes Socialistas, la corriente tercerista del PSOE y la CNT. Sin embargo, al año siguiente, las célebres 21 condiciones aprobadas en el segundo congreso de la Komintern terminaron de perfilar los fines pretendidos por los líderes soviéticos. No sólo deseaban tener el control político y organizativo de la organización, sino que los partidos integrados debían cumplir con varias premisas: romper con los partidos socialistas en sus respectivos escenarios nacionales, considerarles enemigos frontales y crear organizaciones comunistas que respondieran al modelo leninista basado en el centralismo y la disciplina.

Este acuerdo precipitó el alejamiento de las organizaciones que disentían de tales premisas y empujó el debate escisionista al interior de los partidos socialistas. Los mayores destrozos afectaron a la SFIO en Francia y al USPD en Alemania, donde la salida de militantes fue masiva. Sin embargo, las consecuencias negativas fueron generales, puesto que incluso en los países donde las filas comunistas eran débiles la división originó odios cainitas, permanentemente alimentados porque cada cual tomaba al otro como enemigo al que debía oponerse por principio. La respuesta fratricida al esquema moderado-radical que había inaugurado la izquierda política en 1792, en el tercer año de la Revolución francesa, adoptó desde 1920 una versión socialista-comunista que después continuó con sucesivas escisiones entre comunistas.

Un enfrentamiento que se mantuvo durante las décadas posteriores. Cualquier pretexto servía como motivo de enconamiento y de sucesivas prácticas sectarias, sin que socialistas y comunistas se convencieran de que el resultado era perjudicial para ambos. En términos generales, durante aquellas décadas, los partidos socialistas relegaron por completo sus discursos estratégicos para ceñirse a una acción política orientada al centro, mientras que los partidos comunistas lo hicieron hacia la hiperideologización, traducida en una monótona repetición de dogmas y una acción política que les colocaba en la marginalidad. Con la excepción del siempre singular partido sueco (SAP), socialistas y comunistas fueron incapaces de ofrecer alternativas consistentes a la situación creada por la crisis internacional de 1929. Ante aquella situación naufragaron los

partidos socialistas que llegaron a gobernar en Alemania, Francia, Gran Bretaña o España, mientras los partidos comunistas seguían desprovistos de cualquier idea que no fuese atacar a los socialistas como fascistas, traidores y otras lindezas. No sería hasta mediados de los años treinta cuando el viraje de la Komintern, ante el ascenso nazi, permitió que se formalizaran las primeras formas de colaboración que llevaron a los frentes populares de Francia y España, con las derivaciones que se han expuesto en los capítulos III y VIII.

El cuarto factor contingente, el escenario de salida de la Segunda Guerra Mundial, sirve de enlace entre aquellos tiempos de pesadumbre y la Edad de Oro posterior. La trayectoria del régimen nazi desde el acceso de Hitler al poder en 1933 hizo más previsible el pronóstico de que sus pretensiones imperiales desencadenarían una nueva guerra europea. Sin embargo, en absoluto cabía prever el desenvolvimiento que condujo al final de la guerra y, menos aún, la situación que emergió en el continente hacia 1944: división en dos bloques dominados por EEUU y la URSS, y escenarios nacionales configurados a partir del comportamiento de los partidos durante la guerra. La potencia militar soviética sería empleada de manera recurrente por los partidos conservadores y algunos partidos socialistas como argumento contra los comunistas, a la vez que aconsejaba realizar reformas económicas y sociales que alejaran la posibilidad de que la población simpatizara con los partidos comunistas de Francia, Italia y otros con una influencia política muy superior a la que ostentaban antes del conflicto bélico.

Por consiguiente, si durante la edad juvenil de los partidos obreros su ascenso político se vio contrapuesto por la adversidad de los mecanismos inhibitorios y la composición de la estructura social, en la edad madura, durante el periodo de entreguerras, operaron unos factores contingentes que resultaron decisivos para el fortalecimiento de otros mecanismos inhibitorios –sobre todo los asociados al nacionalismo y el militarismo–, y para que se debilitara la acción política de los partidos obreros y se sembraran discordias fratricidas entre partidos socialistas y comunistas.

Del cénit a la senectud: el futuro como meta extraviada

La trayectoria seguida por los partidos obreros durante la segunda mitad del siglo XX puede considerarse como el tránsito por la madurez hacia la senectud, desde los mayores logros a la decadencia camino del ocaso. Un recorrido en el que se han ido entrecruzando los distintos factores condicionantes, a través de una compleja trama de secuencias en la que cada factor ha interaccionado con los demás.

En primer lugar, la estructura social operó de forma ambivalente durante la Edad de Oro y de manera adversa desde los años setenta para los propósitos de los partidos socialistas y comunistas. Por un lado, los cambios tecnológicos e institucionales que caracterizaron a las décadas doradas acrecentaron la figura del obrero especializado que formaba parte de las cadenas de fabricación en gran escala. Los pactos sindicatos-empresarios favorecían la generalización de las condiciones salariales y de trabajo entre talleres de una misma empresa, entre ramas de la industria, y eran la referencia para las negociaciones en los grandes servicios. La homogeneidad de las condiciones salariales alcanzó sus máximas cotas en Suecia mediante la aplicación de medidas de solidaridad entre los trabajadores.

Se produjo entonces una interacción positiva entre el desarrollo del movimiento obrero, la capacidad reivindicativa y organizativa de los sindicatos, las conquistas laborales, la fuerza política de los partidos obreros, la ampliación de derechos democráticos y las reformas sociales que garantizaba el estado de bienestar. Como consecuencia, los movimientos, sindicatos y partidos obreros se colocaron en el centro de la dinámica social y fueron decisivos en la consecución de derechos de ciudadanía para el conjunto de la población.

No obstante, también en aquel tiempo la especialización de la industria y la expansión de los servicios aportaban elementos centrífugos hacia la diversidad del tejido laboral y de la estructura social. Elementos que comenzaron a predominar sobre los anteriores durante la crisis de los años setenta, cuando el menor crecimiento y la inestabilidad de las economías dificultaban los pactos sociales. Esos elementos se acentuaron después a través de las innovaciones tecnológicas y la internacionalización de las grandes empresas, provocando variaciones decisivas en el empleo y en la negociación laboral.

El empleo se fue desproletarizando según descendía la presencia de los obreros fabriles y la ocupación en la industria, multiplicándose el empleo en actividades de servicios cada vez más diferenciadas. La intensa segmentación de los

trabajadores debilitó su cohesión, su capacidad de movilización y la fuerza negociadora de los sindicatos. Los derechos laborales que se habían conquistado comenzaron a ser cuestionados por los empresarios a medida que las grandes compañías desplegaban gran parte de su actividad fuera de las fronteras nacionales; jugando con la ventaja de disponer de estrategias transnacionales frente a unos sindicatos que dividían sus maltrechas fuerzas en los espacios nacionales. Muchos pactos se asemejaban a acuerdos de rendición en los que los sindicatos aceptaban ciertas pérdidas de salarios y/o derechos laborales para evitar pérdidas mayores (reducciones de plantilla, deslocalización de las empresas o asignación de producciones a filiales en otros países), que con frecuencia aceptaban años después en posteriores negociaciones.

En segundo lugar, los mecanismos inhibidores de la acción colectiva influyeron de manera persistente a lo largo del tiempo, aunque con distintos elementos preponderantes. Desde las décadas doradas perdieron relevancia los elementos vinculados al ejercicio represivo y a los valores asociados con las tradiciones y la religión. Lo que no significa que desaparecieran, pues ante determinadas situaciones conflictivas los empresarios y las elites políticas siguieron haciendo uso de la fuerza (despidos, aplicación del código penal) y de esos valores tradicionales. Sin embargo, en aquella época de bonanza económica los pactos sociales y los compromisos políticos llegaron a conformar un contrato social con el que hacer compatibles, de un lado, la dinámica de acumulación del capital y la posesión de los resortes fundamentales de poder en manos de los grupos dominantes; y, de otro lado, la mejora de las condiciones materiales y la disipación de ciertas inseguridades para la mayoría obrera y ciudadana.

La subalternidad de esa base social era la contrapartida a la satisfacción de unas aspiraciones de progreso, concretadas en la elevación paulatina de ingresos, capacidad de consumo y la mayor protección pública a través de servicios y prestaciones. La norma fordista (productividad-salario-consumo) y las facilidades de financiación garantizaban la mayor disponibilidad de productos. El estado de bienestar garantizaba la educación, la salud, otros servicios públicos y las prestaciones monetarias a través de diversos seguros y ayudas asistenciales. Los medios de comunicación (radios, televisión, periódicos y revistas), otros vehículos culturales (cine, literatura) y la labor del Estado eran mecanismos de transmisión de ese contrato, que dotaba a gran parte de los asalariados de un sentido de pertenencia a una difusa y mayoritaria clase media.

El contrato sufrió una primera conmoción en los años setenta bajo los efectos de

la crisis económica. El aumento del desempleo, la contención de los salarios, la inestabilidad monetaria y los desajustes fiscales de los gobiernos provocaron dudas acerca de la capacidad de consumo que aportaban los ingresos familiares y las protecciones sociales a cargo del Estado. Hubo un cierto rebrote de las movilizaciones sociales que demandaban la continuidad de los logros conseguidos. Seguidamente, en las últimas décadas se produjo un despliegue apoteósico del consumo ávido, mientras que se estancaban o incluso comenzaban a declinar algunas de las coberturas públicas del estado de bienestar. El intenso desarrollo del consumo perturbó las señas de identidad de los trabajadores, contribuyendo a que prevaleciera su posición privada como consumidores (poseedores de bienes) sobre su posición colectiva como trabajadores (asalariados contratados).

Una traslación de señas que depositaba sus expectativas en las facilidades de financiación para seguir elevando el consumo antes que en la mejora de los salarios mediante la actuación colectiva de los trabajadores. La idea de progreso ligada a la movilidad social se desplazaba desde los niveles de ingresos hacia los estándares de consumo. De ese modo, la pérdida de referentes daba lugar a que el empleo en condiciones laborales dignas y las prestaciones públicas con garantías –que anteriormente formaban parte de los derechos logrados– pasaran a ser consideradas como privilegios de los grupos de trabajadores que seguían manteniendo esas condiciones. A su vez, el Estado mermaba su función legitimadora y de cohesión social según dejaba de garantizar algunos de los derechos ciudadanos y aceptaba la privatización de servicios que antes eran públicos.

En tercer lugar, la existencia de factores contingentes influyó bajo formas dispares en la actividad de los partidos obreros. Durante la Edad de Oro operaron los aspectos ya indicados que concernían a la potencia militar de la URSS y al fortalecimiento de algunos partidos comunistas durante la Segunda Guerra Mundial. Sus principales efectos recayeron en el cambio de posición de los partidos socialistas (virando hacia el centro, acentuando su anticomunismo y a favor de la política internacional de EEUU) y la aceptación por parte de los partidos conservadores y los poderes económicos de ciertas reformas sociales, temiendo que el deterioro de las condiciones de los trabajadores sirviera como caldo de cultivo para que los partidos comunistas ganasen fuerza política.

Más tarde, nuevas contingencias influyeron en el curso de los respectivos escenarios nacionales. Una de ellas, desde el punto de vista de la situación de

cada país, fue el derrotero seguido por la Comunidad Económica Europea desde mediados de los años ochenta. La creación del mercado único y la moneda común fomentó la liberalización externa de las economías integradas y amplió las competencias de los órganos de la Unión Europea, convirtiéndolos en un factor de presión externa hacia los gobiernos y las economías nacionales, favoreciendo que las políticas económicas, los marcos laborales y los estados de bienestar se supeditaran a los condicionamientos de los mercados internacionales. Otros dos factores, imprevisibles apenas un año antes, fueron el derrumbe de la URSS y de su bloque de dominio, y la unificación de Alemania, seguida después de la decisión tomada por sus dirigentes de hacer valer su fuerza económica en las decisiones de la UE y de los países que integran el espacio europeo. Por último, la incorporación de China a la economía internacional y su nueva posición como potencia mundial ha contribuido, entre otras consecuencias, a empequeñecer la posición europea en el mundo, acentuando las restricciones externas de los países europeos. La convergencia de esos factores ha condicionado tanto la escena política nacional como la dinámica económica de los países europeos, afectando a la actividad de los partidos obreros.

Por lo que respecta a los factores internos que han correspondido a los propios partidos socialistas y comunistas, las modificaciones habidas presentan también un recorrido en el que se entrelazaban diversos elementos. En primer lugar, destacan con creces los hitos logrados por su acción política durante la Edad de Oro, merced a los movimientos promovidos por los sindicatos a favor de demandas laborales y por los partidos socialistas y/o comunistas, junto con otras organizaciones, para ampliar los derechos democráticos y las reformas sociales. La movilización sindical fue decisiva para la consolidación de los pactos sociales con los empresarios, y la fuerza política lo fue para la consolidación de los compromisos con otros partidos. Predominó una cultura basada en la negociación, los acuerdos y las alianzas, que contribuyó a fortalecer la influencia social y política de socialistas y comunistas, a la vez que les comprometían con el cumplimiento de lo pactado. Los mayores logros fueron el fruto de esa conjunción, en la que destacaron los socialistas británicos, suecos, noruegos, daneses y holandeses; después también los alemanes y austríacos; junto con los comunistas franceses e italianos que actuaban en sistemas políticos diseñados para mantenerles alejados del poder estatal, a pesar de su capacidad política, su representatividad electoral y su presencia en las instituciones regionales y municipales.

Se forjó entonces una causa común entre el desarrollo del capitalismo fordista, la

base social satisfecha por el progreso –que proporcionaba el aumento paulatino de los ingresos, el consumo, la protección social– y la fuerza política de los partidos obreros. Estos se vieron en la necesidad de redefinir su proyecto y su discurso, descargándose del sesgo obrerista de su trayectoria para dotarse de un nuevo contenido ciudadano que, además, tuviera en cuenta que, conforme lograban ampliar su participación en el poder político, iban siendo parte constitutiva del Estado.

Se produjeron así modificaciones fundamentales en los partidos obreros. En lugar de redefinir sus objetivos y su estrategia, se decantaron por reformular su acción política de corto plazo orientada a impulsar ese progreso social paulatino del cual ellos mismos eran parte protagonista. Tal inconcreción disolvía la necesidad de un discurso que trazara el recorrido propuesto desde el presente hacia un horizonte de objetivos que no existían. Todo lo más, esa función se asignaba a los voluminosos programas confeccionados para las elecciones y a ciertos actos ornamentales.

Consecuentemente, toda su actividad política se orientó al desarrollo de la labor parlamentaria y la gestión gubernamental, para lo cual era imprescindible otorgar una celosa prioridad a la preparación de las elecciones con el fin de cosechar resultados que proporcionaran mayorías parlamentarias con las que formar gobiernos. Una vez logrado ese objetivo, se trataba de gobernar para fortalecer la causa común con el capitalismo fordista y la base ciudadana, esto es, seguir alimentando el contrato social que garantizaba la continuidad del sistema y el progreso reclamado por la mayoría social. Los partidos socialistas escandinavos, junto con el alemán y otros centroeuropeos y el laborista británico, cobraron gran protagonismo en la consolidación de esas condiciones, lo mismo que los partidos comunistas de Francia e Italia.

La indigencia estratégica no era el único elemento sacrificado en esa nueva apuesta. También lo fueron la preocupación por el desarrollo de los movimientos sociales y el funcionamiento de la vida orgánica de los partidos. La movilización y organización de los trabajadores había sido una de las premisas que habían hecho posible consolidar la fuerza sindical con la que negociar los pactos sociales y la fuerza política con la que plasmar los compromisos políticos. Pero, con el paso del tiempo, la ocupación de mayores parcelas de poder y el celo concentrado en las elecciones fueron anulando la preocupación por el desarrollo de los movimientos sindicales y políticos. Tampoco prestaron atención a las implicaciones que suponía la emergencia de movimientos que portaban otras

aspiraciones a favor de la igualdad de derechos de las mujeres, el cuidado de los límites biofísicos del planeta o la defensa de causas pacifistas frente a las consecuencias de la Guerra Fría.

En el orden interno, la vida orgánica de los partidos obreros incorporó definitivamente dos elementos de largo alcance que se habían larvado desde los años en que comenzaron a ganar presencia parlamentaria e incrementaban con rapidez el número de militantes: la gran dimensión que alcanzó la profesionalización política de los cargos públicos y los cargos internos, y la supeditación plena del funcionamiento organizativo a las exigencias electorales, parlamentarias y gubernamentales. Ambos elementos estimulaban mecanismos tendentes a reproducir las posiciones jerárquicas de los cuadros dirigentes y las prácticas burocráticas con el fin de garantizar la cohesión interna y la eficacia de la actividad política.

Las condiciones fueron cambiando con el estallido de la crisis internacional de los años setenta y, definitivamente, con las profundas transformaciones del desarrollo capitalista durante las décadas posteriores. La causa común quedó sepultada bajo los efectos de un capitalismo transnacionalizado y financiarizado que acabó con los círculos virtuosos del capitalismo fordista, fomentó fracturas entre los segmentos de asalariados, redujo los márgenes de actuación de los espacios nacionales, cuarteó el ejercicio del poder político y un sinfín de alteraciones más. Los pactos sociales se descompensaron a favor de los empresarios o desaparecieron, lo que suponía abandonar la perspectiva de mejora continuada de los salarios y las condiciones laborales para el conjunto de los trabajadores. Los compromisos políticos sólo resultaron viables cuando se ajustaban a los cánones requeridos por ese desarrollo capitalista, lo que suponía abandonar la prioridad del pleno empleo y la mejora de los servicios sociales y las prestaciones monetarias que garantizaba el estado de bienestar.

El contrato social quedaba cuestionado y, con él, la función central que habían ejercido los partidos socialistas como vínculo entre el desarrollo del capitalismo y la base ciudadana. Ahora, la dinámica capitalista era distinta, y las aspiraciones de progreso quedaban cercenadas para una parte significativa de asalariados y de otros grupos sociales: sus ingresos apenas crecían, sus derechos laborales se debilitaban, su capacidad de consumo se sostenía recurriendo al endeudamiento y su acceso a los servicios y a las prestaciones públicas se deterioraba.

La indigencia estratégica en la que habían incurrido desde las décadas doradas

impedía que los partidos obreros ofrecieran propuestas destinadas a corregir las fracturas entre los segmentos de asalariados, a hacer frente a los mecanismos inhibitorios que generaba la avidez consumista, y a insertar los reclamos de los nuevos movimientos sociales en un proyecto compartido con las aspiraciones de los trabajadores contra la deriva de la dinámica capitalista. En lugar de dotarse de un proyecto y un discurso propio, tanto los partidos que ejercían el gobierno como los que pretendían llegar a ejercerlo terminaron por asumir los planteamientos característicos de los partidos conservadores. Si en las décadas doradas lo habían hecho restringiendo el ejercicio de la actividad política al ámbito parlamentario y gubernamental, ahora procedían del mismo modo con la política económica y social, supeditada a los requerimientos de una dinámica capitalista que se desplegaba a escala internacional y con una fuerte influencia de los poderes financieros. Los propios gobiernos socialistas impulsaban medidas favorables a la liberalización, la apertura exterior y la privatización, a la vez que otras medidas que restringían derechos laborales y erosionaban el estado de bienestar.

Primero adecuaron su comportamiento político a una «razón de Estado» característica del enfoque conservador y después ajustaron más ese comportamiento a una «razón económica» identificada con los planteamientos del poder económico. La actuación llevada a cabo por los partidos socialistas nacionales y por sus miembros en los órganos europeos durante la última crisis terminó de confirmar que eran organizaciones cuya función histórica había periclitado. La decadencia les había conducido al ocaso. La miseria estratégica daba la mano a la vacuidad política.

Cabe pensar que esa falta de referentes estratégicos abonó las condiciones para que los dirigentes socialistas abrazaran ese tipo de políticas económicas. Tal vez, otro motivo pudo ser la flaqueza de voluntad para enfrentarse a los poderes dominantes. Tampoco es despreciable el atractivo que suponía el ejercicio de poder y la renuencia a perder es estatus social y profesional que comportaba el acceso a los cargos públicos. El hecho fehaciente es que, con diferentes fechas y formatos, los partidos socialistas dejaron de lado cualquier propósito de nadar contracorriente, lo que por definición era la quintaesencia de las organizaciones situadas del lado de quienes no formaban parte de los poderes dominantes en la sociedad.

En el caso de los partidos comunistas, la mayoría se contentó con seguir instalada en un dogmatismo doctrinario que les incapacitaba para ejercer

influencia social y acrecentar su fuerza política. Sólo el partido francés (PCF) tuvo cierta fuerza política manteniendo planteamientos radicales, pero los obstáculos del sistema político y su incapacidad para readecuar la actividad política le condenaron a la marginalidad desde los años ochenta; mientras que el partido italiano (PCI), con bastante más fuerza y semejantes obstáculos del sistema político, fracasó en su apuesta por acercarse al poder estatal y después optó por asemejarse a los partidos socialistas cuando era evidente que estos naufragaban a la deriva.

COLOCADOS ANTE EL ESPEJO: PROYECTO Y TRAYECTORIA

El transcurso de las últimas décadas parece confirmar dos fenómenos. Primero, el movimiento obrero, surgido en el siglo XIX y desarrollado durante el siglo XX a partir de las demandas y el protagonismo de los trabajadores fabriles, ha perdido la mayor parte de las características que favorecían el desarrollo de su fuerza reivindicativa, su capacidad organizativa y su influencia social. Segundo, los partidos nacidos para defender los intereses de los obreros carecen de propuestas, fuerza política y capacidad orgánica para llevar a cabo la defensa de las demandas de los trabajadores, habiendo perdido cualquier soplo transformador.

Por supuesto, ambas conclusiones no niegan que tanto en el pasado reciente como de cara al futuro seguirán promoviéndose movilizaciones de trabajadores, presiones de los sindicatos y otras muestras tendentes a la defensa de sus intereses. Del mismo modo que los partidos socialistas y comunistas seguirán decantando su vocación ideológica a favor de los trabajadores y que su actividad política seguirá aportando ciertas distinciones con respecto a la que llevan a cabo los partidos conservadores; también en el terreno económico y social, a pesar de su identificación sustancial con las políticas económicas ortodoxas. Lo que parece que ha llegado al ocaso es la centralidad que ocupó el movimiento obrero en la dinámica social y la capacidad de los partidos obreros que cabalgaban sobre ese movimiento como motor principal de importantes reformas económicas y sociales.

Los anhelos que los partidos obreros pretendían convertir en realidad con su proyecto socialista para acabar con la explotación y la opresión sufrida por los trabajadores han quedado ciertamente lejos de ser satisfechos. Tras el capitalismo de las décadas doradas, compatible con los compromisos y las concesiones sociales, desde finales del siglo XX se ha abierto paso un capitalismo desabrido, implacable, rudo y mal avenido con las preocupaciones sociales, dispuesto a poner en peligro las conquistas precedentes de los trabajadores. Pero en ningún caso cabe perder la perspectiva de la trayectoria recorrida y de las abismales diferencias entre la situación presente y la que dio origen a aquel proyecto en sus distintas versiones.

Si cualquier socialista de mediados del siglo XIX o de los que después fundaron los partidos obreros fuera transportado al momento actual, no daría crédito al contrate descomunal que apreciaría entre las condiciones de miseria obrera generalizada y de infradesarrollo social de su época y las condiciones presentes. Difícilmente, los obreros británicos, franceses o alemanes hubieran soñado con disponer de la dotación y diversidad de bienes y servicios que comprar con su salario; la calidad y generalidad de los diferentes niveles educativos; los servicios sanitarios de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades; las posibilidades culturales que proporcionan bibliotecas, museos y publicaciones; los seguros de jubilación, desempleo, enfermedad y otros; las condiciones de las viviendas y las facilidades en las tareas domésticas; los conocimientos científicos disponibles; el ejercicio de las libertades políticas y de derechos individuales; el cambio radical de la posición social de las mujeres; las infraestructuras de transporte y la ordenación urbanística; las formas de ocio y recreo; y mil aspectos más, multiplicados por el potencial que proporcionan los medios telemáticos actuales.

El desarrollo tecnológico y las transformaciones institucionales promovidas por décadas de esfuerzo, sacrificio y combatividad obrera han sido las dos palancas más poderosas que explican tales cambios. Aquellos anhelos emancipadores desataron las fuerzas con las que se pudieron materializar muchas demandas a las que se oponían los intereses y las formas de pensar de quienes ostentaban el poder económico y el dominio político. Por supuesto que hubo otros movimientos ciudadanos y otros partidos que también contribuyeron a esos logros, pero no resulta complicado entresacar en cada país los episodios en torno a los cuales se ventilaron las grandes disputas laborales, sociales y democráticas para comprobar que la mayoría contó con el impulso político de socialistas y comunistas, y con la participación principal de los obreros fabriles en los centros

de trabajo y en las calles de la ciudades. Un trayecto largo y zigzagueante, con pasos atrás, con errores, con inconsecuencias, con aventuras suicidas y con frecuentes posiciones defensivas para que no hubiera mayores retrocesos.

Por eso mismo, aquellos socialistas del siglo XIX se sorprenderían también por la nula preocupación que los partidos actuales infunden a los poderosos y por la exigua repercusión de los trabajadores en el escenario social. Seguramente se preguntarían por qué el desarrollo de la democracia política ha supuesto el reconocimiento de un conjunto de derechos sociales, pero que no tienen traslado en la economía. Con el gesto torcido constatarían que, en lugar de democracia económica, sigue reinando la libertad de los poseedores de capital y de los mercados privados. Verían cómo se siguen entonando los viejos soniquetes acerca de que el mercado es el mecanismo autorregulador que mejora el funcionamiento de la economía y la organización social. Verían también cómo la corrección de las desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza, la creación de empleo, las políticas económicas de los gobiernos y las demás cuestiones que incumben al conjunto de la sociedad, a la hora de la verdad siguen sometidas a las decisiones privadas de los grandes propietarios de bancos, industrias y comercios.

Constatarían, en suma, que hay muchos motivos de satisfacción para valorar los logros alcanzados y también motivos de inquietud para preocuparse por cómo siguen pendientes múltiples cuestiones de las que salen malparados colectivos que, hoy como ayer, están explotados en sus condiciones laborales, oprimidos por los poderosos y disgustados por el marchamo de la sociedad. Ahora sin la influencia de los movimientos fabriles ejerciendo de catalizadores de la dinámica social y sin la fuerza política de los partidos obreros para llevar a cabo o condicionar importantes reformas favorables para los trabajadores.

Certezas dignas de fe que desayunan dudas cada mañana

La frase de Eduardo Galeano que encabeza el epígrafe sirve bien para calificar las notas que siguen a continuación acerca de algunas enseñanzas que se pueden extraer de la trayectoria de los partidos obreros. Se trata de seis ideas planteadas con el propósito de ordenar un conjunto de criterios cuyo significado no es otro

que el de confirmar que para hacer bien las cosas hay que querer, saber y poder, es decir, poner en buena sintonía la voluntad con el conocimiento y con la capacidad efectiva. Principios elementales, tal vez obvios, pero que no pocas veces sucumben al empuje de pulsiones, sean voluntaristas o pacatas, que nublan la perspectiva y desvían la actuación de gentes honestas, inteligentes y expertas.

Primera idea: Los ideales utópicos no deben suplantar la necesidad de un proyecto estratégico. A lo largo del tiempo, unas veces los partidos obreros identificaron los ideales con el proyecto y otras dejaron en cuarentena los ideales soslayando la definición de un proyecto. Los ideales sociales surgieron de la voluntad que tomar partido a favor de quienes sufren los rigores del capitalismo, componiendo una imagen de cómo debería funcionar una sociedad que eliminara de raíz las bases de la explotación y la opresión. Como recordaba Quevedo en su elogio a Tomás Moro, utopía es una voz griega que significa «no hay tal lugar». También Galeano ha dejado escrito que la utopía está en un lejano horizonte según el cual «si se camina dos pasos, ella se aleja dos pasos atrás y el horizonte se corre diez más allá».

Tal ilusión carece de espacio y de tiempo, por lo que no puede ser considerada la meta a conseguir en un futuro que pretenda ser real. El riesgo de confundir los ideales con el proyecto está en la advertencia de Elias Canetti en El juego de ojos: «Es preciso que haya cosas inalcanzables, pero tampoco deben aplastarnos». Es lo que implicaba mantener como proyecto político la metáfora comunista propuesta desde su juventud por Marx y Engels. Se confundieron y después confundieron a muchos al suponer que el ideal de sociedad perfecta, sin clases, sin explotación ni opresión, podía pertenecer al mundo real; creyendo además que esa meta contaba con la historia de su parte y que era la alternativa efectiva a proponer frente al capitalismo. Guiados por las categorías absolutas desarrolladas a partir del universo filosófico hegeliano, pensaron que con esas categorías podían interpretar la historia y aplicarlas al análisis de la sociedad y de la política. Una ilusión que durante décadas dotó de convicciones, ánimo y espíritu combativo a los fundadores de un buen número de partidos obreros y que se transformó en bagaje ideológico para millones de militantes dispuestos a ir contracorriente en una pugna contra los poderes capitalistas dominantes.

El aplastamiento al que se refiere Canetti se produce cuando se constata tarde y mal que esa ilusión no es realizable, que la historia no camina en ninguna dirección determinada y carece de cualquier signo de predestinación, que no caben revoluciones como la propugnada por la metáfora y que una utopía no

sirve para establecer los cimientos efectivos de la transformación social. Constatar esas evidencias es una buena base de partida para iniciar un compromiso con la lucidez y establecer un buen diálogo con la realidad.

Segunda idea: cuando los partidos adscritos a la metáfora comunista abandonaron explícita o tácitamente esa utopía como proyecto y otros hicieron lo propio con sus proyectos seminales, después no los reemplazaron por proyectos mejor construidos, dotados de una colección de soluciones que fueran congruentes, consistentes entre sí y verosímiles de llevarse a cabo en un determinado intervalo de tiempo. Soluciones cuya prioridad fuera la defensa de los intereses de los trabajadores –dañados por quienes detentaban el poder– y encaminadas a mostrar una alternativa viable de sociedad que podría funcionar mejor que la existente. Siendo así, un requisito imprescindible sería acotar el intervalo temporal para el que se formula el proyecto, a sabiendas de que la dinámica cambiante del capitalismo y la emergencia de factores contingentes impiden formular soluciones creíbles que tengan un horizonte más allá de varias décadas.

Se trataría, por tanto, de un pliego de buenas soluciones que, tras un diagnóstico preciso de la situación, ofreciera un repertorio integrado de soluciones. Lo cual excluye la oferta de fantasías milagreras y recetas extraídas de dogmas cerrados al diálogo con la realidad. Expresando la idea de otra manera, el proyecto sería una cartografía con un catálogo de respuestas decantadas del lado de los trabajadores para afrontar las cuestiones nodales de la sociedad. Respuestas que, desde las características que tomaron las sociedades conformadas desde las décadas doradas, habrían tenido que considerar, entre otras, las relaciones entre: el ejercicio de la democracia económica y los derechos de propiedad; los principios de la democracia política y la participación de los ciudadanos; el reconocimiento de los derechos sociales y el estímulo a la iniciativa personal; la regulación pública para preservar los intereses mayoritarios y la actividad empresarial; el crecimiento económico y la distribución de la renta; la cooperación y la competencia; el despliegue de procesos a escala internacional y las funciones de los espacios nacionales y locales.

Tercera idea: sin proyecto propio, los partidos obreros tampoco formularon un discurso alternativo al dominante con el que enlazar las demandas y reformas de corto plazo con el horizonte marcado por las transformaciones que contendría el proyecto. Un discurso estratégico capaz de desmentir que la realidad del momento fuera inevitable y/o inalterable. En el desván de las ilusiones quedó el

discurso revolucionario que aspiraba a acumular fuerzas hasta que llegara el momento de emplazar a una pugna frontal por la conquista de los órganos centrales del Estado. En la historia del capitalismo no ha existido ningún momento así. Ninguna pugna semejante se ha presentado en los países europeos desarrollados, ni cabe pensar que tenga cabida. Incluso contando los tiempos anteriores, cuando en Francia y algunos otros países se produjeron insurrecciones de masas, como señala Charles Tilly esas revoluciones tuvieron lugar cuando no se esperaban y pocas de ellas generaron resultados revolucionarios.

Un discurso estratégico hubiera desvelado ciertos requisitos de carácter político desde los que promover la modificación de las relaciones de poder, los cambios institucionales y el desarrollo de la democracia política. Pero también requisitos de índole ideológica para hacer frente a los mecanismos inhibitorios que actúan en las relaciones sociales y se transmiten mediante múltiples formas, logrando que los colectivos subalternos acepten el dominio de los grandes poderes. Sería, por tanto, una estrategia capaz de ir cohesionando a colectivos que se identificaran con el proyecto, trazando procesos reales que pudieran ganar mayorías sociales a través de una actividad prolongada, multifacética y capilar.

Cuarta idea: la acción política adoptó dos tipos de posiciones que, revestidas de moderación, fueron negativas para el desarrollo de los movimientos obreros. Una era suponer que la sociedad funcionaba siguiendo un juego de óptimos paretianos que permitía encontrar situaciones en las que unos ganaran sin que otros perdieran. La otra era eludir la confrontación social y ceñir la dimensión política a la actividad parlamentaria y a las posibilidades de divulgación propagandística de sus propuestas.

Por un lado, es cierto que la confrontación sistemática no era razonable ni posible, de manera que cualquier dinámica política siempre cuenta con intervalos de estabilidad y de reposo social. A la vez, en toda sociedad existen elementos que favorecen la convergencia y la colaboración –parlamentaria y social–, situados al margen de las pugnas entre las fuerzas políticas y sin generar conflicto social. Sin embargo, por otro lado, no es menos cierto que resulta inviable defender la mayoría de las demandas de los trabajadores sin erosionar los intereses de los poderes dominantes, o pretendiendo preservar una estabilidad permanente, sin confrontación social, donde las divergencias queden circunscritas al estricto juego de las diferencias parlamentarias. Por tanto, si se considera que inevitablemente los trabajadores ocupan una posición de

inferioridad, mejorar su posición requería tanto de la actividad parlamentaria como del desarrollo de movimientos combativos y, por tanto, de periodos con mayor/menor tensión social desplegada a través del ejercicio de las libertades cívicas.

Quinta idea: la acción política adoptó también otros dos tipos de actitudes que, revestidas de radicalidad, redundaron en perjuicios para los trabajadores y para los partidos que pretendían defender sus intereses. Una era recubrir con tintes tremendistas cada diagnóstico de la situación social. La otra era ofrecer soluciones balsámicas ante problemas complejos.

Ciertos grupos radicales se afanaban por describir balances muy negativos, tanto en los momentos de expansión económica y de mejoras sociales como en los momentos de graves crisis, cuando colectivos importantes quedaban a la intemperie social, sin ingresos propios ni protecciones públicas, soportando las peores lacras del capitalismo. El tono tenebrista no residía en denunciar esas situaciones, sobre todo las más extremas –ciertas, aunque de variable magnitud según los países–, ni en denunciar la existencia de segmentos sociales con reducidas oportunidades de mejora y alta vulnerabilidad ante eventos desfavorables. El tenebrismo estaba en la confusión con la que se pretendía generalizar el alcance de esas situaciones extremas como si afectasen a la mayoría de los trabajadores. Desde la Edad de Oro, cualquier economía desarrollada del continente presentaba amplios segmentos sociales que, incluso cuando sufrían los rigores de las crisis, disponían de ingresos y protecciones significativamente notables. Por esa razón, el tremendismo carecía de credibilidad y no conseguía ganar influencia social, ya que dejaba de lado lo que constituía la prioridad y a la vez la dificultad fundamental de la acción política: hacer compatibles las demandas urgentes de los estratos más castigados con las demandas de los demás grupos de trabajadores.

La segunda actitud solía acompañar a la anterior, incurriendo en una flagrante contradicción, ya que después de presentar ese tipo de panorama tenebrista de los problemas a continuación se ofrecían soluciones simples, inmediatas y balsámicas. Una actitud característica del «todo es posible y ya» que, aparte de carecer de credibilidad, alentaba comportamientos desaconsejables. Infundía desagrado o desdén por los avances parciales, considerando que, en efecto, no solventaban definitivamente los problemas. Infundía desagrado o desdén por los compromisos y las alianzas con quienes se mantenían serias divergencias, alegando, precisamente, esas divergencias y temiendo ser identificados con

quienes se pactaba. Estimulaba una actitud victimista que convivía cómodamente con las derrotas y con la marginalidad política, encontrando alivio en argumentos con los que autoafirmaban la bondad de sus propuestas y la autenticidad de su defensa de los trabajadores.

Sexta idea: la acción política de los partidos obreros podría haberse dotado de un sentido distinto de radicalidad mediante líneas de actuación que: a) interesasen a segmentos sociales mayoritarios, b) pudieran actuar como contrapeso de los mecanismos inhibitorios, c) animaran el desarrollo de movimientos. Si tales movimientos hubieran despuntado, las siguientes tareas podrían ser: d) incorporar a otras fuerzas políticas y otras franjas sociales, e) entablar negociaciones con los órganos del Estado y f) obtener algunas de las demandas planteadas. Siendo así, la radicalidad sería ajena al vocerío retórico con pretensiones maximalistas, pudiendo plasmarse en actuaciones prácticas caracterizadas por: la eficacia de la denuncia, la nitidez con las soluciones, la capacidad de generar movimientos y la defensa consecuente de las soluciones a la hora de negociarlas.

La práctica habitual de los partidos ponía de manifiesto que su actividad quedaba absorbida por un manantial continuo de temas que engrosaban agendas repletas de asuntos. Enredados en asuntos diversos, cuya fugacidad a veces era marcada por los medios de comunicación y por la mecánica del funcionamiento parlamentario, dando lugar a una actividad política dispersa, frecuentemente inconexa y escasamente fructífera. Por el contrario, aquel sentido de radicalidad hubiera implicado concentrar de manera prioritaria la acción política «en campo propio», es decir, en los elementos susceptibles de generar movimientos capaces de acrecentar la fuerza política. Siendo así, los partidos dispondrían de algún tipo de criterio contable con el que contrastar los resultados de su actividad, necesario para tener referencias precisas de sus fortalezas y debilidades, así como para valorar los avances y los retrocesos registrados.

Dos cajas negras

El estado de cosas vigente durante las últimas décadas ha conducido a un constreñimiento tan severo del radio de actividad de los partidos obreros que

difícilmente podía arrojar otro saldo de resultados que no fuera el que se ha producido. A todo lo anterior, cabe agregar dos cuestiones importantes cuyas características se asemejan a las «cajas negras»: la actividad electoral-parlamentaria y el funcionamiento interno de los partidos. La teoría de sistemas considera que las cajas negras son módulos autónomos que reciben entradas-estímulos y generan salidas-respuestas, sin saber qué es lo que ocurre en su interior. En el caso de las dos cuestiones apuntadas sí importa, y mucho, tener ese conocimiento, pero resulta sumamente complicado explicar cómo funcionan los mecanismos para que el desenlace de su dinámica proporcione los habituales resultados desfavorables.

En el apartado final del capítulo II, tras considerar el proceso histórico que condujo en Gran Bretaña a la institucionalización de un sistema basado en los atributos de la democracia, se han presentado las dos posiciones extremas que suscitó dicho sistema político entre los partidos obreros: adhesión y participación incondicional por parte de unos, antipatía y rechazo por parte de otros. Los partidarios de la primera opción valoraban por encima de todo que las elecciones eran la expresión de la voluntad general de todos los ciudadanos, de modo que el parlamento acogía a los representantes de esa voluntad popular para decidir las leyes en las que fundamentar la convivencia ciudadana. Los segundos ponían el acento en que los desequilibrios efectivos con los que se llevaban a cabo las elecciones –sistemas electorales, capacidad financiera, mecanismos inhibidores– delimitaban en gran medida los resultados y, en consecuencia, las características políticas del parlamento.

Lo cierto fue que la mayoría de los partidos obreros, incluso los reticentes, terminaron por participar en las elecciones para tener presencia en el parlamento y mejorar su posición política. A la vez, cuando lograron mayorías parlamentarias y formaron gobierno, los partidos socialistas impulsaron los mayores hitos sociales y democráticos que han alcanzado los trabajadores. Pero igualmente es cierto que, en aquel mismo proceso, esos partidos extraviaron sus señas de identidad y ciñeron su acción política y su vida organizativa a las exigencias de las elecciones. En adelante, la estabilidad parlamentaria, el orden social y la presencia en los gobiernos se convirtieron en fines propios, más allá de que la estabilidad y el orden respondieran a un desequilibrio de fuerzas cada vez mayor. De aquel momento proceden ideas predominantes en la actualidad como las que restringen la participación política de los ciudadanos a la posibilidad de modificar periódicamente sus preferencias electorales.

El sentido de «caja negra» puede expresarse a través de los inputs de entradas, los elementos indeterminados a priori y los outputs de salidas. Las entradas corresponden a tres principios básicos. Primero, la democracia política se sustenta en el reconocimiento de las libertades políticas, elecciones libres y parlamentos soberanos para decidir las leyes, con el complemento de instituciones, normas legales y hábitos sociales que conforman un sistema político. Segundo, sin democracia política sólo caben sistemas basados en el despotismo, donde las libertades, las elecciones y las leyes son decididas por autoridades que ejercen la tiranía, justificada con distintos argumentos e intenciones. Tercero, los partidos no pueden consolidarse como fuerza política ni legitimar su actividad ante la sociedad si no participan en el sistema parlamentario.

Según esos principios, la democracia política nada dice, ni garantiza ni niega, acerca de dos elementos que a priori quedan indeterminados. Primero, los derechos sociales y económicos que se reconocen a los ciudadanos. Segundo, las formas y/o la intensidad de la participación política de los ciudadanos en el sistema, no sólo la circunscrita a elegir un parlamento representativo. Será el desarrollo del juego político, en el parlamento y en la sociedad, el que determine el perfil y el alcance de la democracia social y económica, así como el que establezca las formas y el alcance de la participación política ciudadana.

Las salidas de la caja negra corresponden a tres resultados del sistema político. Primero, los partidos conservadores han dominado los parlamentos y los gobiernos de todos los países, excepto Suecia, durante un tiempo abrumadoramente superior a los periodos en que lo han hecho los partidos socialistas. Segundo, la actividad parlamentaria ha mantenido restricciones severas a la democracia económica, en la medida en que el dominio conservador ha dado preferencia al reconocimiento de las libertades individuales (propiedad, mercado) frente a los derechos colectivos. Tercero, el juego político y ciertas libertades cívicas también han estado sometidos a restricciones derivadas de ese dominio conservador, afectando al reconocimiento de derechos personales y a las funciones de los gobiernos y demás órganos estatales.

Encontramos así que el traslado del término griego de democracia a la realidad del sistema político se presta a una lectura ambivalente del kratos (poder) y el demos (pueblo). Ciertamente, ha sido la voluntad expresada electoralmente por la mayoría de la población, con amplios grupos sociales permeables a la influencia de los grupos dominantes, la que ha legitimado el dominio de los

poseedores del poder económico y a las elites conservadoras. Pero no cabe desconocer las características de los elementos que operan en esa caja negra, existiendo cortafuegos ante la eventual pretensión de transformar en profundidad las relaciones de poder. En ese sentido, las elecciones se comportan como el mensajero incómodo de lo que acontece en la sociedad y a la vez contribuye a reproducir las condiciones vigentes.

La segunda caja negra se refiere al funcionamiento interno de los partidos obreros. Procediendo del mismo modo, cabe considerar tres entradas que corresponden a principios referidos a los requerimientos que creaba la necesidad de adecuar la vida orgánica a la pretensión de acrecentar la fuerza política. Primero, fortalecer la capacidad organizativa para dotarla de cohesión, agilidad interna y eficacia en la acción política. Segundo, establecer procedimientos para afrontar el hecho de que el aumento de militantes implicaba mayor diversidad de procedencias, grados de formación y habilidades políticas. Tercera, dividir el trabajo para especializar a los cuadros y organismos según las actividades externas e internas a desarrollar.

Esos principios organizativos nada podían decir a priori acerca de dos elementos. Primero, cómo deben interaccionar dirigentes y militantes, órganos superiores e inferiores, en un desenvolvimiento orgánico que precisaba de ciertas relaciones jerárquicas. Segundo, cómo debían interaccionar la acción política y el funcionamiento interno, para que los miembros y organizaciones lograsen los objetivos pretendidos.

Las salidas de la caja negra corresponden a tres resultados. Primero, los partidos se vertebraron con esquemas verticales de funcionamiento, incrustando formas autoritarias y fomentando la sequía de debates y el acatamiento a mandatos superiores. Segundo, la vida orgánica quedó sometida a la actividad parlamentaria y a la influencia de los cargos públicos, siendo absorbida por tareas de corto plazo en las que se perdía toda referencia sobre el horizonte en el que se inscribirían las acciones inmediatas. Tercero, las estructuras y los comportamientos establecidos tendían a reproducir el estatus jerárquico de los dirigentes que ostentaban cargos públicos e internos.

Encontramos así que unos partidos nacidos para actuar contracorriente, con la pretensión de defender intereses contrarios a los de los poderes dominantes, derivaban hacia estructuras y comportamientos similares a los que tenían dichos poderes. Los núcleos dirigentes convertían la jerarquía funcional en posiciones

de poder interno, prevaleciendo los incentivos que tendían a reproducir esa posición oligárquica. Un funcionamiento orgánico cada vez más ajeno a la democracia interna y al empeño por desarrollar movimientos políticos capaces de disputar la hegemonía a los poderes dominantes.

Acaba así un repertorio de temas, unos a modo de enseñanzas y otros como dudas sobre el desenvolvimiento de esas cajas negras, cuya reflexión podrían contribuir a que, en efecto, como sugería la canción de Jagger, incorporando un leve matiz, «si lo intentas bien, algunas veces puedes conseguir lo que pretendes».

[1] Sin embargo, la persistencia del miserabilismo obrero en economías preindustriales, como las de Rusia, Italia y España, sí arrojó un denominador común: la proporción de obreros fabriles era muy reducida pero estaba concentrada en determinadas grandes fábricas y ciudades, dando lugar a movimientos obreros fuertemente radicalizados que protagonizaron sucesivos episodios explosivos alentados por organizaciones revolucionarias. En Rusia, ese movimiento fue decisivo para que, bajo las condiciones excepcionales analizadas en el capítulo V, el partido bolchevique pudiera conquistar el poder. En Italia, grupos anarcosindicalistas lanzaron el movimiento consejista que protagonizó el bienio rojo de 1919-1920. En España, esos mismos grupos, organizados en la CNT, junto con sectores de UGT, encabezaron sucesivas convocatorias revolucionarias en las primeras décadas del siglo XX.

[2] Un rechazo hacia las alianzas con partidos liberales u otros que compartían con las decisiones tomadas por la II Internacional, a su vez inspiradas sobre todo por los líderes alemanes.

Bibliografía

HISTORIA GENERAL DE LOS PARTIDOS SOCIALISTAS Y COMUNISTAS

Abendroth, W. (1967), Histoire du mouvement ouvrier en Europe, París, Maspero.

Angenot, M. (1989), L’utopie collectiviste. Le gran récit socialiste sous la Deuxième Internationale, París, Presses Universitaires Françaises.

Bell, D. y Byron, C. (1994), The French Communist Party in the Fifth Republic, Oxford, Clarendon Press.

Bravo, G. (1976), Historia del socialismo 1789-1848. El pensamiento socialista antes de Marx, Barcelona, Ariel.

Claudín, F. (1970), La crisis del movimiento comunista, París, Ruedo Ibérico.

Cole, G. (1957), Historia del pensamiento socialista, 7 vols., México, Fondo de Cultura Económica.

Del Río, E. (1999), La izquierda. Trayectoria en Europa Occidental, Madrid, Talasa.

Del Rosal, A. (1958), Los congresos obreros internacionales en el siglo XIX, México, Grijalbo.

Derfler, L. (1973), Socialism since Marx: A Century of the European Left, Londres, Macmillan.

Desanti, D. (1973), Los socialistas utópicos, Barcelona, Anagrama.

Dolléans, E. (1960), Historia del movimiento obrero, tomo 1 (1830-1871),

Buenos Aires, Eudeba.

Droz, J. (dir.) (1976-1984), Historia general del socialismo, 4 vols., Barcelona, Destino.

Eley, G. (2003), Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Barcelona, Crítica.

Hicks, A. (1999), Socialdemocracy and Welfare Capitalism. A Century of Income Security Politics, Ithaca, Cornell University Press.

Joll, J. (1966), The Second International, 1889-1914, Londres, Harper & Row.

Kemp, T. (1984), Stalinism in France: The First Twenty Years of the French Communist Party, Londres, New Park.

Kriegel, A. (1986), Las Internacionales Obreras (1864-1943), Barcelona, Orbis.

Landauer, C. (1959), European Socialism: A History of Ideas and Movements from the Industrial Revolution to Hitler's Seizure of Power, 2 vols., Berkeley, University of California Press.

Lindemann, A. (1984), A History of European Socialism, New Haven (Connecticut), Yale University Press.

Merkel, W. et al. (2008), Social Democracy In Power: The Capacity to Reform, Londres, Taylor & Francis.

Molnár, M. (1974), El declive de la Primera Internacional, Madrid, Edicusa.

Priestland, D. (2010), The Red Flag: Communism and the Making of the Modern World, Nueva York, Penguin Books.

Przeworski, A. y Sprague, J. (1988), Paper Stones: A History of Electoral Socialism, Chicago, University of Chicago Press.

Rosenberg, A. (1981), Democracia y socialismo. Historia y política de los últimos ciento cincuenta años, 1789-1937, México, Cuadernos de Pasado y Presente.

Sassoon, D. (2001), Cien años de socialismo, Barcelona, Edhasa.

Tilly, Ch. (2009), Los movimientos sociales, Barcelona, Crítica.

Wilde, L. (1994), Modern European Socialism, Aldershot, Dartmouth.

Winock, M. (1992), Le Socialisme en France et en Europe XIXe-XXe siècle, París, Seuil.

HISTORIA GENERAL DE EUROPA EN DISTINTOS PERIODOS

Aldcroft, D. (1989), Historia de la economía europea, 1914-1980, Barcelona, Crítica.

Armstrong, P.; Glyn, A. y Harrison, J. (1991), Capitalism since 1945, Londres, Blackwell.

Beaud, M. (1981), Histoire du capitalisme de 1500 à nos jours, París, Seuil.

Bergeron, L.; Furet, F. y Koselleck, R. (1976), La época de las revoluciones europeas, Madrid, Siglo XXI.

Briggs, A. y Clavin, P. (2000), Historia contemporánea de Europa, 1789-1989, Barcelona, Crítica.

Claudín, F. (1985), Marx, Engels y la Revolución de 1848, Madrid, Siglo XXI.

Dieter, N. y Stöver, P. (2010), Elections in Europe: A Data Handbook, Baden-Baden, Nomos.

Flora, P. et al. (1983), State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975. A Data Handbook, Londres, Macmillan.

Gaddis, J. (2005), The Cold War: A New History, Londres, Penguin Books.

Grenville, J. (1991), La Europa remodelada 1848-1878, Madrid, Siglo XXI (reed. 2018).

Grogin, R. (2001), Natural Enemies: The United States and the Soviet Union in the Cold War, 1917-1991, Latham, Lexington Books.

Guilles, P. (1996), Crises et cycles économiques, París, Armand Colin.

Hobsbawm, E. (1988), La era del imperio, 1875-1914, Barcelona, Crítica.

— (1995), Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica.

— (1997), La era de la revolución, 1789-1848, Barcelona, Crítica.

— (1998), La era del Capital, 1848-1875, Barcelona, Crítica.

— y Rudé, G. (1978), Revolución industrial y revuelta agraria, Madrid, Siglo XXI.

Judt, A. (2011), Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus.

Mammarella, G. (1990), Historia de Europa Contemporánea desde 1945, Barcelona, Ariel.

Mommsen, W. (1971), La época del imperialismo europeo, 1885-1918, Madrid, Siglo XXI.

Murray, W. y Millett, A. (2001), A War to Be Won: Fighting the Second World War, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

Nohlen, D. y Stöver, F. (2010). Elections in Europe: A Data Handbook, Múnich, Nomos.

Norton, D. (2002), Essentials of European History: 1935 to the Present, New Jersey, Piscataway.

Palazuelos E. (coord.) (1986), Las economías capitalistas durante el periodo de expansión (1945-1970), Madrid, Akal.

— (coord.) (1988), Dinámica capitalista y crisis actual, Madrid, Akal.

Palmade, G. (1976), La época de la burguesía, Madrid, Siglo XXI.

Penadés, Alberto (2005), «La elección de los sistemas electorales en las primeras democracias, 1890-1940», Zona abierta 110/111, pp. 199-277.

Quero, L. y Voilliot, Ch. (2001), «Du suffrage censitaire au suffrage universal (Évolution ou révolution des pratiques électorales?», Actes de la recherche en sciences sociales 140 (1), pp. 34-40.

Sperber, J. (2005), The European Revolutions, 1848-1851, Cambridge, Cambridge University Press.

Stone, N. (1985), La Europa transformada, 1878-1919, Madrid, Siglo XXI.

Tilly, Ch. et al. (1975), The Rebellions Century 1830-1930, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

Tilly, G. (1995), Las revoluciones europeas, 1492-1992, Barcelona, Crítica.

Van der Wee, H. (1986), Historia económica mundial del siglo XX, Barcelona, Crítica.

HISTORIA DE PAÍSES EUROPEOS EN DISTINTOS PERIODOS

Gran Bretaña

Adelman, P. (1980), The Rise of the Labour Party, 1880-1945, Londres, Longman.

Bédarida, F. (1979), A Social History of England 1851-1975, Londres, Methuen.

Bonet, L. (1964), El Partido Laborista: historia y futuro, Barcelona, Nova Terra.

Brown, R. y Daniels, Ch. (1985), The Chartists, Basingstoke, Macmillan.

Canales, E. (1994), «Industrialización y condiciones de vida en Inglaterra: notas sobre una larga polémica», Investigaciones históricas, Época moderna y contemporánea 14, pp. 171-196.

Cole, H. (1956), British Working Class Po1itics, 1832-1914, Londres, Routledge and Kegan Paul.

Colhorn, C. (1982), The Cuestion of Class Struggle. Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial Revolution, Chicago, University of Chicago Press.

Collins, H. y Abramsky, H. (1965), Karl Marx y the British Labour Movement, Londres, Macmillan.

Cook, Ch. (1999), Britain in the Nineteenth Century 1815-1914, Londres, Longman.

Craig, F. (1989), British Electoral Facts: 1832-1987, Londres, Politico’s Pub.

Crouzet, F. (1982), The Victorian Economy, Londres, Methuen.

Deane, P. y Cole, W. (1962), British Economic Growth 1688-1959, Cambridge, Cambridge University Press.

Epstein, J. y Thompson, E. (eds.) (1982), The Chartist Experience: Studies in Working Class Radicalism and Culture, 1830-1860, Londres, Macmillan.

Ferguson, N. (2016), El imperio británico, Madrid, Debate.

Foster, J. (1974), Class Struggle and the Industrial Revolution, Londres, Weidenfeld & Nicolson.

Hart, J. (1992), Proportional Representation: Critics of the British Electoral System 1820-1945, Oxford, Clarendon Press.

Jenkins, T. (1966), Parliament, Party and Politics in Victorian Britain, Mánchester, Manchester University Press.

Kavanagh, D. (1982), The Politics of the Labour Party, Londres, George Allen & Unwin.

O'Brien, P. y Quinault, R. (eds.) (1993), The Industrial Revolution and British Society, Cambridge, Cambridge University Press.

Pelling, H. (1963), A History of British Trade Unionism, Londres, Penguin Books.

— (1978), A Short History of the Labour Party, Londres, Macmillan.

Phillips, G. (1992), «El movimiento obrero británico hasta 1914», en D. Geary (comp.), Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 23-72.

Sánchez-Beato, F. (2011), «La representación política durante el siglo XIX en Gran Bretaña», Política y sociedad 48(1), pp. 117-138.

Speck, W. (1996), Historia de Gran Bretaña, Madrid, Cambridge University Press.

Tavera, S. (1988), «La condición de la clase obrera inglesa 1780-1850. Un debate, todavía», Historia Social 2, pp. 144-156.

Taylor, A. (comp.) (1985), El nivel de vida en Gran Bretaña durante la revolución industrial, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Thompson, E. P. (1989), La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica [reed. Madrid, Capitán Swing, 2012].

Townson, D. (2012), Breve historia de Inglaterra, Madrid, Alianza.

Francia

Andress, D. (2011), El Terror. Los años de la guillotina, Barcelona, Edhasa.

Baquiast, P. (2002), La Troisième République, 1870-1940, París, L'Harmattan.

Barjot, D.; Chaline, J.-P. y Encrevé, A. (1995), La France au XIXe siècle, 1814-1914, París, Presses Universitaires de France.

Brogi, A. (2011), Confronting America: The Cold War between the United States and the Communists in France and Italy, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Becker, J.-J. (1988), Histoire Politique de la France depuis 1945, París, Armand Colin.

Bertier de Sauvigny, G. (2009), Historia de Francia, Madrid, Rialp.

Brunel, F. (1989), Thermidor. La chute de Robespierre, Bruselas, Complexe.

Castells, I. (1997), La revolución francesa (1789-1799), Madrid, Síntesis.

Ceamanos, R. (2014), La Comuna de París. 1871, Madrid, La Catarata.

Courtois, S. y Lazar, M. (2000), Histoire du Parti communiste français, París, Presses Universitaires de France.

Danos, J. y Gibelin, M. (1986), June' 36 Class Struggle and the Popular Front in France, Londres, Bookmarks.

Dupâquier, J. y Kessler, D. (dirs.) (1992), La société française au XIXème siècle. Tradition, transition, transformation, París, Fayard.

Fauvet, J. (1964-1965), Histoire du Parti communiste français, París, Fayard.

Favier, P. y Roland, M. (1990), La décennie Mitterrand: les ruptures (1981-1984), vol. 1, París, Seuil.

Guarrigues, L. (2004), La France au XIX siècle, 1814-1914, París, Armand Colin.

Hoffmann, S. (coord.) (1981), The Communist Parties of Italy, France and Spain: Postwar Change and Continuity, Londres, Allen & Unwin.

Jackson, J. (1988), The Popular Front in France: Defending Democracy, 1934-

1938, Cambridge, Cambridge University Press.

Jeanneney, J.-N. (1977), La faillite du Cartel, 1924-1926, París, Seuil.

Kriegel, A. (1985), Les Communistes français, 1920-1970, París, Seuil.

Leroy, M. (1954), Histoire des idées sociales en France, 3 vols., París, Gallimard.

Magraw, R. (1992), «Socialismo, sindicalismo y movimiento obrero francés antes de 1914», en D. Geary (comp.), Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 73-148.

Martin, A. y Graham, H. (1989), The French and Spanish Popular Fronts. Comparative Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press.

McPhee, P. (2012), Robespierre. Una vida revolucionaria, Barcelona, Península.

Merriman, J. (2017), Masacre. Vida y muerte en la Comuna de París de 1871, Madrid, Siglo XXI.

Milza, P. (2009), L’année terrible: La Commune (mars-juin 1871), París, Perrin.

Muniesa, B. (1987: El discurso jacobino en la revolución francesa, Barcelona, Ariel.

Noiriel, G. (1986), Les ouvriers dans la societé française. XIXème-XXème siècle, París, Seuil.

Olivesli, N. (2005), La France de 1848 à 1914, París, Armand Colin.

Price, R. (2003), Historia de Francia, Cambridge, Cambridge University Press.

Raymond, G. (2005), The French Communist Party during the Fifth Republic: A Crisis of Leadership and Ideology, Londres, Palgrave Macmillan.

Rioux J.-P. (1987), The Fourth republic, 1944-1958, Cambridge, Cambridge University Press.

Rotman, P. y Rotman, Ch. (2008), Les années 68, París, Seuil.

Rougerie, J. (2006), Paris insurgé. La Commune de 1871, París, Gallimard.

Santamaria, Y. (1999), Histoire du Parti communiste français, París, La Découverte.

Sirinelli, J.-F. (2007), Les vingt décisives. Le passéproche de notre avenir 1965-1985, París, Fayard.

Tierno, E. (1967), Babeuf y los Iguales, Madrid, Tecnos.

Tombs, R. (1981), The War Against Paris, 1871, Cambridge, Cambridge University Press.

Alemania

Badia, G. (1971), Los Espartaquistas, Barcelona, Mateu.

Barclay, D. y Weitz, E. (eds.) (1997), Between Reform and Revolution: German Socialism and Communism from 1840 to 1990, Providence, Berghahn.

Bark, D. y Gress, D. (1989), A History of West Germany, 2 vols., Londres, Blackwell.

Berghahn, V. (2005), Imperial Germany, 1871-1914: Economy, Society, Culture, and Politics, Nueva York, Berghahn Books.

Berlau, A. (1949), German Social Democratic Party, 1914-1921, Nueva York, Columbia University Press.

Braunthal, G. (1944), The German Social Democrats since 1969: A Party in Power and Opposition, Boulder (Co.), Westview Press.

Droz, J. (1964), Le nationalisme allemand de 1863 à 1918, París, Centre de Documentation Universitaire.

Evans, R. (ed.) (1982), The German Working Class, Londres, Croom Helm.

Flechteim, O. (1972), Le Parti communiste allemand sous la République de Weimar, París, Maspero.

Fletcher, R. (ed.) (1987), Bernstein to Brandt: A Short History of German Social Democracy, Londres, Hooder Arnold.

Frölich, P. (1976), Rosa Luxemburgo. Vida y obra, Barcelona, Fundamentos.

Fulbrook, M. (1990), Historia de Alemania, Cambridge, Cambridge University Press.

Gary, P. (1962), The Dilemma of Democratic Socialism. Eduard Bernstein's Challenge to Marx, Londres, Collier Books.

Geary, D. (1992), «El socialismo y el movimiento obrero alemán antes de 1914», en D. Geary (comp.), Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 149-198.

Guttsman, W. (1981), The German Social Democratic Party, Londres, George Allen and Unwin.

Klein, C. (1970), De los espartaquistas al nazismo: la República de Weimar, Barcelona, Península.

Luxemburgo, R. (1974), Obras escogidas (OERL), 2 vols., México, Era.

Nettl, P. (1974), Rosa Luxemburg, México, Era.

Orlow, D. (2000), Common Destiny: A Comparative History of the Dutch, French, and German Social Democratic Parties, 1945-1969, Nueva York, Berghahn Books.

Potthoff, H. y Miller, S. (2006), The Social Democratic Party of Germany 1848-2005, Berlín, Dietz Verlag.

Ramos, A. (1974), Historia social y política de Alemania, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica.

Rovan, J. (1978), Histoire de la social-democratie allemande, París, Seuil.

Salvadori, M. (1979), Karl Kautsky, Londres, New Left Books.

Sperber, J. (1997), The Kaiser's Voters: Electors and Elections in Imperial Germany, Cambridge, Cambridge University Press.

Stürmer, M. (2000). The German Empire: 1870-1918, Nueva York, Random House.

Weitz, E. (1997), Creating German Communism, 1890-1990: From Popular Protests to Socialist State, New Jersey, Princeton University Press.

Rusia

Andrade, J. y Hernández, F. (coords.) (2017), La Revolución rusa cien años después, Madrid, Akal.

Baron, S. (1966), Plekhanov: the father of Russian Marxism, Redwood (Ca.), Stanford University Press [ed. cast.: Plejánov. El padre del marxismo ruso, Madrid, Siglo XXI, 1976 y 2016].

Bettelheim, Ch. (1976), Las luchas de clases en la URSS. Primer periodo (1917-1923), Madrid, Siglo XXI.

— (1978), Las luchas de clases en la URSS. Segundo periodo (1923-1930), Madrid, Siglo XXI.

Carr, E. H. (1972), La Revolución Bolchevique 1917-1923, 3 vols., Madrid, Alianza.

— (1975), El interregno 1923-1924, Madrid, Alianza.

— (1975), El socialismo en un solo país, 1924-1926, 4 vols., Madrid, Alianza.

— y Davies, R. (1980), Bases de la economía planificada, 1926-1929, 3 vols., Madrid, Alianza.

Casanova, J. (2017), La venganza de los siervos, Barcelona, Crítica.

Chamberlin, W. (1976), The Russian Revolution, 1917-1918: from the overthrow of the Tzar to the assumption of power by the Bolsheviks, New Jersey, Princeton University Press.

Dando, W. (1966), «A Map of the Election to the Russian Constituent Assembly of 1917», Slavic Review 25(2), pp. 314-319.

Dobb, M. (1972), El desarrollo de la economía soviética desde 1917, Madrid, Tecnos.

Dyker, D. (1976), The Soviet Economy, Londres, Crosby Lockwood Staples.

Fitzpatrick, S. (1994), The Russian Revolution, Oxford, Oxford University Press [ed. cast.: La Revolución rusa, Buenos Aires, Siglo XXI, ^{4}2015].

— (2016), El equipo de Stalin, Barcelona, Crítica.

George, K. (1969), Russia, 1917: The February Revolution, Nueva York, Harper Collins.

Geyer, D. (1968), «The Bolshevik Insurrection in Petrograd», en R. Pipes (ed.), Revolutionary Russia, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

Lenin, V. I. (1970), Obras Escogidas (OEL), 3 vols., Moscú, Progreso; Madrid, Akal, 1975.

— (1974), El desarrollo del capitalismo en Rusia, Barcelona, Ariel.

Lincoln, W. (1987), Passage through Armageddon the Russians in war and revolution 1914-1918, Nueva York, Simon & Schuster.

Luxemburg, R. (1968), La Révolution Russe, 2 vols., París, Maspero.

Mayer, Robert (1993), «The Dictatorship of the Proletariat from Plekhanov to Lenin», Studies in East European Thought 45 (4), pp. 255-280.

Miéville, Ch. (2017), Octubre. La historia de la Revolución rusa, Madrid, Akal.

Nove, A. (1973), Historia económica de la Unión Soviética, Madrid, Alianza.

Palazuelos, E. (1990), La formación del sistema económico de la Unión Soviética, Madrid, Akal.

Rabinowitch, A. (1978), The Bolsheviks Come to Power. The Revolution of 1917 in Petrograd, Nueva York, Norton & Company.

— (1991). Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising, Bloomington, Indiana University Press.

Radkey, O. (1963), The Sickle Under The Hammer: The Russian Socialist Revolutionaries In The Early Months Of The Soviet Rule, Nueva York, Columbia University Press.

— (1989), Russia Goes to the Polls: The Election to the All-Russian Constituent Assembly, 1917, Ithaca, Cornell University Press.

Read, Ch. (1992), «Movimiento obrero y socialismo en la Rusia zarista», Geary D. (comp.), Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 199-258.

Russell, B. (1969), Teoría y práctica del bolchevismo, Barcelona, Ariel.

Tucker, R. (1992), Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928-1941, Nueva York, W. W. Norton & Company.

Voslenski, M. (1981), La Nomenklatura, Barcelona, Argos Vergara.

Europa del Este

Applebaum, A. (2013), Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944-1956, Nueva York, Penguin Books.

Berend, I. (2001), Decades of Crisis: Central and Eastern Europe before World War II, Oakland (Ca.), University of California Press.

Bideleux, R. y Jeffries, I. (2007), A History of Eastern Europe: Crisis and

Change, Londres, Routledge.

Crampton, R. (1997), Eastern Europe in the Twentieth Century and After, Londres, Routledge.

Gati, Ch. (1981), The Politics of Backwardness in Hungary: Dependence and Development on the European Periphery, 1825-1945, New Jersey, Princeton University Press.

— (2006), Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt, Redwood (Ca.), Stanford University Press.

Held, J. (ed.) (1993), The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century, Nueva York, Columbia University Press.

Janos, A. y Slottman, W. (1971), Revolution in Perspective: Essays on the Hungarian Soviet Republic of 1919, Oakland (Ca.), University of California Press.

Sacker, R. (1999), A Radiant Future. The French Communist Party and Eastern Europe, 1944-1956, Nueva York, Peter Lang.

Sándor, X. (1971), Revolutionary Hungary 1918-1921, Astor Park, Danubian Press.

Simons, T. (1991), Eastern Europe in the Postwar World, Londres, Palgrave Macmillan.

Swain, G. y Nigel, S. (2003), Eastern Europe since 1945, Londres, Palgrave.

Italia

Brogi, A. (2011), Confronting America: The Cold War between the United States and the Communists in France and Italy, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Davis, J. (1992), «Socialismo y clases trabajadoras en Italia antes de 1914», en D. Geary (comp.), Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 259-325.

Duggan, C. (1996), Historia de Italia, Madrid, Cambridge University Press.

Furlong, P. (1994), Modern Italy: Representation and Reform, Londres, Routledge.

Hoffmann, S. (coord.) (1981), The Communist Parties of Italy, France and Spain: Postwar Change and Continuity, Londres, Allen & Unwin.

Ginsborg, P. (2003), A History of Contemporary Italy, 1943-1998, Nueva York, St. Martin's Griffin.

Leonardi, K. y Wertman, D. (1989), Italian Christian Democracy. The Politics of Dominance, Basingstoke, Macmillan.

Macciocchi, M. A. (1976), Gramsci y la revolución de Occidente, Madrid, Siglo XXI.

Mark Smith, D. (1997), Modern Italy: A Political History, New Haven (Connecticut), Yale University Press.

Toniolo, G. (ed.) (2013), The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification, Londres, Oxford University Press.

Ventresca, R. (2004), From Fascism to Democracy: Culture and Politics in the Italian Election of 1948, Toronto, University of Toronto Press.

Suecia

Andersson, J. (2006), Between Growth and Security: Swedish Social Democracy from a Strong Society to a Third Way, Mánchester, Manchester University Press.

Arnaud, J. (1974), El socialismo sueco: una sociedad mixta, Barcelona,

Península.

Buendía, L. (2011), Dinámica de crecimiento, distribución de la renta y movimiento obrero: el Estado de bienestar sueco en una perspectiva de largo plazo, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.

Edvinsson, R. (2005), Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000, Estocolmo, Almqvist & Wiksell International.

Erixon, L. (1997), The Golden Age of the Swedish Model, Report, 97/9, Oslo, Institute for Social Research.

— (2008), The Rehn-Meidner Model in Sweden: Its Rise, Challenges and Survival, Estocolmo, Research Papers in Economics.

Korpi, W. (1978), The Working Class in Welfare Capitalism: Work, Unions and Politics in Sweden, Londres, Routledge and Kegan Paul.

— (1983), The Democratic Class Struggle, Londres, Routledge and Kegan Paul.

Lane, J.-E. (1991), Understanding the Swedish Model, Londres, Frank Cass.

Pontusson, J. (1992), The Limits of Social Democracy: Investment Politics in Sweden, Ithaca, Cornell University Press.

Swenson, P. (2002), Capitalists against Markets: The Making of Labor Markets and Welfare States in the United States and Sweden, Oxford, Oxford University Press.

Therborn, G. (1992), «A Unique Chapter in the History of Democracy: The Social Democrats in Sweden», en K. Misgeld et al. (eds.), Creating Social Democracy: A Century of the Social Democratic Labor Party in Sweden, University Park (Penn.), Pennsylvania State University Press, pp. 1-34.

Tilton, T. (1991), The Political Theory of Swedish Social Democracy: Through the Welfare State to Socialism, Oxford, Clarendon Press.

España

Andrade, J. (2012), El PCE y el PSOE en (la) transición, Madrid, Siglo XXI.

Aróstegui, J. (1997), La Guerra Civil. La ruptura democrática, Madrid, Historia 16.

Barrera, C. (2002), Historia del proceso democrático en España, Madrid, Fragua.

Ben-Ami, S. (1978), The Origins of the Second Republic in Spain, Londres y Oxford, Oxford University Press.

Casanova, J. (2007), «República y Guerra Civil», en J. Fontana y R. Villares (dirs.), Historia de España, vol. 8, Barcelona, Crítica.

Colomer, J. (1998), La transición a la democracia: el modelo español, Barcelona, Anagrama.

Cruz, R. (2006), En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI.

Del Río, E. (2016), Primeros pasos de Podemos (2014-2015), San Sebastián, Gakoa.

Elorza, A. (1973), La utopía anarquista bajo la II República, Madrid, Ayuso.

Errejón, Í. y Mouffe, Ch. (2015), Construir pueblo. Hegemonía y radicalización de la democracia, Barcelona, Icaria.

Fàbregas i Guillén, D. (2007), La democracia en la España del siglo XXI. De la esperanza a la regresión, Barcelona, Viena.

Gil, J. (1997), La Segunda República. Esperanzas y frustraciones, Historia 16, Madrid.

Heywood, P. (1992), «El movimiento obrero en España antes de 1914», en D. Geary (comp.), Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 327-372.

Hoffmann, S. (coord.) (1981), The Communist Parties of Italy, France and

Spain: Postwar Change and Continuity, Londres, Allen & Unwin.

Iglesias, P. (2014), Disputar la democracia. Política para tiempos de crisis, Madrid, Akal.

— (coord.) (2014), Ganar o morir. Lecciones políticas en «Juego de tronos», Madrid, Akal.

Juliá, S. (1979), Orígenes del Frente Popular en España, 1934-1936, Madrid, Siglo XXI.

— (1994), «La experiencia del poder: La izquierda republicana, 1931-1933», en N. Townson (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza.,

— (1997), Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus.

— (1999). Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons.

— (2017), Transición. Historia de una política española (1937-2017), Barcelona, Galaxia Guterberg.

Jutglar, A.; Muniesa, B. y Florot, J. (1987), Historia de España, vol 6, Barcelona, Instituto Gallach.

López, L. y Varela, S. (1978), «Las coaliciones de gobierno en la II República española: una interpretación ecléctica», en M. Ramírez (ed.), El control parlamentario del Gobierno en las democracias pluralistas, Madrid, Labor.

Martin, A. y Graham, H. (1989), The French and Spanish Popular Fronts. Comparative Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press.

Morán, G. (2015), El precio de la Transición, Madrid, Akal.

— (2017), Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España, 1939-1985, Madrid, Akal.

Powell, Ch. (2001), España en democracia 1975-2000, Barcelona, Plaza y Janés.

Preston, P. (1979), «The Struggle Against Fascism in Spain: Leviathan and the Contradictions of the Socialist Left, 1934-1936», European Studies Review 9, 1,

— (ed.) (1984), Revolution and War in Spain, 1931-1939, Londres, Routledge.

Robles, A. (1990), «Socialismo y democracia: las alianzas de izquierdas en Francia, Alemania y España en la época de la II Internacional», Historia Contemporánea 3, pp. 117-137.

— (2002), «Las coaliciones de gobierno durante la Segunda República (1931-1936)», en M.-C. Chaput y T. Gómez (dirs.), Histoire et mémoire de la Seconde République. Hommage à Jacques Maurice, Nanterre, Université Paris-X.

— (2015), «Las coaliciones de izquierdas en Francia y España (1899-1939)», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine 2, pp. 1-19.

Rodríguez, E. (2015), Por qué fracasó la democracia en España. La transición y el régimen del 78, Madrid, Traficante de Sueños.

Rosal, A. (1977), Historia de la UGT (1901-1939), Barcelona, Grijalbo.

Tuñón de Lara, M. (1966), La España del siglo XX, París, Librería Española.

— (dir.) (1989), Historia del socialismo español, 5 vols., Barcelona, Conjunto.

OTROS

Metáfora comunista de Marx y Engels

Berlin, I. (2000), Karl Marx. Su vida y su entorno, Madrid, Alianza.

Bobbio, N. (1979), Ni con Marx, ni contra Marx, México, Fondo de Cultura Económica.

Claudín, F. (1985), Marx, Engels y la Revolución de 1848, Madrid, Siglo XXI.

Del Río, E. (1986), La clase obrera en Marx, Madrid, Revolución.

— (2007), Crítica del colectivismo europeo anti-occidental, Madrid, Talasa.

Fernández Buey, F. (1998), Marx (sin ismos), Barcelona, Viejo Topo.

Gouldner, A. (1983), Los dos marxismos, Madrid, Alianza.

Henderson, W. (1976), The Life of Friedrich Engels, Londres, Frank Cass.

Hunt, T. (2011), El gentleman comunista, Barcelona, Anagrama.

Kołakowski, L. (1980), Las principales corrientes del marxismo, 3 vols., Madrid, Alianza.

Marx, K. (1968), Manuscritos económico-filosóficos, Madrid, Alianza.

— y Ruge, A. (1970), Los Anales Franco-Alemanes, Barcelona, Martínez Roca.

— y Engels, F. (1974), La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo [reed. Madrid, Akal, 2015].

— y — (1976), Obras Escogidas (OEME), 3 vols., Moscú, Progreso; Obras escogidas, 2 vols., Madrid, Akal, 2016.

McLellan, D. (1977), Karl Marx. Su vida y sus ideas, Barcelona, Crítica.

Miliband, R. (1978), Marxismo y política, Madrid, Siglo XXI.

Palazuelos, E. (2000), «El capital a casi siglo y medio de distancia. Estudio preliminar», en K. Marx, El capital, Madrid, Akal.

— (dir.) (2015), Economía Política Mundial, Madrid, Akal.

Rissi, M. (1971), La génesis del materialismo histórico, Madrid, Alberto Corazón Editor.

Rubel, M. (1971), Karl Marx. Ensayo de biografía intelectual, Buenos Aires, Paidós.

— (1974), Marx critique du marxisme, París, Payot.

Sacristán, M. (1983), Sobre Marx y marxismo, Barcelona, Icaria.

VV.AA. (1983), «Nuestro Marx», Mientras Tanto 16-17 (Barcelona).

Economía y estado de bienestar

Aglietta, M. (1979), Regulación y crisis del capitalismo, Madrid, Siglo XXI.

— (1995), Cinquante ans après Bretton Woods, París, Economica.

Álvarez, I.; Luengo, F. y Uxó, J. (2013), Fracturas y crisis en Europa, Madrid, Clave Intelectual.

Andreff, W. (dir.) (2013), La mondialisation, state suprême du capitalisme?, París, Presses Universitaires de Paris Ouest.

Anisi, D. (1998), «Pleno empleo: el núcleo del Estado de Bienestar». Ekonomiaz. Revista vasca de economía 42, pp. 10-31.

Boix, C. (1996), Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial, Madrid, Alianza.

Bourginat, H. (1995), La tyrannie des marchés: essai sur l'économie virtuelle, París, Economica.

Boyer, R. y Mistral, J. (1983), Accumulation, inflation, crise, París, Presses Universitaires Françaises.

Coates, D. (ed.) (2005), Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, Londres, Palgrave.

Cornwall, J. (1972), Growth and Stability in a Mature Economy, Londres, Martin Robertson.

— (1977), Modern Capitalism. Its growth and transformation, Londres, Robertson.

Esping-Andersen, G. (1993), Los tres mundos del Estado del bienestar, Valencia, Alfons el Magnànim.

Freeman, Ch. (1984), Long Waves in the World Economy, Londres, Pinter.

Gamble, I. y Walton, P. (1977), El capitalismo en crisis, Madrid, Siglo XXI.

Gough, I. (1982), Economía política del Estado de bienestar, Madrid, Blume.

Marglin, S. y Schor, J. (eds.) (1990), The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience, Oxford, Clarendon Press.

Palazuelos E. (1998), La globalización financiera, Madrid, Síntesis.

— (coord.) (1988), Dinámica capitalista y crisis actual, Madrid, Akal.

Sawyer, M. (1976), Income Distribution in OECD Countries, París, OCDE.

Scharpf, F. (1992), Socialdemocracia y crisis económica en Europa, Valencia, Alfons el Magnànim.

Wilson, T. y Wilson, D. (1982), The Political Economy of the Welfare State, Londres, Allen & Unwin.

Yeager, L. (1984), Relaciones monetarias internacionales, Madrid, Alianza.

Sistemas políticos, filosofía política y otros

Bauman, Z. (2004), Modernidad líquida, México, Fondo de Cultura Económica.

— (2010), Mundo consumo, Barcelona, Paidós.

Cotteret, J. y Emeri, C. (1973), Los sistemas electorales, Barcelona, Oikos Tau.

Cox, R. (1987), Production, Power and World Order, Nueva York, Columbia University Press.

Della Porta, D. y Diani, M. (2011), Los movimientos sociales, Madrid, Complutense.

Gálvez, L. (2014), «El derecho de sufragio en el siglo XX», Derechos y libertades 31, pp. 163-189.

Gill, S. (2008), Power and Resistance in the New World Order, Nueva York, Palgrave Macmillan.

Girvin, B. (comp.) (1988), The Trasformation of Contemporary Conservatism, Beverly Hills, Sage.

Hirschman, A. (1991), Retóricas de la intransigencia, México, Fondo de Cultura Económica.

Layton-Henry, Z. (comp.) (1982), Conservative Politics in Western Europe, Londres, Macmillan.

Martínez, S.; Marco, J. y Uribe, A. (2007), Sistemas electorales. Un estudio comparado, Valencia, Tirant lo Blanch.

Nohlen, D. (2004), Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica.

Pasquino, G. (2004), Sistemas políticos comparados, Buenos Aires, Prometeo.

Polanyi, K. (1979), La gran transformación, Madrid, La Piqueta.

Sartori, G. (1987), Teoría de la democracia. El debate contemporáneo, Madrid, Alianza.

— (1992), Elementos de teoría política, Madrid, Alianza.

— (2005), Partidos y sistema de partidos, Madrid, Alianza.

Stiegler, B. (2004), De la misère symbolique, París, Flammarion.

Therborn, G. (1979), ¿Cómo domina la clase dominante?, Madrid, Siglo XXI (reed. 2016).

Touraine, A. (1980), L’après-socialisme, París, Grasset.

Ware, A. (2004), Partidos políticos y sistema de partidos, Madrid, Akal.